

K18
R4
V.14
c.1

1080089135

Ref 360.72 e 5

FONDO BIBLIOTECA PUBLICA
DEL ESTADO DE NUEVO LEON

UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

REVISTA
DE
LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA.

XIV

345(05)

REVISTA

DE

LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA

PUBLICADA

POR LOS LICENCIADOS

VICTOR M. CASTILLO, MANUEL MERCADO (HIJO)

Y

JORGE VERA ESTAÑOL.

AÑO DE 1898.

ENERO Á JUNIO.

MEXICO.

IMPRENTA DEL GOBIERNO FEDERAL, EN EL EX-ARZOBISPADO

[Avenida Oriente 2, número 726.]

1898.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

FONDO BIBLIOTECA PUBLICA
DEL ESTADO DE NUEVO LEON

K18
R4
V.14

LA PROPIEDAD LITERARIA DE ESTA PUBLICACIÓN ESTA ASEGURADA CONFORME A LA LEY.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

DIRECCION.

Lic. Victor Manuel Castillo, Profesor de Derecho Internacional público, en la Escuela N. de Jurisprudencia.
„ **Manuel Mercado, (hijo),** Académico correspondiente de la Academia Mexicana de Legislación y Jurisprudencia.
„ **Jorge Vera Estañol,** Académico correspondiente de la Academia Mexicana de Legislación y Jurisprudencia.

REDACCION.

Lic. Calero y Sierra Manuel, Académico correspondiente de la Academia Mexicana de Legislación y Jurisprudencia.
„ **Guzmán Ricardo,** Académico correspondiente de la Academia Mexicana de Legislación y Jurisprudencia.
„ **Pizarro y Suárez Ismael,** Académico correspondiente de la Academia Mexicana de Legislación y Jurisprudencia.

COLABORACION.

Lic. Algara José, Profesor de Derecho Internacional privado en la Escuela N. de Jurisprudencia.
„ **Aguilar Rafael,** Académico correspondiente de la Academia Mexicana de Legislación y Jurisprudencia.
Lic. Casasús Joaquín D., Profesor de Economía Política en la Escuela N. de Ingenieros.

Lic. Díaz Infante Carlos, Ex-Magistrado del Tribunal Superior de Guanajuato y Académico correspondiente de la Academia Mexicana de Legislación y Jurisprudencia.

„ **Eguía Lis Joaquín,** Profesor de Derecho Romano en la Escuela N. de Jurisprudencia.

„ **Gamboa José M.,** Profesor de Derecho Administrativo y Constitucional en la Escuela N. de Comercio.

„ **Guerrero Julio,** Abogado postulante.

„ **Mateos Alarcón Manuel,** Magistrado del tribunal Superior del Distrito Federal y Académico de la Academia Mexicana de Legislación y Jurisprudencia.

„ **Méndez Luis,** Académico de la Academia Mexicana de Legislación y Jurisprudencia.

„ **Pallares Jacinto,** Profesor de Derecho Civil y Mercantil en la Escuela N. de Jurisprudencia.

„ **Pimentel Victoriano,** Profesor adjunto en la Escuela N. de Comercio.

„ **Rebollar Rafael,** Gobernador del Distrito Federal y Académico de la Academia Mexicana de Legislación y Jurisprudencia.

„ **Sánchez Gavito Indalecio, (hijo),** Académico correspondiente de la Academia Mexicana de Legislación y Jurisprudencia.

„ **Velasco Emilio,** Ex-Ministro plenipotenciario de México en diversos países de Europa y Académico de la Academia Mexicana de Legislación y Jurisprudencia.

„ **Vega Fernando,** Académico de la Academia Mexicana de Legislación y Jurisprudencia.

SOCIEDADES ANONIMAS.

Tesis presentada por el Sr. Manuel Sánchez Gavito en su exámen profesional de Abogado.

A MI QUERIDO PADRE: *A tus cariñosos é incesantes desvelos debo todo lo que soy: tu amor me ha impulsado; tu ejemplo me ha fortalecido con orgullo, hasta obtener honroso título. Todo, absolutamente todo, te lo debo; en consecuencia, con gratitud filial te dedico lo primero que tengo: mi tesis.*

SEÑORES SINODALES:

Sin duda superior á mis fuerzas es el tema que he elegido para disertar ante vosotros; pero solo invoco, para que se me excuse, la doctrina que he aprendido en una de nuestras cátedras. Así como se atribuye á un eminente filósofo la expresión: «Mentid, mentid que algo queda» del propio modo nos decía á sus discípulos uno de mis profesores: «en materia científica se debe exponer, con entera buena fe, todo lo que sea fruto de nuestra meditación y de nuestro estudio: si acertamos, bien; y si no, la demostración del error en que incurrimos siempre será útil; porque la ciencia es pródiga para todos los que trabajan á su sombra. Adelanta con la adquisición de verdades y también avanza con la destrucción de los errores que un momento detuvieron su infatigable marcha.»

Animado por estas enseñanzas abordo un punto de cuya importancia no puede dudarse y emprendo este estudio tan só-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Lic. Díaz Infante Carlos, Ex-Magistrado del Tribunal Superior de Guanajuato y Académico correspondiente de la Academia Mexicana de Legislación y Jurisprudencia.

„ **Eguía Lis Joaquín,** Profesor de Derecho Romano en la Escuela N. de Jurisprudencia.

„ **Gamboa José M.,** Profesor de Derecho Administrativo y Constitucional en la Escuela N. de Comercio.

„ **Guerrero Julio,** Abogado postulante.

„ **Mateos Alarcón Manuel,** Magistrado del tribunal Superior del Distrito Federal y Académico de la Academia Mexicana de Legislación y Jurisprudencia.

„ **Méndez Luis,** Académico de la Academia Mexicana de Legislación y Jurisprudencia.

„ **Pallares Jacinto,** Profesor de Derecho Civil y Mercantil en la Escuela N. de Jurisprudencia.

„ **Pimentel Victoriano,** Profesor adjunto en la Escuela N. de Comercio.

„ **Rebollar Rafael,** Gobernador del Distrito Federal y Académico de la Academia Mexicana de Legislación y Jurisprudencia.

„ **Sánchez Gavito Indalecio, (hijo),** Académico correspondiente de la Academia Mexicana de Legislación y Jurisprudencia.

„ **Velasco Emilio,** Ex-Ministro plenipotenciario de México en diversos países de Europa y Académico de la Academia Mexicana de Legislación y Jurisprudencia.

„ **Vega Fernando,** Académico de la Academia Mexicana de Legislación y Jurisprudencia.

SOCIEDADES ANONIMAS.

Tesis presentada por el Sr. Manuel Sánchez Gavito en su exámen profesional de Abogado.

A MI QUERIDO PADRE: *A tus cariñosos é incesantes desvelos debo todo lo que soy: tu amor me ha impulsado; tu ejemplo me ha fortalecido con orgullo, hasta obtener honroso título. Todo, absolutamente todo, te lo debo; en consecuencia, con gratitud filial te dedico lo primero que tengo: mi tesis.*

SEÑORES SINODALES:

Sin duda superior á mis fuerzas es el tema que he elegido para disertar ante vosotros; pero solo invoco, para que se me excuse, la doctrina que he aprendido en una de nuestras cátedras. Así como se atribuye á un eminente filósofo la expresión: «Mentid, mentid que algo queda» del propio modo nos decía á sus discípulos uno de mis profesores: «en materia científica se debe exponer, con entera buena fe, todo lo que sea fruto de nuestra meditación y de nuestro estudio: si acertamos, bien; y si no, la demostración del error en que incurrimos siempre será útil; porque la ciencia es pródiga para todos los que trabajan á su sombra. Adelanta con la adquisición de verdades y también avanza con la destrucción de los errores que un momento detuvieron su infatigable marcha.»

Animado por estas enseñanzas abordo un punto de cuya importancia no puede dudarse y emprendo este estudio tan só-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

lo con la esperanza de despertar la curiosidad de nuestros hombres doctos, á fin de que purgado mi trabajo de los sofismas que puedan escapárseme, y corregidos los muchos vicios que seguramente contiene, se perfeccione nuestra legislación en uno de los puntos que más lo necesitan, y que la penosa y larga experiencia de los legisladores extranjeros está demostrando lo difícil que es dar soluciones acertadas en esta materia.

Las sociedades anónimas son fuente de riqueza que no es posible dejar que se agoten por las sangrías que en ellas practican á diario la mala fe, el fraude ó la negligencia. Bien dirigidas, hábilmente encausadas pueden servir para fecundar el campo de la actividad individual y producir admirables resultados: en cambio, si se las abandona ó si se las agobia bajo el peso de disposiciones opresivas, se convierten en un mal social, ó desaparecen sin prestar su valioso contingente á la prosperidad de la patria.

El derecho de asociación, inherente en el hombre, deriva de que la unión hace la fuerza, ó bien, como dice Letoxirneau, de que la debilidad para fortificarse, busca la unión. Este derecho ha sido considerado como garantía individual por el art. 9º de nuestra Constitución y hablando de él nos dice Lozano: "La asociación pone en un fondo común la inteligencia, la fuerza y los recursos de cada uno de los asociados; lo que era imposible en el orden natural de las cosas para un hombre sólo, es posible y fácil para una asociación, que multiplica el poder y la fuerza de cada uno de los asociados; y á este poder colectivo debe el mundo las maravillas que causan nuestra justa admiración. "(Lozano, derechos del hombre, núm. 168.")

D'Aguano enseña que el derecho de asociación no es ejercitado sólo por el hombre: de él hacen uso las hormigas en asociaciones curiosísimas los renos y los monos que se singularizan por la obediencia que prestan á su jefe; los papagayos

que sacrifican su propia vida, prodigando sus cuidados al compañero que sucumbe; y finalmente los caballos que, colocando sus crías en el centro de un corro, realizan defensas siempre fructuosas contra los encarnizados ataques de los lobos.

Pero donde se palpan los buenos efectos de la asociación es en la sociedad anónima. Aquí el esfuerzo individual de cada uno es insignificaute, casi nulo, y la suma de estos esfuerzos produce un resultado gigantesco.—En cualquiera sociedad, la desaparición de un socio trae consigo graves perturbaciones al pacto social, mientras que en la anónima la existencia del socio es accidental: una vez verificada la aportación, basta con la existencia de la acción. En ninguna sociedad como en ésta se despersonaliza de tal manera el capital que hay momentos en que se ignora por completo quiénes serán dueños de él.

Su utilidad, sus ventajas, su importancia, no pueden ponerse hoy en duda: bajo su forma se han asegurado invenciones que sin su ayuda no lo habrían sido en largo tiempo; gracias á ella la actividad comercial, industrial, ó financiera, se han multiplicado, han sido el medio más eficaz para que se realicen en toda su amplitud estos tres puntos de vista. Su desenvolvimiento ha continuado, su dominio se extiende cada vez más, cada día crece su influencia y sin exageración puede esperarse que su porvenir está asegurado y que su papel, engrandeciéndose sin cesar, les ofrece un campo más vasto del que han conquistado ya.

Su forma ofrece todavía una ventaja más; calcada sobre un sistema político democrático educa al pueblo para las luchas de la elección, por ser muy probable que quien procura acertar al elegir un mandatario que administre, vigile é inspeccione sus intereses, será igualmente cuidadoso y prudente al depositar en la urna electoral el voto que decidirá tal vez quien gobierne, no ya un interés de poco momento, sino

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

el interés mayor que se vincula en el porvenir de la sociedad y en el engrandecimiento de la patria.

La historia de las sociedades por acciones es relativamente corta. Los romanos no la conocieron tal como hoy existe; pero sí con su genio jurídico entrevieron algunos de sus caracteres. Nos lo prueban así los siguientes trozos tomados de un trabajo del Señor Lic. Pallares, del que no se necesita decir que es muy notable, porque basta que sea suyo: «La Ciudad, los Municipios, tenían esclavos; y mientras la Ciudad fué una soberanía política, sus funciones políticas, absorbiéndolo y dominándolo todo, bastaban para determinar el ejercicio de sus derechos sobre sus esclavos; pero cuando esa soberanía se extinguió, transformándose en funciones puramente municipales, entonces se presentó el inesperado problema de si los funcionarios municipales, representantes de la Ciudad, podían poseer esclavos, manumitirlos, revindicarlos, heredarlos; y ante ese inusitado fenómeno de derecho civil, el jurisconsulto tradicionalista, impotente para concebir la nueva personalidad que se destacaba del fondo de una transformación social, niega dogmáticamente que la Ciudad, que el Municipio, puedan tener derechos civiles. «*Sed quidam contra putant, quoniam ipsos servos non posideant. «Nec Municipia nec municipes hæredes institui possunt, quoniam insertum corpus est, ut neque cemere universe neque pro herede gerere possint ut heredes fiant.*» «*Municipes per se nihil posidere possunt, quia uniconsentive non possunt.*» Y más adelante agrega: «Una vez aceptada en la esfera parcial de las adquisiciones gratuitas, la capacidad de los Municipios, la lógica de los hechos y la lógica del derecho hicieron lo demás; y muy pronto fueron declaradas las Ciudades capaces para poseer bienes raíces por cualquier título; muy pronto se aceptó que ellas, las Ciudades ó los Municipios, eran los poseedores y propietarios de los tratos públicos y de los estudios; que eran capaces para contratar,

capaces para tener usufructo, capaces en general para todo derecho civil» y después «vendrá el Fisco ó el Erarium, si es que tuvo personalidad en derecho romano, vendrán las sociedades de publicanos, *societas vectigalium*, las compañías de Artesanos y navegantes, *corpora corpus naviculorum;* vendrá el colegio de los pontífices y de las vestales, colegía, vendrá otra multitud de Asociaciones á las que el derecho romano otorgue personalidad jurídica;» hasta aquí llegaron los romanos, después viene el período de la edad media en la que la Iglesia absorbe el aspecto de una personalidad moral desde Constantino y hasta el siglo XIII encontramos las compañías, asociaciones de capitales, que corresponden á nuestras sociedades anónimas «(Pallares leg. fed. comp. del Derecho Civ. Mex. Personas morales.)»

Inspiradas estas compañías por Richeliu y Colbert se organizan con la mira de aumentar la influencia francesa en el exterior. Sus nombres lo indican: Compañía de las Indias Orientales y de las Indias Occidentales: Compañía del Senegal, de Levante, de la Guayana, &c. Sus brillantes comienzos hicieron esperar resultados maravillosos, pero desgraciadamente la especulación las desacreditó ante el público y así permanecieron entre la vida y la muerte hasta 1720. La libertad para la sociedad en comandita, la necesidad de autorización previa para la anónima en Francia, no impidieron que se produjeran tales abusos y los escándalos llegaron á ser tan frecuentes, tan desenfrenada la especulación, que se adueñó de todo, hizo sus rapiñas en todas las clases de la sociedad, devoró todos los pequeños intereses, que se impuso la necesidad de una reforma. Langlais dice: «Para dar una idea de lo que podían ser semejantes negocios, se cita el título de un prospecto distribuido por uno que se hacía llamar Cristóbal Colón, anunciando que iba á fundar una sociedad en comandita, con capital de cincuenta millones para

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

reunir en matrimonio el África con la América y fundir las razas. La credulidad del *público iba tan alta.*

Todos estos hechos, y otros más que fuera prolijo enumerar, llamaron la atención de los legisladores y se propusieron medidas más ó menos directamente encaminadas á poner remedio á esos males y no necesitaremos preguntar si entre nosotros han conseguido tal propósito, porque á la vista están los hechos desmintiéndolo. La emisión de acciones de "El D. N."[1] sin que existiera sociedad ni negociación de ninguna especie, los sucesos de la mina "El E." las combinaciones de "C. S." y por último, las cuestiones acaecidas en la mina del "A." todos estos hechos, que han pasado impunemente para alcanzar un puesto en la estadística social, nos están revelando que el Código de Comercio no castiga, cual castigar debiera, los abusos que en esta clase de sociedades pueden cometer los fundadores, Consejos de Administración, Directores y Comisarios de vigilancia.

En nuestro Código no se distinguen las responsabilidades en que pueden incurrir estos individuos; no se señalan los casos precisos para exigírselas, y si acaso se indica alguno se ponen insuperables trabas para que nazca la acción y se trata con excesiva lenidad á los que en esas responsabilidades inciden.

Desde luego se tienen que distinguir dos clases de responsabilidades: una meramente civil y otra penal sobrentendiéndose que en esta última, puede caber la primera por lo que disponen los arts. 301 y 3º de nuestros Códigos Penal y de Procedimientos Penales.

Al tratar de la primera conviene tener presente tres períodos: el de constitución, el de funcionamiento y el de liquidación. En cada uno de ellos son distintos los motivos

1 A fin de que no se crea que mi propósito es otro que el de citar ejemplos, que ilustren mis afirmaciones, designo con iniciales los nombres de las sociedades que han presentado casos prácticos.

de responsabilidad, distintas las personas que en ella incurren y distintas también las personas que tienen derecho á exigirla.—Entiéndese en general por sociedad ó asociación: "la reunión de varias personas que se ponen de acuerdo para dirigir sus esfuerzos hacia un objeto común." Este objeto puede ser muy variado: hay asociaciones religiosas, políticas, literarias, artísticas, científicas, de beneficencia, de comercio, &c. El Código Civil y el de Comercio no se ocupan de las sociedades en esta amplia acepción, sino solamente de aquellas que tienen por objeto la realización de beneficios pecuniarios mediante operaciones civiles ó comerciales. "(Lyón.—Caen, &c. L. Renavel Man de droit comercial pág. 80.) Siendo un contrato, debe tener las condiciones que para todos ellos exige el art. 1279 del Código Civil, es decir, capacidad de los contrayentes: mutuo consentimiento, objeto lícito y que se sujete á las formas establecidas por la ley.

La sociedad anónima es descrita por Hompin en los siguientes términos: "la sociedad anónima es una mera asociación de capitales, sin ningún vestigio de elementos personales; existe sin razón social con una denominación que designe el objeto de su empresa; entre todos los asociados no pueden sufrir más pérdida que la del monto de su interés en la sociedad; en fin, está administrada por mandatarios temporales, cuyo cargo es revocable, y que no contraen por razón de sus gestiones, ninguna obligación personal con relación á los compromisos de la sociedad. Sobre todo, como se ha dicho, la sociedad anónima, para las grandes empresas sobrepasa á cualquiera otra de las formas de asociación. La sociedad en nombre colectivo no puede extenderse lo bastante á causa de sus exigencias demasiado rigurosas. La comandita misma, cuando no se forzan todos los resortes, es bastante limitada en sus medios. Pero en la sociedad anó-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

nima, la base de la asociación puede ampliarse hasta donde se quiera; no se encuentra límite á la extensión del capital.

Por esto es que esta especie de sociedad es verdaderamente la única que se encuentra á la altura de todas las concepciones industriales. La sociedad anónima no está ya sometida á la autorización y á la vigilancia del Gobierno (salvo las tontinas y las sociedades de seguros sobre la vida C. Hompin Trat. gen. theo et prac. des sociétes Civ, el Com. tom. I, pág. 3.) Nuestro Código de Comercio fijó los caracteres de la sociedad anónima en los siguientes términos: Art. 163. "La sociedad anónima carece de razón social, y se designa por la denominación particular del objeto de su empresa. En dicha sociedad los socios no son responsables sino por el importe de su acción."

La necesidad de reglamentar su creación, ejercicio y término, ha nacido de los abusos á que ha dado lugar en Francia; pero hay que convenir con Bedarride en que la tarea de los legisladores ha sido hasta hoy muy poco feliz. En efecto, este autor demuestra que el Código Civil de 1807, el proyecto de ley de 1838, la ley de 1856, las de 9 y 23 de Mayo de 1863 y la de 1867, no han dado los resultados que de ellas se esperaban, y los malos manejos han continuado efectúandose bajo el amparo de esta legislación. Otros autores se ocupan de demostrar que lo mismo ha pasado con la ley de 1884. Advertimos que lo que los autores franceses dicen respecto de la sociedad en comandita por acciones, es aplicable á la anónima entre nosotros.

Un primer problema se nos presenta y tenemos que comenzar por preguntarnos. ¿Se debe reglamentar la constitución de las sociedades anónimas, su manera de funcionar, la forma en que deban de liquidarse, estableciendo las responsabilidades y castigos en que incurran los que las cometan, ó respetando el principio de la libertad de las convenciones el legislador debe abstenerse de tocar todos esos puntos y dejar que los individuos arreglen como puedan sus sociedades, cuidando sus intereses, si así les place, ó dejándolos sin vigilancia ninguna, á pesar de los males que esto puede acarrear? Nos decidimos por el primer punto y citamos en nuestro apoyo la opinión del jurisconsulto más eminente del siglo, el Archicanciller Cambaceres: "el orden público, dice, está interesado en toda sociedad que se forma por acciones, porque demasiado á menudo, estas empresas no son más que un lazo tendido á la credulidad de los ciudadanos. No hay duda de que una sociedad que trabaja con sus propios fondos, no tiene necesidad de autorización; pero si forma sus fondos por acciones lanzadas al mercado, es necesario que la autoridad superior examine el valor de estos efectos y no permita el curso de ellos sino cuando se ha convencido bien de que no ocultan una sorpresa"; y en otra parte agrega: "Estas sociedades, son un medio eficaz de favorecer las grandes empresas, de coadyuvar al crédito público; pero frecuentemente estas asociaciones, mal combinadas en su origen, ó mal manejadas en sus operaciones, han comprometido la fortuna de los accionistas, alterado momentáneamente el crédito general, puesto en peligro la tranquilidad pública." Delaugle refiere que en 1838 las sociedades en comandita por acciones: "Eran casi todas obra del fraude y de la estafa. Fueron imaginadas para engañar á los accionistas, para despojarlos, para labrar á sus expensas insolentes fortunas; inmuebles sin valor y de una explotación comercialmente imposible, han sido aportados á sociedades nacientes por sumas inmensas, patentes de invención de un producto incierto ó nulo, han servido de base á asociaciones de varios millones; lazos de todos géneros se han tendido á la credulidad, y los accionistas, depravados por el funesto ejemplo de fortunas rápidamente adquiridas, se han entregado á la pasión del juego: no se compran ac-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

ciones para aprovechar las ganancias honradas del comercio, sino para especular. El contagio bien pronto se apoderó de todo el mundo, la corrupción penetró en todos los corazones."

Bedarride se encarga de refutar á los partidarios de la opinión contraria en los siguientes términos: "Es en nombre de la libertad y para rendirle homenaje que se la ha sancionado (la ley de 1867); la libertad es para nosotros una cosa santa y sagrada y nosotros nos honramos de haber sido y de ser todavía en todo y por todo sus fervientes adeptos.—Pero no quisiéramos ni comprender ni admitir que, sopretexto de libertad se revindicase el derecho de entregarse á las más fraudulentas operaciones, poner trampas al público, organizar la especulación y el dolo. Ahora bien, no es ésto más que lo que, según la opinión de todos, había logrado la comandita por acciones.—Desde luego la intervención y la intervención enérgica del Gobierno era más que un derecho. A quién, en efecto, incumbe el deber de proteger á los ciudadanos lo mismo en su fortuna que en su persona? (Com. de la loi. du 24. Julliet 1867 sur les societés tom, I § 7º 9º y 26º).

Ernesto Pichard, cuyo espíritu no puede de ninguna manera acusarse de retrógrado, reasume en estos términos la discusión: "Se nos pide que declaremos que todas las convenciones son posibles, á no ser que sean contrarias al orden público, ó á las buenas costumbres. Se busca una asimilación con los contratos de matrimonio y se dice: "De la misma manera que las convenciones son libres entre los esposos, de la misma manera deben ser libres entre los asociados.—Pero yo niego las premisas desde luego. Si me refiero á nuestra legislación civil, encuentro los arts. 1,387 y siguiente que pone un límite á la libertad de los contratantes; hay uno que domina á todo el mundo y que es el más fuerte que nosotros tenemos: es la irrevocabilidad y la inmutabilidad mis-

ma de las convenciones.—He aquí un punto en que el sistema está en desacuerdo con el que se nos propone para las sociedades. Pero si tomamos los hechos y les hacemos sufrir la experiencia de la aplicación, el sistema que se nos propone sería de tal naturaleza de ser adoptado por nosotros? Yo no pediría más que hacerle sufrir esta experiencia y diría: quereis juzgarlo? esperad el fin de la discusión y cuando cada uno en su individualidad hubiera revelado los peligros que corren los accionistas, la necesidad de prevenirlos, entonces ved el sistema y aceptadlo si os atreveis.—Pero este sistema, que es el que se llama en economía política el sistema de *laissez-faire* et *laissez-passer*, que llora sobre los vencidos y no los levanta, este sistema es el que se pretendería empujar hasta sus consecuencias extremas? Hay en materia de sociedades una disposición prohibitiva en un caso que es bien conocido: es la que concierne á la sociedad leonina. No puedo hacer sociedad con una persona escapando á las pérdidas y guardando para mí solo los beneficios. La sociedad leonina es el voto de muchas ambiciones y el Código ha tenido razón en prohibirla.—Los autores del sistema de la libertad de las convenciones van á permitir la sociedad leonina? No, se detendrán allí; dirán, hagamos una ley.—Ah, yo los esperaba allí, y bien, si quereis hacer una ley hagámosla juntos, no introduzcamos reglamentaciones inútiles: estoy en esto enteramente de acuerdo con vosotros; pero lo que es contrario á los principios de orden público y que tiene necesidad, como tal, de ser definido por un texto de ley, pongámoslo en la ley; no permitamos la sociedad leonina, porque no estamos en la edad de oro, á menos que la edad de oro haya vuelto para aquellos que aman hacer sociedades leoninas; no admitamos las convenciones que encierren cláusulas contrarias á las previsiones de los legisladores; porque, Señores, legislar, es prever. Así sin introducir reglamentaciones exageradas, pongamos en la ley todo lo que sea ne-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

cesario para proteger la credulidad siempre persistente de los terceros y de los accionistas.—No puedo, pues, Señores, colocarme dentro de este sistema; y tanto menos lo puedo cuanto que si examino cuál es el fundamento definitivo de las sociedades en comandita por acciones y de las sociedades anónimas, estoy obligado á reconocer que son creaciones artificiales, creaciones de la ley, es necesario, es bueno que sigan siendo creaciones artificiales, creaciones de la ley, porque el verdadero movimiento comercial é industrial no se verifica de un modo feliz más que cuando tiene por contrapeso y por equilibrio la responsabilidad personal de aquel que lo dirige. Pero cuando formais aglomeraciones de capitales reunidos á costa de grandes cuidados, cuando poneis al frente de estas potencias temibles administradores irresponsables, miembros del Consejo de Administración que no cuidan, ni vigilan, acontece en definitiva que teneis fuerzas y no teneis responsabilidad. Ahora bien, fuerzas de esta naturaleza, sin responsabilidad, introducidas en el mundo financiero é industrial son peligrosas.....—Y bien, el día que decreteis aquí la libertad del anonimado ese día decís al accionista que ya no tiene protección «(Moniteur 28 Mayo de 1867.)»

Nada más decisivo que estas elocuentes palabras. No queremos que se reduzca á las sociedades anónimas al estado de menores, no queremos que se hostilice el espíritu de asociación, no queremos que se ahogue la iniciativa individual por medio de la tutela del Estado; lo que deseamos es que se protejan intereses dignos de respeto, precisamente porque son pequeños; lo que pedimos es que la ley defienda el interés individual allí donde el individuo es impotente para defenderlo; lo que sostenemos es que ya que las masas no tienen la bastante inteligencia, instrucción y malicia, se les ampare contra los habilidosos artificios de charlatanes que con seductoras promesas y gozando de completa impunidad, burlan la buena fe y explotan la credulidad del público.

El régimen de la más pura libertad atrae el espíritu, pero en la práctica de la vida no es muchas veces el más conveniente: rechazamos también la tiranía y la opresión; entre ambos extremos existe un medio. Respétese la libertad, pero cuando ella no cause males graves; respétesele cuando el perjudicado sea solo el mismo agente; pero conténganse sus excesos por medio de una reglamentación lógica, prudente y adecuada, cuando esa libertad vaya á herir el derecho de otro ó perturbe el orden de la sociedad.

Algo semejante se ha hecho para las instituciones de crédito y si bien el peligro en éstas es mucho mayor que en las sociedades anónimas, eso lo único que significará es que la reglamentación de aquéllas y su vigilancia debe ser más enérgica; pero no que hayan de quedar abandonadas.

Lo repetiré, como lo he dicho en otra ocasión, nos encontramos con el pavoroso problema del pauperismo por un lado y de las iniquidades del régimen de propiedad actual por otro: uno de los medios que se señalan como remedio á esos males es el ahorro, pero el ahorro reproductivo. ¿En dónde colocará el obrero sus pequeñas economías si no en la compra de acciones de sociedades honradamente administradas que puedan producirle mañana una regular ganancia? Pues bien, el Estado, la ley, deben favorecer esa clase de inversiones, estableciendo las consiguientes responsabilidades, que pongan á cubierto al pobre, que, con inmensas privaciones, ha logrado verificarlas. El interés de todos así lo reclama.

Si el legislador francés no ha acertado, á pesar de sus repetidos ensayos, nada extraño es que nuestro Código de Comercio adolezca de muchos vacíos. Pasemos á examinar los preceptos que tienen relación con la materia que nos ocupa.

Establece en el art. 166 dos maneras para constituir una

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

sociedad anónima: por subscripción pública ó por la comparecencia de dos ó más personas que subscriban la escritura social.

En el primer caso exige: la publicación del programa; segundo, la subscripción del capital; tercero, la celebración de la Asamblea General que apruebe y ratifique la constitución de la sociedad; y cuarto, protocolización del acta de la Asamblea General Constitutiva y de los Estatutos. (Art. 167.)

El programa debe contener (Art. 168) íntegros el proyecto de los Estatutos con todas las explicaciones necesarias; la exhibición que se exija del capital social: la comprobación del valor que se atribuya á los títulos, efectos, bienes muebles é inmuebles con que uno ó más socios contribuyeren á la sociedad. Los Estatutos deberán contener todos los requisitos que exige el art. 95 y además la manera de convocar y llevar á cabo la primera Asamblea General.

Como sanción de estas exigencias la ley pronuncia la nulidad de la sociedad que se establezca contraviniéndolas, la que se declarará á petición de cualquiera de los socios según el art. 96.

¿Es bastante esta sanción? ¿Quedan resguardados y satisfechos con ella los intereses de los accionistas y de los acreedores de la sociedad?

El buen sentido responde que ningún efecto práctico se consigue con que cualquier accionista pida la nulidad de la sociedad, si esa nulidad no trae consigo la responsabilidad de los fundadores, quienes, por no haberle dado la publicidad necesaria la han presentado con un defecto radical que puede traer gravísimas consecuencias, sobre todo si se descubre después que la sociedad ha practicado un cierto número de operaciones. Si, pues, la impericia, negligencia ó mala fe de los fundadores ha ocasionado la nulidad de la sociedad, nada más justo que dando cuenta de sus propios actos reparen los daños que causen é indemnicen los perjuicios por esos mismos actos producidos.

Siendo esto así, conviene definir qué personas deben ser consideradas como fundadoras. "Una sociedad, sobre todo una sociedad numerosa, dice Duvergier, en la Exposición de motivos del proyecto de ley de 1863, no se forma por el consentimiento espontáneo de todos sus miembros; la idea primera pertenece siempre á una ó á algunas personas, que, después de haberla madurado, tratan de propagarla. Solicitan y obtienen adhesiones, fundan verdaderamente la sociedad. El voto de la ley es que los fundadores sean asociados. El primer título no puede convenir más que á aquellos que tienen derecho al segundo. Un individuo que por sugestiones llegara á determinar á cierto número de capitalistas, de comerciantes ó de industriales, á formar una sociedad á la cual él permaneciera extraño, no sería más que un agente, un intermediario; no se podría darle el título de fundador y considerar digna de alguna confianza su declaración sobre que el capital hubiera sido subscripto íntegro y que la cuarta parte ha sido invertida."

Así, pues, tiene que dejarse un poder de apreciación muy amplio á los Tribunales para que califiquen si los actos de un socio, no calificado como fundador en los Estatutos ó en el acta constitutiva de la Sociedad, pueden sin embargo las circunstancias demostrar lo contrario, y hacer ver la parte que él ha tomado en la constitución de la Sociedad. Viceversa alguna persona puede haber concurrido á la primera Asamblea General, presenciado la subscripción y las inversiones, y sin embargo otras circunstancias demostrar que en efecto no tiene tal carácter de fundador.

Así lo ha declarado la sentencia de la Corte de París de 28 de Mayo de 1869, en el negocio de los créditos generales de Saint Nazaire. Un Síndico, en nombre de los acreedores, demandó la responsabilidad á tres personas por la nu-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

lidad de la sociedad, quienes jamás habían sido denominadas fundadoras, pero, fundándose en que asociadas en la primera Asamblea General habían concurrido á la ratificación de las subscripciones, de las inversiones, etc., la Corte rechaza esta pretensión diciendo: "Considerando que no han sido fundadores de la sociedad de los créditos de Saint Nazaire, que no se debe considerar como tales más que á aquellos que crían la empresa, dirijen los Estatutos, reunen las primeras Asambleas de accionistas, y hacen llamamiento á los capitales; que no han formado parte jamás, ni los unos ni los otros, del Consejo de Administración....."

Además de los fundadores deben ser responsables de esa nulidad los administradores que, teniendo la obligación de aprobar y ratificar la constitución de la sociedad, han dejado de hacerlo.

La responsabilidad de estas personas debe considerarse bajo dos puntos de vista, con relación á los terceros y con relación á los accionistas.

¿Quiénes son los terceros? Los intérpretes, después de discutir sobre el particular, declaran que por terceros deben entenderse, no los interesados en la sociedad, sino los acreedores sociales. Si los intérpretes están de acuerdo sobre esta responsabilidad como consecuencia de la nulidad de la sociedad, no lo están en cambio; sobre la extensión del derecho de los acreedores. ¿Pueden reclamar á los fundadores y á los primeros administradores el monto íntegro de sus créditos contra la sociedad ó tienen razón para pretender el monto del perjuicio que les causa la nulidad de la sociedad? No los seguiremos en esa discusión porque radica sobre textos especiales de la ley francesa de los que nosotros carecemos y pierde por completo su interés. (Véase Larue de la Resp. des fond. des adminis. et des Commis. desurveillance de la Soc. Anon. págs. 63 á 90.)

Respecto de los accionistas la responsabilidad puede revestir dos formas: puede considerárseles en masa como representando la sociedad ó individualmente.

El primer caso se refiere á los subscriptores originarios, quienes podrán recoger el monto íntegro de sus subscripciones según que hayan cubierto la totalidad ó parte de su acción.

El segundo caso es el de un adquirente que en el curso del funcionamiento de la sociedad ha comprado acciones á un precio superior al de emisión.

En ambos casos la jurisprudencia y la doctrina están de acuerdo en que se conceda á los accionistas una reparación de acuerdo con las reglas del derecho común.

En ningún precepto de nuestro Código se encuentran disposiciones encaminadas á este fin y es notorio que las necesidades sociales reclaman la existencia de esta clase de preceptos.

La subscripción del capital no tiene otra sanción que la del art. 169 y basta su lectura para comprender que este punto también queda enteramente abandonado á la buena fe de los fundadores y primeros administradores. Además, los términos del artículo dejan en duda algunos casos ya resueltos por la jurisprudencia. "El pago del cuarto sobre las acciones subscriptas, dice la sentencia de casación de 19 de Marzo de 1894, de la Corte francesa, sin el cual la sociedad no puede ser válidamente constituída, según la ley de 24 de Julio de 1867, debe de ser efectivo, y no puede resultar de un juego de escrituras ó de operaciones sobre los libros de la sociedad; pero este pago puede efectuarse á nombre de cada uno de los subscriptores de acciones por banqueros deudores de estos subscriptores. El banquero que recibe así los fondos y que se hace depositario de ellos para con la sociedad, puede conservarlos hasta la constitución definitiva de la misma. Si el mismo banquero, deudor del subscriptor, es el encargado de recojer la subscripción, y este banquero se acepta como solven-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

te, basta el abono de éste á la sociedad para que se considere hecho el pago." — (Sirey Colec. tom. de 1896 I. — 260). Esta sentencia sirve para fijar la responsabilidad y dá al legislador una pauta que debe tenerse en cuenta para los casos á que ella se refiere.

La fracción III del art. 167 también carece de sanción y ya hemos visto las razones que hay para considerar responsables á los primeros administradores de los vicios de constitución, pudiendo considerarse las mismas respecto de los que concurran á la primera Asamblea General, puesto que teniendo la obligación de examinar los actos de los fundadores, los aprueban, no debiendo aprobarlos. Además muchas veces sucede que esta Asamblea está formada por los mismos fundadores, y en vano invocarían que sus actos habían sido aprobados por ella; pues sería absurdo que los que incurren en responsabilidad pudieran por sí mismos libertarse de ella.

De la fracción IV del art. 167, ya hemos hablado al tratar de la nulidad y son aplicables á ella las observaciones que dejamos apuntadas.

Respecto de la constitución de la sociedad por el segundo medio que establece el art. 166, tenemos que manifestar que puede faltarse á cualquiera de los requisitos que establece en su segunda parte el art. 175, con entera impunidad y sin que esto dé motivo para que siquiera se declare nula la sociedad. Una sentencia de nuestros tribunales así lo declara terminantemente "Considerando..... en el supuesto de que no se dé cumplimiento al segundo inciso de ese artículo (el 175) no incurrirá la sociedad en la pena señalada por el 96, pues éste solamente declara nulo el pacto social, cuando se omite alguno de los requisitos prescritos en el art. 95 del propio Código, no siendo de aceptarse el razonamiento que hace el Juez en su sentencia sobre que, estando mandado observar el art. 95, por el art. 175, siendo éste complementario

de aquel, es inconcuso que la omisión de alguno de los requisitos referentes á la escritura, establecidos por tales disposiciones, trae consigo la nulidad del pacto social, pues la ley solo ha querido conminar con esa nulidad la omisión de los requisitos que enumera el art. 95 y la que se alega de no haberse agregado á la escritura la comprobación del valor de los bienes que aportaron los socios, podrá hacer defectuosa la escritura, pero nunca traerá como consecuencia la nulidad del pacto social, supuesto que siendo un principio general de derecho que las nulidades son de estricta interpretación, no deben declararse sino cuando la ley lo previene expresamente "(Sent. de 6 de Enero de 1896. Trib. 1º de Circ. D. F.) Vemos, pues, que este precepto contiene prescripciones convenientes, pero ilusorias; militando las mismas razones para que los accionistas posteriores á la constitución de la sociedad y los acreedores sociales exijan la responsabilidad á las personas que hayan subscripto la escritura del mismo modo que pueden exijirla á los fundadores y primeros administradores en las sociedades que se constituyen por subscripción pública.

Entre nosotros no son simples teorías las que dejamos consignadas: la estadística demuestra que los vicios de constitución son harto frecuentes en nuestras sociedades anónimas. Hasta fines del año pasado estaban registradas doscientas ochenta y siete escrituras de sociedad: de éstas ochenta y nueve extranjeras y ciento noventa y ocho sociedades anónimas mexicanas. De las primeras sesenta y tres cumplieron con el requisito establecido por el art. 24 del Cód. de Comercio por lo que se refiere al certificado de estar constituidas con arreglo á las leyes del país respectivo expedido por el Ministro que allí tenga acreditado la República ó en su defecto por el Cónsul mexicano y veintiseis no cumplieron con este requisito y están constituidas con infracción del precepto

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

citado y del que establece la frac. I del art. 265 del Código citado.

Respecto de las sociedades anónimas mexicanas, sesenta y nueve han cumplido con los requisitos del Cód. de Comercio y ciento veintinueve no han cumplido con esos requisitos. Estos datos arrojan las siguientes alarmantes proporciones:

		Cumplieron.		No cumplieron.	
Socs. Exs.	89	63 ó sea $\frac{2}{3}$ aprox^{te}.		26 ó sea $\frac{1}{3}$ aprox^{te}.	
Socs. Ans. Mexs.	198	49 „ $\frac{1}{3}$	„	129 „ $\frac{2}{3}$	„

En estas últimas se observan los siguientes vicios: escrituras sin estar subscripto todo el capital, sin estar exhibido el diez por ciento, sin valúo de los bienes introducidos en la sociedad, sin registrar en el lugar de la ubicación de los bienes raíces, sin capital determinado, con obligación los accionistas de pagar exhibiciones una vez pagado el importe de las acciones, sociedades civiles con el carácter de anónimas, sociedades anónimas en que hay socios industriales, constituidas en escritura pública con solo la protocolización del acta de la primera Asamblea, sin obligación de pagar los accionistas más que el diez por ciento primitivo y el resto con las utilidades, la mayor parte de las mineras sin estar registradas en el lugar de la ubicación de la mina. Todo esto en contravención de los principios que regulan las sociedades anónimas y de los artículos 170, inciso primero, 95, frc. IV., 23, 167 y 163 del Cód. de Comercio.

Pasemos ahora al funcionamiento de la sociedad. El Código está dominado por la idea de que la administración es temporal y revocable y que los socios que la desempeñan se consideran como mandatarios, concediendo al Consejo de Administración las más amplias facultades, á no ser que haya disposición contraria en los Estatutos. (Arts. 187 y 189. Cód. Com.)

La responsabilidad del Consejo de Administración se fija por el art. 195, en los siguientes términos: "Los administradores son responsables para con la sociedad conforme al derecho común en la ejecución del mandato que han recibido y de las faltas cometidas en su gestión."

Es imposible señalar todos los casos de responsabilidad en que puede incurrir el Consejo de Administración: los autores señalan la distribución de dividendos ficticios de que nos ocuparemos en su oportunidad y la violación de los Estatutos. "Infringirlos, dice Larue, es con respecto á los accionistas, traspasar el mandato conferido y aceptado, con respecto á los terceros, cambiar las condiciones de un contrato puesto que el examen de los Estatutos se debe suponer que ha debido preceder en estos últimos para dar el consentimiento á la convención intervenida entre ellos y la sociedad. Tal es el principio." (op. cit. pág. 116.)

Además son responsables: por su negligencia (Artículo 2,360. Cód. Civ.), por la atribución de facultades (Artículo 2,362 id.) tienen obligación de rendir cuentas (Artículo 2.363 id.) y de entregar los objetos recibidos al tiempo de comenzar la administración y durante ella (Art. 2,364 id.) así como deben pagar intereses por las sumas que pertenezcan á la sociedad y que hayan distraido de su objeto é invertido en provecho propio, así como por las cantidades en que resulten alcanzados desde la fecha en que se constituyen en mora (Art. 2,366 id.): el Consejo de Administración no es responsable solidariamente (Arts. 2,367 y 2,368 id.) Esta última disposición no está de acuerdo con la jurisprudencia (Lyon—Caen etc. L. Renault) dice: "Los administradores son responsables hacia la sociedad y hacia los acreedores sociales. La responsabilidad de los administradores es solidaria ó individual? Esto depende: es solidaria cuando la fal-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

ta es común, es individual en el caso contrario. Pero aun cuando se trate de faltas individuales, las acciones depositadas en la caja social por los administradores sirven de garantía á todos los actos de su gestión hay así en este caso una especie de solidaridad cuyo efecto está restringido á estas acciones. Se sobreentiende que los administradores á los cuales no hay falta que reprochar, tienen un recurso contra los otros sobre los cuales debe pesar, en definitiva, exclusivamante la responsabilidad« (op. cit.) Ya se vé que el precepto del derecho común no puede aplicarse jurídicamente en sus términos restrictivos, pues la solidaridad de los miembros del Consejo puede resultar del acto mismo de que se trate.

Se ve igualmente que el Código dá las más amplias facultades á los administradores sin cuidar de que las responsabilidades estén á la altura de las facultades.

No solo son responsables los administradores sino también los que les ayuden en la ejecución de los actos que producen responsabilidad, así lo dice la sentencia de la Corte de París de 14 de Abril de 1892: «Una casa de Banco que ha prestado su concurso á la emisión de obligaciones de una sociedad industrial, es con buen derecho declarada responsable para con los tenedores de obligaciones, que las han subscripto bajo la fé de prospectos mentirosos, cuando dicha casa ha tomado una parte directa en la redacción de estos prospectos, cuyas inexactitudes no podía ignorar; la casa bancaria no puede ser considerada como un simple intermediario entre la sociedad que solicitaba el préstamo y el subscriptor de las obligaciones, abriendo sus despachos para recibir las subscripciones sin ser responsable de los medios empleados.»

En la sentencia arriba citada (19 de Marzo de 1894) se establece también la división de la responsabilidad según las funciones de cada uno: «La responsabilidad puede ser

dividida entre los miembros del Consejo de vigilancia en proporción á la extensión y gravedad de las faltas cometidas y se puede tomar en consideración: 1º que uno de ellos era el presidente del Consejo: 2º que con este título era el especialmente encargado de las memorias dirigidas á la Asamblea: 3º que conocía personalmente á los deudores de la sociedad y 4º que en la época en que la sociedad se constituyó, había prometido el concurso de su experiencia y de sus aptitudes especiales.»

Hemos visto que la acción para exigir la responsabilidad se concede á los socios y á los acreedores, así lo dice Lyon-Caen, loc. cit. Larue op. cit. pág. 127 y el art. 44 de la ley francesa á que nos hemos referido. Los socios ejercitan la acción *mandati* y los terceros la nacida *ex-delicto* ó *quasi ex-delicto* por los perjuicios que la gestión de los administradores haya podido causarles. A este respecto nuestro Código dispone: «La responsabilidad sólo podrá ser exigida por la Junta General de accionistas ó por la persona autorizada por ésta.»

Esta disposición no es justa, ni está de acuerdo con los principios que dominan la materia. No se nos ocultan, sin embargo, los fundamentos en que se la hace descansar y que han sido expresados por el primer Abogado general Dupre-Lasalle en el negocio del Crédito Mobiliario. «Es, dice, la consecuencia del principio constitucional de las sociedades, como de todos los seres morales, que la voluntad de la mayoría se imponga á la minoría: si pues la mayoría domina en todos los negocios sociales, cómo no ha de dominar en aquel que los reasume á todos, en la depuración y el reglamento de las cuentas?» A pesar de esto creemos que con esa disposición se desconocen los principios del mandato; la cuestión es bien sencilla: si una persona recibe de varias un mandato y en el desempeño de éste se apropia las sumas que se le dieron para su gestión, abandona el negocio, ó se rehusa á dar cuen-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

tas: ¿habrá alguien que en buen derecho sostenga que porque la mayoría de los mandantes esté conforme con esos actos, priva éste hecho á los demás de la facultad de exigir á su mandatario la devolución de las sumas percibidas, la rendición de cuentas y la indemnización por su negligencia?

Esta especie de fuero que se otorga al Consejo de Administración es, á no dudarlo, la fuente más fecunda de los abusos que se cometen. De allí deriva que los Consejos se consideren omnipotentes y que miren con el más profundo desden las justas peticiones de los accionistas.

Comprendemos que la tendencia de la ley ha sido colocar al Consejo en una independencia completa: se ha querido impedir que los accionistas descontentos, arrastren á los Tribunales á los administradores, produciendo así el desprestigio de la sociedad: todas estas tendencias son muy loables; pero no justifican la iniquidad de que se pueda perjudicar á los accionistas, y porque estos no forman mayoría, negarles una justa reparación: allí donde los administradores violen el mandato que se les confirió, debe nacer la acción en favor de todo aquel que se sienta perjudicado.

A fin de obviar los inconvenientes que se dejan indicados, debe concederse la acción á un número de accionistas que representen una parte alícuota del capital que puede ser la cuarta, ó á cualquiera de ellos que caucione debidamente el importe de los perjuicios que, en caso de sucumbir deba satisfacer á la sociedad. Esos perjuicios podían calificarse por peritos nombrados en los términos que fija nuestra ley de procedimientos.

Estas decisiones han sido consagradas por la jurisprudencia.

El art. 17 de la ley francesa que hemos citado repetidas veces, dice: "Los accionistas, representando la vigésima parte al menos del capital social, pueden, en interés común, encargar á sus expensas á uno ó varios mandatarios que sostengan, tanto demandando como defendiéndose, una acción contra los Gerentes ó los miembros del Consejo de vigilancia, representándolos, en este caso, en justicia sin perjuicio de la acción que cada accionista pueda intentar individualmente en su nombre personal. "Bedarride, comentando este artículo dice:" El derecho de los accionistas de hacerse representar por Comisarios está expresamente consagrado, pero su ejercicio es puramente facultativo. Por numerosos que sean los accionistas, si lo juzgan útil, podrán ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos personal é individualmente.—Ninguno pondrá en duda la ventaja que hay en simplificar los procesos, utilizar el tiempo, disminuir los gastos; pero esta ventaja no podría autorizar á violentar las voluntades y á imponer un acto tan grave como la institución de un mandatario: también no puede menos que aplaudirse al legislador de 1867 de haberse abstenido de ello y en el párrafo siguiente: "Pero lo que nos parece menos digno de aprobación es la condición á la cual ha creído deber subordinar el ejercicio de la facultad. No lo permite más que si los accionistas representan la vigésima parte al menos del capital social. Así, si este capital es de veinte millones, los accionistas deberán representar un millon al menos; si no representan más que novecientos noventa y nueve mil francos, su pretensión de litigar por Comisarios no sería ni admisible ni fundada. Tanto como el legislador de 1856 había querido alcanzar este resultado, otro tanto parece que el legislador de 1867 quiso separarse de él" en seguida cita las palabras del relator: "Litigar por mandatarios es una excepción al Derecho común, que importa restringir en lugar de extender. Beneficiar á las minorías sin preocuparse de la parte que representen en el capital social, es exponer á la sociedad á ataques indiscretos, estimular el espíritu litigioso, abatiendo el obstáculo que debe detenerlo, la carga de los gastos que ocasiona el litigio." (Bedarride op. cit. §§ 301 y siguientes).

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

La sentencia de casación francesa de 6 de Febrero de 1896 dice: "Un accionista de una sociedad anónima ó en comandita por acciones puede ejercer contra los miembros del Consejo de Administración ó del Consejo de Vigilancia de esta sociedad, una acción individual por responsabilidad, á pesar de la aprobación ó del finiquito—quitus—que les haya sido dado por la Asamblea General de accionistas, si los hechos sobre los que se funda la acción de responsabilidad consisten en la violación de los Estatutos ó de la ley, y por consecuencia del mandato que la sociedad y cada uno de sus miembros habían conferido al Consejo de Administración ó de Vigilancia." (Cól. cit. tomo de 1897. I 132.)

Y no podía ser menos, porque es un principio de justicia que no puede conciliarse el que asienta Lord Macauley: "Ningún hombre debe ganar jamás contraviniendo á las leyes." (Véase además Larue, pág. 153 y siguientes.)

Los arts. 188 y 197 dicen: "La administración de las sociedades anónimas será confiada á un Consejo de Administración y á uno ó más directores. La gestión de los negocios de la sociedad, así como su representación en lo que á ella concierna, serán encomendadas, como lo indica el artículo 188, á uno ó más directores generales, cuyo nombramiento, revocación y atribuciones se determinarán en los Estatutos.

"La responsabilidad de estos agentes se rige por las reglas del derecho común." Los términos de este último artículo han hecho surgir la duda sobre si se debe considerar al director dentro de la regla del derecho común relativa al gestor de negocios ó al apoderado. La duda sin embargo se disipa fácilmente. Lyon Caen, etc., L. Renaul dicen: "Al lado del Consejo de Administración se encuentra á menudo un empleado superior de la sociedad designado frecuentemente bajo el nombre de Director. Es, según los Estatutos, elegido por el Consejo de Administración ó por la Asamblea General de accionistas; puede suceder, como lo supone la ley, que se le elija entre los miembros del Consejo de Administración. Nada impide por lo demás tomarlo de fuera de la sociedad; á menudo el Consejo de Administración no contiene personas que tengan aptitudes especiales para ser Director y por lo demás hay ventajas en no tomar al Director de los administradores, á fin de que les sea más sumiso", (op. cit. § 281) infiérese de aquí que para ser director se requiere una elección ó un nombramiento, de manera que debe ser considerado como mandatario.[1]

Los Comisarios son también considerados como mandatarios. Deben ser siempre nombrados por la Asamblea general, salvo el primer nombramiento que puede hacerse en la escritura, siendo siempre reelegibles y su cargo revocable, sin que valga estipulación en contrario y tienen á su cuidado la vigilancia de la Sociedad, caucionando su manejo con el depósito de acciones que marquen los Estatutos (Art. 198;) tienen derecho ilimitado de inspeccionar y vigilar operaciones, libros, documentos y en especial tienen el deber de comprobar el balance, respecto del cual presentarán proposiciones razonadas á la Asamblea (Art. 199); y su responsabilidad se rige por la de los miembros del Consejo.

Aunque la responsabilidad se rija por las mismas reglas, las funciones son enteramente distintas. Los Comisarios vigilan, comprueban, advierten, pero no ordenan. La extensión del mandato no es la misma que la de los administradores, y Bedaride sostiene que no son responsables para con los terceros; pero sus fundamentos los deriva de los términos

1 Además de los casos que hemos señalado, tenemos que añadir el de los arts. 184 y 185 sobre compra de sus propias acciones á las sociedades anónimas, cuyos preceptos están, y nos complacemos en reconocerlo, enteramente de acuerdo con las teorías que dejamos expuestas.

No sucede lo mismo con el caso que rige el art. 186 referente á la prohibición de

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

en que está redactado el art. 43 de la ley francesa de 1867, mientras que nuestro Código los equipara á los Consejeros.

En la terminación de la sociedad sin considerar los casos de quiebra culpable ó fraudulenta, porque no caben en los límites de este trabajo, hay que ver principalmente la responsabilidad de los liquidadores con arreglo á lo que disponen los arts. 217, 218, 219, 220, 221 y 222. (Cod. Com.)

Con respecto á este último, conviene observar que aun cuando sea resuelta en sentido negativo la reclamación del accionista no por eso se le puede privar del derecho que tiene para acudir á los tribunales, ejercitando la acción *pro socio* que la Asamblea desechó.

Los liquidadores no están amparados por la parte final del art. 195 y como al disolverse la sociedad los accionistas pueden perjudicarse con los acuerdos que se tomen, pueden igualmente exigir la entrega de las cosas que en la distribución del activo social les correspondan. No habiendo precepto especial que les impida ejercitar su acción, se debe de estar á la regla general.

---

hacer préstamos ó anticipos sobre las propias acciones, el cual carece de sanción eficaz por ser claro que la nulidad de esos préstamos ó anticipos no basta para prevenir y remediar los malos manejos á que pueden prestarse.

Hay otros casos que se escaparon al legislador y que provienen de las faltas cometidas por impericia de los administradores, director y comisarios, porque si los accionistas hicieron recaer en ellos la elección fué por suponerlos aptos y si aceptaron fué por creerse competentes para el puesto: ahora bien, si la realidad patentiza lo contrario, es natural que reparen los males que su ineptitud haya causado.

También debe ser caso de responsabilidad la celebración de contratos onerosos y entre ellos señalan los autores los préstamos á crecido interés, teniendo en cuenta la necesidad de la suma recibida y el precio corriente del dinero en la plaza.

La administración dispendiosa ó demasiado ruin del negocio, debe motivar una indemnización teniendo en cuenta, los sueldos, salarios ó jornales pagados conforme ó contra la costumbre de los lugares, así como la eficacia é importancia de los servicios que se remuneran.

En la compra de mercancías también debe atenderse al precio que tuvieren en plaza y según que fueran compradas al contado ó á plazo.

Mucho ha llamado la atención el ruidoso negocio del Canal de Panamá y juzgo que merece hacerse de él un extracto por la relación que tiene con la materia de mi tésis (Colec. Sirey. tomo de 1894 I—49.)

Acusábase en ese negocio á Fernando de Lesseps, Carlos Amado de Lesseps, Mario Fontan y Enrique Cottu: primero de estafa, porque empleando maniobras fraudulentas para que hiciesen nacer la esperanza de un acontecimiento quimérico, se hicieron entregar por diversas personas subscripciones seguidas de entrega de fondos con ocasión de la emisión de obligaciones de 26 de Junio de 1888, y de haber, por estos medios, estafado todo ó parte de la fortuna de otro: segundo, de tentativa de estafa, porque, empleando la misma maniobra fradulenta para hacer nacer la esperanza de un acontecimiento quimérico, habían pretendido hacerse entregar por diversas personas subscripciones ó fondos, con ocasión de una emisión ulterior de obligaciones, y de haber por estos medios intentado estafar todo ó parte de la fortuna de otro, cuya tentativa manifestada por un principio de ejecución, no había dejado de surtir efecto sino por circunstancias independientes de la voluntad de sus autores: tercero, de abuso de confianza por haber conjuntamente distraído ó disipado en perjuicio de la Compañía de Panamá y de sus subaccionistas, en gastos de publicidad, sindicatos, etc., efectos y dinero que no les habían sido confiados ó entregados sino á título de mandato, con la obligación de devolverlos, ó representarlos, ó de hacer de ellos un empleo ó un uso determinados.

Se acusó á M. Gustavo Eiffel: primero de complicidad de estafa, por haber recibido á sabiendas, sumas que provenían del delito de estafa: segundo de abuso de confianza por haber distraído ó disipado, en perjuicio de la sociedad de Panamá, efectos ó dineros que no le habían sido entregados

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

sino á título de mandato, con la obligación de devolverlos, ó representarlos, ó hacer de ellos un empleo determinado.

Por ser M. Fernando de Lesseps Gran Cruz de la Legión de Honor, y por virtud de la conexidad, correspondía conocer del delito, en una sola instancia, á la Corte de Apelación de París.

Conocidos los términos claros y apremiantes de la acusación y conocidos de público y notorio los manejos y combinaciones á que se entregó la Sociedad del Canal de Panamá parecía evidente que esperaba un resultado fatal á los acusados.

Así lo comprendieron de seguro sus defensores y rechazando las imputaciones de la acusación propusieron la excepción de la prescripción trienal.

He aquí los elementos con que esta excepción contaba: primero, el Tribunal civil del Sena confió la administración del Canal de Panamá á tres administradores provisionales en 16 de Diciembre de 1888, y, por lo mismo, era éste punto de partida seguro para que corriera la prescripción, respecto de los autores del delito, y respecto de Eiffel desde que se aprobó la transacción que había celebrado con el liquidador Branil, Agosto de 1889: segundo, el Procurador general por virtud de las denuncias que se le habían hecho requirió al Presidente de la Corte de apelación para que mandase abrir una instrucción sobre estos hechos, quien encargó de ella al Consejero Prinet, siendo la fecha de la requisitoria 11 de Junio de 1891; y tercero, el Procurador general, pendiente la información referida, requirió la citación de los acusados ante la Corte en 21 de Noviembre de 1892, renovada en 5 de Enero de 1893.

Para poder juzgar de este medio de defensa hay que tener presente qué según el art. 10 de la ley de 20 de Abril de 1810, cuando se proceda contra Oficiales de la Legión de Honor y demás Dignidades que expresa por delitos de policía correccional, se les citará ante la Corte de Apelación, de la manera prescrita por el art. 479 del Código de Instrucción criminal, y éste dice que, en los casos á que se refiere: "el Procurador general ante la Corte de Apelación hará citar al acusado ante esta Corte la que resolverá sin apelación."

Los términos del problema son los siguientes: primero, Diciembre 16 de 1888 y Agosto de 1889, fechas en que comenzó á correr la prescripción para todos los acusados y que se concluiría en 16 de Diciembre de 1891 para los autores y en Agosto de 1892 para Eiffel: segundo, Junio 11 de 1891, fecha de la requisitoria de instrucción y en la que no habían adquirido la prescripción ni los autores ni el cómplice: y tercero, Noviembre 21 de 1892, fecha de la citación ante la Corte y en la que habían transcurrido los tres años para todos los acusados.

La cuestión consistía en averiguar si el Procurador general había podido mandar abrir la instrucción, ó si sólo habría podido poner en ejercicio la acción penal mediante la citación directa ante la Corte.

La primera Cámara de la Corte de París, por sentencia de 9 de Febrero de 1893, declaró, que la prevención del artículo 479 no era limitativa, que el Procurador general pudo ejercitar la acción, ya por medio de la citación directa, ya por medio de la instrucción previa; que ningún artículo de la ley prohibía mandar practicar la instrucción previa; la que por tanto era válida y había interrumpido la prescripción, y declaró, en cuanto al fondo, que los acusados eran responsables de los delitos que se les imputaban.

Los acusados interpusieron el recurso de casación por violación de los arts. 182, 479, 480, 637 y 638 del Código de Instrucción criminal.

El Consejero Larouverade hizo la relación presentando un análisis minucioso y preciso de todos los argumentos aducidos en pro y en contra, haciendo su crítica con sagacidad

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

suma, fundando que el art. 479 sólo concedía facultad de ejercitar la acción por medio de la citación directa. El Abogado general Bauduin sostuvo la sentencia y la Corte por sentencia de Junio 14 de 1893, casó la sentencia fundándose en que el art. 479 era el único que autorizaba á proceder y esto por medio de la citación directa, y que, por lo tanto, la instrucción previa mandada practicar no estaba autorizada por la ley, y era por consecuencia nula y no había producido el efecto de interrumpir la prescripción ni otro alguno.

No entra en los límites de este trabajo hacer el juicio crítico de esta sentencia sobre la que cabe la legítima sospecha de que los Consejeros háyanse sentido preocupados y vivamente impresionados por el nombre de Fernando de Lesseps conocido en los buenos tiempos de la inauguración del Canal de Suez con el calificativo del Gran Francés.

He juzgado conveniente hacer una exposición de este caso célebre, porque demuestra: primero, en qué forma pueden ser responsables criminalmente los miembros de un Consejo de Administración: segundo, en qué forma pueden serlo los extraños con el carácter de cómplices; y tercero, en qué forma y manera pueden acogerse á la prescripción unos y otros.

Establece la ley los requisitos que deben tener las sociedades anónimas y los actos y operaciones que no deben ni pueden ejecutar. ¿Será conveniente revestir esas prevenciones ó prohibiciones, ó al menos algunas de ellas con sanción penal? y en caso afirmativo, ¿cuál es la autoridad competente en el sistema que nos rige, para dictar esa sanción?

Los actos de las sociedades anónimas, ó más bien dicho, de los socios de esas sociedades, que, como tales socios, ó por razón de los cargos que en ellas desempeñan, cometen estafas, ú otros fraudes, sin duda que son justiciables ante la justicia penal y no se necesitan á este respecto nuevas disposiciones legislativas; pues en materia de legislación debe huirse cuanto posible sea del casuismo.

Otros actos peculiares de este género de operaciones, que no están comprendidos en el Código Penal, y que sin embargo tienen todos los caracteres, no sólo de las acciones ilícitas, sino también de las acciones delictuosas, deben ser expresamente clasificados y penados.

Creo, por lo mismo, que, no sólo es conveniente, sino necesario, establecer una sanción penal para algunos de los actos irregulares que se ejecutan ó se pueden ejecutar en las sociedades anónimas ó con motivo de ellas.

Esta sanción, ó lo que es lo mismo, la determinación de los hechos ú omisiones que constituyen delito y la determinación de la pena con que deben de reprimirse y castigarse ¿es incumbencia legislativa del Distrito Federal y de cada uno de los Estados, ó es una ley federal y por lo tanto de la incumbencia exclusiva del Congreso de la Unión?

Divididas andan á este respecto las opiniones; pero sin vacilar me coloco al lado de los que la consideran como ley federal.

La Constitución establecía que era facultad del Congreso (Art. 72, frac. X): "Establecer las bases de la legislación mercantil," y la reforma de 14 de Diciembre de 1883 dice, que tiene facultad "para expedir Códigos obligatorios en toda la República de minería y comercio, comprendiendo en este último las instituciones bancarias."

No se concibe que la facultad de legislar sobre determinadas materias esté en una persona física ó moral, y la de castigar la contravención á esa ley esté en otra personalidad distinta, pues en este caso quedaba al arbitrio de ésta hacer negatoria la facultad de aquella.

La Constitución de los Estados Unidos dispone (Art. 1º sec. 5ª § 2): "Cada Cámara puede fijar las reglas de sus procedimientos, castigar á sus miembros por su mala conducta, y

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

con el asentimiento de las dos terceras partes de votos ex pulsarlos.» Copia Story esta disposición (Comentº abrevº de la Constit. Fed. Cap. 13.) «Nadie puede negar la utilidad de uua disposición que inviste á cada Cámara con el derecho de hacer sus reglamentos; sin este poder sería imposible exigir para la discusión de los negocios de la Nación, la decencia, la tranquilidad y el orden conveniente. *Sin embargo, este poder sería ilusorio si las Cámaras no tuvieran al mismo tiempo el derecho de castigar á los contraventores.*»

Dice igualmente el autor citado (Cap. 18): «El Congreso tiene, además, facultad para proveer al castigo de los falsificadores de billetes de banco y moneda corriente de los Estados Unidos. *Este poder es una consecuencia natural de los de hacer empréstitos y acuñar moneda; de otra manera, estos últimos serían en efecto ilusorios.*»

La práctica de casos análogos apoya esta misma opinión: Es facultad del Congreso (Art. 72, frac. 23ª) «la de establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta deba tener, determinar el valor de la extranjera y adoptar un sistema general de pesas y medidas. «No hay disposición expresa que faculte al Congreso para castigar á los monederos falsos y en el Código Penal se titula el Cap. I., del tít. 4º Lib. 3º: «Falsificación de moneda y alteración de ella.»

¿Está el caso ya resuelto de hecho? A mi juicio si lo está.

Cód. de Com. Art. 27. «La falta de registro de documentos hará que en caso de quiebra, ésta se tenga como fraudulenta, salvo prueba en contrario.»

Id. art. 69: «La quiebra de los corredores será calificada siempre de fraudulenta.

Id. art. 70. En determinados casos se castiga á los Corredores con pena de suspensión y aún de destitución.

Id. art. 71. Se les puede imponer multa hasta de quinientos pesos.

Cód. de Com. Art. 953 y siguientes. La quiebra es fortuita, culpable ó fraudulenta.

Id. art. 961. La quiebra culpable ó fraudulenta puede ser perseguida por el Ministerio Público, por el Síndico ó por uno ó más acreedores.

Pero desde que es facultad de la Unión la de legislar sobre la materia, parece que no deja lugar á duda sobre la que le compete para establecer penas á los contraventores de estas leyes. Enseña Kent (Coment. á la Const. de los E E. U U. Cap. II § II): «Las facultades concedidas al Gobierno comprenden implícitamente los medios ordinarios para su ejercicio y según la sana razón é interpretación, al Gobierno debe tocar la elección de los que juzgue más convenientes y adecuados para su objeto. «Y esto que es de interpretación y de doctrina en los E E. U U., es en México disposición constitucional clara y expresa. ¿Por qué se han de establecer estas penas? Seguramente, porque ellas se consideran *necesarias ó propias* para que esas leyes se cumplan ó se *hagan efectivas* y dice el art. 72 de la Constitución que el Congreso tiene facultad: «XXX. Para expedir todas las leyes que sean necesarias y propias para hacer efectivas las facultades, antecedentes y todas las otras concedidas por esta Constitución á los Poderes de la Unión.»

El Congreso tiene actualmente en estudio y se dice que discutirá próximamente un proyecto de ley relativo á la penalidad de que venimos hablando presentado por los distinguidos abogados D. Emilio Pardo (jr.) y D. Alberto Lombardo.

Este proyecto fué publicado en 31 de Mayo último y dice así:

Los CC. Alberto Lombardo y Emilio Pardo (jr), presentaron el Proyecto de ley que á continuación se inserta:

«En el Distrito Federal y en los Territorios de Tepic y

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

de la Baja California, se observarán las siguientes disposiciones penales, referentes á sociedades mercantiles.

I.

Serán castigados con arresto de quince días á seis meses y multa de 20 á 1,000 pesos, con aquel sólo ó sólo con ésta, á juicio del juez:

1º Los administradores ó directores de una sociedad anónima y los gerentes de cualquiera otra sociedad mercantil, que practiquen operaciones á nombre de la sociedad, antes de la constitución legal de ésta.

2º Los que emitan, entreguen ó negocíen acciones de una sociedad no constituida legalmente.

3º Los que, presentándose como propietarios de acciones que no les pertenecen, hayan tomado parte en la votación, en una asamblea general de accionistas.

4º Los que hayan remitido acciones para hacer el uso expresado en la fracción anterior.

II.

Serán considerados como culpables de estafa y castigados con las penas marcadas por el Código Penal:

1° Los que hagan creer en aportaciones que no existen, ó atribuyan á las aportaciones existentes un valor superior á su valor real.

2º Los que en una sociedad anónima ó en comandita por acciones, hayan obtenido ó intentado obtener subscripciones ó entregas de dinero por publicaciones *hechas de mala* fe ó por hechos *simulados* ó *falsos*.

3º Los que en las mismas sociedades anteriormente dichas, para provocar subscripciones ó entregas de dinero, publiquen de mala fe y contrariamente á la verdad, el nombre de alguna persona, como tomando ó debiendo tomar parte en la sociedad.

III.

Serán castigados con una multa de 20 á 1,000 pesos y con arresto de uno á once meses:

1º Los administradores ó gerentes de sociedades mercantiles que repartan entre los accionistas dividendos ficticios.

2º Los Comisarios ó individuos de un consejo de vigilancia que á sabiendas admitan como verdaderos, hechos falsos ó hagan de mala fe relaciones ó informes inexactos.

IV.

Serán castigados con las mismas penas, los administradores, directores y gerentes que hayan:

1º Infringido las disposiciones de los estatutos que prohiben ciertas clases de operaciones:

2º Hecho compras de acciones de su sociedad en contra de lo dispuesto en el art. 184 del Código de Comercio.

3º Revendido ó hecho revender acciones regularmente compradas y que hubiesen debido ser anuladas.

4º Hecho préstamos ó anticipos con los fondos sociales, sobre las acciones de la Compañía.

5º Hecho, en perjuicio de la sociedad, contratos simulados ó fraudulentos, ó admitido como hechas, entregas de dinero que no se han efectuado realmente.

V.

Serán castigados con las penas señaladas para el delito de falsedad, las personas que con intención de dañar, hayan

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

en los inventarios, balances ó en las cuentas de pérdidas y ganancias de las sociedades, puesto firmas falsas, alterado lo escrito ó las firmas, inventado convenios, disposiciones, obligaciones ó descargos y adicionado ó alterado cláusulas de declaraciones ó hechos que estos documentos tienen por objeto recibir y comprobar,

El que haya hecho uso de estos iustrumentos falsos, será castigado camo si fuese autor de la falsedad.

VI.

Será castigada con multa de segunda clase, toda infracción á las disposiciones legales, referentes á la publicidad de los balances ó á la que debe preceder á las subscripciones, emisiones ó ventas públicas de acciones ó de obligaciones.

Toda enunciación ó disimulo fraudulento en las actas de publicación, dan lugar á la pena marcada en el art. II de la presente ley.

VII.

La infracción del art. 179 del Código de Comercio ó la omisión de alguno de los requisitos legales que deben observarse en toda emisión de obligaciones ó de acciones, será castigada con una multa de 20 á 200 pesos.

Igual pena tendrá la infracción del art. 3° de la ley sobre obligaciones.

VIII.

La negligencia de los administradores, directores y gerentes de sociedades y la de los Comisarios interventores y consejos de vigilancia, en el cumplimiento de los deberes que las leyes les imponen, será castigada con arresto de ocho

días á dos meses y multa de 20 á 100 pesos. Los representantes comunes de obligacionistas, quedan sujetos por su negligencia, á las mismas penas."

Acto continuo, el C. Lombardo hizo uso de la palabra y suplicó á la Cámara se sirviera dispensar la 2ª lectura, al preinserto Proyecto de ley, y admitirlo á discusión.

Consultada la Asamblea acerca de esta petición, resolvió por la afirmativa en votación económica.

El Proyecto de ley se mandó pasar á las Comisiones unidas de Código de Comercio y 2ª de Justicia.

.....

José Ignacio Alvarez, diputado vicepresidente.—*J. B. Castelló*, diputado secretario.—*Juan Bribiesca*, diputado secretario.—Confrontada: *Eugenio Soriano Bravo.*

Es copia. México, á 29 de Mayo de 1897.—*Francisco de Landa y Escandón*, Oficial mayor.

Empieza por decir el proyecto que habrá de regir en el Distrito Federal y en los Territorios de Tepic y de La Baja California, lo que obedece sin duda á la creencia de los autores del proyecto de que el Congreso no podía legislar en la materia para toda la República; pues no puede suponerse en la ilustración de sus autores que creyéran que los hechos que erigen en delitos dejarán de serlo por unas cuantas leguas más acá ó más allá.

La idea general que el proyecto inspira es la de que sus autores se impresionaron vivamente por algunos hechos concretos y con el fin laudable de reprimirlos, proponen una penalidad dura y severa, que más bien parece que tiende al exterminio de las sociedades que á su depuración y enmienda.

En la penalidad del art. 1° comprende á los gerentes de cualquiera sociedad mercantil y el tocar á estas sociedades no está indicado por abuso alguno anormal y no hay el menor signo de alarma ni en el comercio, ni en los autores que

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

haga suponer que no baste el derecho común para que puedan reprimirse los abusos de los gerentes en las sociedades que no sean anónimas ó por acciones.

Se castiga con arresto de quince días á seis meses ó multa de veinte á mil pesos ó con ambas penas á los administradores, directores ó gerentes que practiquen operaciones á nombre de la sociedad, "antes de la constitución legal de ésta."

¿Qué entienden los autores del proyecto por constitución legal de una Compañía? Les basta el que el pacto social esté consignado en escritura pública y esta se halle registrada, ó exigen todos los requisitos cuya falta castiga la ley con pena de nulidad? Si lo primero, era más sencillo decirlo así; y si lo segundo, exigen á los administradores para no incurrir en la pena conocimientos de Abogado peritísimo y sobre muchas escrituras de sociedad posible es que haya diversidad de pareceres sobre su validez entre Abogados de toda ciencia y conciencia.

Si la sociedad lleva mucho tiempo de subsistir y llegan nuevos administradores, que no tuvieron participación alguna en su planteamiento ¿incurrirán en esas penas? La razón dice que no y así lo dice una sentencia de la Corte de apelación de París, de fecha 14 de Abril de 1892. (Colec. cit. II. —140.) que establece: "El administrador que no ha tomado parte alguna en la fundación de la sociedad y no ha sido nombrado á sus funciones sino después que aquella había sido constituída, no puede ser declarado responsable de los hechos que han viciado la constitución de la sociedad."

Este administrador, sin embargo, no quedaría libre de responsabilidad según el proyecto que examinamos.

El hecho enunciado no es por sí sólo y necesariamente constitutivo de fraude, y por lo tanto de delito, y parece que basta para su sanción lo dispuesto en el art. 97 del Cód. de

Com., según el que esa nulidad no podría alegarse contra un tercero que contrató con la sociedad.

La ley francesa establece (Art. 1º) que la sociedad no se considere definitivamente constituida sino cuando se haya subscripto todo el capital y pagado el 25 por ciento; que (Artículo 2º) las acciones son negociables después de pagado el 25 por ciento, y que (Art. 3º) después de pagado el 50 por ciento las acciones pueden convertirse en acciones al portador.

Bajo estos antecedentes dispone tambien (Arts. 4, 5 y 13) que se castiga con una multa de quinientos á diez mil francos la emisión de acciones contraria á los arts. 1, 2 y 3 y se castiga con igual pena al gerente que comienza sus operaciones antes de que entre en funciones el Consejo de Vigilancia.

Los hechos que castiga la ley francesa son hechos concretos y determinados y no lo es el concepto complexo y difícil del proyecto.

El legislador francés no se atrevió á pasar de la pena de multa, y el proyecto le une la de arresto de quince días á seis meses, ya disyuntiva, ya acumulativamente.

Nada hay que indique ni justifique una severidad mayor que la que en Francia se ha empleado después de grandes lamentaciones por enormes abusos.

Incurren en la pena, ó en las penas antes señaladas, según el proyecto: los que presentándose como propietarios de acciones que no les pertenecen, hayan tomado parte en la votación en una Asamblea General de Accionistas: "4º Los que hayan remitido acciones para hacer el uso expresado en la fracción anterior."

Pedro tiene cien acciones del Banco Nacional de México que puede inscribirlas á su nombre é ir á representarlas en la Asamblea general. No le es posible concurrir y transfiere su papeleta de asistencia al consocio Antonio, ó encarga á

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

su apoderado Antonio que concurra en nombre y representación del poderdante. En vez de esto, como las acciones son al portador, las entrega á Antonio, que para con el Banco y ante la ley, desde que las recibe, es el dueño de ellas. Las presenta al Banco, las inscribe á su nombre y vota por ellas. ¿En qué han perjudicado ni Pedro ni Antonio á sus consocios ni á los terceros con esta forma de representación? ¿No es un acto enteramente inocente que solo toca, que solo afecta á Pedro y á Antonio? Erigir en delito un acto tan sencillo, y lo es tanto como endosar una letra por valor entendido ó valor en cobranza, me parece un positivo abuso del poder legislativo.

No basta á justificar el Proyecto disposición análoga de la ley francesa, pues aun cuando Bedarride afirma (Loc. cit. § 273) que el hecho es inmoral y reprobado, no funda su dicho.

Y todavía puede pasar lo que dispone la ley francesa declarando que incurren en esa pena "Los que, dice, presentándose como propietarios de acciones ó de cupones de acciones que no les pertenecen han creado fraudulentamente una mayoría ficticia en una Asamblea general.—Los que han entregado las acciones para hacer de ellas un uso fraudulento."

Con permiso de Bedarride y de los autores franceses, no se comprende la mayoría ficticia de que hablan, sino dando por resuelto lo que yo pongo en tela de juicio, á saber: que sea reprobado inscribir á su nombre acciones ajenas con consentimiento del dueño y votar con ellas.

Pero al menos en Francia se requiere: 1° Que se entreguen las acciones *para hacer de ellas un uso reprobado:* 2º Que hayan creado *una mayoría ficticia;* y 3º, Que la hayan creado fraudulentamente. Nuestro Proyecto no requiere nada de esto y castiga el hecho de votar con ellas, aun cuando no se forme mayoría, y por lo mismo aun cuando no se cause

perjuicio alguno, y respecto al dueño, se le castiga por el solo hecho de la entrega para votar con ellas, aun cuando no llegue á votar.

Repito que en mi opinión no es bueno lo que dispone la ley francesa; pero me parece enteramente inadmisible lo que el Proyecto recomienda.

Considera el art. II como culpables de estafa: "1º los que hagan creer en aportaciones que no existen. Esta locución parece muy poco propia de una ley penal. Requiere para el castigo un hecho ageno al delincuente cual es la creencia del extraño. Continúa el art. "ó atribuyan á las aportaciones existentes un valor superior á su valor real," en donde ya no se tiene en cuenta la creencia de los demás, sino el solo hecho del delincuente y no se puede creer que se tuviese distinto criterio para uno y otro casos tan próximos en la redacción y tan semejantes en la idea que expresan.

Pero la segunda parte, como está escrita, es notoriamente injusta porque es culpable de estafa "el que atribuye á una aportación un valor superior al valor real;" pues muchas veces puede hacerse eso de la mejor buena fe y con la convicción más profunda y más honrada. Para poder penar ese hecho se debe exigir ó la prueba del dolo ó que sea notorio y evidente que se le atribuyó un valor mayor que el que tenía. El hecho merece pena que debía señalarse directamente y no asimilarle á la estafa con el que está muy lejos de identificarse.

Considera ese art. II que son culpables de estafa: "los que en una sociedad anónima ó en comandita por acciones hayan obtenido ó *intentado obtener* subscripciones ó entregas de dinero por publicaciones hechas de mala fe ó por hechos simulados ó falsos" merece la crítica de que equipara el delito intentado con el delito consumado, lo que no es admisible en buena legislación penal.

No justifica el Proyecto el que la ley francesa (Art. 15)

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

diga igualmente que se hayan obtenido subscripciones ó dinero ó *intentado conseguirlos;* porque esto es debido al atraso del Cód. Pen. francés respecto de tentativa, delito frustrado y delito consumado; pero no puede admitirse entre nosotros que tenemos un Cód. Pen. enteramente científico en el punto de que se trata.

Suprimiendo la parte de delito intententado para dejarla con la pena proporcional que corresponda al delito intentado ó frustrado quedaría aceptable el artículo.

El mismo artículo considera que son culpables de estafa: "3º los que en las mismas sociedades anteriormente dichas ó para provocar subscripciones ó entregas de dinero, publiquen de mala fe y contrariamente á la verdad el nombre de alguna persona, como tomando ó debiendo tomar parte en la sociedad."

El artículo, como se ve, castiga el hecho de las publicaciones, que no es sino el medio empleado para cometer el delito, y no castiga el hecho de recibir los dineros ajenos que es el verdadero delito y es porque no se distingue entre el delito intentado y el delito consumado, ni el medio empleado, del delito mismo, ni le justifica el que así lo disponga la ley francesa (Art. 15 § 2º).

Haciendo la corrección respectiva de que "es culpable de estafa el que obtiene subscripciones ó entregas de dinero por medio de publicaciones, etc., el artículo sería bien admitido.

Y sobre esta materia, al menos por lo que á la responsabilidad civil concierne, es muy de tener en cuenta la sentencia de la Corte de casación de Francia de 18 de Marzo de 1891. (Colec. cit., tomo de 1894): El Presidente del Consejo de Administración de una sociedad, que no ha tomado posesión de su encargo sino posteriormente á un empréstito realizado por ella, que no tuvo ingerencia en la redacción

del prospecto publicado para este empréstito y que no autorizó la inserción de su nombre en el prospecto junto con los otros administradores, no por esto es menos responsable, para con los tenedores de obligaciones engañados por las enunciaciones mentirosas de este prospecto si lo ha conocido en el momento de tomar posesión de sus funciones y ha guardado silencio, en lugar de protestar contra estas inexactitudes, de ilustrar á los subscriptores aún no liberados del monto de las obligaciones, y á los terceros tomadores de obligaciones posteriormente á la emisión, sobre la situación de la sociedad, y sobre el empleo de los fondos provenientes del empréstito."

El art. III como la ley francesa (Art. 15 § 3º) castiga con arresto de uno á once meses y multa de veinte á mil pesos á "los administradores ó gerentes que repartan entre los accionistas dividendos ficticios." Enteramente conforme con esta prevención concretándola á las sociedades anóminas ó en comandita por acciones.

Sirve para aclarar esta materia lo establecido por la Corte de casación francesa en sentencia de 18 de Enero de 1894. (Colec. cit. tom. I—256) " Atendiendo á que la sentencia atacada, después de un exámen de las operaciones de la sociedad de pavimentos de madera, hace constar que, "con el fin de paliar una situación inquietante para un porvenir próximo y para el crédito de la sociedad, los administradores han buscado un expediente propio para hacer aparecer un beneficio que no podía ser sino imaginario, y que para este efecto han aumentado con un rasgo de pluma y en block en un tanto por ciento el valor de las mercancías en talleres, en almacenes y aún en camino;" que la misma sentencia agrega que la irregularidad flagrante de los actos del Consejo de Administración no podía conciliarse con su buena fe; que los hechos así comprobados justifican la calificación que han recibido y la pena que se les ha aplicado."

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

El art. IV castiga con la misma pena, arresto de uno á once meses y veinte á mil pesos de multa hechos tan distintos: 1º cualquiera infracción de Estatutos; 2º comprar las mismas acciones; 3º revenderlas y 4º hacer préstamos sobre ellas, y este otro: "5º haber hecho en perjuicio de la sociedad contratos simulados ó fraudulentos, ó admitido como hechas, entregas de dinero que no se han efectuado realmente." Salta á la vista la gravedad del último hecho y la poca importancia de los cuatro primeros, que estarían bastante castigados con una multa de cien á quinientos pesos.

Es irreprochable el art. V referente á falsedades cometidas con intención de dañar, en balances, inventarios etc.; pero respecto al párrafo final referete al que hace uso de esos documentos debe exigirse que se haga uso de ellos sabiendo la falsedad de que adolecen.

También parece excesiva la multa de segunda clase, diez y seis á mil pesos (Art. 112 Cod. Pen.) para todos los hechos que abarca: bastaría una multa de diez á quinientos pesos.

El párrafo primero referente á enunciación ó disimulo fraudulento en las publicaciones no corresponde ó este artículo sino al art. 2º al que lo remite y no merece la pena que le señala.

Puede admitirse la pena de veinte á doscientos pesos que señala el art. 8° por la omisión en las acciones emitidas de algunos de los requisitos del art. 179 del Cód. de Com. Lo que no está bueno es que extienda la pena á la omisión de cualquiera de los requisitos legales; porque la prevención es vaga y general, y dice Lord Macaulay (Estudios jurídicos): "Una ley escrita incorrectamente no es ley; y en tanto en cuanto una legislación use de expresiones vagas, en lo mismo abdica de su función propia y abandona su facultad de dar reglas á los tribunales de justicia."

Excesiva considero la pena del art. 8º de arresto de ocho días á dos meses y multa de veinte á cien pesos, para la negligencia de administradores, directores, gerentes y comisarios. Sería bastante y sería preferible una multa de veinte á cien pesos.

Mi opinión es que el Proyecto de que se trata es demasiado duro y que si puede corregir algunos abusos, puede también causar grandes males, llevando el temor y la desconfianza á las personas que forman parte de esas sociedades, alejando así de ellas á personas honorables que con sola su presencia evitan grandes males y, en vez de ellas, vengan á esas funciones individuos sin nombre ni prestigio que fácilmente hallarán medios de eludir la ley.

Es de temerse que si ese Proyecto llegara á ser ley, pueda á los pocos años decirse de él lo que el orador francés decía del régimen restrictivo que precedió á la ley de 1867. "En vano, decía, se le llamará con el bello nombre de protección, en vano se demostrará con hechos su acción bienhechora, jamás se podrá hacer la cuenta de los gérmenes útiles que ha podido ahogar de las ideas fecundas que ha matado sin quererlo, acaso solo porque eran atrevidas y asustaban á espíritus demasiado tímidos (Lurrue loc. cit. introduc. § 10.)

No es buena guía para una legislación represiva la ley francesa de 1867 que como dice Fruscy Larue ha sido redactada con un espíritu de desconfianza para los fundadores y administradores.

Opino con el autor citado que "tan justo como es castigar el fraude donde quiera que se encuentre, es peligroso en una ley presumirlo á menudo."

Nuestros legisladores no deben de olvidar que afortunadamente para la República su comercio está de tal manera cimentado en la buena fe, que el de pocas le igualarán y de seguro no será superado por ninguna.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

La legislación penal, debiera, á mi juicio, reducirse á relegar al derecho común todos los casos de fraude, abuso de confianza y estafa y castigar con pena de multa exclusivamente todos los demás actos irregulares de las sociedades anónimas que constituyendo delito no llegáren á ninguno de los otros casos expresados.

La mayor parte de esas irregularidades no obedecen siempre al afán de procurarse un lucro indebido, sino á ignorancia unas veces, y otras, las más, al afán de quedar bien con los accionistas y el público en general.

Si hubiera un medio de señalar esas irregularidades á los gerentes, Consejeros y Comisarios, para que las corrigieran: si no diere resultado denunciarlas á la Asamblea general y si tampoco esto diere resultado, publicar la irregularidad en el Diario Oficial, juzgo que en la inmensa mayoría de los casos no se pasaría del primer grado.

Podría conseguirse este objeto con el nombramiento de un Inspector de las sociedades anónimas y de todas las sociedades por acciones.

Confiado este encargo á un Abogado distinguido y bien conceptuado, con obligación de consagrar al desempeño de sus funciones todo su tiempo y toda su actividad, es de creerse que daría los mejores resultados.

Generalmente se recibe con repulsión toda ingerencia del Gobierno en los asuntos particulares; pero esta repulsa obedece á que, también generalmente, donde el Gobierno pone la mano, levanta, ampula, pero el Inspector que propongo, teniendo las mismas facultades de revisión é inspección que los Comisarios, no tendría facultad de imponer multa alguna, y sería, no el adversario, sino el mejor amigo de todas y de cada una de las sociedades anónimas.

En matería de ingerencia del Gobierno, participo completamente de las ideas que expresaba Lord Macaulay en su discurso sobre las diez horas de trabajo: "Dificilmente,

son sus palabras, sabría yo decir cuál es la epidemia más grande de una sociedad, si un gobierno paternal, es decir, un gobierno inquisitorial, entrometido, que se mete en todos los rincones de la vida humana, y que cree que puede hacer todas las cosas de todo el mundo mejor que cualquiera podría hacerlas por sí mismo, ó un gobierno descuidado, perezoso que consiente crezcan y se multipliquen abusos que pudo cortar de raíz y que para todas las quejas y representaciones tiene esta única contestación: "Hay que dejar libres las cosas; debemos dejar que los hechos sigan su curso; debemos dejar que las cosas hallen por sí mismas su nivel."

La mayor facultad, el recurso supremo del Inspector, sería acudir á la publicidad para poner correctivo en el medio que necesitan emplear para seducir al público y esa misma publicidad debe ser vida de los buenos y muerte de los malos. "El fin de la justicia, dice Herbert Spencer, es que cada individuo recoja los resultados buenos ó malos de su propia naturaleza y de las consecuencias que de ella se deriven."

He concluido, Señores Sinodales, mi larga y fatigosa tarea. De ella se desprende que entre nosotros á un sistema de abandono casi completo se piensa sustituir otro de represión excesiva. Ambos extremos son perniciosos: el primero produce males en la sociedad, que se ve amenazada por las combinaciones deslumbradoras de aventureros más ó menos audaces; el segundo también la perjudica, pues que, limitando la esfera de acción de las sociedades anónimas, ó proscribiéndolas á fuerza de trabas, requisitos y penas, priva á la misma sociedad de los incalculables beneficios que ellas, mejor que ninguna otra, están llamadas á producir.

Sucede en sociología algo semejante de lo que pasa en física. Una gran fuerza encerrada dentro de un círculo que

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

la oprime más y más, concluye por romperlo sin dar resultado benéfico ninguno: en cambio, abandonada á sí misma tampoco desarrolla todas sus aptitudes ¿qué debe hacerse? Dirigirla, encaminarla, regularla prudentemente para que, como el vapor, nos sea útil en sus admirables y bien recogidas expansiones.

Esperamos, por lo tanto, que depuradas las ideas que dejamos expuestas, al pasar por el delicado tamiz de criterios más ilustrados, produzcan el equilíbrio entre los dos extremos para el bien y la prosperidad de nuestra patria.

México, Noviembre 1º de 1897.

MANUEL SÁNCHEZ GAVITO.

Alocución pronunciada por el Lic. Víctor M. Castillo en la Escuela N. de Jurisprudencia al inaugurarse las clases de 1898.

SEÑOR DIRECTOR,

SEÑORES PROFESORES,

SEÑORES:

Nada más difícil que desarrollar un tema digno del auditorio que me escucha, dadas las condiciones en que me encuentro; nada más fácil que demostrar mi buena voluntad por cumplir un mandato superior que me honra con la distinción de dirigiros la palabra. He aquí el motivo de mi presencia en este lugar.

La paz es el objeto que persigue el derecho; la lucha es el medio de alcanzarlo, ha dicho un eminente romanista. La frase parece paradógica, aunque de gran verdad. Ignoro si los que nos dedicamos á la investigación de la verdad jurídica, seremos los luchadores del derecho ó los conquistadores de la paz; pero sí sé que la noble ciencia que abarcó en los tiempos clásicos el conocimiento de las cosas divinas y humanas tiene por principios fundamentales el orden y la libertad, y que el Derecho, supremo regulador de las acciones del hom-

UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

la oprime más y más, concluye por romperlo sin dar resultado benéfico ninguno: en cambio, abandonada á sí misma tampoco desarrolla todas sus aptitudes ¿qué debe hacerse? Dirigirla, encaminarla, regularla prudentemente para que, como el vapor, nos sea útil en sus admirables y bien recogidas expansiones.

Esperamos, por lo tanto, que depuradas las ideas que dejamos expuestas, al pasar por el delicado tamiz de criterios más ilustrados, produzcan el equilíbrio entre los dos extremos para el bien y la prosperidad de nuestra patria.

México, Noviembre 1º de 1897.

MANUEL SÁNCHEZ GAVITO.

Alocución pronunciada por el Lic. Víctor M. Castillo en la Escuela N. de Jurisprudencia al inaugurarse las clases de 1898.

SEÑOR DIRECTOR,

SEÑORES PROFESORES,

SEÑORES:

Nada más difícil que desarrollar un tema digno del auditorio que me escucha, dadas las condiciones en que me encuentro; nada más fácil que demostrar mi buena voluntad por cumplir un mandato superior que me honra con la distinción de dirigiros la palabra. He aquí el motivo de mi presencia en este lugar.

La paz es el objeto que persigue el derecho; la lucha es el medio de alcanzarlo, ha dicho un eminente romanista. La frase parece paradógica, aunque de gran verdad. Ignoro si los que nos dedicamos á la investigación de la verdad jurídica, seremos los luchadores del derecho ó los conquistadores de la paz; pero sí sé que la noble ciencia que abarcó en los tiempos clásicos el conocimiento de las cosas divinas y humanas tiene por principios fundamentales el orden y la libertad, y que el Derecho, supremo regulador de las acciones del hom-

UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

bre, tiene en la ley, expresión feliz que lo traduce, la forma perfeccionada de la protección social.

El derecho es una condición de existencia moral para los individuos y para los pueblos, y aunque eminentemente protector como representante de una fuerza viva, necesita ser escudado contra los ataques de la violencia y de la injusticia. De aquí la necesidad del sentimiento jurídico, tanto más enérgico en los particulares y en las sociedades mientras más sólidas son las condiciones de su vida. Pero los principios del derecho, manifestación fiel de la justicia, como todos los principios del orden moral ó político, no han sido conquistados sino después de constantes luchas. La historia del derecho es la historia de la humanidad.

El elemento ético del derecho, el de la justicia ha sido menospreciado casi siempre ante el elemento material, el del poder y la fuerza, mas como la justicia es una condición de la vida humana hanse provocado esos violentos choques que ensangrientan las páginas de la historia; pero que marcan las conquistas del derecho.

Las máximas más elementales del derecho han necesitado siglos de luchas para transformarse en reglas de la conducta normal de los individuos y de las sociedades; en escudos naturales de la libertad individual y elementos de orden social

El derecho de matrimonio y de familia, el de propiedad, el de las obligaciones, el de sucesión en el orden privado; la libertad personal, la del trabajo, la libertad de conciencia, el derecho electoral, la división de los poderes públicos, la separación de la Iglesia y el Estado, el derecho de castigar las formas de Gobierno, en el derecho público; la soberanía é independencia, la igualdad, la conservación y defensa de los Estados en el derecho Internacional; en una palabra, todo el orden jurídico ha sufrido serias transformaciones y seguido

la marcha triunfal de la civilización; pero en esa marcha los pueblos han sellado con su sangre las conquistas del derecho.

Mientras mayores han sido los sacrificios por adquirir un derecho, mayor es la fuerza con que se conserva y defiende, porque mayor es el sentimiento jurídico que despierta y cuando es reconocido y respetado por todos y forma parte del funcionamiento propio de las sociedades que gobierna, se constituye en un elemento de vida, en un principio de orden y de paz. Así me explico el sentido profundamente filosófico de esta frase de nuestro inmortal Juárez: «el respeto al derecho ajeno es la paz.»

Así se comprende que el derecho tenga por objeto la paz: mas para conservarla cuando se ha descubierto uno de sus principios, una máxima de justicia y se ha formulado en precepto legal, expresión impasible y constante de la voluntad soberana ó en móvil de acción manifestación de la libertad; precisa fomentar el sentimiento jurídico, la conciencia del derecho, y difundirlo infiltrando en la conciencia individual para que adquiera fuerza, vigor y lozanía para su defensa; urge protegerlo de todo ataque, de toda violencia, de toda usurpación á riesgo de perder el terreno conquistado.

Este sentimiento jurídico y esa energía en la defensa constituye el elemento vital del derecho y da idea precisa del grado de poder y de fuerza y de la vitalidad de un pueblo. Cultivar este sentimiento, dice Ohering, es uno de los deberes más elevados de la pedagogía política, es cultivar la salud y la fuerza del Estado.

La defensa del derecho se impone entonces como un deber de conservación individual y social. «La causa del nacimiento de las instituciones, dice Bendant, responde á la eterna inquietud de la libertad humana incesantemente amenazada por la violencia. Se resume en una idea de protección que depurada viene á ser idea de justicia. Todos los poderes

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

han sido protectores en su origen, por eso nacen; con frecuencia se hacen opresivos, por eso sucumben.»

El Estado, órgano supremo del derecho, lucha constantemente contra la anarquía, la libertad individual siempre amenazada por las autoridades violadoras de sus garantías, el orden público, el derecho privado desconocido frecuentemente por el criminal, por el ambicioso; en una palabra, las bases fundamentales del orden y de la paz, siempre conmovidas. Gracias á la infinita fuerza del Derecho y de la justicia, á la ley eterna de la conservación y del progreso, avanza la humanidad.

Nosotros, humildes investigadores de la verdad, devotos del derecho y de la justicia, ó guías expertos en sus luminosas sendas, cumpliremos con nuestro deber defendiendo el puesto que nos corresponde, pero jamás como los soldados de que habla Ohering, abandonaremos el campo salvando lo que otros sacrifican, la vida á costa del honor.

De propósito no he querido hablar de las disquisiciones de los sabios sobre la existencia del Derecho y de la Justicia; para mí, creo en ella con la fe del creyente, por más que aún resuenen en mi oido las frases sarcásticas de Pascal y de Benttan «Nada hay justo é injusto que no cambie con el clima.» Tres grados de elevación del Polo, modifican la jurisprudencia. Un meridiano decide la verdad. Graciosa justicia la que depende del lindero de un río ó de una montaña.»

«¿Qué contestar á ese ejército de fanáticos que tienen alucinaciones de lo justo, sino que se equivocan?»

Entre los alucinados y los científicos, prefiero ser de los primeros. Los sabios de escuela, huyendo de la metafísica clásica, se refugian hoy en la metafísica moderna ó científica.

Hay una razón de ser suprema de todas las cosas, una relación constante entre las condiciones de existencia de todos los seres, un orden superior constitutivo de todo lo creado. Y esta razón suprema, esta relación constante, este orden excelso se llama ley, altísima manifestación del Derecho y de la Justicia. En este sentido dice un autor que hasta la Divinidad tiene sus leyes, recordando una elegante frase de Plutarco. «La Ley es la Reina de los mortales y de los inmortales.»

Enero 7 de 1898.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

LECCIONES DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO.

LECCION XIII.

SUMARIO:

Derecho de las obligaciones.—¿Qué ley debe regirlas?.—Escuela Italiana.—Opinión de Savigny y otros autores.—Ley de la ejecución.—Observaciones.

1. Deseoso de dejar concluida la exposición general de los principios fundamentales del derecho internacional privado, paso á ocuparme del derecho de las obligaciones.

2. Expuesto lo relativo á éste, me referiré nuevamente á los estatutos, personal y real y á la ley del domicilio, insistiendo sobre el carácter de ésta, para presentar conclusiones favorables á un sistema homogéneo de derecho internacional privado.

3. Dicen los romanistas que cosa, es todo aquello que sin ser persona ni acción, forma parte del patrimonio del hombre; y en este sentido las obligaciones forman parte de las cosas, segundo objeto del derecho, así como la forman también los testamentos.

4. Menos latamente considerada la obligación, es el vínculo de derecho por el que nos hallamos constreñidos á dar ó á hacer alguna cosa (Lib. 3 tit. 14 proemio constit.

Cust.) y en este sentido las obligaciones no son las cosas, sino que forman especial objeto del derecho, como lo forman también las sucesiones.

5. Consigno aquí como en otras ocasiones, la observación de Savigny al referirse á la división de los objetos del derecho, tal como la explica Justiniano y es ésta: Se trata de una división subjetiva y no objetiva, es decir, división de los objetos del derecho en el entendimiento, pero no real. Ninguna calificación más opurtuna de la referida división he encontrado, desde el punto que la considera, el derecho internacional privado.

6. Los objetos del derecho se enlazan entre sí estrechamente, para formar el conjunto de los derechos, cuyo sujeto es el hombre y pueden disgregarse en muchas partes, según el punto de vista desde que se les considére; y sin embargo, el derecho en su conjunto es uno y uno el sujeto de ese derecho.

7. Siempre teniendo á la vista la división tripartita de los objetos del derecho, hemos ya visto que no por accidente ni por excepción, sino por causas constantes y que con la naturaleza misma de esas partes se relaciona, éstas se unen y se combinan por tal modo, que no es posible decidir á cuál de ellas pertenece determinada relación jurídica. Son esos tres objetos del derecho como núcleos perfectamente claros en su centro que á medida que se extienden, pierden su claridad y se confunden entre sí, sin que posible sea determinar el cuerpo á qué pertenecen.

8. Siendo ésto así y antes de decidir la ley que las obligaciones rija, recordaré ciertos principios á la teoría de los estatutos en general referentes, para nunca dejar de considerar como conviene esa misma teoría fundamental en su conjunto, ó bien la que á ella deba sustituirse.

9. Estatutos mixtos hemos dicho, son aquellos que á las acciones se refieren ó que á las personas y á las cosas junta-

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

mente atañen. Así lo enseña Savigny y agrega con razón que una definición comprende la otra, lo cual así es, puesto que si estatutos mixtos son los que se refieren á las acciones, lo son por cuanto á que éstas á personas y á cosas afectan por modo igual, sin que en una ó en otra, materia jurídica puedan seguramente clasificarse, y siendo esto así, procuremos fijar la naturaleza del derecho de las obligaciones, del estatuto de las obligaciones, del conjunto de leyes relativas á las obligaciones ó contratos.

10. Para defender hasta donde es posible la doctrina estatutista, que en multitud de casos conduce á una solución justa, según la profunda observación del sabio Profesor de Berlín, hemos indicado más arriba, como es que en cada relación jurídica, conviene determinar el elemento que prepondera para clasificarla. así en uno ú otro estatuto; y quedó señalada también la conveniencia de segregar en cada relación jurídica la parte de ella perteneciente á cada estatuto, para regirla por ley propia, sin caer en el error de querer decidirlo todo por una sola y exclusiva ley.

11. Debo recordar estas particularidades, para fijar con toda exactitud la naturaleza del derecho de las obligaciones y procurar comprenderlo en alguno de los objetos del derecho ya explicados.

12. ¿Pertenecen las obligaciones al estatuto personal, se refieren á la persona, modifican su estado y su modo de ser especial?

13. En cierto modo, cuando media contrato entre dos individuos y que uno de ellos puede ser constreñido á dar ó á hacer alguna cosa, sus derechos personales se hallan afectados. No es libre el individuo como lo era antes de la obligación para obrar ó dejar de hacerlo en determinado sentido; pero sus ligas con el acreedor no pueden equipararse á lo que la ley establece por razón de menor edad, de incapacidad ú otros motivos, que directamente afectan al modo de ser de la persona.

14. Lo que se dice del deudor se dice del acreedor, porque á uno y á otro asisten derechos y obligaciones recíprocas, en las obligaciones sinalagmáticas ó bilaterales.

¿Si los contratos ú obligaciones no pertenecen al estatuto personal, pertenecerán al real?

15. Sin duda que toda obligación afecta al patrimonio del individuo; todos sus bienes soportan el gravamen de cualquiera obligación que se suponga; quien contrata pierde su libertad de acción respecto de sus bienes, que responden á los contratos celebrados. En los diversos estados que pueden considerarse desde la estipulación hasta el embargo de bienes, la quiebra y el remate, las cosas, los bienes, el patrimonio del hombre se encuentran en condiciones especialísimas muy diferentes de las que se encontraban antes del contrato y que exclusivamente de éste se derivan.

16. ¿Pero tal condición de los bienes del deudor y aun del acreedor, pueden equipararse á la hipoteca, á la posesión, á la propiedad, á la prenda, derechos todos vinculados con la cosa, tan estrechamente que la modifican y determinan respecto de ella, estado y modo de ser particular? No en verdad.

17. Refiérense las obligaciones á las personas y á las cosas, pero no directa y separadamente, sino en conjunto, mezclados y confundidos ambos objetos del derecho.

18. Si se presenta el caso de un contrato garantizado con hipoteca, uno es el contrato, otro es el derecho real que lo garantiza. Si se estipula pagar determinada cantidad, encontramos la obligación en su más perfecta expresión, sin derecho real que la acompañe ni limitación de la personalidad del deudor, pero el vínculo de derecho no afecta ni á personas ni á cosas, ó si se quiere afecta á ambos conjuntamente, por modo tal, que ni por ley de personas ni de cosas exclusivamente pueda regirse.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

19. Por esto el derecho de las obligaciones forma objeto especial de estudio para el internacionalista, que tiene de recurrir á nuevos y diferentes medios de los ya conocidos.

20. Tenemos á la vista el estatuto mixto en toda su extensión, que afecta á personas y á cosas del mismo modo, indirecta y conjuntamente.

21. ¿Estatutos mixtos por qué ley se regirán?

22. Eliminada queda la ley personal, sea la del deudor sea la del acreedor y si la ley personal queda del todo excluida, la ley real obtendrá la preferencia?

23. Ley del lugar, la de la celebración, la de la ejecución del contrato, ora pactada, ya derivada de la naturaleza del contrato, ora accidental, porque los contratos surten sus efectos en todas partes y en cualquier lugar que el reo se encuentre, puede exigírsele el cumplimiento del contrato con arreglo á los preceptos sobre competencia. Más adelante he de fijar mis ideas respecto de las indicadas leyes, *lex loci contractus*, *lex fori*.

24. En la investigación que nos ocupa, presentaré en primer lugar un elemento hasta hoy desconocido y que cobija ley personal como ley real. La voluntad de los contrayentes.

25. De los conflictos hasta hoy examinados ¿respecto de cuál hemos invocado la voluntad de las partes? De ninguno en verdad.

26. Si se trata de que alguien sea considerado como *sui juris* ó sujeto á agena potestad, á nadie ha ocurrido que sobre este punto se respete la ley de la voluntad del interesado.

27. Si se pregunta cuál es la extensión del derecho de hipoteca y las facultades que al acreedor hipotecario asisten, á nadie ha ocurrido que se respeten sobre esos puntos la voluntad de los interesados, ó la de uno de ellos.

28. Importa fijar la razón de la indicada diferencia.

29. En los casos de estatuto personal, hay que considerar el derecho público de la nación, derecho que se interesa en que los individuos pertenecientes á ella, siempre y en todas partes se rijan por las leyes de la misma. Otro tanto puede decirse respecto del estatuto real, la nación se interesa en que los derechos á él referentes se rijan exclusivamente por determinada ley. En definitiva, el derecho público sostiene los preceptos de derecho internacional privado, tanto á estatuto real como á estatuto personal pertenecientes.

30. Después de las observaciones hechas anteriormente sobre el derecho público como el derecho internacional privado lo considera, sin vacilación podemos asentar, que no todo lo relativo á estatuto personal es de derecho público, así como tampoco lo es lo que pertenece al estatuto real; por manera, que multitud de disposiciones á uno y á otro estatuto pertenecientes, dejan de respetarse y cumplirse en el lugar que corresponde.

31. Siendo esto así, quede bien explicado hasta qué punto y cómo sostiene el derecho público las reglas del estatuto personal y del real, esto es, porque casi siempre ó las más veces, los preceptos á ellos referentes con el derecho público se vinculan.

32. Observemos lo que pasa con las obligaciones. Los preceptos relativos á ellas no se vinculan por regla general, con el derecho público de las naciones que los adoptan. Esos preceptos se hallan establecidos principalmente en bien é interés de los particulares y apenas si uno que otro precepto, se halla ligado con el bienestar común, como indispensable para que la sociedad se desarrolle y progrese.

33. Por tanto, compréndese á primera vista la importancia del elemento nuevo que se presenta para decidir los conflictos de leyes. Podrán los interesados sujetarse á la ley que escojan y sea la de la nacionalidad de alguno de ellos ó ya la de la ejecución ó ya cualquiera otra que les plazca.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

34. Limitaciones de este principio quedan indicadas desde luego; el derecho público: primeramente el del lugar en que se contrata, después el del lugar en que ha de llevarse á efecto el contrato, todo según los casos y de acuerdo con el sistema general de solución que se adopte.

35. En consecuencia, la primera regla para decidir los conflictos de leyes á obligaciones pertenecientes, será el respeto á la voluntad de las partes, expresada por palabras claras ó cuando menos que autorizen una interpretación indudable.

36. ¿Si voluntad de las partes no consta, cuál será la ley que rija las obligaciones?

37. Aquí comienzan las opiniones de los autores y de las escuelas.

38. Siguiendo el rumbo indicado, que la naturaleza de la materia consiente, los autores todos están conformes en que á falta de voluntad expresa debe buscarse la presunta, de modo que siempre quede como regla fundamental del derecho de las obligaciones la voluntad de las partes y á falta de voluntad expresa, suponen que la voluntad presunta, se refiere al lugar de la celebración del contrato ó al de su ejecución, sin contar por el momento con detalles sobre competencia judicial, que con una ó con otra ley se relacionan.

39. No sé hasta qué punto hayan debido considerarse forzados los internacionalistas para seguir el camino indicado. Cierto que la voluntad representa elemento principalísimo en la legislación á contratos perteneciente, pero no dominio absoluto; y siendo así, eliminada la primera ley de decisión, que es la voluntad, pudo plantearse el problema del mismo modo que respecto de cualquier otro objeto del derecho. Siempre se ha preguntado cuál es lo justo, lo racional, lo conveniente que rija respecto de estatuto personal y qué lo que deba regir el estatuto real.

40. El interés de los contratantes, permite recurrir á su voluntad como suprema ley, pero señalados los límites de

su jurisdicción, cuando no ha lugar á considerarlo, bien ha podido procederse con el mismo criterio filosófico que para los otros objetos del derecho; sin embargo, se ha extremado la importancia del elemento de la voluntad y si á falta de ella se recurre á ley de la celebración ó á la de la ejecución ó la que sea, es siempre buscando la voluntad presunta, para salvar así el dominio supremo de aquel tan alto principio. Creo que los resultados son idénticos, ya sígase el camino indicado por todos los autores ó bien se adopte el mismo criterio que para los otros objetos del derecho, al buscar la solución de los conflictos de leyes.

41. Ya en la situación expuesta, importa determinar á falta de voluntad expresa cuál es la voluntad presunta y desde luego corresponde examinar la doctrina italiana, condensada en el art. 9º del Código del Reino, comentado por los autores modernos y estrechamente enlazada con las enseñanzas de los glosadores y estatutistas.

42. La doctrina italiana comprende varios casos.

I. Si dos individuos de una misma nacionalidad, contratan en cualquier lugar que sea, se presume que tuvieron voluntad de sujetarse á la ley de su nacionalidad.

II. Si los contratantes no pertenecen á la misma nacionalidad, se presume que quisieron sujetarse á la ley del lugar de la celebración del contrato, pero esto no se extiende á toda la relación jurídica, sino que hay que distinguir, entre el vínculo de derecho, *vinculum juris* y el *onus conventionis*, entre la esencia y la ejecución del contrato, rigiéndose la primera por la ley del lugar de la celebración y la segunda por la ley del lugar de la ejecución, ya sea éste forzoso por razón de la clase de contrato, ya sea accidental ó electivo porque así lo consienta el convenio á discusión.

43. En cuanto á los procedimientos, no se trata de ellos ahora, deben regirse por la ley del lugar en que se verifican, conforme á los principios relativos al estatuto formal.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

44. Presunción es la consecuencia deducida de un hecho cierto y conocido para establecer la verdad de otro desconocido é incierto. No se sabe cuál es la voluntad de las partes y se presume que es la ley de la nacionalidad, porque los contratantes pertenecen á un mismo país.

45. No se sabe cuál es la voluntad de las partes y se presume que es la del lugar en que se encuentran, por lo que mira á la sustancia del acto y en razón de hallarse las mismas en el propio lugar de la celebración.

46. No se sabe la voluntad de las partes y se supone que es, en cuanto á la ejecución del contrato, la ley del lugar de la ejecución, porque la ley de éste debe haberse tenido presente respecto de esa parte de la relación jurídica.

47. En oposición á lo expuesto, buen número de autores sostienen la preponderancia de la ley de la ejecución, como regla general para decidir los conflictos al derecho á las obligaciones pertenecientes.

48. Savigny dice: (§ 370.) "En toda obligación encontramos dos apariencias visibles que pueden servirnos de guía. Toda obligación en efecto, resulta de hechos visibles, toda obligación se cumple por hechos exteriores; unos y otros se verifican necesariamente en un lugar. Así, pues, para determinar el asiento de la obligación y la jurisdicción especial llamada á conocer, de ella, tenemos que elegir entre el lugar en que la obligación nace y el lugar en que se cumple, entre su principio y su fin, considerando el asunto de una manera general. ¿A cuál de estos dos territorios dariamos la preferencia?"

"No será en modo alguno al primero que es en sí un hecho accidental, fugitivo, extraño tanto á la esencia de la obligación como á su desenvolvimiento y á su eficacia ulterior. Si bien el lugar en que la obligación ha nacido tiene á los ojos de las partes una gran importancia, que debía extenderse al porvenir, ésta no resultaría ciertamente del sólo hecho

de la realización del acto, sino de circunstancias exteriores extrañas á este hecho, las cuales justificasen que la esperanza de las partes se dirigía expresamente hacia este lugar."

"No sucede lo mismo con el cumplimiento que se refiere á la esencia de la obligación. En efecto, consiste ésta en hacer cierta y necesaria una cosa antes incierta y sometida al libre arbitrio individual. Ahora bien, lo que llega á ser necesario y cierto, es precisameute el cumplimiento de la obligación; sobre este punto se encuentra la esperanza de las partes: por tanto, es esencial para la obligación, que el lugar del cumplimiento se considere como asiento de la misma y que en este lugar se coloque la jurisdicción especial de ella, en virtud de la sumisión libre."

49. Laurent en su proyecto de revisión del Código Belga, transcribe el párrafo anterior, si bien no lo aprueba. El profesor belga, sustancialmente admite la doctrina italiana, si bien es de notar lo escaso de su doctrina en la materia, condenada en el art. 14 del proyecto y reducida, aparte ciertos requisitos de forma, á establecer que cuando á los jueces no conste la voluntad de los contratantes, deben aplicar la ley nacional, si estos pertenecieren al mismo país, y si así no fuere, que cuiden aquellos de aplicar la ley del lugar en que el contrato se celebra.

50. Mucho se ha discutido respecto de la doctrina Romana sobre la cuestión. La ley 6 de Evict. La ley 21 de oblig. et act. y las leyes 1, 2 y 3 de reb. auct. jud. han sido ampliamente discutidas por Savigny, quien no opina que establezcan diferencias entre el lugar de la celebración y el de la ejecución. Lo contrario juzga Fiore, fundado en respetables autoridades. (Vease Savigny pár. 372 III y Fiore libro II, cap. I segunda edición francesa).

51. Ciertamente no creo fácil pronunciar fallo decisivo sobre el particular; sí consta en el comentario de Bartolo á la ley 1ª del Código de Summ. Trinit. y en multitud

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

de antiguos autores la distinción indicada, por lo que, he encontrado semejanza casi completa, entre la doctrina italiana primitiva sobre derecho internacional privadoen materia de contratos y la establecida por el Cód. Civ. del Reino en 1865.

52. No creo merezca el nombre de jurista, quien menosprecia las enseñanzas del derecho romano; pero de esto á suponer que las necesidades sociales son las mismas que hace diez y siete siglos y que debe legislarse como entonces, hay un abismo.

53. Planteado así el problema, veamos cuál puede ser su más acertada solución, en vista de las dos opiniones enunciadas.

54. Por lo que toca á la presunción fundada en la nacionalidad de las partes y que cuando ésta es la misma supone que á ella y no á otra han querido sujetarse, no tiene á su favor fundamentos sólidos. Parece como esfuerzo supremo y plan preconcebido para sacar avante el principio de la nacionalidad y para darle cabida en materia que por su naturaleza sale de su dominio, para entrar fozosamente en el de la ley real, cualquiera que ésta sea. No repararon los autores que sostienen la presunción que me ocupa, en las complicaciones que suscita en la práctica y que unidas á la poca filosofía de sus fundamentos, traen consigo que sin agravio de la feliz solución del punto á discusión, pueda ser eliminada parte que de tan graves defectos adolece.

55. La presunción favorable á la ley del lugar de la celebración fúndase en que la ley de tal lugar y no otra, es probable que hayan tomado en consideración las partes, para comprometerse; y así es la verdad, sin que negarse pueda que esta segunda presunción, tiene mayor fuerza que la anterior; pero en verdad que no es del todo indudable, necesaria, de modo que forzosamente se deduzca la voluntad de las partes, de sujetarse á la ley de determinado lugar por haberse encontrado en él, al tiempo de celebración del contrato.

56. Si pensaron las partes en que el contrato había de ejecutarse en otro lugar, ¿por qué no suponer que á la ley de este segundo lugar, quisieron someterse y no á la del primero?

57. Recuérdese que no hay voluntad expresa y reflexiónese sobre cuál pueda ser la voluntad de los contratantes en la situación supuesta, y se encontrará que cuando menos hay tanta razón para presumir que la voluntad se inclina á favor de uno como de otro lugar, si no es que como dice Savigny, debe presumirse que la voluntad se dirige hacia el lugar de la ejecución. Dos individuos residentes en Francia, convienen en que el uno pague al otro determinada cantidad en México. ¿A qué ley entendieron sujetarse? á la de Francia, dicen los italianistas; á la de México, dice Savigny y los que siguen sus doctrinas. Hay que confesar que si éstos no tienen razón, cuando menos está muy lejos de ser tan necesaria y lógica como suponen los italianistas, la presunción que sirve de base principal á su sistema.

58. Los defensores de este no proclaman la ley del lugar de la celebración en todo y para todo; sino que distinguen y separan la esencia del contrato de su ejecución, y cualquiera que sea la ley del principio de la obligación y la voluntad presunta de las partes respecto de su esencia, convienen en que no puede extenderse á la ejecución, que por fuerza ha de regirse por ley del lugar en que se lleva á cabo, respecto de la cual se presume también voluntad de las partes interesadas.

59. Parece según ésto como que ceden de su terreno los italianistas en favor de la doctrina contraria y puestos estos antecedentes, conviene estudiar en la práctica, los resultados de una y otra doctrina bosquejadas.

60. Supóngase el caso que se quiera del derecho de las obligaciones. No hay voluntad expresa de las partes, no hay lugar en que forzosamente haya de ejecutarse la obligación por su naturaleza misma. ¿Cómo debe proceder la autoridad

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

que decida el conflicto? Primeramente investigará la nacionalidad de las partes para fijar si esa ley y no otra debe decidir el conflicto. En segundo lugar, tiene que determinarse el lugar de la celebración, lo cual es de inmensa dificultadad cuando se trata de convenios celebrados por conducto de enviados, por cartas, por intermediarios, por telegramas, por teléfono ó por cualquier otro medio semejante; y después de fijado el lugar del contrato, se distingue entre la esencia del mismo y su ejecución, aplicándose después una ú otra ley que corresponda, según lo explicado. En seguida, se atiende á la ley del procedimiento, porque muy bien puede suceder que una sea la ley de la ejecución y otra la del juicio. Si se estipula por ejemplo, pagar en determinada Ciudad, para el consentimiento y la validez de la obligación se tiene en cuenta la celebración, para la mora y los intereses el lugar de la ejecución, y si el cumplimiento del contrato es exigible en otro lugar, donde el reo se encuentre, por domicilio ó accidentalmente, deben tomarse en consideración las leyes de estos últimos lugares, que el juicio y los procedimientos norman.

61. No es poco ardua la tarea del Magistrado que con tales reglas haya de decidir los conflictos que se sujetan á su decisión, comprendiéndose á primera vista toda la inmensa trascendencia de cada uno de los puntos por resolver. No es el momento de transcribir, todas las opiniones acerca de contratos celebrados en dos lugares por correspondencia ó por otro medio; pero quien quiera que no sea profano absolutamente á la ciencia del derecho, convendrá en las dificultades gravísimas que se presentan diariamente para decidir cuál es el lugar donde se perfeccionó la obligación y concurrieron los consentimientos.

62. En cuanto al *vinculum juris* y el *onus conventionis*, no siempre es fácil separarlos con claridad; consentimiento, entrega de la cosa vendida, intereses, cláusula penal, solidaridad, tradición, son otras tantas cuestiones que se discuten

diariamente hasta lo infinito y las diferencias que dividen á los autores, dimanan de la naturaleza misma del asunto, que pertenece indudablemente á los más abstractos de la ciencia jurídica, sujeto á circunstancias mil que en él influyen, sin olvidar que leyes diversas diametralmente opuestas que pueden presentarse, conducen necesariamente á soluciones contradictorias. Agréguese á esto, que las formalidades llamadas habilitantes y muchos puntos de prueba, pertenecen á la esencia de los contratos y no á los procedimientos y se tendrá idea clara de la suma de inconvenientes que en la práctica ofrece el sistema italiano. Tengo para mí, que si un Bartolo ó un Savigny, se tuviere siempre á mano, para desempeñar cada juzgado de aldea, todavía no podría obtenerse una sola sentencia perfecta, dada la multiplicidad de relaciones jurídicas, el desarrollo de las diversas leyes en conflicto y lo complexo de los problemas de derecho internacional privado que se presentan actualmente á la decisión de los magistrados.

63. Y si de los conflictos externos á los internos se pasa, la dificultad sube de punto, no dos sino varias leyes pueden encontrarse en oposición y esto á cada momento, á cada disputa que se lleva ante los tribunales.

64. ¿Y posible será que la justicia verdadera, se sacrifique en aras de discusiones bizantinas sobre natividad, domicilio, esencia del contrato, lugar de la ejecución, del procedimiento y otras que pueden suscitarse?

65. El sistema que proclama la ley de la ejecución del contrato, sin duda ninguna simplifica las dificultades. Simplifica se dirá, pero hiere los derechos del individuo. He aquí la cuestión.

66. Hemos visto que el sistema de la ley de la celebración, descansa en la presunción de ser esa la voluntad de las partes y tal presunción de ninguna manera es necesaria, lo mismo puede presumirse la voluntad de ellas respecto de la ley de la ejecución; paréceme esto indudable, mientras más

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

reflexiono sobre el punto, y siendo así no se vulneran derechos, sino que se respetan y se resguardan, por medio de leyes fáciles en la práctica.

67. El lugar de la nacionalidad no se investiga, tampoco el de la celebración, únicamente el de la ejecución, ésta domina todo, lo mismo lo relativo al cumplimiento de la obligación que á su esencia y sirve de base para la solución de los conflictos sobre obligaciones.

68. Lugar de la ejecución puede ser forzoso por razón de la naturaleza del contrato y puede ser accidental, porque los contratos se celebran para que se respeten como válidos y se cumplan en todas partes. Si el reo se encuentra en un lugar con la cosa ó sin la cosa que debe entregar, puédese perfectamente surtir fuero, conforme á las reglas de competencia de determinado lugar, y en este caso, el contrato en el propio lugar se ejecuta. No por pacto, no por necesidad, sino por accidente y esa ley de la ejecución que es la misma de la competencia, decide á veces de un contrato estipulado en país extraño, sin que jamás pensáran los contratantes en la ley que en definitiva viene á regular sus derechos.

69. Cuando hay voluntad expresa de las partes respecto de la ley que deba regir el contrato, se respeta ésta en cuanto á la esencia y en cuanto á la ejecución. Dos mexicanos celebran en Francia un contrato que ha de ejecutarse en México y lo someten á las leyes de Holanda. Esta voluntad es respetable, se promueve el juicio en México y el Juez aplica la ley Holandesa, con la única taxativa de la ley del procedimiento y del derecho público de México.

70. ¿Con toda esa extensión debe respetarse la voluntad de las partes?

71. Así lo traen consigo los principios aceptados y las doctrinas de los autores. La voluntad de las partes es la ley suprema en materia de contratos, los preceptos de las leyes han sido adoptados en beneficio de las mismas. ¿Qué taxativa tendrá esa voluntad? El derecho público. Dos individuos contraen en Francia y se someten deliberadamente á la ley de México en donde se ha de cumplir la obligación. ¿Cuál derecho público tiene que considerarse? El de México siendo la ley de este país, ley de ejecución y lex fori.

72. Dos individuos contraen en Francia y la ejecución del contrato es forzosa en México, el derecho público de México debe respetarse y ley de la ejecución es lex fori.

73. En el mismo caso, el deudor no puede ser reconvenido en México, porque falte cualquier requisito conforme á las leyes de competencia y sí puede ser demandado en el lugar de su domicilio ó de su residencia accidental. ¿Qué derecho público se respeta? El del lugar de la demanda y la ley de la ejecución, no es lex fori; pues ley de la ejecución está ya determinada por la naturaleza del contrato ó por la voluntad expresa; y respetándose el derecho público del lugar de la competencia también hay que considerar el de la ley de la ejecución forzosa ó pactada, por la que se decide todo lo que con el procedimiento no se liga y que en sus preceptos de derecho público, sirve de límite á la voluntad de las partes.

74. En consecuencia, y por regla general, un solo derecho público, el de la ley de la ejecución; cuando ésta no se confunde con lex fori, derecho público de la ley de la ejecución y de la competencia ó de la lex fori, simplificada la materia hasta donde lo permite su naturaleza complexa. Por regla general un solo derecho público, el de la ley de la ejecución. ¿El derecho público del lugar de la celebración será para siempre proscrito? No lo creo así; habrá que considerarlo en ciertos casos excepcionales, pero no constantemente, como en el sistema italiano. En éste siempre y por siempre dos derechos públicos, el de la celebración y el de la ejecución, sin contar con el del lugar de los procedimientos.

75. Son de tanta dificultad las apreciaciones que con el

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

derecho público se relacionan, que no conceptúo la última de las ventajas del sistema que propongo, la eliminación de factores, como el último á que he hecho referencia y que hacen casi imposible en la práctica, la solución de los conflictos.

76. Voluntad expresa de las partes, no hay, pero el contrato debe tener forzosa ejecución en determinado lugar, como sucede con la entrega de una casa ó de una negociación mercantil y la ley de la ejecución forzosa es la que domina la materia. ¿La domina como voluntad presunta de las partes ó porque á falta de voluntad expresa la ley dispone?

77. Nótese que la escuela italiana procede de este modo: á falta de voluntad expresa, es voluntad presunta la del lugar de la celebración y la de la ejecución, la primera para la esencia, la segunda para el cumplimiento; pero sostenidas ambas leyes por la voluntad presunta.

78. Adoptado el principio de la ley de la ejecución siempre que no hay voluntad expresa ha de seguirse la ley de la ejecución que todo lo domina y esa ejecución forzosa ó accidental, no significa voluntad presunta de las partes, como en el sistema italiano.

79. Regla general indudable es en materia de contratos que la voluntad forma la suprema ley, pero cuando ella no existe, parece que se han respetado sus fueros y hay que atenerse á las disposiciones de la ley. Estas, dice la escuela italiana, deben tener el carácter de toda disposición sobre contratos, es decir, respetar sobre todo la voluntad; y por esto, las disposiciones legales se refieren á una voluntad presunta, que determina la absoluta preponderancia de elemento tan cardinal. En suma, no se dice que cuando el individuo nada estipule la ley determina, sino que se busca todavía la voluntad y en tanto ella se presume, le prestan su apoyo las disposiciones de la ley.

80. El sistema italiano respeta hasta el extremo el principio de la voluntad, no así el sistema que se le opone. A favor de éste pudiera invocarse la unidad de sistema y criterio, tan útil en toda investigación filosófica; por lo demás, como dejo arriba observado tanto uno como otro sistema indicados, conducen á resultados idénticos.

81. En resumen, el sistema de la ley de la ejecución, considerado en abstracto, responde tanto ó más que el italiano á las exigencias de una sana filosofía y en la práctica le asisten incomparables ventajas respecto del primero.

82. Casi todas las dificultades de aplicación desaparecen y el que á veces se confunda ley de la ejecución con *lex fori*, ni es defecto, ni deja de acontecer con el sistema italiano, cuando se trata de que la ley de la ejecución se respete en todo lo que atañe al cumplimiento de la obligación, cumplimiento que puede exigirse conforme á diversas reglas de competencia.

83. He dicho que estas pueden llegar hasta hacer responsable al individuo en cualquier lugar que se le encuentre. No es mi ánimo tratar ahora estas cuestiones secundarias, pero cualquiera que sea la extensión que se dé á la competencia, ningún inconveniente hay en que las respete la ley de la ejecución.

84. Leyes de competencia opuestas ó contradictorias, en cuestiones externas, pueden conducir á conflictos sin sobreción, del mismo modo que leyes de fondo. Leyes de competencia, de ese genero, internas, no deben existir.

85. Todo contrato será exigible en todas partes y las más veces conforme á la ley en que se pone la demanda, esto es hacedero y fácil en la práctica. Derechos de nadie se conculcan y menos cuando leyes especiales lo establezcan por modo igual para todos y que en las costumbres de los individuos se infiltren.

86. El sistema se recomienda por sí mismo para los conflictos internos y á poco de establecido, fácil será que por modo perfecto las partes estipulen lo necesario en los con-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

tratos, para la salva guardia de sus derechos, lo cual hoy por hoy es poco menos que imposible.

87. Cualesquiera que sean las disposiciones sobre competencia que se adopten y de que me ocuparé en lección posterior, el domicilio del demandado tiene que ocupar preferentísimo lugar. Lugar convenido, lugar de la ejecución forzosa, lugar del domicilio del demandado, de su residencia accidental y de la ubicación de la cosa, son los elementos obligatorios de toda ley de competencia y el primer papel entre ellos corresponde sin duda al domicilio; y he aquí como la ley del domicilio que de la ejecución del contrato resulta, vendrá á resolver en multitud de casos los conflictos sobre obligaciones.

88. De la solución propuesta para estos conflictos deduje en la anterior lección argumentos en favor del fuero del domicilio, para resolver los conflictos de estatuto personal. Domicilio para las obligaciones, para las cosas, para las personas, todo se reduce á un sistema homogéneo, cierto y que evita toda clase de dificultades, y ese sistema depende de hechos materiales indudables como la residencia habitual, la presencia del individuo en determinado lugar, cuyas autoridades aplican sus propias leyes. No creo que tan altos bienes sean de despreciarse, principalmente respecto de conflictos internos en que la adopción de un sistema erróneo podría conducir casi á una completa desorganización y por esto, ajustándome á los principios que todo legislador debe tener presentes y sin perder de vista las lecciones de la experiencia, proclamo las reglas que anteceden y que difícil y cuidadoso desarrollo exigen. Por lo demás, ellas concuerdan y se derivan de los principios fundamentales de la ciencia, tales como han quedado expuestos en lecciones anteriores.

LIC. J. ALGARA.

NOTA.—Aunque no es mi ánimo tratar aquí cuestión ninguna de legislación actual mexicana, relativa al derecho internacional privado, haré brevísima reminiscencia de algunas disposiciones vigentes, que vienen á significar cuál es el lugar de la ejecución de los contratos y que mucho importa por consiguiente tener presentes,

por cuanto á que son reglamentarias del principio de la ley de la ejecución, ley que según se sostiene en esta lección, debe ser la que rija como principal, en materia de obligaciones.

El art. 16 del Código Civil del Distrito, enseña que toda obligación que nazca de contratos otorgados en el extranjero por mexicanos, debe regirse por ley mexicana, en caso de que dichos contratos deban ejecutarse en México.

Conforme al art. 17 del mismo Código, si los contratantes no son mexicanos sino extranjeros, ó cuando menos uno de ellos es extranjero, pueden elegir ley extranjera respecto del contrato que se ejecute en México y por cuanto toca á bienes muebles; pero si no eligen ley extranjera ó se trata de inmuebles, ley mexicana será la que rija la relación jurídica.

Algunas otras disposiciones secundarias pudieran citarse del Código Civil sobre sociedad conyugal y del Código de Comercio, sobre compañías extranjeras, letras de cambio, quiebras y contratos celebrados por correspondencia.

Ninguna de esas disposiciones deja suponer la distinción entre el *vinculum juris* y el *onus conventionis*, sino que se refieren á la ley de la ejecución, que ha de normar todo lo relativo á los litigios que se susciten sobre interpretación y cumplimiento de los contratos.

El mismo Código Civil del Distrito, contiene algunos otros artículos sobre los que debe fijarse la atención. El art. 25 que dispone que todo mexicano ó extranjero residente en México, puede ser demandado en el país, por obligaciones contraídas dentro ó fuera de la República.

Aunque no residan en ella, dice el art. 26, pueden ser requeridos ante los tribunales mexicanos, todo mexicano ó extranjero que en el país tenga bienes afectos á las obligaciones contraídas ó cuando éstas deban tener su ejecución en la República.

Es de observarse que se trata siempre de la ley de la ejecución, como que comprende todo lo relativo á la relación jurídica, sin hacer distinción entre la esencia y la ejecución de los contratos.

El art. 1,520 del repetido Código, contiene disposiciones notables por más de un título, dice así:

"Fracción I. "Si el objeto de la obligación es un mueble determinado, el pago se hará en el lugar en que el objeto se hallaba al celebrarse el contrato."

"Fracción II. "En cualquier otro caso, preferirá el domicilio del deudor, sea cual fuere la acción que se ejercite."

"Fracción III. "A falta de domicilio fijo, preferirá el lugar donde se celebró el contrato, cuando la acción sea personal, y el de la ubicación de los bienes, cuando la acción sea real."

Concordantes con estas disposiciones son las del Código de procedimientos Civiles del Distrito, en sus arts. 154 y 185 á 209. No puedo hacer un análisis de todas ellas; pero baste observar, que designan como lugar para la ejecución de un contrato el señalado para su cumplimiento, á falta de éste, el del domicilio del deudor y á falta de domicilio fijo, el del lugar de la celebración del contrato cuando la acción sea personal y el de la ubicación de la cosa, cuando la acción sea real.

Como el art. 27 del Código Civil citado, en ciertos casos reputa domicilio la residencia, el Código de Procedimientos Civiles del Distrito, enseña en su art. 209, que esa residencia ha de ser de seis meses, al menos.

El Código de Comercio en su art. 114 y relativos, concuerda con las disposiciones de los Códigos Civil y de Procedimientos citados.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

El Código de Procedimientos Federales, de Octubre 6 de 1897, contiene disposiciones de la mayor importancia sobre la materia de competencia.

En su art. 93 establece que todo juicio federal debe promoverse y seguirse ante el juez designado para el cumplimiento de la obligación y advierte que se surte fuero no solo para ese cumplimiento, sino para la rescisión y nulidad del contrato. Como éstos puntos pertenecen indudablemente á la esencia del contrato, no parece que admite la distinción entre ésta y la ejecución del mismo contrato.

Establece después otros modos de surtirse fuero, concordantes con los artículos citados del Código Civil del Distrito; contiene por último en su art. 26 una disposición de la mayor entidad, puesto que ordena que para determinar el domicilio de una persona, se estará á lo dispuesto por el Código de Comercio y en su caso por el Código Civil del Distrito Federal.

Este Código por consecuencia, en la parte citada es federal y cualesquiera disposiciones de Códigos especiales de Estados sobre la materia, quedan subalternadas á él.

Antes de este Código, cuando dos Códigos de Estados diferían entre sí aunque reconociendo el principio del domicilio, no encontraba la Suprema Corte, encargada de resolver las competencias, entre tribunales de diversos Estados, criterio seguro para dirimir la contienda, hoy sí, porque hay ya regla general que á todos los Estados obliga y los que á ella no se sujeten, verán claudicar sus reglas particulares.

En la lección anterior, sostuve que si el domicilio había de proclamarse como principio para la resolución de los conflictos de leyes internos, forzoso era adoptar disposiciones federales sobre domicilio.

De incierta constitucionalidad el punto, aunque no para mí, y resuelto como se halla en el sentido de mi indicada opinión, siguiendo el texto del Código Civil del Distrito, no es dudoso ya cuál es el domicilio de cualquier individuo, Corporación ó Sociedad establecida en la República, y por este motivo, se podrá ya señalar siempre con fijeza el lugar de la ejecución del contrato, ejecución cuya ley ha de regir todo lo perteneciente al mismo contrato.

Además del lugar del domicilio, quedan sobradamente resguardados el lugar de la ejecución forzosa del contrato, el de la ejecución voluntaria por designación de las partes y el de la ejecución por ubicación de la cosa; de tal modo, que casi siempre ley de la ejecución será la del fuero, sin perjuicio de que se presente á veces el caso de que sea una la ley de la ejecución y otra la del fuero.

Todas estas singularidades son propias del sistema de la ley de la ejecución, como bien advertido queda en el cuerpo de la lección á que pertenece esta nota, y si á esto se agrega, que disposiciones de fondo, como son las de los arts. 16 y 18 del Código del Distrito, declaradas federales, se inclinan á favor del sistema de la ley de la ejecución, se comprenderá que todos los precedentes jurídicos de la legislación de México, no solo apoyan y favorecen las opiniones por mí expuestas, sino que casi hacen imposible la adopción de otro sistema.

No considero definitivas las disposiciones del Código Civil del Distrito declaradas federales, sino por el contrario transitorias y de ninguna manera dignas de elogio; por tal modo, que pudiera más adelante adoptarse el sistema italiano contrario al de la ley de la ejecución, pero si así fuese, cuando menos nunca habría que perder de vista, que necesario era concordar con él, las disposiciones citadas en esta nota, favorables al sistema opuesto y que indican el espíritu de nuestra legislación á medida que va extendiéndose á todos los diversos ramos que debe abrazar, por mucho que aun falte la ley general, que adopte determinados principios de derecho internacional privado, para la solución de conflictos externos ó internos.

EL DELITO DE RESISTENCIA.

Defensa producida por el Lic. Cárlos Diaz Infante en la causa instruida contra el Señor Don Andrés Boleaga.

L'ivresse, lorsqu' elle est complète, est une véritable aliénation, passagère il est vrai, mais qui n'exclut pas moins pendant sa durée l'exercice de la raison.

[Briand y Chaudé. Manuel de Médicine Légale. Tom. II, pág. 134.]

Señor Juez 1º de Letras:

Procesado el Señor D. Andrés Boleaga por el delito de resistencia á los agentes de la autoridad, quiso que un patrocinio tan débil como el mío, fuera el encargado de llevar en su causa la voz de su justificación y defensa; cargo que no vacilé en aceptar debido á que, si bien él implica el desempeño de una difícil y penosa tarea cuando se aboga por un verdadero criminal, ó por un inocente; pero ante funcionarios poco escrupulosos en el cumplimiento de sus deberes, tal cargo deja de revestir dichos caracteres para trocarse en fácil y grata tarea, cuando, como en el presente caso, se aboga por un acusado irresponsable del delito que se le imputa y ante funcionarios tan respetables por su rectitud como por su competencia y capacidad.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

El Código de Procedimientos Federales, de Octubre 6 de 1897, contiene disposiciones de la mayor importancia sobre la materia de competencia.

En su art. 93 establece que todo juicio federal debe promoverse y seguirse ante el juez designado para el cumplimiento de la obligación y advierte que se surte fuero no solo para ese cumplimiento, sino para la rescisión y nulidad del contrato. Como éstos puntos pertenecen indudablemente á la esencia del contrato, no parece que admite la distinción entre ésta y la ejecución del mismo contrato.

Establece después otros modos de surtirse fuero, concordantes con los artículos citados del Código Civil del Distrito; contiene por último en su art. 26 una disposición de la mayor entidad, puesto que ordena que para determinar el domicilio de una persona, se estará á lo dispuesto por el Código de Comercio y en su caso por el Código Civil del Distrito Federal.

Este Código por consecuencia, en la parte citada es federal y cualesquiera disposiciones de Códigos especiales de Estados sobre la materia, quedan subalternadas á él.

Antes de este Código, cuando dos Códigos de Estados diferían entre sí aunque reconociendo el principio del domicilio, no encontraba la Suprema Corte, encargada de resolver las competencias, entre tribunales de diversos Estados, criterio seguro para dirimir la contienda, hoy sí, porque hay ya regla general que á todos los Estados obliga y los que á ella no se sujeten, verán claudicar sus reglas particulares.

En la lección anterior, sostuve que si el domicilio había de proclamarse como principio para la resolución de los conflictos de leyes internos, forzoso era adoptar disposiciones federales sobre domicilio.

De incierta constitucionalidad el punto, aunque no para mí, y resuelto como se halla en el sentido de mi indicada opinión, siguiendo el texto del Código Civil del Distrito, no es dudoso ya cuál es el domicilio de cualquier individuo, Corporación ó Sociedad establecida en la República, y por este motivo, se podrá ya señalar siempre con fijeza el lugar de la ejecución del contrato, ejecución cuya ley ha de regir todo lo perteneciente al mismo contrato.

Además del lugar del domicilio, quedan sobradamente resguardados el lugar de la ejecución forzosa del contrato, el de la ejecución voluntaria por designación de las partes y el de la ejecución por ubicación de la cosa; de tal modo, que casi siempre ley de la ejecución será la del fuero, sin perjuicio de que se presente á veces el caso de que sea una la ley de la ejecución y otra la del fuero.

Todas estas singularidades son propias del sistema de la ley de la ejecución, como bien advertido queda en el cuerpo de la lección á que pertenece esta nota, y si á esto se agrega, que disposiciones de fondo, como son las de los arts. 16 y 18 del Código del Distrito, declaradas federales, se inclinan á favor del sistema de la ley de la ejecución, se comprenderá que todos los precedentes jurídicos de la legislación de México, no solo apoyan y favorecen las opiniones por mí expuestas, sino que casi hacen imposible la adopción de otro sistema.

No considero definitivas las disposiciones del Código Civil del Distrito declaradas federales, sino por el contrario transitorias y de ninguna manera dignas de elogio; por tal modo, que pudiera más adelante adoptarse el sistema italiano contrario al de la ley de la ejecución, pero si así fuese, cuando menos nunca habría que perder de vista, que necesario era concordar con él, las disposiciones citadas en esta nota, favorables al sistema opuesto y que indican el espíritu de nuestra legislación á medida que va extendiéndose á todos los diversos ramos que debe abrazar, por mucho que aun falte la ley general, que adopte determinados principios de derecho internacional privado, para la solución de conflictos externos ó internos.

EL DELITO DE RESISTENCIA.

Defensa producida por el Lic. Cárlos Diaz Infante en la causa instruida contra el Señor Don Andrés Boleaga.

L'ivresse, lorsqu' elle est complète, est une véritable aliénation, passagère il est vrai, mais qui n'exclut pas moins pendant sa durée l'exercice de la raison.

[Briand y Chaudé. Manuel de Médicine Légale. Tom. II, pág. 134.]

Señor Juez 1º de Letras:

Procesado el Señor D. Andrés Boleaga por el delito de resistencia á los agentes de la autoridad, quiso que un patrocinio tan débil como el mío, fuera el encargado de llevar en su causa la voz de su justificación y defensa; cargo que no vacilé en aceptar debido á que, si bien él implica el desempeño de una difícil y penosa tarea cuando se aboga por un verdadero criminal, ó por un inocente; pero ante funcionarios poco escrupulosos en el cumplimiento de sus deberes, tal cargo deja de revestir dichos caracteres para trocarse en fácil y grata tarea, cuando, como en el presente caso, se aboga por un acusado irresponsable del delito que se le imputa y ante funcionarios tan respetables por su rectitud como por su competencia y capacidad.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Y conste, Señor Juez, que estas dos últimas aserciones, no son frases vanas y desprovistas de fundamento: lo tienen. El Juzgado dá una prueba cuotidiana de la primera en todos los fallos que pronuncia, y el Ministerio Público en esta misma causa acaba de dar otra irrecusable, retirando su requisitoria de 23 de Noviembre último, en que pedía se le impusiera al acusado la pena de dos años cinco meses de prisión y una multa de veinticinco pesos, sustituyéndola por la que lleva la fecha del día 25 del mes en curso; requisitoria ésta en que el Señor Agente del Ministerio Público, llega á una conclusión contraria á la sustentada en la anterior, en virtud de la jurídica, concienzuda y á todas luces legal apreciación que en la misma hace, con su habitual maestría, de las pruebas rendidas durante el plenario por la Defensa. Las alegaciones que en seguida voy á producir en favor del procesado, contendrán la demostración y prueba de la otra de aquellas aserciones, esto es, que el Sr. Boleaga es irresponsable del delito que se le atribuye.

Dada la bondad de la causa que patrocino, mi cometido no ofrece ningunas dificultades; así, aunque en el curso de esta defensa no dejaré de apurar todas las razones legales que existen en favor de la irresponsabilidad del acusado, lo haré, sin embargo, con la debida concisión, concisión á la que sujetaré igualmente la relación de los hechos que han dado origen á la formación de este proceso.

I.

A las once de la mañana del día 18 de Julio último, llegó el Sr. D. Andrés Boleaga á la cantina conocida en esta ciudad con el nombre de «El Canastillo de Flores,» y desde aquella hora, contra su costumbre y en unión de diversas personas, unas veces invitado y otras invitando, principió á ingerir grandes cantidades de bebidas embriagantes, tales como cognac, ajenjo, champagne y cerveza, tarea en la que persistió casi sin interrupción durante todo el día, de tal suerte que, á las siete de la noche fué conducido en estado de embriaguez completa, por el Sr. D. Adolfo Torres, de otra cantina «El Palacio de Cristal,» á su casa habitación.

Ya en su casa el Sr. Boleaga, sin cambiar el traje de paseo que traía por el de *charro* y solo sí el sombrero por uno del mozo Anastasio Jaso, le ordenó á éste que le trajera su caballo y después de montarlo ayudado por el mismo Jaso porque no pudo hacerlo por sí solo, se dirigió en compañía del caporal Rosalío González para su hacienda. Precisamente por el estado de embriaguez tan completa en que se encontraba, obligó á González, antes de abandonar la ciudad, á que se tomara un vaso de mezcal, vino del que él mismo tomó algunos sorbos. Mas al llegar á los suburbios de la población en el estado delirante en que tanto él como González se hallaban, éste último debido al mezcal que se vió obligado á tomar, ambos tuvieron una reyerta con los gendarmes Santiago Vera y Cecilio Martínez, reyerta en la que el caporal Rosalío González recibió once lesiones, algunas de ellas de bastante gravedad, y el gendarme Vera otra en la cabeza que no puso ni pudo poner en peligro su vida; reyerta que igualmente ocasionó que el Sr. Boleaga y González fueran reducidos á prisión y consignados á disposición de ese Juzgado, bajo la imputación del delito de resistencia á los agentes de la autoridad.

Sobre el motivo y términos en que tuvo su verificativo la contienda habida entre los acusados y los gendarmes Vera y Martínez, el proceso ofrece tres versiones distintas.

Vera refiere: Que el 18 de Julio anterior como á las ocho de la noche, hallándose de servicio en el jardín del barrio conocido en esta ciudad con el nombre de «Arriba,» fué in-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

formado por dos niños desconocidos, que dos individuos causaban escándalo por la «Garita del Norte,» tratando de maltratar á todas las personas que transitaban por dicho lugar: Que en vista del aviso, se dirigió en compañía del gendarme Cecilio Martinez al sitio indicado por los niños, y una cuadra antes de llegar al mismo, se encontraron con el Sr. Boleaga y con González, los dos bastante ebrios y montados á caballo: Que al hablarles, ambos se le hecharon encima, Boleaga armado de un sable y González de un puñal, por cuyo motivo el declarante tomó por las riendas el caballo de González y el gendarme Martinez procuró desmontarlo, infiriéndole para ello golpes con el bastón que usan: Que en este acto se le acercó el Sr. Boleaga, y con el sable que traía le dió un golpe hiriéndolo en la cabeza, echando en seguida á huir: Que tanto él como Martinez, ocurrieron luego en persecución de Boleaga, logrando aprehenderlo hasta frente á la casa de D. Jesús Ramírez, en virtud de que aunque hizo fuego con su pistola sobre el prófugo por seis veces consecutivas, con ninguno de los disparos logró hacer blanco.

Martínez declara: Que la noche de que se trata, al ocurrir en unión del gendarme Santiago Vera, á cerciorarse de lo que ocurría por la «Garita del Norte,» pues había sido informado por dos niños que en dicho lugar causaban escándalo unos individuos, el declarante y su compañero encontraron media cuadra antes de llegar al sitio mencionado, á Rosalío González quien con una reata les pegaba á varios individuos: Que al verlos, González se les hechó encima tirándoles reatasos y tratando de lazarlos, razón por la que, tanto el declarante como Vera le infirieron varios golpes con sus bastones, no consiguiendo dominarlo porque se resistía mucho: Que en este momento llegó el Sr. Boleaga, que andaba por la «Garita del Norte» pegándoles con un sable á todos los que pasaban, y con la misma arma le infirió un golpe al gendarme Vera, causándole una lesión en la cabeza: Que en vista de esto hicieron fuego con sus pistolas sobre Boleaga, quien entonces echó á huir, pero perseguido por ellos fué capturado frente á la casa de D. Jesús Ramírez, donde se entregó y dejó conducir preso sin oponer resistencia.

El Sr. Boleaga en su declaración indagatoria dice: Que el día 18 de Julio, ya de noche y en estado de suma embriaguez, lo que le impide recordar con precisión los hechos, se dirigió de esta ciudad para su hacienda «La Primavera» acompañado de un caporal de la misma, de nombre Rosalío González: Que ya en las afueras de la ciudad, notó que González se había rezagado, y al volver en su busca lo encontró en poder de unos gendarmes que lo golpeaban: Que habló á los agentes de la autoridad para que no siguieran maltratando á González, pero que lejos de escucharlo hicieron fuego con sus pistolas, lo que motivó que para defenderse le infiriera un golpe á uno de ellos, echando á huir en seguida: Que voluntariamente se detuvo frente á la casa de D. Jesús Ramírez, donde de igual manera esperó á los gendarmes para que lo aprehendieran, lo que en efecto hicieron siendo reducido á prisión.

Existe también en autos la versión que de los propios sucesos que vengo refiriendo, hace el testigo Lino Juárez, pero me abstengo de reproducirla en obsequio á la brevedad, y porque en el curso de esta defensa tendré ocasión de citarla por extenso.

Narrados, Señor Juez sucintamente, pero con entera sujeción á lo que aparece de las constancias de autos, los antecedentes que originaron la instrucción de este proceso; antes de formular las apreciaciones jurídicas á que se prestan tales antecedentes, sólo haré observar al Juzgado: que dichas apreciaciones tienen que ser rigurosas, concluyentes y favorables al acusado, en atención á estas dos circunstancias: á la variedad ó disconformidad que se nota en las declaraciones de los

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

gendarmes aprehensores, y á que una parte de los hechos referidos, no han podido ser ni contradichos, ni destruidos por prueba alguna en contrario. Aludo á los hechos que acreditan la conducta inteperante, que desgraciada y accidentalmente observó el Sr. Boleaga el día 18 de Julio anterior, y al estado de embriaguez completa que guardaba al dirigirse para su hacienda la noche del mismo día.

II

La formidable acusación que pesa sobre mi defenso, me obliga á no retardar por más tiempo la afirmación categórica de la proposición ó tesis cuya demostración constituye el objeto capital de esta defensa.

Esa proposición se reduce á afirmar como afirmo: *Que el Sr. D. Andrés Boleaga, no ha perpetrado el delito de resistencia á los agentes de la autoridad que se le imputa; pero aún suponiendo sin conceder que así fuera, es irresponsable criminalmente de dicho delito, en virtud de haber obrado al infringir la ley penal, en estado de embriaguez completa que lo privó enteramente de la razón.*

Antes de proceder á la demostración de cada una de las partes de que se compone la anterior proposición, séame permitido suplicar al Juzgado se sirva consagrar toda su atención á los razonamientos que, fundados en la ley y en la doctrina de los mejores autores, contienen la referida demostración.

***

Las disposiciones del Código Penal que se suponen infringidas por el Sr. Boleaga, son las contenidas en los artículos 887 y 889, artículos que respectivamente dicen: «Será

castigado con dos años de prisión y multa de segunda clase, el que empleando la fuerza, el amago ó la amenaza, se *oponga* á que la autoridad pública ó sus agentes *ejerzan* alguna de sus funciones ó *resista* el cumplimiento de un *mandato legítimo* ejecutado en la *forma legal.*» «Si la resistencia se hiciere empleando armas, ó por más de tres y menos de diez individuos, ó los culpables consiguieren su objeto, se aumentarán seis meses de prisión por cada una de estas circunstancias.»

La sóla lectura del citado art. 887 del Código Penal, es bastante para hacer comprender que para que exista el delito de resistencia que el mismo castiga, son indipensables la reunión de estas tres circunstancias: primera, el empleo de la fuerza, el amago ó la amenaza; segunda, oponerse ó resistir por dichos medios á la autoridad pública ó á sus agentes; y tercera, la manifestación de esa oposición ó resistencia, por los indicados medios, en el momento en que la autoridad pública ó sus agentes ejercen sus funciones ó bien intiman un mandato legítimo ejecutado en la forma legal.

Ahora bien: ¿en el caso, los actos imputados al Sr. Boleaga bajo el nombre de resistencia reunen las anteriores condiciones? El examen que voy á hacer de las constancias procesales para contestar esta interrogación, espero que convencerá al ánimo judicial de que tal contestación debe formularse en sentido negativo.

Desde luego: ¿en qué sentido infringió el Sr. Boleaga el art. 887 del Código Penal? *¿oponiéndose* á que los agentes Vera y Martínez *ejercieran* sus funciones ó *resistiendo* un *mandato legítimo* de éstos ejecutado en la forma legal? La causa no ofrece una prueba perfecta para decidir de cuál de esos dos modos ó maneras infringió el Sr. Boleaga la disposición legal citada, y si no ofrece esta prueba, es obvio que no aparece comprobada la existencia de la violación de la disposición legal de que se trata, supuesto que no hay prue-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

ba bastante para decidirse por uno de estos dos extremos: ó bien que el Sr. Boleaga se *opuso* á que los referidos agentes ejercieran sus funciones, ó bien que *resistió* un mandato legítimo emanado de los mismos.

Según lo declarado por el gendarme Vera, el Sr. Boleaga *resistió* el cumplimiento de su mandato, pues asegura que al hablarles él y su compañero Martínez á Boleaga y González, éstos se *les echaron encima;* y según las atestaciones del referido Martínez, resulta, que Boleaga se *opuso* ó trató de oponerse á que el propio Martínez y Vera *ejecutaran* la *aprehensión* de González, pues afirma este gendarme, que cuando trataban de reducir al orden á González *llegó* Boleaga é hirió á Vera. Ante estas dos afirmaciones singulares ¿qué decidir? Que no hay prueba válida y eficaz acerca de la existencia del delito de resistencia imputado á mi defenso, pues conforme á lo dispuesto en el art. 301 del Código de Procedimientos Penales, el dicho de un solo testigo es insuficiente para probar plenamente.

En esta virtud, si la causa no arroja datos bastantes para resolver con entera certidumbre legal, que el Sr. Boleaga infringió de alguna de las dos maneras ó modos en que puede serlo, el art. 887 del Código Penal, el Juzgado tiene forzosamente que aceptar como cierta y evidente, la primera parte de la proposición cuya demostración me he impuesto en esta defensa, esto es, que el Sr. Boleaga no ha perpetrado el delito que se le imputa, supuesto que no aparece de autos probada la existencia y realidad de ese delito.

Y que no se diga como lo hace el señor Agente del Ministerio Público en su requisitoria de 23 de Noviembre último, que la discrepancia en las atestaciones de los gendarmes Vera y Martínez nada significa con relación á su validez y fuerza probatorias, en virtud de que tal discrepancia solo se refiere á los accidentes pero no á la sustancia del hecho imputado al Sr. Boleaga, porque tal aseveración carece de fundamento. En efecto, dada la clase del delito que se persigue, éste puede revestir en su comisión, según lo expresa el artículo 887 del Código Penal, dos modalidades: por lo mismo, todas las diligencias que en esta causa tienden á establecer el modo ó términos en que fué violada la citada disposición legal, tienen forzosa y naturalmente que referirse á la *sustancia* y no á los accidentes del hecho, porque tienden á comprobar el *modo de ser*, es decir, la *esencia* ó *naturaleza* del mismo hecho. Mas en el caso, las declaraciones de los gendarmes Vera y Martínez, desempeñan este doble oficio ó función: sirven á la vez que para comprobar la existencia del delito imputado al Sr. Boleaga para comprobar la delincuencia de este mismo señor; y precisamente la discrepancia de las declaraciones en cuestión se refiere al primer oficio ó función, esto es, al *modo de ser* del hecho criminoso; en consecuencia, la discrepancia de que se trata afecta no á los accidentes sino á la *sustancia*, á la *esencia* del hecho mismo de que se dice responsable al acusado. Si esto es así, queda en pie la afirmación que antes he hecho, que de autos no aparece comprobada con la debida plenitud, la existencia del delito de resistencia atribuído al Sr. Boleaga.

Se dirá entonces que el testimonio de Lino Juárez, único testigo presencial de parte de los sucesos que han motivado la detención y la encarcelación de mi defenso, viene á subsanar el defecto en que se apoya la crítica que he hecho de las atestaciones de Vera y Martínez, supuesto que el referido testimonio unido á cualquiera de dichas atestaciones, forman por su unión y conjunto prueba plena acerca de la existencia del delito cuya existencia he negado. Mas no sucede así, porque á su vez el testimonio de Juárez es también singular y único, pues no concuerda ó es conteste con ninguna de las mencionadas atestaciones. Para probarlo basta transcribir lo declarado por Juárez. Dice textualmente este testigo: "Que el Domingo último hizo ocho días,—su declaración

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

es de 30 de Julio anterior—salió de su casa para comprar un mandado, como á las ocho de la noche, y al salir se encontró con D. Andrés Boleaga y un mozo suyo, que andaban á caballo, bastante ébrios pero en su conocimiento, é inmediatamente que lo vieron se le echó encima el mozo tirándole un lazo que no le cayó, en los momentos en que llegaron dos serenos, y entonces lo dejaron á él y se les echaron encima á ellos, no viendo el declarante lo que pasó después porque estaba muy asustado y se metió á su casa.....»

Como se ve, esta declaración no concuerda con la de Vera, porque éste nada dice de que al ir en busca de Boleaga y de González, encontrara que el último ejecutaba los actos que refieren Juárez y Martínez, y no es conteste con la de éste, porque tal testigo afirma que al encontrar á González no estaba con él Boleaga como lo aseguran Vera y Juárez, sino que se hallaba en la «Garita del Norte,» es decir, á distancia de una cuadra. De donde resulta, que el dicho ó testimonio de Juárez no puede darles á los de Vera y Martínez, la fuerza probatoria de que carecen; pues así como no es posible sumar cantidades parciales heterogéneas para formar una mayor, de igual manera el testimonio de varios testigos que no concuerdan en sus declaraciones acerca de la sustancia de los hechos sobre que deponen, no puede unirse para formar una prueba perfecta con dichos testimonios. Todos estos testimonios permanecen singulares y aislados desde el momento en que no son contestes, y tan nulo é ineficaz para probar es el dicho de uno, como el de diez, como el de cien testigos singulares, porque la ley á lo que le dá y presta fe y crédito es al dicho uniforme y conteste cuando menos de dos testigos idóneos.

Mas aparto y borro de esta defensa todos los anteriores razonamientos, y concedo que se unan y adicionen los testimonios de Vera, Martínez y Juárez. ¿Qué es lo que resulta de autos probados, analizados los testimonios de esos testigos

en el sentido que acabo de indicar? Fácil es decirlo: por el testimonio de Martínez unido en lo que concuerda con el de Juárez, aparece plenamente probado que González causaba escándalo en la vía pública la noche del 18 de Julio último, tratando de lazar al referido Juárez; por el testimonio de este mismo testigo unido en lo que concuerda con el de Vera, aparece plenamente probado que al llegar este testigo y Martínez al lugar á donde se encontraban Boleaga y González y hablarles, ambos se les echaron encima, es decir, opusieron resistencia á su mandato.

¿Pero esta resistencia es punible? para resolver con el debido acierto jurídico esta cuestión, preciso es recurrir al examen de si tal resistencia reune las tres condiciones ó requisitos de que antes hablara, y que conforme al art. 887 del Código Penal constituyen el delito de resistencia que el mismo define y pena.

Procedo, pues, al referido examen y quiero suponer, porque las constancias procesales no permiten otra cosa, que al hablarles los gendarmes Vera y Martínez á Boleaga y González, les hayan intimado una orden, un mandato propio de su encargo; suposición ésta que es desfavorable á mi defenso, en razón de que si no hubo ese mandato, podría por parte del Sr. Boleaga haber habido la comisión del delito de lesiones, si se quiere del de ultrajes, pero no del que se le atribuye, porque para que haya resistencia precisa antes que nada que haya mandato ú orden que resistir. Bajo el imperio de esta suposición pregunto: ¿fué en el caso, el mandato supuesto legítimo ó legal? Inconcusamente que, con relación al Sr. Boleaga careció en lo absoluto de tal cualidad ó condición, pues según el testimonio de Vera y de Juárez, en realidad el acusado aunque en estado de suma ebriedad no causaba escándalo, quien cometía esta falta prevista y penada en la fracción 1ª del art. 1,028 del Código Penal, era González que trataba de lazar á Juárez; luego los gendarmes Ve-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

ra y Martínez al único que les era dado intimar un mandato, cualquiera que él fuera y en cumplimiento de sus deberes como guardianes del orden y tranquilidad públicas, era á González y no al Sr. Boleaga. Es cierto que Martínez afirma que este señor causaba escándalo semejante al de González, pero además de que su dicho no puede ser mejor que los de Juárez y de Vera unidos, su atestación no merece crédito en virtud de los términos mismos en que está concebida, pues no es posible creer, por la imposibilidad material que para ello existe, que el testigo haya podido distinguir que el Sr. Boleaga golpeaba con un sable á la gente que pasaba por la «Garita del Norte,» estando á distancia de muchas varas y siendo de noche.

Así pues, en el caso, aunque el Sr. Boleaga haya empleado la fuerza resistiendo un mandato de los agentes de la autoridad, sin embargo, no hay resistencia punible, porque ese mandato no siendo legítimo, faltó el tercero y más esencial de los requisitos ó elementos que la hacen revestir dicha cualidad. La resistencia en estos casos es permitida, porque se está en el caso de aplicar el axioma de la ley romana: *Vim vi repellere licere.—l. I, ttl. XVI, li. 43. D.* Los Sres. Chauveau y Helie, cuyas doctrinas son tan aceptadas en nuestro foro, enseñan: que la resistencia que rechaza un mandato *ilegal* ó arbitrario de los agentes de la autoridad, no es más que la oposición de la fuerza á la fuerza, por consiguiente importa el ejercicio de un derecho, el de legítima defensa; «porque el acto que comete el agente *fuera de sus funciones*, dicen los mencionados criminalistas, desde el momento en que *no es la ejecución de la ley* ó de una orden de la autoridad pública, no es más que un acto de *fuerza material.— Theorie du Code Penal. Tom. III, n. 944.*—Garraud, otro criminalista tan competente como los anteriores, sustenta la misma opinión que estos: «La resistencia, dice, en el caso que tenga lugar contra los agentes de la autoridad pública que no se

hallen en el ejercicio *legítimo* de sus funciones, no puede constituir el crimen ó delito de rebelión.—*Traité du Droit Penale. Tom. III, n. 379. pág. 523*—y más adelante explicando esta doctrina agrega: «Cuando un oficial público *obra fuera de la esfera de sus funciones*, ó bien aunque obrando en el orden de sus funciones, no tiene, para proceder al acto que ejecuta, ni delegación de la ley, ni mandato de la justicia, ó cuando pretende ejecutar un acto prohibido por la ley, la *resistencia es absolutamente permitida*.....»—*Ob. y tom. cit. n. 380, pág. 527.*

Podría señor Juez seguir robusteciendo en este punto, con citas de otros muchos autores, la opinión que sostengo, que el Sr. Boleaga al resistir á los gendarmes Vera y Martínez lo hizo con derecho, porque no está probado que diera motivo para que éstos le intimaran orden alguna; pues desde Farinacio que dice, que se puede resistir impunemente al Juez ó á sus agentes cuando se extralimitan en el ejercicio de sus funciones, *licité et impune illis resisti posse* escribe, hasta los autores contemporáneos todos abundan en este parecer. Más me abstengo de hacer tales citas porque sería fatigar demasiado la atención del Juzgado y ofender su ilustración, y solo sí para finalizar me permitiré citar á Jusse, que dice: «Hay casos en que le es permitido oponer resistencia al que se quiere aprehender; y esto tiene lugar principalmente cuando carece de carácter el que quiere ejecutar la aprehensión, ó cuando teniendo carácter, no tiene los distintivos de su ministerio, ó bien cuando es portador de una orden ó mandato de un juez incompetente, ó cuando *excede su poder* ó no observa las formas de justicia. En efecto, esta resistencia es más bien una *defensa legítima* que una *rebelión*. Así, es permitido á aquel á quien se quiere arrestar injustamente, no solo resistir, sino aun llamar á sus amigos y vecinos en su socorro para que le ayuden á defenderse.»—*Traité des mat. crimi. Tom. IV, pág. 79.*

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

De lo expuesto resulta: ó bien que no hay prueba acerca de la existencia del delito de resistencia imputado al Sr. D. Andrés Boleaga, ó bien que, aunque apareciendo de autos comprobado que este Señor resistió un mandato emanado de los gendarmes Vera y Martínez, esto no obstante, esa resistencia no es punible, en razón de que dicho mandato no fué *legítimo*. Y ya acepte el Juzgado el uno ó el otro de los dos extremos de dicho dilema, y forzosamente tiene que disidirse por alguno de ellos, porque las constancias de autos no le permiten adoptar otra apreciación legal de los hechos, que alguna de aquellas dos que antes he emitido, con notoria incapacidad, pero con estricta sujeción á las referidas constancias y á los preceptos legales aplicables al caso; siempre se vendrá á esta consecuencia: que he conseguido el objeto que me propuse, esto es, demostrar que mi defenso el Sr. Boleaga no ha cometido el delito de resistencia que define y pena el art. 887 del Código Penal.

Mas vuelvo á apartar y á borrar de nuevo de esta defensa todas las alegaciones que preceden, y concedo que el Sr. Boleaga ha cometido el delito de resistencia penado y definido por el art. 887 del Código Penal ¿le es imputable criminalmente dicho delito? No, porque es irresponsable del mismo según voy á hacerlo patente en seguida.

***

La embriaguez completa que priva enteramente de la razón, constituye con arreglo á lo dispuesto en la frac. 3ª del art. 34 del Código Penal, una circunstancia que excluye la responsabilidad criminal de todo acusado.

El motivo de esta disposición legal es claro y evidente. Según los principios filosóficos en que se sustenta actualmente el derecho penal, se quiere para que haya responsabilidad criminal, que el agente haya obrado en el uso completo de su inteligencia y en posesión de su voluntad, es decir, se quiere que obre *comprendiendo* el mal que hace y queriéndolo *libremente*. «La culpabilidad penal, dice Garraud,—*Ob. cit. Tom. I, n. 227*—supone el concurso de la *inteligencia* y de la *voluntad* en el acto particular de que se quiere hacer responsable al agente. Sobre la necesidad de estas condiciones como elementos morales de la infracción, ninguna duda cabe: la ausencia de la una ó de la otra, cualquiera que sea el carácter de la infracción, por mínima que sea la pena, trae como consecuencia la *desaparición* del crimen, del delito ó de la contravención, porque hace desaparecer la falta, y no puede haber *culpable* sino cuando la *falta* existe.» Así, aquella disposición que dejo citada, no es más que una consecuencia ó corolario de esta doctrina filosófica, aceptada hoy universalmente en las legislaciones penales de los pueblos cultos del Globo.

Y no podía ser de otro modo, la embriaguez cuando es completa, produce una verdadera enagenación que escluye el ejercicio de la razón; la gran autoridad de Briand y Chudé, de Damirón, de Casper, de Legrand du Suelle, de Basset y otros la enseña así. De estos sábios autores, los primeramente mencionados expresan su parecer de una manera tan esplícita como categórica, diciendo: «La embriaguez, cuando es completa, es una verdadera enagenación, pasagera es cierto, pero que no por esto deja de escluir mientras dura el ejercicio de la razón.»—*Manuel Complète de Mèdicine Legale. Tom. II, pag. 134.*—De aquí que, los jurisperitos de todos los tiempos, hayan convenido en considerar la embriaguez, como una causa de irresponsablilidad criminal. «*Ebrius punitur*, escribe Farinacio, *non propter delictum, sed propter ebrietatem.*»—*Quest. 93, n. 4.*—Chauveau y Helie se explican de esta manera: «La embriaguez completa produce completa ofuscación; coloca como una nube

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

sobre la inteligencia; el hombre toma y sigue las inspiraciones del bruto; no obra sino maquinalmente, y su razón no participa de los actos materiales á los cuales se entrega. Esta embriaguez que vuelve al hombre á su infancia, ó lo sumerje en una pasajera enagenación, debe pues á los ojos de la conciencia, eximirlo como á la infancia y á la locura, de las penas prescritas á su acción. El ser moral no puede responder de los actos de una máquina. ¿No habría en efecto contradicción en proclamar á la vez la criminalidad y la ausencia de la razón? ¿Cómo podría el agente responder moralmente de un hecho en el cual no ha intervenido su intención? Será culpable de una imprudencia, de una falta, pero no se le puede imputar un crimen.»—*Ob. cit. Tom. I, 358.*—Garraud asienta: «La embriaguez completa produce efectos comparables á los de la demencia: quita enteramente la conciencia del bien y del mal. Si tal embriaguez se produce, quien comete una infracción en este estado, es irresponsable, debe ser absuelto.»—*Ob. cit. Tom. I, n. 219.*—Rossi, una eminencia en derecho criminal clásico, ha escrito: «La embriaguez, cuando es completa, quita enteramente la conciencia del bien y del mal, el uso de la razón: es una demencia pasajera; el hombre que se embriaga puede ser culpable de una gran imprudencia; pero es imposible decirle con justicia: este crimen lo has comprendido en el momento de cometerlo.»—*Traité du Droit Penal. Tom. II, pag. 188.*—Hasta un poeta, Enrique Heine, ha llamado á la embriaguez, la *locura blanca ó roja.*

La cuestión de la embriaguez, como causa de irresponsabilidad criminal ha sido resuelta, como se ve, de una manera uniforme y en el mismo sentido, tanto por los que profesan la ciencia del derecho criminal como por los que cultivan la de la medicina legal, y aunque así no fuera, nuestra ley penal sanja y decide la referida cuestión en el sentido que dejo indicado. La dificultad no está pues en la cuestión de

derecho, sino en la de hecho: la dificultad estriba toda ella en esta interrogación ¿la embriaguez de que el Sr. Boleaga se hallaba poseído, entre siete y ocho de la noche, del 18 de Julio anterior, era completa, lo privó enteramente de la razón? Mas he hablado de dificultad, cuando en realidad no hay ninguna. Pruebas más claras, más perfectas y más concluyentes que las que sobre tales puntos arrojan estos autos, difícilmente pueden verse en casos de la naturaleza del presente: dudo que esas pruebas pudieran ser mejores en algún otro. ¿Pero á qué insistir sobre este punto, cuando voy á proceder precisamente al análisis jurídico de dichas pruebas? Este análisis convencerá, lo espero, al ánimo judicial, de que mis afirmaciones no son gratuitas.

Los testigos D. Adolfo Torres, D. José López, D. Luciano Elízaga y D. José Alba, presenciaron que el Sr. D. Andrés Boleaga, el día 18 de Julio anterior, ingirió de las once de la mañana á las cinco y media de la tarde en la cantina de «El Canastillo de Flores,» por lo menos cuartillo y medio de cognac, medio cuartillo de ajenjo diluido en agua, cuatro medias botellas de Champagne y otras tantas de cerveza, sin contar algunos otros vasos de este líquido, uno de burdeos y otras varias copas de cognac y de pousse–café, que ingirió, según el dicho de los testigos Alva, Torres y D. Antonio Andalón, en la cantina «El Palacio de Cristal,» entre dos y media y tres y media de la tarde y como á las siete de la noche del mismo 18 de Julio. Las afirmaciones de los testigos primeramente mencionados, y además las de D. Evaristo Bustamante, D. Ezequiel Hernández y Anastasio Jaso, ponen igualmente de manifiesto que, vieron y observaron que la embriaguez del Sr. Boleaga fué en aumento desde por la mañana, de tal suerte que, desde las cinco de la tarde, puede decirse que estaba *completamente ébrio* y que este mismo estado guardaba á las siete de la noche.

Existe, pues, en el caso, conforme al precepto contenido

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

en el art. 301 del Código de Procedimientos Penales, una prueba perfecta, plena y completa acerca de estos dos puntos: 1, en cuanto á la cantidad de vino y demas bebidas embriagantes ingeridas por el Sr. Boleaga el día de los sucesos; y 2, en cuanto al estado de embriaguez completa que el mismo señor guardaba á las siete de la noche del 18 de Julio anterior. Y digo que este último punto está plenamente probado: I. Porque los testigos antes nombrados, dan como razón de tal afirmación que el acusado no sabía ni lo que *hacía* ni lo que *decía*, pues al contestar á la segunda de las repreguntas que les formuló el Señor Agente del Ministerio Público en su escrito de 4 del mes en curso, aseguraron los referidos testigos, que el acusado estaba *completamente ebrio* y *privado* de la *razón* en la tarde y principios de la noche del tan repetido 18 de Julio, porque *confundía* los vinos y licores unos con otros, no *conocía* á las personas, no *entendía* lo que se le decía, y no hablaba ni con *claridad* ni con *lucidez*. Además explicaron esos propios testigos al ser interrogados por la defensa, que el Sr. Boleaga tenía el rostro *enrrojecido*, el andar *vacilante*, conatos de *vómitos* y aunque éstos sobrevinieron si bien en poca cantidad, y finalmente, que estaba *exaltado* y *turbulento*. Y todas estas explicaciones dadas por los mencionados testigos para razonar y fundar sus atestaciones, concuerdan precisamente con los signos descritos por los hombres de ciencia, los fisiologistas, como siendo sintomáticos y característicos del estado de embriaguez completa. Así, Becquerel dice: Si se bebe demasiado la exitación se cambia en embriaguez. la circulación de la sangre se acelera, el pulso se hace más frecuente, la cabeza se congestiona, el aspecto de la cara es feroz, los ojos están fijos y sin expresión, la marcha se hace *incierta*, la palabra *embarazosa;* una locuacidad compuesta de palabras sin sentido, se traduce por un flujo desordenado de ideas; un verdadero delirio se desarrolla en fin. El carácter cambia, los individuos más calmados y más

tranquilos se trocan frecuentemente en querelladores, malvados y groseros.» El Dr. Roques dice á su vez: «Si se abusa de los licores alcohólicos, si se toman dosis inmoderadas, la lengua se *entorpece*, sobrevienen vértigos, *nauceas*, una gran pesadez, torpeza universal, un sopor apoplético ó un *delirio furioso.*» Briand y Chaudé escriben: «Una dosis moderada de alcohol produce desde luego animación física é intelectual; pero bien pronto una nueva dosis determina el primer grado de la embriaguez, la exaltación, la turbulencia, las alucinaciones de los sentidos, la marcha *vacilante*, la *dificultad* ó la imposibilidad de articular las palabras de tenerse en pie: Si la embriaguez aumenta, hay *hay ausencia completa de la razón*, algunas veces delirio furioso y otras propensión al sueño. Ya la cara está muy *enrojecida*, ya su palidez es extrema: hay *vómitos* de materias agrias, cefalalgia y pérdida de los sentidos.» 2. Porque los Sres. Doctores Don Rosendo Gutiérrez de Velasco y Don Manuel Elizalde, afirman lo mismo que los testigos, y aun más, pues al contestar á la primera pregunta del interrogatorio relativo, y después de explicar científicamente las propiedades embriagantes de las bebidas ingeridas por el Sr. Boleaga, se producen de esta manera en su dictámen pericial: «Que tratándose de licores fuertes ó muy alcohólicos como el cognac y el ajenjo, difícilmente puede encontrarse persona que no se embriague, *tomando mucho menos* de lo que *tomó* el Sr. Boleaga, y aun cuando hubiera tomado de *uno solo* de los líquidos y en la *cantidad* que tomó dicho señor; por lo mismo, creen que el Sr. Boleaga ó cualquiera otra persona tomando uno y medio cuartillos de cognac, medio cuartillo de ajenjo diluido en agua, cuatro medias botellas de Champagne y otras tantas de cerveza tiene *necesariamente* que *embriagarse de una manera completa.*» ¿Y cómo no creerlo así, cuando el Sr. Boleaga que es persona sensata, de irreprochables antecedentes y esmerada educación, ejecuta el día 18 de Julio actos que desmienten aque-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

llas buenas cualidades? ¿Qué hace? En un paseo público anda como loco según refiere el testigo Don Ezequiel Hernández, monta á caballo en traje de paseo y en silla al estilo del país, lo que entre nosotros es tenido por muy ridículo, y finalmente, en presencia de su madre, el ser más querido y más respetable para el acusado, se conduce éste de una manera indigna de su amor y respeto filiales, profiriendo palabras poco cultas, según lo asegura en el careo de fojas 111 el testigo Jesús Ramírez, testimonio que fué corroborado por el de los mismos gendarmes Vera y Martínez. Tal conducta no se explica sino por el estado de embriaguez completa, por el de enagenación y delirio de que se encontraba poseído el Sr. Boleaga.

Sobre este particular, pues, los autos ofrecen al Juzgado la prueba más perfecta y más acabada, porque ella resulta tanto del testimonio conteste de ocho testigos idóneos, los Sres. Torres, Alva, López, Andalon, Bustamante, Elízaga, Jaso y Hernández, como del parecer de dos peritos cuyo dictámen, por estar fundado en datos científicos irrecusables, debe ser admitido y aceptado en todas sus partes por el Juzgado, según lo recomiendan los más afamados criminalistas, entre ellos Mittermaier, quien enseña: «La prueba pericial descansa en un encadenamiento de probabilidades racionales que corresponde apreciar al Juez antes de declararse convencido. En todos los casos tendrá, pues, que decidir si el informe envuelve en sí la convicción. Las leyes modernas consagran este principio y disponen que el parecer del perito no puede ser obligatorio para el Tribunal, mientras no esté fundado en razón y en verdad.» — Trat. de las prueb. en mat. crím., pág. 194. — Mas en el caso el dictámen de que se trata, descansa en principios científicos revelados por la experiencia y la observación no de un sabio sino de generaciones de sabios, luego ese dictámen obliga al Juzgado, supuesto que está fundado en razón

y en verdad, y verdad tan evidente como es la que dimana de la observación y la experiencia, por lo mismo, el Juzgado tiene que aceptar el referido dictámen, con lo que dará á la vez que una prueba de su competencia para decidir las cuestiones que esta causa pone á su conocimiento, otra sobre su rectitud y justificación.

El Sr. Boleaga se hallaba, pues, á las siete de la noche del 18 de Julio anterior en estado de embriaguez completa ¿persistió este estado después de esa hora? ¿su embriaguez era completa entre siete y ocho de la noche, hora en que cometió los actos que se le imputan bajo el nombre de delito de resistencia? Para resolver estas cuestiones dejo la palabra á los Sres. Doctores Gutiérrez de Velasco y Elizalde, quienes con una precisión verdaderamente científica las deciden de manera tan acertada que, si yo me permitiera agregar algo, indudablemente que desluciría su dictámen. Dichos señores se expresan así: «Que puesto que el Sr. Boleaga comenzó á intoxicarse tomando grandes cantidades de licores, desde las once la mañana del 18 de Julio y continuó en tan lamentable operación hasta las siete de la noche, es *evidente que en la hora siguiente*, es decir de las *siete á las ocho, su intoxicación estaba al maximum*, pues para que terminara la embriaguez ó envenenamiento, era necesario que el organismo eliminara los productos tóxicos que habian desarreglado sus funciones, operación lenta que tarda varias horas en efectuarse, y más cuando el estómago ó intestinos se han convertido en depósito de grandes cantidades de líquidos alcohólicos que se absorven paulatinamente, sustituyendo á los absorvidos antes y ya eliminados: es de observación vulgar que en multitud de casos la embriaguez es causada por la ingestión única é instantánea de alguna bebida alcohólica, y que los efectos de dicha ingestión, á la vez que rápidos para presentarse, se prolongan por varias horas; esto no solo sucede con el alcohol sino también con todos los venenos cuya absorción y elimi-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

minación no se hace por medio de los pulmones, como sucede con el mayor número de gases ó vapores venenosos. Por lo mismo, en el caso de que se trata, creen que el tan repetido Sr. Boleaga, entre siete y ocho de la noche del 18 de Julio, *estaba perfectamente borracho.*»

Finalmente ¿la embriaguez del Sr. Boleaga lo privó enteramente de la razón? Los Srs. Doctores Gutiérrez de Velazco y Elizalde aseguran en su dictámen, que el Sr. Boleaga en su embriaguez llegó al estado *delirante;* pues bien, hablando de este estado Basset enseña: «En cierto período de la embriaguez, aquella que precede á la postración, el ébrio ya no es dueño ni de su pensamiento ni de sus actos; cae en un verdadero acceso de demencia, se torna en peligroso para otros y para sí mismo. Llegado á este punto el ébrio es *inconciente*.... Los moralistas de buena fe y los criminalistas imparciales convendrán conmigo que este hombre, en el momento en que comete el crimen de que la ley le pedirá cuenta, no está en actitud de huir el torrente que lo arrastra. No es ya una *voluntad* servida por órganos bajo la influencia de una *inteligencia* que *dirije*, es el fatalismo en acción, la béstia *inconciente*, y mata sabiendo apenas que mata y no teniendo la noción de su monstruosidad.»—Etude physiologique sur l'ivresse, pág. 456 y 457.—Queda, pues, la cuestión propuesta, resuelta en sentido afirmativo, por un autor tan concienzudo como el que acabo de citar: ¿pero desea el Juzgado una opinión más precisa y concreta? entonces permítame trascribir la opinión de los facultativos Gutiérrez de Velazco y Elizalde, opinión que está concebida en estos términos: «Quien *delira* no tiene razón, y por lo mismo carece de *libre albedrío*, así pues, si el Sr. Boleaga se embriagó por completo, *deliró* y por lo mismo, *careció de su razón* y *nulificó su libre albedrío.*

Espero confiadamente después de lo que dejo expuesto, que el Juzgado no podrá menos de aceptar y convenir que

de autos aparece plena y perfectamente demostrado, que el Sr. Boleaga en su altercado ó reyerta con los gendarmes Vera y Martínez, obró en estado de embriaguez completa que lo privó enteramente de la razón, como lo asienta el acusado en su indagatoria y en las diligencias posteriores en que ha intervenido; prueba que en nada mengua ni desmerece porque los gendarmes aprehensores y los testigos Juárez y Ramírez afirmen que, aunque el procesado estaba muy ébrio se encontraba sin embargo en su conocimiento, porque estos testimonios son inferiores tanto por su número como por su calidad, á los que componen la prueba de descargo. Por lo mismo, conforme á lo dispuesto en el art. 304 del Código de Procedimientos Penales, el Juzgado debe atenerse á esta última prueba. Aparto y no hago mérito de lo declarado por los testigos Francisco Lapray y Carlos Pérez, porque éstos habiendo visto al procesado cuatro ó cinco horas después de haber pasado los sucesos, no pueden juzgar de su estado en el acto en que aquellos tuvieron su verificativo.

Esto supuesto, Sr. Juez, y no apareciendo de autos constancia alguna que acredite que mi defenso D. Andrés Boleaga, haya cometido antes de ahora infracción punible estando ebrio, ó que haya sido condenado por el delito de embriaguez habitual, resulta que lo favorece en todas sus partes la circunstancia excluyente de responsabilidad criminal mencionada en la frac. 3ª del art. 34 del Código Penal. Si esto es así, resulta tambien, que he dejado satisfactoriamente demostrada la segunda parte de la proposición objeto de esta ya larga defensa, esto es, que aun suponiendo sin conceder que el Sr. Boleaga, haya cometido la noche del 18 de Julio último el delito de resistencia á los agentes de la autoridad, sin embargo, dicho delito no le es imputable criminalmente, ó lo que es igual, es irresponsable del mismo, en virtud de

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

haber obrado al delinquir en estado de embriaguez completa que lo privó enteramente de la razón.

He concluído: pero esta defensa, Sr. Juez, quedaría imcompleta y trunca y hasta inútil para el procesado, si después de haber demostrado la tesis que le ha servido de objeto, no dedujera las consecuencias legales que de su demostración se desprenden; por lo tanto, voy por un momento más á ocupar la atención de ese Juzgado.

III.

El acusado de un delito, conforme á nuestras leyes penales, no puede ser condenado sino en el caso de que se pruebe, la existencia del hecho delictuoso y que él lo perpetró obrando en el uso completo de sus facultades intelectuales. En el presente caso ni está probado con la debida plenitud que el Sr. D. Andrés Boleaga haya violado la ley penal, ni menos aun que al hacerlo haya obrado en el ejercicio de su razón y queriendo libremente el hecho que se le atribuye con el carácter de delito; en esta virtud, se impone como forzosa consecuencia de estas premisas la siguiente conclusión: que el Sr. D. Andrés Boleaga, debe ser absuelto del delito de resistencia á los agentes de la autoridad que se le atribuye, y por el que se le sujetó al presente proceso.

Así, termino, pues, esta fatigosa defensa, pidiendo respetuosa, pero formalmente al Juzgado, con fundamento en los arts. 8 y 34 frac. 3ª del Código Penal, se sirva fallar la presente causa absolviendo al Sr. D. Andrés Boleaga del delito de resistencia á los agentes de la autoridad.

Tranquilo y confiado, espero este fallo, porque así como la Defensa cree haber cumplido con su deber, de igual manera espera y está segura que como siempre y en todas ocasiones, el respetable Funcionario á quien ha tenido la honra de dirigirse, cumplirá con el que la ley le impone en el desempeño de su augusto ministerio.

León, 31 de Dicembre de 1897.

Lic. C. Díaz Infante.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Sentencia del C. Juez de Distrito del Estado de Coahuila, amparando al Sr. Manuel Luna, confirmada en todas sus partes, por unanimidad de votos, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Vistos y Resultando: Que el Sr. Ricardo Luna por ocurso de fecha 27 de Junio se presentó ante este Juzgado de Distrito manifestando: que en el mes de Febrero del año de 1895 su hermano Manuel Luna había ingresado al servicio de los Sres. E. Madero y hermanos establecidos en Parras de la Fuente, con el carácter de Agente ó dependiente viajero de dichos señores y bajo un contrato por el cual se estipularon las condiciones en que debían prestarse y remunerarse los servicios de su referido hermano, que el mes de Junio de 1896 se practicó una liquidación entre los Sres. Madero y su hermano; y de ella resultó un saldo en contra de éste por el cual les extendió pagaré garantizado con algunas acciones de minas que tenía y otras que se proponía adquirir; que en 22 de Junio último practicada nueva liquidación por virtud de que pretendía separarse de la casa su referido hermano resultó un saldo en su contra deducido el valor del pagaré en referencia; y entonces los Sres. Madero Hermanos por conducto de su apoderado el Sr. Lic. Felipe H. Ortiz, ocurrieron al Juez de Letras de Parras acusándolo de los delitos de estafa y abuso de confianza y dicha autoridad le abrió proceso y lo redujo desde luego á prisión. Y como con tales procedimientos del Juez letrado de Parras estima el ocurrente que se han violado en perjuicio de su hermano Manuel Luna las garantías que otorgan los arts. 17 y 18 de la Constitución General de la República, acudió en nombre de aquel en demanda de amparo de la Justicia Federal pidiendo así mismo la suspensión inmediata de los actos reclamados.

Resultando: que prévia ratificación del interesado en su escrito de queja se mandó sustanciar el artículo relativo á la suspensión y se pidió el informe de que habla el art. 11 de la ley de 14 de Diciembre de 1882 á la autoridad designada como responsable de los actos reclamados, quien lo rindió manifestando que había procedido en contra de Luna á virtud de acusación que le hizo el apoderado de los Sres. Madero y hermanos, imputándole los delitos de estafa y abuso de confianza consistentes en los hechos de haber dispuesto de cantidades de dinero sin consentimiento de aquellos y haberles garantizado un pagaré con una acción de la mina de Zaragoza de que no era dueño, y que por razón de haber encontrado méritos suficientes para el procedimiento criminal decretó la formal prisión de Luna por los expresados delitos.

Resultando: que en vista de tal informe y del pedimento del C. Promotor Fiscal á quien se corrió el traslado de ley, decretó el Juzgado la suspensión del acto reclamado quedando en consecuencia el quejoso á disposición de la Autoridad Federal y se mandó continuar el juicio por sus trámites legales.

Resultando: que la autoridad responsable rindió el informe sobre lo principal, reproduciendo el que anteriormente rindiera al tratarse de la suspensión y por vía de justificación acompañó copia certificada de las siguientes piezas relativas, á la averiguación que instruye en contra del quejoso: una carta fecha 22 de Junio dirigida por el Sr. Manuel Lu-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

na á los Sres. Ernesto Madero y hermanos de Parras en la que refiere las acciones de minas y otras que les había dado en prendas y como garantía de su pagaré por $ 2,624.95 otorgado el 22 de Julio de 1896 á un año de plazo, el pagaré en referencia otorgado en Parras á favor de los Sres. E. Madero y hermanos, nota de los accionistas de la mina de Zaragoza expedida por el Secretario de la negociación Sr. A. Pemoulie; escrito del Lic. Felipe H. Ortiz apoderado jurídico de los Sres. Ernesto Madero hermanos acusando al Sr. Manuel Luna de los delitos de estafa y fraude consistentes, según expresa, en los hechos de haber pedido Luna sin autorización de sus poderdantes diversas cantidades de dinero á los corresponsales de los Sres. Madero y haberles garantizado el pago de una obligación con acciones de minas que no tenía; auto de proceder, inquisitiva del acusado en que niega los cargos que se le atribuyen y decreto de formal prisión en su contra; declaraciones y ampliaciones de D. Ernesto Madero ratificando la acusación presentada por el Lic. Ortiz y detallando los hechos referidos por éste; carta contrato entre los Sres. Ernesto Madero hermanos y D. Manuel Luna sobre prestación de servicios de éste como dependiente viajero de aquellos señores y por último copia compulsada en la Oficina de Telégrafos Federales de Parras de varios telegramas cambiados entre D. Manuel Luna y D. Alberto Mendoza, de Santa Rosalía.

Resultando: que á solicitud del C. Promotor Fiscal se mandó abrir el juicio á prueba por el término de la ley y durante la dilación respectiva rindió el quejoso la prueba documental consistente en tres cartas originales y un telegrama fechadas en 12, 18 y 22 de Febrero del año actual, suscrito por el Sr. Ernesto Madero y copias certificadas expedidas por el Juez de Letras de Parras, de las cuentas llevadas por E. Madero y por Ernesto Madero hermanos con el mismo quejoso Sr. Manuel Luna, cuyos documentos todos forman su cuaderno de pruebas,

Resultando: que fenecida la dilación probatoria que se acordó, fueron puestos los autos á solicitud del Promotor Fiscal en la Secretaría del Juzgado á la vista de las partes para que tomaran apuntes y produjeran sus alegatos escritos en el término de la ley, como lo verificaron pidiendo el fiscal en el sentido de que se niega el amparo solicitado y

Considerando: que la demanda de amparo interpuesta por el quejoso se funda en la violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución Federal, violación que se hace consistir en el hecho de haberse producido por la autoridad ejecutora á la detención y formal prisión del mismo quejoso, abriéndole proceso criminal por una reclamación entablada en su contra por los Sres. E. Madero y hermanos, cuya reclamación se basaba en hechos que no podían constituir delito por tratarse solamente de una deuda de carácter puramente civil.

Considerando: que según aparece del informe rendido por la autoridad ejecutora, ó sea el Juez de Letras de Parras y de las copias de piezas de autos anexas á su mismo informe, el procedimiento criminal en contra de D. Manuel Luna, se instauró á instancia ó solicitud del apoderado de los Sres. E. Madero y hermanos, quienes lo acusaron de los delitos de estafa y fraude por virtud de haber dispuesto, sin su consentimiento, según afirman, de varias cantidades de dinero, y haberles garantizado el pago de la obligación otorgada á su favor en 22 de Julio de 1896, con una acción de minas que no le pertenecía.

Considerando: que de las mismas piezas de autos aparece comprobado el hecho de que el Sr. Luna como dependiente ó agente viajero de los Sres. Madero hermanos y con tal carácter pidió y obtuvo de varias casas comerciales de la República corresponsales de los Sres. Madero, cantidades de

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

dinero de las que siempre dió aviso á sus principales, y ellos las cargaron en su cuenta corriente que le llevaban, sin que se haya comprobado el hecho de que los repetidos Sres. Madero hubieran prohibido á Luna pedir esos fondos por su cuenta, ni tampoco que éste Señor dejara de avisarles al hacer esos pedidos, los que parece autorizaban, cuando menos de modo tácito, sus principales con el hecho de pagarlos y cargarlos á su cuenta corriente. En tal concepto el hecho referido ejecutado, no puede constituir ninguno de los delitos de estafa ó fraude que se le atribuyeron, y que define el cap. V del tít. I, lib. III del Código Penal del Estado; toda vez que no consta probado que engañara á los Sres. Madero Hermanos, ó se aprovechara de su error, para obtener las cantidades de dinero que por su cuenta pidiera á los corresponsales de aquellos Señores, ni menos que se valiera de artificios ó maquinaciones de ningún género para lograr que se le entregaran tales cantidades.

Considerando: que por lo que respeta al hecho de haber dado en garantía el Sr. Luna, de su pagaré de fecha 22 de Junio de 1896, la media acción de la mina de "Zaragoza" que no pudo entregar después, porque no la consiguió, tampoco constituye ninguno de los delitos antes referidos, pues consta demostrado que la cantidad por la que otorgó tal pagaré, la adeudaba desde que entró al servicio de los Sres. Madero Hermanos, *quienes no le facilitaron dicha cantidad en vista de la garantía que les ofrecía, ni ésta se hizo constar en el pagaré, sino solamente aceptaron la garantía que Luna les ofrecía para pagarles una suma de que ya les era deudor, y por la que ya les había otorgado una obligación de pago.*

Considerando: que en vista de los razonamientos anteriores, no puede afirmarse que las acciones que competen ó pueden competer á los Sres. Madero Hermanos para reclamar de Manuel Luna las sumas de dinero que les adeuda, tengan más carácter que el que corresponde á una deuda puramente civil; y en tal virtud, el procedimiento criminal incoado contra de aquél por razón de las acciones supradichas y su prisión decretada por ese mismo motivo, han violado en su perjuicio las garantías que otorgan los arts. 18 y 19 de la Constitución General de la República, y es procedente por tanto el amparo solicitado.

Por las consideraciones expuestas y con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitución Federal y Ley de 14 Diciembre de 1882, el Juzgado resuelve:

1º La Justicia de la Unión ampara y proteje á Manuel Luna contra los actos del Juez Letrado de Parras que lo redujo á prisión por deudas de carácter civil.

2º Con las copias de estilo elévense originales estos autos á la Suprema Corte de Justicia de la Unión para los efectos legales.

Notifíquese, etc.

Ciudad Porfirio Diaz, Octubre 15 de 1897.—*S. A. Suárez.*

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Apuntes del alegato presentado por los Lics Lorenzo Elízaga y Francisco Martínez Ortíz, patrocinando á Manuel Luna, en el amparo pedido por éste contra actos del Juez de Letras del Distrito de Parras, Estado de Coahuila.

Señores Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los Lics. Lorenzo Elízaga y Francisco Martínez Ortíz, por parte del Sr. Manuel Luna, ante esa H. Corte, con todo el respeto que le es debido, salvo las protestas oportunas y como mejor proceda, exponemos:

Que de la recta justificación del alto Tribunal á que tenemos el honor de dirigirnos, esperamos se ha de servir confirmar la sentencia pronunciada por el C. Juez de Distrito del Estado de Coahuila, en el juicio de amparo que promovió D. Ricardo Luna contra actos del Sr. Juez de Letras del Distrito de Parras de la Fuente, por considerar violadas en perjuicio de su hermano D. Manuel Luna las garantías que otorgan los arts. 17 y 18 de la Constitución de la República, con el hecho de haberle reducido á prisión la noche del 23 de Junio del corriente año, é iniciado un proceso en su contra por deuda de carácter puramente civil á favor de los Sres. Ernesto Madero y Hermanos de aquella localidad, sentencia que concedió al procesado el amparo de la Justicia Federal y de cnya revisión se trata.

Las razones en que fundamos nuestra petición, son las siguientes:

La prisión y el proceso de D. Manuel Luna tienen por causa la supuesta perpetración de los delitos de fraude, abuso de confianza y estafa, por los que le hicieron formal acusación los referidos Sres. Ernesto Madero y Hermanos, con el carácter de acreedores perjudicados.

Fraude, según el Código Penal del Estado de Coahuila, es el delito que se comete engañando á uno ó aprovechándose del error en que se haya para hacerse ilícitamente de alguna cosa ó alcanzar algún lucro indebido con perjuicio del engañado.

De abuso de confianza, como delito especial, es culpable el que fraudulentamente y con perjuicio de otro disponga en todo ó en parte de una cantidad de dinero en numerario, en billetes de banco ó en papel moneda, de un documento que importe obligación, liberación ó trasmisión de derechos ó de cualquiera otra cosa agena, mueble que haya recibido en virtud de un contrato que no le trasfiera el dominio.

Se designa con el nombre de estafa, el delito de fraude, cuando el que quiere hacerse de una cantidad de dinero en numerario, en papel moneda ó en billetes de banco, de un documento que importe obligación, liberación ó trasmisión de derechos ó de cualquiera otra cosa agena mueble, logra que se le entreguen por medio de maquinaciones ó artificios que no constituyen un delito de falsedad.

Enumerando para mayor claridad los elementos constitutivos de los delitos atribuidos al quejoso, tendremos:

FRAUDE.

1º Lucro ó adquisición alcanzados por el Sr. Manuel Luna.

2º Carácter indebido ó ilícito de este lucro ó adquisición.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

3º Perjuicio causado á los Sres. Ernesto Madero y Hermanos por el importe de este lucro ó adquisición.

4º Engaño del Sr. Luna á la expresada sociedad para adquirir alguna cosa ó alcanzar el lucro, ó bien aprovechamiento por parte del primero de algún error en que se encontráre la Sociedad para conseguir el fin.

ABUSO DE CONFIANZA.

Todos los elementos anteriores, y además:

5º Entrega al Sr. Luna de dinero, documentos de valor ó cualquiera otra cosa de los Sres. Ernesto Madero y Hermanos.

6º Celebración de un contrato entre el quejoso y la expresada Sociedad en virtud del cual ésta le haya hecho la entrega de alguna de las cosas antes dichas sin trasmitirle el dominio.

7º Actos por los que el Sr. Luna haya dispuesto de tales objetos como de cosa propia.

8º Intención fraudulenta de estos actos de disposición, esto es, dolo.

ESTAFA.

Todos los elementos anteriores, y además:

9º Maquinaciones ó artificios del Sr. Luna para que sus acusadores le entregasen alguna de los objetos relacionados.

10º Falta de falsedad en estas maquinaciones.

11º Exito completo de las mismas.

Véamos ahora si la autoridad responsable tuvo comprobadas como es de rigor en derecho, todas estas circunstancias cuya reunión constituye el cuerpo de los delitos por los que dictó auto de formal prisión en contra del Sr. Luna, después de haberlo detenido.

El examen atento de las constancias de autos lejos de conducirnos á la certeza del cumplimiento, no ya de todas las referidas circunstancias, pero ni siquiera de la de alguna de ellas, contradicen de un modo material y palpable la temeraria hipótesis de la perpetración de estos delitos por el inculpado.

Los acusadores, el Juez responsable y el C. Promotor Fiscal del Juzgado de Distrito de Coahuila, que han sostenido respectivamente en la querella, los informes, alegato y pedimento, la verificación positiva de aquellos delitos exponen los hechos de este modo:

El Sr. Luna, dicen, siendo dependiente viajero de D. Evaristo Madero, padre de los socios de la casa Ernesto Madero y Hermanos, pasó al servicio de éstos con el mismo carácter al constituirse su Sociedad Mercantil en 1896; que al separarse Luna de D. Evaristo Madero le adeudaba la cantidad de $ 2,624.95 de la cual se hicieron responsables los nuevos principales del deudor obteniendo de él un pagaré por esta cantidad, extendido el 22 de Junio del expresado año de 1896 á un año de plazo, es decir, exigible el 22 de Junio de 1897; que el obligado por tal pagaré, Sr. Luna, les garantizó el pago con prenda de varias acciones de minas entre las que se encontraba media acción de la mina «Zaragoza» cuya Junta Directiva reside en Parras; que desde el primer momento dudaron de que Luna tuviese esa media acción de «Zaragoza» pero que no le observaron nada porque creyeron prudente reservar sus reclamaciones para el día del vencimiento del pagaré; que Luna estuvo á su servicio desempeñando el empleo de dependiente viajero con arreglo á un contrato en que se estipuló la comisión de siete por ciento sobre las ventas que hiciese, siendo los gastos de viaje por cuenta del mismo Sr. Luna, pero estando obligados los Sres. Ernesto Madero y Hermanos á facilitarle los fondos necesarios á cuenta de su comisión; que durante los viajes que

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

hizo el Sr. Luna pidió diversas partidas de dinero á los corresponsales y marchantes de la casa sin consentimiento de ésta, porque "*nunca* le dieron cartas de crédito contra nadie," y aún con expresa prohibición de pedir cantidades de dinero; que habiendo comisionado al quejoso para que acompañara al Sr. Francisco Olivares, hermano político de D. Ernesto Madero, en un viaje á la ciudad de León donde permaneció el Sr. Olivares curándose del vicio de la embriaguez, hizo el primero gastos excesivos y supuso otros, siendo todos ellos por cuenta de la Sra. Doña Balbina T. viuda de Olivares madre del enfermo: que el inculpado pidió á D. Evaristo Madero Hernández (persona extraña á las casas comerciales de que aquel fué comisionista) la suma de $ 153.00 prestados para volvérselos el 15 de Junio de 1897, según pagaré que le otorgó, "lo cual fué un abuso de confianza porque bien sabía Luna que no podía cubrir tal cantidad;" que este no ha tenido ni tiene la media acción de la negociación minera "Zaragoza" con prenda de la cual garantizó el pago de su obligación vencida el 22 de Junio del corriente año, pues no consta su nombre en el registro de acciones de la Compañía; que no pagó el repetido pagaré á su vencimiento, y que las diversas cantidades que pidió á los corresponsales de la casa en algunas ciudades de la República las pagaron y cargaron en la cuenta corriente que le llevaban únicamente "para cubrir su crédito" así como que cuando exigieron al Sr. Luna la entrega de la media acción de la mina "Zaragoza" contestó éste que estaba negociando con respecto á ella en Santa Rosalía, Estado de Chihuahua, "y que para dejar terminado este negocio era necesaria su presencia en dicho punto" solicitando al efecto permiso de ir, el cual le fué negado.

Tales son los hechos fielmente extractados que en concepto de los Sres. Ernesto Madero y Hermanos, del Juez de Letras de Parras y del Promotor Fiscal del Juzgado de Distrito de Coahuila se han realizado en el presente negocio y constituyen los delitos de fraude, abuso de confianza y estafa cometidos por nuestro patrocinado en perjuicio de los primeros y que sirvieron de fundamento al segundo para mandarlo aprehender á las 11 de la noche del día 23 de Junio último, al mismo tiempo que acordaba se abriese la averiguación correspondiente, dictando más tarde el auto de formal prisión.

Nuestra tarea es bien sencilla, porque para rectificar las inexactitudes que contiene la anterior relación, disponemos de pruebas irrecusables en los autos del amparo, no obstante que el Juez responsable negó el dar todas las cópias certificadas que el quejoso necesitaba y pidió para presentarlas como parte de su prueba á pesar de la excitativa que el Sr. Juez de Distrito le dirigió para que cumpliese con este sagrado deber que le impone el art. 30 de la ley orgánica del recurso, y en cambio encontramos preciosas confesiones que debemos recoger porque demuestran no sólo la no existencia de los delitos en cuestión, sino aun la imposibilidad de que el acusado los haya podido cometer.

Se confiesa que el Sr. D. Manuel Luna estaba trabajando en la casa de D. Evaristo Madero, con el carácter de dependiente viajero para la venta de vinos producidos en el lugar.

Que teniendo un adeudo con su principal y para separarse de éste y entrar al servicio de sus actuales acusadores pagaron ellos al Sr. Madero la suma debida y de la cual proviene el pagaré que no tardaron en recabar del Sr. Luna. Por esto claramente se ve que el quejoso no era desconocido al ingresar á la casa de Ernesto Madero y Hermanos; venía del lado del padre de éstos forzosamente recomendado por él, que por su autoridad en la familia y su larga experiencia en los negocios, es incondicionalmente respetado; llegaba buscado, solicitado aun con ruegos y por decirlo así, comprando

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

la adquisición de sus servicios con el pago inmediato de la deuda que pesaba sobre él, como si hubieran querido sus nuevos jefes no privarse de ellos á cualquier costa. Y ciertamente tenían razón, porque el Sr. D. Evaristo Madero había hecho otro tanto para atraerse al Sr. Luna separándolo de los Sres. Navarro Hermanos de la misma ciudad de Parras y también pagó á estos un saldo que resultaba en su contra. El interés muy natural de hacer una buena adquisición fué por consiguiente el motivo de que tanto el Sr. D. Evaristo Madero como los Señores sus hijos no omitieran medio para conseguir que el Sr. Luna fuese su único agente viajero en todo el País para la venta de sus productos vinícolos, y, cosa rara, el interés también, pero no ya natural en hombres desapasionados es el móvil de esta tremenda acusación, pues ella fué concebida, maquinada, resuelta y ejecutada á continuación del día en que el Sr. Luna y sus jefes arreglaban sus cuentas para separarse éste de la casa é ir á servir con el mismo carácter y en el mismo negocio á otra casa acreditada de la propia ciudad. Tan grande como fué para los Sres. Madero el placer de que el Sr. Luna separándose de las casas competidoras viniese á la de ellos, fué el disgusto que les produjo la noticia de su separación para continuar su carrera de comisionista viajero con otro productor. Pero entre aquellas y los Sres. Ernesto Madero y Hermanos hubo la diferencia de que sufrieron la pérdida de su dependiente con la resignación de quien sabe que ejercía un derecho precioso é inviolable como es la libertad del trabajo, y no se dejaron arrastrar por la pasión violenta de la venganza, descargando sobre la desvalida personalidad de un joven apenas iniciado con éxito en la actividad del comercio, los rudos golpes de esta terrible acusación, que de prosperar mataría su porvenir, su honor y sus esperanzas, inutilizándolo para el trabajo á que se ha dedicado, y esto último según lo indican

las circunstancias del caso, parece ser el fin principal que se proponen sus poderosos acusadores.

Se ha confesado también que el adeudo del Sr. Luna para con sus principales proveniente del traspaso del crédito de D. Evaristo Madero, recibió las formas extrictamente mercantiles de una partida en cuenta corriente con intereses que se le abonó en el acto en los libros de la Sociedad, según lo estipulado en el contrato de comisión respectivo, y de un pagaré extendido el 22 de Junio de 1896 á un año de plazo: que no recibieron ni vieron siquiera, los títulos de las acciones de minas que dicen les dió el obligado en *prenda* del importe de su pagaré; que suponiendo que no tenía la media acción de la mina "Zaragoza" no quisieron hacerle observaciones; que pagaron todas, absolutamente todas, las cantidades de dinero que á sus corresponsales pidió el acusado, haciendo esto por el grave motivo de conservar el crédito de la casa y cargándolas en la cuenta corriente de aquel; que el 22 de Junio del corriente año le negaron el permiso que pidió con el fin de ir á Santa Rosalia para dar término al negocio de compra de la tantas veces repetida media acción de "Zaragoza;" que los gastos de viaje y permanencia en León con el fin de curar de la embriaguez al Sr. Francisco Olivares fueron pagados por cuenta de la Sra. Balbina T., viuda de Olivares; que el dinero pedido á D. Evaristo Madero Hernández fué préstamo particular por el cual el Sr. Luna le extendió un pagaré común y corriente; y que por el contrato celebrado con el Sr. Luna al principiar sus trabajos estaban obligados á proporcionarle fondos para sus gastos á cuenta de la comisión.

Son muchas las inexactitudes que contiene la relación de los hechos que hacen los acusadores y pasamos á evidenciar los que tienen comprobación completa en los autos de este juicio por medio de documentos auténticos.

Los Sres. Ernesto Madero y Hermanos con el fin sin du-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

da de ocultar, la procedencia del pagaré, base de la acusación, dan á entender que el saldo de la cuenta corriente del Sr. Luna convertido en el referido pagaré de 22 de Junio de 1896, era este mismo día, de todo el valor que expresa ese documento, ésto es de *$ 2,624.95* pero la verdad es, que el tal saldo de la cuenta el 22 de Junio de 1896 fué de $ 2,499,95 suma á la cual agregándole $ 125 que importan los intereses al 5 por ciento anual, dá $2,624.95 valor por el que fué extendido el pagaré á un año de plazo. Estos datos se encuentran en la copia de la cuenta del Sr. Luna que obra en los autos y comprueban que el pagaré corresponde á una partida en cuenta corriente y que lleva recargados en su valor los intereses convenidos.

Dicen los mismos que no dieron nunca carta de crédito alguna á su agente viajero para que atendiese á sus gastos y esta afirmación choca de frente con la letra de la cláusula quinta del contrato de comisión que obra en los autos y que dice: "LOS ITINERARIOS SE HARÁN DE COMÚN ACUERDO Y EN LA FORMA MÁS CONVENIENTE, FACILITANDO Á UD. LOS FONDOS NECESARIOS PARA GASTOS DE VIAJE EN CUENTA DE SU COMISION."

A menos de admitir que los Sres Ernesto Madero y hermanos han faltado al cumplimiento de esta obligación contraída para con su representante comercial, no encontrarán manera de negar que no solamente han consentido, sino llevado á puro y debido efecto la promesa de facilitar al Sr. Luna los fondos necesarios para el eficaz desempeño de su cargo y como lo demandaban los intereses de la casa. Nótese bien que la obligación de la Compañía era no simplemente de dar los fondos en cualquier tiempo y de cualquier manera al arbitrio de sus gerentes, sino la de *facilitarle* al interesado su percepción oportuna en cada lugar, pues sólo en esto pueden consistir esas facilidades que el viajero estipuló formalmente, con verdadera previsión comercial y como cosa muy importante para el éxito y rapidez de sus operaciones.

La audacia con que han negado la entrega por su parte, de cartas de crédito á favor de su agente no tiene otro fundamento que la vana esperanza de que, como estas cartas han debido ser entregadas á los destinatarios, ellos las conservarán en el secreto de sus archivos como son: los Sres. Garza Hnos. & Cª de Durango, José María Sánchez de Chihuahua, Viuda Treviño Guzmán & Cª, de Sierra Mojada, Marcos Russek y Hno., de Jimenez, Banco de Zacatecas, Santiago Manrrique de León, Manuel M. Vargas de Irapuato, Remigio Diquisí y Cª, de la Barca (Jal.) Rafael Avalos, de La Piedad (Mich.) Jesús Alvárez de Salamanca, Desiderio Resendis y Cª de Querétaro, Heliodoro Du Pond, de Celaya, Matías Hernández Soberon, de San Luis Potosí, Castillo y Perez, de Matehuala, Juan Domínguez, de Catorce, Marcelino Garza, de Saltillo, Banco de Nuevo León de Monterrey, Vicente Garza y Hnos., de San Pedro Coahuila, Vicente Montes y Cª, de Santa Rosalía de Chihuahua, Domingo Trueba, de Tampico, Sommer Herrman y Cª de esta Capital y otros muchos que es difícil recordar, de diversas localidades del país.

Pero como si la justicia velase siempre por la inocencia, la fortuna ha querido dejar en poder del inculpado una carta destinada á los Sres. Ortiz y Vallejo de Aguascalientes, y otra dirigida al mismo interesado y que le han servido en estas angustiosas circunstancias, para dar un mentís solemne á tan temeraria afirmación de sus contrarios.

La primera, es una carta de crédito perfecta, pues en ella se dice á los Sres. Ortiz y Vallejo cuya razón social figura en la lista de corresponsales, con quienes se dice abusó el Sr. Luna pidiéndoles dinero sin autorización, que se les agradeceria se sirviesen facilitarle por cuenta de D. Evaristo Madero los *fondos que necesitase para sus gastos*, y la otra es del

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

mismo señor, dando su conformidad al quejoso por $ 150 que recibió de Don Manuel Stampa de Guadalajara.

Aunque estas cartas son del tiempo en que el Sr. Luna trabajaba con D. Evaristo Madero, ellas indican la costumbre de la casa, que tiene y ha tenido siempre á la misma persona por jefe y director, y el modo habitual de entender y dar cumplimiento á la transcrita claúsula 5ª del contrato, base de las obligaciones entre el uno y los otros.

Obran originales en el cuaderno de pruebas del Sr. Luna, un telegrama y tres cartas procedentes de D. Ernesto Madero, por los que se viene en conocimiento, no sólo de la conformidad y autorización para erogar los gastos hechos con motivo de la curación de D. Francisco Olivares en la Ciudad de León, sino de la disposición completa de la familia y personal del Sr. Madero, para no omitir gasto en favor de la salud del enfermo y el regocijo que les causó el que la hubiese obtenido.

Al Sr. Luna, le titularon entonces amigo queridísimo de toda su confianza, hombre juicioso, económico, de tan buenas costumbres y amante de la virtud á grado tal, que sólo él les hacía esperar que el Sr. Olivares no se rodease de malas compañías é interrumpiese sus habitos de derroche inmoderados. El Sr. Luna sin hacer caso de estas lisonjas interesadas, obsequió los deseos de sus principales con la abnegación del hombre servicial y generoso, no apartándose del lado del Sr. Olivares hasta devolverlo enteramente bueno al seno de su familia. Los mismos documentos relatan una circunstancia que eleva el servicio prestado por el Sr. Luna con el carácter de amigo y sin retribución de ninguna clase, á la categoría de un raro sacrificio. En ellos se le habla de la enfermedad de su padre, se le dice que ha llegado á una situación alarmante y se trata de consolarle con la promesa de remitirle noticias diarias de la salud de este enfermo para él tan querido.

El Sr. Luna resistiendo á los impulsos naturales de sus

sentimientos, no regresó á la Ciudad de Parras sino hasta tener la orden de los Sres. Madero que le fué dada cuando ya su padre estaba próximo á expirar, y que efectivamente falleció á los pocos días.

Hay una audacia inaudita en la aseveración de que al firmar Don Manuel Luna su pagaré de 22 de Junio de 1896, lo garantizó con prenda de las acciones de minas que menciona en su carta de 22 de Junio de 1897.

No nos extrañarían estas palabras en labios profanos á la ciencia del derecho como son los de los Sres. Madero, aunque la prudencia los debiera obligar á no usar expresiones cuyo sentido no comprenden, sobre todo, cuando se trata de imputar delitos infamantes á personas que están en la posibilidad de hacer algo en su defensa; pero sí es sumamente triste que letrados como el Sr. Don Felipe H. Ortiz apoderado de los Sres. Madero, el Juez de Parras y el Promotor Fiscal del Juzgado de Distrito, desconozcan la naturaleza y significación de un contrato tan trivial y tan frecuente como es el contrato de prenda.

¿Ignoran acaso estos señores Abogados, que la prenda como el depósito y como el préstamo, no pueden existir sin la entrega real y efectiva de las cosas que son materia de estos contratos, llamados reales, precisamente porque siendo la obligación principal que de ellos nace la de devolver las cosas al dueño de ellas, es materialmente imposible poder devolver éstas si no se han recibido?

No evidentemente, y no podemos ver en esta subordinación de sus ideas á las de los acusadores más que una complacencia, por mil títulos censurable, con el único fin de emplear palabras que aunque inexactas suenan siempre en contra de la inculpabilidad del Sr. Luna.

La garantía, de que hacen tanto alarde, es una invención procesal, supuesto que el Sr. Luna, al extender su pagaré, no constituyó la prenda de ningún modo, ni menos en la

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

forma obligatoria que prescribe el art. 607 del Código de Comercio, esto es por escrito en el mismo pagaré: "La prenda mercantil deberá constituirse con los mismos requisitos de forma que el contrato á que sirve de garantía;

Obra en autos la copia de este pagaré que dice textualmente: "*Pagaré el día 22 de Junio próximo de 1897 á la orden de estos Sres. Ernesto Madero y Hnos. $2,624.95 plata saldo á que asciende mi cuenta según liquidación de esta fecha.—Rosario Parras, Junio 22 de 1896.—M. Luna.*" y están confesos los acusadores en los hechos de que no les hizo entrega de ninguno de los valores mineros á que se hace referencia, en que ni siquiera, los vieron, en que no pensaron hacer alguna inquisición sobre la realidad de ellos, y en que solamente más tarde, al vencimiento de la obligación, ansiosos preguntaron si el Sr. Luna tenía esos valores, no seguramente con el derecho que se tiene sobre una cosa dada en prenda, sino con la esperanza de que el Sr. Luna les pudiese hacer el pago con el producto de ellos, como con el de cualesquiera otros de que pudiese disponer. El deudor fué tan leal que no tuvo inconveniente, no ya en declararles que tenía esos valores, pero en entregárselos, con los documentos de traspaso respectivos poniéndoles á éstos por indicación de los Sres. Madero, fecha del mes anterior y con el fin de que los vendiesen al mejor precio que les fuera posible y abonasen su producto en la cuenta corriente del deudor. Esta cuenta está, por lo tanto, ilíquida y ninguna de las partes pueden saber cuál sea su saldo verdadero hasta que no se consume la operación de venta de los referidos valores en los términos estipulados.

Especialmente por lo que se refiere á la media acción de la mina de Zaragoza que los acusadores colocan entre las imaginarias prendas que servían de garantía, éstos mostraron más interés en recibirla que sobre ninguna otra, porque sabían que era un valor de importancia, en alza continua y

con mucho porvenir. A sus instancias reiteradas, el Sr. Luna respondió por su carta tan ponderada de fecha de 22 de Junio de 1897, día del vencimiento del pagaré, que les había traspasado en abono de su cuenta: una acción de la Compañía Minera "Santa María," ¼ barra de "La Libertad," 1 acción de "La Cosmopolita," 5 acciones de "El Vesubio," 10 acciones "La Coahuilense," ¼ barra "La Compañía" y 1 acción de la Compañía de "Luz Eléctrica de Parras," y no la ambicionada media acción de la mina de "Zaragoza." He aquí la frase textual de la carta de 22 de Junio de 1897, presentada como prueba de que fué dada en garantía esta media acción: "*Estas acciones están traspasadas con excepción de media acción "Zaragoza.*"

¿Qué hay pues en el fondo del negocio? Garantía especial de prenda sobre determinados valores, no es posible en derecho, dadas las circunstancias del caso; lo que hay es un error en la inteligencia de la palabra jurídica prenda, usada por el Sr. Luna en su repetida carta de Junio de 1897, en el sentido amplísimo de que todos los bienes que constituyen el patrimonio del deudor son la prenda de sus acreedores. Este sentido general de la palabra prenda, no es del todo extraña á la ciencia del derecho, y es el más acostumbrado entre el vulgo: de modo que si el Sr. Luna expresó alguna vez que los valores mineros de que podía disponer eran la garantía de las obligaciones contraídas con los hermanos Madero, les dijo la verdad, porque estaba dispuesto á conservar las acciones que había adquirido, las que tenía la seguridad de adquirir, y las que le fuera posible tener más tarde, para inspirar confianza á sus acreedores; pero esto no quería decir, de ninguna manera, que se privase del derecho de especular con estos mismos valores, dejando de verificar todas las transacciones lícitas en el comercio y que le pudiesen reportar alguna utilidad ó en caso desgraciado, cualquiera pérdida.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

En otros términos, el Sr. Luna, no ha hecho otra cosa que expresar á sus acreedores la obligación general de bienes como buen comerciante y que, aún sin que se exprese, la ley hace recaer sobre todos los bienes de una persona física ó civil.

Pero hay otra afirmación no menos infundada con referencia á la media acción de «Zaragoza:» dicen los acusadores que el quejoso no tenía, ni podía obtener la citada media acción para dárselas en pago y presentan como prueba de este hecho la lista de los accionistas de la negociación referida, tomada de su libro de registro.

En primer lugar, siendo la acción de minas que se explotan en la forma de Sociedades Anónimas, indivisible como lo preceptúa el art. 182 del Código de Comercio, vanamente se buscará en los libros del registro el nombre de una persona á quien se asigne la propiedad de media acción, estas participaciones menores que la unidad deben quedar siempre extrañas á las constancias del registro, pues el citado artículo dispone que cuando haya varios copropietarios de una misma acción se nombre un representante común que aparezca únicamente ejerciendo los derechos del título; y en segundo lugar, no es el registro el que revela la verdadera propiedad de las acciones pues es costumbre que los dueños de éstas las tengan registradas á nombre de personas de su confianza encargadas de cumplir las obligaciones que se imponen á los tenedores y asistir á las asambleas generales ejerciendo los derechos que confieren.

¿Por qué negar la hipótesis de que el Sr. Luna tuviese arreglada con una persona cualquiera de las que tienen acciones de la mina «Zaragoza,» á nombre de otro ó á su propio nombre, la participación de la media acción que los hermanos Madero deseaban con tanto ahinco?

Lo ilógico de la negación está demostrado con el hecho de ser ésta precisamente la realidad de las cosas.

El deudor en su afán de dejar satisfechos los deseos de sus principales, aún en sus más triviales exigencias, continuó con mayor actividad las gestiones emprendidas para obtener la media acción de Zaragoza y que estaban ya á punto de dar resultado satisfactorio. Pruébalo el telegrama dirigido á Don Alberto Mendoza, corredor minero de Santa Rosalía, Chihuahua, lugar donde se formó la Compañía y el más apropiado para la circulación de sus acciones. Para las combinaciones comerciales del interesado que debían dar por resultado la consumación del negocio, era indispensable su presencia en la mencionada población; pero habiendo solicitado el permiso de la casa para hacer esta salida se lo negaron terminantemente y creyendo que el deseo de que se les entregase la media acción que perseguían los hiciese otorgar el permiso, el Sr. Luna no vaciló en suplicar al Sr. Don Alberto Mendoza lo llamase por telégrafo; mas ni este expediente que despertaba su interés surtió en el ánimo de los acusadores, sin duda alguna porque ya era cosa resuelta por ellos, el acusarlo criminalmente.

Este llamamiento sugerido al Sr. Mendoza lo han presentado los contrarios del Sr. Luna como una estratagema para procurarse la fuga, pero tal suposición toca los límites de lo ridículo, porque siendo la ocupación del quejoso precisamente la de viajar y acabando de regresar de su último viaje, tuvo mil oportunidades de alejarse, si se hubiera considerado culpable, y sobre todo, si tenía pensado huir le era completamente inútil el que fuese mediante un permiso arrancado á los Sres. Madero.

El préstamo que obtuvo del Sr. Don Evaristo Madero Hernández y por el cual le extendió pagaré á dos meses de plazo, no fué gratuito como lo dan á entender en la querella, sino con réditos al tipo del 1 por ciento mensual según se ve por las cifras mismas, pues habiendo recibido el obli-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

gado $ 150, firmó el pagaré por $ 153, tomando en consideración los réditos convenidos.

El hecho de haber pagado oportuna y directamente los Sres. Madero todas las cantidades de dinero que pidió el Sr. Luna á los corresponsales de la casa demuestran la completa conformidad de ésta con tales entregas, conformidad de que por otra parte, hay una confesión implícita en el dicho de Don Ernesto Madero, al declarar que las mandaba pagar "para cubrir su crédito." Es evidente que si las expresadas cantidades de dinero hubiesen sido pedidas y entregadas sin su autorización ó consentimiento, la casa de los hermanos Madero no hubiera estado obligada á pagarlas de ningún modo, y en tal caso, no podría haber motivo para que sufriese su crédito á causa de no pagar lo que efectivamente no debía. No hay comerciante en el mundo que piense que para que su crédito no padezca sea necesario pagar lo que no debe y menos lo que se le defrauda. Sólo los Sres. Madero pueden vanagloriarse de haber hecho comulgar al señor Juez Letrado de Parras con esta rueda de molino.

La existencia de una cuenta corriente con intereses, abierta al Sr. Luna en los libros de la Sociedad de los Sres. Ernesto Madero y Hnos., en la cual constan hasta el último centavo, todas las cantidades de dinero que percibió á nombre de la casa en los distintos lugares del país y todo lo que la misma desembolsó por cuenta de aquel, hace inútiles las cuestiones del proceso, porque esa cuenta reasume las operaciones verificadas con el deudor y las convierte en un nuevo adeudo de un carácter eminentemente mercantil y lícito.

Sabido es que los asientos en cuenta corriente tienen en derecho la virtud de operar novación con respecto á la obligación primitiva y le imprimen el carácter mercantil si de personas comerciantes se trata como en el caso presente.

No debemos dejar de señalar como cosa notablemente favorable á los intereses del procesado que en esa cuenta,

cuya copia obra en el juicio presente, se le han cargado con intereses, no solamente las partidas pedidas en sus viajes, como quiere hacerlo creer la parte contraria, sino partidas provenientes de rentas de la casa ocupada por su familia, de premios por póliza de seguros de vida y accidentes en las compañías "La Mútua" y "La Fraternal," de mensualidades á su familia, de pagos por su cuenta á acreedores foráneos, de pagos de exhibiciones de minas y de la Compañía de Luz Eléctrica, de fletes al Express, de pagos por cantidades adeudadas al mismo, de facturas de vinos remitidos por su orden, de varias cuentas debidas á personas de la capital, de honorarios de médicos, y hasta sumas entregadas al Sr. Cura Párroco del lugar etc., etc., etc.

El movimiento tan heterogéneo de esta cuenta dió un saldo, ó mejor dicho, dará un saldo de especie desconocida porque se ha visto que no se ha liquidado y faltan precisamente las partidas que deben abonarse al Sr. Luna, por lo que produzcan las acciones de minas que entregó.

Es faltar á las nociones más rudimentarias, querer señalar á este saldo el género determinado de cantidades pedidas por el deudor á los corresponsales de la casa. Inútil es llamar por más tiempo la atención sobre la arbitrariedad de la especificación del saldo, pues por una cuenta de movimiento variado, no se sabe nunca la especie, género ó calidad de adeudos que constituyen el saldo, por consiguiente, si Luna debe un saldo, jamás sus acusadores tendrán razón para afirmar que proviene de tal ó cual operación y no de tal otra.

Otra prueba de que la cuenta corriente está ilíquida y de la necesidad de que se liquide con todo escrúpulo y cuidado, es que, á pesar de ser estipulación expresa del contrato, que al Sr. Luna se le pagaría el 7 por ciento de comisión, sobre las ventas hechas por su conducto, en la cuenta figura una partida con fecha 20 de Junio último, donde se le abonan

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

$328.12 cs., de este modo: "3½ por ciento sobre $9,375 que calculamos sea el valor aproximado de 375 barriles vino á $25 cada uno, que según convenio con los Sres. Losoya Hnos., tienen que consumir, $328.12."

Esta partida denuncia, primero, la violación evidente por parte de la sociedad del contrato celebrado con el deudor en perjuicio de éste, quitándole la mitad de su comisión de una sola plumada y segundo, la arbitrariedad y ventaja con que eran calculadas las comisiones que se abonaban al Sr. Luna, pues debiendo ser por el contrato 7 por ciento sobre el valor real de la mercancía, en esta partida, como se ve de bastante importancia, pusieron el valor de los 375 barriles vendidos, que les pareció *aproximado* y como es natural, la diferencia entre la aproximación y el precio verdadero no quedó á favor del Sr. Luna, y esta diferencia no fué una bagatela, sino la respetable cifra de $11 por barril, pues en casi su totalidad, el pedido fué de aguardiente de uva, cuyo precio es de $36 barril; así es, que la casa quitó á Luna $ 328. 12, mitad de su comisión calculada, como les pareció conveniente y *$ 288.75* importe de toda la comisión, de 7 por ciento sobre *$4.125*, en que se disminuyó el precio verdadero de los 375 barriles vendidos á los Sres. Losoya Hnos. de Guanaceví con intervención de nuestro patrocinado. Total, el Sr. Luna resultaría perdiendo por esta sola partida si se quedase así, la suma de *$ 616.87* y si como puede suponerse, en las demás partidas importantes, se encuentran los mismos defectos, tal vez resulte que el saldo deudor en contra del Sr. Luna no es legítimo sino forjado á fuerza de estas injustas diminuciones, de lo que le correspondía con arreglo á su contrato.

El quejoso tiene en efecto, infinidad de observaciones que hacer á la cuenta que motivó su aprehensión, de las cuales solo mencionamos las dos que quedan expuestas, por no ser nuestro fin ahora, más que demostrar que esa cuenta corriente con intereses está ilíquida, y que el llamado adeudo

no es tan grande ni tan cierto como se pretende, y que no sería difícil que después de una liquidación justificada, el Sr. Luna resultase acreedor de la casa.

Establecidos así los hechos por la relación que hacen los acusadores en la parte que se conducen con verdad y por las constancias del presente juicio de amparo, en lo que aquella relación tiene de inexacto, véamos si en estos hechos, pueden encontrarse las once circunstancias que antes hemos enumerado como elementos constitutivos de los delitos de fraude, abuso de confianza y estafa según el Código Penal del Estado de Coahuila, que es el mismo del Distrito Federal, sin las reformas que el último ha sufrido.

PRIMER ELEMENTO.

Lucro ó adquisición alcanzados por el Sr. Manuel Luna.

Se ha visto que el origen de la deuda que se persigue, del Sr. Luna para con los Sres Ernesto Madero y Hermanos es el pago que hicieron éstos á su padre el Sr. D. Evaristo Madero de la cantidad que le adeudaba el primero, con el fin de que viniese á su servicio.

Por este simple cambio de acreedores el Sr. Luna no obtuvo nada ni cambió su situación, de manera que pudiera asegurarse que alcanzó un lucro ó hizo una adquisición cualquiera. Los Sres. hijos de D. Evaristo Madero se subrogaron por el pago en el crédito de éste y esta subrogación no produjo nada en provecho del deudor pues, muy al contrario, se verificó por el empeño y la conveniencia de sus nuevos acreedores.

La cuenta corriente está ilíquida, el saldo de ella no se conoce, porque además de no haberse abonado al Sr. Luna el valor que por otra parte no se sabe de las acciones de mi-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

nas que entregó á los Hermanos Madero el día del vencimiento del pagaré, hay muchas partidas con las cuales no está conforme, y que aunque lo estuviera deben ser examinadas cuando se trata de fundar en ellas una responsabilidad criminal, pues la conformidad de una persona con déclararse deudor, si tiene efectos civiles, no puede tener el efecto de hacerlo delincuente, si esta conformidad se debe á error, engaño, deferencia ó generosidad. La justicia penal busca siempre culpables verdaderos y está en su interés no admitir criminales voluntarios, es decir, personas que se conforman por cualquier motivo con hechos falsos que les pueden reportar un perjuicio si son explotados por individuos que tienen sed de venganza. El Sr. Luna no debe á los Sres. Madero tal vez nada y el Sr. Luna, no tendría el derecho de declararse deudor cuando en ésto se funda una acusación del atroz delito de estafa. Por ésto decimos que no estando conforme con la cuenta corriente nada importaría para el caso que se debate el que lo estuviese, porque advertimos inexactitudes en esta cuenta y nosotros sus defensores no podríamos permitir que pasasen inadvertidas, aunque el desprendimiento de nuestro patrocinado lo inclinase á no hacer observaciones.

No hay pues por parte del acusado lucro ó adquisición comprobados, su deuda incierta proviene de una cesión de crédito por la cual nada obtuvo ni en nado cambió su situación, el primer elemento pues de los delitos que se le atribuyen es enteramente supuesto.

SEGUNDO ELEMENTO.

Carácter indebido ó ilícito de este lucro ó adquisición.

Aun admitiendo hipotéticamente que el Sr. Luna hubiese lucrado con el cambio de la casa, á la cual servía y con el desempeño de las obligaciones de su contrato, no puede encontrarse por más esfuerzos de imaginación que se hagan, el carácter ilícito de este lucro. Si los Sres. Ernesto Madero Hnos. pagaron lo que él debía, fué por interés de ellos, con su pleno consentimiento, y si el Sr. Luna pedía ó mandaba que la casa pagase sumas más ó menos considerables, era en virtud de su contrato, que lo facultaba para exigir gastos de viaje, de las autorizaciones especiales de las cartas de crédito que se le entregaban, y de la cuenta corriente que tenía abierta.

Este elemento de los delitos que se le imputan, es pues del todo imaginario.

TERCER ELEMENTO.

Perjuicio causado á los Sres. Ernesto Madero y Hnos., por el importe de este lucro ó adquisición.

El perjuicio que la deuda del Sr. Luna pudiera ocasionar á los Sres. Madero Hnos. es tan incierto, como la deuda misma, pero es de notarse, que en la querella se computan cantidades proporcionadas por el Sr. Evaristo Madero Hernández y por la Sra. Doña Balbina T. Viuda de Olivares, personas extrañas á los intereses de la Sociedad Ernesto Madero y Hnos., y que ciertamente no se creen perjudicados. En consecuencia, el perjuicio para los acusadores es ó incierto ó usurpado.

CUARTO ELEMENTO.

Engaño del Sr. Luna á la expresada Sociedad, para adquirir alguna cosa ó alcanzar el lucro ó bien aprovechamiento por parte del primero de algún error en que se encontrare la Sociedad para conseguir el mismo fin.

No hemos podido comprender, en qué hace consistir la parte acusadora el engaño con que el Sr. Luna los haya po-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

dido inducir á que lo empleasen como dependiente viajero, celebrasen el contrato respectivo, pagasen á Don Evaristo Madero lo que le debía, le abriesen cuenta corriente con intereses, le diesen cartas de crédito y le admitiesen acciones de minas en pago. Todas estas operaciones son tan frecuentes y tan conocidas que es imposible engañar á nadie para que las lleve á cabo y menos á comerciantes viejos y experimentados que no sólo conocen el alcance de ellas, sino que tienen perfecto conocimiento de los hombres con quienes tratan. Con relación al caso concreto, es hasta risible asegurar que el joven comisionista Don Manuel Luna, engañó en asuntos de su comercio al hábil y precavido director de la casa de los Sres. Madero.

Muy por el contrario, eran tan exigentes á este respecto que al terminar cada viaje de los muchos que verificó, le pedían cuentas pormenorizadas, liquidaban en el acto la comisión, asentaban en la cuenta corriente las partidas respectivas, le recogían los documentos correspondientes y le pedían una infinidad de explicaciones mandando pagar, como era natural, las sumas de dinero pedidas en su viaje y después de cargarlas en la cuenta corriente con interés.

Si hubieran quedado descontentos del resultado de las operaciones ó de la conducta del viajero en cualquiera de sus expediciones, no habría verificado la siguiente, y tan no fué así, que durante el tiempo que desempeñó este trabajo hizo más de diez viajes realizando poco más ó menos la respetable suma de *cien mil pesos*, no partiendo sin haber dejado liquidado el resultado del viaje anterior y llevando consigo nuevas cartas y nuevas instrucciones.

Todo esto hace enteramente imposible el engaño para la Sociedad acusadora, pues demuestra que sus gerentes obraron siempre del modo más concienzudo y con toda reflexión.

QUINTO ELEMENTO.

Entrega al Sr. Luna de dinero, documentos de valor ó cualquiera otra cosa por los Sres. Ernesto Madero y Hnos.

Se ha visto ya que el fraude se hace consistir en las cantidades pedidas por el Sr. Luna á los corresponsales de la casa para sus gastos de viaje, en lo que se pagó á Don Evaristo Madero para que consintiera la separación, en los gastos que se dicen exagerados de la curación de Don Francisco Olivares y en el préstamo con interés que le hizo el Sr. Don Evaristo Madero Hernández. Desde luego se deben descartar las sumas relativas al préstamo mencionado y á los gastos de curación del Sr. Olivares, porque las personas que hicieron estas ministraciones son enteramente extrañas á los negocios de los acusadores y por lo mismo jurídicamente no puede decirse que de ellos las haya recibido el quejoso.

En cuanto á los gastos de viaje que el Sr. Luna recibió de los corresponsales, además de que no está comprobado que los deba por estar ilíquida y mal llevada la cuenta de éste, si fraude hubiera, serían los corresponsales que hubieran entregado estas sumas sin autorización de los defraudados, y no los Hnos. Madero que según dicen pagaron después estas sumas á las víctimas con entero conocimiento de los hechos y por último la cantidad primitivamente entregada lo fué á Don Evaristo Madero y no al Sr. Luna.

Resulta pues, que ninguna de las cantidades en que se hace constituir el fraude, han sido entregadas al acusado por los Sres. Ernesto Madero y Hermanos, pues unas provienen de personas que no tienen ni han tenido motivo de queja, y sí expresiones vivas de agradecimiento para el quejo-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

so y otras, pedidas ó adeudadas á terceras personas que tampoco se han quejado de nadá; y si estas últimas se han hecho pagar con mucha posterioridad por los Sres. Ernesto Madero y Hermanos, ha sido en primer lugar, con derecho, y después, con pleno conocimiento por éstos, de toda la historia del crédito que se les exigía. Por consiguiente, la no existencia de este quinto elemento de la acusación, está plenamente demostrada, y con ella la imposibilidad de que pueda prosperar.

SEXTO ELEMENTO.

Celebración de un contrato entre el quejoso y la expresada Sociedad, en virtud del cual ésta le haya hecho entrega de alguna de las cosas antes dichas, sin trasmitirle el dominio.

Basta la consideración de que se trata de sumas de dinero que en derecho está considerado como cosa fungible para no admitir que entre los Sres. Madero y el acusado haya existido algún contrato por el cual recibiese esas cantidades, sin que se le trasmitiese el dominio de ellas; pero hay pruebas directas de los contratos celebrados á este respecto, y son, en primer término, el contrato de prestación de servicios con arreglo al cual el Sr. Luna estuvo desempeñando el empleo de dependiente viajero, y cuya cláusula quinta, que ya hemos trascrito, lo faculta expresamente para exigir fondos anticipados con cargo á su cuenta, en seguida, el contrato de cuenta corriente comercial, que es bien sabido dá derecho de obtener sumas de dinero para disponer de ellas como convenga á los intereses del comerciante, y por último, el pagaré extendido el 22 de Junio de 1896, que también es título que representa valores obtenidos en plena propiedad y las numerosas cartas de crédito que tienen por fin principal el de hacer disponible para la persona

á favor de quien se otorgan, las sumas de dinero que en virtud de ellas percibe.

No hay pues en este negocio contrato alguno por el cual el quejoso haya recibido valores que no le perteneciesen, y muy por el contrario, abundan los títulos netamente jurídicos que hicieron para los acusadores una extricta obligación de ministrar los fondos, materia de la cuestión.

SEPTIMO ELEMENTO.

Actos por los que el Sr. Luna haya dispuesto de tales objetos, como de cosa propia.

De la cantidad que primeramente desembolsaron los Sres. Madero, no dispuso el acusado, porque se sabe fué entregada por aquellos á su padre en pago de lo que el segundo le debía, por el interés de que viniere á su servicio; de las cantidades gastadas con motivo de la curación del Sr. Francisco Olivares, tampoco dispuso como de cosa propia, pues fueron estos gastos en provecho exclusivo del enfermo y por interés de la familia, la cual los aprobó sin objeción por aquél entonces; menos puede decirse que las sumas gastadas en los viajes del Sr. Luna, hayan sido en provecho personal, á pesar de que se le cargaban en su cuenta pues eran indispensables para el desempeño de su empleo, y en el decoro de la casa estaba que viajase con comodidad y decencia, á causa del trato frecuente con los comerciantes de las distintas plazas y de la necesidad de residir en lugares céntricos de las mismas.

OCTAVO ELEMENTO.

Intención fraudulenta de estos actos de disposición, esto es, dolo.

En vano se buscaría en todas las operaciones que relata la querella, la intención dolosa por parte del procesado, cu-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

ya prueba, á cargo de los acusadores, es indispensable para la demostración del delito, pues es principio de nuestro derecho penal, que cuando la ley exige la intención dolosa, para que haya delito, debe acreditarse la existencia de esta con la misma plenitud de pruebas que las demás circunstancias materiales que lo constituyan (art. 9º del Código Penal.)

Los criminalistas han distinguido siempre el dolo civil del dolo criminal: los Sres. Chauveau y Faustino Hélie, de tan grande autoridad en la materia, en su importante obra "Théorie du Code Pénal," dicen á este respecto: "Existen en efecto, dos especies de dolo que se pueden llamar el dolo civil y el dolo criminal, según la acción á la cual pueden dar lugar el uno y el otro. El primero, comprende en general todas las astucias y todos los artificios que, censurables sin duda en sí mismos, son empleados sin embargo, menos con la intención de dañar á otro, que con el designio de servir á los intereses del que hace uso de él. Necesario es colocar entre esta categoría, los actos de simple falta á la verdad, la simulación en los cóntratos, la exageración del precio ó de las cualidades de la cosa vendida. La ley penal no reprime esta especie de dolo, á pesar de su inmoralidad, no solamente porque es fácil defenderse de él sino porque toda tentativa de represión redundaría en perjuicio de la seguridad de las convenciones. El dolo criminal se manifiesta no solamente por la simulación y la astucia, sino que emplea maniobras culpables, tiende lazos, busca ocasiones de sorprender, trata de engañar y no tiene más que un fin, que es perjudicar los intereses de otro."

Vemos, pues, que la circunstancia característica entre el dolo jurídicamente lícito y el dolo culpable, es la de que se emplée en beneficio del que hace uso de él principalmente, ó con la mira de perjudicar intereses agenos. A la luz de esta sabia doctrina y de la definición anterior cabe preguntarnos: ¿cuál de estas dos clases de dolo ha obrado en el ánimo del Sr. D. Manuel Luna?

El origen de su deuda, el pago hecho por los acusadores á D. Evaristo Madero, fué por el interés exclusivo de los primeros. El Sr. Luna llegó á su servicio solicitado, halagado, con mil promesas y casi seducido por la amabilidad y lisonjas de sus nuevos principales. Por este simple cambio de acreedores, nada obtuvo, sino al contrario, se perjudicó en el sentido de que como lo han demostrado los acontecimientos, quedó en poder de acreedores más exigentes.

Ni dolo civil, ni dolo criminal puede descubrirse en este adeudo primitivo.

¿Cómo podrá decirse que exista dolo de cualquiera clase en el hecho de haber pedido con cartas de crédito á los corresponsales de la casa los fondos indispensables para continuar los viajes cuando estaba estipulado esto en el contrato de servicios, se daba cuenta con toda puntualidad y exactitud de estos gastos, y se cargaban en una cuenta corriente con intereses?

Ni lucro para el viajero, ni perjuicio para la casa puede encontrarse en la erogación de estos gastos.

¿Y qué lucro y qué pérjuicio se atreverá á señalar la parte contraria en el sacrificio positivo que hizo el Sr. Luna de su tiempo y de su trabajo para llevar y atender al Sr. Olivares en la Ciudad de León durante su enfermedad?

Es por demás tratar de patentizar la falta de mala fe en esta acción generosa, y dejamos á la honrada conciencia de los jueces la apreciación de lo que deba significar este hecho en contra del inculpado ó en contra de sus temerarios acusadores.

NOVENO ELEMENTO

Maquinaciones ó artificios del Sr. Luna para que sus acusadores, le entregasen alguno de los objetos relacionados.

La estafa se hace consistir en la supuesta garantía de prenda sobre acciones de minas con respecto al importe del pa-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

garé de 22 de Junio de 1896 y en el hecho de haber entregado el deudor todos los demás valores que se refiere en su carta de 22 de Junio del corriente año con excepción de la media acción de la mina de "Zaragoza;" es decir que se consideró como un artificio culpable el que el Sr. Luna haya asegurado que podía contar para el *pago* de su pagaré liso y llano vencido ese día, con el valor de la media acción de la mina de "Zaragoza."

Los reputados autores antes mencionados dicen: "que nada hay tan vago como estas expresiones de artificio ó maquinación fraudulentos:" La ley, se lee en su obra, para comprender todos los hechos que pueden determinar la entrega de valores se ha servido de un término indeciso que permite todas las acriminaciones. ¿Qué actos en efecto por inocentes, por pueriles que sean dejarían de poder ser considerados como maquinaciones? ¿Los pasos más legítimos, las proposiciones más rectas, los cuidados mas simples, no podrían tomar este carácter?

Después de la justa observación de que el fin del legislador debe ser proscribir esta arbitraria distribución de penas y circunscribir la acción del juez en los límites que deben trazársele con tanta precisión como la materia lo permita, dicen que la ley penal no debe ocuparse tratándose de estafa, de los ardides y fraudes que acompañan un gran número de transacciones; que éstos escapan al castigo por la dificultad misma de suministrar la prueba y su acriminación podía tener por resultado la desconfianza ó alarma en todas las convenciones y mantener un ataque á la libertad del comercio; que la ley no debe intervenir más que cuando los hechos se producen con un carácter grave que permite comprobarlos y cuando los ciudadanos, impotentes para garantizarse por sí mismos, tienen necesidad de la protección de la justicia; que las maquinaciones son los medios empleados para sorprender la confianza de un tercero y la expresión supone

una combinación de hechos preparada con destreza, urdida con arte. Las palabras artificiosas, agregan, las alegaciones falsas, las *promesas*, las esperanzas, no son aisladas de todo hecho exterior, maquinaciones; es necesario que estén acompañadas de un acto cualquiera destinado á apoyarlas y á darles crédito. Siguiendo estas ideas, la corte de casación francesa ha juzgado que la jactancia de un poder imaginario, las falsas seguridades de una fortuna quimérica, cuando se reducen á simples alegaciones no pueden caracterizar el delito, ni tampoco las simples mentiras cuando no versan sobre el nombre ó la cualidad de la persona.

Se ha reconocido por sentencias de casación francesas, que no se debían reputar maquinaciones en el sentido de la ley: la seguridad verbal dada por un individuo de que pagará tal deuda en tal época, las mentiras que hayan servido para obtener préstamos y en general las promesas, las reticencias, las palabras de mala fe, independientes de algunos otros actos exteriores y materiales.

Hemos demostrado que la prenda de las acciones de minas á que se refiere la acusación es enteramente imaginaria y que en el fondo no ha pasado otra cosa, sino que el Sr. Luna el día del vencimiento de su pagaré, entregó á los tenedores los valores mineros con que contaba para hacer el pago y que si bien no entregó la media acción de la mina "Zaragoza," de cuya adquisición estaba seguro, fué porque los mismos Sres. Madero le quitaron la posibilidad de llevar á término este negocio, negándole el permiso para ir á Santa Rosalía, donde era necesaria su presencia para el caso.

Este ofrecimiento de un valor que se está dispuesto á conseguir pero que no se tiene, lejos de ser un artificio ó medio de engañar, debe estimarse como un deseo vehemente de dejar satisfechas las aspiraciones de los acreedores, pagándoles en la especie que más les convenía.

La afirmación de que el Sr. Luna contaba con el valor de

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

esta media acción aun cuando no fuese exacto, no puede constituir la maquinación que requiere la ley, porque ni hubo garantía especial de la deuda, ni la afirmación se hizo para obtener su valor, sino un año después y con el único propósito de infundir la creencia en la seguridad del pago que efectivamente tenía el deudor.

Jamás habrá tribunal ilustrado que apartándose de la sana jurisprudencia, declare *que la simple afirmación de la solvencia personal* cuando se trata, no de adquirir, sino de pagar, sea una maquinación fraudulenta.

DÉCIMO ELEMENTO.

Falta de falsedad en las maquinaciones.

Este elemento es negativo, y no tiene más objeto, que distinguir los delitos expresados del delito de falsificación, y del cual es evidente que no se trata en el caso.

UNDÉCIMO ELEMENTO.

Éxito completo de las maquinaciones.

El éxito completo de los artificios ó maquinaciones empleados por el estafador, es condición principalísima del delito, pues sin él no se consumaría el engaño, ni habría en ellas la formalidad ó gravedad necesarias.

Ahora bien, el artificio que se dice empleó el Sr. Luna, no tuvo resultado práctico, porque los acreedores lejos de ser engañados, no le concedieron ni siquiera una espera y el proceso está demostrando que se apresuraron á emplear la coacción del procedimiento criminal y la pérdida de la libertad contra su deudor.

Pocas acusaciones habrá tan desdichadas como ésta, en que no existe comprobado uno solo de los elementos constitutivos de los delitos que se atribuyen al procesado. Bastaría que faltase uno, para quitarle á la deuda el carácter criminal; pero faltando todos, se hace más clara su naturaleza puramente civil y la violación de la garantía constitucional, se desprende con toda su atrocidad.

Creemos haber dejado enteramente demostrado que es imposible encontrar en la conducta del quejoso, un hecho culpable que amerite su prisión, y muy por el contrario, señalado y puesto de manifiesto, los títulos meramente mercantiles que constituyen el origen y la naturaleza de su deuda, como son el pagaré de 22 de Junio de 1896, la cuenta corriente con intereses que le fué abierta en los libros de los Sres. Madero, el contrato de prestación de servicios celebrado con éstos y las cartas de crédito, en virtud de las cuales le proporcionaron fondos en distintas poblaciones del país, y téngase bien presente que todos estos documentos comprueban, no diversos adeudos, sino el único que representa el repetido pagaré de 22 de Junio, cuyo vencimiento dió á los acreedores el motivo de la acusación.

La abolición de la prisión por deudas, Señores Magistrados, que con tanta grandeza sanciona el Código fundamental de la República, es un principio de justicia conquistado por la civilización moderna como un complemento necesario al goce de la libertad individual.

La prisión por deudas era hija legítima de la odiosa institución de la esclavitud. El vil comercio del ser humano engendró la idea de que era lícito privar de la libertad á un hombre por dinero, como por dinero se le arrebataban sus derechos más sagrados y la dignidad de su existencia.

Una queja como la del presente juicio de amparo, debe inspirar por su sola índole un grandísimo interés, si las cárceles han de ser, según lo quiere nuestra Constitución, úni-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

camente encierro de los delincuentes y no instrumentos atroces de coacción y martirio para los indigentes que tengan la desgracia de no poder satisfacer la avaricia de acreedores sin conciencia.

En el caso concreto que nos ocupa, hay no solamente un deseo inmoderado de obtener el pago de la deuda, sino el olvido de largo tiempo de servicios leales y honrados, provechosos y eficaces; el desconocimiento de la sinceridad con que el deudor se desprendió de todo lo que poseía y lo entregó á los hermanos Madero, de preferencia á otros muchos acreedores, para disminuir su carga; el silencio absoluto sobre la sumisión y condescendencia con que el inculpado veía minorar arbitrariamente sus ganancias en los asientos de los libros y la ingratitud con que se correspondió á todos estos méritos y más á aquel generoso sacrificio de haber permanecido lejos del lecho en que su padre agonizaba para atender, obedeciendo á los ruegos de los Sres. Madero, á un hombre dominado por el vicio y con quien no lo ligaban lazos de ninguna naturaleza.

La conducta observada por este joven comerciante, entregado al servicio de la casa de los Sres. Madero y las mil manifestaciones de aprecio que de ellos recibió en otro tiempo, despertándole grandes esperanzas para lo porvenir, le daban el derecho de creer que no desmentirían estos sentimientos y cumplirían su propósito de ayuda y protección; pero que no fué así, es lo único que demuestran ampliamente estos autos y por eso decimos, que si en ellos se buscase un defraudado, no sería ciertamente el capital de los Sres. Madero, sino el Sr. Luna, defraudado por ellos en sus sentimientos y esperanzas legítimas.

Por todos las anteriores consideraciones y fundamentos legales, á esa H. Corte pedimos se digne confirmar la sentencia del C. Juez de Distrito de Coahuila, que amparó á nuestro honrado patrocinado contra la prisión arbitraria á

que lo redujo el C. Juez de Letras del Distrito de Parras, declarando que la Justicia de la Unión lo ampara y protege contra los actos de que se ha quejado.

México, Diciembre 2 de 1897.

Lic. Lorenzo Elízaga.

Lic. Francisco Martínez Ortíz.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Derechos reales imprevistos en el Código Civil

por el pasante de derecho D. JUSTINO FERNANDEZ CASTELLÓ.*

Negar la influencia que en todos los tiempos ha ejercido el derecho de propiedad, sería desconocer la fuerza vital de este principio, cerrar los ojos á la luz, desmentir la historia.

Desde el origen del mundo, ha sido el móvil que ha puesto en ejercicio las facultades individuales, el vínculo de unión en las familias, el fundamento de la autoridad, la causa y señal de los poderes públicos.

Los Hebreos, los demás pueblos del Oriente, la India, el Egipto, las primitivas ciudades Griega é Italiana, las Repúblicas de Esparta y Atenas, Roma, las tribus septentrionales con el elemento individualista que importaron á la civilización, la conquista de la Europa por los bárbaros implantando tres dominios: el alodial (en interés del individuo), que más tarde produjo el feudalísmo, los diversos señoríos y el mayorazgo; el romano propio de los vencidos, con el cual estaban combinados el interés individual y el colectivo; y el comunal en que predominó el interés colectivo sobre el individual abriendo la puerta á la amortización de la propiedad por medio de la Iglesia y los Municipios, la gran revolución

* Esta disertación fué leída por su autor el malogrado joven Justino Fernández, en la conferencia que sustentó en la Escuela de Jurisprudencia el 13 de Septiembre de 1893, siendo alumno de *segundo año*.

que comenzó á formarse desde el siglo XVI para estallar en el siglo XVIII, hundiendo instituciones como el feudalísmo, los señoríos, la mano muerta, etc., las revueltas y revoluciones producidas en otras naciones que á ejemplo de la Francia dieron muerte á esas instituciones, las ideas comunistas que se han hecho sentir, y la cuestión del socialismo palpitando actualmente, testigos son de la importancia que la reglamentación del derecho de propiedad ejerce en las naciones. Y si esa importancia está demostrada por la historia del mundo, los legisladores deben poner especial cuidado al dictar las leyes relativas entre las cuales se enumeran la referentes á derechos reales, supuesto que afectan directamente la propiedad.

Ahora bien, ¿podrá el legislador abrir impunemente las puertas á los particulares para que críen cuantos derechos reales les parezcan convenientes? ó por el contrario, ¿deberá la ley poner coto á la creación de esos derechos enunciando y reglamentando sólo aquellos que juzgue admisibles?

¿En la legislación mexicana los únicos derechos reales que existen, son el dominio, las servidumbres, la prenda, la anticresis, la hipotecá y los censos; ó las partes pueden crear otros derechos reales distintos á los enumerados por el Código Civil?

Esta cuestión que se suscita entre nosotros con motivo de los términos en que se hallan redactados los artículos del Código Civil, ha surgido y surge también en otros países, como en Francia, á consecuencia de que su legislación, semejante á la nuestra, enumera y reglamenta ciertos derechos reales, sin prohibir de una manera expresa y terminante á los particulares la creación de otros nuevos.

Yo creo, que á pesar de no existir una disposición expresa y terminante que tal prohibición contenga, los particulares no están autorizados para crear nuevos derechos de esa especie.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON ®
DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS

Procuraré demostrarlo:

La doctrina y la jurisprudencia francesa en general sostienen la tesis contraria, contando entre sus filas campeones como Laurent, Tullier, Dalloz, etc., que forman un baluarte en pro de su opinión con los siguientes raciocinios:

I. Los derechos reales, á excepción del de propiedad, son desmembramientos de ésta, es decir, actos de propiedad, maneras de utilizarla, de sacar provecho de ella, y como la propiedad es el derecho de gozar y disponer libremente de una cosa, el propietario puede crear cuantos derechos reales apetezca ó desee sobre ella.

II. Como lo que no está prohibido está permitido y no hay disposición alguna que prohiba á los particulares la creación de otros derechos reales, debe entenderse que esto último se les permite.

III. El mismo legislador autoriza la creación de otros derechos reales, supuesto que á propósito de las servidumbres que tienen ese carácter, faculta á los particulares para que establezcan cuantos estimen convenientes.

Ahora bien, es cierto que la propiedad es el derecho de gozar y disponer libremente de una cosa; pero también lo es que ese derecho tiene sus límites: el orden público. ¿Dentro de ese límite estará comprendida la creación de los derechos reales?

Cierto es también que lo que no está probibido está permitido; pero ¿es cierto que no esté prohibida la creación de otros derechos reales distintos establecidos por la ley? Igualmente es cierto que los particulares pueden crear cuantas servidumbres reales tengan por convenientes; pero ¿es cierto que esta facilidad no esté limitada? ¿Es cierto que porque el legislador autoriza al particular para crear cuantas servidumbres reales estime convenientes, se pueda deducir que lo faculta para crear otros derechos reales distintos de los establecidos por la ley?

Estas son las cuestiones que tendrémos que examinar escrupulosamente para alcanzar la verdadera solución jurídica.

Es un hecho indiscutible y fuera de duda, porque se palpa y siente que al lado del interés individual está el interés colectivo, el interés social. También es evidente que para que una nación viva y prospere, preciso es que estos dos intereses coexistan armónicamente, que el individuo que necesita de la sociedad, supuesto que en ella vive, le preste su contingente sacrificando, si es necesario en caso de conflicto, su propio interés en vista del de aquella. La sociedad está establecida para velar por el individuo, para ayudarlo y protegerlo, para favorecer el desarrollo de sus facultades, para hacer respetar sus derechos; pero para que la sociedad pueda cumplir con tan notables fines, necesario es primero que exista y viva, y para que exista y viva es preciso que el individuo, apartándose del egoísmo, sacrifique algo de su propia individualidad en favor de la sociedad. Los buenos legisladores, al dictar sus leyes, deben tener á la vista estas verdades rudimentarias para conseguir que sus determinaciones, al mismo tiempo que satisfagan las necesidades del individuo, llenen las de la sociedad.

Entre esas leyes, unas hay que afectan más directamente al individuo que á la sociedad, y otras llamadas de orden público, que, viceversa, afectan más á la sociedad que al individuo. Las primeras, establecidas principalmente en favor del particular, pueden ser modificadas ó renunciadas por éste, porque á nadie se le hace un beneficio contra su voluntad; pero no así las segundas, porque permitir que los particulares las modificasen ó alterasen á su capricho, sería tanto como admitir que el orden público, que la sociedad, estaban sujetos, dependían de la voluntad de un sólo individuo, cosa absurda é inadmisible que indudablemente produciría el desequilibrio social.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

¿En cuál de estos dos grupos debemos colocar las leyes que crean derechos reales?

La resolución de esta dificultad sería sumamente sencilla si tuviésemos reglas positivas, ciertas y concretas que nos pudieran servir de cartabón para apreciar si tal ó cual disposición interesaba al orden público; pero desgraciadamente, ni la legislación ni la ciencia nos suministran reglas. Sin embargo, ahora que las relaciones entre nación y nación se han acrecentado; ahora que surgen á menudo cuestiones de derecho internacional privado, conflictos de leyes, los publicistas, los jurisconsultos y las naciones, han tratado de establecer un criterio general que sirva para apreciar si tal ó cual ley es de orden público; y hasta ahora el criterio más aceptado es el que defiende Fiore; dice este autor: "Se deben con-"siderar como leyes de orden público, no solamente las leyes "constitucionales, administrativas, penales y de policía, sino "también las que se dirigen á la seguridad de las personas *y de la propiedad*, á la protección de las buenas costumbres y *las "que de una manera general proveen á la organización social.* "El carácter distintivo de estas leyes, es, que teniendo por "objeto la protección de ciertas exigencias sociales, se impo-"nen á todas de una manera absoluta, y que jamás, en nin-"gún caso, se permita á los particulares modificar ó contra-"venir en manera alguna las disposiciones imperativas que "resultan de ellas."

Para demostrar que las leyes relativas á derechos reales pertenecen á este grupo, me sería bastante aplicar este criterio al caso en cuestión, y abrir cualquiera página de la historia del mundo, porque en ésta puede verse momento á momento, instante á instante, la grande influencia que la reglamentación de la propiedad ha ejercido sobre el orden público, y si esa página por casualidad se refiriese al feudalismo, que formó época en los anales de la humanidad, que fué una modificación profunda de la sociedad europea; á los señoríos, á

la amortización, etc., la prueba, sería tanto más evidente, cuanto que aun no se extingue el fuego de la revolución francesa, cuanto que aún se hacen sentir en España las leyes de 6 de Agosto de 1811, de 3 de Mayo de 1823; en México las de 26 de Junio y 29 de Julio de 1859, etc., etc.

El feudalismo extendido como una red por toda Europa, abrumando la posesión del suelo con cargas odiosas, al caer, arrastró en su ruina, el retracto, los censos y en general las instituciones que sujetaban el dominio del suelo á prestaciones perpetuas.

¡Francia dió el ejemplo que imitaron después otras naciones!

La Iglesia, á pesar de haberse apoderado de todas las conciencias, en su afán de amortizar, con la mano muerta desequilibró el orden social, avivando el espíritu desamortizador, que más tarde desestancó la propiedad.

¿Habrá alguno que en vista de estos acontecimientos y de otros análogos que con harta frecuencia nos presenta la historia, pueda sostener que las leyes que establecen los derechos reales no sean de orden público? Habrá alguno que se atreva á negar la tendencia natural de los pueblos, en los siglos transcurridos, á suprimir todo lo que implica carga ó gravamen sobre la propiedad, todo lo que tiende á retraerla del Comercio?

¿Habrá alguno que contra la corriente económica, que considera el movimiento de la propiedad, como la fuerza que le anima y vivifica, sostenga que ese movimiento se haga depender de la voluntad del individuo, y no de la voluntad social?

Nó, y mil veces nó. Luego las leyes que afectan directamente á la propiedad, las leyes que tienden á facilitar su transmisión, las leyes que le imponen cargas ó gravámenes como son los derechos reales distintos del de propiedad, son leyes de orden público.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Para comprobar más mi afirmación, bástame recordar, que es principio de derecho internacional privado, que respecto á derechos reales debe regir la ley del lugar en que los inmuebles estén ubicados, y este estatuto real se ha establecido no por simple reciprocidad sino porque se considera que las leyes comprendidas en el Estatuto real son leyes de orden público.

Sentada esta premisa, bien fácil me sería demostrar que los argumentos de los autores caen por su base.

Admito con Laurent que los derechos reales, á excepción del de propiedad, son desmembramientos de ésta, maneras de utilizarla, de sacar provecho de ella; también acepto que la propiedad es el derecho de gozar y disponer libremente de una cosa; pero no acepto, ni puedo aceptar, que porque el propietario tenga el derecho de gozar y disfrutar libremente de una cosa, lo ha de tener también para crear derechos reales distintos de los establecidos por la ley, cuando las leyes sobre derechos reales, cuando la creación de estos derechos es de orden público, cuando á la sociedad y no al individuo es á la que toca medir y apreciar la conveniencia ó inconveniencia de la existencia en mayor ó menor número de esos derechos, cuando á la sociedad le corresponde fijar y reglamentar los que sean admisibles. En una palabra, concibo el derecho de propiedad, como el derecho de disfrutar y disponer libremente de una cosa, pero esto no de una manera absoluta, sino con la limitación que exija el orden público; y como entre estas limitaciones está la de crear derechos reales, concibo el derecho de propiedad tal como está definido, sin que por esto haya necesidad de admitir que los particulares tengan la facultad de crear otros derechos reales, distintos de los aceptados por la ley.

El segundo argumento de Laurent, se funda en el conocido principio de que todo lo que no está prohibido está permitido; y como la ley francesa no prohibe á los particulares la

creación de otros derechos reales distintos de los establecidos por la ley, deduce que los particulares tienen facultad para crear esos derechos.

Ese argumento, que á propósito de la legislación francesa formula Laurent, puede hacerse también con motivo de nuestra legislación, por contener ambas sobre este punto disposiciones semejantes.

Para combatirlo, principiaré por confesar paladinamente, que cierto es que en ambas legislaciones no hay un precepto expreso y terminante que prohiba á los particulares crear esos derechos; que cierto es también, que la legislación mexicana no hace en su Código Civil, ni lo que la francesa, enumerar los derechos reales; pero sí no admitiré la falsa interpretación que se da al principio: «todo lo que no está prohibido se entiende permitido,» ni puedo admitir, que porque en la legislación mexicana no se encuentra un artículo *expreso* y *terminante que prohiba á los particulares* la creación de los derechos á que nos venimos refiriendo, deje de existir dicha prohibición.

En efecto, qué, ¿porque no exista como de hecho no existe una ley expresa y terminante que prohiba á los particulares nombrar Secretarios de Estado, dictar leyes, deberemos admitir que no estándoles prohibido les esté permitido ejecutar dichos actos? qué ¿porque no existe una ley que expresa y terminantemente prohiba el matrimonio entre dos hombres, deberemos concluir que no estándoles prohibido les está permitido verificarlo?

Si se resolviesen afirmativamente estas cuestiones; si el principio «todo lo que no está prohibido se considera permitido,» se interpretase con la generalidad y amplitud que queda expuesta, llegaríamos al terreno de los más grandes absurdos, como á los que nos conducen los ejemplos expuestos.

Es cierto que todo lo que no está prohibido está permitido: pero para que la prohibición exista no es necesario que

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

la declare la ley de una manera expresa y terminante, sino que es suficiente se deduzca, si no de la letra, sí del espíritu de la ley. Basta que digan los legisladores que las leyes deberán ser dictadas por el poder legislativo, que los Secretarios de Estado serán nombrados por el Presidente de la República, que el matrimonio es la unión de un sólo hombre con una sola mujer, para que se entienda prohibido á los particulares dictar leyes, nombrar Secretarios, ó celebrar un matrimonio entre dos hombres, y sin embargo, no hay disposición expresa y terminante que se los prohiba.

A propósito de los derechos reales, sucede lo mismo; no hay una disposición expresa y terminante que prohiba á los particulares crear otros derechos distintos de los establecidos por la ley, y sin embargo, les está prohibido el hacerlo. Así lo comprueban los siguientes raciocinios:

I. La historia nos ha demostrado que la creación de derechos reales, ha afectado y afecta directamente al orden público, y en consecuencia, que la creación de esos derechos corresponde á la sociedad, que es la única que puede apreciar y medir hasta dónde puede admitirlos, cuáles de ellos puede aceptar, etc., etc., y si esta es una atribución de la sociedad, evidentemente no lo es del individuo, y evidente es también que á éste le está prohibido crearlos, supuesto que le está prohibido atribuirse facultades que sólo corresponden á la sociedad.

II. El Código Civil, siguiendo la tendencia general de todas las legislaciones, trata de reducir el número de los derechos reales; así lo comprueba y demuestra la supresión de las hipotecas tácitas y generales, de los censos reservativos, de los irredimibles, y sobre todo, de la declaración terminante que á ese respecto hacen los expositores del Código, alegando como razón, que eso es necesario para el progreso y desarrollo de la riqueza pública. Ahora bien, si la letra de la ley, de acuerdo con el espíritu de la civilización, tiende á reducir el número de los derechos reales; si los que admite los sujeta á reglas estrictas y especiales, ¿podría admitirse que los particulares crearan á su voluntad otros nuevos? ¿podría sostenerse que esto último no les está prohibido? Evidentemente que no, y si les está prohibido, no tiene ninguna fuerza y valor el argumento de Laurent, que hemos venido examinando, aun para la legislación francesa, porque ahí el legislador consagra en sus Códigos, disposiciones análogas á las nuestras, y aun si se quiere, limíta más el número de los derechos reales.

El tercero y último de los raciocinios de este autor, estriba en sostener que el mismo legislador autoriza la creación de otros derechos reales reales distintos de los establecidos por la ley, supuesto que faculta á los particulares para que creen cuantas servidumbre reales estimen convenientes. Este argumento, que indudablemente es el más débil, puede hacerse también á propósito de nuestra legislación, supuesto que el art. 1,029 del Código Civil, relativo á servidumbres reales, consagra igual disposición, aunque con una taxativa.

Decía que este argumento es el más débil, y puedo agregar que más que á la tesis contraria, favorece á la mía.

En efecto, de que el Código autorice expresa y terminantemente á los particulares para que creen cuantas servidumbres reales estimen convenientes, no puede deducirse en manera alguna que los faculte para crear otros derechos reales distintos de los establecidos por la ley, supuesto que ésta admite y reglamenta las servidumbres reales. Por el contrario, de ese mismo hecho, de esa misma facultad que otorga la ley al particular, limitándola al caso de servidumbres reales y con la taxativa de que esa facultad, se ejercitará siempre que no se ataque en manera alguna al orden público, sí puede deducirse que la ley prohibe á los particulares la creación de otros derechos reales distintos de los que establece, supuesto que ha tenido hasta el cuidado de consignar un precepto es-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

pecial y expreso para conceder al particular la facultad de crear especies de servidumbres reales, cuando ella admite el género y esto con la taxativa de que esas especies no sean contrarias en manera alguna al orden público.

He procurado demostrar que los argumentos de Laurent no tienen fuerza alguna, y si es cierto, como lo es, que la creación de esos derechos es de orden público; si es cierto que á la sociedad es á quien toca medir la conveniencia ó inconveniencia del establecimiento de un derecho real, podrémos concluir con firmeza, que á los particulares no pudo ni quiso la ley concederles esa facultad.

Por otra parte, ¿qué necesidad hay para admitir que se deban crear otros derechos reales distintos de los establecidos actualmente por el Código? Si esa necesidad existiera, las leyes, que no son más que la traducción de las necesidades, contarían entre sus preceptos los relativos á este asunto, bien estableciendo esos otros derechos reales, bien facultando á los particulares para que los crearan, como lo hizo á propósito de las servidumbres reales; y como en vez de esta clase de disposiciones, se encuentran otras que demuestran, como quedó probado ya, la tendencia del legislador á disminuir el número de los derechos reales, podemos deducir que esa necesidad no existe, y si existe, existen también necesidades más imperiosas que obligaron al legislador á prescindir de aquellas, y á consignar en sus Códigos, disposiciones que les son perfectamente contrarias.

Además, ¿cuáles serían esos otros derechos reales? Como tales se citan el contrato llamado por los antiguos de superficie; el convenio que celebran con los propietarios de teatros ciertos particulares, convenio en virtud del cual, estos últimos tienen derecho de preferencia, sobre las demás personas del público, para que se les dé determinada localidad; el convenio celebrado por los dueños de telégrafos, de telefónos, con los propietarios de inmuebles, para que éstos permitan, en

sus respectivas propiedades, el establecimiento de postes y alambres telegráficos, y así otros semejantes.

Desde luego hay que notar que estos contratos se celebran actualmente sin tener que recurrir á considerarlos como derechos reales, así, el contrato que se llama de superficie, ha vuelto á ser lo que fué en su origen, un simple contrato de arrendamiento; como ejemplo, señalaré el contrato celebrado por los Sres. Macedo con el propietario del terreno en que construyeron el teatro Arbeu; el contrato que ciertos particulares celebran con los propietarios de los Teatros, significa un simple derecho personal de preferencia; pero ni el público, ni el respectivo propietario de determinado Teatro, han pensado en darle el carácter de derecho real; también las Compañías de telégrafos y telefónos celebran con los propietarios, contratos, en virtud de los cuales, estos últimos se obligan á permitir que en su finca se establezcan postes y pasen alambres, limitándose á darles el carácter de derechos personales; y ni las Compañías de telégrafos, ni los particulares que tienen derecho de preferencia en un Teatro, han soñado en registrar sus respectivos títulos, ni en que eso signifique un gravamen sobre la propiedad; ni en el Registro público se encuentra listado un solo título que quiera implicar un derecho real distinto de los establecidos por la ley.

Estos hechos vienen á confirmar que no es necesario admitir otros derechos reales distintos de los establecidos por la ley, supuesto que aquellos contratos que podían dar nacimiento á derechos de esa especie, se celebran bajo la forma de simples derechos personales, sin que esto implique, por parte de los particulares, retraimiento para celebrarlos.

Y si esto es cierto; si el comercio no sufre en manera alguna; si los particulares se conforman con las garantías que suministra un simple derecho personal, es innecesario recurrir á la admisión de otros derechos reales.

Ahora bien, siendo innecesaria la admisión de esos nue-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

vos derechos, correspondiendo á la sociedad el determinar cuáles de ellos son admisibles desprendiéndose de la legislación mexicana la prohibición para que los particulares creen nuevos, y tendiendo el espíritu de las legislaciones actualmente vigentes en el mundo, á disminuir el número de esos derechos, lógico es concluir que indudablemente á los particulares no les es permitido crear otros derechos nuevos, distintos de los que establecen las legislaciones á que respectivamente están sujetos. En consecuencia, en el Distrito Federal solo podrémos considerar como derechos de esa especie: el dominio, las servidumbres, comprendiendo en esta clasificación tanto las reales como las personales;[1] la prenda, la anticresis, la hipoteca y los censos, consignativo y enfitéutico.

México, Septiembre 13 de 1893.

Justino Fernández Castelló.

1 Usufructo, uso y habitación.

Estudio sobre la ley de 3 de Junio de 1896, que dió las bases para la legislación bancaria, por el Lic. Abel Botello.

La cuestión de los Bancos, que tan unida se encuentra con el crédito, es una de las más importantes de la Economía Política y del comercio industrial. El crédito que ha dado lugar á tantas quimeras y cuyas virtudes se han exagerado tanto, forma la base de las instituciones bancarias. «Los Bancos son establecimientos donde se hace una concentración de capitales para que de allí salgan á fecundar la industria y el comercio, acelerando sus progresos y favoreciendo el buen éxito de sus empresas. El banco es el intermediario entre los capitales que buscan inversión y el trabajo que busca capitales; establece la concurrencia entre éstos haciendo que todos trabajen y traigan una reducción en el tipo proporcional del interés; aumenta la producción al dar un medio de trabajo á hombres activos y emprendedores que carecen de él; al recoger «los pequeños capitales que viven alejados de la circulación y son del todo improductivos, aumentan la masa de los capitales disponibles y obrando eficazmente sobre la rapidez que el crédito imprime á la circulación monetaria, permiten llevar á término, con igual cantidad de numerario, mayor número de operaciones que acrecientan el movimiento de la vida industrial y mercantil de un pueblo.»

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

vos derechos, correspondiendo á la sociedad el determinar cuáles de ellos son admisibles desprendiéndose de la legislación mexicana la prohibición para que los particulares creen nuevos, y tendiendo el espíritu de las legislaciones actualmente vigentes en el mundo, á disminuir el número de esos derechos, lógico es concluir que indudablemente á los particulares no les es permitido crear otros derechos nuevos, distintos de los que establecen las legislaciones á que respectivamente están sujetos. En consecuencia, en el Distrito Federal solo podrémos considerar como derechos de esa especie: el dominio, las servidumbres, comprendiendo en esta clasificación tanto las reales como las personales;[1] la prenda, la anticresis, la hipoteca y los censos, consignativo y enfitéutico.

México, Septiembre 13 de 1893.

Justino Fernández Castelló.

1 Usufructo, uso y habitación.

Estudio sobre la ley de 3 de Junio de 1896, que dió las bases para la legislación bancaria, por el Lic. Abel Botello.

La cuestión de los Bancos, que tan unida se encuentra con el crédito, es una de las más importantes de la Economía Política y del comercio industrial. El crédito que ha dado lugar á tantas quimeras y cuyas virtudes se han exagerado tanto, forma la base de las instituciones bancarias. «Los Bancos son establecimientos donde se hace una concentración de capitales para que de allí salgan á fecundar la industria y el comercio, acelerando sus progresos y favoreciendo el buen éxito de sus empresas. El banco es el intermediario entre los capitales que buscan inversión y el trabajo que busca capitales; establece la concurrencia entre éstos haciendo que todos trabajen y traigan una reducción en el tipo proporcional del interés; aumenta la producción al dar un medio de trabajo á hombres activos y emprendedores que carecen de él; al recoger «los pequeños capitales que viven alejados de la circulación y son del todo improductivos, aumentan la masa de los capitales disponibles y obrando eficazmente sobre la rapidez que el crédito imprime á la circulación monetaria, permiten llevar á término, con igual cantidad de numerario, mayor número de operaciones que acrecientan el movimiento de la vida industrial y mercantil de un pueblo.»

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Las instituciones de crédito, como dice Molinari, constituyen un inmenso aparato aspirador y distribuidor, una bomba aspirante é impelente de capitales.

Pero si desconociendo los principios científicos en que se basan estas instituciones, se falsea su naturaleza, si se les atribuyen funciones que no son suyas, si se les dá una libertad exagerada ó si, por el contrario, se les encierra en un círculo de trabas y exigencias, ó producen grandes desastres ó son inútiles por completo.

Nuestro legislador se ha ocupado, en una ley especial, de las instituciones bancarias y el objeto de este trabajo será examinar si las bases dadas por el Ejecutivo, en esta materia, por la ley sobre bancos de emisión de 3 de Junio de 1896 y que desarroyó éste en la de 19 de Marzo de 1897, están conformes con los principios económicos y las necesidades del país.

Por razón de método dividiré mi estudio en las siguientes partes:

I. Sistemas de Bancos.

II. Sistema más adaptable á México.

III. Intervención del Estado en las instituciones de crédito.

I.

Los diversos sistemas que sobre Bancos se han creado, han motivado reñidas discusiones por parte de los economistas y estadistas de todas categorías. Ligeramente voy á examinar estos sistemas.

Partiendo de una base falsa, como es la de confundir los billetes de Banco con la moneda, se ha producido la siguiente teoría: supuesto que el Estado tiene la facultad ó el privilegio de acuñar la moneda para vigilar su ley y uniformar su tipo, el Estado debe fundar, poseer y administrar un Banco de circulación, como funda, posee y administra las Casas de Moneda.

Además de las inexactitudes del principio en que esta teoría se apoya, pues el billete de Banco no es más que una simple promesa de pago, se le puede hacer esta objeción que es de mayores consecuencias en la práctica. El Estado, dice Leroy–Beaulieu, no tiene en muchos de sus funcionarios ni el estimulo, ni el freno del interés personal; no está sometido á ninguna concurrencia cuya acción pueda sentir continuamente. Por esto, con frecuencia, no proporciona los medios al fin. En muchas de sus obras, el punto de visto estético domina al del interés bien entendido, por ejemplo, en los caminos, edificios públicos, etc. De esto resulta un derroche de fuerzas y de capitales.» El Estado para cubrir ese derroche de fuerzas y capitales, teniendo á su alcance y sin competencia el poderoso instrumento de crédito que se llama Banco, puede recurrir al curso forzoso de billetes de Banco ó de Estado y que consiste en obligar á los particulares á recibir en pago en las transacciones los billetes que se emiten en cantidades, frecuentemente superiores á las necesidades del mercado. Con esta operación se suprime la Moneda metálica, no hay medida fija, no hay talón estable para el valor de las mercancías, viene una depreciación en los billetes con relación á la moneda, depreciación que alcanza límites increíbles, como los asignados en Francia á fines del siglo pasado y como, en menor escala, en la actualidad sucede en Cuba con los billetes españoles.

El Estado es mal empresario; no es el exclusivo, ni siquiera el principal agente del progreso. El factor principal del progreso es la iniciativa de los particulares y de las sociedades libres. La experiencia demuestra que solo á expensas de la actividad de los particulares y de las sociedades libres puede obtenerse una gran actividad del Estado. Más vale que la vida y la iniciativa estén difundidas en todo el cuerpo so-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

cial que el que estén concentradas en un solo órgano que tiene á su disposición un poder infinito de coacción y un poder infinito de taxativa. El Estado debe ser un agente conservador.

Estas razones han hecho que los más notables economistas condenen el sistema del Banco de Estado.

El sistema que consiste en dar el monopolio bancario á una gran compañía tiene estos inconvenientes: 1º Como todos los monopolios, por falta de concurrencia, impone toda clase de condiciones al consumidor, para obtener así un lucro desmedido. 2º «Una gran administración tiene una marcha rígida, formas mecánicas que no se pliegan fácilmente á las necesidades del crédito. Un Banco único y en general todo establecimiento comercial demasiado considerable funciona con más gastos y más mal que uno de medianas dimensiones» y 3º Un Banco único se transforma fácilmente en Banco de Estado, presentando así los inconvenientes mencionados. Este sistema es el establecido en Francia, Rusia, Portugal, Suecia y Austria.

El Banco de Francia, tipo de los de este sistema, ha salvado todos los inconvenientes y ha contribuido en mucho al desarrollo industrial y á la gran riqueza de aquella nación. El Banco fué creado por Napoleón I; comenzó sus operaciones el año de 1800 con un capital de treinta millones de francos y con el derecho de emitir billetes sólo para París. En la Restauración, se fundaron Bancos departamentales que emitían billetes para su Distrito. Después de la revolución de 1848 se ordenó la «supresión de los Bancos departamentales y su fusión con el Banco de Francia, reuniendo así sesenta y ocho millones de capital. El Banco tiene la concesión de monopolio hasta 1897; posee un capital de doscientos millones y ha prestado á su país servicios tales como facilitarle mil quinientos millones de francos durante la guerra con Prusia, emitiendo billetes que tuvieron aceptación pública.

Otro sistema llamado de privilegio y concurrencia ó mixto, consiste el que al lado de un Banco privilegiado por el Estado existen Bancos particulares sin privilegio. Es el sistema adoptado en Inglaterra. Creo oportuno dar una ligera idea de los Bancos ingleses pues aquella nación es la más rica y más práctica del mundo.

En 1694 el Parlamento autorizó la creación del Banco de Inglaterra con un fondo de un millón doscientas mil libras esterlinas y pudiendo emitir billetes llamados *bank-notes*, negociar toda clase de documentos mercantiles, recibir depósitos, hacer préstamos hipotecarios y hacer empréstitos al Gobierno por la totalidad de su numerario. Actualmente el Banco tiene un capital de veinte millones de libras en acciones de mil libras totalmente exhibidas; cobra todas las contribuciones, se encarga de acuñar la moneda, paga á los acreedores del Gobierno y por varios decretos, tiene el privilegio de emitir billetes al portador en Londres y en un radio de sesenta y cinco millas, emisión que iguala al valor de la deuda del Gobierno y al de los depósitos en barras de oro y plata.

Consecuencia del privilegio del Banco fué que á principios del siglo pasado se prohibiera la existencia de establecimientos semejantes que estuvieran formados por sociedades de más de seis personas. En el siglo presente se autorizó á estas sociedades á formar Bancos fuera de las sesenta y cinco millas de Londres, estipulando la responsabilidad limitada de los accionistas. Después se permitió la creación de Bancos dentro de la zona privilegiada, por acciones y sin emisión de billetes. Estos Bancos se llaman *Joint-stock-banks.* (Bancos de fondos reunidos). Los que tienen más de seis asociados tienen que limitar la responsabilidad de sus accionistas y directores. Los que tienen menos de seis, son responsables solidariamente y se llaman Bancos privados *(Private banks).* Todas las operaciones de cobros, pagos, etc., las hacen los particulares por medio de cheques que expiden contra sus

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

banqueros. De esto resultó el establecimiento de la Cámara de compensación *(Clearing House,)* que funciona de este modo. Como los banqueros tenían necesidad de hacer cobros y pagos en distintos establecimientos, imaginaron reunirse en un punto determinado donde canjean los talones de sus clientes, se abonan la diferencia y operan así una compensación que ahorra pagos y transportes de numerario.

"Los pequeños bancos de particulares ó de accionistas, dice, el Sr. Labastida, de quien he extractado los anteriores datos, que han recibido las fortunas de casi todos los súbditos del Reino Unido, las tienen á su vez depositadas en el Banco de Inglaterra, en donde se encierran caudales de una magnitud asombrosa, lo que ha contribuido poderosamente á formar el crédito colosal de que goza ese establecimiento."

La crítica que algunos economistas hacen á este sistema, es que sufren los Bancos de particulares una influencia incesante del Banco privilegiado por el hecho de no poder competir con él y por hacerlo depositario de sus capitales, pudiendo esto ocasionar una absorción en favor del Banco privilegiado. Este sistema es el de Italia y España.

Nos queda por ese camino el sistema llamado de libertad, sobre el cual se han producido dos teorías: la de libertad reglamentada y la de libertad absoluta. Voy á estudiar la primera examinando los Bancos norteamericanos que es donde está aplicada.

La historia bancaria de los E. U. ha sido dividida por un economista en tres periodos: 1° de 1780 á 1837, periodo de lucha entre los partidarios de un solo Banco privilegiado y los federalistas, partidarios de la libertad de los Estados para fundar en sus jurisdicciones bancos de emisión. El primer banco fué creado en Pensylvania en 1781, con un capital de $400,000 y con derecho á emitir billetes. Después el Gobierno emitió grandes cantidades de papel moneda que por su depreciación produjo una intolerable situación. Para aliviarla se fundó el Banco Nacional, en 1791, con un fondo de 20 millones de pesos y monopolio de emisión por veinte años. Pero los federalistas no cesaban de luchar contra ese privilegio, y después de varias alternativas en que hubo libertad de emisión y Banco único, el presidente Jakson quitó el privilegio al Banco Nacional y lo hizo liquidar en 1836; 2° periodo, de 1837 á 1863, libertad absoluta para los Estados en fundación de Bancos y en la emisión de billetes. Llegó á haber 1,600 bancos, divididos como los ingleses en bancos de responsabilidad limitada y responsabilidad ilimitada. La diversidad de billetes, su gran cantidad y la dificultad del reembolso produjeron innumerables quiebras y la ruina de muchas personas. En vista de esto el gobierno dió la ley de 25 de Febrero de 1863 que cambió totalmente la naturaleza de los Bancos—3er. periodo. La ley mencionada y sus reformas de 1873, 1875 y 1882, dispusieron que solo se podrían fundar bancos por sociedades de cinco personas, con un capital mínimo de $200,000 y depositando en la Tesorería el valor de la cuarta parte del capital en bonos de la deuda. La emisión sería hasta el 90 por ciento de valor de los títulos depositados y los billetes fabricados por el Gobierno. Los accionistas serían responsables hasta el doble de sus acciones. La vigilancia sobre Bancos se ejerce por un empleado del gobierno, investido de toda clase de facultades. Se ha hecho la siguiente clasificación de los Bancon Americanos: 1° Nacionales, con facultades de emisión; 2° De los Estados, que emiten billetes cuando reunen las condiciones de los anteriores; 3° Privados, constituidos por particulares, sujetos á las leyes locales y que solo emiten cuando están en las circunstancias antes dichas; 4° Cajas de ahorros con funciones bancarias y 5° Las demás instituciones de crédito. Los Bancos Nacionales se rigen por las leyes federales y otros por las de los Estados.

Los resultados de este sistema están á la vista de todo el

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

mundo, pues bien conocida es la riqueza de los bancos norteamericanos, que pasa de 600 millones de pesos.

La teoría de libertad ilimitada, en principio, es la que, satisface el ideal económico en esta materia. Digo en principio porque prácticamente esa libertad es, por ahora, irrealizable. La Historia nos enseña los funestos resultados del sistema: las inumerablas quiebras ocurridas en los E. U. cuando había libertad bancaria son prueba de que todavía no puede ser un hecho la libertad absoluta de crédito.

Resumiendo todo lo dicho resulta que hay cinco sistemas sobre instituciones de crédito: 1º El Banco de Estado; 2º El monopolio á favor de una compañía; 3º El privilegio y concurrencia, 4º La libertad reglamentada por el Estado y 5º La libertad absoluta. El 1º y el último sistema, en mi concepto, no son aplicables por las razones qne ya he mencionado. Los otros tres sistemas han tenido grandes defensores y grandes adversarios, pero cualquiera de ellos, como hemos visto para Francia, Inglaterra y los E. U., si está en correspondencia con las necesidades sociales, subsistirá no obstante sus contradictores. En la evolución de las naciones como en la de los hombres, hay una gran ley, la ley del *medio ambiente* que dice que "el conjunto de usos, de costumbres, de tradiciones y de ritos, la educación personal la opinión pública, las circunstancias exteriores, todo contribuye á hacer variar indefinidamente el organismo de un pueblo." Las instituciones sociales, las leyes, todo debe ser una resultante, todo debe adaptarse al medio, lo que no se adapta no vive, es inutil, bajo la sugestión de teorías brillantísimas, dar á un pueblo leyes, crear instituciones que rompan bruscamente lo que por herencia y por necesidad forma sus costumbres. "No hay normas de conducta aplicables á todos los tiempos y todos los lugares, sino que en todo tiempo y lugar las leyes serián según el ambiente." Dice Montaigne

que tres más en la altura del polo echan por tierra la Jurisprudencia.

Si una institución de crédito está conforme con el medio social de industria y comercio, si adquiere la confianza que necesita, esa institución tendrá vida aunque no llene un ideal de libertad.

II.

En México nunca ha habido un solo Banco de emisión que disfrute de un monopolio absoluto. El Banco de Londres, México y Sud América fué el primero que se creó: en 1864 fué inscrito y matriculado. La enumeración de los ataques que ha sufrido este Banco sería contraria á la brevedad de este trabajo; solo ligeramente mencionaré la lucha que sostuvo con el Banco Nacional, al ocuparme de éste.

El 16 de Agosto de 1881 D. Eduardo Noetzlin, representante del Banco Franco-Egipcio, celebró con el Gobierno un contrato para establecer un banco con un capital de 3 millones que podría aumentarse hasta 20, con facultad de emisión hasta el triple del monto de sus valores; el Banco se llamó Nacional Mexicano. En 18 de Febrero de 1882 se celebró otro contrato con el Sr. L'Enfer para fundar un Banco Mercantil, Agrícola é Hipotecario con 3 millones de capital y pudiendo emitir billetes hasta el triple de sus valores. El 12 de Junio de 1883 se celebró un tercer contrato con el Sr. Suáres Ibañez para establecer otro Banco de emisión con capital de $ 500,000 y que se llamaría Banco de empleados. En 11 de Mayo de 1886 se modificó el anterior contrato y se llamó al establecimiento "Banco Comercial." En el año de crísis de 1884 se fusionaron los Bancos Nacional Mexicano y el Mercantil con la denominación de Banco Nacional de México, se modificó la concesión de 1881 en términos tales que, por algunos servicios que el nuevo estable-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

cimiento prestaba al Gobierno, constituían un perjudicial privilegio. El banco solo tenía como rival temible al de Londres, que estaba perfectamente acreditado; las disposiciones del Código de Comercio de 1884, combinadas con la concesión de aquel debían producir la liquidación de éste. El Gobierno exigió la clausura del Banco de Londres, éste pidió amparo fundado en los arts. 4º y 28 de la Constitución; pero antes de que sentenciara la S. Corte se desistió de su queja pues había comprado la concesión del Banco de Empleados que carecía de capitales. La Secretaría de Hacienda aprobó la cesión y el Banco continuó sus operaciones. Según el contrato de 21 de Agosto de 1889 se llamó Banco de Londres y México, fué autorizado á establecer sucursales y su concesión duraría 30 años contados desde aquella fecha.

El Monte de Piedad fué fundado en 1775, por el Conde de Regla; su objeto fué hacer préstamos sobre prenda. En 1879 fué autorizado para hacer descuentos sobre libranzas y á recibir depósitos y en 1881 á emitir billetes y hacer toda clase de operaciones bancarias. En 1884, á consecuencia de la crísis suspendió sus operaciones de crédito, operaciones que no ha vuelto á practicar á pesar de no haber quebrado.

En 24 de Abril de 1882, se celebró un contrato entre los Sres. Eduardo Garay y Francisco de P. Tabera para establecer un Banco Hipotecario con $800,000 de capital, contrato que se reformó en 1888 y lo autorizó á extender sus operaciones á toda la República. Este Banco sigue funcionando. Los tres Bancos reunen un capital de 35 millones, de los que corresponden 20 al Nacional, 10 al de Londres y 5 al Hipotecario. En los principales Estados de la República existen Bancos con concesión de la Sría. de Hacienda y todos ellos han contribuido á la prosperidad nacional.

El extenso territorio de México que encierra incalculables riquezas que no se explotan muchas veces por falta de

capitales, el hecho de que algunos Estados carecen de comunicaciones rápidas que faciliten el transporte de metálico, nuestra tradición bancaria que, aunque es de corto tiempo, creo amalgamada con nuestras costumbres y nuestra constitución federal, son fundamento bastante para multiplicar en el país las instituciones de crédito mediante una libertad reglamentada para ellas, sistema adoptado por la ley de 3 de Junio de 1896.

III.

Pasaremos ahora á examinar esa vigilancia, esa reglamentación del Estado sobre los Bancos.

No se puede negar que el Estado tiene un deber de vigilancia sobre todas las instituciones cuya marcha puede influir en los intereses generales de la Nación; esta vigilancia no implica que el Gobierno sea un director, ni un empresario; debe dictar disposiciones en conformidad á las necesidades del país y cuidar de su observancia.

Se puede dividir la intervención del Estado en las instituciones de crédito, conforme á nuestra ley, en las siguientes partes:

I. Condiciones para establecer un Banco.
II. Límites y bases de la emisión.
III. Vigilancia sobre los Bancos.

Para establecer un Banco, se requiere una concesión otorgada por el Gobierno; este requisito no es, dicen los Sres. Diputados de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, "sino una formalidad creada por el derecho administrativo moderno para dar vida legal á instituciones cuya organización se aparta de los preceptos de las leyes comunes y que han de ejecutar actos ú operaciones regidos por legislación especial y que entran más ó menos dentro de la esfera de acción del Poder Público."

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

El capital social no sería menos de $ 500,000 para los Bancos de emisión y los Hipotecarios y de $ 200,000 para los Refaccionarios. Esta condición tiene por objeto que las instituciones que se establezcan sean sólidas y puedan con un capital fuerte impulsar el crédito, lo cual no se lograría con capitales insignificantes que, por el contrario, serían perjudiciales.

No se otorgarán concesiones sin que los solicitantes depositen préviamente en la Tesorería ó en el Banco Nacional, bonos de la Deuda Pública cuyo valor nominal sea el 20 por ciento de la suma que el Banco deba tener en caja para constituirse. Disposición encaminada á poner término á una especulación de la cual se ha abusado en la República: la de solicitar concesiones del Poder Público para ofrecerlas después á los capitalistas. Se propone el Ejecutivo conseguir, con esa prescripción, que soliciten concesiones para el establecimiento de un banco los que pueden ofrecer la garantía de un depósito para responder del éxito de las referidas concesiones.» El depósito se devolverá cuando se comiencen las operaciones.

Las concesiones se otorgarán á tres personas, cuando menos. que deberán comprobar cuatro meses después que han constituido una sociedad anónima; ó á sociedades anónimas, pues exige la ley que solo podrán explotarse los Bancos por medio de dichas sociedades.

Bien conocidas son las ventajas que para la formación de grandes empresas presenta la forma de las sociedades anónimas, el reducido precio de la acción, la responsabilidad limitada del tenedor y la negociabilidad del título han sido motivos para la popularización de esta clase de negocios que han permitido reunir grandes cantidades en breve tiempo. Esta disposición de la ley va encaminada á facilitar su objeto.

Los Bancos de circulación son los que además de hacer las operaciones comunes á todas las instituciones de crédito

emiten billetes pagaderos á la vista y al portador. Las personas que aceptan estos billetes confían en el Banco, es decir, le hacen crédito desde el momento en que por los valores que han depositado en el establecimiento ó por el préstamo que éste les hace reciben, no moneda, sino una promesa de moneda. Si el Banco es de conocida solvencia, el billete circulará entre el público y tendrá, como la moneda, el poder de liberar por simple tradición, habiendo por parte del billete la ventaja de representar en poco volumen grandes cantidades que en metálico sería más difícil transportar, contar y conservar. La experiencia ha demostrado que, cuando los Bancos son sólidos y conocidos, rara vez acude el público en masa á pedir el cambio de billetes por moneda y el establecimiento se procura así grandes cantidades que puede prestar á los industriales y comerciantes en condiciones ventajosas.

Cuestión muy debatida por los legisladores y los economistas, ha sido la de si debe ponerse un límite á las emisiones de billetes de Banco y en qué proporción debe hacerse. La cuestión se ha presentado por el temor de que en tiempo de crísis el Banco no pueda hacer frente á sus compromisos, no pueda reembolsar á la vista sus billetes y perjudique de este modo al público. Se ha dicho que la emisión debe ser ó igual al monto del capital social ó igual al doble, al triple ó al cuadruplo de éste. En el primer caso el Banco no percibe ninguna utilidad y se le priva del crédito. En el segundo cualquiera proporción que se fije es arbitraria y no hace desaparecer el peligro, si puede haberlo. Al comercio y á la industria toca fijar los límites de la emisión, ésta debe ser libre: las necesidades del mercado la suspenderán cuando sea excesiva. Dice Courcelle-Seneuil: «Cada mercado hace cierto número de cambios con cierta cantidad de moneda, si se aumenta esta cantidad la moneda se deprecia y se exporta.» Los billetes de Banco no sufren depreciación porque hay un obligado

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

(el Banco) á pagarlos á la par y tan solo sucedería que el exceso de ellos volvería á la institución emisora. Hay otra razón poderosa en pró de la libertad de emisión: «los billetes, dice el Sr. Labastida, salen del Banco en cambio de otros valores de fácil realización que quedan en caja y que responden exactamente al valor de los documentos emitidos.» El Sr. Casasús dice: «Si un banco quisiere emitir toda la cifra á que estuviese autorizado en un mercado, donde las necesidades de la circulación no pudiesen retener tal suma, en vano lo intentaría porque el exceso volvería á sus cajas á cambiarse por especies; y, por el contrario, si el límite fuese menor de lo que exigiesen las operaciones de un mercado, el Banco tendría ó que aumentar su capital social, ó que traspasar su límite á fin de corresponder al objeto de su institución.»

Así pues, no hay peligro en dejar á un Banco libertad de emisión ni fundamento científico para limitarla. En tiempo de crísis y pánico, los trastornos alcanzan á toda clase de instituciones. El Gobierno sólo debe ceñirse á una vigilancia eficaz.

En la ley relativa al Ejecutivo, por prudencia fijó los siguientes límites para la emisión: I. No podrá exceder del triple del capital social efectivamente pagado. II. Tampoco podrá, unida al importe de los depósitos reembolsables á la vista ó á un plazo no mayor de tres días, exceder del doble de la existencia en caja en dinero efectivo ó en barras de oro y plata. III. Los billetes serán de curso voluntario y no tendrán un valor de menos de cinco pesos. Esta última disposición se explica por las Comisiones de Hacienda y Crédito Público diciendo que el pequeño billete arroja de la circulación mayor cantidad de numerario, limitando de una manera exagerada el *stock* monetario que sirve de base y apoyo á las transacciones de un país y en momentos de crísis el mayor número de tenedores poco aptos para juzgar de la situación real del Banco da ocasión á verdaderos pánicos que no pocas veces acarrean la quiebra de la institución.

La Secretaría de Hacienda está encargada de vigilar los Bancos, nombra interventores para cada uno de ellos y les da las atribuciones necesarias para que cuiden de que se observen todas las disposiciones de la ley. En los Estados Unidos esta vigilancia se ejerce por un solo individuo, sistema que ha dado muy buenos resultados. Cuando el Sr. Lic. Labastida presentó su proyecto de ley sobre instituciones de crédito, el año de 1889, propuso que se creara en la Secretaría de Hacienda una Sección interventora compuesta de personas entendidas en Economía Política y dedicadas exclusivamente á la vigilancia de las instituciones bancarias. Así se tendría un cuerpo de intervención digno de la confianza pública, unido y además mejor dirigido por el Estado que los individuos esparcidos en todo el territorio; con la ventaja de ser la Sección más económica para los Bancos pues en vez de pagar cada uno á su interventor, entre todos pagarían á cuatro ó cinco personas. De sentirse es que en la nueva ley no se hiciera lo propuesto por el Sr. Labastida ya que en otros muchos puntos se siguieron sus observaciones:

Se exige á los Bancos que publiquen balances cada mes con el objeto de que el público observe la marcha del establecimiento.

El art. 2º de la ley de 3 de Junio de 1896, autoriza al Ejecutivo á celebrar arreglos con los Bancos existentes al promulgarse la ley, á fin de uniformar la legislación, pues como se sabe los Bancos tienen concesiones especiales que podrían ser contrarias á la ley relativa. Desde luego se comprende la importancia de la cuestión: si se respetan los privilegios concedidos, la ley puede ser inútil; si se obliga á todos los Bancos á sujetarse á una ley general puede darse á ésta efecto retroactivo.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

El artículo á que me refiero está dividido en dos partes: la primera contiene la autorización para celebrar arreglos con el Banco Nacional de México para que cese la incompatibilidad entre su concesión y la ley, mediante alguna compensación equitativa y la segunda para celebrar convenios con los demás Bancos, en el concepto de que los Estados tendrán que renunciar á sus concesiones para gozar de los beneficios de la ley general.

La mayor parte de las estipulaciones de los arts. 8 y 9 de la concesión del Banco Nacional, son anticonstitucionales pues establecen un privilegio prohibido por el art. 28 de la Constitución. Dichos articulos prohibieron que se establecieran nuevos Bancos de emisión; dispusieron que los ya existentes podían continuar sus operaciones mediante el cumplimiento de condiciones sumamente onerosas, como las de no emitir billetes sino por una cantidad igual al capital social; depositar en efectivo, ó en títulos de la deuda pública ó dar fianza por la tercera parte de su circulación; pagar, además de los impuestos generales, otro impuesto sobre los billetes que no *bajaría* del 5 por ciento anual de la emisión, etc.

El Banco no deberá pagar ninguna contribución presente ó futura, local ó federal; en caso de guerra el Gobierno cuidará del Banco, sus fondos y edificios y sus empleados no prestarán servicio militar, diposiciones contrarias á los arts. 29, 31, 33 y 40 de de la Constitución. Por estas consideraciones creo que los arreglos que el Ejecutivo debe celebrar con el Banco Nacional deben encaminarse á borrar de la concesión todas esas disposiciones. No habrá en ello retroactividad, pues no tiene el Banco ningun derecho adquirido que deba respetarse, pues lo que desde su principio es nulo no produce ningun efecto. En el art. 1º transitorio de la Ley general de Bancos se concede á los ya existentes un

plazo de cuatro meses para que manifiesten si se sujetan á la ley. Si no se sujetan seguirán rigiéndose por sus concesiones, salvo los arreglos que pueda hacer el Ejecutivo y se permitirá que, excepto en el Distrito Federal, se establezcan otros Bancos exentos de impuestos. Si se sujetan á la ley se les considerará como primeros Bancos. Estos tendrán derecho á la excención ó rebajo de contribuciones que fija la ley. Los demás establecimientos de emisión que se funden tendrán que pagar, además de los impuestos generales, uno federal de 2 por ciento anual sobre todo el capital exhibido. De esta manera se respetan las concesiones legales y se salva la retroactividad.

El art. 3º de la ley autorizó al Ejecutivo á dictar las disposiciones necesarias para regir á las demás instituciones bancarias. El objeto de la ley es desarrollar el crédito en todas sus formas; los Bancos de emisión, por la naturaleza de sus títulos, solo pueden dedlcarse á operaciones de plazo corto: estos Bancos son uno de los factores del progreso mercantil.

Pero la agricultura, el trabajo y la propiedad para poder utilizar el crédito necesitan otra clase de Bancos cuyas operaciones se hagan en mayores plazos, que esten en consonancia con la producción. De acuerdo con aquella disposición la ley de 19 de Marzo dividió las instituciones de crédito en tres clases.

I. Bancos de emisión, que son los que emiten billetes reembolsables á la par, á la vista y al portador. II. Bancos Hipotecarios, que hacen préstamos con garantía de fincas urbanas ó rústicas y emiten bonos con igual garantía y III, Bancos Refaccionarios que hacen prestamos privilegiados, sin hipoteca, para facilitar las operaciones agrícolas é industriales y emiten títulos de plazo corto y pagaderos en día fijo.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Como consecuencia de todo lo que imperfectamente he manifestado en este deficiente estudio, creo poder afirmar que ley de 3 de Junio de 1896 que dió las bases sobre legislación bancaria, señala un progreso en nuestras instituciones.

México, Septiembre 14 de 1897.

LIC. ABEL BOTELLO.

EDUCACION, AMBIENTE Y CRIMINALIDAD.

POR ENRICO FERRI

¿Cuál y cuánta es la eficacia de la educación y del medio ambiente sobre la criminalidad? Hé aquí un asunto que se presta muchísimo á las declaraciones sentimentales de publicistas que, aun teniendo entre sí de común rosadas ilusiones acerca de la fácil rapidez de la enmienda humana, tienden, sin embargo, á un fin opuesto. Por una parte se proclama, pero no se demuestra, el poder de la educación sobre el carácter del hombre, porque se quiere conservar el espíritu ético y expiatorio que más ó menos conscientemente se encuentra todavía en el fondo del derecho primitivo. Por otra parte se proclama, también sin demostrarlo, el poderío de la educación y del ambiente para afirmar la posibilidad de que, derrocada de golpe la presente constitución social, en el novísimo orden de cosas tiene que desaparecer el delito.

Interesa examinar positivamente este problema, que tiene íntima relación con algunos principios de la escuela positivista de derecho penal, distinguiendo las dos partes que lo componen.

I

¿Puede la educación, y en qué cuantía, modificar al hombre haciéndolo mejor ó peor de lo que es?

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Como consecuencia de todo lo que imperfectamente he manifestado en este deficiente estudio, creo poder afirmar que ley de 3 de Junio de 1896 que dió las bases sobre legislación bancaria, señala un progreso en nuestras instituciones.

México, Septiembre 14 de 1897.

LIC. ABEL BOTELLO.

EDUCACION, AMBIENTE Y CRIMINALIDAD.

POR ENRICO FERRI

¿Cuál y cuánta es la eficacia de la educación y del medio ambiente sobre la criminalidad? Hé aquí un asunto que se presta muchísimo á las declaraciones sentimentales de publicistas que, aun teniendo entre sí de común rosadas ilusiones acerca de la fácil rapidez de la enmienda humana, tienden, sin embargo, á un fin opuesto. Por una parte se proclama, pero no se demuestra, el poder de la educación sobre el carácter del hombre, porque se quiere conservar el espíritu ético y expiatorio que más ó menos conscientemente se encuentra todavía en el fondo del derecho primitivo. Por otra parte se proclama, también sin demostrarlo, el poderío de la educación y del ambiente para afirmar la posibilidad de que, derrocada de golpe la presente constitución social, en el novísimo orden de cosas tiene que desaparecer el delito.

Interesa examinar positivamente este problema, que tiene íntima relación con algunos principios de la escuela positivista de derecho penal, distinguiendo las dos partes que lo componen.

I

¿Puede la educación, y en qué cuantía, modificar al hombre haciéndolo mejor ó peor de lo que es?

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Fuera del campo científico este problema se resuelve con una tan fácil repetición de frases hechas acerca de la misión regeneratriz de la educación en esta humanidad, que desde hace cuatro ó cinco mil años dícese, que se va corrompiendo cada vez más, que el solo enunciado de la pregunta se acoge con desconfianza y casi con indignación.

Parece, pues, que en el campo científico debiera encontrarse la respuesta en los tratados de pedagogía; y sin embargo, (es inverosímil, pero verdadero) ninguno de los pedagogos que conozco y de los más competentes sabios á quienes interrogué, ha tratado nunca con verdadero método científico este problema que, no obstante, debería ser el punto de partida para todo estudio acerca del arte de educar á los hombres. Aceptando cual cómodo axioma la opinión común sobre el poder de la educación, los tratadistas sólo han discutido hasta ahora los modos y la calidad de ésta, precisamente lo mismo que si los médicos, á propósito de un medicamento dado, discutiesen la conveniencia de administrarlo en cocimiento, en píldoras ó en polvo sin ver antes si en realidad tiene ó no alguna eficacia terapéutica para una ú otra dolencia.

Pero las observaciones científicas en los animales y en el hombre acerca de la herencia orgánica y psíquica han dado tan rudo golpe al optimismo idealista común en materia de educación, que aquel problema impónese cada día más al moralista y al sociólogo.

Para no perderse en los laberintos de los múltiples elementos que se entrecruzan en esta investigación, es preciso distinguir la educación *física* y la educación *intelectual* de la educación *moral*, en el sentido estricto de la palabra, y entonces claro es que la cuestión varía bastante según se trate de una ú otra especie de educación.

En el orden físico la potencia modificatriz de la educación puede alcanzar un alto grado, puesto que son menos

desconocidos los órganos que se trata de mejorar y el modo como funcionan; la gimnástica y la higiene, si bien no pueden convertir á un pobre inválido en un atleta, produce todavía transformaciones, algunas veces asombrosas.

En el orden intelectual resulta menor la eficacia educativa, porque son menos conocidos la constitución íntima y el funcionalismo del órgano pensante. Cuando el cerebro de un niño no es apto para el estudio en general ó para ciertos estudios en particular, no hay fuerza pedagógica que en cinco, diez ni veinte años pueda deshacer el trabajo acumulado en aquel organismo durante tantos siglos. Aun así y todo, como quiera que hasta ahora la pedagogía se ha dedicado casi exclusivamente á la educación intelectual (y, de pocos años á esta parte, con el método experimental y observador, que es el único instrumento fecundo en el estudio de la naturaleza), también se ha obtenido algún progreso, especialmente en la instrucción infantil; claro es que no basta crear facultades mentales no heredadas por el individuo, pero siquiera lo suficiente para hacer menos difícil el desarrollo de las potencias intelectuales congénitas.

Pero en el orden moral, ¿cuál y cuánta es la eficacia de la educación? Hé aquí precisamente el problema más especial y más abandonado por los pedagogos y al que debemos limitar nuestra atención.

Sin embargo, también aquí se necesita destruir una anfibología, distinguiendo la verdadera y propia educación como influencia directa y metódica del educador sobre el educado, del medio ambiente físico y social en que este último haya nacido y vivido. Las relaciones entre el ambiente y la criminalidad, ó en general entre el medio y la moralidad, son muy diversas; nos ocuparemos de ellas más adelante.

La cuestión redúcese ahora á esto: la bondad y la maldad, la moralidad y la inmoralidad, ¿en cuánto depende de la educación adquirida en la familia y en la escuela?

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Hablándose de algún delincuente ó de algún joven calavera, nada más frecuente que oir afirmar que la causa de su extravío es la falta de educación moral. Pero aun cuando, si en parte puede ser verdad que la falta de educación llega á extraviar al individuo por dar á los gérmenes malos mayor facilidad que á los buenos para desarrollarse, sin embargo, de esto no puede concluirse que sea cierta la recíproca, esto es, que la educación pueda mejorar el carácter moral.

El problema no es tan sencillo. Hay en esto, por el contrario, un hecho comunísimo y muy elocuente que no debe olvidarse: en una familia hay cuatro ó cinco hijos; todos ellos edúcanse con el mismo afán y con los medios adecuados á la índole de cada uno; tres ó cuatro son más ó menos buenos, obedientes, estudiosos; por el contrario, uno sale indisciplinado, holgazán, incorregible.

Este hecho no se puede explicar sino de dos maneras: atribuir á la sola voluntad del individuo la diversa conducta moral, ó atribuir ésta á las predisposiciones heredadas. Sea cual fuere la solución que se prefiera, ya la primera, más consentida por la opinión común, ó ya la segunda, más de acuerdo con las observaciones científicas, la última consecuencia siempre será que aquella diversidad de conducta no depende de la educación. Pues bien, esta conclusión, fácilmente admitida cuando los términos de comparación son tan próximos y fáciles, como en el caso de los hermanos, ¿por qué se desatiende luego cuando se juzga de caso aislado?

Y el motivo de esta ineficacia de la educación *moral* estriba todo él en que hasta ahora no sabemos aún cuáles son el asiento orgánico y el funcionalismo de las pasiones humanas, y por consiguiente, no conociéndose los datos físicos de la moralidad, como por el contrario se conocen más ó menos los de la salud física é intelectual, nos falta la primera condición necesaria para obrar con eficacia.

Hasta hoy la educación moral no consiste sino en una

serie de sensaciones auditivas y visuales presentadas al individuo por medio de consejos y de ejemplos Pues bien, es evidente que, en especial las máximas abstractas de moralidad, aun repetidas y reforzadas con comentarios acerca de las relativas sanciones de la religión y del Código Penal, á lo sumo podrán dejar una huella, y esa bien poco honda, en la inteligencia del individuo, que sobre todo vive de elementos adquiridos precisamente con las sensaciones del mundo exterior; pero quedarán lejos del origen interno de las pasiones, las cuales son efecto de especiales disposiciones orgánicas desconocidas todavía, y que tienen su asiento quizá no tanto en el cerebro como en otras disposiciones de las vísceras indirectamente relacionadas con el sistema nervioso central. Y esta observación nos sugiere algunas consideraciones.

En primer lugar, destruye la ilusión tan difundida entre los estadistas en la primera mitad de nuestro siglo, y aún bastante acreditada entre los doctrinarios, de que la instrucción intelectual (siquiera no sea más que conocer el alfabeto) puede ser un elemento de moralidad; mientras que sólo es una fuerza que ciertamente es preciso difundir, lo más posible en todas las clases sociales pero que se dirigirá al bien ó al mal según las predisposiciones congénitas del individuo y hasta según las circunstancias en que se encuentre.

En segundo lugar, puede modificarse una famosa afirmación de Buckle (*Hist. of civilisation in England, I, IV*) que dice, no ya que el progreso humano se deba de un modo exclusivo al aumento de conocimientos, porque la moralidad, por ser estacionaria, es impotente para producir los grandes beneficios de la civilización, sino que, por el contrario, debe reconocerse que el progreso es infinitamente mayor en el orden intelectual que en el orden moral. En efecto, entre el hombre civilizado y muchas tribus salvages de Australia ó de la Papuasia que no saben contar más allá de cin-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

co, hay un abismo intelectual; mientras que existe, por el contrario, una diferencia menor, pero mucho menor en el orden moral. Spencer y Taylor, entre otros, han recogido numerosos testimonios del grado de moralidad propio de muchos salvajes que en materia de honradez, lealtad y benevolencia no desmerecen de un pueblo civilizado. Tanto, que mientras en el nivel medio intelectual todo pueblo civilizado sobrepuja inmensamente á todo pueblo salvaje, en cambio, moralmente se encuentran en unos y en otros las mismas cualidades buenas y malas, con una sola ligera restricción de las tendencias malas en un número menor de individuos en las razas superiores, que sin embargo, han empleado algunos centenares de miles de años para conquistar una tan leve mejoría moral.

En fin, también se quita toda base positiva á una de las más frecuentes afirmaciones del socialismo teórico, según la cual realizado alguno de tantos nuevos órdenes sociales apetecidos por las diversas escuelas comunistas, colectivas, anárquicas ó autoritarias, el cambio de ambiente y la mejor atendida educación moral borrarían, ó poco menos, del haz de la tierra la inmoralidad y el delito. Del ambiente hablaremos dentro de poco; pero en cuanto á la educación moral, tenemos suficientes datos de hecho para considerar enteramente ilusorio aquel deseo, por lo demás nobilísimo, común, no sólo á las diversas escuelas socialistas, sino también á todos los mantenedores de las viejas ideas.

Así, pues, se dirá, la última conclusión es ésta: que la educación es por completo impotente para mejorar el carácter moral del hombre, y por consiguiente, es del todo inútil.

Distingamos: en las asociaciones restringidas de hombres, en las escuelas, en los cuarteles, en las cárceles, lo mismo que en la sociedad entera, la observación de los hechos nos lleva á esta clasificación. Hay una categoría, poco numerosa, de hombres buenos á carta cabal: son los estudian-

tes que trabajan sin necesidad de premios ni castigos, los soldados disciplinados y deseosos de servir bien sin necesidad de consignas ni prisiones, los hombres que respetan el derecho ageno sin necesidad de Código Penal, por la única y prepotente fatalidad orgánica.

Hay una categoría opuesta á la anterior, por fortuna también poco numerosa, de hombres malos á toda costa, indisciplinados, incorregibles, reincidentes eternos á pesar de las penas más severas y de las más grandes humillaciones, sólo por prepotente anomalía orgánica innata. Hay, en fin, la más numerosa categoría media de los no decididamente buenos ni resueltamente malos, oscilantes entre el vicio y la virtud, naturaleza término medio.

Ahora bien, ante todo es evidente que la educación moral, por lo menos como se ha hecho hasta ahora, ya fuese atea ó religiosa, por la ignorancia en que estamos de los coeficientes orgánicos de las pasiones humanas, es perfectamente inútil para la categoría de los malos de remate. Para ellos no queda sino la conmiseración sin desligarla por eso de las medidas de defensa en pro de los honrados: son locos, son alocados, son delincuentes natos, obran sujetos á la llamada fuerza irresistible. Está bien; pero entretanto, si pasan á cometer actos criminales ó peligrosos, encerrémoslos en una penitenciaría ó en un manicomio criminal (el nombre poco importa) con tal de que estén á buen recaudo y de que aquellos elementos antisociales, deletéreos é incorregibles sean segregados de la sociedad sin falso humanitarismo y sin crueldades inútiles. Permanezcan aislados y no propaguen su desdichada estirpe, porque aquel poco de progreso moral que la humanidad ha conseguido en tantos millares de años, débese mucho más que á la eficacia educativa (observa Bagehot) á una lenta y contínua selección de los buenos[1] como (*Hereditary Genius*, 1870, página 347) notaba que la doci-

[1] Bagehot: *Leyes científicas del desarrollo de las naciones*. París, 1885, págs. 55–56.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

lidad de los animales es igualmente debida á la selección inconsciente que desde los tiempos salvajes hasta nuestros días se ha practicado matando con preferencia los peores.

Y Darwin insiste en ello hablando del hombre: «Por lo que concierne á las cualidades morales, cierta eliminación de los peores va siempre progresando hasta en las naciones menos civilizadas. Los malhechores son ajusticiados ó tenidos en largas prisiones, por lo que no pueden trasmitir sus malas cualidades. Los enajenados y los hipocondriacos van á algún encierro ó se suicidan. Los violentos y pleitistas tienen á menudo un fin sangriento. Los hombres inquietos (y este residuo de barbarie es un gran obstáculo á la civilización) que no saben ocuparse, regularmente emigran á países recién constituidos, donde se convierten en útiles colonos. La intemperancia es tan nociva para la salud, que la vida probable de un intemperante de treinta años, por ejemplo, solo es de trece años mientras que para los campesinos ingleses de aquella edad es de cuarenta años. Las mujeres disolutas tienen pocos hijos, y los hombres disolutos raras veces se casan; unos y otros están sujetos á enfermedades.[1]

Y no es sólo esto, sino que la sanción natural última contra los excesos de todo género es la completa esterilidad;[2] así, pues, esta selección hereditaria podrá más que la educación, si bien con suma lentitud, aproximarnos á aquel estado ideal de moralidad de que habla Spencer.[3]

Entretanto, elimínense, pues, del cuerpo social estos elementos incorregibles y deletéreos; así lo sostiene la escuela positivista del derecho penal, y no me parece mal pensado, en contra posición de aquellos que, una ves admitida la locura ó la fuerza irresistible en el acusado, lo absuelven *ipso facto* y le dejan libre las más de las veces para repetir los desahogos de su naturaleza patológica, de la cual cierto es que él no tiene la culpa, pero de quien, sin embargo, la sociedad tiene derecho á defenderse.

1 Darwin: *Origen del hombre.* Turín, 1872, página 129.
2 Jacobi: *Estudios acerca de la selección en sus relaciones con la herencia en el hombre.* París, 1881.
3 Spencer: *Las bases de la moral,* capítulos XV y XVI.

En cuanto á los buenos á carta cabal, claro es que para ellos es bastante supérflua la educación moral; aun así, como se ha dicho antes, no podrá hacer más que ayudar á que se conserven y desarrollen siempre mejor los gérmenes benéficos heredados por el individuo, y tanto más si, como dice muy bien Anguilli, llegan á aplicarse á la educación moral también el método intuitivo ó natural adoptado ya para la instrucción intelectual.

Queda la categoría de los que no son decididamente buenos ni malos. Ribot, en su reciente y apreciable obra acerca de la *herencia psicológica* (pág. 231), tocando de pasada las relaciones entre la educación y la herencia, como ya lo había hecho Comte (*Curso III, 566*), concluye que es preciso evitar la ilusión de la omnipotencia educativa, y que la educación no produce efecto eficaz, sino en las naturalezas medias. Pero contra esta afirmación puede objetarse que si un carácter es poco firme, flojo por naturaleza, su misma falta de temple excluye la posibilidad de una acción eficaz, esto es, contínua y estable de la educación en un sentido ó en otro. En las arenas del desierto, movibles por todos los soplos del viento, no puede permanecer impresa ninguna huella, y esto significa que si la educación podrá muy poco sobre estas naturalezas medias, en cambio podrá mucho más el medio ambiente dentro del cual se hallen. Y aquí también, la nueva escuela del derecho penal tiene la gloria de haber introducido en la ciencia de la seguridad social, la capitalísima distinción entre los delincuentes natos, de quienes hemos hablado poco ha, y los delincuentes ocasionales, para quienes mejor que los rigores del Código Penal serán las medidas sociales que mejoren el medio ambiente quitando hasta donde sea posible las ocasiones de dilinquir.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Por el contrario, Pérez, uno de los más distinguidos pedagogos positivistas, en su libro acerca de la *Educación desde la cuna* (1880, página 265), después de haber dicho que la educación encuentra gérmenes suministrados por la herencia, concluye que éstos «son indiferentes por sí mismos y darán como fruto el bien ó el mal según la cultura, el ejemplo y las circunstancias.» Pero también aquí, eliminada la parte del ambiente, que va confundida con la de la educación, es fácil observar que no existe la indiferencia en sí en la naturaleza; porque en un individuo se equilibre más ó menos la suma de las disposiciones congénitas buenas con las malas, podrá decirse ligeramente que el temperamento de él es indiferente, pero en realidad existen tanto los gérmenes malos como los buenos, y solamente se compensan para no ser preponderantes los unos ó los otros.

Y por eso, la consecuencia respecto á la tercera categoría del limbo moral es que la educación moral puede inmensamente menos que la herencia y mucho menos que el medio ambiente, y que á lo sumo, en la mínima parte que á la primera concierne, puede tener la eficacia de desarrollar los gérmenes buenos más bien que la de destruir ó modificar los malos. Y esto, como se ve, no es tan desconsolador cual á primera vista parece.

Por consiguiente, la última conclusión redúcese á destruir en nombre de la observación de los hechos mucho, de aquel optimismo idealista, que hay por lo común á propósito de la educación moral; y por el contrario, lejos de contentarnos con frases altisonantes pero vacías, nos induce á la solución de otros problemas, entre los mayores son estos dos. Aprovecharse de los descubrimientos científicos que se han hecho y se hagan acerca de la herencia orgánica y psíquica, para regular en los casos extremos hasta con leyes, la procreación de los hijos, concediendo á los hombres un poco de esos cuidados que se han concedido á la crianza de los animales.

Pedir á la fisiología y á la psicología el estudio orgánico de las pasiones humanas para que en él pueda cimentarse la investigación de los medios menos eficaces de educación moral, y por consiguiente, de poner obstáculos al mayor incremento de la criminalidad.

II.

Y pasemos ahora á la acción del medio sobre la delincuencia.

Todos los actos humanos, y por consiguiente también los criminales, son en parte producto personal del individuo, en parte del ambiente en que éste ha nacido y vive.

Es mérito de las ciencias naturales el haber puesto á plena luz la íntima correspondencia y la constante reciprocidad de acción y reacción entre todo sér y el mundo que le rodea; mientras que la filosofía tradicional encerraba sólo en la persona, y hasta nada más que en su conciencia volitiva, la total causalidad de las acciones humanas. Y al paso que el naturalista habíase ocupado sobre todo en el ambiente físico que obra por todas partes sobre los organismos, ha venido después el sociólogo á poner de relieve la grandísima participación que el medio ambiente social tiene en la vida del hombre, organismo físico y psíquico, como cualquier otro animal, pero con un predominio del sistema nervioso, y por tanto, de la parte moral y psíquica, superior en mucho á lo que sucede en todos los demás seres vivos.

Era lógico que estas miras generales se reflejaran también en el estudio de la delincuencia, porque ésta no es más que el otro lado de la actividad humana, la cual, si en la lucha por la existencia permanece en el campo jurídico, es trabajo honrado que se estudia por la economía política; si rompe los límites del derecho, es actividad deshonrosa que da

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

materia á la ciencia criminalista y penal. He aquí por qué muchos criminalistas fueron también economistas, como Beccaria, Filangieri, Romagnosi, Rossi Bentham.

Y la sociología criminalista establece precisamente que el delito tiene sus causas en la constitución física y moral del delincuente, pero también en gran parte en el medio físico y social que le rodea. El predominio constante de los delitos de sangre en los climas meridionales, en la estación cálida, en los años de estíos más ardorosos, en las épocas de mayor cosecha de vino y mayor producción de alcohol; por el contrario, el aumento de los delitos contra la propiedad en los climas septentrionales, en la estación fría, en los años de inviernos mas crudos, en las épocas de carestía agrícola, son elocuentes indicios de esta acción del medio físico sobre la criminalidad. La frecuencia indómita de los delítos por causa política en los países donde el gobierno choca demasiado con las aspiraciones nacionales; los duelos y muchos infanticidios fomentados por un estado particular de la opinión pública; las supresiones y sustituciones de recién nacidos donde no existe registro civil de nacimientos; muchos uxoricidios, rompimiento criminal de un vínculo que ha llegado á ser insoportable, pero que es legalmente indisoluble; muchos casos de bandolerismo provocados por alguna injusticia, porque, como dice Filangieri, cuando no se puede con facilidad usar la espada de la justicia, se acude al puñal del asesino, y tantos otros delitos que desaparecen ó disminuyen con el cambio de las instituciones de que eran producto, son indudables pruebas de la influencia que tiene el medio social ambiente en la vida del ciudadano.

Sin embargo, hasta ahora los criminalistas y legisladores han descuidado por completo estas enseñanzas de la observación positiva. Guiados por la sola lógica y la filosofía tradicional, los unos, como dice Ellero, han escrito volúmenes en folio acerca de la tortura y la pena de muerte,

pero poquísimos y breves opúsculos sobre las causas del delito y modos de extinguirlo ó disminuirlo; y los otros han creído y creen todavía que un código penal, una ley represiva basta para impedir la criminalidad mientras se dejan substituir ó quiza hasta se aumentan las causas naturales de ella.

Y así ha llegado á suceder que aquellas observaciones hechas de un modo superficial se prestan fácilmente á una precipitada conclusión por parte de quien, preocupado ya por otras conclusiones suyas en el campo económico y guiado por la lógica abstracta nada más, llega á decir: Pues si las presentes instituciones de la sociedad son la raíz de la delincuencia, echémoslas abajo y desaparecerá el delito; cambiado el medio cambiará el hombre, y con la ayuda también de la educación vendrá de ese modo al mundo la paz universal.

Pero estas opiniones, aun cuando á mi parecer movidas de seguro por un nobilísimo deseo del bien, necesitan cimentarse todavía un poco en las investigaciones científicas que no ceden sólo á los solícitos arranques del sentimiento sino que encuentran siempre un contrapeso en la observación positiva de los hechos físicos y morales. Y hé aquí precisamente á la sociología científica, representada en esta materia por la nueva escuela positivista del derecho penal, puesta en el caso de tener que examinar esas afirmaciones.

Ya hemos visto poco há si la educación puede y en qué cuantía modificar el carácter del hombre. Ahora nos quedan estas otras dos conclusiones del socialismo teórico: destruidas las presentes instituciones sociales, desaparecerá el delito; cambiando el medio social, también cambiará el hombre en su actividad criminal.

Fácil es ver que la primera de estas proposiciones olvida un hecho gravísimo: olvida que el delito, como todo acto humano, no solo es efecto del medio social, sino también

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

del ambiente físico y de la constitución del individuo. Y por consiguiente, es fácil corregirla pronto, diciendo: acaso, destruidas las instituciones sociales presentes, desaparecerá *aquella parte* de los delitos que en éstas tienen su origen. Y hé aquí un primer y gran límite del absolutismo de aquella afirmación; porque, en efecto, ¿cómo suprimireis la influencia del medio físico y del temperamento individual, si uno y otro sólo en mínima parte son modificables por esfuerzo humano, ya sea individual, ya colectivo?

No sólo esto, sino que aquella conclusión, como en general todas las del socialismo téorico, en la parte reconstitutiva de los varios sistemas (de los cuales, por el contrario vale bastante más la parte crítica, que es un verdadero servicio meritorio de los socialistas y en gran parte es aceptable), tiene un gravísimo defecto: el de ser demasiado sencilla, y por lo mismo, en extremo absoluta. Todo cuanto se refiere á la vida del hombre, y mucho más á la de la sociedad humana, es tan vertiginosamente complejo en sus factores y en sus manifestaciones, que para un hombre de ciencia es de todo punto imposible resolver un problema humano con un corte sencillo y limpio. La sentencia absoluta, monosilábica del socialismo, atiende á la apariencia saliente del fenómeno y olvida todos los elementos ocultos é infinitos que forman parte sustancial de él.

Así, es frecuentísimo, por ejemplo, que el economista sólo vea el lado económico de un fenómeno social y que el criminalista sólo vea en el mismo su lado técnicamente jurídico. Pero, despacio: aquel fenómeno tiene un lado económico ó criminal que estudiáis, pero tiene también otros muchos aspectos que no debéis abandonar. Así, en nuestro caso, la función social de defensa del orden jurídico, que se llama ministerio punitivo, no es la sola y única función del Estado. El Estado tiene que ejecutar otras muchas funciones para existir, y por consiguiente, debe ejercer cada una

de ellas en armonía y relación con todas las demás. El legislador que lo olvida, como sucede con suma frecuencia, es imprevisor. ¿Se estudia una ley represiva? Pues bien, sólo se piensa en reprimir lo más que se pueda los resortes criminales, por decirlo así, en que se apoya el fenómeno que se examina; oprímense, y se olvida que su fuerza de reacción, impedida aquí, en el campo, jurídico se levantará en otra parte en el campo económico, familiar, político, etc.

Así, es fácil decir: abolida la propiedad individual, desaparecen los hurtos; abolido el matrimonio legal, desaparecen los adulterios, los uxoricidios, los infanticidios, los atentados contra la honestidad y así sucesivamente.

Pero despacio. Lo primero de todo, dudo que aun concediendo esas premisas abolitivas, sean verdaderas las conclusiones optimismas. Por ejemplo, dudo que, abolida la propiedad individual deban desaparecer del todo los hurtos, y por analogía, dudo lo mismo respecto á la abolición del matrimonio. Cierto es que, quitadas estas instituciones, desaparecerían la mayor parte de los delitos con ellas relacionados, pero no todos. No olvidemos los factores personales y los factores físicos de los delitos. Sin embargo, dado en hipótesis el colectivismo, el comunismo ú otro sistema, siempre existirá el vagamundo nato que profesa una repugnancia orgánica á cualquier trabajo, y por ejemplo, para vivir robará los bonos de alimentos para proveerse en los almacenes comunes. No sólo esto; la estadística criminal demuestra que el aumento de bienestar material en las actuales condiciones de la sociedad, al paso que disminuye los delitos contra la propiedad aumenta los delitos contra las personas. Y entonces, ¿cómo se evitará este correlativo criminal de la diminución de delitos contra la propiedad? Con la educación y con el cambio de medio, responden los históricos. Pues bien, ya vimos la importancia que puede concederse á la educación; veamos ahora la que tiene el medio ambiente.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Y así, por ejemplo, destruido el vínculo matrimonial, siempre habrá un hombre que guste de una mujer y sea rechazado por ella, y hé aquí el atentado contra la honestidad si aquel hombre cede á ciertos impulsos de su organismo y del ambiente físico.

Pero (se responde) estos son casos patológicos, y á ellos proveerá un manicomio criminal. Bueno; pero entonces distamos ya un poco de aquella absoluta desaparición de toda criminalidad y de aquella abolición de todo el orden judiciario, etc., que se pronosticaban como bienhechores efectos de la tabla rasa hecha con la presente sociedad. Y entonces se viene á decir lo mismo que la sociología criminalista, ni más ni menos: cárcel, ó mejor, manicomio criminal; en último término, eliminación de los elementos antisociales, patológicos, peligrosos.

Y no sólo esto; sino como vemos, la abolición de las presentes instituciones sociales ni siquiera suprimiría del todo la delincuencia, falta considerar también los otros aspectos de esta propuesta abolición, no sólo el criminal ó el económico. Muchos son los demás aspectos de esas instituciones, pero basta recordar uno: su raíz en las *condiciones de existencia*, que diría Spencer, de la humanidad.

Porque es preciso hacer una sencilla observación: es pura metafísica eso de creer que una institución social, especialmente de las fundamentales como la propiedad ó la familia, sean efecto del capricho de un hombre ó de una clase dominante, y por consiguiente, sólo por arbitrio de otro hombre ó de otra clase pueda instántaneamente abolirse de una plumada en una ley ó de un disparo de fusil en las barricadas. Requiérese otra cosa. Todo cuanto ahora existe, lo mismo en la naturaleza física que en la sociedad humana, es el efecto acumulado de una cadena infinita en el tiempo y en el espacio de causas anteriores, que gravitan y gravitarán inexorablemente sobre las generaciones actuales y futuras; y por tanto,

todo teórico que en su gabinete de estudio imagina proyectos de un nuevo orden social en todo diferente de los que existen, aún cuando lo haga por un sentimiento humanitario nobilísimo, se asemeja mucho á un arquitecto que propusiera la construcción de edificios sustancialmente nuevos en comparación con los actuales, por ejemplo, fuera de las leyes de la gravedad ú otras. Uno y otro olvidarían que si las instituciones sociales son como son y las casas son como son, eso es un efecto muchas veces milenario de causas infinitas arraigadas en la humanidad, la cual, conviene recordarlo, cuenta de vida muchos centenares de miles de años. Y como Ardigó decía que al construir ahora un ingeniero una estación de vía férrea seguía las mismas leyes generales que guiaron á nuestros progenitores prehistóricos en la construcción de las primeras é informes habitaciones, así también puede afirmarse que las presentes instituciones sociales se apoyan en las mismas leyes psicológicas que dieron por resultado las prístinas manifestaciones de la sociabilidad en los más remotos predecesores nuestros.

Pero entonces, se dirá: negáis la posibilidad de todo cambio, negáis todo progreso.

Y respondemos: Poco á poco con estos absolutos. Para decirlo con breves palabras: lo que negamos son los *saltos* en la naturaleza, los cambios sustanciales é instantáneos; pero admitimos perfectamente el progreso, porque lo vemos en todos los hechos, y lo defendemos cuando otros pretenden ilusamente detenerlo, aunque sólo sea por un segundo de tiempo; pero el progreso en su sentido natural, no en el sentido fantástico de esta palabra; en resumen: en el sentido de la *evolución*.

Admitimos, pues, que la sociedad puede progresar y modificarse sin límite alguno, y hasta á ello se ve constreñida por una inexorable y biehechora necesidad. Y por eso reconocemos también el justo mérito del socialismo, como el de cual-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

quier otro, cuando al poner de relieve las injusticias actuales, cumple con la primera condición precisa para destruirlas ó mitigarlas.

Otra cuestión es, la de si el trabajo voluntario del hombre puede influir en este progreso, y en cuánto, nosotros, por ejemplo, no estamos en esto conformes del todo con el *quietismo* de Spencer. Pero en cambio, para nuestro asunto, nos importa examinar aquella segunda afirmación teórica: Cambiando el medio social ambiente, cambiará el hombre.

Esta proposición, en sentido absoluto, no es científica; en sentido relativo es positiva. En sentido absoluto, si se cree que el medio social puede sustancial é instantáneamente convertir lo blanco en negro, entonces se aventura una idea que choca diametralmente con la universal de evolución, lo cual es un hecho y no una idea teórica. Y, entre paréntesis, aquí resulta claro que no es cierto, como algunos dicen, que el darwinismo y el evolucionismo sean favorables á las miras del socialismo teórico.

Es necesario explicarse un poco acerca de esta velocidad del progreso humano. Atendiéndose á la tradición de que el mundo existe desde hace seis ó siete mil años, puede incurrirse en la ilusión de que, siendo un siglo, dos siglos, un período bastante largo y en la vida de la humanidad, pueden producir cambios sustanciales y profundos. Pero si por el contrario, se piensa que desde el estado prehistórico, análogo al de muchos salvajes de hoy, ha empleado la humanidad no muchos siglos, no muchos millares de años, sino muchos centenares de miles de años para llegar en algunos pueblos al presente estado de civilización, entonces compréndese en seguida cómo ni en un siglo ni en dos pueden obtenerse variaciones sustanciales en la humanidad. Es como si en un individuo se quisiera alcanzar en pocas horas ó en pocos días, la estatura de uno ó dos metros; precisamente lo mismo, porque dos ó tres siglos son para la humanidad, para un pueblo, como pocas horas en la vida de un individuo. Y es una suprema ilusión el creer que una idea ocurrida á algunos teóricos pueda infringir en el acto esta ley eterna de la gran lentitud en la vida humana y social.

Y adviértase que en la evolución comprendemos nosotros hasta los sacudimientos de las revoluciones que entran en el ritmo general de la vida social como la fiebre en el de la vida individual; del mismo modo como la vida física, la gran teoría evolucionista de Lyell para la geología admite los revolucionarios sacudimientos de las erupciones volcánicas y de los diluvios parciales. Sí; la evolución comprende también la revolución, cuando obstáculos contrarios al ritmo general del movimiento humano detienen un poco el progreso continuo y hacen inevitable la explosión de fuerzas que no se pueden suprimir.

Pero si la evolución es un hecho continuo, tantas veces milenario que se acumulan poco á poco siglos en serie infinita, ¿qué vale frente á ella un torbellino de revolución que dura un mes, tres meses, un año? Una cosa infinitesimal, una mínima vibración, si se compara con el ritmo continuo de la vida universal.

En el pequeño cúmulo de arena que rodea la boca del hormiguero, unos cuantos granillos de arena removida son un cataclismo para las hormigas, y son un movimiento casi imperceptible en el espacio que lo circunda. De igual manera, una revolución social es grande y horrible cataclismo para la generación que la presencia, pero es una vibración apenas sensible para la humanidad, una sacudida infinitesimal en el tiempo, y por consiguiente, de mínima eficacia. Pongamos un ejemplo: la gran revolución francesa, la mayor de muchos siglos á esta parte. Pues bien, ¿qué cambios sustanciales ha producido y arraigado en el mundo, en Europa, desde hace ya cien años que se realizó? Grandes, dirá quien sólo se fije en las apariencias; mínimos en extensión y en intensidad, es-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

pecialmente en lo que atañe á las instituciones fundamentales, arraigadas en las condiciones de la existencia humana, responde el observador de la universal evolución, quien halla las causas seculares y lentas, pero continuas é inexorables, de los pocos cambios de más relieve obtenidos después de aquella revolución; causas anteriores á ésta.

Así, pues, concluimos que este ambiente social puede cambiarse y corregirse; pero en una medida que, si puede parecer muy grande al hombre que lo realice, llega á ser infinitesimal para la humanidad entera, bastante escasa para un pueblo.[1]

Y por consiguiente, he aquí también la conclusión final, en lo que se refiere á la delincuencia: dado que el medio social es en gran parte causa de delincuencia, es cierto que para disminuir ésta es preciso en primer término corregir las partes viciadas de aquel; pero no pudiendo provocar instantáneamente variaciones sustanciales y generales en ese ambiente, es necesario dirigir con constancia la atención y la actividad á las correcciones parciales más ó menos amplias, recordando, sin embargo, que la función respectiva y preventiva de los delitos debe estar en armonía con todas las demás funciones del Estado y con las otras condiciones de existencia de los individuos, que precisa altamente respetar.

Y he aquí, por qué la escuela positivista del derecho penal, estudiando las causas de los delitos para suprimir en parte, cuando sea posible, ó á lo menos para evitar el desbordamiento de este fenómeno patológico de la delincuencia, defiende el estudio, hasta ahora descuidado, de la prevención social y científica de los delitos; pero no una prevención de policía y empírica, sino aquella prevención remota, útil, civil, que va hasta las raíces del mal en todos los órdenes de la actividad humana, y no solo en el campo del Código

1 Lo mismo dice Bertillón, artículo "Mesología," en el *Diccionario enciclopédico de ciencias médicas*, serie II, tomo VII.

Penal y terrenos limítrofes; esta última es una prevención miope, inútil, violenta, á menudo provocadora, porque pretende impedir el mal inminente, sin preocuparse de quitar sus causas remotas. Y esta prevención social de la criminalidad se reduce precisamente á modificar el medio social en sus partes contrarias á las leyes naturales, no de un salto sino siempre continuamente, en cada una de las demasiadas leyes que se van haciendo. Y de ese modo representará la solución positiva y científica, libre del cúmulo de miras más ó menos idealistas del sentimiento y de la metafísica social.

Cuando se propone un arancel de aduanas, aparte del lado económico, es preciso pensar en que el contrabando resiste á la cárcel y al tiroteo de fusil; pero desaparece ó disminuye suprimiendo ó rebajando los derechos de entrada. Cuando se hace una ley ó un decreto acerca de las tabernas, recuérdese que el alcoholismo es uno de los más poderosos factores de la delincuencia, y en vez de estancar la sal póngase límites fiscales al abuso de los alcohólicos. Cuando se habla de vías públicas, no se olvide que los robos á mano armada huyen, no ante los que se llaman trabajos forzados, sino ante la mayor viabilidad y mejor iluminación de las ciudades. Cuando se dicta una ley acerca del trabajo de los niños, piénsese también que la aglomeración industrial fomenta muchos delitos contra las buenas costumbres. Cuando se proyecta el divorcio, considérese también el lado de la prevención de los adulterios, de los uxorcidios. Cuando en el Código Civil se prohibe la investigación de la paternidad y queda exento de responsabilidades en absoluto el seductor, recuérdense los homicidios cometidos por las mujeres seducidas. Cuando se permite que la ceremonia religiosa preceda al matriminio civil, no se olvide el séquito de venganzas y delitos provocados por la posibilidad de abandonar legalmente á la mujer engañada. Y así en otros muchísimos asuntos, como ya dije en otras ocasiones.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

En resúmen, éstas, en esta medida y con estos criterios, son las respuestas de la sociología científica acerca de las relaciones entre la educación, el medio ambiente y la criminalidad; alejadas de todo idealísmo en uno ú otro sentido, son el único medio de obtener lo más que se pueda, en el continuo mejoramiento de los destinos humanos.

Alegato presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

por los Lics. Lorenzo Elízaga é Ismael Pizarro Suárez,
apoderados de D. Perfecto Márquez, en el juicio de amparo promovido por este Señor, contra actos del Juez de Letras de Zitácuaro.

Señores Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Los Lics. Lorenzo Elízaga é Ismael Pizarro Suárez, en nombre y representación del Sr. Perfecto Márquez, ante ese respetable Tribunal como más haya lugar en derecho, decimos:

Que su justificación se ha de servir revocar la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Michoacán, en el juicio de amparo promovido por nuestro poderdante contra el despojo de sus bienes decretado por el Juez de Letras de Zitácuaro y declarar que la Justicia de la Unión ampara y proteje al Sr. Perfecto Márquez, contra los actos de que se queja.

---

1. Los Sres. Perfecto Márquez y Tiburcio González celebraron con fecha 27 de Octubre de 1893, por escritura otorgada en Zitácuaro ante el Notario Juan Chávez, un contrato de sociedad mercantil en nombre colectivo, para la explotación del giro de maderas. En dicho instrumento se convino

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

En resúmen, éstas, en esta medida y con estos criterios, son las respuestas de la sociología científica acerca de las relaciones entre la educación, el medio ambiente y la criminalidad; alejadas de todo idealísmo en uno ú otro sentido, son el único medio de obtener lo más que se pueda, en el continuo mejoramiento de los destinos humanos.

Alegato presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

por los Lics. Lorenzo Elízaga é Ismael Pizarro Suárez,
apoderados de D. Perfecto Márquez, en el juicio de amparo promovido por este Señor, contra actos del Juez de Letras de Zitácuaro.

Señores Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Los Lics. Lorenzo Elízaga é Ismael Pizarro Suárez, en nombre y representación del Sr. Perfecto Márquez, ante ese respetable Tribunal como más haya lugar en derecho, decimos:

Que su justificación se ha de servir revocar la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Michoacán, en el juicio de amparo promovido por nuestro poderdante contra el despojo de sus bienes decretado por el Juez de Letras de Zitácuaro y declarar que la Justicia de la Unión ampara y proteje al Sr. Perfecto Márquez, contra los actos de que se queja.

---

1. Los Sres. Perfecto Márquez y Tiburcio González celebraron con fecha 27 de Octubre de 1893, por escritura otorgada en Zitácuaro ante el Notario Juan Chávez, un contrato de sociedad mercantil en nombre colectivo, para la explotación del giro de maderas. En dicho instrumento se convino

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

que la administración de la sociedad correspondería á D. Tiburcio González; pero con la expresa condición de que no podría llevar á cabo ninguna operación sin el consentimiento de Márquez.

2. En el mismo día en que se otorgó en Zitácuaro la escritura; el socio Tiburcio González suscribió en Angangueo vales á la orden de la sociedad Plesent y Charpenel, es decir, antes de que la sociedad comenzara á funcionar, ya aparecía con obligaciones á su cargo.

3. No habiendo sido pagados los ya mencionados vales, D. Fernando Plesent, como liquidador de la sociedad "Plesent y Charpenel," instauró demanda en juicio ejecutivo mercantil, contra "Tiburcio González y Compañía;" llamado el socio Tiburcio González á reconocer la firma que con su nombre cubría los vales, no sólo dijo ser suya, sino que manifestó no ser las demandadas, las únicas cantidades que la sociedad de que formaba parte debía á los Sres. Plesent y Charpenel.

4. En la diligencia respectiva, al ser requerido de pago el Sr. Tiburcio González, designó para que se trabara la ejecutoria decretada, el Rancho de "Santa Ana," el cual es de la exclusiva propiedad de D. Perfecto Márquez. Este Señor se presentó en autos, promoviendo se levantara el embargo, y recusó al juez. Por auto de 2 de Enero de 1895 se proveyó que Márquez *no era parte* en el juicio y por consecuencia se desecharon sus promociones: la tercería excluyente de dominio interpuesta también por el perjudicado y propietario exclusivo de los bienes, tuvo igualmente mal éxito y actualmente está pendiente ante el Tribunal de Justicia de Michoacán la apelación interpuesta contra la sentencia que desechó la tercería.

5. Con fundamento en que el Rancho de "Santa Ana" representa un valor que no cubre el total de las cantidades demandadas, se pidió y obtuvo por Plesent, la ampliación del

embargo, llevandose ésta á efecto sobre otros bienes, que tampoco eran de la sociedad "Tiburcio González y Compañía," sino propiedad exclusiva del socio Perfecto Márquez; los cuales bienes son el Rancho del "Zapote" y los derechos que como arrendatario tiene Márquez en unos montes pertenecientes al pueblo de San Francisco el Nuevo, para explotarlos con el corte de maderas.

6. La diligencia de ejecución, ó mejor dicho, de ampliación de embargo, se verificó en el Juzgado el tres de Noviembre, entendiendose no con el dueño ó interesado de ella, Sr. Perfecto Márquez, sino con un extraño, un Sr. D. Mateo Colín, que ninguna personalidad ni ingerencia ha podido tener en el asunto.

7. Prévios todos estos trámites, de muy dudosa legalidad, se pronunció sentencia en once de Diciembre de 1896, declarando la legitimidad del crédito y mandando hacer trance y remate de los bienes embargados: se promovió por el actor la ejecución de ella respecto á todos los bienes embargados y al serle exijida la fianza, supuesto que existía una tercería excluyente interpuesta por el Rancho de "Santa Ana," redujo su petición al Rancho del "Zapote" y á los derechos de arrendamiento en los montes de San Francisco.

8. No se llega á ejecutar la sentencia, porque con fecha tres de Marzo de este año y ante el Notario Ezequiel Pérez, D. Tiburcio González y D. Fernando Plesent otorgaron en esta capital, una escritura mediante la cual se obligó el primero á ceder á Plesent en pago de la cantidad de $ 3,000.00 el Rancho del "Zapote" y los derechos de arrendamiento de los montes de "San Francisco," bienes que como se ha repetido, son propiedad de D. Perfecto Márquez y no de la Sociedad "Tiburcio González y Compañía." Los bienes se valorizaron por común acuerdo; sin que en esa operación interviniera el propietario de ellos.

9. González y Plesent denunciaron el convenio al Juez

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

de Primera Instancia de Zitácuaro pidiendo su aprobación y con fundamento en lo estipulado en la cláusula 6ª de la escritura que se diera posesión judicial á Plesent de los bienes que por virtud del convenio le fueron adjudicados.

10. Acordada de conformidad la petición por auto de 19 de Marzo, al dia siguiente se trasladó el Juez al Rancho del "Zapote" á poner en posesión de él á Plesent, lanzando á Márquez y en el mismo día se le puso en posesión de los derechos de Márquez á los montes de San Francisco; consumándose el atentado que obligó á nuestro poderdante, injustamente despojado, á ocurrir á la justicia federal en demanda de amparo.

11. Se consideran como violadas en el escrito de demanda las garantías que otorgan los arts. 16 y 14 de la Constitución, es inconcuso que del extracto de autos que hemos presentado, aparecen las violaciones con tal claridad que es de admirar cómo el desconocimiento completo de las garantías que aquellos artículos otorgan, no en su desarrollo sino en su mismo texto, no se limitó al Juez de Primera Instancia de Zitácuaro, sino que alcanzó al Juez de Distrito de Michoacán, que negó el amparo, sin que, en su sentencia, como lo demostrarémos al examinarla, se encuentre un solo fundamento que presente apariencias siquiera de equidad, de justicia, de que se ha aplicado la ley.

12. Con atención á las violaciones que se han cometido en contra del art. 16, debemos analizar la garantía que éste contiene:

"Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa *legal* del procedimiento."

13. Hay que examinar, en el caso, si un procedimiento que tiende al despojo de la propiedad, sin audiencia y sin citación del perjudicado, puede ser fundado en la ley y nos pro-

ponemos demostrar que precisamente todas las leyes, las fundamentales y las secundarias condenan el atentado de que Márquez se queja y sus disposiciones tienden en su letra y alcanzan en su espíritu á protejer los intereses particulares contra vejaciones semejantes á las que son materia de este juicio.

14. ¿En qué ley funda el Juez Letrado de Zitácuaro la facultad para despojar á los propietarios de sus bienes. sin oírseles siquiera en el juicio? ¿Cómo ha podido aprobar y mandar que se lleve á efecto, un convenio judicial en el que se transige sobre bienes de propiedad agena á los que intervienen como contratantes?

15. Muy al contrario: existen disposiciones expresas, terminantes, que solo el Juez de Letras y el de Distrito han podido olvidar: no se observó el art. 484 del Código de Procedimientos del Estado, que previene que al promoverse un incidente criminal referente á la falsedad de los documentos que se presenten en autos, como base de la acción ó la excepción, necesariamente se suspenderá el curso del procedimiento. El Sr. Márquez redarguyó como simulados los documentos presentados por Plesent; para hacer esta imputación elemento muy sugestivo era que la fecha de los vales coincidiera con la de la escritura de constitución de la sociedad "Tiburcio González y Compañía;" pero aunque poca ó ninguna apariencia de ser procedente, tuviera la denuncia de Márquez, la ley en el artículo citado, contiene un precepto imperativo, que no admite distinción, ni podría dejar á los jueces del orden civil la calificación de las pruebas que puedan fundar una acusación criminal. Debió el Juez, de plano, suspender todo procedimiento y al no hacerlo ha violado la garantía que otorga el art. 16, porque ha privado á Márquez de la posesión que legalmente tenía en el Rancho del "Zapote" y en los derechos al arrendamiento de los montes de "San Francisco."

16. Sí bastaría probar que no existe ley en que apoye

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

sus procedimientos el Juez de Zitácuaro, para fundar amplia y debidamente la violación de que en nombre de Márquez nos quejamos, mayor fuerza y corroboración completa tendría nuestra pretensión con sólo citar, como lo hemos hecho bajo el número anterior, una disposición legislativa que categorícamente dispone la suspensión de todo procedimiento, una vez promovido un incidente criminal.

17. Puede argüirse que la disposición del art. 484 del Código de Procedimientos Civiles sólo puede entenderse, como todas las que ese ordenamiento contenga, suponiendo indispensablemente que el que promueva una *parte* en el juicio, porque sería un absurdo, sería echar por tierra todos los principios fundamentales, más bien dicho, elementales del derecho, el aceptar que un tercero, no interesado en el juicio, pudiera promover incidentes de cualquier género, con objeto de impedir la secuela de los procedimientos ó con otros fines.

18. Esto no se ha supuesto ni se ha podido suponer: nunca se ha pretendido que un extraño al juicio pueda promover en él: lo que se ha sostenido y lo que continuaremos sosteniendo es que Márquez no es un extraño al juicio que tiene derechos que hacer valer en él; que debe cuando menos oírsele y que al no concedérsele solo el que defienda sus intereses y al autorizar el que sea despojado de ellos, se viola en su persona la garantía de art. 16, siendo manifestación aparente, clara y flagrante, al disponer se dé posesión judicial de los bienes de Márquez á Plesent.

19. Breves consideraciones inspiradas en los preceptos de nuestra legislación mercantil, persuaden de que son enteramente fundadas las conclusiones á que hemos llegado en el número anterior.

20. La forma colectiva en las sociedades mercantiles, supone una *sociedad de personas* ilimitada y solidaria antes obligadas por las operaciones llevadas á cabo bajo la razón social. ¿Qué extención, que alcance en el orden jurídico debe darse á las palabras *ilimitada* y solidariamente? ¿Debe suponerse, como se ha pretendido por el Juez de Zitácuaro, que los asociados en compañía colectiva renuncian á sus derechos de propiedad sobre sus bienes particulares, que no introducen al haber social depositando en la persona del administrador no sólo la gerencia de los asuntos sociales, sino la administración y hasta *el dominio* de los bienes propios de cada socio? Debe entenderse como lo pretendemos y creemos poderlo fundar.

I. Que la solidaridad supone precisamente el que cualquiera de los socios pueda ser demandado, independientemente de la sociedad y de sus consocios, lo que comprueba precisamente que es *parte* en el juicio, porque no podría ser *reo*, sin ser *parte* en la iniciación de la idea aclara el contrasentido:

II. ¿Qué la responsabilidad *ilimitada* que la ley señala á los miembros de sociedad en nombre colectivo y á los comanditados es un termino contrario en sus efectos á los de la responsabilidad *limitada* en las anónimas, y en las en comandita ya sean simples ó por acciones, por lo que respecta á los cocomanditarios?

21. Es notorio que imposible sería aceptar las absurdas conclusiones, los efectos á que en contra de todo elemento de derecho, conduce la declaración del Juez Letrado de Zitácuaro acerca de que Márquez no es parte en un juicio en que trata de bienes de su exclusiva propiedad, sería sancionar el despojo injusto de que ha sido víctima nuestro cliente: ha celebrado el Sr. Márquez con D. Tiburcio González un contrato de sociedad en nombre colectivo; ahora bien: el Sr. González ha dispuesto de bienes que no formaron parte de los afectos al contrato. ¿Y con qué derecho? ¿Y con qué fundamento acepta el Juez como bueno el señalamiento hecho por Gonzá-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

lez, sobre bienes que no pertenecían á la sociedad que desgraciadamente para nuestro cliente, representaba?

Tal parece, que el contrato celebrado no fué el de sociedad sino una donación universal, porque únicamente en este supuesto risible sobre el que no insistimos por respeto al Tribunal, podría fundarse el que González tuviera derecho para disponer de bienes agenos. Las consideraciones que nos permitiremos hacer presentes tanto al tratar de fundar nuestra tesis en estos puntos, cuanto por lo que toca á las violaciones del art. 14 corroboran y darán mayor fuerza á lo que por este capítulo sostenemos.

22. Hay solidaridad de deudores cuando dos ó más tienen la obligación de pagar uno por todos la cosa ó cantidad adeudada, teniendo derecho por consiguiente, el acreedor para exijirlas de cualquiera de ellos. Es de la esencia del contrato en las sociedades en nombre colectivo, de tal manera que sería nula toda estipulación en contrario (Lyon Caen et. Renault, Droit Commercial tom. II. vol. I número 159). Puede un acreedor exijir el cumplimiento de la obligación que á su favor ha contraído una sociedad, ya sea demandando á esta en pago ó á alguno de los socios, al que á su juicio presta mayores garantías de solvencia. Es decir que puede entablar su demanda y trabar ejecución en bienes de cualquiera de los socios de la sociedad deudora; pero siempre queda á estos su derecho expedito para defender sus propiedades, para conseguir cuando menos, que para rematarlas y hacer pago con sus productos al acreedor, se llenen las formas del procedimiento: también en la práctica como este juicio lo demuestra, solo el propietario de los bienes puede hacer de ellos una defensa eficaz poniendo excepciones que él como principal, como único interesado podrá sostener y comprobar, porque, ciertamente, y de ellos como hemos repetido nos muestra ejemplo este amparo, la defensa *oficial*, por decirlo así, que de los bienes particulares de un socio haga el administrador ó gerente deberá ser poco menos que nula en sus efectos prácticos. ¡Y si esto es suponiendo que efectivamente haya en el juicio algo que semeje una defensa á que resultados llegaremos, qué monstruosidad sin igual quieren prohijar los jueces que han fallado en este proceso, en el que no solo no ha habido la *defensa oficial*, repetiremos abusando del termino, sino que expresa y si decimos dolosamente no temeremos imputar un hecho falso, el administrador *renunció* á defender los bienes de su socio y los señaló para la ejecución primitiva, mostrándole el camino que debería seguir al pedir la ampliación!

23. Hemos pretendido fundar y creemos fundado, que la *solidaridad* en las sociedades en nombre colectivo, no puede entenderse en el sentido de que todos los asociados afecten todos sus bienes renunciando por el hecho de haber entrado á la sociedad, sus derechos de propietarios; sino que hay facultad por parte de los acreedores, para dirijir su acción sobre bienes particulares de los socios; pero también la hay de estos, para intervenir en el juicio, cuando menos para pretender que aquellos bienes sean rematados en subasta pública, en el mayor precio posible y no sean enajenados por virtud de convenios particulares, en los que se fija un precio arbitrario, que en el caso, como fue de tres mil pudo ser de tres, y que para fijarlo, y para ser enajenados los bienes no se tuvo en cuenta el parecer de su propietario, á quien se le negó hasta la probabilidad de hacer mejor la condición de sus bienes.

24. Las sociedades, sean civiles ó comerciales y afectando en estas cualquiera de las cinco formas que establece la ley, forman una entidad jurídica, una personalidad distinta de la de sus asociados. Para adquirir derechos, para contraer obligaciones y en una palabra para todos los actos en que tenga que intervenir con relación á los terceros, requisito de esencia es que posean un representante, administrador en

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

las sociedades de personas, gerente en las de capitales que asuma en sí la dirección de los negocios de la sociedad. Este gerente, este administrador solo tendrá las facultades que para el ejercicio de su encargo le confieran las leyes, los estatutos y las escrituras de constitución de sociedad. Pero todos los actos todos los contratos, verificados ú otorgados por el gerente ó administrador extralimitándose de sus facultades legales ó convencionales son nulos de pleno derecho.

25. El socio Tiburcio González, administrador de la sociedad "Tiburcio González y Compañía", conforme á la escritura de sociedad no podía contraer obligaciones sin consentimiento de su consocio. Por consecuencia, éste podía desconocer los vales suscritos por González á favor de Plesent y Charpenel. Pero aun suponiendole al socio administrador facultades para suscribir documentos á la orden, obligando á la sociedad, y suponiendo solo por un momento, sin aceptarlo jamás, que esos vales otorgados el mismo día del otorgamiento de la escritura de constitución de la sociedad, representen real y positivamente una deuda de ésta; en ninguna ley encontramos facultades concedidas al gerente para designar bienes que no sean de la sociedad, para que se haga efectivo lo adeudado por ella. Como se ha dicho, el administrador representa á la entidad jurídica que existe bajo una razón social personalidad distinta de la de todos y cada uno de los asociados el señalamiento ó designación de bienes particulares de un socio, para que en ellos se haga efectiva una deuda de la Compañía es tan ineficaz como la que se hiciera en los de un tercero no interesado y completamente ajeno á la cuestión.

26. Suponiendo, tambien por un momento, de una manera provisional, facultades en el administrador para hacer la designación, nunca podría adjudicar esos bienes, ni aún cuando fueran propiedad de la compañía, porque esa adjudicación significa la traslación de la propiedad mediante cierto

precio esto es una venta y los administradores no pueden vender los bienes que pertenezcan á la sociedad (art· 116 Cód. de Com.)

27. Resulta perfectamente comprobado:

I. Que se ha violado el art. 16 de la Constitución, porque no existe una causa legal para los procedimientos de despojo contra el Sr. Perfecto Márquez y

II. Que se ha violado también el art. 14, porque no se ha juzgado conforme á la ley y por que se ha hecho una aplicación inexacta del todo de los preceptos que á este caso debían aplicarse.

28. Las garantías consignadas en los arts. 16 y 14 de la Constitución son de tal manera correlativas, que al fundar las violaciones del art. 16, necesariamente se han fundado también las del art. 14. De los mismos razonamientos ya desarrollados se deduce incuestionablemente que se ha aplicado inexactamente el art. 454 del Código de Procedimientos Civiles de Michoacán, porque mandando este suspender el procedimiento en el caso de la iniciación de un incidente, redarguyendo falsos los documentos presentados por alguna de las partes, que necesariamente tengan influencia notoria en el negocio; no se le dió cumplimiento, no obstante que el Sr. Márquez denunció como simulados los vales que se presentaron como fundamento de la demanda. Se ha aplicado inexactamente tambien el mismo artículo al no considerar á Márquez como parte en el juicio que se instituyó en contra de sus bienes. Se ha aplicado inexactamente el art. 100 del Código de Comercio, por que se supone á la solidaridad un alcance monstruoso, lo que también ya se ha explicado detalladamente. Se ha violado el mismo artículo, por que se considera que la responsabilidad limitada llega hasta involucrar la renuncia de derechos, que la ley no pudo disponer, ni los interesados consentir y se ha violado por último la garantía del art. 14 al aplicar inexactamente el art. 110 del código de co-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

mercio, pues se ha ejecutado judicialmente un convenio en que el administrador de una sociedad vende bienes que ni en el supuesto de que fueran de ella podria enajenar.

29 Pocos casos habrá, Señores Magistrados, en que la cuestión jurídica se presenta de tal modo sencilla como en el presente y en que las violaciones y las garantías constitucionales aparezcan con mayor precisión. No obstante el Juez de Distrito negó el amparo: hemos dicho que su sentencia no contiene fundamento legal alguno y basta su lectura para comprobarlo.

30. Se contiene en el considerando segundo de la sentencia que la ampliación de embargo en el Rancho del «Zapote» y en los derechos de arrendamiento de San Francisco se dictó y practicó en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del año pasado, sin que haya constancia de que el recurrente haya promovido algún recurso contra esas diligencias; ni siquiera que se haya manifestado inconforme.» Ciertamente no se interpuso recurso alguno contra el auto que decretó la ampliación de embargo, porque, como se ha dicho, se declaró judicialmente que Márquez no era parte en el juicio y por consecuencia el auto no le fué notificado contra el auto en que se hizo efectiva la ampliación del embargo, tampoco se interpuso recurso alguno, porque propiamenmente no hubo diligencia de ejecución y al Sr. Márquez no fué privado de sus posesiones sino muy posteriormente, al ejecutarse el convenio judicial celebrado entre González y Plesent y precisamente contra la posesión que se dió á Plesent, contra el primer acto que despojó á Márquez, es contra el que se ha pedido el amparo.

31. Los bienes objeto de la ampliación de embargo se mandaron sacar á remate por sentencia que causó ejecutoria, afirma el Señor Juez de Distrito. Ciertamente pero esa sentencia se pronunció sin oirse al interesado directamente y no le fué notificada: y en cuanto á que por el hecho de haber

sido los bienes materia de la sentencia los que el administrador adjudicó, tuvo derecho para hacerlo, es tan absurdo como todos los pretendidos fundamentos de la sentencia y esto se ha demostrado ya en el curso de este alegato.

Por el extracto de hechos rigurosamente tomados de las constancias de autos y por los principios de derecho que hemos invocado.

A Esa Suprema Corte pedimos que se sirva revocar la sentencia del Juez de Distrito de Michoacán, declarando que la Justicia de la Unión ampara y protege á D. Perfecto Márquez contra los actos del Juez de Primera Instancia de Zitácuaro que sin audiencia ni citación del propietario dió posesión judicial de sus bienes á D. Fernando Plesent.

Es justicia que pedimos, con la protesta de nuestros respetos.

México, Diciembre diez y siete de mil ochocientos noventa y siete. — *Lorenzo Elízaga.* — *Ismael Pizarro Suárez.*

La Suprema Corte de Justicia amparó al quejoso, revocando la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito en el Estado de Michoacán.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

LECCIONES DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO.

LECCION XV.

SUMARIO:

Estatuto formal.—¿Qué ley debe regirlo?

Pasemos al estatuto formal. Este es el conjunto de disposiciones relativas á la forma de los actos jurídicos.

2. Personas, cosas y acciones; he aquí la división de los objetos del derecho que siempre hemos tomado como punto de partida. Estudiadas las personas y las cosas así como las obligaciones, quedan por estudiar las acciones.

¿Qué es acción? *Actio nihil aliud est quam jus persequendi in judicio quod nostrum est aut nobis debetur.—Proem. instit. lib. IV de act.*

4. No hay que confundir el derecho con la acción, si compro una casa tengo derecho de exigir la entrega del precio y acción para obtener esa entrega, por medio de procedimientos determinados. Vinnio, en una nota al texto citado dice: "El autor de ésta definición es Celso (ley 51 de act.) Por lo demás, la acción en cuanto constituye el tercer objeto del derecho, más bien debe considerarse como vía y medio por el cual llegamos á la consecución de lo que es nuestro ó se nos

debe, que como derecho adquirido; pues de éste modo considerada la acción y formando parte de nuestro patrimonio, pertenece sin duda á las cosas, segundo objeto del derecho. (ley 49 de verb. sign).

5. Por ésto nuestro Código de Procedimientos Civiles del Distrito, á semejanza de todas las leyes actuales modernas de procedimientos, define la acción como el medio de hacer valer ante los tribunales, los derechos establecidos por la ley.

6. Los derechos antes de poderse deducir en juicio por medio de procedimientos determinados, necesitan amoldarse dentro de ciertas formas ó reglas generales de clasificación, constituyendo estas parte de los derechos, bajo el aspecto que las considera la ley romana, ó bien de los procedimientos, como las consideran las leyes actuales modernas de enjuiciamiento.

7. ¿Acciones ó procedimientos, porque qué ley deben regirse?

8. Por la ley del lugar en que se ejecutan ó verifican; pero ley de los procedimientos no se refiere exclusivamente á éstos, sino á todos los actos jurídicos desde el punto de vista de su forma; así pues, para el derecho internacional privado actos como procedimientos quedan comprendidos en el tercer objeto del derecho y se rigen como queda indicado por ley del lugar en que se verifican. *Locus regit actum*, dicen los doctrinarios.

9. Ley de la nacionalidad de los interesados, ley de ubicación de la cosa forzosamente tienen que ser proscritas, lo mismo ley de la celebración de los contratos; ley del lugar en que los actos se verifican, se impone en la materia.

10. ¿Por qué ley del lugar ha de regir los procedimientos y la forma de los actos?

11. Contestan los estatutistas, porque asi se respetan los derechos de las partes y lo exige la razón, con más apremio

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

seguramente que respecto de cualquier otra materia jurídica sujeta á ley local.

12. Persuade la más ligera reflexión que la forma de los actos ha de regirse por ley del lugar, porque ¿con visos de razón y de justicia que otra ley podría regirla?

13. Además otra ley significaría á veces un imposible; y dice Savigny (párr. 381). "Cuando un Prusiano cae enfermo en Francia y quiere hacer testamento, debería según la regla provisional más arriba expuesta, recurrir á la intervención de un tribunal, puesto que el derecho prusiano no reconoce otros testamentos que los que se hacen ante la justicia. Pero hallándose en Francia, atribuida exclusivamente ésta función á los notarios, no tiene ningun tribunal facultad para intervenir en la confección de un testamento." Claro es lo expuesto en mi concepto. Si la ley de un país exige por el contrario forma notarial y no existen notarios donde se dé forma al contrato, es imposible llenar ese indicado requisito.

14. Asi discurren los estatuistas, admitiendo sin duda las acostumbradas limitaciones del derecho público y de lo favorable ó desfavorable; y sea de esto lo que fuere, importa determinar el alcance de la regla expuesta, tal como hoy se acepta generalmente, que es sustancialmente como se ha admitido, desde las más remotas épocas del derecho internacional privado.

15. Primeramente, la ley del lugar como queda enunciada significa un derecho facultativo, es decir, que los interesados pueden adoptar forma local, sin perjuicio de seguir la establecida en el lugar en que el acto jurídico ó el contrato han de ponerse en ejecución.

16. ¿De dónde viene ésta facultad? ¿No es cierto que la razón sostiene el principio enunciado, y si ésto es así debe acatarse en toda su extensión? Contesto que como se funda en la razón el principio, así sus taxativas y particularidades, porque ningun inconveniente presenta el ajustarse á ley

extraña, cuando así conviene á las partes y derecho público del lugar de la ejecución no se vulnera.

17. Si así discurren por modo intachable los estatutistas, veamos si en algo favorece al desarrollo de sus teorías, la adopción del principio de derecho público, como base fundamental del derecho internacional privado, según con anterioridad se ha explicado.

18. Por regla general el derecho público del lugar se halla interesado en los procedimientos y requisitos de forma; pero no de un modo absoluto, sino que principios hay de forma que no se ligan directamente con el bienestar y progreso de las sociedades, ni se consideran como indispensables para su conservación.

19. Siendo todo ésto inconcuso, dedúcense con facilidad éstas reglas: los procedimientos y las formas, se rigen por ley de lugar propio, en tanto la sostiene el derecho público. Ley del lugar extraño, puede respetarse en tanto que el derecho público no se opone; lo secundario, lo que con el derecho público ni de uno ni de otro lugar contendientes se liga, puede regirse por ley del lugar en que el acto se verifica, ó bien en el de la ejecución del acto, porque toda ésta libertad de las partes consiente la materia.

20. Esto es, se discurre en materia de estatuto formal del mismo modo que respecto de estatuto personal, real y de derecho de las obligaciones. (Veáse lecc. IX.)

21. Esto expuesto, importa advertir primeramente que el lugar donde los actos ó los procedimientos se verifican no es dudoso, lo que si sucede con el lugar donde los contratos se celebran. Imaginese la forma que se quiera, escrita que es á la que principalmente me refiero ó verbal ante testigos ó cualquiera otra, nunca puede suscitarse duda acerca del lugar en que se llevó á efecto.

22. Al establecer la ley real como principio para resolver los conflictos de que me ocupo, es de todo punto claro

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

que me refiero exclusivamente á la forma y no á la sustancia ó la esencia. Observaciones son éstas que respectivamente se han hecho al tratar de los estatutos personal, real y del derecho de las obligaciones.

23. Si de una hipoteca se trata, por ejemplo, uno es el derecho hipotecario, otra la forma del contrato; una ley regirá lo primero y otra lo segundo; pero querer que todo se rija por una misma ley, defecto es gravísimo que conduce á los más trascendentales extravios. Lo he dicho con mucha frecuencia, es necesario deslindar en toda relación jurídica todos sus elementos componentes y regir cada uno de ellos por la ley que le es propia. A la forma, ha de reducirse lo que á la forma pertenece, sin que por que tal ó cual ley la rija, se pretenda que ha de dominar la esencia del acto, la capacidad de las personas y hasta las cosas á que se refiere.

24. Contrayéndome á los procedimientos y por lo que toca á la prueba, necesario es distinguir lo que es de forma y lo que es de esencia. Puntos de prueba se presentan y medios probatorios especiales, que no significan forma sino derecho concedido bajo el amparo de determinada ley y en éste caso la prueba no se rije por la ley del procedimiento que es la del lugar, sino por la ley que corresponda, según el estatuto á que el derecho pertenece.

25. Formalidades hay llamadas por los internacionalistas habilitantes. Laurent, proyecto de reforma al Código Belga, sección III. dice: "Se llaman formalidades habilitantes, las que la ley prescribe en razón de la capacidad de las partes que figuran en un contrato. Su objeto es habilitarlas, es decir dar capacidad á esas mismas partes contratantes. Tales formalidades nada tienen de común con las formas extrínsecas y se rigen por estatuto diferente." Asi es la verdad, esas formalidades se refieren al derecho y no á su forma y por la ley del derecho tienen que regirse.

26. Hay requisitos de forma en si mismos, que en requisitos de esencia se convierten por ministerio de la ley, y éstos no han de regirse por la ley de la forma sino por la ley del derecho. Nuestra ley civil del Distrito, por ejemplo para la venta de inmuebles requiere la escritura pública; si ésta se considera de forma, se rige por la ley del lugar en que el contrato se formaliza; pero si se considera como debe considerarse, de esencia, se respetará nuestra ley del Distrito y conforme á esta se dará forma al contrato, si bien del modo material que establezca la ley del lugar en que se ocurra ante el notario, quedando á esto reducida en el caso la regla principal á estatuto formal perteneciente.

27. La sutileza de algunos autores ha producido la más lamentable confusión en asunto tan claro, por no fijarse con exactitud los términos de la distinción propuesta; pero si se atiende á que requisito de forma, por mucho que lo sea en si, en requisito de esencia á menudo se convierte, ninguna dificultad presenta la solución de objeciones, fundadas en el defecto indicado.

28. De propósito no me hago cargo de todo el desarrollo que se ha dado por los autores á las reglas relativas al estatuto formal, que en gran parte depende de que los principios sobre la materia, clarísimos en si mismos se desnaturalizan en su aplicación, y tengo para mi, que la simple ponderación de ellos con ánimo imparcial, suple con ventaja á las disquisiciones interminables de los autores, fundadas en un falso y á veces equívoco significado de las palabras.

29. Solemnidades *internas* y *externas*, formas *extrinsecas* é *intrinsecas*, no parecen sino términos excojitados *ad hoc*, para producir oscuridad, respecto de los principios sobre estatuto formal.

30. Que no sea fácil á veces decidir que es lo que pertenece á la forma y que á la esencia, que muchos yerren al hacer la clasificasión, nada significa en contra de los princi-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

pios. Lo mismo y con más frecuencia acontece cuando se trata de calificar si determinada parte de tal ó cual relación jurídica pertenece á las personas á las cosas ó á las obligaciones.

31. Multitud de casos á estatuto formal correspondientes tienen que ser objeto de estudio especial, aun cuando no sea más que por razón de las discusiones á que han dado lugar entre los autores. De ellos me ocuparé en la parte especial de estas lecciones y dejo ya sobradamente indicado como es que solo en ocasiones tales podrán los principios por mí sostenidos en todas materias, desarrollarse debidamente y presentarse con toda la extensión que conviene.

Lic. José Algara.

La persecución de la competencia desleal en materia de marcas de fábrica.

Para que un producto industrial se acredite, es necesario, además de una multitud de otros elementos, un conjunto de signos aparentes materiales, que lo especialicen y que permitan reconocerlo entre otros similares, individualizándolo. Una vez que el productor ha logrado adquirir para sus efectos cierto crédito, justo y debido es que los signos determinantes que lo hacen distinguir entre muchos, constituyan una accesión á su propiedad. De aquí el origen de la propiedad de marcas de fábrica, es decir, del derecho exclusivo al uso de un determinado signo ó de un conjunto de signos exteriores, para cubrir con ellos los productos industriales.

Frecuentemente acontece y de ello en la práctica se han ofrecido varios casos, que fabricantes de buena fe han creído estar á cubierto de toda imitación ó falsificación, depositando en los términos de la ley de 28 de Noviembre de 1889, los ejemplares de sus marcas y que, sin embargo, se han hecho circular en el mercado imitaciones audaces, que no han podido ser perseguidas ante los tribunales del orden criminal.

Trátase, por ejemplo, de una casa manufacturera que en sus productos usa de un signo especial, una figura cualquiera, acostumbrando enviarlos al mercado bajo una envol-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

pios. Lo mismo y con más frecuencia acontece cuando se trata de calificar si determinada parte de tal ó cual relación jurídica pertenece á las personas á las cosas ó á las obligaciones.

31. Multitud de casos á estatuto formal correspondientes tienen que ser objeto de estudio especial, aun cuando no sea más que por razón de las discusiones á que han dado lugar entre los autores. De ellos me ocuparé en la parte especial de estas lecciones y dejo ya sobradamente indicado como es que solo en ocasiones tales podrán los principios por mí sostenidos en todas materias, desarrollarse debidamente y presentarse con toda la extensión que conviene.

Lic. José Algara.

La persecución de la competencia desleal en materia de marcas de fábrica.

Para que un producto industrial se acredite, es necesario, además de una multitud de otros elementos, un conjunto de signos aparentes materiales, que lo especialicen y que permitan reconocerlo entre otros similares, individualizándolo. Una vez que el productor ha logrado adquirir para sus efectos cierto crédito, justo y debido es que los signos determinantes que lo hacen distinguir entre muchos, constituyan una accesión á su propiedad. De aquí el origen de la propiedad de marcas de fábrica, es decir, del derecho exclusivo al uso de un determinado signo ó de un conjunto de signos exteriores, para cubrir con ellos los productos industriales.

Frecuentemente acontece y de ello en la práctica se han ofrecido varios casos, que fabricantes de buena fe han creído estar á cubierto de toda imitación ó falsificación, depositando en los términos de la ley de 28 de Noviembre de 1889, los ejemplares de sus marcas y que, sin embargo, se han hecho circular en el mercado imitaciones audaces, que no han podido ser perseguidas ante los tribunales del orden criminal.

Trátase, por ejemplo, de una casa manufacturera que en sus productos usa de un signo especial, una figura cualquiera, acostumbrando enviarlos al mercado bajo una envol-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

tura determinada para cada clase de ellos, cuidando siempre de que en todos se use de aquel signo.

Un imitador de mala fe, elabora productos que aún no se han acreditado, que tal vez no lo estarán nunca; para su venta, copia exactamente toda clase de detalles aparentes, colores, envolturas, títulos, viñetas, etc. y materiales contenidos en los efectos del primer productor, respetando cuidadosamente el signo especial que es reemplazado por otro que no es ni semejante y registra su márca de fábrica, haciendo constar que la constituyen precisamente el color, la forma, las locuciones, la disposición general y aparente de la mercancía.

Es inconcuso que los hechos determinados procuran un lucro ilícito y además causan perjuicio tanto al comerciante de buena fe, por la diminución en su consumo, como al público en general, que frecuentemente será engañado, como prácticamente sucede, especialmente tratándose de ciertas mercancías destinadas por su misma naturaleza á ser consumidas por personas que no podrán diferenciarlas.[1]

¿Qué acciones en el orden civil ó penal y conforme á la legislación mexicana puede ejercitar el comerciante perjudicado, en contra de los imitadores de sus productos, para lograr que á éstos se les impida el uso de *marcas* de que con mucha anterioridad han estado los primeros en posesión, acreditándolas?

Los hechos relatados caracterizan una competencia desleal perfectamente determinada; se reconoce la superioridad de un producto industrial y con la certeza de no poder entrar en concurrencia con él al mercado, se usa de medios ilícitos; aprovechando con mala fe, el crédito ya adquirido, se vende el producto bajo una apariencia que produce error. Tratáse de un conjunto de actos reprobados y la primera

1 De hecho ha ocurrido el caso, á propósito del hilo llamado "de bolita," que por lo común solo usan los indígenas.

idea que se levanta es que deben necesariamente estar comprendidos en el catálogo de los delitos.

Pero no es así: los imitadores han procurado cuidadosamente no copiar, ni siquiera imitár el "signo determinante de la especialidad para el comercio"[1] del producto industrial y en tanto que aquel signo determinante—marca de fábrica, conforme á la ley—no se use para otros productos, reproduciéndose *exacta y completamente*, ó haciendo de ella una imitación que sea de tal naturaleza que presente una semejanza capaz de confundirla en su conjunto, aunque no en sus detalles, no podrá intentarse una acción criminal. Es decir que el productor perjudicado no podrá desarrollar una defensa enérgica y eficaz, para repeler un ataque á sus intereses, sino que apenas si podrá entablar un juicio del orden civil, sujeto á multitud de fórmulas y de eventualidades, indispensables en teoría y desesperadamente dilatadas en la práctica.

A este respecto y en comprobación de lo expuesto, acerca de la no procedencia de una acción criminal, los términos de la ley mexicana son expresos y terminantes; en el art. 16 se precisan los casos de falsificación, reduciéndose á los relatados. Hay falsificación de marca de fábrica—dice el artículo mencionado:—

I. Cuando se usen de marcas de fábrica que sean una reproducción exacta y completa de otra cuya propiedad esté ya reservada.

II. Cuando la imitación sea de tal naturaleza, que presentando una identidad casi absoluta en el conjunto, aunque no en ciertos detalles, sea susceptible la marca de confundirse con otra legalmente depositada.

En ambos casos se exije, para la procedencia de una acción criminal, que la marca que se supone imitada ó falsifi-

1 Términos textuales de la ley de márcas de fábrica.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

cada se encuentre legalmente depositada, habiéndose declarado la propiedad exclusiva de ella.

Pero en el caso supuesto, por una parte el comerciante de buena fe ha cuidado de depositar en la Secretaría de Fomento y de anotar en el Registro de Comercio, no el conjunto de detalles que usa para singularizar el producto, sino únicamente el signo constante que aparece en todos los de la fábrica, que frecuentemente será el que le dé el nombre bajo el cual sea conocida entre los consumidores, y al hacerlo así no ha procedido por imprevisión, sino porque la ley dispone que no se considerarán como marcas *la forma, el color*, locuciones ó designaciones que no constituyan por sí solas el *signo determinante* de la especialidad del producto. Y por otra parte el imitador, aprovechando en beneficio suyo los términos de la misma ley y hasta su interpretación racional, que como después veremos es la oficial, al registrar sus marcas ha manifestado expresamente que *la forma, el color* y todas las circunstancias exteriores son las que constituyen por sí mismas *el signo determinante* de la especialidad para el comercio de sus productos.

Extremando la dificultad en sus consecuencias podría llegarse hasta el absurdo de que el legítimo propietario pudiera ser acusado como imitador.

En la gran mayoría de los casos, precisamente la forma, el color y las locuciones y designaciones, es decir, el aspecto general del producto, es lo que *lo especializa*, de donde resulta que el artículo si no es inútil, es perjudicial, porque favorece la competencia desleal de los imitadores, sin que pueda fundarse en el texto de la ley una persecución criminal, contra actos que indudablemente han sido considerados como delictuosos en el *espíritu* de la misma ley, pero que en su *letra* no han sido comprendidos.

Es pues improcedente de todo punto, cualquiera acusación criminal, porque la ley exije que la marca falsificada

sea una copia exacta de la legitima, ó que sea de tal manera semejante en su conjunto, aunque sea distinta en detalles, que pueda tomarse la una por la otra; y en el caso no se ha reproducico la marca registrada, ni se hace uso de alguna que pueda confundirse.

Es muy lamentable que tales maquinaciones no puedan ser incluidas en el catálogo de los delitos castigados por el Código Penal; pero no por eso es menos cierto el hecho. Los procedimientos especificados hieren el sentido moral y merecen una pena; pero conforme á nuestra ley, no podrá conseguirse castigarlos.

En todas las legislaciones modernas es reconocido el principio de que la propiedad de las marcas de fábrica corresponde al primer ocupante, al primer industrial que usa de ellas en sus productos. El art. 8º de nuestra ley declara que "el que primero hubiere hecho uso legalmente de una marca, es el único que puede pretender adquirir su propiedad....."

El depósito de la marca, la declaración de que se reserva el solicitante, la propiedad de ella y en último resultado la declaración oficial que otorga el Ministerio de Fomento (art. 9° de la ley) y su anotación en el Registro de Comercio (art. 21, fracc. XIII, Código de Comercio) no son legalmente, ni pueden ser los elementos constitutivos, los actos que crean, que hacen nacer la propiedad de una marca: son simplemente declarativos, presuncionales, dejando á salvo los derechos de tercero.

El hecho que por sí mismo é independientemente de cualquiera otro y de cualquier procedimiento del orden administrativo, origina un verdadero derecho adquirido, un derecho real, un derecho de propiedad á una marca, es como se ha dicho, el primer uso de ella, la ocupación. (Vease el art. 8º de la ley).

Y los intereses de tercero que la ley debe proteger son precisamente los derechos de propiedad adquiridos por una

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

posesión y uso anteriores, hayan sido ó no declarados oficialmente. En ambos casos la ley da un procedimiento para el primero, para cuando se pretende usurpar una marca amparada por un depósito y declaración en forma, se aplicarán los arts. 16 y 17 de la ley especial de marcas y el 701 del Código Penal, clasificando el hecho como una falsificación.

Para el segundo caso en que la marca no se encuentra amparada por una declaración de propiedad, la ley ha juzgado que mayor sería el perjuicio social y de los particulares si los industriales que han adquirido la propiedad de una marca de fábrica llenando los requisitos de la ley arts 5º y 6º y después de transcurrido el término que la misma fija (art. 10, inciso II) sin que dentro de él se haya formulado oposición alguna, pudieran ser acusados de falsificación y objeto de una demanda criminal. El raciocinio, en lo general no puede ser mejor fundadado.—Por estas consideraciones sólo concede una acción civil, declarando que la propiedad de una marca obtenida en contravención á sus disposiciones será declarada judicialmente nula á petición de parte.

El que desconociendo la interpretación administrativa da al art. 3º de la ley, ha dejado de depositar sus marcas de fábrica en su totalidad y no ha cuidado de oponerse, en el término en que hubiera podido hacerlo ante la autoridad administrativa, á la declaración de propiedad de otras, que son muy semejantes á las suyas y que pueden facilmente confundirse, tiene que ocurrir á la autoridad judicial intentando una demanda en el orden civil, para probar, con todos los medios de prueba, que su posesión es anterior y para que se decida en juicio contradictorio que la propiedad adquirida de la marca es nula.

A la conclusión que se llega, por los fundamentos expresados en extracto, es á la procedencia de entablar una demanda en juicio ordinario del orden civil.

Nuestra legislación civil copiada en gran parte de la francesa en sus principios generales, no es idéntica, sino solamente semejante á ella en la materia de responsabilidad civil. La ley francesa establece el principio general de que nadie puede enriquecerse en perjuicio de otro, y fundados en él todos los autores franceses (Pouillet, Renbu, E. Blanc etc.,) tratadistas especiales en la materia se ponen de acuerdo para opinar que actos de competencia desleal caracterizados como los que dan orígen á esta opinión pueden dar motivo á una demanda la cual obtendría fundadamente:

I. La declaración de que los usurpantes carecen del derecho de seguir usando la marca: y

II. Una indemnización por daños y perjuicios.

Bajo otra forma nuestra ley consigna una protección de derechos muy semejante y el art. 21 del Código Civil vigente previene que en caso de conflicto de ellos y á falta de ley expresa para el caso especial, la controversia se decidirá *á favor del que trate de evitarse perjuicios* y no á favor del que pretenda obtener lucro.

Es evidente que un productor ó comerciante de buena fe si llega á instaurar un pleito, lo hará obligado por la necesidad de evitarse los perjuicios que la competencia incorrecta de los imitadores le acarrea y que éstos como se ha repetido con exceso, usan de maquinaciones desleales para obtener un lucro indebido.

El principio favorece los intereses de los primeros y la demanda será fundada tanto en él como en el artículo especial á que ya se ha hecho referencia, de la ley de marcas de fábrica acerca de que la propiedad de ellas obtenida en contravención á sus disposiciones será declarada judicialmente nula.

La solicitud de indemnización por daños y perjuicios aunque de muy difícil prueba y éxito podría intentarse, regulando su cuantía aproximadamente.

El éxito sería más dudoso por lo relativo á la indemni

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

zación de daños y perjuicios, porque si para el objeto principal de la demanda, los artículos 21 del Código Civil y 14 de la ley de 28 de Noviembre de 1889 interpretados como se han interpretado pueden dar una base de acción que reviste caracteres de que prosperará, para los daños y perjuicios no se encontraría ley en que fundarlos, y en esto difieren, como se ha dicho, nuestros principios acerca de responsabilidad civil con respecto á los de la ley francesa. El art. 1,458 expresa como causas de responsabilidad civil:

I.—La falta de cumplimiento de un contrato y

II.—Los actos ú omisiones que están sujetos expresamente á ella por la ley.

Y todo el capítulo del Código Civil sobre la materia regula los casos relativos á la frac. I. Establece que el contratante que falte al cumplimiento de un contrato, en la sustancia ó en el modo, será responsable de los daños y perjuicios que cause al otro contratante; impone la prestación del dolo en todos los contratos etc. etc., siempre sobre la base, para todas sus disposiciones de que la imputabilidad proceda por lo previsto en la frac. I.

Con relación á los actos ú omisiones que están sujetos *expresamente* á responsabilidad civil, el Código enumera algunos en aquel capítulo entre ellos los delitos, y para todos los demás deja á la ley que los erija con tales caracteres el cuidado de especializar sus consecuencias. Así proceden los artículos de ese mismo Código, 883 que obliga al poseedor de mala fe á los daños y perjuicios: el 1,550 que impone la obligación de pagar intereses al que recibe una cantidad indebida: el 1552, por lo que respecta á cualquiera cosa que se recibe sin derecho los 1,487 y 1,498 que regulan detalladamente la responsabilidad de que enajena algún objeto de buena ó mala fe y tantos otros que no es preciso citar, pues para el objeto bastan los aisladamente enumerados.

Un principio tan general como el que establece el art.

301 del Código Penal[1] falta en la ley civil y por esta razón es aventurado intentar la demanda por lo que se refiere al resarcimiento de daños y perjuicios.

En contra de la opinión desarrollada, alguna respetabilísima ha expresado en un caso concreto que aun cuando no hay disposición legal que de una manera expresa establezca la obligación de indemnizar cuando algún fabricante ó industrial obtiene y usa en perjuicio de tercero una marca de fábrica de que puede decirse que ese tercero está en posesión, pero cuya propiedad no le ha sido declarada, son aplicables los principios generales de derecho, conforme al art. 20 del Código Civil y que lo es que el que invade un derecho de tercero causa un daño que está obligado á indemnizar. Se opina también que son aplicables los principios sobre posesión de mala fe, siendo un caso aquel en que se conocen los vicios del título con que se posee; además pueden aplicarse los principios sobre dolo y mala fe.

Como se ha dicho, sería cuando menos aventurado intentar una reclamación por daños y perjuicios. La discusión á que se presta la materia del caso lo comprueba, porque podría la opinión de los tribunales inclinarse á decidir un caso práctico, dictando una sentencia inspirada en las opiniones que sostienen la teoría restrictiva en materia de responsabilidad civil.

Es, pues. notorio que hay cuando menos defectos de oscuridad en la ley, para poderse reprimir con ella actos de competencia desleal que necesariamente con el tiempo han de aumentar á un grado de complexidad difícil de preverse. Para los casos ya conocidos ¿cual será el remedio que corte de raiz hasta la posibilidad de amparar maquinaciones dolosas? La solución es sencilla, teniendo en cuenta que las di-

1 La responsabilidad civil proveniente de un hecho ú omisión contrarios á una ley penal, consiste en la obligación que el responsable tiene de hacer:
I.—La restitución: II. La reparación: III. La indemnización: IV. El pago de gastos judiciales.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

ficultades provienen de que el art. 3º de la ley concebido con la mejor intención, es el que da origen á ellas y que la práctica administrativa al interpretarlo lo ha declarado inútil, supuesto que basta manifestar que la marca se constituye por todos los signos exteriores, para que, en caso de no oposición, el Ministerio conceda la propiedad solicitada.

La solución necesariamente indicada se concreta á la supresión del art. 3º de la ley, supuesto que de hecho no llena el fin que indudablemente se propuso el legislador al redactarlo.

México, Febrero 25 de 1898.

Ismael Pizarro Suárez.

LA ESCUELA CRIMINALISTA POSITIVA.

Por E. Ferri.

A los estudiantes de la Universidad de Nápoles.

Consiento en la publicación de la conferencia que tuve el honor de dar en vuestro Ateneo, no porque crea que por sí merezca sobrevivir á los últimos ecos de ella en aquel aula donde me dispensásteis tan inesperada acogida.

Me guían el deseo de atestiguaros una vez más el gratísimo recuerdo, para mí indeleble, que conservo de vosotros y de la hospitalidad napolitana, dedicándoos esta conferencia que os debe el ser lo que es; y también el deseo, por amor á la ciencia y á la patria, de ayudar de este modo á la propaganda de las nuevas ideas, que creo solución única y fecunda del problema criminal en Italia y que sólo temen el peligro de no ser exactamente conocidas.

He aquí las razones de esta publicación de la cual, pues, no debe exigir el benévolo lector ulteriores novedades científicas, no consentidas en un escrito sólo de propaganda, que se propone únicamente repetir y difundir las ideas generales y más características de una escuela científica; pero de la cual espero que en cada uno de los lectores nazca ó se refuerce el propósito de no repetir contra la nueva escuela acusaciones

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

ficultades provienen de que el art. 3º de la ley concebido con la mejor intención, es el que da origen á ellas y que la práctica administrativa al interpretarlo lo ha declarado inútil, supuesto que basta manifestar que la marca se constituye por todos los signos exteriores, para que, en caso de no oposición, el Ministerio conceda la propiedad solicitada.

La solución necesariamente indicada se concreta á la supresión del art. 3º de la ley, supuesto que de hecho no llena el fin que indudablemente se propuso el legislador al redactarlo.

México, Febrero 25 de 1898.

Ismael Pizarro Suárez.

LA ESCUELA CRIMINALISTA POSITIVA.

Por E. Ferri.

A los estudiantes de la Universidad de Nápoles.

Consiento en la publicación de la conferencia que tuve el honor de dar en vuestro Ateneo, no porque crea que por sí merezca sobrevivir á los últimos ecos de ella en aquel aula donde me dispensásteis tan inesperada acogida.

Me guían el deseo de atestiguaros una vez más el gratísimo recuerdo, para mí indeleble, que conservo de vosotros y de la hospitalidad napolitana, dedicándoos esta conferencia que os debe el ser lo que es; y también el deseo, por amor á la ciencia y á la patria, de ayudar de este modo á la propaganda de las nuevas ideas, que creo solución única y fecunda del problema criminal en Italia y que sólo temen el peligro de no ser exactamente conocidas.

He aquí las razones de esta publicación de la cual, pues, no debe exigir el benévolo lector ulteriores novedades científicas, no consentidas en un escrito sólo de propaganda, que se propone únicamente repetir y difundir las ideas generales y más características de una escuela científica; pero de la cual espero que en cada uno de los lectores nazca ó se refuerce el propósito de no repetir contra la nueva escuela acusaciones

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

tan vulgares como inmerecidas, ó mejor que se dediquen de ahora en adelante al estudio y al progreso de la sociología criminalista.

La escuela criminalista positiva.

Debían ser bien fuertes las razones que desde Siena me trageron aquí donde tanto fulgor de vida anima y enciende el pensamiento. El deseo de amigos lejanos, la invitación gratísima y lisongera de jóvenes compañeros de estudio, á los cuales como á mí sonríe la sacra primavera de la ciencia, y á los cuales doy desde ahora testimonio de la más sincera gratitud: estas son las razones que aquí me condujeron. Pero, sobre todo, el profundo convencimiento de que es Nápoles terreno donde el gérmen de todo nuevo principio y de todo alto ideal tiene siempre su mayor expansión por la intuición felicísima de este pueblo, en que más vivamente italiana palpita el alma de Italia. Nápoles, donde el derecho penal ha contado desde Filangieri, Pagano y Niccolini hasta Suppetta y Pessina, grandes maestros de una escuela, á la cual queremos suceder nosotros, no por manía de demolición, sino con inteligencia de amor, con reverente afecto, y por el indeclinable deber de desarrollar lo que ellos no pudieron, porque cada época tiene su misión científica. Nápoles especialmente, donde hace más de cuarenta años la escuela clásica criminalista obtuvo de Zuppetta admirable sistematización de aquellos principios, que luego fueron por otros reproducidos y ampliados; y Pessina, hasta 1879, después de los primeros albores de la nueva escuela criminalista, sostenía la necesidad, para el Derecho penal, de renovarse en las puras ondas del naturalismo.

De diez años á esta parte unos cuantos hombres de estudio, seguidos poco á poco por una falange cada vez más numerosa y apretada de compañeros de combate, han iniciado y proseguido esta renovación, realizando así los votos que vuestro maestro de derecho criminal expresaba desde esta cátedra.[1]

Cierto que nuestra obra no corresponde por completo á las miras de quien la anunciaba como deseo y tarea común; pero esta es contingencia que no elude la necesidad constante y perpetua en la ciencia de que cada uno trate de llevar innovaciones al patriotismo intelectual de la generación á que pertenece. La verdad es un polígono al cual se mira por todos lados; por eso todo innovador lleva materiales nuevos y nueva vida á la ciencia, que de otra manera se estanca en el dogmatismo y en las repeticiones infecundas. A los jóvenes más que á nadie incumbe esta tarea innovadora, útil por sí misma; independientemente de la bondad de las innovaciones, puesto que también para las ideas hay lucha por la existencia. Si la idea innovada no es exacta, esto es, no responde á la realidad de las cosas, no será más que una solitaria tentativa. Pero si el innovador ha observado la verdad y aportado una idea exacta y vital, entonces las mismas fuerzas de la naturaleza harán seguir por completo á estas nuevas ideas el camino del mundo sin que él tenga que hacer

1 En este punto de mi discurso, si la premura que me instaba y que me hizo omitir otros tantos apuntes, y la emoción fortísima no me hubiesen negado la oportunidad, hubiera debido recordar también, como lo hice en diversas publicaciones mías, el nombre de dos briosos defensores del positivismo científico, profesores de filosofía é historia del Derecho en la Universidad Napolitana, Angiulli y Bovio.

Algunas diferencias secundarias de parciales puntos de vista científicos me separan de Angiulli, uno de mis maestros de psicología positiva; y fundamental diferencia de aplicación del método científico me separa de Bovio, que en su *Ensayo crítico del derecho penal* se ha detenido en la crítica silogística, sin añadir la reconstrucción científica ni siquiera en la nueva edición de 1883, después del amplio desarrollo de la escuela criminalista positiva, allí no recordada. Pero esto no me hace menos grata la ocasión de reparar un silencio que sentiría que otros hubiesen atribuido á intolerancia ó á mezquinos sentimientos bien distantes de mí como de cualquiera que no admitiendo para sí ni para los demás el monopolio de la verdad, estima á los pensadores, no tanto por la calidad de sus ideas, como por la potencia científica con que las defienden.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

una guerra personal ó intolerante. Porque hago observar desde el principio que la tolerancia para las ideas es el primer indicio de la cultura y alteza intelectual de un individuo como de un pueblo. Es cuestión de convencimiento, es cuestión de haber recogido un número dado de hechos que fortalezcan aquella observación dada; y cuando alguien opone otros hechos y otras observaciones, es cuestión de ver la resultante que naturalmente deriva de ellos. Pero hayáis dicho la verdad ó el error, vaya ó no seguida de buen éxito vuestra empresa, siempre habréis merecido bien de la ciencia, siempre seréis beneméritos de la sociedad, que en la ciencia encuentra un elemento de vida, uno de los más altos motivos de su progreso.

Todavía hay otro destino común, si del cual tenemos conciencia nos conforta, continuando por la senda que habiamos comenzado á recorrer, sin embargo de los obstáculos que intentan atravesarse en el camino.

Este destino es que mientras que en su juventud aspira el hombre á la innovación en todas las esferas de la actividad, al llegar al ocaso de la vida se retrae y cree que aquí están los últimos términos del saber y ve con temor que otros se le puedan adelantar. Es destino común el ser revolucionarios en la juventud y conservadores en la vejez. A nosotros los jóvenes nos toca, pues, la misión del porvenir.....

Cuando en una desconocida región de la naturaleza avanza atrevido y confiado algún fuerte pensador y conquista todo cuanto más terreno inexplorado puede, mientras le sobran fuerzas y le incitan, prosigue animoso la lucha contra lo desconocido; más, cuando al llegar al fin de su carrera cae desfallecido, porque tal es el destino humano, grita á todos los demás: «¡Deteneos, deteneos, yo llegué al último grado de la ciencia!» En vano: la inagotable naturaleza fatiga con nuevo impulso á otros combatientes é inexorable los empuja con

su fatal mandato: «¡Marcha, marcha, conquista toda la verdad que puedas.....!»

Con tales intenciones y con este sentimiento de gratitud hacía vosotros, en cuanto me lo permita la brevedad del tiempo y el temor de abusar de vuestra benevolencia, os señalaré hoy el movimiento innovador que desde hace poco más de diez años se ha iniciado en la ciencia criminalista, y va progresando cada vez más en nuestro país y en las otras naciones, que lo estudian y lo alientan precisamente con el nombre de «nueva escuela italiana del derecho penal.»

Señalaré con breves líneas estos nuevos principios para dejar una idea exacta de ellos en vuestros espíritus observadores, á fin de qne al ser peritos en esta ciencia podáis corregir sus errores y desarrollar sus verdades con la discusión tolerante, apresurando el momento de una completa organización de lo sociología criminal, que ahora sólo podemos entrever.

Así, cuando los primeros rayos rosados del sol naciente saltan de cima en cima sacando las cosas y la vida de las tinieblas nocturnas, el alpino solitario, aunque apenas distingue la vaga, indefinida fisonomía de sus montañas, entrevé, sin embargo, desde el alba el espectáculo vario é inmenso con que en el medio día luminoso será magnífica su comarca.

La Lucha por la existencia es férrea ley que empuja sin sosiego la onda eterna de las generaciones, mitigando cada vez más sus formas, desde la primitiva lucha violenta hasta la moderna competencia intelectual; pero quedando siempre, deidad inexorable, como norma suprema de la vida, porque

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

luchar es vivir, y el hombre que no lucha está muerto ó moribundo.

En la sociedad toma dos diversos aspectos esta lucha: el uno comprende la actividad normal económica ó jurídica del individuo; el otro, la actividad anormal ó criminal. De la primera se ocupan las ciencias económicas, políticas ó jurídicas; de la segunda, la sociología criminal.

En la primera se manifiesta el aspecto económico de la cuestión social; en la segunda el aspecto criminal. Aquel es, con mucho, más arduo y más áspero que éste; pero éste es, sin embargo, esencial para la vida del individuo de la sociedad, porque, adquiridos los alimentos, es preciso adquirir la seguridad de la propia persona y de los propios derechos, á la cual provee precisamente el magistrado penal regulado por la ciencia. Ahora bien, la ciencia criminalista encuentra ante sí como primer hecho una gran mayoría de ciudadanos que luchan de un modo jurídico, y una exigua minoría facinerosa que lucha de un modo criminal. Por consiguiente, encuentra como primero y fundamental problema esta constante reaparición del delito en todos los países. Problema capital, máxime en Italia, donde hay mayores ejércitos de delincuentes que en otras naciones.

Italia, que en 1862 tenía cerca de 28,000 detenidos, condenados, dejando aparte los solamente acusados, en 1872 tenía 43,000; cifras acrecentadas también por la readquisición de las provincias de Roma y Venecia, arrancadas al yugo extranjero y reunidas de nuevo al organismo nacional; en 1882 tenía 51,000. Y para daros algunas cifras aisladas, que son, sin embargo, un síntoma elocuente, y para citaros el delito más grave; os diré el número de los homicidios que en Inglaterra está actualmente en la proporción anual de 11 por cada millón de habitantes, en Francia en la de 15, en Prusia en la de 13 y en la de Italia en la de 91.

Lo cual quiere decir que este problema penal adquiere

en Italia tal agudeza que verdaderamente debe ser una de las causas por las cuales se aplica con tanta ventaja el ingenio italiano á la ciencia de los delitos y de las penas, hasta el punto de hacer de pronto germinar y crecer rozagante un nuevo organismo científico allí donde había sobrevenido ya el agotamiento en las teorías del derecho criminal clásico.

Así, pues, el positivismo científico nos enseña también á ser modestos; ya que, si se ha determinado esta nueva corriente en la ciencia criminalista, es porque las circunstancias del medio ambiente exigían este modo de ser de las cosas.

Por tanto, ni hay que conceder por ello mérito exclusivo á este ó aquel pensador, ni hay que creer luego que esta nueva escuela ha nacido por veleidad caprichosa de este ó aquel sabio; antes bien, por una necesidad verdadera y urgente de la conciencia popular, moral y jurídica.

El problema fundamental está pues, en que todos los años hay una minoría de malhechores que perseveran en la delincuencia, mientras que la gran mayoría de los ciudadanos, bajo la presión de las mismas condiciones, se mantiene dentro de los límites del derecho. ¿Qué respuesta ha dado á este problema la ciencia criminalista clásica? Es inverosímil, pero es verdad: ninguna respuesta.

Si abrís un tratado de Derecho penal, os quedaréis llenos de admiración por quien lo ha escrito, como los libros de Pessina, de Carrara, de Zuppetta; donde, si estáis de acuerdo con las primeras premisas, un poderoso mecanismo lógico os arrastra inexorable hasta las últimas consecuencias.

Pero en estas obras, en estas páginas estupendas, no encontráreis planteado aquel problema, porque estudian el Derecho criminalista en sus principios abstractos, esto es, considerando las condiciones jurídicas para obtener por ejemplo, la imputabilidad, la tentativa, la complicidad, la reincidencia, las circunstancias calificativas, las exculpantes, y ven si se han verificado en el caso concreto. O si se da alguna respuesta á

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

aquella pregunta, la escuela clásica da como única y exclusiva causa natural del delito la libre voluntad, y á ella imputa la eficiencia de los delitos, considerando el delito como un ente jurídico abstracto y cortando así de raíz todas las ulteriores investigaciones acerca de las causas de los delitos; porque cuando se dice que si el hombre comete los delitos es porque quiere cometerlos, ya está dicho todo.

Por lo demás es cierto que algunos grandes criminalistas, como Filangieri, Romagnosi, Carmignani, Ellero, etc., se han ocupado de las causas de los delitos; pero su voz fué olvidada, porque otra cosa entendía la escuela criminalista predominante; su voz no fué escuchada, la semilla que arrojaron no germinó. Ahora volvemos á emprender nosotros aquellas olvidadas investigaciones, determinando así un nuevo movimiento científico.

Así también, si preguntáis á la escuela clásica cuales son los remedios contra el delito, responde la pena, como coerción y castigo de la maldad subjetiva.

Y esto, no por inducción científica, sino tan sólo por un razonamiento abstracto, por un silogismo hegeliano: el delito niega el derecho, es así que la pena niega el delito, luego la pena afirma el derecho.

Pero esta respuesta no es científica porque en ella no tenemos ningún otro elemento de hecho extraño á la pregunta, y nos sujetamos, por consiguiente, á una simple tautología. Y en verdad, los hechos contradicen tenazmente el que la pena extingue el delito. La historia y la estadística nos afirman que cuando las penas eran más violentas, entonces fueron más impotentes para reprimir los delitos.

Así, las penas bajo Roma imperial fueron insuficientes para impedir la general corrupción de costumbres.

Cuando, por ejemplo, el Cristianismo abrió á la humanidad una nueva era, en vano los emperadores paganos impusieron á los secuaces de aquel cisma (que tal era para ellos

el Cristianismo) las hogueras, y los tormentos, y las fieras; en vano, porque ha realizado el glorioso destino de que era capaz y cuyo cumplimiento imponían fatalmente las condiciones históricas.

Lo mismo podemos decir en nuestra época del más elástico movimiento socialista, en el cual, de cierto hay una parte aceptable y otra no; porque, como dice Manzoni, el tuerto y el derecho no se deslindan jamás con una línea recta. Este movimiento socialista desafía todas las persecuciones de los gobiernos, como, lo ha confesado hasta el gobierno de Alemania, donde las malas circunstancias se han agravado con la misma ley acerca del estado de sitio, promulgada para remediarlas. Y asegurad lo propio del fenianismo en Irlanda, del nihilismo en Rusia. Lo cual quiere decir que la pena no es remedio único y suficiente contra los delitos.

De aquí, pues, la necesidad de volver á hacer aquella pregunta y ver si el estado actual de las ciencias naturales y sociales ofrece á los criminalistas argumentos seguros para poder dar una respuesta más práctica y más eficaz. Esta es la razón determinante y éste el alto concepto que tiene la escuela positivista la cual sucede ahora al ciclo glorioso de la escuela clásica que en Italia va desde Beccaria, Romagnosi, Filangiere, Pagano, Niccolini, Rossi, Carmignani y Giuliani hasta Zuppeto, Carrara, Pessina, Ellero, Tolomei, Catallano, Nocito, Brusa y algún ecléctico infecundo.

Beccaria manifestaba en su época un sentimiento común más ó menos latente, sentimiento que formuló en su libro inmortal, iniciando así toda una evolución científica. Y, sin embargo, sólo porque Beccaria se oponía á la corriente tradicional, á los hábitos inveterados, encontró idénticas acusaciones de favorecer á los delincuentes, de demoler toda ciencia, que hemos encontrado nosotros y encontramos.

Cuando Beccaria propuso abolir el tormento, fué declarado instigador de los asesinos y de los ladrones porque se

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

partía del razonamiento abstracto de que un hombre que ha cometido un delito no lo confesará nunca, y, por tanto, es preciso hacérselo confesar. Y lo mismo de la confiscación, de la pena de muerte y todas las demás innovaciones.

Y, sin embargo, todas, ó casi todas, las reformas defendidas por Beccaria se llevaron á la práctica porque expresaban una necesidad de sus tiempos. Y los que entonces eran llamados revolucionarios son ahora los más ardientes conservadores del derecho penal, y proclaman aquellas reformas un beneficio insuperable para la moderna sociedad.

Por un destino común á todos los innovadores, nosotros, los de la escuela positivista que sucedemos á la escuela clásica, hemos encontrado las mismas acusaciones que Beccaria y los partidarios de él hallaron en su tiempo.

Cuando Lombroso, Garofalo y una persona que no importa nombrar aquí dijeron «hace falta cuidar más del estudio del delito y sus causas,» fuimos llamados instigadores de los delincuentes. Hemos soportado esta acusación y oposiciones aún más fuertes en la vida práctica que en las discusiones teóricas, tranquilos y serenos, iniciando una escuela criminalista positiva que opone á la escuela clásica diversos propósitos prácticos y científicos. La escuela clásica, nacida por generosa reacción contra la ferocidad punitiva de los legisladores medioevales, que rivalizaban en inventar suplicios con la fantasía de los delincuentes en inventar fechorías, se propuso como objetivo práctico la abolición de muchas penas, como las capitales, corporales, infamantes, de confiscación y la diminución general de las otras penas y al triunfar ha obtenido la mayor parte de esto.

La escuela positivista se propone, en vez de ese, otro objetivo práctico que sin embargo, la escuela clásica debe haber tenido como platónica meta; pero no ha podido realizarlo porque cada época tiene su misión, y la de ésta es la *diminución de los delitos.*

Y tal diferencia de propósitos prácticos proviene de que también es totalmente diverso el método científico. La escuela clásica estudia el delito en su objetividad abstracta, y, por consiguiente, no se ocupa del delincuente sino como de un término algebraico para la aplicación de la pena, proporcionada al delito; y si se ocupa de éste en ciertas condiciones de evidente anomalía, lo ha hecho, y lo hace, por el método apriorístico y por el menor progreso de las ciencias naturales y psiquiátricas en los tiempos pasados, de un modo tan incompleto y con principios tan peligrosos, que llega á convertir los motivos de una mayor defensa social (como en los casos de locura, embriaguez, menor edad, etc.) en motivos de impunidad de los malhechores.

La escuela positivista, por el contrario, considera la criminalidad como un fenómeno natural, y, por consiguiente, en vez de la delincuencia estudia el delincuente, adaptando sobre todo á éste las precauciones defensivas y teniendo el delito cometido sólo como un indicio de la potencia maléfica de quien lo ejecuta.

Y tan cierto es que esta innovación es el designio de las condiciones sociales é intectuales de nuestra época, que encuentra término de comparación en todo el movimiento científico y artístico contemporáneo.

En el arte, al tipo académico abstracto sustituye el tipo vivo de la realidad; ha podido llegar hasta la exageración, reduciendo la pintura á la fotografía y reproduciendo harto á menudo cosas feas y deformes, pero el abuso de un principio nunca es la demostración de su falsedad.

El mismo movimiento hubo en la medicina por obra también de Tommasi, que fué uno de los renovadores de la medicina moderna, de los iniciadores de la nueva escuela positi-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

vista médica; en el sentido de que mientras al principio de nuestro siglo se estudiaba la enfermedad en abstracto, la nueva escuela quiere que se estudie el enfermo en sus condiciones individuales y que, por consiguiente, se cambien el remedio ó la dosis de él según los diversos individuos, dada también la identidad de la dolencia.

En las ciencias sociales encontramos otra confirmación de la tendencia necesaria de nuestra época hacia el movimiento positivista. Por ejemplo, Adam Smith, que es á la economía política como Beccaria al derecho penal, ó más bien sus discípulos, han estudiado los fenómenos económicos en sí mismos, independientemente de las condiciones históricas de cada país. Por consiguiente, representan en la ciencia económica la escuela clásica ortodoxa, que de ahora en adelante debe ceder el campo á la escuela económica positivista, por la cual se estudian los fenómenos económicos en las condiciones propias de cada pueblo, en cada tiempo y clima, en su realidad relativa y transitoria.

Este movimiento positivista se encuentra tanto en las artes como en las ciencias, está determinado por las necesidades históricas de nuestro tiempo, y como tal, es oportuno y fecundo renovador del ambiente científico en las escuelas criminalistas.

En efecto, las publicaciones de la escuela clásica en materia de Derecho criminal son ahora de una rareza evidente, no sólo en Italia, sino en toda Europa; y las pocas que ven la luz representan, como me escribía un venerando maestro, la reproducción, pero no la producción científica, desarrollándose todas con ínfimas diferencias de fórmulas ó de conclusiones particulares dentro de los usuales carriles de los lugares comunes acerca del delito y de la pena. Y la razón es muy sencilla. Una escuela científica no puede dar de sí más que lo que está en su naturaleza íntima. Por consiguiente, toda escuela criminalista lleva dentro de sí el comienzo, el desarrollo

y la decadencia senil. Así en Italia, desde Beccaria hasta Carrara, la ciencia criminalista clásica ha realizado un ciclo espléndido, glorioso, que ha tenido ya su mayor expansión, y por consiguiente, nada más se le puede añadir.

O si se añade algo, no es más que por un proceso ulterior de abstracciones que alejan cada vez más las normas científicas de la realidad terrestre, como lo demuestra la continua y vana fatiga del legislador italiano para formular en un Código penal aquellas sublimes máximas científicas que harto á menudo se rebelan contra la necesidad práctica de una legislación para la cual debieran, sin embargo, estar hechas; vanidad de labor legislativa que aún se evitó para el Código de Comercio, á pesar de ser idénticas las condiciones parlamentarias, precisamente por ser posible la correspondencia de las teorías jurídicas con la práctica de los negocios.

Pues bien; ahora se inicia una nueva expansión científica que tiene una gran fecundidad de trabajo, prueba palmaria de su hirviente vitalidad nueva irrigación de sangre oxigenada en el exhausto cuerpo de la ciencia criminalista.

Y á la manera que en el bosque los humores vitales detenidos por el rigor del invierno vuelven á seguir, al sol de la primavera, su eterno círculo y reverdecen esta «gran familia de plantas y animales;» así en la ciencia criminalista, con el impulso vivificador de la escuela positiva, reverdecen las ideas y vuelven á continuar su eterna circulación, sin la cual no existe la humanidad.

Procedamos ahora á señalar las inducciones fundamentales de la escuela positivista que forman las primeras líneas de esa ciencia que puede llamarse sociología criminal, y que, por consiguiente, traspasa los límites de una ciencia tecnicamente jurídica, estudiando la vida del organismo social en sus manifestaciones patológicas ó criminales.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

La escuela positivista se desenvuelve toda ella entre estos dos polos: buscar las causas naturales de los delitos y señalar sus eficaces remedios, naturales y jurídicos.

Por consiguiente, se propone conseguir el objetivo práctico de la diminución de los delitos con el estudio de la delincuencia como fenómeno natural, guiada por el criterio científico de que primero se deben indagar con paciencia los hechos, para luego deducir de ellos las ideas.

Del hecho á la idea: he aquí la divisa de la nueva escuela criminalista, como de toda la renovada filosofía positiva; y he aquí el secreto de la moderna maravillosa fecundidad en las ciencias naturales y sociales, y por consiguiente, también en la sociología criminal. Del hecho á la idea, con tal de que, como dice Littré, de la máquina de la inducción no quiera sacarse más fuerza de conclusiones que la que dé de sí el combustible de hecho que dentro de ella se introduzca.

El hecho, única fuente de la verdad, por sí solo, porque es indiscutible; el hecho, que una vez comprobado, aun cuando no obtenga de él fruto su primer investigador, está siempre dispuesto á poner en libertad la propia energía lumínica y fecundante, como el grano de trigo que germina después de sus mil años de tinieblas en los sepulcros egipcios.

La idea, que sin el hecho es fosforescencia que se apaga después de iris brillante con que fué concebida en el cerebro de Platón ó de Hegel, y sólo deja tras de sí la ceniza infecunda de una célula cerebral que ha trabajado.

Hace falta, pues, comenzar por el estudio de los hechos. Y así lo hace la nueva escuela criminalista, organizando y completando con unidad de método y de propósito las investigaciones iniciadas acá y allá desde los primeros años de este siglo, pero que habían permanecido hasta ahora disgregadas y truncadas y sin precisa conciencia del método científico, en el campo antropológico, psicológico, estadístico, por lo que respecta á la vida del hombre delincuente.

Y puesto que la escasez de tiempo no me consiente una minuciosa y larga exposición de la expléndida mies de variadísimos hechos, que en los pocos años de su existencia ha entregado ya la escuela criminalista positiva al acerbo común de la ciencia, con la fortuna que le daban la ardiente actividad de sus adeptos y la virginidad del terreno explorado, me bastará indicar sus líneas principales, con una advertencia preliminar.

Y es que, aun cuando en los primeros días de toda ciencia, como de toda parte de la actividad humana, no sea posible la división del trabajo en aquellas proporciones que después se hacen necesarias en los grados ulteriores de la evolución científica, sin embargo, desde ahora paréceme que entre los primeros iniciadores de la escuela criminalista positiva pueden advertirse esta variedad de funciones científicas que naturalmente repercurte en las filas de los combatientes, según sus tendencias mentales y sus estudios: para hablar sólo de los italianos, desde Magno, Barzilai, Virgilio, Amadei, Filippi, Rometi, Bonvecchato, Riccardi, Cougnet, Cosenza, Fioretti y Berenini, hasta Porto, Balestrini, Aguglia, Caluci, Bolaffio, Povía, Precone, Pugliese, Setti, De Paoli, Fazio, Frigerio, Tonnini, Benelli, Lioy, De Vio y tantos otros, Lombroso, naturalista y psiquiatra, prepara ante todo los primeros materiales antropológicos, base necesaria de toda construcción jurídica ó sociológica, con una originalidad y fecundidad de investigaciones tal, que, sin más es preciso considerarle como verdadero fundador de una nueva ciencia; la antropología criminal. Garofalo realiza la distinguida función de sacar más bien las inducciones técnicamente jurídicas de las primeras conclusiones de hecho, mirando en especial á la legislación penal y á la posible reforma de ésta en nuestros días, en este período de transición. Otra persona, en fin, cuyo nombre no importa, trabaja porque la renovación de la ciencia criminalista tenga el mayor alcance

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

no restringiéndose á un enlace de agua de rosas entre la antropología y el derecho penal, como algunos eclécticos infecundos andan diciendo, ni tan sólo á una corrección de principios jurídicos ó de artículos de ley, sino transformando con una substancial innovación de método la ciencia jurídica de los delitos y de las penas en una verdadera y propiamente dicha ciencia social, en una sociología criminal.

En eso precisamente estriba la diferencia entre la ciencia del derecho privado, civil ó comercial, y la ciencia criminalista. Puesto que mientras las primeras estudian nada más que las relaciones jurídicas de una actividad humana considerada en abstracto, deteniéndose en los derechos particulares y en los deberes de los contratantes y de los agentes, con independencia de las condiciones antropológicas de éstos y del ambiente en que desarrollan su actividad; la ciencia criminalista, por el contrario, debe ocuparse en primera línea del individuo agente, cómo nació, cómo vive, con que tendencias y en qué medio ambiente, hasta el punto en que trasciende al delito.

Y si hasta en el derecho civil comienza en nuestros días á tenerse clara conciencia de que se deben cimentar y en parte renovar sus principios con los datos relativos á las condiciones sociales de cada pueblo, siempre sucede, sin embargo que en el derecho civil, como antes en el derecho penal clásico, el agente ocupa un lugar secundario, como término algebraico de aplicación de las abstractas reglas jurídicas, mientras que en la sociología criminal adquiere el primer puesto, y en él, y en el ambiente en que vive se buscan las causas de su actividad criminal.

Precisamente, el estudio de las causas naturales del delito, es lo que constituye el argumento primero y más vital; según la escuela positivista.

Un hombre mata á otro. He aquí el hecho exterior; última fase de un proceso causal, del que es preciso determinar los momentos. Puesto que aquel hombre ha podido cometer un acto que repugna á la mayoría de sus semejantes, antes de todo debe de encontrarse en condiciones personales diversas de las comunes, y debe de haber hallado en el ambiente los estímulos y las condiciones necesarias para que, aparte de tener la idea del delito, haya realizado su ejecución.

Esto equivale á decir que las varias y múltiples causas natarales del delito se dividen en las dos grandes clases de factores *individuales* ó antropológicos y factores *exteriores;* dividiéndose estos últimos, á su vez, en factores *físicos* ó del medio físico, y factores *sociales*.

Comencemos por los primeros. Entre lo físico y lo moral del hombre, si, según la opinión común prejuzgada por la filosofía tradicional, no quiere admitirse el nexo íntimo de la causalidad, que las ciencias modernas establecen evidentemente sin embargo, siempre hay que reconocer un vínculo fortísimo y contínuo. Por eso, el estudio de los factores individuales y antropológicos, atiende por un lado á la constitución orgánica del delincuente, y por el otro á su constitución psíquica ó moral, depeudiente de aquella.

Ahora bien, la antropología criminal, con una serie siempre creciente de observaciones, no sólo acerca del cráneo, sino del cerebro, de los órganos de los sentidos, de las vísceras, de la sensibilidad y de todas las demás manifestaciones biológicas de los delincuentes, ha observado y confirmado que en éstos se encuentran frecuentísimas anormalidades por las cuales los delincuentes, máxime en su tipo más común y peligroso, reproducen en nuestra civilización los caracteres del hombre salvaje y primitivo.

Una contínua evolución transforma poco á poco á la humanidad, sin descansar nunca; pero no todas las razas humanas y no todos los individuos de una raza siguen isométricamente los grados de esta evolución. Hay quien se anticipa, hay quien se retarda en ella; y el hombre delincuente

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

está en retraso con respecto á la raza civilizada á que pertenece, y por consiguiente, reproduce en ella las formas de la primitiva barbarie. No se diga que muchas de las anormalidades halladas en los delincuentes se encuentran también en los hombres honrados, y por tanto, no pueden considerarse como síntomas específicos de delincuencia. Porque no sólo se acumulan con la mayor frecuencia en los malhechores muchas anormalidades de las cuales sólo alguna (y rara vez) se encuentra entre los hombres honrados, y no sólo también los honrados ó tenidos en concepto de tales (y que pueden haber cometido delitos ignorados ó podrán cometerlos en otra edad de su vida), se hayan á veces en un estado de regresión ó de suspensión de desarrollo, deteniéndose en la excentricidad, en la locura, en el suicidio, sin llegar al delito; sino, sobre todo, porque cuando se habla de estas anomalías de los delincuentes, se afirma, no ya que todos los malhechores y ninguno de los honrados deban tenerlas, sino que únicamente se comprueba una mayor frecuencia de anomalías en los unos en comparación de los otros. Entre 100 malhechores, encontráis unos 25 normales y 75 anormales, mientras que, por el contrario, entre 100 honrados halláis 90 normales y 10 anormales; he aquí la diferencia relativa y no absoluta, pero más que suficiente para constituir un verdadero carácter de raza diversa, ó mejor, de diverso desarrollo orgánico, entre delincuentes y no delincuentes.

Lo mismo decimos de la constitución psíquica ó moral de los delincuentes, que no es más que el reflejo de la constitución orgánica, intimamente ligada con ella como el anverso y el reverso de una superficie. Y puesto que la vida psíquica del hombre se desenvuelve por el impulso del sentimiento y por la dirección de la idea al estudiar el lado moral ó ético de esta vida psíquica de los delincuentes, preciso es observar el estado del sentido moral, no sólo como discernimiento de lo honrado y deshonroso, de lo justo y de lo injusto, sino sobre todo como fundamental temple moral del individuo sobre el cual actúan y estoy por decir que se polarizan todos los demás particulares sentimientos egoístas y altruistas; como para la ideación importa observar más que nada la fuerza especial de la previsión de la pena, como elemento inseparable en la dinámica psíquica de donde surgen el propósito y el acto criminales.

Ahora, si se estudia el delincuente, no desde el tibio gabinete de estudio sino en las cárceles y en los manicomios, el primer carácter psíquico que llama la atención en ellos es precisamente la anormalidad de su sentido moral, casi siempre débil y muy á menudo falto del todo. Nos encontramos entonces ante un hombre que, contra la opinión común, en la mayor parte de los casos confiesa su delito con indiferencia á menudo humorística, afirmándoos que no siente por ello ningún remordimiento, y muchas veces no os oculta que puesto en libertad lo volvería á hacer «si para ello se presentase ocasión oportuna,» y os dice que la prisión sobrevenida mientras que no acaece tras de todos los delitos, porque muchos «salen libres,» no es, en último término, más que un riesgo del oficio, como la explosión del gas para los mineros, el hundimiento de la construcción para los albañiles y otros casos por el estilo. En resumen, un hombre de un temple moral fundadamente diverso del hombre honrado, en virtud del cual no siente aquél ninguna repugnancia por la idea del crimen antes de cometerlo, ni remordimiento de haberlo ejecutado después del hecho y tampoco después de sus consecuencias.

También el hombre honrado puede sentir en un momento crítico cruzar por su cerebro el siniestro relámpago de una idea criminal; pero la imagen del delito no hace presa de su ánimo, y excepto en los casos de huracanes psicológicos desencadenados por el ímpetu de una pasión, resbala sobre el terso acero de su conciencia moral y no lo atraviesa. Por el

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

contrario, el delincuente, en su tipo común, no siente esta repugnancia por la idea de un delito, ó si la siente, por ejemplo, por el homicidio, no la sentirá por el hurto ó viceversa; y, por tanto, siente poco á poco, casi sin dificultad alguna, cogida toda su propia actividad psíquica en el engranaje de un proyecto criminal y llega á la ejecución de él sin encontrar en su propia constitución moral casi ninguna fuerza repulsiva, ó harto débil, que le aparte del delito.

Lo contrario sucede en el hombre honrado, como cada uno puede sentir dentro de sí mismo, y como, por ejemplo, se sabe del ilustre psiquiatra Morel, el cual refiere de sí propio que un día pasando por un puente de París, sintió de improviso la tentación de tirar al río á un obrero que estaba apoyado en el antepecho, y huyó á todo correr por miedo á dejarse arrastrar por semejante aberración... Imagináos una constitución moral menos fuerte, y hubiérais tenido un homicida «sin motivo» ó «solo por brutal perversidad,» como dicen los criminalistas clásicos.

Y las pruebas de esta anormal constitución psíquica en los delincuentes, son frecuentísimas. Cuando veis un acusado que se sonríe cínico durante todo el curso de un proceso cruel ó escandoloso, debéis decir que es demente ó está falto de sentido moral; y cuando luego le veis mantener la misma actitud al cumplir la condena y hasta durante la ejecución de la pena capital, no tenéis más remedio sino concluir que verdaderamente se halla en un estado de idiotismo moral, que psíquicamente se sale de la norma común de los hombres.

Pero advertid que esta actitud apática del malhechor vulgar es diametralmente opuesta y tiene un origen y un significado morales, contrarios en un todo al fuerte y tranquilo heroísmo con que un glorioso martir de la libertad saluda sonriendo el fulgor de la segur política que va á consagrar su nombre á la veneración de un pueblo entero.

El ambiente natural ó físico representa la segunda categoría de los factores criminales, y podemos distinguir varios. El clima, la vuelta de las estaciones, la temperatura anual, determinan constantemente una variable manifestación del delito; por eso los delitos contra la propiedad, máxime por un motivo económico contra golpe de los motivos atmosféricos, son bastante más frecuentes en los climas, meses y años más fríos; mientras que los delitos contra las personas, por un efecto fisio–psicológico directamente enlazado con las vicisitudes meteorológicas, son más frecuentes en los climas y estaciones más cálidos. Y también la producción agrícola, por otro contragolpe sobre las condiciones económicas, es una de las causas determinantes más eficaces de la mayor ó menor frecuencia de los delitos contra la propiedad. Y así por el estilo.

El ambiente social, en fin, completa la serie de los factores del crimen, y para la categoría de los delincuentes ocasionales ofrece los impulsos más fuertes, por la densa red de continuos vínculos que une al individuo con el organismo social donde nace y lucha por la existencia.

La opinión pública influye poderosamente sobre ciertos delitos; por ejemplo, el duelo, frecuente en los pueblos latinos, desconocido ó poco menos en la moderna Inglaterra; el infanticidio, tan común en las razas latinas y menos frecuente en los anglo–sajones, que hieren con el desprecio y con la ley al seductor antes que á la víctima indefensa por él arrastrada á la última desesperación.

Las condiciones económicas son uno de los grandes factores de la delincuencia; porque, ciertamente, si la miseria no es la única causa determinante, es uno de los más poderosos factores de la criminalidad. Y así también las condi-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

ciones políticas son causa de ciertos delitos, como lo saben los antiguos dominadores extranjeros de nuestro país, donde los llamados delítos políticos de conspiración y otros, fomentados por la tiranía, desaparecieron al primer rayo de la independencia nacional. Y también las condiciones científicas de un país reaccionan sobre ciertas formas de delincuencia, algunas fomentándolas y otras extinguiéndolas; como por ejemplo, la piratería desaparecida al mágico contacto del vapor aplicado á la navegación, los envenenamientos hechos raros por los progresos de la química, y así por el estilo. Y lo mismo decimos de todo el orden legislativo y administrativo en general que, secundando ó impidiendo el desarrollo de las tendencias naturales en los individuos asociados, puede mantener la actividad de éstos dentro de los límites jurídicos, ó impelerla, por el contrario, á la violación del orden social, con tanto mayor ímpetu de rebelión cuanto más obstinada y ciega fuere la presión del empirísmo autoritario.

De cuanto llevo rápidamente dicho se deduce una grande y espontánea conclusión: que la cantidad y especie de los delitos cometidos todos los años en todos los países, están determinados por el vario y contínuo concurso de los tres órdenes de factores antes indicados, los cuales, más ó menos, según los diversos delitos y delincuentes, conspiran todos ellos á la determinación de la actividad criminal antisocial. Lo que equivale á decir, pues, que la pena, sea como motivo psicológico de una amenaza legislativa, sea como coerción física de uno ó más individuos, no puede bastar por sí sóla para impedir el delito que, teniendo un montón tan múltiple de causas, no puede tener un solo y tan sencillo

remedio, como en el campo terapéutico no puede haber una panacea para todas las causas patógenas.

Así es que del estudio analítico de los varios factores del crimen, se desprende en seguida una gran enseñanza práctica, bastante más fecunda que las más altas y abstrusas lucubraciones jurídicas de la ciencia clásica: enseñanza indicada ya como platónico voto de la voz solitaria y no escuchada de algunos criminalistas de los más positivos por temperamento intelectual, como Filangieri, Bentham, Romagnosi, Carmignani y Ellero; pero enseñanza que solo en estas preliminares investigaciones de anatomía social encuentra, con la nueva escuela, la base vital necesaria para un ulterior desarrollo científico, conducente á su aplicación práctica. Y así, pues, para detener la amenazadora invasión del delito, la sociedad debe confiar más que en las penas en el magisterio de aquellas disposiciones de prevención indirecta y social que yo llamé *sustitutivos penales*, precisamente porque, una vez aplicados hasta donde puede alcanzarse, secan el manantial de los crímenes y, quitando el delito, quitan así la necesidad de la pena. Sistema de sustitutivos penales que, empero, se diferencia radicalmente de la usual prevención empírica de la policía directa y violenta, que no se propone cortar y suprimir ó atenuar las causas remotas de la delincuencia, sino que se limíta á la fácil ilusión de poder suprimir los efectos cuando aún permanecen en pié las causas de ellos, y se reduce las más de las veces á sustituir la violación del derecho cometido por el agente de policía á la violación del derecho que iba á cometer el delincuente; y eso, cuando, como suele suceder á menudo, no añada una inútil violencia al delito mismo que no logra impedir, si no es ella misma quien lo provoca.

Sistema de sustitutivos penales, por el contrario, que desciende de la determinación de las causas criminógenas, como la terapéutica desciende espontánea del diagnóstico

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

clínico; pero sistema que, como en la vida cotidiana substituye las dificultades de un diagnóstico preciso y racional, con el fácil empirísmo de los remedios de cuarta plana, así en la vida social permanece abandonado para ceder el puesto á la miope prevención ó á la represión intempestiva.

Así vemos que siempre que se discute en el Parlamento una ley, sólo se mira al fin inmediato y más aparente que se propone, sin prever la repercusión que puede tener en la actividad criminal.

Y viceversa, apenas la atención pública se fija en un orden dado de hechos criminales, por su insólita frecuencia, toda la sabiduría del legislador se limita á proponer una ley que los castigue ó á añadir un artículo al Código Penal, sin pensar absolutamente nada y en serio en los medios indirectos que hubieran podido ó podrían impedirlos ó disminuirlos, bastante mejor que las leyes represivas, las cuales, después del sacudimiento de su primera aparición, acaban por dejar las cosas como las encontraron; tanto, que aquel desorden, no curado, se hace crónico y nadie se ocupa más de él, sólo porque ha entrado ya en las habituales previsiones de la conciencia pública.

Por ejemplo, si en vez de aumentar las penas ó dar á los carabineros facultades para matar á los contrabandistas fugitivos, se rebajasen los aranceles de aduanas, ¿cuánto contrabando no se evitaría?

Y si con una ley inspirada más en las abstracciones metafísicas ó en las tradiciones antiguas, estableceis que dos personas puedan en un solo momento decidir su propia unión conyugal para toda la vida, á pesar de lo imprevisto que tanta parte tiene en nuestra existencia, y luego, irritados por los contínuos rasgones de este vínculo sagrado creeis que todo el remedio está en los artículos del Código Penal contra el adulterio y el concubinato, hacéis ciertamente una obra vana. Dad, por el contrario, el divorcio, y veréis que los cónyuges

no afortunados romperán legalmente una cadena que de otro modo romperían con el delito.

Y cuando con ánimo angustiado recuerdo la gran desventura con que fué herido el corazón de Italia hace poco en nuestra Nápoles, y pienso en los asquerosos zaquizamíes donde yacen suciamente vegetando familias enteras, sin aire, sin luz, en monstruoso enroscamiento de miembros humanos, me pregunto cómo podemos maravillarnos de las continuas violaciones del pudor y con qué conciencia se apresta á castigarlas la sociedad que tales horrores consiente contra criaturas humanas ..... Dad aire, dad luz, regenerad la sangre de aquella mísera gente, y la sonrisa del cielo dejará de ser en este país para tanta parte del pueblo una burla dolorosa, y el delito quedará diezmado de esa manera.

Así, cuando en una ciudad se suceden con pertinacia los robos nocturnos á mano armada, vale mucho más el alumbrado en abundancia que no una multitud de guardias para poner en fuga á los salteadores.

Así, á la luz del pensamiento libre, han desaparecido aquellos pretensos delitos de hechicería y magia, que constituyen en gran parte la historia de los delitos de la Edad Media, como otras formas criminales fueron barridas por el huracán purificador de la revolución francesa.

Lo cual confirma que al extremo y estéril remedio de las penas urge anteponer una serie de disposiciones indirectas que quiten ó disminuyan las causas mismas del delito, en los más diversos campos de la legislación social.

Tal se delinea la primera parte de la sociología criminal en su función diagnóstica de patología social, á la que corresponde con íntimo enlace la cura del delito.

Y aquí, de pronto, cambiado totalmente el punto de par-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

tida, varía el punto de llegada entre la escuela positivista y la escuela clásica de Derecho criminal.

Para esta última, como llevo dicho, todo el génesis del delito está en el punto matemático de la libre voluntad y todos los delincuentes se reducen en sus facultades intelectuales y morales á un tipo único, abstracto, que corresponde al término medio de los hombres honrados.

Para la escuela positivista, por el contrario, el delito no es más que un síntoma que concurre á determinar la fisonomía del delincuente, el cual, por tanto, en virtud de la diversa dinámica de los factores criminales, puede presentar y presenta múltiples variedades antropológicas. Debiendo limitarme aquí sólo á los resultados últimos y sumarios de largas investigaciones experimentales, no describiré sino á grandes rasgos sus varias actitudes.

Ante todo hay que hacer una fundamental distinción entre dos categorías típicas de delincuentes. La primera comprende la clase de todos aquellos que marcados por la degeneración hereditaria, educados por lo común en un ambiente corrupto, presentan en su grado máximo de frecuencia las anormalidades orgánicas y psíquicas antes recordadas. Hombres que en el ambiente exterior encuentran el pretexto de su delito y que sienten dentro de sí el primer impulso de éste y la atracción instintiva, á quienes repugna el trabajo honrado, brutalmente feroces, negligentemente ociosos, salvages perdidos en nuestra civilización. La segunda clase comprende los delincuentes de ocasión, que teniendo en sí predisposición al delito, por debilidad del sentido moral y escasa previsión, encuentran aún en el medio ambiente exterior, en el concurso de especiales ocasiones, el impulso decisivo para obrar mal.

Pero en la naturaleza todo es relativo, y no existen en ella tan precisas las distinciones que hacemos nosotros por necesidades del estudio y del pensamiento. Los extremos se distinguen bien entre sí, pero los grados intermedios se suceden con matices indefinidos. Así, pues, las dos clases fundamentales de delincuentes, que la observación común y la experiencia de muchos directores de establecimientos penales y peritos en disciplinas penitenciarias habían distinguido ya, sin sacar aún ninguna de aquellas aplicaciones que la nueva escuela ha deducido y deducirá, no están tan marcadamente separadas ni son tan homogéneas entre si que no puedan admitirse otras subclases, que mis estudios de antropología criminal han determinado precisamente, y son las siguientes:

En la primera clase hay que distinguir en seguida los delincuentes que presentan una forma común de enagenación mental, comprobada antes ó después del acceso criminal, y son los *delincuentes locos*. Desde los cuales, con las formas patológicas hasta ahora tan indeterminadas como la locura moral y la epilepsía (que recientemente, con felicísima intuición corroborada por una completa demostración positiva, ha demostrado Lombroso ser idénticas en su naturaleza á la verdadera neurosis criminal congénita), se pasa precisamente al tipo verdadero y propio de los *delincuentes natos, incorregibles*, que constituyen la figura característica de esta primera clase antropológica y presentan las anormalidades orgánicas y psíquicas más frecuentes y claras, junto con los dos caractéres específicos de la precocidad y de la reincidencia en el delito.

Entre esta primera clase de los delincuentes por tendencia congénita, y la segunda, de los delincuentes ocasionales, hay una subclase bastante numerosa, de los que yo llamé *delincuentes por hábito adquirido*. Todo el que visita las cárceles con propósito científico, encuentra muy á menudo una figura macilenta de malhechor, por lo común ladrón, cuya vida no es más que una serie de caídas y recaídas, una ida y venida á la cárcel, á la taberna y al burdel, pero que no estaba aún verdaderamente predestinado al delito por un impulso tan profundo é invencible como el de los delincuentes natos.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Son individuos que caen la primera vez más bien por una ocasión desgraciada, pero que llevados á la cárcel, encuentran allí, en vez de corrección, la corrupción moral y material; y cuando salen de ellá, abandonados por la sociedad, faltos de trabajo, sospechosos para los honrados, se entregan al alcoholismo, á la ociosidad, y recaen de nuevo, para volver á la misma vida apenas se ven de nuevo libres, y llegando así de cárcel en cárcel, de reincidencia en reincidencia, á la completa ruina moral, á la delincuencia crónica, incorregible. Esto es, son delincuentes de ocasión, que sólo llegan á ser incorregibles por la complicidad del ambiente social, pero que mejor atendidos, en la mayor parte de los casos, habrían abandonado de seguro la senda del crimen después de la primera caída.

Y se pasa así á la figura típica de la segunda clase, al *delincuente de ocasión*, que cae por vez primera; pero después, por una menor debilidad de constitución física y moral y por circunstancias menos desgraciadas, no recae, ó no recae más de una vez y con gran intervalo, porque el ambiente exterior ya no repite contra él el asalto de las ocasiones tentadoras.

Y llegamos á la última variedad de delincuentes, que representan el tipo exagerado del delincuente ocasional, y á la vez que se aproximan más que á éste al hombre honrado, ofrecen, á veces, algunos puntos de contacto con los delincuentes locos ó semilocos por el temperamento neurósico y excitable que les hace ser, según la expresión de Maudsley, otras tantas "cosas explosivas," y estos son los *delincuentes por ímpetu de pasión.* Como en los delincuentes de ocasión, el impulso exterior es quien tiene la mayor parte en el arrebato criminal; pero mientras que en aquellos el impulso exterior es un incentivo no excepcionalmenre fuerte, en los delincuentes por pasión, por el contrario, es un verdadero y propio huracán psicológico (el amor contrariado, el justo dolor, la provocación gravísima) lo que les impele al delito, casi siempre de sangre, cometido con descaro, sin acecho, y seguido más bien de arrepentimiento, ó, á menudo, de suicidio, mientras que antes habían llevado siempre una vida intachable y se encuentran, por tanto, en el caso verdadero, pero mucho más raro de lo que comunmente se afirma, de la llamada "fuerza irresistible." Hasta tal punto, que cuando Romagnosi decía que cada uno de nosotros puede violar el Código Penal, afirmaba una cosa exacta con tal de que se restrinja su hipótesis á estos casos; puesto que es tan cierto que en el delito concurren los factores antropológicos junto con los del medio exterior, que cada uno de nosotros puede tener la absoluta certidumbre (fuera del caso de sobrevenir una enajenación mental) de que no cometerá nunca uno de esos delitos donde se revela el delincuente nato, asesinato para robar, por precio, estupro de niños, bandolerismo, etc.; mientras que, por el contrario, cada uno de nosotros puede verse arrastrado á causar heridas ó al homicidio por ímpetu repentino de violenta pasión, permaneciendo, sin embargo, en la clase de los desventurados sin entrar jamás en la de los malhechores vulgares, como ya la conciencia popular lo afirma cotidianamente en los veredictos del Jurado.

Estas son, pues, las variedades antropológicas del mundo criminal: delincuentes locos, natos, incorregibles, por hábito adquirido, de ocasión por ímpetu pasional; para cada una de las cuales la escuela positivista defiende diversos y apropiados medios de prevencion y de represión. Puesto que, después de lo dicho, fácil es ver que á la diversidad de las causas determinantes del delito en las varias categorías de delincuentes debe corresponder necesariamente, no sólo la diversidad de los medios profilácticos, sino también de los medios represivos cuando aquellos no logran impedir éste ó aquél

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

delito. Y eso, porque en las diversas categorías de malhechores es diversa aquella que Garofalo llamó desde los comienzos de la nueva escuela «temibilidad del delincuente,» poniendo desde entonces como piedra angular del nuevo edificio científico un criterio positivista de penalidad, del cual me ocuparé en breve otra vez.

Pero ahora, delineadas las causas naturales del delito, surge de pronto la natural pregunta, que ya el sentido común, con la facilidad de sus respuestas cortadas, opuso y opone á la escuela positiva cual máximo escollo: ¿cómo, si el delito es efecto necesario é inevitable de causas naturales más bien que de la libre voluntad de quien lo ejecuta, puede aún lógicamente hablarse de responsabilidad y de punibilidad del delincuente?

El concepto de responsabilidad, según la opinión vulgar, el derecho criminalista clásico que la sigue dócilmente, y las legislaciones positivas que la formulan, encarna todo él en la idea del libre albedrío ó de la libre voluntad individual, dominante ó dominada.

Este criterio no puede aceptarlo la escuela positivista, la cual, en nombre y por mandato científico de la fisio-psicología experimental, no puede admitir en el hombre tal poder de libre voluntad, superior á la natural y necesaria determinación de las causa físicas, fisiológicas y psíquicas que á cada instante impelen al individuo, que delibera y obra.

Pues bien; aun queriendo en una primera y más indispensable hipótesis conceder que esta negación del libre arbitrio no esté apodícticamente demostrada por la actual fisio-psicología, esto no impondría menos á la ciencia criminalista el deber lógico de quitar al concepto de responsabilidad, que atañe á la función cotidiana de la defensa social, una base

tan fuertemente y por tantas partes y tan en serio negada como lo es ésta del supuesto libre albedrío humano, para substituirla por un fundamento mucho más positivo y mucho menos sujeto á la discusión y á la duda. Sería como si el higienista, y por él el legislador en materia de defensa contra las enfermedades epidémicas, pretendiese fundar todo un sistema de medidas preventivas y coactivas sobre una hipótesis desechada por la ciencia moderna y negada diariamente.

Eso sin añadir además, que yo, por mi parte, como también por la de los partidarios de la escuela criminalista positiva, no solo ponemos en duda, sino que resueltamente negamos la admisibilidad de un libre albedrío ó de una libertad moral, absoluta ó limitada. Y esto con la autoridad que nos dan las inducciones más seguras de la fisio-psicología, de la antropología criminal y de su confirmación por la estadística penal, que con el aumento microscópico de los grandes números revela la repetición constante y regular de los delitos, como por otros hechos que se han creído depender tan sólo del libre albedrío, los matrimonios, los nacimientos, los suicidios, y sus perturbaciones determinadas por causas extraordinarias, cesadas las cuales recobran su curso rítmico y previsible en gran parte.

Redondamente negamos el supuesto de un libre arbitrio, ante todo porque descubrimos el origen natural de la ilusión vulgar en virtud de la que se afirma, dependiente tan solo de ignorancia é inconsciencia de las causas físicas ó fisio-psicológicas que preceden y determinan á toda deliberación nuestra; tanto es así, que cuando se conocen ó sienten por el agente mismo, con anterioridad, los motivos determinadores y prepotentemente decisivos de un acto humano, entonces desaparece la idea de que ese acto sea libre. Pero, en segundo lugar y sobre todo, porque el libre albedrío absoluto ó limitado, la facultad de que la voluntad humana pueda decidirse en sentido diverso ó contrario de aquel que

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

en cada instante está determinado por la suma de los motivos presentes, advertidos ó no, choca de medio á medio contra dos leyes universales del mismo pensamiento humano. La primera es que todo efecto supone una causa ó un conjunto de causas y es necesariamente determinado por ellas, y dadas esas causas no podría ser diverso el efecto de lo que es; y, por consiguiente, en la voluntad humana no se puede admitir una excepción milagrosa á esta ley de casualidad, que ya he dicho estar en la condición misma del pensamiento humano. La segunda es que las fuerzas se transforman, pero ninguna se crea ni se destruye; y, por consiguiente, el acto humano, que es la transformación de una deliberación volitiva y esta que es la transformación de los precedentes movimientos físicos exteriores que afectan á un individuo dado, no pueden ser nada más y nada menos de cuanto venía dado por fuerza y por dirección en los precedentes inmediatos. Por tanto, la voluntad humana (que además no es una facultad existente por sí, sino la abstracción y el recuerdo de todos los singulares actos volitivos de que cada cual tuvo conciencia en su vida, actos singulares que sólo existen en realidad de momento en momento) no podría *ex nihilo*, por un solo *fiat* de una supuesta libertad añadir ó quitar ninguna cosa á la determinación de las causas que en un instante dado la solicitan, chocan con ella, la apremian, la empujan en un determinado sentido, que es por eso la resultante de varias fuerzas actuantes.

Y la experiencia diaria puede darnos las más convincentes pruebas de ello. Cada uno de nosotros ha experimentado cuánto cambia en energía y carácter nuestra voluntad bajo el imperio de circunstancias especiales, ya físicas (como el estado de la atmósfera, el viento siroco, etc.), ya fisiológicas (como la digestión, la irritación nerviosa, la excitación, el desfallecimiento, el ocio ó el ejercicio muscular), ya psíquicas (como el triunfo ó el fracaso de una obra nuestra, la continua vista de cosas alegres ó tristes, el amor ó el odio); circunstancias todas ellas que en su comienzo son de cierto independientes de nosotros, y que, sólo por una ilusión nuestra, creemos dominar después, mientras que somos por ellas dominados. Cada uno de nosotros habrá experimentado cómo por la mañana, descansados por un sueño reparador, nos sentimos ágiles y fuertes y dispuestos á obrar con decisiones voluntarias, rápidas, claras, precisas; y cómo, por el contrario, despues de muchas horas de trabajo mental ó muscular, nos sentimos desmayados también moralmente, sin energía de voluntad, vacilantes entre hacer y no hacer, incapaces de iniciativa, de resoluciones prontas y seguras. Y también, por un determinado temperamento fisio-psicológico, hay quien es normalmente de enérgica y pronta voluntad, y quien, por el contrario, efecto del carácter, siempre está indolente ó vacilante, siempre incapaz de fuertes y perseverantes propósitos, no ya por efecto de su libre albedrío, sino por constitución orgánica y psíquica; y todo esto es igual para el hombre honrado que para el hombre que tiende á delinquir. Y, para terminar con un postrer ejemplo: así como con el café podemos modificar artificialmente el curso, la fluidez y la riqueza de las ideas, así también con una pequeña cantidad de alcohol podemos modificar artificialmente el estado y la energía de la voluntad, fortaleciéndola; mientras que con el uso contínuo é inmoderado del mismo alcohol flaquea la voluntad y se corrompe, llegando en los casos extremos á las últimas fases de la degeneración moral y física de un hombre, empujándole, desde el trabajo honrado y regular, al ocio y al delito.

Pero, repetimos, admitiendo todo esto, ¿cómo considerar á uno responsable de lo que obra por la tiranía del organismo ó del ambiente? ¿No se trastorna y se anonada así todo criterio moral y jurídico de la pena?

Parece una pregunta terrible, para quien está siempre

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

embrollado por los hábitos mentales de la tradicional filosofía; y, por el contrario, es una pregunta para responder á la cual basta con la más fácil observación de los hechos diarios.

Así como la sociedad recompensa y premia y festeja á los hombres por cualidades independientes de ellos, pero que por fortuna los han heredado al nacer, como el genio poético, ó científico, ó artístico, un galillo feliz ó unos pulgares de acero, igualmente la sociedad castiga y pena á los hombres, sin atender á su *culpabilidad*, sino atendiendo sólo por suprema necesidad de su existencia á los efectos dañinos de sus acciones. Y haciéndolo así, la sociedad, en todo el campo de la actividad extraña al Código penal, no hace más que seguir una ley natural que rige también para el mundo físico.

La naturaleza reacciona siempre con una sanción muda pero inexorable, contra cualquiera que viola sus leyes: quien saca demasiado el cuerpo fuera de una ventana, con las intenciones más bienhechoras, cae y se mata; quien come demasiado, aunque sea sin motivos innobles de glotonería ú otros; quien come con las mejores intenciones una substancia perjudicial para el organismo, enferma y sufre, y á veces muere; quien abusa del trabajo mental ó muscular, aunque sea con un fin santo, acaba por la demencia ó por la anemia.

Así, en la vida social, el desidioso que sin mala intención, antes con el contínuo disgusto de su propio defecto y con el tenaz y sincero propósito de corregirse, tropieza con los transeuntes, hace caer un objeto precioso ú ocasiona un daño á otro, es evitado en su trato, vituperado, mal visto. Puede hasta reconocerse que «no es culpa suya» el ser así, pero la reacción social no deja por eso de hallarse molesta por sus actos individuales dañosos ó incómodos. El comerciante, el industrial, que por amor al bien, al progreso, á la utilidad social, inicia una nueva empresa y tiene la desgracia de fracasar, quiebra y se le deja en la miseria, aun reconociendo que no tuvo mala intención, antes bien, confesando lo contrario.

¿Qué más? Quien comete un acto antijurídico, *sin voluntad* de cometerlo, es castigado no sólo con la reacción social de la opinión pública ó de las consecuencias económicas sino por verdadera y propia condena penal, como en el caso de «homicidio involuntario.»

Por tanto, la sociedad no siempre exige la perversa y libre voluntad para herir con su desprecio ó con su abandono ó con sus penas á quien ejecuta un acto contrario á las condiciones de su existencia, un acto antisocial.

Pues entonces, ¿por qué sólo en los delitos se ha de exigir, como condición para la pena, aquella maldad y libre voluntad, que la sociedad no exige en el mayor número de los casos?

Esto significa, pues, dos cosas: primera, que este criterio de la libertad moral como condición de responsabilidad penal, es un residuo de ideas rancias inspiradas en la expiación religiosa, que en el campo extrictamente jurídico ya no tiene ninguna razón de existir; segunda, que por consiguiente, la sociedad considera responsable á todo individuo de todas y cualesquiera acciones por él ejecutadas, y reacciona á éstas de un modo útil ó dañoso para quien las ha realizado, según sean útiles ó dañosas á la sociedad en medio de la cual se han ejecutado.

En resumen, la suprema necesidad de la propia conservación, á la que debe obedecer el organismo social como todo organismo viviente, es la razón única y positiva del derecho de penar, que con bastante menos impropiedad se llamaría derecho de defensa social.

Tenga ó no sentido moral, tenga ó no libertad moral al cometer un delito quien lo comete es un individuo peligroso y antisocial; y la sociedad reacciona contra él por una necesidad innegable de la propia defensa ó conservación.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Esta es la realidad pura y limpia, la única que concibe el sentido común, sin necesidad de fórmulas abstrusas y más ó menos clásicas.

Sólo que (y he aquí el oficio de la sociología criminal) la sociedad debe reaccionar diversamente según el diverso poder maléfico y antisocial del individuo de que se trata y de la acción por él ejecutada.

Y aquí es donde precisamente la diversidad de los factores del crimen y la consiguiente distinción de las varias categorías de delincuentes, determina la variedad de los medios defensivos contra el delito, que la sociología criminal señala con el dedo á la sociedad, traspasando las mezquinas líneas del Código Penal é introduciéndose, como antes dije en el más vasto y fértil terreno de la prevención, coordinando en las cuatro siguientes categorías todas las formas de defensa social. Y son estas: los medios *preventivos* ó de higiene social, que atienden á impedir la aparición misma del delito; los medios *reparadores* ó de resarcimiento civil que, son hasta ahora letra muerta, por la separación ilógica impuesta hasta hoy por la ciencia clásica entre el derecho represivo penal, el derecho coactivo civil y las medidas preventivas; los medios *represivos temporales*, que pueden ser algunos de los que ahora constituye casi todo el arsenal punitivo; y, finalmente, los medios *eliminativos*, por los cuales reconociendo la sociedad como inepto en absoluto para adaptarse á la vida social á un individuo dado, lo excluye del propio organismo en virtud de una función de desasimilación, que ya en todo organismo viviente es la base misma de la vida, que lucha contra los elementos no asimilables.

Y estas varias formas de defensa social se subordinan á estos dos máximos criterios de la sociología criminal: 1º, que la sociedad debe ante todo dedicar su labor principal y asidua é inexorable á la aplicación de los medios preventivos, en vez de esperar á que se realice el mal para castigarlo después sin repararlo nunca, 2º, que frente á un delito ya cometido, la temibilidad del delincuente sea la norma fundamental para oponer el único medio reparador, ó recurrir al represivo, ó dirigirse, por último, al extremo medio eliminador.

Pero, á propósito de esta eliminación de los delincuentes más peligrosos é incorregibles, surge de nuevo la tan *vexata cuæstio* de la pena capital.

En contra de la escuela clásica, los positivistas en derecho criminal están unánimes en considerar que la pena de muerte, escrita en todos los momentos de la existencia del mundo, es la consecuencia natural y legítima de los hechos y de las inducciones antes indicadas; frente á ciertos individuos refractarios á todas las reglas de la vida social, no cabe ninguna duda de que la sociedad tiene derecho á eliminarlos, á suprimirlos, á matarlos, porque se encuentran en esa necesidad.

Pero entre el punto de partida teórico de este principio jurídico y el punto de llegada á la aplicación práctica de la pena de muerte, creo, como buen positivista que no abandona la realidad, que hay un espacio intermedio, el cual precisa ver si es posible y útil vadear.

Sin duda, los delincuentes, contra los cuales sería únicamente aplicable la pena de muerte, son los autores de homicidios, acompañados de tales circunstancias de hecho y con tales caractéres antropológicos que, sin más, baste para colocarlos en el grupo más peligroso de los malhechores. Es decir, todos ó casi todos los homicidios calificados, el bandolerismo con homicidio ó con sevicias y gran parte de los homicidios llamados simples, según los criterios clásicos, pero que por la reincidencia ó por su móvil indican igual grado de temibilidad en sus autores; es decir, tomando las cifras de los condenados anualmente en Italia por estos delitos por el Jurado, de 1,500 á 2,000 individuos cada año.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Ahora bien, aunque á los actuales modos teatrales de ejecución de la pena capital substituyeran otros modos menos dolorosos y más rápidos, como un veneno potente ó una fortísima sacudida eléctrica, ¿sería posible en nuestro país y con nuestras costumbres una carnicería permanente de seis ó siete ejecuciones capitales por cada día del año? No vacilo en negarlo y en llegar así por otra vía á la conclusión de que en nuestro país la pena de muerte no es aplicable en aquellas únicas proporciones que lo harían eficaz, como selección artificial de elementos peligrosos en grado máximo; por lo cual es fácil ver que esta principalísima razón, por la cual puede sostenerse positivamente la pena de muerte, no consiente que se haga aplicación de ella á seis ó siete individuos cada día del año, sin hablar tampoco de la nada seria costumbre de dejar escrita en el Código una pena que después no se aplica.

Y la otra poderosísima razón que tengo para afirmar lo inaplicable de la pena capital en nuestro país y en nuestra época, es la subrogabilidad de esa pena por otros medios eliminativos. Son estos: el presidio perpetuo, la deportación á Ultramar y la deportación interior.

El presidio es de cierto el menos útil de estos medios, aunque entre los muros de la cárcel se pueda dar acomodamiento racional al trabajo de los condenados. Queda la deportación; pero cuando es á Ultramar, ya se ha demostrado impotente é inatendible por la experiencia de Inglaterra, á pesar de tantas fuerzas marítimas y tanta extensión de posesiones coloniales como tiene; y la persistencia de Francia en este sistema no vale para disminuir sus inconvenientes, que por palmarias razones serían mucho más graves para nuestro país.

He aquí por que reservaré (admitiendo dentro de ciertos límites el presidio) toda ó casi toda la función eliminativa á la deportación de toda una categoría de delincuentes

á nuestras tierras, aún no redimidas del paludismo, que tan tristemente anublan la purísima sonrisa de nuestro cielo italiano. No me detiene la duda de si la sociedad tendrá derecho á mandar á una muerte lenta á los que dice condenar á presidio; porque, por una parte, cuando la pena estuviese sancionada así en la ley, sería la que es, sin subterfugios ni reticencias; y por otra parte, porque si esa terrible diosa Fiebre no puede aplacarse sino con la hecatombe de miles y miles de hombres, no veo por qué no hayan de sucumbir antes los malhechores y salvarse los trabajadores honrados. No es justo ni humano, para el saneamiento de esas llanuras desoladas, exigir á los honrados trabajadores que pierdan allí la vida en premio de un santo trabajo. Que vayan los delincuentes, y no á dosis homeopáticas, como hasta ahora se ha hecho en el Agro Romano, atrofiando un principio fecundo, sino que vayan en falanges numerosas á los primeros trabajos en las marismas (seguidos después por los trabajadores honrados), y redímanse así con holocausto de su vida en pro del mejoramiento económico y moral de aquella sociedad á la cual hicieron tanto daño con sus miserables obras.

Tales son las conclusiones máximas á que llega hasta ahora la sociología criminal, con la escolta de los hechos observados y que más arriba indiqué. Otras conclusiones vendrán, y todos los días se ensanchan luminosos los horizontes de esta ciencia renovada; pero ya tienen ahora las investigaciones de la escuela criminalista positiva tanto valor de verdad, que un gran ingenio napolitano, Rogerio Boghi, de quien me separa substancial diferencia de principios políticos y sociales, pero á quien no se le puede negar la solidez mental, proclamaba que sólo de ellas «puede esperar la legislación penal en Italia la corrección de las enfermedades morales y mentales que se han introducido allí.»

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Y ahora, al llegar al término de esta rápida carrera por el campo de la ciencia criminalista renovada, permitid que libre también el corazón se expansione y envíe una cálida onda de sangre al cerebro, para que al mesurado raciocinio siga la palpitación del sentimiento que hermosea la vida.

Me despido de vosotros con un augurio que tiene para mí toda la fascinación de los más altos deseos. En las provincias septentrionales de Italia predomina la voluntad; en las meridionales el ingenio; venga pronto aquel día que traiga la fraternidad de la voluntad con el ingenio, y veremos á la patria realizar sus grandes destinos.

Pero el corazón también quiere daros testimonio de gratitud por vuestra acogida, que inflamada por la comunidad de edades y de los altos ideales, cada vez más altos, me seguirá como dulce eco del alma en el tranquilo oasis medioeval que me espera con el ritmo tranquilo del estudio cotidiano. Me seguirá compensación alta é inesperada, como aprobación elocuente de que: de seguro, vosotros (y os atestiguo que estáis en lo verdadero) no juzgásteis esto en mí petulante vanagloria, sino entusiasmo fuerte y sereno por la ciencia. Por aquella ciencia que habiendo dado en cambio de otra fe, donde se apaga el espejismo irisante, la fe de la vida por la patria, no debe ya encerrarse cómo en pasados tiempos dentro del círculo restringido de la escuela apartada del mundo, sino que debe mostrar que en el ánimo de sus cultivadores siempre palpita y vive la vida de nuestra patria, y que apresura su expansión más alta en la senda explendorosa de los humanos progresos con su trabajo, noble y santo también, porque es fecundo en santo porvenir.

E. Ferri.

DELITO Y DELINCUENTES.

Herbert Spencer, el ilustre inglés, resume en una frase toda la historia de los sistemas filosóficos de la *Metafísica:* «un proceso de suicidios.» Cada sistema nuevo es un demoledor implacable del sistema precedente, y queda expuesto, á su turno, á ser demolido por las ideas filosóficas del porvenir. Dogmas, fórmulas, principios apriorísticos, todo esto está desde su orígen condenado á muerte. El método experimental que tan sorprendentes resultados ha dado en las ciencias físicas en sus recientes aplicaciones á las ciencias morales, no ha sido menos fecundo creando una transformación completa en la psicología, en la historia, en la sociología, en la literatura. Gracias á este método ya no habrá suicidios filosóficos; una verdad adquirida por el estudio de los hechos será eterna. Antes, la fantasía del pensador; hoy, la observación de los hechos.

Nuestro Código Penal es un curso de filosofía racionalista puesto en artículos por el Sr. Martínez de Castro; es la obra jurídica de Mr. Ortolan sin las explicaciones y los desarrollos del profesor. Código casi perfecto—dentro de la idea metafísica que lo informa—de irreprochable lógica, de acabados lineamientos, que considera el delito como un ente, como una abstracción, diagnosticando los diferentes casos con

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Y ahora, al llegar al término de esta rápida carrera por el campo de la ciencia criminalista renovada, permitid que libre también el corazón se expansione y envíe una cálida onda de sangre al cerebro, para que al mesurado raciocinio siga la palpitación del sentimiento que hermosea la vida.

Me despido de vosotros con un augurio que tiene para mí toda la fascinación de los más altos deseos. En las provincias septentrionales de Italia predomina la voluntad; en las meridionales el ingenio; venga pronto aquel día que traiga la fraternidad de la voluntad con el ingenio, y veremos á la patria realizar sus grandes destinos.

Pero el corazón también quiere daros testimonio de gratitud por vuestra acogida, que inflamada por la comunidad de edades y de los altos ideales, cada vez más altos, me seguirá como dulce eco del alma en el tranquilo oasis medioeval que me espera con el ritmo tranquilo del estudio cotidiano. Me seguirá compensación alta é inesperada, como aprobación elocuente de que: de seguro, vosotros (y os atestiguo que estáis en lo verdadero) no juzgásteis esto en mí petulante vanagloria, sino entusiasmo fuerte y sereno por la ciencia. Por aquella ciencia que habiendo dado en cambio de otra fe, donde se apaga el espejismo irisante, la fe de la vida por la patria, no debe ya encerrarse cómo en pasados tiempos dentro del círculo restringido de la escuela apartada del mundo, sino que debe mostrar que en el ánimo de sus cultivadores siempre palpita y vive la vida de nuestra patria, y que apresura su expansión más alta en la senda explendorosa de los humanos progresos con su trabajo, noble y santo también, porque es fecundo en santo porvenir.

E. Ferri.

DELITO Y DELINCUENTES.

Herbert Spencer, el ilustre inglés, resume en una frase toda la historia de los sistemas filosóficos de la *Metafísica:* «un proceso de suicidios.» Cada sistema nuevo es un demoledor implacable del sistema precedente, y queda expuesto, á su turno, á ser demolido por las ideas filosóficas del porvenir. Dogmas, fórmulas, principios apriorísticos, todo esto está desde su orígen condenado á muerte. El método experimental que tan sorprendentes resultados ha dado en las ciencias físicas en sus recientes aplicaciones á las ciencias morales, no ha sido menos fecundo creando una transformación completa en la psicología, en la historia, en la sociología, en la literatura. Gracias á este método ya no habrá suicidios filosóficos; una verdad adquirida por el estudio de los hechos será eterna. Antes, la fantasía del pensador; hoy, la observación de los hechos.

Nuestro Código Penal es un curso de filosofía racionalista puesto en artículos por el Sr. Martínez de Castro; es la obra jurídica de Mr. Ortolan sin las explicaciones y los desarrollos del profesor. Código casi perfecto—dentro de la idea metafísica que lo informa—de irreprochable lógica, de acabados lineamientos, que considera el delito como un ente, como una abstracción, diagnosticando los diferentes casos con

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

un cartabón invariable de síntomas, y aplicando á cada hecho antijurídico un tratamiento penal prescrito de antemano y también invariable. No tiene en cuenta al *hombre*, al delincuente: para el legislador todos los hombres son iguales, naturalmente buenos y honrados. Si delinquen es por su culpa, pues tienen libertad para obrar bien ó mal, y merecen *castigo*. Las circunstancias que caracterizan la personalidad humana, en la más amplia acepción de la palabra, las generaliza el Código amoldándolas indistintamente á todos los delincuentes y normando por ellas la represión social. Edad, sexo, sordomudez, alcoholismo, locura, excitación de las pasiones, etc., todas estas características no son individuales sino generales, no se estudian en un caso especial y en un hombre determinado, sino que se extienden á todos los casos y á todos los hombres. Es que, según nuestro Código, sólo hay delitos, no delincuentes. A más de esto, esas circunstancias, mejor dicho, esos factores del sér humano, son incompletos: el medio físico y el medio social en los que vive un hombre, nutriéndose de la atmósfera de sus horizontes y de las almas en difusión de sus semejantes, son muy complexos y cada uno de los componentes del medio representa interesante papel en la vida individual, en el crecimiento humano. ¿Acaso la religión, los sistemas económicos, las costumbres, los métodos de enseñanza..... no influyen en la formación de un espíritu? Si el legislador considera la edad ó la embriaguez como atenuantes, ¿por qué con el mismo título no considera las variaciones meteorológicas? Ahora nadie niega que el factor principal de todo organismo es la herencia, la savia rica ó pobre de los troncos generadores, factor que es imposible aislar en el estudio del delito, que es imposible olvidar en un Código moderno, y que el Sr. Martínez de Castro aisló porque no era psicólogo y que nuestro Código olvida porque no es científico.

Una muestra: este hombre robó con escalamiento y fractura; este hombre mató en riña ó con ventaja. Tenían coartada su libertad moral por la embriaguez, por la cólera, por el peligro, en qué grado? ¿Tenían completo ó incompleto conocimiento de la ilicitud de sus actos? Basta, ya están definidos los hechos en los capítulos tercero y cuarto, y en los capítulos correspondientes—verdaderas tarifas—está señalada la pena que tasa esos delitos.—Que el asesino sea sanguíneo y el ladrón anémico; que aquel tenga ascendientes epilépticos y éste ascendientes rufianes; que pertenezcan á tal ó cual gremio y que tengan tal ó cual oficio; que las cosechas del año hayan sido escasas y que el tiempo haya sido caliente; en fin y en una palabra, que los factores de integración y de desenvolvimiento y de ocasión constituyan sus especiales fisonomías de delincuentes y caractericen sus actos antisociales, esto nada importa para calificar el delito y aplicar la pena. Y sobre todo, se descuida enteramente el análisis de nuestro medio; no se tiene, mejor dicho, la noción del medio, creyendo que la prevención y la represión de los delitos debe ser la misma en todas partes del mundo porque en todas partes del mundo los delitos son iguales. Los caractéres del delito varían como los caractéres de la flora. En México la criminalidad tiene manifestaciones *sui generis*. Se necesita estudiar la raza, el clima, la educación, las costumbres..... hacer aplicaciones sociológicas *prácticas* para determinar las leyes de producción de los fenómenos antisociales en nuestro país, combatiendolos con una penalidad adecuada.

Un médico ajusta sus tratamientos al temperamento propio del enfermo; combate la enfermedad, pero localizada en un individuo débil ó fuerte, nervioso ó sereno y aun respecto del mismo mal—tifo ó gastralgía—cambia las fórmulas de sus recetas en los diferentes casos, porque no se trata del tifo ó de la gastralgia en abstracto, sino de un tifoso ó de un gastrálgico determinados. De igual manera, un economista de la nueva escuela no llega á teoremas metafíscos, á leyes de pu-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

ra especulación ideal, encerrando en fórmulas de ningún valor práctico los fenómenos de la producción de las riquezas; lo que le interesa es la observación de los hechos en sus condiciones de tiempo y de lugar para deducir las leyes históricas de la economía de un pueblo.

La diversidad de las personalidades, conclusión bien adquirida ya por los historiadores y los críticos de arte es, evidenciada por los modernos ensayos de criminalidad. «El vicio y la virtud, escribía Taine entre la alharaca de los metafísicos son productos como el vitriolo y el azúcar.» Los santos y los criminales no están vaciados en los mismos moldes: San Francisco de Asís se distingue de Loyola, y Moral de Bruno Martínez. El heredismo y el medio, los sémenes fecundadores y las zonas de fecundación: he aquí el círculo nuevo de las investigaciones científicas. El criminal no se sustrae á las grandes leyes naturales, es también un producto, representa también una actividad. La criminología es ya una ciencia definitiva, y las legislaciones penales deben buscar en ella sus fundamentos. El criterio de la culpabilidad moral en que nuestro Código se basa es un rezago de las viejas ideas que cederá ante el criterio positivo de la defensa social, de la conservación de la especie. Nuestro Código considera el delito en abstracto: la criminología moderna lo considera en concreto como un fenómeno natural, como un acto humano. Al estudio de la *entidad jurídica* debe sustituirse el estudio del *delincuente*.

La reforma de nuestra legislación penal sería una de las más útiles reformas.

Lic. Jesús Urueta.

UNA CIRCUNSTANCIA ATENUANTE.

"Son atenuantes de primera clase:

1ª.....

2ª.....

3ª..... ....

4ª Confesar circunstanciadamente su delito el delincuente que no fué aprehendido *infraganti*, si lo hace antes de que la averiguación esté concluida y de quedar convicto por ella."

(Art. 30, cap. IV del *Código Penal.*)

Lombroso cita el caso de un condenado á galeras que asesinó á uno de sus compañeros *porque roncaba muy fuerte*. Hechos de esta especie, numerosísimos en la historia del crimen, ponen de manifiesto la inmensa desproporción entre el motivo y el acto, desproporción que caracteriza á los delincuentes *natos*. Un Juzgado de lo criminal conoció de un homicidio ejecutado por móviles tan antisociales que no pudo caber duda en el diagnóstico: el autor del homicidio era un *incorregible*. Hospedaba en su casa á un amigo que tenía la costumbre de recogerse tarde, pasadas las diez de la noche, y tanto le disgustaba esa costumbre, que se propuso

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

matar al huésped *porqne en la casa en que vivían no era hotel.* Y lo mató de una sola puñalada. Homicidio calificado, con premeditación, alevosía y ventaja.

En los comienzos del proceso el reo se negaba á confesar su delito con la esperanza de la impunidad. El Juez luchando por arrancarle al procesado la confesión, le leía las declaraciones recogidas, tremendas é irrecusables, pero en valde; aquel asesino persistía en su firme negativa. El juez, entonces, se valió de otro recurso, muchas veces decisivo: le hizo comprender al reo que el que confiesa circunstanciadamente su delito tiene un castigo menos duro, pero en esta ocasión falló el recurso, el asesino juraba inocencia. Por último, el Juez tocó un gran resorte moral con estas palabras: "¡sea usted hombre! parece que le falta valor para arrastrar las consecuencias de su crimen; parece que le tiene miedo á la muerte..." El asesino considerando perdida, en un momento de reflexión, la esperanza de la libertad y decidido á todo, abrió su alma negra y dijo su delito sin rubor, casi con vanagloria, alta la frente y serena la palabra.

Los criminales, mientras creen poderse salvar, niegan; cuando comprenden la salvación imposible, confiesan. En este extremo son terriblemente cínicos porque tienen la vanidad del crimen. Quizá los criminales célebres sean más vanidosos que los poetas laureados. El ladrón astuto que para abrir sin ruido una caja de dinero trama habilísima combinación con la paciencia de la araña que teje su red, y el artista que en el mármol de la rima cincela una desnudez de diosa, tiene el orgullo de su obra. Así se manifiesta siempre la personalidad humana. En el fondo de toda modestia hay un orgullo, y á las más grandes modestias corresponden tal vez los más grandes orgullos. ¿Qué mayor vanidad, escribe el ya ilustre psicológico Bourget, que creer que todo es vanidad? Una prostituta *de á ocho pesos* mira con todo el desdén de afrodita á la humilde *buscona* de las calles, un *matón*

de fama es admirado profundamente en la *clase criminal*, y los asesinos incipientes se honran con su saludo y con su compañía. La imitación es la ley. El estudiante que bajo el sombrero roto lleva un sueño de redención y de gloria, imita en su primer discurso los apóstrofes dantonianos: si no es de *temperamento*, su palabra morirá bajo el techo del club, entre el humo de las pipas, si es de *temperamento*, como Gambetta rompiendo la crisálida de la imitación su palabra vibrará como un canto de guerra y de triunfo bajo el cielo de la patria y entre el humo de los cañones. Lo noble es imitado por los grandes espíritus; lo innoble es imitado por los espíritus inferiores. La actividad criminal tiene sus talleres de estudio; las casas de vecindad son escuelas de robo y de asesinatos; los vástagos degenerados de un tronco de mala savia llevan en la sangre el demonio de la herencia, y tienen en el medio social en que viven el diario ejemplo del vicio. Sobre la turba de descamisados que, según la frase de Marro, "llevan en sus celdillas nerviosas hambre atrasada" se levantan los tipos, los fuertes en la lucha negra, los de mañosas manos, los de puñales certeros. Y estos dirán la frase del ladrón inglés que tanto hace reir, que tanto hace pensar "soy un ladrón, pero á Dios gracias, soy un hombre respetable." Hay quienes urdan delitos imaginarios para formarse aureolas gloriosas. Qué profunda es la palabra del *ilustre* Gasparone: "Cuán inferiores son los bandidos de hoy á los de mi tiempo." Y como el joven que escribe sus primorosos versos se sueña un Musset, el vagabundo, el pilluelo de las plazas se sueña un Chucho el Roto. Se envidian los criminales, se celan, la *crítica del delito* existe, las rivalidades son propias de todo oficio, porque derivan de la ley de conservación de la naturaleza misma de la vida que es una constante lucha.

El asesino á quien me he referido, una vez cierto de que su esperanza de salvación era fallida, confesó plenamente su delito *por amor propio*, con la vanidad de los grandes de-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

lincuentes, á las palabras mágicas del Juez; "¡sea usted hombre!.." Rasgo perfectamente determinado del criminal *nato*, del incorregible. Y sin embargo, su crimen tuvo una circunstancia atenuante: la fracción 4ª, artículo 30 del *Código Penal!*

LIC. JESÚS URUETA.

CIRUGIA SOCIAL.

La pena de muerte, ha dicho un celebre criminalista italiano, está escrita en todos los ángulos de la creación y se ejecuta en todos los momentos de la vida del mundo. La naturaleza, en efecto, procede por una serie de reacciones ó *sanciones*. Todo acto es seguido de inevitable reacción en virtud de la ley de causalidad, y esta correspondencia entre la causa y el efecto se acentúa á medida que los organísmos se perfeccionan. El niño de pobre inteligencia que en vano lucha en el pizarrón con los guarismos y en el pupitre con la caligrafía, recibe las amonestaciones de su maestro y de sus padres; el niño bien organizado que aprende pronto y bien, obtiene premios y alabanzas. El mérito y el demérito corresponden á organizaciones felices ó infelices. El comerciante que aventura grandes cantidades en una empresa quimérica ó el general que ordena un ataque imposible, encuentran la terrible sanción de sus actos en la quiebra ó en la derrota.

Ahora bien, estamos en presencia de un delincuente. Al *delito*, acto anti-social, sucede la *pena*, reacción de la sociedad. Delito y pena, palabras que contienen la vieja idea de la culpabilidad moral y del castigo regenerador, no significan para nosotros sino ofensa social la primera y defensa social la segunda.—Un hombre es agredido por otro: á la ofensa responde la defensa, y el que se defiende no discute indudable-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

lincuentes, á las palabras mágicas del Juez; "¡sea usted hombre!.." Rasgo perfectamente determinado del criminal *nato*, del incorregible. Y sin embargo, su crimen tuvo una circunstancia atenuante: la fracción 4ª, artículo 30 del *Código Penal!*

LIC. JESÚS URUETA.

CIRUGIA SOCIAL.

La pena de muerte, ha dicho un celebre criminalista italiano, está escrita en todos los ángulos de la creación y se ejecuta en todos los momentos de la vida del mundo. La naturaleza, en efecto, procede por una serie de reacciones ó *sanciones*. Todo acto es seguido de inevitable reacción en virtud de la ley de causalidad, y esta correspondencia entre la causa y el efecto se acentúa á medida que los organísmos se perfeccionan. El niño de pobre inteligencia que en vano lucha en el pizarrón con los guarismos y en el pupitre con la caligrafía, recibe las amonestaciones de su maestro y de sus padres; el niño bien organizado que aprende pronto y bien, obtiene premios y alabanzas. El mérito y el demérito corresponden á organizaciones felices ó infelices. El comerciante que aventura grandes cantidades en una empresa quimérica ó el general que ordena un ataque imposible, encuentran la terrible sanción de sus actos en la quiebra ó en la derrota.

Ahora bien, estamos en presencia de un delincuente. Al *delito*, acto anti-social, sucede la *pena*, reacción de la sociedad. Delito y pena, palabras que contienen la vieja idea de la culpabilidad moral y del castigo regenerador, no significan para nosotros sino ofensa social la primera y defensa social la segunda.—Un hombre es agredido por otro: á la ofensa responde la defensa, y el que se defiende no discute indudable-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

mente el problema psicológico del libre albedrío, no discute si debe ó no debe repeler la agresión, porque el agresor en este momento tiene ó no tiene la libertad moral suficiente ó el conocimiento necesario de la ilicitud del hecho; nada le importa el estado de espíritu de su agresor, no obedece á consideraciones de alta metafísica, sino á las consideraciones más prácticas de la propia conservación. De igual modo la sociedad, reaccionando contra los delincuentes, en vez de preocuparse de tan hondos análises, debe defenderse; en vez de graduar la pena de la escala de la culpa, debe medirla en la escala de la conservación.

El hombre no es responsable de sus actos porque tenga libre albedrío, sino porque vive en sociedad. Si el delito es una manifestación de la actividad anti-social, claro es que debilita las fuerzas de la corporación, y que ésta, para poder vivir, tiene que reprimirlo.

La singular psicología con que diariamente nos pasma la tribuna jnrídica es peligrosísima. Un hombre roba ó mata, y el Agente del Ministerio Público, armado de *agravantes*, y el defensor armado de *atenuantes*, traban un combate de elocuencia ante nueve jurados que serán muy buenos comerciantes, muy buenos padres de familia, pero malísimos psicólogos; y horas enteras discuten si el procesado obró impelido por una fuerza difícil de superar (¡atenuante!), ó si la ocasión que se le presentaba para cogerse lo ajeno era fortuita (¡atenuante!) En una palabra, si tenía completa ó incompleta su libertad moral al cometer el delito. Si en la escala de la libertad se mide el castigo, éste tendrá que ir disminuyéndo cada día porque cada día descubre la ciencia nuevas atenuantes: á las señaladas en el Código hay que añadir las que provienen de la temperatura, de la religión, de las cosechas de trigo, de la instrucción obligatoria, de las mil y mil circunstancias que coartan la pretendida libertad humana y que para ser lógico tiene que admitir el legislador racionalista.

En cambio, si se admite que el elemento de la *culpabilidad moral* es extraño al delito, y que debe ser, por lo mismo, enteramente extraño á la pena; si al falso criterio del libre albedrío se sustituye el científico de las reacciones; si al estudio del crimen como entidad en abstracto, se sustituye el estudio del criminal del mismo modo que en medicina, ya no se estudia la enfermedad sino el enfermo; si se aplica, en suma, el método positivo á la sociología criminal, entonces la sociedad estará á salvo de las peligrosas absoluciones del jurado.

¿Cómo graduar entonces la pena? En la escala de la *temibilidad del delincuente*. Los criminales son más ó menos temibles según sean más ó menos anti-sociales los actos que ejecutan. Caben en estas categorías: criminales natos, criminales locos, criminales de hábito, criminales de ocasión, criminales por pasión. La sociedad, en su lucha contra el delito, reacciona por los medios siguientes: medios preventivos, reparativos, represivos, eliminativos. La conclusión es inevitable: cuando se trata de un criminal *nato*, de un incorregible, de un hombre antropológicamente conformado para el crimen, no bastan la prevención, la reparación y la represión; es necesaria la eliminación. En este caso terrible, la higiene y la terapéutica son inútiles; sólo salva la cirugía social.

Lic. Jesús Urueta.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Abordajes y auxilios en alta mar entre buques de distintas naciones. Legislación, competencia y procedimientos para hacer efectivas las consecuencias jurídicas de estos hechos.[1]

"La materia de derecho marítimo es inmensa como el mar," decía un Ministro de Estado, M. Jacobs, en ocasión á ésta semejante. Aun en la barca que he escogido, podría perderme en la extensión de sus olas. Por eso me quedo modestamente cerca de la playa, y me limito á seguir con mi aplauso y con mi entusiasmo á los jurisconsultos que acuden á este torneo del saber y á los ilustres preparadores de esta grande obra de progreso, cuyos frutos no se harán esperar largo tiempo.

Más que una Memoria consignaré aquí unos apuntes sobre la tesis importantísima que con tanta precisión como las otras formuló la Comisión nombrada al efecto.

Ninguno de los accidentes de mar causa mayores perjuicios que las colisiones, tanto por su incesante probabilidad, cuanto porque de día en día es mayor el número de buques

1 Tenemos el gusto de publicar la memoria que el Sr. Lic. D. Rafael Rebollar presentó al Congreso jurídico Ibero-Americano que se reunió en Madrid el año de 1892. Este trabajo notable se publicó entonces por determinación de la Real Academia de Jurisprudencia de Madrid, y el folleto circuló en México. No obstante tenemos entendido que éste estudio de nuestro distinguido colaborador no se conoce aun como merece. Esperamos que agradará á nuestros lectores encontrarlo en las páginas de la "Revista."—*La Redacción.*

que surcan el Océano. Procurar, pues, dar reglas y establecer principios para salvar los conflictos de leyes y para atenuar los males que inevitablemente lleguen á acaecer, es tarea digna del Congreso, no sólo por el interés internacional que tiene cuanto se refiere al derecho marítimo, sino por lo que de humanitario encierra y por la tendencia á conservar la más perfecta armonía entre naciones ligadas por tantos vínculos y por tendencias é ideales semejantes.

Para que lo referente á abordajes y auxilios en alta mar esté fuera del peligro de quedar en la esfera de la teoría, existe la feliz circunstancia de que las conclusiones á que se tenga que llegar y los principios de que se deriven están más ó menos completamente incrustados en los Códigos de Comercio y en la legislación naval de las naciones aquí representadas, y que con sus sabias disposiciones levantan el mejor de los himnos á la civilización.

Se equivocaba Mr. Picard cuando en Obtubre de 1885 decía que, en materia de responsabilidades por causa de abordaje la ley era muda en España. Cierto que antes de ese año el Código de Comercio era deficiente, como observaba el Sr. Romero Girón al concordar y anotar el Código actual pues el anterior se limitaba á declarar que el daño producido por el siniestro de que se trata, siendo casual ó inevitable, era de considerarse como avería simple, y siendo culpable alguno de los Capitanes, la responsabilidad recaería sobre el que hubiere causado el perjuicio; pero el actual Código, si bien tenía señalado para su vigencia el 1º de Enero de 1886, ya estaba expedido desde 22 de Agosto de 1885, y en él se estatuye lo que debe observarse respecto de indemnización así cuando el abordaje sea debido á culpa, negligencia ó impericia del Capitán ú otro cualquiera perteneciente á la dotación, como cuando provenga de culpa de ambos buques; cuando no pueda determinarse la imputabilidad; cuando intervenga causa fortuita ó de fuerza mayor para el abordaje, y aun

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

para el caso de que el buque abordador sea obligado por un tercero.

Debo hacer notar aquí que el Código de Comercio mexicano, vigente desde el 1º de Enero de 1890, contiene las mismas prevenciones, y que sus artículos del 901 al 914 corresponden exactamente á los 826 á 839 del español. Esta identidad hace mucho más fácil la adopción de principios que ya están rigiendo, y que por otra parte son, en lo esencial, los adoptados por la mayor parte de las naciones Europeas.

Pero ¿están previstos todos los casos y resueltos de la manera más conveniente? Vamos á verlo.

El abordaje puede ser culpable, fortuito ó dudoso.

El primero puede provenir de falta de uno de los buques, de ambos ó de un tercero.

Hay un sistema que, combinado con el de nuestros Codigos, ofrece, á mi juicio, bases fácilmente aceptables para un acuerdo internacional uniforme. Me refiero al que forma parte de las resoluciones del Congreso internacional de Bruselas sobre derecho marítimo, verificado en 1888, y es el siguiente:

1º *En caso de abordaje fortuito, cada uno soportará su daño.*

El principio no ha admitido ni puede admitir discusión, pero juzgo preferible la forma de enunciación contenida en los artículos 830 del Código español y 905 del mexicano, por ser más amplia, más comprensiva, dado que considera el caso fortuito ó de fuerza mayor é incluye lo que concierne á la carga de la nave.

2º *El abordaje dudoso se tratará como el fortuito.*

Los Códigos antes dichos no equiparán el dudoso al fortuito, sino á aquel en que la falta es común; pero como la sanción es la misma, en el sentido de que cada uno sufre su daño, no ofrece más dificultad que la de orden y redacción. En efecto, es lo mismo decir: «la disposición del artículo anterior es aplicable al caso en que no pueda determinarse cuál de los dos buques ha sido causante del abordaje», cuando el artículo anterior dijo que cada uno soportaría su daño y que ambos responderían solidariamente de los daños y perjuicios causados en sus cargos, que decir que el abordaje dudoso se tratará como fortuito, si para éste se dió la misma regla. Pero esta última forma, sobre ser más lacónica, da más unidad al pensamiento contenido en esas disposiciones.

3º *En caso de abordaje por culpa, si la falta es imputable á un solo buque, el daño será soportado por el autor de esa falta.*

Parece preferible, por más clara y previsora, la redacción del art. 826 del Código español, al que corresponde el 901 del mexicano, que estan concebidos en estos términos: «Si un buque abordase á otro, por culpa, negligencia ó impericia del Capitán, piloto ú otro cualquiera individuo de la dotación, el naviero del buque abordador indemnizará los daños y perjuicios ocurridos, previa tasación pericial.»

4º *Si la falta es común, se hará una masa de los daños causados: ésta será soportada por cada una de las naves, proporcionalmente* á la gravedad de las *faltas respectivamente cometidas.*

Los Códigos antes mencionados (artículos 827 del español y 102 del mexicano), se apartan de ese sistema, que es, á mi entender, el más conforme con la equidad, y establecen lo siguiente: «Si el abordaje fuese imputable á ambos buques, cada uno de ellos soportará su propio daño y ambos responderán solidariamente de los daños y perjuicios causados en sus cargos.»

Este es el sistema alemán, que ha sido objeto de vivas discusiones, lo mismo que el inglés, según el que, en caso de falta común, se reparte el daño por mitad.

De este último no ha podido decirse en su abono sino que es el más práctico; pero en derecho no podría sostener-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

se, por las consecuencias injustas que envuelve y á que en muchos casos conduce; tanto que Inglaterra no ha insertado el principio en la ley, y sólo ha estado sostenido por decisiones de la Corte de Almirantazgo que han consagrado esa jurisprudencia.

Del sistema alemán, que si no divide por mitad los daños hace soportar á cada uno el suyo, bien se puede decir en favor, que no sólo es el del español y el mexicano, sino también el portugués, el argentino, el sueco, el italiano y el holandés, y que es más fácil, puesto que entra en la regla de derecho comun, según lo que se juzga que no ha resentido daño el que lo ha sufrido por su culpa.

Mas, aparte de que tal regla se apoya en una ficción, ella sólo puede rectamente aplicarse en los casos en que nadie haya cooperado á la falta. De otro modo, es muy probable que con sus aplicaciones se atropellen otros muchos principios de indiscutible justicia.

Si la culpa de uno es grave ó gravísima, mientras que la del otro es notoriamente leve, no pueden ponerse al mismo nivel, reglándose y sancionándose del mismo modo, sin que se hiera en lo más vivo el sentimiento de equidad.

El principio de repartición del daño proporcionándolo á la culpa, por lo contrario, no puede tener adversarios en el fondo. Nadie niega que sea bueno, y si no ha sido universalmente admitido, es porque se han temido dificultades prácticas en su aplicación. Por dar solución á ellas, es por lo que se ha propuesto y admitido, ora el principio alemán, ora el inglés. Se ha tenido la creencia, no muy fundada en hechos, de que la aplicación del principio bueno, el justo, el equitativo, presenta dificultades á los jueces, á cuya perspicacia se hace muy poco honor, presumiendo que sean impotentes para distinguir los matices, para clasificar y graduar la naturaleza, intensidad y diferencia de dos faltas que se levantan frente á frente.

La objeción, —única por cierto,—tiene algo de pueril. La coexistencia de dos hechos culpables, ni implica siempre contradicción, ni produce en todo caso obscuridad. Ese reparo podría hacerse con una extensión verdaderamente peligrosa para lo que se refiere á todo género de contiendas que puedan llegar á ser judiciales. La falta de fe en las aptitudes de aquellos á quienes están encomendadas las decisiones, implicaría la necesidad de una supresión imposible. Decir que no puede discernirse en el caso la gravedad de las faltas, es afirmar que se carece de facultades para percibir hechos que son, en último resultado, los elementos constitutivos de aquéllas.

Nunca tal criterio podría suministrar argumento en favor del *judicum rusticorum*, de los juicios salomónicos para todos los casos en que pudieran presentarse dificultades á los encargados de administrar justicia. Son innumerables los que las ofrecen. No por eso hay código ni ley alguna de pueblos civilizados que en esos casos, y menos en materia penal, en materia de delitos cometidos por dos ó más á un mismo tiempo, si se tropieza con dificultades, autorice á los jueces para dividir el infante y para castigar delitos diversos ó de diversos grados con la misma pena.

Por lo demás; si en los casos de que tratamos, las dificultades fueren tales que no se lleguen á disipar las nieblas y quede en la sombra la causa del siniestro, entonces se estaría en presencia de un abordaje dudoso, que tiene regla de aplicación diferente.

Lo insostenible en principio, aunque aplicable en la práctica, es que reconociendo que hay dos culpables en diferente grado, se concluya que el que fué principal autor de un daño, no lo repare. Cuando hay evidencia completa de ello, no debe prohibirse á los jueces, no deben estar impedidos para aplicar la regla que la equidad reclama, que la justicia impone.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Por eso no estimo que sea un atrevimiento censurable proponer la enmienda en el sentido indicado.

5º *Si el daño es imputable á dos ó más buques, todos serán responsables solidariamente del daño causado á los terceros. La repartición de este daño entre los buques autores del abordaje se verificará siguiendo la regla de proporcionalidad indicada en el número anterior.*

Así concebida esta regla, tiene mucha mayor amplitud que el precepto que figura en algunos Códigos, y que se limita á decir que si un buque abordare á otro obligado por un tercero, indemnizará los daños y perjuicios que ocurrieren, el naviero de este tercer buque, quedando el Capitán responsable civilmente para con dicho naviero. Digo que tiene más amplitud, porque comprende el caso de que el abordaje sea imputable á un buque remolcado, cuando el remolcador se limita á suministrar la fuerza motriz, que es lo más común; y á este último, si hay motivos, fuera de la comunidad del hecho, que lo hagan responsable exclusiva ó solidariamente.

Como consecuencia del abordaje en algunos casos é independientemente en otros, viene la necesidad de la prestación de auxilios que fundamentalmente no es materia de discusión, aunque en la ejecución y en los detalles tiene que dejarse mucho encomendado á los autores del daño que se pretende remediar.

La base tendría que ser genérica y vaga, imponiendo al Capitán, en caso de colisión, el deber de prestar auxilios, asistir, acompañar al buque en peligro ó perjudicado hasta ponerlo en salvo, subordinado todo esto á la seguridad del buque asistente.

Impuesta esta obligación, es de toda necesidad imponer la compensatoria: crear el derecho á la remuneración debida, ya por los auxilios, ya por salvamento á su vez.

Este punto ha sido también objeto de debates y serias dificultades en la práctica, por la grande variedad de los casos y las innúmeras contingencias que se sustraen á toda previsión.

Se ha discutido si los pasajeros cuya vida y efectos han sido salvados deben estar sujetos al pago de la remuneración y según que condiciones: si los gastos hechos, el celo desplegado, los servicios prestados, el número de los que han intervenido activamente, la intensidad del peligro y el valor de los objetos salvados, debían ser indicación de tantas reglas como circunstancias de las enumeradas.

En Rumanía se ha concedido un 3 por 100 al Comandante del buque asistente ó salvador. En Holanda ha habido casos en que se ha asignado el 40, 50 y 60 por 100 á los salvadores, y no sin justicia, pues se ha tratado de objetos perdidos en alta mar y que sin la intervención de aquéllos lo habrían sido irrevocablemente. En otras legislaciones se ha intentado hacer una tarifa ó señalar como indemnización la tercera parte, y que el salvamento se pagará más caro que los auxilios. El Código de Comercio alemán distingue entre la indemnización por asistencia y la que corresponde por salvamento, declarando que ésta no puede ser menor que el décimo ni puede pasar el tercio de los objetos salvados.

Todas estas asignaciones previas, que siempre son aventuradas, no son más que tanteos que no tienen base científicamente aceptable. Pueden producir, además, el perjuicio consistente en la invasión de un buque en peligro por el cebo de una ganancia segura y de antemano fijada. Refiere Mr. Langlois que en las costas neerlandesas, en esos casos, una nave se hace un verdadero nido de abejas: que es literalmente invadida por los pescadores que estorban las maniobras y el trabajo, son superiores en peso á la mercancía desembarcada, causan perjuicio y vienen en seguida á reclamar la remuneración.

Hechos de esta naturaleza han sido parte, sin duda, para

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

que en algunas legislaciones marítimas exista la prohibición de subir á bordo sin consentimiento expreso del Comandante y para que se niegue retribución al que impone sus servicios.

Es innecesario entrar en tantos detalles que pueden quedar para que sean consignados en las leyes particulares, como ya lo están, (en México, por ejemplo en la Ordenanza de Marina y en la Ordenanza Naval de buques mercantes), y establecer como principio genérico la necesidad de la remuneración, dejando que la autoridad que tiene que decretarla tome en cuenta las circunstancias más atendibles que también pueden enumerarse de un modo general.

Si las resoluciones que el Congreso adoptase, en vez de llevar por mira la formación de una ley-tipo, hubieran de ser base para una convención internacional entre España, Portugal y los paises ibero-americanos, como complemento de esta materia, se podrían dar reglas semejantes á éstas:

1ª La acción para el resarcimiento de daños y perjuicios que se deriven del abordaje ó de los auxilios prestados, no está subordinada á ninguna formalidad previa; pero prescribe á los dos años, contados desde el fin del viaje del buque abordado ó asistente, si este viaje puede ser terminado; y si no, desde el momento en que el interesado haya podido intentar su acción útilmente.

2ª Cuando cada uno de los buques que han participado de la colisión lleva el pabellón de uno de los países contratantes, la acción para reclamar indemnizaciones por causas de auxilios ó de abordaje puede intentarse ante los Tribunales de cada uno de los países contratantes, con tal que el Tribunal que conoce del litigio sea, ó el del domicilio personal del demandante, ó el del puerto de origen del buque demandado, ó el de la jurisdicción del cual fué éste encontrado ó el de aquel en cuya jurisdicción tuvo lugar el abordaje ó la asistencia.

La primera de estas reglas pertenece al sistema inglés y

al alemán del Código de 1869, que está en oposición con el de Italia de 1882, el de España de 1885, el de México de 1890 y el portugués, que quieren que dentro de veinticuatro horas se presente protesta ó declaración ante la Autoridad competente del punto en que tuviere lugar el abordaje ó la del primer puerto de arribada del buque.

Al darle preferencia al sistema inglés y alemán, he tenido como causa de convicción que, tratándose de principios generales de derecho, deben despojarse de todas las formalidades, limitaciones y excepciones de las leyes particulares, y por otra parte y principalmente, la reflexión de que el sistema que exige formalidades en plazos tan limitados, es verdaderamente anómalo y derogatorio del derecho común. Subordina la acción de las víctimas á la declaración exigida, que no responde á ineludible necesidad, y establece la prescripción de veinticuatro horas y de tres días, tiempo infinitamente menor que el más corto de los señalados para la prescripción de todas las demás acciones. No hay razón para que los accidentes marítimos se coloquen bajo otro régimen que los accidentes de tierra; los ferrocarrileros, por ejemplo. Contradice, por último, la máxima generalmente admitida, según la cual el Capitán y los interesados conservan incólumes sus derechos, deducidos en las formas y plazos prescritos por la ley del pabellón, por la del buque deudor ó por la del primer puerto al que la nave llega.

Hay más todavía. El señalamiento del plazo de veinticuatro horas para hacer la protesta ó declaración en el puerto del abordaje ó de arribada, bajo pena de inadmisibilidad de la acción, expone á cometer la enorme injusticia de extinguir, por una omisión del Capitán, acciones legítimas de interesados que no han estado en el buque, que no han tenido conocimiento del hecho y que no han tenido ni ocasión ni medios de manifestar su voluntad.

Toda esta materia, como decía al principio, es muy vas-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

ta; pero si la tratara con mayor extensión ó con la que requiere, no me sería posible presentar el trabajo con oportunidad.

Me apresuro, pues, á llegar al fin, asentando por vía de resúmen las siguientes proposiciones:

1ª En caso de abordaje fortuito ó de fuerza mayor entre dos ó mas buques, cada uno y su carga soportará sus propios daños.

2ª El abordaje dudoso se considerará como el fortuito.

3ª Si un buque abordase á otro por culpa, negligencia ó impericia del Capitán, piloto ó cualquier otro individuo que tenga cargo del buque, éste soportará su daño, y el naviero del buque abordador indemnizará los daños y perjuicios, previa tasación pericial.

4ª Si la falta es común, se hará una masa de los daños causados y ésta será soportada por cada uno de los buqnes en proporción á la gravedad de las faltas respectivamente cometidas.

5ª Si el daño es imputable á dos ó más buques, todos serán solidariamente responsables del daño causado á los terceros. La repartición de este daño entre las naves causantes del abordaje se verificará teniendo en cuenta para la proporción, la gravedad de las faltas respectivamente cometidas.

6ª En caso de colisión ó abordaje, el Capitán debe, en tanto que pueda sin peligro para su buque, su tripulación y pasajeros, permanecer próximo á la otra nave hasta que esté seguro de que es inútil una más larga asistencia; debe asimismo prestar á esta nave, á su tripulación y pasajeros todos los auxilios posibles para salvarlos del peligro resultante del abordaje.

La falta de observancia de estas prescripciones hará que el Capitán quede sometido á la acción de las leyes penales de su país.

7ª La asistencia y los auxilios serán remunerados según las reglas de la equidad. Al efecto se tendrá en cuenta, por

una parte, el tiempo y el personal empleados, los gastos hechos, las pérdidas sufridas y los peligros corridos por el que prestó los auxilios; y por otra, los servicios prestados á la nave, á las personas y á las cosas salvadas. Los servicios se apreciarán en razón del valor último de éstas, deducidos los gastos. Todo contrato celebrado durante el peligro está sujeto á rescisión.

8ª La acción para el resarcimiento de daños y perjuicios que se deriven del abordaje ó de los auxilios prestados, no está subordinada á ninguna formalidad previa; pero prescribirá dos años después del viaje del buque abordado ó del que auxilió, si dicho viaje pudo ser terminado, y si no, desde el momento en que el interesado haya podido intentar su acción inútilmente.

9ª En caso de conflicto de leyes en materia de derecho marítimo privado, la ley del pabellón servirá para determinar las obligaciones de cada una de las naves demandadas por causa de abordaje, así como las indemnizaciones debidas por los auxilios prestados en alta mar, aun cuando el auxilio haya continuado en las aguas interiores.

El Capitán y los interesados conservan sus derechos para reclamar en las formas y plazos prescritos por la ley del pabellón, por la del buque deudor ó por la del primer puerto al que la nave llegue. Siempre que sea necesario seguir la ley del pabellón, la aplicable será la del que llevaba legalmente el buque en el momento en que nació el derecho.

10ª Los Tribunales de los países que adopten estas reglas podrán, en materia marítima, dictar medidas provisorias y de conservación, aun entre extranjeros, y cuando un buque de mar, que lleve el pabellón de uno de estos países, se vea sujeto á un juicio, estos Tribunales no podrán rehusar el conocimientó y decisión de las demandas que con este objeto les sean sometidas.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Desordenado, incompleto y con muchas otras imperfecciones, es natural que sea un trabajo como el que antecede, no tanto por la precipitación con que ha sido preparado y ejecutado, sino porque otra cosa no consienten las limitadas facultades y aptitudes de su autor, que no va en pos de otro fin que el de corresponder, en nombre del Colegio de Abogados de México, que se sirvió delegarle su representación, á la honrosa invitación de la Real Academia de Jurisprudencia, por tantos títulos respetable.

Madrid, Octubre 14 de 1892.

RAFAEL REBOLLAR.

LA GARANTIA DE LA AUDIENCIA JUDICIAL.

Los Señores Magistrados de la 4ª Sala al fallar el negocío á que se refiere esta exposición, tienen que decidir sencillamente, si la garantía de derecho *natural*, de derecho *constitucional*, de derecho universal *positivo;* si la garantía de audiencia y defensa judiciales es una fórmula gramatical, una frase metafísica, una palabra convencional, una simple ficción, ó sí es un derecho real y positivo que tiene *personalmente todo hombre* para no ser condenado en sus bienes y patrimonio, sin ser oído personalmente en el juicio en que se le juzga y condena. Hé aquí todo el problema de este litigio en su más simple expresión.

I.

HECHOS.

1º Por escritura de 25 de Enero de 1888, los Sres. Francisco Donadieu, Hilario Donadieu y Paulino Richaud, formaron sociedad colectiva mercantil con la razón social *F. Donadieu y Compañía.*

2º Dicha sociedad contrajo en Abril del mismo año de 1888 una deuda á favor de D. Eduardo Ebrard de ($53,300)

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Desordenado, incompleto y con muchas otras imperfecciones, es natural que sea un trabajo como el que antecede, no tanto por la precipitación con que ha sido preparado y ejecutado, sino porque otra cosa no consienten las limitadas facultades y aptitudes de su autor, que no va en pos de otro fin que el de corresponder, en nombre del Colegio de Abogados de México, que se sirvió delegarle su representación, á la honrosa invitación de la Real Academia de Jurisprudencia, por tantos títulos respetable.

Madrid, Octubre 14 de 1892.

RAFAEL REBOLLAR.

LA GARANTIA DE LA AUDIENCIA JUDICIAL.

Los Señores Magistrados de la 4ª Sala al fallar el negocío á que se refiere esta exposición, tienen que decidir sencillamente, si la garantía de derecho *natural*, de derecho *constitucional*, de derecho universal *positivo;* si la garantía de audiencia y defensa judiciales es una fórmula gramatical, una frase metafísica, una palabra convencional, una simple ficción, ó sí es un derecho real y positivo que tiene *personalmente todo hombre* para no ser condenado en sus bienes y patrimonio, sin ser oído personalmente en el juicio en que se le juzga y condena. Hé aquí todo el problema de este litigio en su más simple expresión.

I.

HECHOS.

1º Por escritura de 25 de Enero de 1888, los Sres. Francisco Donadieu, Hilario Donadieu y Paulino Richaud, formaron sociedad colectiva mercantil con la razón social *F. Donadieu y Compañía.*

2º Dicha sociedad contrajo en Abril del mismo año de 1888 una deuda á favor de D. Eduardo Ebrard de ($53,300)

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

cincuenta y tres mil trescientos pesos, extendiéndose al efecto el pagaré respectivo.

3º Por escritura de 12 de Abril de 1889, quedó separado de la sociedad D. Paulino Richaud, continuando aquella con sólo los socios hermanos Donadieu.

4º Por escritura de 31 de Mayo de 1889, ingresó como socio D. Clemente Manuel.

5º En 1º de Enero de 1892 por mútuo convenio, quedó separado D. Clemente Manuel de la misma sociedad convirtiéndose en acreedor de ella por el saldo que resultó á su favor en la respectiva liquidación; pero hasta ocho de Marzo del mismo año de 1892, no se consignó en escritura pública esa separación consignada ya en minuta anterior y hasta el día dos de Agosto del mismo año no se publicó en el Diario Oficial esa separación.

6º La misma Sociedad *F. Donadieu y Compañía* extendió dos pagarés á favor de D. Eduardo Ebrard por ($68,802) sesenta y ocho mil ochocientos dos pesos de vencimientos de treinta de Junio y treinta y uno de Diciembre de mil ochocientos noventa y dos, fechados ambos en doce de Enero del mismo año de mil ochocientos noventa y dos.

7º En 5 de Abril de 1894, se presentó Don Eduardo Ebrard con esos pagarés al Juzgado 1º de lo Civil promoviendo el reconocimiento judicial de esos pagarés por la razón social F. Donadieu y Compañía, y obtenido ese reconocimiento, se pidió y obtuvo auto de *exequendo* con fundamento de los arts. 1390, 1392 y 1396 del Código de Comercio, debiendose advertir que D. Francisco Donadieu reconoció los pagarés, no como gerente, sino como representante de la sociedad *en liquidación.*

8º Despachada la ejecución por auto de 14 de Abril de 1894, la diligencia se practicó con D. Francisco Donadieu, y á él se le hizo el requerimiento y la notificación llamada de encargo, esto es, la notificación á que se refiere el art. 1396

del Código de Comercio, haciéndosele saber que tenía tres días para oponer excepciones, y con él mismo se practicó la diligencia de embargo, designándose por el actor para ese efecto, la hacienda de *Acocutla*, propiedad particular de D. Clemente Manuel.

9º No habiendo opuesto excepciones D. Francisco Donadieu, *único* á quien se notificó el auto de embargo, *único* con quien se practicó la diligencia de embargo y *único* á quien se citó para que opusiera excepciones, el juicio ejecutivo continuó sus trámites reducidos á las pruebas rendidas por sólo el actor y á la sentencia de remate pronunciada con fecha veinte de Septiembre de mil ochocientos noventa y cuatro la cual después de ocuparse exclusivamente en fundar con citas de leyes la responsabilidad personal de D. Clemente Manuel por el importe de los pagarés demandados, concluye resolviendo: 1º Que ha procedido la vía ejecutiva: 2º que la Sociedad Francisco Donadieu y Compañía, debe pagar á Ebrard los sesenta y ocho mil doscientos ochenta pesos, importe de los pagarés demandados; y 3º que es de hacerse trance y remate de los bienes embargados para pagar con ese producto dicha suma.

10º Con fecha 7 de Noviembre de 1894, D. Clemente Manuel presentó escrito al Juez que conocía del juicio ejecutivo, promoviendo con fundamento del art. 97 del Código de Comercio, la nulidad de la diligencia de embargo, y de la citación para oponer excepciones y de todas las actuaciones posteriores á dicha diligencia.

11º Sustanciado este incidente y recibidas las pruebas por ambas partes promovidas, el Juez 1º de lo Civil dictó su fallo el 21 de Junio de 1895, decidiendo que no procedía la nulidad reclamada por los siguientes fundamentos: fallado el juicio ejecutivo por sentencia de 20 de Septiembre de 1894 y declarada ejecutoria por auto de 17 de Octubre del mismo año, ha terminado el juicio y no procede incidente de juicio

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

que no existe, ni de cuestión que está ya resuelta, pues aceptar lo contrario, sería sostener que el Juez puede revocar ó anular la sentencia que él mismo pronunció y es ejecutoria: que el art. 97 del Código de Procedimientos Civiles, se refiere literalmente al caso de que un juez *conozca* de un juicio, pero cuando lo ha fallado, no *conoce* ya de negocio alguno, y sería preciso violar la cosa juzgada, garantizada por el artículo 621 del mismo Código: que además á D. Clemente Manuel, se le hizo saber con fecha 26 de Abril el embargo *(nueve días después* de decretado y practicado) para que aceptase el cargo de depositario y presentó escrito diciendo que no aceptaba ese encargo y se reservaba todos sus derechos, lo que demuestra que desde esa fecha se dió por sabedor de la diligencia de embargo y auto que la motivó: que el gerente de una sociedad colectiva en liquidación representa válidamente en juicio á los socios por la responsabilidad solidaria de éstos; y por último, que Don Clemente Manuel no es *parte personalmente* para promover el incidente de nulidad, pues *personalmente* no ha sido demandado.

Este curioso fallo en que la capciosidad de sofismas verbales y pueriles pretende envolverse con el prestigio de dos ejecutorias indecisas, y anodinas, y cobardes, y vaporosas de la Suprema Corte Federal que nada resolvieron; este curioso fallo que á vuelta de mucho tornillo de pura fraseología consigna sustancialmente que D. Clemente Manuel, directa y materialmente condenado en su patrimonio á pagar una deuda, no tiene derecho á ser oído en juicio porque no es parte en juicio aquel cuyos bienes propios y exclusivos se mandan rematar; este curiso fallo que subordina los hechos á las frases, pues por medio de frases pretende destruir la *realidad del hecho de que los bienes propios* de D. Clemente Manuel son los que deben rematarse en virtud de sentencia dictada en juicio en que D. Clemente Manuel no fué citado, ni oído, y sin citársele, ni oírsele se declara que es responsable de una

deuda y debe pagarla con sus bienes; este curioso fallo fué apelado y la Sala tiene que resolver si puede quedar sancionado en nuestro foro el cúmulo de aberraciones é iniquidades vaciadas en este monumental auto.

II

DERECHO.

Tres únicas verdades simples, claras y dogmáticas son las que este Honorable Tribunal tiene que tomar en cuenta para decidir el presente recurso, pues sea cual fuere la solución que se dé á otras cuestiones impertinentemente traídas al debate, bastan aquellas tres verdades axiomáticas para resolver con plena justicia, con plenísimo conocimiento de causa la queja de Don Clemente Manuel.

Esas tres verdades indiscutibles son las siguientes:

1ª Nadie puede ser condenado en juicio civil sin ser *citado* y *oído* en el juicio que se le condena. Esta verdad no es solamente una verdad tradicional y de derecho secundario, sancionada en todas las leyes de enjuiciamiento, sino que es una verdad elevada al rango de dogma constitucional, de derecho natural del hombre, y reconocida y sancionada con ese carácter por todas las leyes antiguas y modernas, de derecho público y de derecho privado. Por lo mismo, ahorramos la inútil tarea de comprobarla, pues el último de los abogados juzgaría ofensivo el que se le considerara ignorante de tan vulgar y fundamental principio, limitándonos por lo mismo á citar las principales leyes de derecho público y enjuiciamiento que han consagrado *perpétua* y uniformemente ese dogma. Art. 16 de la constitución de 1857, y arts. 714 y 1,058 del Código de Procedimientos.

2ª El socio gerente de una sociedad es representante, en

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

juicio, de la *persona moral* de la sociedad; pero no representa á los socios en cuanto á sus bienes particulares, ni en calidad de gerente, ni en calidad de mandatario por virtud de la solidaridad en las responsabilidades sociales.

3ª El individuo que no ha sido citado legalmente en un juicio en el que se declara responsable al pago de una deuda y se le condena á pagarla con sus bienes, tiene derecho á pedir y obtener la nulidad de todo lo actuado en ese juicio, antes ó después de pronunciada la sentencia definitiva en ese juicio.

La sola enunciación de estas proposiciones reflejan su completa legalidad y su indiscutible justicia, pues ellas tres se resuelven en esta única verdad y en esta única garantía de derecho natural: *Nadie puede ser condenado civilmente sin ser citado y oido en el juicio en que se le condena.*

Conservar incólume esa verdad, defenderla de los ataques sofísticos en que se pretende embrollarla, condenar un precedente monstruoso en nuestra jurisprudencia que abriría ancha brecha á futuros atentados, velar por la incorruptibilidad y pureza de ese dogma sacrosanto de la previa audiencia judicial, poner un hasta aquí á las tortuosas chicanas y embrollos de los que disfrazan con doctrinarismo sofístico y con procedimientos aviesos la violación de esa suprema garantía; he aquí la importancia de este litigio, hé aquí su faz de interés público, de interés por la pureza de la ciencia, por la incolumidad de un principio sagrado, por la respetabilidad de una de las más importantes garantías de derecho universal.

III

PERSONALIDAD DEL GERENTE SOCIAL.

El art. 90 del código de comercio dice: *toda sociedad comercial constituye una personalidad jurídica distinta de la de*

los socios. El art. 113 del mismo código consigna: *La administración de la sociedad puede confiarse en la escritura pública á uno ó á más socios.* El art. 117 establece; *Los socios administradores ejercerán todas las facultades que fueren necesarias al giro y desarrollo de los negocios que formen el objeto de la compañía.* El art. 95, fracción 5ª ordena: *Las escrituras públicas de sociedad deberán contener para su validez...los nombres de los socios que han de tener á su cargo la dirección ó administración de la sociedad y el uso de la firma social si se tratare de sociedades en nombre colectivo.* El art. 2,286 del código civil dice: *El socio administrador debe ceñirse á los términos en que se le ha confiado la administración; y si nada se hubiere expresado se limitará, como un mandatario general, al giro ordinario del negocio ☞ con los capitales que haya recibido.☜*

Si, pues, según estos preceptos legales de sentido claro é inequívoco la sociedad es una entidad jurídica distinta de la persona de cada uno de los socios; si según esos mismos preceptos el socio administrador ó gerente es el representante de esa *entidad jurídica* y no de los socios, porque es el representante de la sociedad, de los bienes sociales, de los derechos y obligaciones sociales, y no es representante de los socios, pues sólo ejerce las *facultades que fueren necesarias al giro y desarrollo de los negocios que forman el objeto de la sociedad;* si en tanto hay un gerente en cuanto que hay una *persona moral* distinta de los socios y aquella y no estos es la representada por ese gerente, no cabe duda en que este es el representante de esa *persona moral*, pero no es el representante, ni el apoderado, ni el mandatario de los socios que son una *persona distinta* de la *persona moral* de la sociedad.

Pueden registrarse escrupulosamente y uno á uno todos los artículos del código civil y todos los artículos del código de comercio; pueden registrarse todas las leyes y todas las doctrinas sobre representación del gerente de una sociedad,

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

y no se encontrará *un solo artículo*. uno sólo, que consigne el absurdo de que el socio gerente es representante legal, apoderado ó mandatario de los socios. Precisamente para limitar la representación del socio gerente, para fijar la naturaleza de su mandato se ha consignado la distinción entre la *personalidad moral* de la sociedad y la personalidad *particular* de los socios. ¿Que significa esta distincion? Significa sencillamente que los bienes sociales, que los valores que forman el caudal social, el fondo social, lo que ha recibido el gerente para administrar, esos bienes, salidos del dominio de los socios, han entrado al dominio de una entidad jurídica que se llama la sociedad. Los socios en las sociedades colectivas tienen y conservan, á pesar de su responsabilidad solidaria, dos clases de bienes: los bienes que han puesto en sociedad y que administra el gerente, y los bienes particulares que no han puesto en la sociedad. Los primeros forman el fondo social, han salido del dominio de los socios, han entrado al dominio de la *persona moral* de la sociedad, no pertenecen á aquellos, pertenecen á esta entidad jurídica, á esa ficción legal, ficción ó personalidad moral que ha creado la ley precisamente para distinguir los bienes sociales de los bienes particulares de los socios, los bienes que son administrados por el gerente y representante de la sociedad, de los bienes particulares de los socios que no administra, ni representa el gerente, ni forman el fondo social, ni han *entrado al dominio de la persona moral de la sociedad.*

No existiendo *una sola ley* que dé al gerente otro mandato y otra representación que el mandato y la representación de la *persona moral* de la sociedad; no siendo, no cónsistiendo esa persona moral en otra cosa que en el conjunto de bienes que *salidos* del dominio *particular* de los socios han entrado al dominio común, el fondo social fijado en el contrato; habiendo por disposición *expresa de la ley* distinción precisa entre los bienes particulares de los socios y los bienes del fondo social; no siendo el gerente otra cosa que el *órgano* necesario de la persona moral de la sociedad y el administrador de los bienes sociales, y no el órgano de la personalidad particular de los socios, ni el administrador de sus bienes particulares, es hasta desatinado, y contradictorio y absurdo suponer que el gerente representa á los socios, cuando estos socios pueden tener derechos y obligaciones para con la sociedad, intereses contrarios á los de ella, litigios con ella.

Siendo una verdad palmaria que el socio gerente sólo representa, sólo es mandatario de la persona moral de la sociedad esto es, del *fondo social*, de los bienes que en virtud del pacto social han salido del dominio de los socios y pasado al dominio de la persona moral de la sociedad; siendo esta una verdad incontrovertible, una verdad fundada en leyes expresas, una verdad que jamás ha sido puesta en duda, una verdad que no es otra cosa que la consecuencia inmediata y directa de la distinción *legal* entre la *persona moral* de la sociedad y las personas físicas de los socios, entre el patrimonio social y el patrimonio particular de los socios, distinción que establece categóricamente toda la legislación positiva; no cabe duda en que el gerente de una sociedad no es, ni ha sido nunca, ni podrá ser jamás mientras las leyes respeten las relaciones naturales de las cosas, no es representante, ni mandatario de los socios, del patrimonio particular de los socios de los bienes de los socios que no han entrado al fondo social, que no forman parte del fondo social, pues respecto de ellos los socios conservan su dominio, su administración, sus derechos, sus acciones judiciales para defenderlos como actores ó como demandados puesto qne *ninguna ley* les ha privado de esos derechos y de esas acciones, ni las ha transferido al gerente del patrimonio social.

En resumen, no existe *ley alguna* que atribuya al socio gerente la representación de los socios; la sociedad es una

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

persona moral *distinta* de las personas de los socios; las leyes sólo atribuyen al gerente la representación de la *persona moral* de la sociedad, pero no le conceden la representación de las personas y derechos de los socios; el hecho de que las sociedades sean personas morales distintas de las personas de los socios significa sencillamente que los bienes sociales forman un patrimonio distinto del patrimonio particular de los socios, que unos son los *bienes sociales*[1] cuyo dominio han trasmitido los socios á la sociedad, y otros los bienes particulares cuyo dominio conservan; el gerente administra y *representa* judicial y extrajudicialmente los bienes particulares de los socios; el gerente no puede litigar en nombre de los socios por lo que hace al patrimonio particular de éstos, por la misma razón, porque no puede contratar, ni disponer válidamente de ese patrimonio; y sería cosa inaudita que elsocio contratase válidamente respecto de los bienes particulares de los socios.

He aquí un puñado de verdades indiscutibles, fundadas en leyes que son expresión formal de la naturaleza, de la esencia de la sociedad, y que no podrán ser puestas en duda sin ultraje á la razón.

IV

LA SOLIDARIDAD DE LOS SOCIOS.

Evidenciado plenamente que el gerente de una sociedad representa judicial y extrajudicialmente el patrimonio social,

1 Parmi les règles aplicables aux societés de commerce il en est qui derivent certainement de leur caractére de personnes morales; dans le procès où la société joue rôle de demanderesse il n'est pas necessaire que tous les asociés figurent, elle est representée par "son gerent" parce qu'une première consequence incontestée de "la personalité" des societés de commerce, c'est que le "fonds sociaux', n'est pas indivis entre les associés mais est reputé "appartenir" á "l'être moral societé." (Lyon Caen etc. tomo 1º 282 y 285.)

ó lo que es lo mismo, la *persona moral* de la sociedad; pero no representa el patrimonio particular ó *extra social* de los socios, véamos si al gerente puede atribuirse esa representación de los socios en virtud de que en la sociedades colectivas los socios son responsables *solidariamente* de todas las obligaciones sociales.

Dos clases de solidaridad pueden concebirse á propósito de las responsabilidades de una sociedad colectiva: pueden ser responsables solidariamente los *socios entre sí* de las obligaciones sociales; y pueden también ser responsables no sólo solidariamente *entre sí*, sino *solidariamente* ☞ *con* ☜ *la sociedad*. ¿Cuál de estas dos responsabilidades es la establecida por nuestro código y por *todas las leyes* comerciales del mundo?

Unicamente la primera, esto es, la *solidaria* de los socios *entre sí;* pero ni nuestro código, ni código alguno del mundo culto, ha establecido que los socios son solidarios ☞*con*☜ *la sociedad* con la *persona moral* de la sociedad. "Los *asociados*, dice el art. 100 de nuestro código, están ilimitada y solidariamente obligados por las operaciones sociales;" pero ni ese artículo, ni otro alguno establecen que los socios están *solidariamente* obligados *con la sociedad* con la persona moral de la sociedad, ni podían decir tal cosa sin incurrir en nota ble absurdo y grave contradicción.

El art. 22 (dicen los Sres. Lyon Caen y L. Renault tom. 1 núm. 339, artículo igual al 100 de nuestro Código) establece la solidaridad entre los socios solamente, y no entre ellos y la sociedad. " "Il etablit la solidarité en- "tre les associés seuls; et non point entre eux et la société." "En verdad, (dice Alauzet, tom. I núm. 522) los socios están obligados *cada* uno y uno por todos á pagar lo que la sociedad por su insolvencia no puede pagar; pero esa obligación no la tienen en calidad de "condeudores solidarios del *ente de razón* "que los representa," no la tienen como deudores "so-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

lidarios con la persona moral» de la sociedad. «A la verité, «ils son tenus chacun d'eux et un seul pour tous de ce que «la société est dans l'impuissance de payer; mais ce n'est pas «comme *codebiteurs solidaires de l'être de raison* qui les re-«presentent.»

Pedro y Juan se obligan *solidariamente* á pagar á Luis $ 10,000; en este caso hay una sola deuda directa, una única deuda principal y dos obligados *principal y directamente;* el acreedor tiene dos deudores directos por una sola deuda; y puede dirigirse *directamente* contra cada uno de ellos, contra el que mejor le plazca por el *total* de la deuda, sin preocuparse de que uno de ellos sea insolvente ó no lo sea. No es este el caso de las deudas ó créditos pasivos de una sociedad colectiva. El deudor directo es la sociedad, es la *persona moral* de la sociedad, la *entidad* social, entidad distinta de la persona de cada uno de los asociados y cuya distinción precisamente ha establecido expresamente la ley para que existieran dos patrimonios distintos con responsabilidades distintas; el patrimonio social *directamente* obligado, y el patrimonio de cada uno de los socios *subsidiariamente* obligados, aunque *solidariamente* obligados, ellos *entre* sí, pero no *solidariamente* con la sociedad.

«Es de la más alta importancia establecer (dice Savigny *Le Droit des Obligations* tom. 1º pág. 242) muy neta y sólidamente que la verdadera significación de la institución de la obligación solidaria reposa *única y exclusivamente* sobre los dos objetos que acabamos de indicar, *seguridad y comodidad* para el acreedor en el ejercicio de su acción ó derecho de manera que pueda á su *arbitrio* elegir entre varios deudores el que le plazca y cuyo patrimonio le ofrezca mayores garantías para la *ejecución* y pueda intentar una sola acción.[1]

[1] Il est de la plus haute importance d'etablir tres nettement et très solidement que la veritable signification de l'institution de l'obligation correal repose sur le deux buts que nous venons d'indiquer et sur eux exclusivement: sureté et comodité dans la poursuite du divit. .. le creancier peut choisir parmi plusieurs debiteurs celui dont la fortune lui offre les garanties les plus considerables pour l'execution, en outre il peut atteindre son but pour une unique action.

Ahora bien, los acreedores sociales, ¿los acreedores de la sociedad tienen derecho para demandar *desde luego*, directamente á los socios en lo personal por los contratos celebrados con la sociedad? ¿Puede aceptarse racionalmente que habiéndose obligado una sociedad colectiva á comprar cien tercios de café, el vendedor dirija una acción sobre cumplimiento de contrato desde luego y directamente contra cualquier socio, sin demandar previamente á la sociedad, á la *persona moral* que es la directa y principalmente obligada? Si se aceptase ese sistema, resultaría sencillamente que desaparecería la distinción entre la persona moral de la sociedad y las personas de los socios, que no había separación de patrimonios, que inútilmente la ley ha dicho y establecido que las sociedades son personas morales, entidades jurídicas, patrimonios civiles *distintos* y diversos del patrimonio de la persona de los socios; resultaría sencillamente violado el art. 90 del Código de comercio que establece, ordena y sanciona esa distinción. Nunca se ha visto semejante violación, jamás se ha visto que los que contratan con la sociedad vayan desde luego á ejercitar sus acciones contra los socios; no se ha visto, ni debe legalmente aceptarse ese procedimiento porque él importaría una *confusión* completa entre la persona de la sociead y la persona de los socios, porque él significaría que respecto de los acreedores sociales, estaba confundido el patrimonio social con el patrimonio de los socios, porque sólo aceptando esa confusión de persona y de patrimonio, sólo así podrían tener acción directa los acreedores contra los socios. Y precisamente la ley no acepta esa confusión y lejos de aceptarla categóricamente ordena que deban considerarse como personas distintas la sociedad y los socios, que cada una de esas personas y de esos pa-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

trimonios tienen responsabilidades distintas, que unos son los acreedores de la sociedad y otros los acreedores particulares de los socios, que los bienes sociales están sujetos *directamente* á las obligaciones sociales y los bienes de los socios están afectos primera y *directamente* á las obligaciones *particulares* de los socios y solo secundaria y subsidiariamente á las obligaciones *insolutas* de la sociedad Todo esto ordena la ley al ordenar que las sociedades son *entidades* distintas de los socios; (art. 90, Código de comercio) al ordenar que los socios pueden ser acreedores y deudores de la sociedad (arts. 2,230 y 2,231 Código Civil); al ordenar que *los derechos y obligaciones de los socios son independientes de la sociedad y no se identifican sino en los casos expresamente prevenidos por la ley* (art. 2,231 citado) sin que haya ley alguna que declare identificados y *solidarios* á los socios *con la* sociedad; al ordenar que los acreedores particulares de los socios son distintos de los acreedores de la sociedad (artículo 152 del Código de Comercio); al ordenar que en las quiebras de las sociedades colectivas, que entrañan la quiebra de los socios, deberán sin embargo seguirse con separación las liquidaciones respectivas (art. 1,016) porque los bienes sociales quedan afectos á los acreedores sociales, y los bienes de los socios á los acreedores particulares.

Todos esos preceptos demuestran de la manera más innegable y de acuerdo con la naturaleza de las cosas, que siendo distintas la personalidad de la sociedad y la personalidad de los socios, que no debiendo *confundirse* los patrimonios, que estando afectos esos patrimonios á responsabilidades distintas, el uno á los acreedores sociales y el otro á los acreedores particulares de cada socio, la responsabilidad de los socios por las deudas sociales es *subsidiaria*, no es *solidaria* con la sociedad, no puede ser exigida directamente por los acreedores sociales, pues éstos son en primer lugar y principal y directamente acreedores de la *persona*

moral de la sociedad y contra ella deben dirigir su acción, y sólo en caso de insolvencia pueden dirigirse contra el patrimonio particular de los socios.

Todo esto es claro, llano, de explicado derecho, de práctica universal, jamás discutido ni puesto en duda, y aceptado como doctrina vulgar y conocida por todos los autores, porque todo ello en conclusión no es sino la aplicación del principio fundamental de que la sociedad es una *personalidad* distinta de los socios, que celebra contratos, contrae deudas y derechos distintos y extraños á los contratos y deudas y derechos particulares de los socios. «Un acreedor (dice Par-«dessus[1] *no puede* á su arbitrio y sin haber previamente ejer-«citado su acción contra la sociedad, perseguir ó dirigirse «contra los socios por el pago de una deuda ó por la ejecu-«ción de un contrato ó compromiso *social;* no puede obrar «como si el socio hubiese contratado directamente por su «propia cuenta. La cualidad de los asociados, en este caso, «no es precisamente la de simples *codeudores;* es más bien «una especie de caución, y si no es exacto decir que el acree-«dor está obligado á litigar con la sociedad antes de perse-«guir civilmente á los asociados, es evidente por lo menos «que no puede accionar á los socios, sino después que ha «discutido con la sociedad la cualidad y la cantidad de la «deuda. Así, la demanda debe ser dirigida contra la socie «dad y solamente cuando ella ha sido condenada, puede el

1 Núm 1,026. Un creancier ne peu á son gré, sans avoir dirigé aucune action contre la societé, poursuivre un associé pour le payement d'une dette ou pour l'execution d'un engagement social comme si cet associé l'eut contracté directement et pour son propre compte. La qualité des associés, dans ce cas n'est pas precisement celle de simples "codebiteurs" (no hay "solidaridad" entre la sociedad y los socios) elle tient beaucoup plus du cautionement, et s'il n'est pas exacte de dire que le creancier est tenne de discuter la societé avant de poursuivre les associés isolement, au moins est il sur qu'il ne peut agir contre eux que lorsque a fait juger la verité et la qualité de la dette contre la societé; et c'est n'est q'aprés que la condamnation á eté prononcée que le creancier peut, en vertu du jugement, agir contre chacun des membres de la societé pour les contraindre dans leurs personnes et leurs biens á l'execution des engagements.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

»acreedor en virtud de la sentencia *accionar* á cada uno de »los miembros de la sociedad para obligarlos en su persona »y en sus bienes al cumplimiento de sus responsabilidades.»

En el mismo sentido se expresan Dlangle: núm. 263, Malbeire y Jourdain p. 131, 3ª cláusula núm. 165, sent. casación fracción 16 Abril 1879.

Alauzet refiriéndose á estas doctrinas universalmente aceptadas nos dice:[1] »Estos principios son aceptados sin dis»puta; pero es preciso ir más lejos, más allá de donde va »Pardessus. La sentencia pronunciada contra la sociedad »bastará sin duda para perseguir á los asociados, pero sola»mente después que se haya comprobado por el resultado de »la acción dirigida contra la sociedad que ésta se halla en la »imposibilidad de cumplir sus compromisos; los asociados no »están obligados sino *subsidiariamente* como lo enseñan De»lamarre y Lepoitivin. Y decimos *subsidiariamente*, porque »el acreedor no podría accionar á los socios *solidaria* ó di»visamente, sino después de haber agotado los bienes de la »sociedad *su deudora directa y principal*.» En verdad, los socios están obligados cada uno de ellos y todos por el todo, por todo lo que la sociedad no puede pagar; pero no es como deudores *solidarios* ☞*con*☜ el ente de razón que sea su *representante*, sino solamente ellos *entre si* están obligados in *sólidum*.

Donde hay un deudor *principal y directo* y otro *subsidiario* no puede haber *solidaridad*, porque la esencia de la solidaridad es que dos ó más deudores lo sean *principales*,

1 Mauret "Societés Civiles et Commerciales tomo 1º núm. 522." Ces principes sont admis sans contestation; mais nous pensons qu'il faut, aller un peu plus loin même que le fait Pardessus; le jugement prononcé contra la societé suffira bien sans doute pour poursuivre les associés "mais seulement" après qu'il aura eté constaté par le resultat de l'accion dirigeé contra la societé que elle est impuisant á remplir ses engagements; les associés ne sont pas tenues que "subsidairement," ainsi que l'enseignent M. M. Delamare et Lepsitivin· Nous disons "subsidairemente," car le creancier ne pourrait contraindre les associés conjointement ou divisement, avant avoir epuisé les biens de la societé sa "debitrice directe et principale."

directos, *inmediatos* para con el acreedor y á cuyo arbitrio éste podrá dirigirse contra el que quiera; y si en las sociedades colectivas la *persona moral* de la sociedad es la directa y principal, é inmediatamente obligada y los socios solo están obligados *subsidiaria* é indirectamente, aunque solidariamente *entre ellos*, no es posible aceptar que los socios sean deudores *solidarios con* la sociedad, pues si fueran solidarios no serían deudores *indirectos y subsidiarios* para el caso de que el haber social no alcance á cubrir las deudas sociales. Esa sola condición destruye la esencia de la solidaridad.

»Los asociados (dice Houpin tome 1º núm. 184) no tie»nen derecho de formular tercerías de dominio en los juicios »dictados *contra la sociedad* y en los que son representados »por el gerente; *pero no se les puede rehusar el derecho de »intervenir en el juicio* dirigido por el gerente; porque los »acreedores sociales tienen por *principal* obligado á la *so»ciedad*; los asociados son una especie de garantes ó cauciones.»[1]

»Los acreedores sociales (dicen los Srs. Lyon Caen y »Renault tomo 1 núms. 334 y 337 tienen acción: I.—con»tra *la sociedad*: II *contra* los asociados individualmente.... »Cuando ejercen su acción contra los asociados ¿están obli »gados á demandar previamente á la sociedad ó son libres »para comenzar ejerciendo su acción contra los asociados »personalmente? Se ha pensado por algunos que los acree dores tienen plena libertad de elección en virtud del art 22 que establece la *solidaridad* de los socios. Esta doctrina *no* es admisible, pues lo natural es que los acreedores se dirijan ante todo contra la sociedad que es la *principal* obliga-

1 "Les creanciers sociaux ayant pour principal obligé la societé," les associés sont de sortes de garantes ou de cautions.....; les associés n'ont le droit de former tiers opposition aux jugements rendus contre la société et dans lequels ils sont representés par le gerant "mais on ne peut" leur "refuser" le droit d' "intervenir" dans le procés dirigé par le gérant.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

»da: sin que se pueda fundar argumento ninguno en el art. »22, pues ese artículo establece la solidaridad *entre* los socios, solamente, y no *entre ellos y la sociedad*, y la obligación de los socios es solamente *subsidiaria*.»[1]

V.

CONSECUENCIAS.

Quedan comprobadas con toda evidencia estas dos verdades ya indiscutibles:—I.—El gerente de una sociedad colectiva representa judicial y extrajudicialmente á la *sociedad*, á la persona moral de la sociedad, al patrimonio social; pero no representa, ni judicial, ni extrajudicialmente las personas de los socios, el patrimonio de los socios, los derechos y obligaciones del patrimonio extrasocial de los socios. Verdad indiscutible, porque *no hay ley* que atribuya al gerente la representación de los socios, porque las facultades que le dá la ley y el contrato social sólo le autorizan para administrar los *bienes* sociales, porque esos bienes constituyen, por precepto expreso de la ley, una personalidad jurídica distinta de las personas de los socios y el gerente es el representante de esa persona y para representar á ella y sólo á ella se ha creado por la ley.

II. Los socios de una sociedad colectiva son solidariamente responsables *entre sí* de las deudas sociales; pero los

1 "Les creanciers sociaux ont action: I contre la societé; II contre chacun des associés individuelment.....Pour les poursuits qu'ils exercent contre les associés sont ils obligés dans une mesure quelconque, d'agir d'abord contre la societé, ou leur est il loisible de commencer pour poursuivre les associés personellement. On a proposé de decider que les creanciers ont pleine liberté, en faisant remarquer que l' article 22 cod. com. pose le principe de "la solidarite" sans aucune restriction, ce qui implique un renvoi aux principes de droit comun, la doctrine ne parait pas admisible; il semble naturel que le creancier, adressent avant tout á la societé qui ést leur "principal" obligé Il ny'a á tirer de l'article 22 "aucun; argument; il etabalit la solidarité entre "les associés seuls" et non point "entre" eux et la "societé,"

socios no son responsables *solidariamente* ☞ *con* ☜ la sociedad; porque *no hay ley* que establezca esa solidaridad, y esta razón es decisiva, puesto que según el art. 1,394 del Código Civil, la solidaridad solo existe en virtud de convenio ó ley expresa; porque toda la jurisprudencia y la doctrina universal reprueban esa solidaridad; porque ella es absurda, pues implicaría que los socios contrataban en nombre propio, cuando precisamente sólo contrata el gerente; porque si los socios son solidarios *entre sí*, respecto de los acreedores sociales, *sólo* son deudores *subsidiarios* y lo subsidario destruye la *esencia* de la solidaridad.

¿Que consecuencias se siguen de estas dos verdades ámplia y victoriosamente demostradas y fundadas en *leyes expresas?*

Pues las consecuencias ineludibles son que el gerente no es apoderado particular de los socios, no representa su patrimonio extra-social, no tiene facultades para ejercitar las acciones y defensas judiciales relativas á ese patrimonio; y por lo mismo, que cuando los acreedores sociales pretendan ejercitar no contra los bienes sociales, sino contra los socios, contra el patrimonio extrasocial, los derechos ó acciones que tienen en virtud del art. 90 del Código de comercio que declara á los socios solidariamente responsables de las deudas sociales, deben accionar, demandar á los socios personalmente, porque respecto de sus responsabilidades *personales* no están representados por el gerente.

La consecuencia ineludible de la otra verdad demostrada, de la no solidaridad *entre la sociedad* y los socios es que huelga, es inconducente, sale sobrando todo lo que se ha dicho y escrito y razonado á propósito de si la solidaridad de los deudores implica en nuestro derecho, mandato recíproco entre esos deudores para representarse judicial y extrajudicialmente.

Yo no creo, estimo que en nuestro derecho es desatino

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

insostenible ese recíproco mandato; pero es inútil combatir ese desatino, porque suponiendo que los deudores solidarios se representen judicialmente en virtud de ese inventado mandato, no tiene en nuestro caso aplicación posible esa peregrina teoría.

El gerente obliga á la sociedad, y *sólo obra* en *nombre de ella;* y como la sociedad no es deudora solidaria *con* los socios, no puede el gerente invocar esa solidaridad para atribuirse el carácter de mandatario de los socios, mandato que solo se funda en la solidaridad de los deudores. Pedro y Juan se obligan solidariamente á pagar $ 10.000 á Antonio; en virtud de la solidaridad se supone que se han dado mandato recíproco para representarse judicialmente para con Antonio en todo lo relativo á esa deuda; pero es preciso que Pedro y Juan se hayan constituido deudores solidarios; pues de su voluntad de ser *solidarios* en esa deuda se deriva el mandato recíproco. Mas el gerente de una sociedad colectiva no estipula ninguna solidaridad *entre la sociedad* en cuyo nombre obra y los socios; ni él estipula esa solidaridad, ni la ley la establece; el gerente obra en nombre y solo en nombre de la sociedad, solo obliga *directa y principalmente* los bienes sociales; los particulares de los socios no quedan obligados si no *subsidiaria é indirectamente*, en caso de insolvencia de la sociedad; no hay pues solidaridad; y no habiendo solidaridad *entre* la *representación* con que obra el gerente y *los socios*, son del todo inconducentes, inaplicables y extrañas las teorías sostenidas relativas á que los deudores solidarios son mandatarios recíprocos en juicio y fuera de juicio.

El gerente de una sociedad no es, pues, mandatario, ni representante de los socios, ni tiene facultades para gestionar judicialmente activa, ni pasivamente en nombre de ellos, no es su representante á título de socio gerente, porque ese título por ley y por el convenio social solo le faculta para representar la persona moral de la sociedad, su patrimonio,

que constituye una entidad jurídica distinta de la persona y patrimonio de los socios; no á título de *solidaridad* en las deudas contraídas por él con la representación social, porque no existe esa solidaridad, porque los socios no son solidarios *con* la sociedad, porque no siendo deudores solidarios *con ella* sino *subsidiarios é indirectos*, no puede jamás decirse que el gerente que obra en nombre y solo en nombre de la sociedad ha contraído una deuda solidaria entre ella y los socios, haya obligado á estos *solidariamente* con la sociedad. En una palabra, el supuesto mandato recíproco de los deudores solidarios que se dice entraña la solidaridad, aceptando que existiera, no puede existir entre el gerente que obra en nombre de la sociedad y los socios, por la razón sencilla de que entre la sociedad (en cuyo solo nombre obra el gerente) y los socios, no hay tal solidaridad que sirva de base al supuesto mandato recíproco.

Una cosa es solidaridad entre los socios y otra la solidaridad *con* la sociedad. Respecto de esta, existiendo, como existe, separación de patrimonios que se informa en distinción de personalidades, respecto de la sociedad los socios no son *codeudores solidarios* sino *deudores subsidiarios* indirectos, para el caso de que el patrimonio social no pueda cumplir sus compromisos; y esto no se opone á que para ese caso los socios respondan *entre sí* solidariamente, cada uno ellos por el todo de las deudas sociales insolutas. Esta es la doctrina verdadera, la doctrina de las leyes, la doctrina de todo el derecho, la doctrina que se desprende de la lógica, de la naturaleza misma de las sociedades.

Pero si esta doctrina es verdadera é irrefutable, como lo es, también debe serlo que los acreedores sociales tienen una garantía, *solidaria de todos* los socios ciertamente; pero que siendo esa garantía subsidiaria, que siendo el deudor directo y principal el patrimonio social, la entidad jurídica de la sociedad, distinta de las personas y patrimonios de los socios,

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

deben dirigir su acción contra la sociedad en primer lugar y cuando ella no pague podrán dirigirla contra los socios. Pero como los socios son personas *distintas* de la persona social, como el gerente no los representa ni á título de gerente, ni á título de deudor solidario de la sociedad, ni á título de nada, cuando los acreedores dirijan su acción contra los socios deben demandarlos á ellos personalmente, á ellos cuyo patrimonio privado es objeto del juicio, á ellos en cuyos bienes particulares se trata de ejecutar una obligación, á ellos cuya responsabilidad personal se trata de exigir, á ellos que no han dado al gerente mandato ninguno para representarlos en su responsabilidad personal y en su patrimonio extra social, á ellos personalmente, porque ni por la ley, ni por el contrato de sociedad estan representados por el gerente.

Los acreedores sociales tienen dos deudores; la sociedad *directamente;* y *subsidiariamente todos los socios cada uno por el todo.* Esta es la verdadera y clara fórmula de las responsabilidades sociales. Pero de que los acreedores sociales tengan esas dos clases de deudores no se sigue que una clase represente á la otra, que puedan omitir á su arbitrio esos acreedores la citación judicial del deudor contra quien dirijan sus reclamaciones. En nada se opone á estas verdades innegables y ya evidenciadas el que el art. 124 del código de comercio preceptúe que las sentencias ejecutoriadas contra la sociedad establecen la cosa juzgada contra los socios, pues nadie *trata de negar esa cosa juzgada* al reclamar la garantía de audiencia personal, cuando esa cosa juzgada se va á ejecutar en bienes de los socios y no en bienes de la sociedad. Sin alterar la cosa juzgada, respetándola en toda su integridad, el socio particular en cuyos bienen se pretenda ejecutar esa cosa juzgada tiene derecho á alegar, no que la cosa juzgada no lo es, pero sí á oponer compensación, confusión de derechos, novación, pago posterior y sobre todo que hay *bienes sociales* que *deben previamente ser embargados y rematados.* La cosa juzgada decide sencillamente, y es lo único que puede decidir, que la sociedad debe tal prestación, $ 10.000 por ejemplo; esto y sólo esto es la verdad legal para los socios; esto y sólo esto es la cosa juzgada *contra la sociedad,* como dice el art. 124; pero esa cosa juzgada no dice si existen ó no bienes sociales bastantes para cubrir ese crédito y á pesar de eso el acreedor por capricho ó mala fe deja libres los bienes sociales para embargar injustamente á un socio; no dice si *después* de pronunciada esa cosa juzgada en juicio seguido con el gerente, el socio en quien se pretende ejecutar el fallo ú otro socio han transigido, han pagado, han novado la deuda, han extinguido la obligación de la ejecutoria por cualquier modo; no dice si el socio en cuyos bienes se pretende ejecutar el fallo puede alegar confusión, compensación ó alguna otra relación jurídica *personal* con el acreedor que pretende ejecutarlo, y que destruya la deuda ó la modifique. Nada de eso dice la cosa juzgada *contra la sociedad*; y si nada de esto dice, y si el ejecutado, el embargado, aunque sea en vía de apremio, tiene derecho á alegar todas esas defensas, derecho que le dan todas las leyes; y si el ejecutado, el embargado, el demandado en vía de apremio no es la sociedad, no es el patrimonio social, sino que el acreedor embarga, demanda, ejecuta á un socio, los bienes de un socio, entonces éste tiene personalmente pues su patrimonio personal es el demandado, tiene derecho él, que es el demandado, á alegar esas defensas que son *personales,* que no son de la sociedad, que ésta no puede hacer valer aunque existan, porque no es ella la demandada y porque las excepciones personales sólo puede oponerlas el que las tiene.

¿Dónde está la ley, la inícua ley que bárbaramente borre todas estas garantías de audiencia en juicio ejecutivo, en vía de apremio, que sin distinción concede el derecho á todo hombre en cuyos bienes se pretende hacer efectiva una ac-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

ción judicial? ¿Dónde está la incompatibilidad entre ese derecho de defensa personal y la cosa juzgada del art. 124.

Concluyamos, pues, sentando como cánones de justicia universal, de justicia natural, de justicia formulada en preceptos inequívocos, claros, categóricos de la ley: que el gerente no es representante de los socios, ni de su patrimonio privado, ni de las responsabilidades solidarias, que para el caso de insolvencia de los bienes sociales, consigna la ley: que tampoco es representante de los mismos socios en virtud del mandato que se supone implica la solidaridad de los deudores, pues el gerente obra en nombre y sólo en nombre de la sociedad y no hay solidaridad entre la sociedad y los socios, sino al contrario, éstos son deudores *subsidiarios* respecto de la sociedad; y por último, que no se opone á que las sentencias dictadas *contra* la sociedad sean la cosa juzgada para con los socios, el que éstos deben ser oídos en juicio cuando los acreedores ejerciten la acción de cosa juzgada, no contra la sociedad, sino contra los socios, contra su patrimonio privado.

VI

EL INCIDENTE DE NULIDAD.

Asombro, verdadero asombro y aún escándalo ha llevado á mi espíritu el que haya podido dictarse un fallo que no solamente viola los preceptos inequívocos de ley expresa, sino que acude á esa violación para sancionar un atentado mayor, para conculcar la más sagrada de las garantías, la garantía de derecho natural, la garantía de audiencia y defensa en juicio reconocida como inviolable en todos los derechos de todos los pueblos; garantía que si no estuviera protegida por los preceptos judiciarios que se han violado, lo está por el derecho constitucional, por el derecho público, por

la tradición, por la doctrina, por las enseñanzas universales de la ciencia. Garantía en una palabra, que si leyes secundarias y de pormenor dejaran en la atmósfera de la duda, exigiría que esas leyes se interpretasen siempre en el sentido de conservarla incólume, pues toda la ley debe interpretarse en el sentido de la razón, del derecho natural, y no en el sentido del atentado, de la iniquidad, del desprecio de dogmas primordiales de toda la legislación.

¿Qué cosa más sencilla ante las leyes de enjuiciamiento que la inteligencia clara y recta, y la sincera aplicación de los preceptos dictados para hacer efectiva esa garantía? ¿Qué cosa más sencilla y lógica y justa que la aplicación de los arts. 176 y 97 del Código de Procedimientos, cuya inteligencia se reduce á un sencillísimo silogismo?

«La jurisdicción que legitimamente ha conocido de un «asunto está facultada para llevar á efecto su sentencia y pa«ra *resolver los incidentes* que se promuevan en *su ejecución* «(art. 176); es así que es un *incidente* relativo á la ejecución «de sentencia el incidente de nulidad establecido por el ar«tículo 97 para el caso de falta de citación y notificación, lue«go el Juez que trate de *ejecutar* la sentencia dictada sin esa «citación ó notificación, tiene *jurisdicción ó está facultado* pa«ra conocer de ese incidente y resolverlo.»

Este sencillo silogismo cuyos términos ó premisas son dos preceptos literales de la ley; este sencillo silogismo que es simplemente la exacta, inmediata y ajustadísima aplicación de esos dos preceptos, bastaría para condenar todo sofisma y para rechazar toda argumentación que tuviese por objeto hacer nugatorios esos preceptos inequívocos, aún tratándose de su aplicación á casos en que se versaran únicamente cuestiones de pormenor. Pero cuando se trata ¡Señores Magistrados! cuando se trata de falsificar esos preceptos, de adulterarlos, de mutilarlos, de interpretarlos, si se quiere, no para buscar en su interpretación un medio de conciliar dere-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

chos en conflicto ó atenuar sus consecuencias irracionales, sino precisamente se busca lo contrario, es decir, una interpretación de esos preceptos con el único propósito de sancionar una iniquidad, con el fin de obtener el resultado de hacer nugatorio un dogma claro y sacrosanto de derecho, con el propósito de privar de la garantía de defensa á un litigante; cuando este es el criterio que sirve para interpretar esos preceptos, no hay, no puede haber conciencia sana que no rechace y condene semejante interpretación. Aun en el caso de que ellos sólo forzadamente sirvieran para hacer efectiva esa garantía; aun en el caso de que la deficiencia de las leyes judiciarias ó su oscuridad no previeran expresamente la forma en que un hombre debe estar protegido en su derecho natural de defensa; aun en ese caso la justicia natural, el sentimiento innato de justicia, la santidad y trascendencia de ese derecho de defensa exigirían no sólo que se interpretasen esos preceptos en el sentido de conservar esa garantía y no en el sentido de violarla, sino que á falta de otros preceptos y aun cuando ellos fuesen poco aplicables, se acudiese á ellos para salvar á todo trance la incolumidad de tan sagrado derecho, de dogma tan fundamental en toda legislación.

Todo Juez honrado buscará siempre la interpretación de las leyes secundarias que favorezcan los principios fundamentales de la justicia natural, y no la inteligencia que sirva para conculcar esos principios y privar al hombre de derechos indiscutibles, como el derecho de defensa. ¿Por qué, pues, el auto apelado en vez de inclinarse á entender los preceptos del Código de Procedimientos eu el sentido de conservar la garantía de audiencia y defensa, ha procurado, haciendo esfuerzos de lógica ó sofisma, entenderlos en el sentido contrario. No se explica un espíritu honrado ese prurito de hostilidad al derecho natural; pero ya que es necesario restituir á esos preceptos su significado natural y su enlace

directo con la garantía de defensa judicial, procuraremos llevar hasta la evidencia la legalidad del incidente promovido, refutando los sofismas del auto del inferior.

Ese incidente procede: primero, porque está amparado por los términos literales de la ley; segundo, porque está amparado por el espíritu y tradición de la ley; y tercero, porque él es el *único* recurso que tenía D. Clemente Manuel para reclamar la violación de una garantía de derecho natural y derecho positivo universal.

La ley no distingue y donde la ley no distingue la interpretación no puede introducir distinciones arbitrarias; y son arbitrarias las que no se fundan en la intención clara é inequívoca de la ley que no quizo extender sus preceptos á casos en que su aplicación resulta absurda y contradictoria con otros preceptos más fundamentales de la misma ley.

La ley al autorizar el incidente de nulidad de lo actuado por falta de notificación en forma, no distingue entre el tiempo anterior á la sentencia que se dicte en el juicio en que se haya causado esa nulidad y el tiempo posterior á dicha sentencia; no dice que ese incidente *solamente* procede antes de pronunciarse la sentencia y no después de pronunciada; no consigna esa distinción ó esa limitación. La ley es absoluta; ella dice sin restricción alguna: «*la parte agraviada* (por no «haber sido notificada *en forma*) *podrá promover ante el «mismo juez que conoce del negocio el respectivo incidente so«bre declaración de nulidad de lo actuado.*» Si la ley no distingue ¿cuál será el motivo racional para introducir una distinción que no existe en el texto expreso de la ley?

El art. 97, se dice, supone que el Juez *conoce* aun del juicio en que se promueve el incidente de nulidad, y como en el juicio ejecutivo seguido por Ebrard contra la sociedad *Donadieu* se promovió el incidente después de haberse pronunciado sentencia ejecutoria, no había juicio de que *conociese* el Juez, había cesado su jurisdicción, no es posible un *incidente*

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

cuando no hay juicio *principal*, cuando no hay tramitación, cuando no existe juicio pendiente; y por lo mismo del espíritu del art. 97 y de la palabra *conozca* que aun para conceder ese recurso, se deduce que deben *distinguirse* los períodos en que se promueva el incidente y que no es admisible cuando se promueve después de ejecutoriada una sentencia, porque entonces no *conoce* el Juez de juicio alguno.

Este es en sustancia y parafraseado en diversas formas gramaticales é ideológicas el argumento que se hace valer por el auto apelado y por la parte contraria para impedir que prospere el derecho concedido por el art. 97. ¿Pero se necesita mucho esfuerzo para destruir esa palabrería sofística á cuyo amparo se pretende privar á un indefenso del ejercicio de un derecho en el caso precisamente en que el derecho que dá el art. 97 es el *único* medio que tiene ese indefenso para defenderse en juicio, en el caso en que ese artículo es la salvaguardia única de la garantía de audiencia y defensa, en el caso en que clama la justicia natural por la necesidad de que exista un recurso que si no existiera en el art. 97 debía suplirse por la doctrina y la jurisprudencia? ¡Que no *conoce* el Juez de ningún juicio, que no hay juicio, que no hay nada principal y por lo mismo no puede haber incidentes sin principal! ¡Cuánta logomaquía, cuánto embrollo de frases y palabras, cuánto desprecio de la *realidad* de los *hechos*.

¿Pues qué en la ejecución de una sentencia no hay *incidentes*, aunque esa sentencia se haya dictado? ¿Pues qué el Juez carece de jurisdicción para ejecutar la sentencia y resolver todos los *incidentes* relativos á su ejecución? ¿Pues que no *conoce* el Juez y *conoce* con plena jurisdicción según el texto expreso del art. 196 de todas las cuestiones é *incidentes* que surjan con motivo de la ejecución de la sentencia? ¿Pues qué todos los trámites de ejecución no son *juicio*, no constituyen un procedimiento *judicial*, no son el mismo juicio *principal*, su desarrollo definitivo? ¿Pues qué la ley no fija

expresamente como trámites sustanciales, *principales de todo* juicio la demanda, la contestación, las pruebas, los alegatos, la *vía de apremio*; la *ejecución* de la *sentencia*: y si esa *ejecución* y esa *via de apremio* son trámites *principales* de todo juicio regulados por la ley como partes integrantes de todo juicio, puede decirse seriamente que no hay juicio *principal*, que no hay *trámites principales*, que no hay procedimientos *principales* en la ejecución de una sentencia? Y si existen trámites, procedimientos *principales* regulados, y previstos, y fijados con precisión por la ley, pueden existir *incidentes* de esos trámites *principales*, incidentes previstos en su *generalidad* por la ley al ordenar que el Juez que conozca de la ejecución de una sentencia tiene facultades para resolver *todos* los *incidentes* relativos á su ejecución esto es, todos los incidentes que como *marcha directa* de su ejecución no están regulados en la vía de apremio. ¿No dice categóricamente el art. 190 que las cuestiones de tercería son siempre *incidentales* del juicio que las motiva, y no puede promoverse una tercería aun después de ejecutoriada una sentencia sin que haya absurdo en que el mismo Juez revoque esa sentencia en la parte que mandó rematar los bienes del tercer opositor? ¿No estamos viendo día á día, no hemos visto durante siglos que se promueven no uno, sino multitud de *incidentes* al ejecutarse las sentencias sin que á ningún Juez se le haya venido á las mientes la peregrina ocurrencia de que no puede conocer de ese *incidente*, porque no hay juicio principal? Y cuenta que esos incidentes que se promueven y han promovido siempre sin que nadie haya dudado de su legalidad se refieren ó pueden referirse directamente al *fondo* de la sentencia, se refieren ó pueden referirse á liquidaciones de daños y perjuicios, á si estos ó aquellos bienes están comprendidos en el fallo, á si X ó Z, herederos nombrados en el fallo están ó no comprendidos en ese fallo, á si ha cambiado la personalidad ó el carácter de los litigantes, á si el cesiona-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

rio conserva ó no sus derechos de cesionario, en una palabra, á toda clase de cuestiones que pueden surgir sobre la *justicia y legalidad* en la ejecución de una sentencia, por razón de las cosas, de las personas, de los cálculos, de los dictámenes periciales, etc. que pueden influir en la justicia y legalidad de su ejecución.

Dejemos, pues, el argumento puramente verbal y pueril de que no habiendo juicio principal, no puede haber incidentes; y pasemos á reflexiones más serias. Se dice que no es posible aceptar que un Juez revoque su propio fallo, fallo ejecutoriado, por la curva del incidente de nulidad, porque los Jueces no pueden revocar sus fallos definitivos. Con este argumento se sale de la esfera de las frivolidades verbales y se entra á la región de razonamientos *ab absurdum* haciéndose una interpretación restrictiva del art. 97 que puede formularse categóricamente en los términos siguientes: «Aunque «el art. 97 no limita la facultad de promover el incidente de «nulidad al período anterior á la fecha de la sentencia definitiva, debe suponerse esa limitación, porque otros preceptos «de la ley prohiben á los Jueces revocar sus propios fallos y «el incidente de nulidad conduciría á que revocase el Juez su «propio fallo.»

No refutaremos este subterfugio de interpretación restrictiva diciendo que la colisión entre dos preceptos opuestos, uno que prohibe á los Jueces *revocar* sus fallos y otro que los autoriza para *nulificarlos* debe resolverse más bien en el sentido de que prevalezca aquella interpretación que deja intactos dogmas y garantías fundamentales de derecho natural y universal como son los de defensa judicial, que en el sentido de que esos dogmas y garantías queden vulnerados y despreciados, pues cualquier espíritu sano y recto preferiría la primer solución. No; esta no será nuestra respuesta; y aunque ella es racional y decisiva, profundizaremos más el problema, lo colocaremos en terreno más llano, en el terreno de

leyes expresas que han previsto el caso en otra forma y han preferido á todo expediente de trámite la incolumidad de aquella garantía. ¿Qué es lo que pasa en una tercería de dominio ó preferencia que también es un incidente? (art. 176, Código de Procedimientos). Pues lo que pasa es que el Juez ha dictado una sentencia que dice textualmente: «es de pro«cederse al remate de los bienes embargados para pagar *con «ellos* la deuda reclamada en este juicio,» es decir, se falla en sentencia definitiva y ejecutoriada *que esos bienes están afectos á esa deuda;* y sin embargo, el *mismo* Juez que ha dictado esa sentencia ejecutoria, ese mismo Juez al fallar favorablemente una tercería de dominio *incidental*, revoca, nulifica su propio fallo decidiendo que esos bienes *no están afectos á esa deuda y no deben ser rematados*, sin que sea obstáculo para ello el que la sentencia dictada en el juicio *principal*, (que todavía existe á pesar de estar fallado y puede tener *incidentes)* esté ejecutoriada y no puedan los jueces revocar sus propias sentencias.

Un Juez ejecuta en vía de apremio una sentencia no sólo dictada por él, sino confirmada por ejecutoria del Tribunal respectivo, y en virtud de la cual fué condenada Petra á pagar á Antonio diez mil pesos. Al estarse ejecutando esa sentencia promueve el marido de Petra un incidente de nulidad justificando que antes y durante el juicio y en la actualidad su mujer está casada legítimamente y ha comparecido en todo el juicio sin su licencia y aun de acuerdo con el actor para burlar la autoridad marital. El Juez abre á prueba el incidente, se justifica el matrimonio, la falta de licencia marital para litigar, el fraude ó colisión del actor con la esposa; y notoriamente declara nulo lo actuado por no haber sido citado, ni oído el *representante* legítimo de la mujer condenada en juicio; es decir, que el mismo juez revoca, nulifica su propio fallo confirmado por el Tribunal respectivo, á

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

pesar de estar prohibido que los Jueces revoquen sus propios fallos.

Pueden multiplicarse los ejemplos, los casos idénticos á los mencionados en que los Jueces nulifiquen ó revoquen sus propios fallos, sin que sea un obstáculo el principio legal y jurídico de que los Jueces no pueden revocar sus propios fallos, porque ese principio no tiene precisamente aplicación cuando se trata de nulificar un juicio, cuando lo que se hace no es realmente revocar, variar, cambiar las decisiones de un fallo, sino tener en cuenta un elemento no decidido en ese fallo, un hecho no discutido ni fallado, el hecho en que consiste la nulidad del juicio, hecho que discutido por primera vez al promoverse el incidente de nulidad, no ha podido ser juzgado, ni fallado en la sentencia definitiva. Y basta por lo mismo esta consideración, basta que ese hecho no haya sido juzgado, ni fallado; basta que la ley acepte toda clase de incidentes aun en la vía de apremio, para que el Juez que conoce de esta vía de apremio tenga plena jurisdicción para decidir si existe ó no la nulidad que se invoca y para que caiga por tierra el argumento de interpretación restrictiva fundado en que los Jueces no pueden revocar sus propios fallos; pues la verdad es que no pueden revocar los hechos y puntos jurídicos que fueron juzgados y decididos, pero sí pueden revocar los hechos y puntos jurídicos que *no habiendo sido materia del juicio* no puede decirse que han sido fallados en la sentencia que decidió lo debatido en ese juicio.

Nos encontramos, pues, con que la letra del art. 97 autoriza el incidente de nulidad promovido, y con que su espíritu deducido de lo que textualmente preceptúan otros artículos y de lo que forzosamente exige la lógica del procedimiento judicial en otros casos, lejos de repugnar la oportunidad de ese incidente, lo sanciona, consagra y autoriza sin que sea obstáculo para su procedencia el que los Jueces tengan que nulificar indirectamente sus propios fallos. Pero no es solamente el texto de estos preceptos y la lógica y marcha natural del procedimiento los que condenan la interpretación restrictiva que se quisiera dar arbitrariamente al art. 97, es también la tradición jurídica, son los antecedentes de ese precepto, son los reclamos de principios superiores á toda ley positiva los que no sólo condenan esa necia interpretación, sino que resueltamente imponen la necesidad de que debe entenderse como un precepto absoluto que proteje la garantía de audiencia y defensa judiciales; que tiene por objeto el hacer efectiva esta garantía sea cual fuere la forma, el procedimiento, los trámites y el tiempo en que ha sido violada; que es la válvula de seguridad para todo litigante indefenso, para todo caso imprevisto en que las tortuosidades y chicanas y trámites judiciales disfrazan bajo el aparato del sofisma la violación real y efectiva de aquella garantía.

Efectivamente, y aprovechando esta exposición para contestar un sofisma de palabras inventado á última hora ¿qué se quiere decir con esa distinción entre *incidente y acción incidental?* ¿De qué ley está tomada esa sutileza? La ley da derecho para reclamar la nulidad de lo actuado sin citación en forma; ese derecho se ejercita en los términos establecidos por el art. 97; ese derecho en ejercicio ¿se llama *incidente*, ó se llama *acción incidental?* Ignoro cómo se le quiera llamar; pero lo que debemos saber é inquirir no es el nombre que se le dé, que esto poco importa, sino simplemente si el art. 97, bajo cualquier nomenclatura que se invente, autoriza ó no al condenado en juicio ni audiencia á invocarlo para pedir la nulidad aun después de fallado el pleito. Esta es la cuestión, llamando como se quiera al derecho que se ejercita fundado en ese artículo; y si se decide en sentido afirmativo, bien puede llamarse á ese derecho incidente, acción accidental ó como se quiera.

¿Cuáles son los antecedentes de ese art. 97? Esto es lo que vamos á ver.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

La nulidad de una sentencia por falta de citación, podía entablarse *sólo* como acción directa ó acompañada de apelación. (Covarrubias, Vansio, Altimaí, Scacia etc., citados por el Conde de la Cañada pág. 219). Como acción directa se promovía ante el mismo Juez que dictara la sentencia cuya nulidad se pedía; y esta acción es la que se ha convertido en *incidente de nulidad* en nuestro derecho moderno, como se demuestra con sólo leer la fórmula del escrito que trae el Conde de la Cañada. N. En tales autos digo: "que por sen-"tencia dada y pronunciada el 10 del presente mes se sirvió "vd. declarar y mandar tal cosa, y hablando con la debida "moderación contiene *dicha sentencia notoria nulidad* y es de "ningún valor ni efecto, porque se dió sin *previa citación de las "partes*. Por todo lo cual suplico á vd. se sirva declarar y es "timar por nula de ningún valor, ni efecto dicha sentencia "y *reponiendo* y *supliendo* los *defectos* que van indicados pro-"veer y determinar en esta causa conforme á las pretensiones "de mi parte."

Esa acción de nulidad, hoy *incidente*, por falta de citación formal, se promovía, pues, según la legislación española no sólo ante el mismo Juez que dictó sentencia *definitiva* con el vicio de falta de citación, sino precisamente *después de dictada* esa sentencia y para el efecto de que el Juez la *nulificara respecto de la persona no citada legalmente. Contigit aliquando, quod* ☞ *postquam sententia* definitiva lata est ☜ *adversus eam agitur per viam nullitatis, et si appareat nullam esse,* ☞ *Judex qui eam protulit; retractare debet,* ☜ dice Paz, tomo I part. I temp. 12 núm. 8 y Acevedo en la ley 2 título 19 libro 4 núm. 4, 2 y 3; Vancio *De nulit* tít. 3º núm. 8, Altimari *De nulit* parte 2 recib. 3, todos unánimes enseñan que la nulidad por falta de citación que es de derecho natural *se puede tratar ante el mismo Juez que dió la sentencia ó bien ante su superior por vía de agravio.*

Bajo el imperio de estas prácticas y de estas disposiciones vino el derecho moderno y se dictaron las leyes de las Cortes Españolas de 9 de Octubre de 1812 y 24 de Marzo de 1813, la primera sobre Administración de Justicia y e salgunda sobre la responsabilidad de funcionarios, estableciéndose en la una los tribunales que debían conocer del recurso de nulidad y en las fracciones 11 y 12 del art. 1º de la otra, el término y forma en que debía tratarse la nulidad de las sentencias. Ajustándose á estas reformas las leyes de 23 de Marzo de 1837 (art. 141) y de 4 de Mayo de 1857 en sus artículos 83 á 90, establecieron el recurso de nulidad, siendo uno de los motivos principales de ésta la falta de emplazamiento en tiempo y forma; pero determinaron que sólo prosperase ese recurso contra sentencias ejecutorias.

En este período de la legislación y estando vigentes como estaban, aunque sólo parcialmente derogadas unas por otras las Leyes de Partida y Nueva y Novísima Recopilación cuyos comentarios y aplicaciones hemos consignado, y las de las cortes y las mexicanas en todo lo referente á la nulidad de sentencias y procedimientos que deberían emplearse para obtener la declaración de nulidad; en este período y á consecuencia de este embrollo de leyes inspiradas en diversos sistemas judiciarios, surgió la controversia de si el recurso de nulidad derogó ó no las leyes antiguas que establecían el procedimiento para pedir la nulidad por vía de acción ó excepción ante el mismo juez que dictó la sentencia nula. Esas controversias quedaron indecisas y se registran en los anales de nuestro foro varias decisiones en que se admitió el procedimiento de reclamación de nulidad por vía de acción ó de excepción ante el mismo juez que dictó el fallo nulo, fundándose esa jurisprudencia en que el recurso de nulidad no derogó las leyes que establecieron las acciones ó excepciones de nulidad, y en que precisamente el art. 85 de la ley de 4 de Mayo de 1837, previendo el caso de que el recurso de nulidad fuera ineficaz para conservar la primera y más im-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

portante de las garantías judiciarias, la previa citación, ordena: "que aunque no se haya interpuesto el recurso de nu-"lidad, los que no han litigado ó no han sido legítimamente, "representados, podrán pretender por vía de excepción que "la sentencia no les perjudique."

En tal estado de jurisprudencia, vino el Código de Procedimientos Civiles de 15 de Agosto de 1872, que creando el recurso de casación y refundiendo en él la nulidad por vicio en el procedimiento, reprodujo en su art. 1,600 lo prevenido en el art. 85 de la ley de 4 de Mayo ya citada y al amparo de ese precepto pudo reclamarse y siguió reclamándose la nulidad de una sentencia por falta de citación ante el mismo Juez que había pronunciado la sentencia, objeto de esa reclamación, la cual revestía, como era forzoso, el carácter *de incidente.*

El Código de 1872 fué reformado por el de 15 de Septiembre de 1880 y entonces por la primera vez fué suprimido el precepto importantísimo del art. 85 de la ley de 4 de Mayo y el 1,600 del Código de Procedimientos de 1872, preceptos que eran la única salvaguardia de la garantía de audiencia judicial, supuesta la reglamentación sacramental y limitada del recurso de casación que sólo contra determinadas sentencias concedía el derecho de reclamar la nulidad, siendo así que no sólo en ellas, sino en otras excluidas del recurso de casación podía haberse violado el dogma sacratísimo de la previa citación. ¿A qué criterios, á qué sistema judiciario obedeció la supresión de ese precepto, escudo único en multitud de casos de la garantía mencionada? Doloroso es decirlo; pero esa supresión fué efecto de consideraciones puramente líricas, y me atrevo á afirmalo así no sólo por la exposición oficial de motivos de esa supresión, sino porque casualmente yo hablé con el Sr. Lic. Lozano, autor de ella, objetándola, y pude medir la ruindad de sus fundamentos. La exposición de motivos nos dice en el núm. 467:—"Igual-

"mente se suprimieron los arts. 1,599, 1,600 y 1,601, el pri-"mero por contener un precepto inútil, el segundo, porque "sin necesidad de consignarlo la ley, ya se sabe que la sen-"tencia daña ó aprovecha á los que *han litigado,* de manera "que para los que *han intervenido* en el *juicio* ☞ *es res inter* "*alios acta;* y el tercero, porque de la misma manera es ob-"vio que los que no han sido ☞ *legalmente representa-*"*dos* ☜ en el juicio son tan extraños como si de ningún "modo hubieran intervenido." En vano objetaba yo al Sr. Lozano que precisamente porque son ciertas estas verdades debía conservarse el artículo suprimido; aquél jurisconsulto replicaba que esas verdades son principios eternos de derecho y de jurisprudencia universal, que no necesitan consignarse, pues si existiese un Juez tan arbitrario que violase la garantía de previa citación, su sentencia no sería sentencia, sino sería la nada jurídica.

Pero como á pesar de ese lirismo de razonamientos existieron y pueden existir jueces que violen la garantía de citación previa, como el recurso de casación no cubre todas las brechas por donde puede cometerse ese atentado, como es un hecho indiscutible que puede darse una sentencia sin previa citación en juicios cuyo interés es de menos de cien pesos, en interdictos, en fallos definitivos de primera instancia, en juicios universales ó también disfrazándose esa violación bajo una forma embozada como en el presente caso; y como para todos estos es ineficaz é impotente el recurso de casación, el problema de saber cómo debía defenderse y conservarse esa garantía en casos no amparados por el recurso de casación, volvió á presentarse de nuevo al tratarse de reformar el Código de 1880 y redactarse el vigente de 15 de Marzo de 1884.

Y entonces se conoció la imprudencia é imprevisión con que fué suprimido el art. 1,600 ya citado del primitivo Código, y en lugar de ese artículo y creyendo que era un me

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

dio más amplio, franco y expedito, y sobre todo lógico, de impedir la violación de la garantía de citación, y audiencia judiciales, el pedir la nulidad de lo actuado que el formular excepciones, se redactó el art. 197 de nuestro Código vigente para llenar y con ventaja y mayor facilidad, el propósito de los arts. 85 de la ley de 4 de Mayo de 1857 y 1600 del primer Código de Procedimientos de 1872. En lugar de esos preceptos, cuya imprudente supresión en el Código de 1880 se hizo sentir desde luego; en lugar de esos preceptos que textualmente decían que "en *todos los casos*, aunque no hayan interpuesto el recurso de nulidad los que no han litigado ó no *han sino legítimamente representados*, podrán por *vía de excepción* pretender que la sentencia no les *perjudique*;" en lugar de esos preceptes que vinieron á sustituir la acción antigua de nulidad ante el mismo Juez que sentenció en juicio; en lugar de ellos se redactó el art. 197 de nuestro actual Código, que en su fácil y libérrima comprensión abarca y cubre todos los casos en que se viola y sea cual fuere la forma en que se viole la garantía de prévia citación y audiencia.

Este artículo, pues, heredero de todas las formas, procedimientos y recursos inventados para conservar incólume la garantía expresada; ese precepto que ha cristalizado en sencillísimo procedimiento la manera de hacer efectiva esa garantía; ese artículo cuya justicia y precedentes jurídicos hemos seguido paso á paso para comprender su verdadero alcance y legítimo sentido, ese precepto es la salvaguardia única que existe en nuestra ley de enjuiciamiento para impedir la violación de la más sagrada de las garantías judiciales en todos los casos en que ella no está protegida por el recurso de casación; en todos los casos en que la iniquidad y la chicana se envuelvan en fórmulas y trámites tan embozados que hacen imposible hasta ese recurso.

Esta es la historia, estos son los antecedentes, esta es la filiación jurídica, este es el espíritu, este es el sentido del artículo 97; esta es la razón por que si su letra no se presta á la interpretación restrictiva que se le quiere dar, menos se prestan á esa mutilación judaica su espíritu, sus precedentes, sus motivos.

En los juicios verbales de menor cuantía puede violarse la garantía de previa citación ¿cómo remediar ese atentado no procediendo el recurso de casación? En los interdictos tampoco cabe este recurso ¿cómo impedir que un fallo á título de proteger la posesión sea el primero en despojar por el simple hecho de no citar al litigante? Un juez condena á una mujer casada no representada por su marido *declarando la misma sentencia* que está bien representada sin la licencia marital ¿cómo evitar esa violación de la ley, en perjuicio del marido á quien no se citó, urdiendo el consentimiento de la mujer para dejar ejecutoriar la sentencia de *1ª instancia*? Un juez condena á X, padre de Z, embargando el usufructo de su hijo mayor de edad y *declarando en el mismo fallo* (que el padre deja ejecutoriar en *1ª instancia*) que los bienes de su hijo deben pagar la deuda del padre, porque es responsable de esa deuda ¿cómo evitar ese atentado de condenar al hijo sin oirlo, cuando no se puede interponer el recurso de casación por tratarse de sentencia de 1ª instancia?

Pueden multiplicarse los casos en que el sofisma, la chicana, la iniquidad se envuelven en fórmulas tales que hagan imposible el recurso de casación, á pesar de que se ha violado la garantía de prévia citación; siendo el más común de esos ardides el que, como en nuestro caso, se atribuya á X una representación *legal* que la ley no le dá, involucrando así, con refinada malicia, una cuestión de fondo y una cuestión de procedimiento, para embrollar y hacer imposible la vía de casación.

A todas esas chicanas, á todos esos tortuosos ardides, á todas esas iniquidades responde con su absolutismo sagrado el art. 97 de nuestro Código de Procedimientos.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

VIOLACION DE LA GARANTIA DE PREVIA CITACION

¡Señores Magistrados! las fórmulas gramaticales se pierden en la bruma de logomaquias ininteligibles; las componendas casuisticas se oscurecen en las tinieblas de círculos viciosos que giran en eternos espirales sin salir de su estéril inmovilidad, ni nivelar la naturaleza íntima de las cosas; pero lo que si ilumina esa naturaleza es la realidad de los hechos, esa realidad ante la que las pueriles disputas gramaticales tienen que estrellarse, como se estrellan las ilusiones del utopista ante los tristes desegaños de la vida.

Y esa realidad, la realidad de los hechos, sea cual fuere la fórmula verbal que los exprese, esa realidad es la que voy á presentar ante vuestra conciencia honrada.

La realidad es que las leyes y las instituciones humanas, la justicia natural y la justicia positiva, las necesidades y objeto de la convivencia social y de sus condiciones *naturales* han consagrado esta ley de clarísima inteligencia: *nadie puede ser juzgado ni sentenciado sin previa citación y audiencia porque todo hombre tiene derecho de defenderse, de defender su patrimonio, porque si no se defiende, si se le priva de audiencia se le roba, y las autoridades serían, no protectoras del derecho, sino agentes de despojo y de iniquidad.*

Esta garantía de previa citación y audiencia, es por lo mismo una *realidad*, un *hecho* que todo el mundo puede comprender en su objeto y en su importancia. Otro hecho real y positivo es que D. Clemente Manuel no fue citado, no fue oído en el juicio en que se le condenó á él *formalmente*, á él en sus bienes *particulares* ó extrasociales, á él cuya hacienda particular de Acocotla fue embargada y mandada rematar. Podrán inventarse muchas palabras y mucho tecnicismo

jurídico para forjar una audiencia y citacionas ficticias; pero la realidad, el *hecho real y positivo* es que en los juicios ejecutivos el término fatal para defenderse oponiendo excepciones y pidiendo pruebas es de tres días (art. 1,396 y 1,404 del Código de comercio); el *hecho real y posiitvo* es que al embargarse al ejecutado debe notificársele citándole para que dentro de esos tres días *fatales* se defienda alegando excepciones y pidiendo pruebas; el hecho real y positivo es que se embargaron bienes *particulares*, *extrasociales* de D. Clemente Manuel, es decir, que contra él contra sus bienes, *dirijió su acción ejecutiva* el actor y que á pesar de eso no se le notificó que tenía, que le corrían tres días fatales para defenderse; el hecho real y positivo es que *nueve días* despues de practicado el embargo, cuando ya habían pasado los *tres días* para poder defenderse, cuando la notificación de esos tres días se hizo unicamente al socio liquidador representante de la sociedad y no á Clemente Manuel, nueve días después de pasados los tres fatales, fué cuando se notificó á Clemente Manuel ¿que cosa? ¿que tenía tres días para oponerse? no, se le notificó sencillamente dijera si aceptaba el encargo de depositario de su hacienda embargada; pero respecto de los tres días fatales ni se le notificó, ni podía notificársele, por la sencillísima razón de que ya habían pasado, de que ya se había tenido como suficiente la notificación hecha al gerente de la sociedad, de que éste no había opuesto excepciones, de que no habiéndolas opuesto se procedió con arreglo al artículo 1,404 del Código citado, esto es, se dió por pasado el término de tres días, y por perdido el derecho que debía oponerse en ese término y se citó para sentencia de remate; el hecho *real y efectivo* es que en virtud de esa combinación tan ingeniosa como diabólica é inmoral se demandó á la sociedad, que es una persona moral y un patrimonio distinto de la persona y patrimonio del socio, y se embargó al socio confundiendo así la ley sustantiva con la adjetiva, la respon-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

sabilidad de un socio con la forma en que debe ser demandado *ese socio*, para después al amparo de esa confusión intencional sostener desatinadamente que el gerente representa al socio y que éste fué citado, cuando *realmente* no fué citado porque el gerente no es su mandatario; el *hecho real y efectivo* es que ese socio *no fué citado* para el juicio cuando contra él *personalmente* ejercitaba el acreedor social su acción, puesto que pidió se embargaran sus bienes particulares, no por ignorancia de que no eran sociales, sino por considerarlos obligados y por lo mismo *obligado el socio* á pagar la cantidad demandada, el hecho positivo es que dirigiendo el acreedor su acción contra el socio, contra sus bienes, no fué citado ese socio y no pudo defenderse porque no se le consideró *como parte* para defenderse aunque realmente era parte, pues la parte embargada, la parte qee sufría en sus bienes particulares el *ejercicio de la acción ejecutiva.*

Estos son los hechos reales positivos, esta es la verdad innegable. El individuo *demandado* formalmente en sus bienes y sentenciado en su patrimonio no fué citado, no se le permitió defenderse. ¿Y podía defenderse él, probando excepciones que en nada destruyeran la cosa juzgada respecto de la sociedad? Notoriamente. La cosa juzgada respecto de la sociedad es que esta debe $63,000: pero respecto del socio ¿no podía este alegar, dejando intacta la cosa juzgada, no podía alegar que entre él, entre ese socio particular y el acreedor social había relaciones jurídicas *personales*, relaciones entre los *dos* (no con la sociedad) en cuya virtud se había extinguido ó modificado respecto de ellos *personalmente* el crédito ó derecho del acreedor social? ¿No podía D. Clemente Manuel *alegar* y *probar* que el acreedor D. Eduardo Ebrard había consentido al separarse el primero de la sociedad librarlo de las responsabilidades sociales; que había aceptado un arreglo particular con Clemente Manuel para el pago de esa deuda, que le había concedido plazo, que había

entre ellos compesación de deudas, que había consentido en que se dividiera la solidaridad del crédito entre los diversos socios? ¿No podía alegar y probar estas y otras excepciones y defensas *personales* de Clemente Manuel para con Ebrard y en cuya virtud respecto de Clemente Manuel (no respecto de la sociedad) se hubiere extinguido, variado ó modificado el crédito que se reclamaba? ¿No puede un socio celebrar arreglos particulares con el acreedor de una sociedad, arreglos que solo á ellos afecten, sin alterar las responsabilidades sociales; no puede haber entre un socio y un acreedor social relaciones jurídicas personales (independientes de las de la sociedad), que alteren ó modifiquen la obligación solidaria del socio respecto del acreedor? Pues si todo esto puede existir y si todo esto implica, hace posible la modificación y aun extinción de la obligación solidaria de un socio respecto de un acreedor social ¿cómo no ha de tener derecho ese socio para alegar esas modificaciones, esa extinción de su obligación solidaria respecto del acreedor? ¿Cómo no ha de tener derecho de defenderse, de ser oido, de ser citado cuando ese acreedor, haciendo á un lado esas modificaciones, esas relaciones personales entre él y el socio va á demandarlo, va á ejecutarlo judicialmente?

Todo esto revela, y demuestra, y hace visible la diferencia que hay entre que un acreedor social ejercite sus derechos contra la sociedad y los ejercite contra su socio; la sociedad tiene sus defensas y el socio tiene ó puede tener las suyas personales y extrasociales; el acreedor social puede demandar á la sociedad ó puede demandar al socio, pero si demanda á éste, debe citarlo, debe llamarlo á juicio, *porque lo demanda*, porque debe ser citado el que es demandado, porque el que sea solidariamente obligado no destruye el hecho positivo de que sea el demandado, el formalmente demandado, el elegido por el acreedor para ejercitar su derecho. El acreedor tiene derecho de elegir al socio deudor á

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

quien exigirá al pago; pero no tiene derecho para exigir el pago sin demandarlo formalmente, sencillamente porque *no hay ley que exceptúe ese caso de la regla absoluta que todo demandado debe ser citado y oído en juicio.*

Así, D. Eduardo Ebrard pudo demandar ejecutivamente, ejercer la acción ejecutiva contra la *sociedad* ó contra el socio Clemente Manuel; pero desde el momento en que no se limitó á ejercer su acción ejecutiva, esto es, á *demandar ejecutivamente* á la sociedad, sino que demandó en lo personal, en sus bienes personales á Clemente Manuel, desde ese momento debió citarlo á juicio y no limitarse á citar á la sociedad. En el momento en que Ebrard designó para el secuestro á efecto de pagarse una deuda social, no solamente los bienes sociales, sino que designó los bienes personales de Clemente Manuel y los designó (no por ignorancia como comunmente sucede en los casos que surge tercería) sino en *el concepto y por el motivo legal de que el socio responde de las deudas sociales;* en el momento en que así ejercitaba ese secuestro, con el propósito y fin de hacer efectivo *bienes particulares de Clemente Manuel* la deuda social: en ese momento ya no demandaba simplemente á la sociedad, demandaba personalmente al socio; hacía uso del derecho que le dá la ley, es cierto, de exigir de los socios el pago de las deudas sociales, pero derecho que tiene que ejercitarse contra el socio que es *persona* distinta de la sociedad; en ese momento en que ejercitaba su *acción ejecutiva contra Don Clemente Manuel* por el hecho de embargar sus bienes á título de estar obligado *personalmente* el dueño de esos bienes á pagar la deuda, en ese momento debió pedir que se le llamase á juicio debió pedir que la notificación del auto del encargado la notificación del auto que dá tres días fatales para defenderse en juicio ejecutivo, esa notificación, que es la citación cordinal del juicio ejecutivo, esa notificación se hiciese al gerente de la sociedad *y personalmente* á D. Clemente Manuel: á la primera porque demandaba á la sociedad embargándole ó no bienes; y al segundo, porque también demandaba al segundo, porque ejercía su acción ejecutiva contra dos distintas personas, contra la sociedad y contra el socio.

Personas distintas cada una de las cuales tiene ó puede tener respecto del acreedor ejecutante derechos y defensas distintas. No lo hizo así, no citó á juicio más que á una de esas personas, dejó que con el gerente social se siguiera todo el juicio para venir después á sostener desatinada maliciosa y maquiavélicamente que ese socio embargado y *demandado* personalmente, demandado en vía ejecutiva con el hecho de embargar esos bienes (no por error) sino *en el concepto* de que el socio y sus bienes debían pagar el crédito demandado, ese socio estaba representado en sus responsabilidades, derechos, defensas y excepciones *personales* por el gerente, por el mandatario de persona distinta, por el mandatario que no lo es solamente de la sociedad!!!

Resultado y liquidación jurídica y *positiva* de este maquiavelismo judiciario: que *D. Clemente Manuel demandado personalmente en vía ejecutiva no ha sido citado y ha quedado indefenso.*

Ante ese resultado inegable, real, efectivo, que se está palpando ¿qué dice, qué sofimas inventa el auto apelado? Pues dice cosas muy curiosas; unas que ya están refutadas; y otras que paso á contestar enérgicamente. *Dice* que el auto apelado no *dice lo* que *dice;* dice que D. Clemente Manuel no es *parte* en el juicio para promover el incidente de nulidad. ¿Con que no es parte en un juicio aquél que no solamente es condenado en sus bienes, sabiéndose que son sus bienes, sino que además se le *declara explícitamente* en el fallo definitivo *deudor obligado* á pagar las deudas *objeto* del *juicio?* Pues si no es *parte* en un juicio el mismo condenado en *él directamente* ¿quién Dios mio? será *parte* en concepto del Juez que dictó ese auto? ¿Qué entenderá ese Juez por

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

parte en un juicio? Dejemos por casi inútiles las doctrinas de todos los autores (vease Curia Filip. Mexicana núm. 573 pág. 170. Sala Mexicano tomo II, pág. 214 y las leyes y autores que cita entre ellos la primera tít. 7 P. 7 y 14 tít. 11 Nov. Recop.) que enseñan que deben citarse á juicio no sólo los deudores principales, sino todos aquellos á quienes deba perjudicar ó el actor quiere que perjudique la sentencia; dejemos esas doctrinas, porque en nuestro caso el socio Manuel no fué el secundario, sino el *principalmente* demandado al embargarle sus bienes á *título y en concepto* de que estaba obligado á pagar con sus bienes; dejemos las citas y veamos la realidad de las cosas. «Acaso es *una verdad* (dice «con timidez impropia de un fallo, el auto apelado) que D. «Clemente Manuel no es parte, porque la responsabilidad «que representa es por su *carácter de socio.*» ¿Con que el hecho de ser uno responsable *personalmente* con sus bienes, el hecho de ser ejecutado en ellos, condenado en ellos no basta á que sea parte cuando la causa de esa responsabilidad *personal* es un contrato de sociedad? ¿La causa jurídica de una obligación civil por la cual el obligado es demandado en juicio y condenado, esa causa influye en que no *sea parte* en ese juicio el obligado, demandado y condenado? Nosotros sabíamos con arreglo á toda ley y toda razón que la causa que motiva una obligación deducida en juicio sea cual fuere esa causa, contrato, cuasicontrato, delito, cuasidelito etc., en nada puede alterar el que deba ser *citado* á juicio el obligado por esa causa, á quien se le reclama el cumplimiento de la obligación sea cual fuere la causa legal porque está obligado; esto lo sabíamos y esto lo sabe todo el mundo; pero ahora nos encontramos con que lo que determina la necesidad de citación judicial y el que uno sea *parte*, no es el que uno sea el personalmente *demandado* con sus bienes, sino la *causa* de la obligación. ¿Y cuáles serán las causas civiles, además del contrato de sociedad, que siendo fuentes de

obligación, sin embargo quitan al obligado el derecho de ser oido? Curioso sería oir discurrir al autor del auto apelado. Francamente, su razonamiento es desatinado, y si con él lo que se quiso expresar no fué ese desatino sino dar otra forma desgraciada á la supuesta representación del gerente, resulta que se dijo lo que no se quiso decir, se dijo un desatino impasable.

¡No es parte el ejecutado en juicio ejecutivo, no es parte aquel contra quien se ejercita la acción ejecutiva, pues la acción ejecutiva se ejercita por medio del embargo; no es parte Don Clemente Manuel cuando el actor lo embarga y ejecuta, pide que sea embargado y ejecutado por considerarlo *responsable personalmente* en virtud de la responsabilidad solidaria que tiene como socio al pago de las deudas sociales, y á pesar de que por ese hecho dirige contra él la acción ejecutiva, á pesar de eso se nos dice que no es parte!

¿Y quién ha sido el condenado, personalmente condenado en juicio ejecutivo? ¿La sociedad, sólo la sociedad? No, señor; ha sido condenado directa, formal y sustancialmente Don Clemente Manuel. En el fallo dictado con fecha 20 de Noviembre de 1896; en ese fallo se consigna, lo que es cierto, que el actor designó para el embargo la *hacienda de Acocotla* expresando *que era propiedad de D. Clemente Manuel* y en *este concepto pedía su embargo*, es decir, ejercitaba su acción personalmente contra ese socio. En ese fallo, después de consignar este hecho que va á servir de base á la parte resolutiva, continúa fundando esa parte resolutiva no en motivos, ni consideraciones respecto de la sociedad y de la legitimidad de la deuda social, sino en motivos encaminados *exclusiva y directamente* á demostrar que el socio Clemente Manuel es responsable personalmente del crédito demandado. «Hay que examinar primeramente, dice, los efectos ju«rídicos de la demanda *respecto de los demás socios,*» y después de varias consideraciones sobre las fechas y efectos le-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

gales de la escrituras sociales respecto de la responsabilidad personal de Clemente Manuel, aceptando que ni por su fecha ni por su falta de registro, ni por la falta de las publicaciones por la prensa de la disolución social puede considerarse á *dicho socio* libre de la obligación de pagar el *crédito demandado*, continúa diciendo: "que es *indiscutible* la responsabilidad solidaria *de Don Clemente Manuel* para el cumplimiento "de la obligación contraída á favor del Sr. Ebrard (esto es, "á favor del crédito *objeto* del juicio): que ocurriendo á las "ordenanzas de Bilbao se viene también en conocimiento de "que es lógico concluir que cuando los *procedimientos de un "embargo* se encaminaban contra *los intereses de Don Clemente Manuel* se ha estado al abrigo de las disposiciones legales que se han citado; y que por estos fundamentos debía "fallar y falla que es de hacerse *trance y remate de los bienes "embargados* (es decir, de la hacienda de Acocotla, de Clemente Manuel) para con su producto (el producto de esa "hacienda) hacer pago al acreedor del capital y réditos."

Esto dice, esto consigna, esto resuelve la sentencia, y sin embargo se sostiene que no fué parte en el juicio, en que tal sentencia se dicta, Don Clemente Manuel! Esa sentencia no se ocupa desde su primero hasta su 7º y último considerando, no se ocupa para nada de discutir ó fundar la legalidad de la deuda social, ni la obligación de la sociedad á pagarle; se *ocupa única y exclusivamente* de fundar y resolver que Don Clemente Manuel está obligado á pagar con sus bienes particulares el crédito demandado; se ocupa única y exclusivamente de fundar que la hacienda de Acocotla debe ser rematada para pagar el crédito social demandado; se ocupa, pues, única y exclusivamente de fundar y decidir la responsabilidad *personal* de Don Clemente Manuel, y después de ocuparse única y exclusivamente de eso, concluye *condenando* á Don Clemente Manuel, *sí*, á Don Clemente Manuel, para que *en virtud* de esos fundamentos que se ocupan únicamente de la responsabilidad *personal* de Clemente Manuel, se decide que la *hacienda de Acocotla, de la propiedad de Manuel, debe ser rematada para pagar con su precio el crédito demandado.*

¿Y todavía *no es parte* Don Clemente Manuel?[1] La sentencia no se ocupa de otra cosa sino de fundar la responsabilidad de Don Clemente Manuel para condenarlo en virtud de esos fundamentos, para declararlo obligado á pagar un crédito social, para condenarlo á que su hacienda de Acocotla sea rematada *en virtud de ser el deudor obligado personalmente á pagar* el crédito objeto del juicio ¿y no es *parte* Don Clemente Manuel, el condenado, el embargado, el ejecutado, el sentenciado, á que sus bienes sean rematados? ¿No es parte? Pues probablemente yo estoy loco, porque me es imposible concebir que no sea parte, la parte condenada en juicio! Si la sentencia se hubiera limitado á condenar á la sociedad al pago del crédito reclamado, sería concebible ese absurdo; pero cuando ella para nada se ocupa de fundar la legalidad del crédito social, que nadie discute, y sólo se ocupa de fundar la responsabilidad *personal* de Clemente Manuel para concluir condenándolo á que pague mediante el remate de sus bienes particulares ¿cómo puede decirse sin insesantez que no es parte?

Yo supongo que todos los argumentos y pruebas que hace valer la sentencia para fundar la responsabilidad *personal* de D. Clemente Manuel son buenas y legales; pero ¿no tenía derecho á discutirlas, impugnarlas, contradecirlas con otras pruebas D. Clemente Manuel puesto que se hacen valer para condenarlo *personalmente*? ¿No pudo, quizá, no solamente cambiar el criterio judicial con sus defensas jurídicas, sino rendir pruebas, multitud de pruebas para destruir ó modifi-

1 Y ¡oh ceguedad y obsecación del sofisma! el auto apelado que también sostiene que Clemente Manuel no es "parte," se ocupa sin embargo de fundar la obligación que tiene de pagar la deuda demandada en juicio. ¿No es "parte" y se resuelve su responsabilidad en el juicio en que no es parte?

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

car las del actor, únicas que tuvo en cuenta la sentencia las que el actor y sólo él presentó para demostrar la responsabilidad de Clemente Manuel, para fundar su derecho contra él y no contra la sociedad? Pues si todo esto pudo suceder y no sucedió porque no fué citado, ni oido el condenado, si quedó indefenso por falta de pruebas aquel precisamente contra quien se presentaron y se hacen valer esas pruebas que no pudo combatir ¿como negar que estuvo indefenso? ¿Y como llegar al colmo de la ironía y del sarcasmo diciendo que no es parte porque se le ha juzgado indefenso, esto es dando por razón de que no es parte el que atentatoriamente no se le ha considerado como parte debiendo considerarlo en ese carácter, dando por razón de la violación la misma violación de la garantía de defensas?

Pero el Señor Clemente Manuel presentó un escrito, se dice, manifestando que no aceptaba el cargo de depositario de la finca de su propiedad que se le embargó y que se reservaba todos sus derechos, y al presentar este escrito se dió por notificado del juicio y perdió todo derecho para pedir la nulidad de lo actuado con al art. 98 del Código.

Lo que llama la atención en este argumento es el ahinco por buscar una chicana para enmascarar un atentado. Un Juez honrado cuando ve que el fondo de los hechos se resuelve en una iniquidad lejos de apurar el ingenio para justificarla, procura interpretar las leyes en el sentido de la justicia. El presente caso por ejemplo, á falta de otra sutileza para consumar el atentado se ocurre al art. 98 pero, ¿cuando se dió por *sabedor* D. Clemente Manuel en juicio y de *que* se dió por sabedor? Se dió por sabedor del nombramiento de depositario que fué lo que se le notificó, y no otra cosa; y se dió por sabedor de ese nombramiento y no de otra cosa, pues otra cosa no se le hizo saber, *nueve días* después de que se había dictado el auto del encargado, es decir, *seis días* después de haber pasado los *tres días fatales* que el código

señala para poner excepciones. Pasado ese término, habiendo cuidado el actor de que pasase ese termino fatal, se hizo saber el nombramiento de depositario, y el juicio siguió su curso, se citó para sentencia de remate dándose por pasado el término para poner excepciones. ¿Que importa, pues que D. Clemente Manuel haya presentado el escrito rehusando el cargo de depositario, si en ese escrito no se dió por sabedor de notificación que no se le hacía, ni aunque se hubiera dado por sabedor de ella podría serle útil, puesto que se daba por sabedor de un plazo que ya había pasado, se daba por sabedor de que tenía tres días para defenderse cuando ya esos tres días habían concluido? Pero sobre todo, el artículo 98 se refiere á notificaciones de autos que se mandan notificar al litigante, y precisamente el actor Ebrard no quizo que el auto del encargado se notificase á Manuel, quizo considerar como *parte* únicamente al gerènte de la sociedad con él se entendió la notificación, á él se le concedió el término de tres días y solo á él, D. Clemente Manuel, parte en el fondo, fué el eliminado, fué considerado como extraño. Este es el sistema maquiavélico seguido por el actor y semejante sistema no puede ser consagrado, sin ultraje á la justicia, pues la justicia no es un juego de chicanas y villanías, que acepte ese doblez indigno: sostener que no es parte D. Clemente Manuel á pesar de que se le condena en juicio, y sostener en ese mismo juicio que sí fué parte y como tal le es aplicable el art. 98 del código de procedimientos civiles.

Si el actor Ebrard consideraba y sostenía que los documentos, sentencias y deficiencias de avisos y demás motivos que alega la sentencia dictada en su favor para condenar personalmente á Manuel; si consideraba que todos esos antecedentes le daban derecho para perseguir judicialmente á Manuel, para embargarlo, para demandarlo ejecutivamente, para pedirle el pago del crédito social, pudo ciertamente demandarlo y embargarlo, pero debió citarlo á juicio, debió pedir

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

una vez designada la hacienda de Acocotla para el secuestro debió pedir que se le notificase el término del encargado, que se le hacía saber que tenía tres días para oponer excepciones, que contra él ejercitaba la acción que por la solidaridad social le daba la ley, acción distinta de la acción contra la sociedad, contra la persona moral de la sociedad. No lo hizo así, no lo citó, no quizo que fuese llamado á juicio, no quizo que fuera oido el directamente demandado y condenado; pues no puede ahora aprovecharse de una sentencia nula, ni impedir que la ley inflexible nulifique procedimientos que intencionalmente se han seguido en forma embozada y traidora para impedir la audiencia, citaciones y notificaciones al mismo contra quien se pretende ejecutar la sentencia.

¡Señores Magistrados! en un caso análogo al presente emitía yo estos conceptos que ahora reproduzco, no ciertamente porque la vanidad me ciegue al grado de creerme autoridad científica, sino porque ellos revelarán la sinceridad de mis actuales razonamientos.

«Aún bajo el imperio de Gobiernos despóticos ó absolu-«tos, la garantía de la audiencia y defensa judiciales fué un «dogma reconocido y sancionado por los mismos monarcas. «Bien conocidas son en nuestra historia jurídica las leyes 7, «8, 9, 10, y 11 título 4º, lib. 3 de la N. R. y las del título 34 «lib. 11 de la Nov., que llegaron hasta autorizar la des-«obediencia al mismo Soberano siempre que éste sin au-«diencia y defensa de los interesados dictase disposiciones «que les molesten en sus posesiones, derechos ó personas: «si pareciere (dice una de esas leyes) carta nuestra por don-«de mandaremos dar la posesión que uno tenga á otro y la «tal carta *fuere* sin *audiencia*, que sea obedecida y *no cum-«plida*. Esa misma legislación prevee el caso en que no la «autoridad soberana ó la política, sino la misma autoridad «judicial sea la que viole la garantía de *audiencia* y *defensa* «previas, y ordena que si algunos fueran despojados de sus «bienes por un Alcalde, que los *otros alcaldes* de la ciudad á «dondo acaeciere, restituyan á la parte despojada hasta ter-«cero día y pasado tercero día que los restituyan los oficia-«les del Consejo.»

«Mas explícitas, aunque más enérgicas, son las leyes 12 «y 22, tit. 22 Partida 3ª, que enérgicamente proclaman el «principio tutelar de que «*non ha fuerza de juicio* toda pala-«bra ó mandamiento que el juez haga en los pleitos: ca por «ende decimos, que si alguno se querellare al juez diciéndo-«le que le debe otra alguna cosa, *si el juzgado le diere carta «contra aquel de quien querella que le dé*, ó le pague ó *le en-«tregue aquello que demandaba, non emplazandole primera-«mente* nin sabiendo la verdad, así como de suso mostramos; «tal *mandamiento como ese, non vale, nin ha* fuerza de juicio.» «Comentando esta ley el notable glosador Gregorio López y «concordándola con el derecho canónico para demostrar su «universalidad aún para el poder absoluto de los papas, en-«seña que: *mandatum Papæ factum sine causæ cognitione in «causa quæ riquirit sententiam* et causæ cognitionem, *non ha-«bet vim sententiæ neque valet.*» y agrega que contra semejan-«tes *atentados* (que asi los llama el derecho. Vease Escriche) procede el beneficio de restitución *in integrum*.

«Todos los autores proclaman unánimes que la defensa «y audiencia prévias, para ser *molestado y sentenciado en jui-«cio*, son de derecho natural y que su omisión nulifica el juicio «y el procedimiento.»

«De necesidad absoluta en el juicio, las llama Escriche «(v. citación) pues el mismo Dios, dice, nos quizo dar ejem-«plo de esta necesidad cuando en el paraíso después de ha-«ber pecado Adán, le citó para que diese razón de su con-«ducta á pesar de que sabía que no podía darla.»

Sería tarea interminable aglomerar leyes y doctrinas que proclaman enérgica y unánimemente la garantía, como ahora decimos, de la audiencia y defensa judiciales; pero sí

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

es conducente observar que esa garantía fué elevada al rango «de dogma político desde que se conoció ó adoptó el régimen constitucional, desde que se sustituyó al poder absoluto de los Monarcas el sistema de poderes públicos constitucionalmente limitados. No es que anteriormente aquella garantía no existiese, pues ya la hemos visto consagrada en el derecho antiguo; pero no tenía ese carácter dogmático, preciso, definido y aun fundamental en la constitución política que le dieron las modernas instituciones. El art. 254 de la Constitución de 1812 sanciona la garantía de la observancia de las leyes que arreglen el juicio en lo civil. El art. 37 de la 5ª de las *Siete Leyes* constitucionales previno que la falta de observancia en los *trámites* substanciales de un proceso produce su *nulidad en lo civil*. Igual nulidad pronuncia categóricamente el art. 182 de las bases de organización política de 12 de Junio de 1843. El estatuto orgánico de 15 de Mayo de 1856, precedente inmediato de nuestra actual Constitución y que está inspirado en el mismo ideal y en las mismas tendencias de ésta, consagra bajo el rubro de garantías individuales, en el art. 61, el principio de que la nulidad por falta de observancia de alguna de las solemnidades que las leyes señalan como esenciales de los juicios, implica la reposición del proceso y la responsabilidad del Juez.»

No serán, ciertamente, los Señores Magistrados de la 4ª Sala los que vengan á renegar de esta secular tradición de nuestro derecho; no serán ellos, cuando la misma *turbia* jurisprudencia de la Corte Federal (como la ha llamado el Sr. Magistrado Novoa) no se atrevió á hacerlo en las ejecutorias de amparo que en este negocio pronunció y las cuales con el rubor de la vergüenza sólo se atreven á decir que *prima facie* pudo decretarse el embargo. Pero en el incidente de nulidad promovido no se trata de apreciar y resolver *prima facie* la violación de la garantía de audiencia, sino de resolver el punto secunda y tercia y *última facie*, definitivamente y á fondo.

CONCLUSIONES.

1ª El gerente de una sociedad colectiva representa judicial y extrajudicialmente la persona moral de la sociedad o el patrimonio social distinto de la persona y patrimonio de los socios; pero no representa á éstos, porque *no hay ley* que le dé tal representación.

2ª La persona moral de la sociedad no es deudora *solidaria* ☞ *con* ☜ los socios, pues aunque éstos *entre sí* son solidariamente responsables por las deudas sociales, su responsabilidad es *subsidiaria*, *indirecta* y *personal* para el caso de insolvencia de los bienes sociales, sin que esa responsabilidad altere la distinción que hay entre la persona social y las personas de los socios.

3ª En consecuencia, una es la acción directa que tienen los acreedores sociales contra la sociedad y otra la que tienen contra las personas de los socios; y cuando reclaman á éstos el pago de las deudas sociales, deben demandarlos á ellos personalmente, porque respecto de sus responsabilidades personales no están representados por el gerente, no habiendo éste contratado sino en nombre de la sociedad y no siendo la sociedad *codeudora solidaria* con los socios.

4ª El texto del art. 97 del Código de Procedimientos Civiles no limita al período anterior al en que se dicte la sentencia, el derecho para pedir la nulidad de lo actuado, inclusa la sentencia, por falta de notificación en forma; y el espíritu, los precedentes jurídicos, la filosofía de ese precepto lejos de autorizar esa limitación exigen que ese artículo se entienda en el sentido amplio y franco de proteger todos los casos en que un litigante quede indefenso por falta de cita-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

es conducente observar que esa garantía fué elevada al rango «de dogma político desde que se conoció ó adoptó el régimen constitucional, desde que se sustituyó al poder absoluto de los Monarcas el sistema de poderes públicos constitucionalmente limitados. No es que anteriormente aquella garantía no existiese, pues ya la hemos visto consagrada en el derecho antiguo; pero no tenía ese carácter dogmático, preciso, definido y aun fundamental en la constitución política que le dieron las modernas instituciones. El art. 254 de la Constitución de 1812 sanciona la garantía de la observancia de las leyes que arreglen el juicio en lo civil. El art. 37 de la 5ª de las *Siete Leyes* constitucionales previno que la falta de observancia en los *trámites* substanciales de un proceso produce su *nulidad en lo civil*. Igual nulidad pronuncia categóricamente el art. 182 de las bases de organización política de 12 de Junio de 1843. El estatuto orgánico de 15 de Mayo de 1856, precedente inmediato de nuestra actual Constitución y que está inspirado en el mismo ideal y en las mismas tendencias de ésta, consagra bajo el rubro de garantías individuales, en el art. 61, el principio de que la nulidad por falta de observancia de alguna de las solemnidades que las leyes señalan como esenciales de los juicios, implica la reposición del proceso y la responsabilidad del Juez.»

No serán, ciertamente, los Señores Magistrados de la 4ª Sala los que vengan á renegar de esta secular tradición de nuestro derecho; no serán ellos, cuando la misma *turbia* jurisprudencia de la Corte Federal (como la ha llamado el Sr. Magistrado Novoa) no se atrevió á hacerlo en las ejecutorias de amparo que en este negocio pronunció y las cuales con el rubor de la vergüenza sólo se atreven á decir que *prima facie* pudo decretarse el embargo. Pero en el incidente de nulidad promovido no se trata de apreciar y resolver *prima facie* la violación de la garantía de audiencia, sino de resolver el punto secunda y tercia y *última facie*, definitivamente y á fondo.

CONCLUSIONES.

1ª El gerente de una sociedad colectiva representa judicial y extrajudicialmente la persona moral de la sociedad o el patrimonio social distinto de la persona y patrimonio de los socios; pero no representa á éstos, porque *no hay ley* que le dé tal representación.

2ª La persona moral de la sociedad no es deudora *solidaria* ☞ *con* ☜ los socios, pues aunque éstos *entre sí* son solidariamente responsables por las deudas sociales, su responsabilidad es *subsidiaria*, *indirecta* y *personal* para el caso de insolvencia de los bienes sociales, sin que esa responsabilidad altere la distinción que hay entre la persona social y las personas de los socios.

3ª En consecuencia, una es la acción directa que tienen los acreedores sociales contra la sociedad y otra la que tienen contra las personas de los socios; y cuando reclaman á éstos el pago de las deudas sociales, deben demandarlos á ellos personalmente, porque respecto de sus responsabilidades personales no están representados por el gerente, no habiendo éste contratado sino en nombre de la sociedad y no siendo la sociedad *codeudora solidaria* con los socios.

4ª El texto del art. 97 del Código de Procedimientos Civiles no limita al período anterior al en que se dicte la sentencia, el derecho para pedir la nulidad de lo actuado, inclusa la sentencia, por falta de notificación en forma; y el espíritu, los precedentes jurídicos, la filosofía de ese precepto lejos de autorizar esa limitación exigen que ese artículo se entienda en el sentido amplio y franco de proteger todos los casos en que un litigante quede indefenso por falta de cita-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

ción sin poder defenderse ni aun por el recurso de casación porque mediante una mistificación ó manipulación cabalísti co judiciaria, se declara por un lado que D. Clemente Ma nuel *es parte* para que le perjudique la sentencia y se repute para él ejecutoriada en 1ª instancia; y por otro lado se declara que no es parte para interponer recurso, ni promover el incidente de nulidad.

5ª D. Clemente Manuel ha sido condenado y juzgado real y positivamente como parte en el juicio ejecutivo promovido por Ebrard contra la sociedad F. Donadieu y Comp., pues se embargaron bienes de dicho Manuel, se ocupó la sentencia única y exclusivamente de fundar la responsabilidad personal de Manuel y decidió por esos fundamentos que debían rematarse sus bienes para el pago del crédito demandado, esto es, se le condenó á ese pago; y á pesar de eso, se declarara que no es parte y se le deja indefenso, no habiéndosele citado á juicio, ni habiéndosele notificado en tiempo hábil, ni *directamente* el auto que concede tres días para oponer excepciones.

6ª Procede por lo mismo la nulidad de todo lo actuado.

México, Diciembre de 1897.

Lic. Jacinto Pallares.

Proyecto de reformas á algunos artículos Del Código Penal.

Cada día más y más se palpa la urgente necesidad que existe de que se dicten disposiciones dirigidas á aumentar la fuerza, la responsabilidad y el prestigio de la autoridad especialmente en lo que se refiere á la policía y á los agentes subalternos de ella, no solo para reprimir y castigar con la severidad que merece, la audacia escandalosa de los que atacan, hieren ó matan á los agentes subalternos, sino también para corregir y vencer la errónea idea y la absurda costumbre de las gentes de cierta clase, que por ser ó creerse de posición social superior, rehusan obedecer, resisten y aun ultrajan á los agentes de la autoridad.

La práctica y la observación que por más de seis años he venido haciendo como Agente del Ministerio Público en el ramo penal me han hecho fijar la atención en el asunto y me han llevado á la convicción de esta verdad: la insuficiencia é ineficacia de las penas que en la materia rigen conforme á nuestro Código Penal.

Para demostrarlo, basta referirse al hecho notorio de que crece enormemente el número de casos de ultrajes y violencias á la policía y que las reincidencias que se registran son incontables.

No bastan, pues, las penas tales como están establecidas

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

ción sin poder defenderse ni aun por el recurso de casación porque mediante una mistificación ó manipulación cabalísti co judiciaria, se declara por un lado que D. Clemente Ma nuel *es parte* para que le perjudique la sentencia y se repute para él ejecutoriada en 1ª instancia; y por otro lado se declara que no es parte para interponer recurso, ni promover el incidente de nulidad.

5ª D. Clemente Manuel ha sido condenado y juzgado real y positivamente como parte en el juicio ejecutivo promovido por Ebrard contra la sociedad F. Donadieu y Comp., pues se embargaron bienes de dicho Manuel, se ocupó la sentencia única y exclusivamente de fundar la responsabilidad personal de Manuel y decidió por esos fundamentos que debían rematarse sus bienes para el pago del crédito demandado, esto es, se le condenó á ese pago; y á pesar de eso, se declarara que no es parte y se le deja indefenso, no habiéndosele citado á juicio, ni habiéndosele notificado en tiempo hábil, ni *directamente* el auto que concede tres días para oponer excepciones.

6ª Procede por lo mismo la nulidad de todo lo actuado.

México, Diciembre de 1897.

Lic. Jacinto Pallares.

Proyecto de reformas á algunos artículos Del Código Penal.

Cada día más y más se palpa la urgente necesidad que existe de que se dicten disposiciones dirigidas á aumentar la fuerza, la responsabilidad y el prestigio de la autoridad especialmente en lo que se refiere á la policía y á los agentes subalternos de ella, no solo para reprimir y castigar con la severidad que merece, la audacia escandalosa de los que atacan, hieren ó matan á los agentes subalternos, sino también para corregir y vencer la errónea idea y la absurda costumbre de las gentes de cierta clase, que por ser ó creerse de posición social superior, rehusan obedecer, resisten y aun ultrajan á los agentes de la autoridad.

La práctica y la observación que por más de seis años he venido haciendo como Agente del Ministerio Público en el ramo penal me han hecho fijar la atención en el asunto y me han llevado á la convicción de esta verdad: la insuficiencia é ineficacia de las penas que en la materia rigen conforme á nuestro Código Penal.

Para demostrarlo, basta referirse al hecho notorio de que crece enormemente el número de casos de ultrajes y violencias á la policía y que las reincidencias que se registran son incontables.

No bastan, pues, las penas tales como están establecidas

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

para refrenar á los delincuentes y es preciso que la Ley despliegue mayor severidad, una vez que se trata de un género de delitos que directa y gravísimamente afectan al orden público.

Las penas que imponen los arts. 911, 912, 913, y 914 de dicho Código son á mi juicio las que deberían reformarse aumentándolas ó duplicándolas, porque aun así no serían excesivas, dada la gravedad de los delitos á que se refieren.

El art. 911 dice: »Se impondrá la pena de arresto de ocho días á tres meses, ó multa de 10 á 200 pesos, ó ambas, según las circunstancias, al que en los términos y con los requisitos que exige el art. 910 injurie al que manda una fuerza pública, á uno de sus agentes ó de la autoridad ó á cualquiera otra persona que tenga carácter público y no sea de las mencionadas en los artículos anteriores.»

Debería reformarse como sigue:

»Se impondrá la pena de arresto de quince días á seis meses, ó multa de 20 á 400 pesos, ó ambas, según las circunstancias al que etc.

Dice el 912: Cuando se ultraje á las personas de que se trata en los artículos que preceden, infiriéndoles uno ó más golpes simples, ó haciéndoles alguna otra violencia semejante, se impondrán al reo las penas siguientes: I Cuatro años de prisión, cuando se infieran al Presidente de la República. II Tres años de prisión cuando el ofendido sea alguna de las personas y en los casos de que habla el art. 910. III De seis meses de arresto á dos años de prisión en el caso del artículo. 911.»

Estas tres fracciones, se podrían reformar como sigue:

I Cinco años de prisión etc.
II Cuatro etc.
III De uno á tres años años etc.

En la misma forma y proporción las penas de las tres

fracciones del art. 913 deberían quedar reformados poniendo seis años en la fracción 1ª cuatro en la 2ª y tres en la 3ª.

Es de advertirse que esas dos fracciones terceras de estos dos arts. 912 y 913 son precisamente las de más frecuente aplicación y las que principalmente requieren la reforma, no sólo por la razón ya explicada del exceso de la criminalidad, sino también porque en los términos en que están concebidas en nuestro Código las disposiciones de dichas dos fracciones, resulta un absurdo, pues se dá el caso de que el delito de ultrajes infiriéndose *golpes simples* (delito menor) sea castigado hasta con dos años de prisión, mientras que el de ultrajes infiriendose *lesiones ó heridas* (delito mayor, no puede ser castigado más que con un año, pena que, aunque agregada á la que corresponde por la lesión no llega á dos años en el caso de la fracción 1ª del art. 527, y puede no llegar tampoco, si el juez lo quiere, en el de la fracción 2ª, de manera que sucede lo que se acaba de indicar, á saber, que al delito menor corresponde pena mayor, y al delito mayor, pena menor.

Para dejar el art. 914 en consonancia con los anteriores, basta poner 5 años, 2 y uno en las tres fracciones que le corresponden.

Paso á ocuparme del art. 918.

Este artículo estableció la circunstancia agravante de 4ª clase en el hecho de cometerse el delito públicamente ó en lugar público.

Nada hay que decir á este respecto. Tal disposición es excelente.

Pero ya que se ocupa el art. 918 citado de una agravante especial parece que está demandando una ampliación á todas luces importante y á mi juicio perfectamente adecuada.

En seguida del referido artículo y en calidad de incisos se podría poner lo siguiente.

»También ss tendrán como circunstancias agravantes de

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

4ª clase la de ser el inculpado persona educada y la de hallarse desempeñando un empleo ó cargo público.»

«Se entiende por persona educada, para los efectos de esta disposición, saber leer y escribir.»

Es igualmente agravante especial de 4ª clase en estos delitos el estado de ebriedad, siempre que el delincuente sea ebrio habitual, lo que en todo caso deberá investigarse.»

Verdad es que ya el Código tiene adoptadas en términos generales estas dos primeras circunstancias (art. 44 fracs. 6ª y 8ª;) pero en primer lugar, estando establecidas de un modo general para toda clase de delitos, rara vez se fijan en ellas los jueces y no las aplican; en segundo lugar, al decirse en el Código «persona instruida» y no «persona educada» no se cree aplicable la disposición sino á individuos sabios ó ilustrados, ó no se sabe cómo estimar el grado de instrucción del que deba ser responsable.

Por esto es, que determinando de una manera especial esas circunstancias y explicándose que para reputarse á un individuo «persona educada,» es bastante *que sepa leer y escribir*, resultará la disposición mucho más eficaz y más clara.

Por último, esas dos circunstancias, conforme al Código, (art. 44 citado,) son agravantes tan sólo de primera clase; y ahora, y para los delitos contra la autoridad, las reputamos agravantes de 4ª clase, esto es, de mucho mayor valor y fuerza para el efecto de agravar el delito y la pena, como tanto conviene en la materia de que tratamos

¿Por qué se dirá, se ha de considerar como persona *educada* á quien sólo sepa *leer* y *escribir*, y por que ha de bastar esto para reputar á un individuo más ó en mayor grado culpable de su delito?

Debemos no olvidar que estamos tratando de un delito particular.

Propiamente, no se podría definir persona *educada* á la que solamente sabe leer y escribir, ni menos *enteramente educada*. Pero aquí no nos ocupamos del rigor gramatical ni ideológico del concepto. En nuestra población se distinguen y marcan dos clases perfectamente: ó la gente no sabe leer ni escribir, y entonces se comprende que no ha recibido instrucción alguna, ó sabe leer y escribir y en este caso se infiere que ha estado en escuela, que ha tenido enseñanza, que es capaz de comprender mejor sus deberes sociales, que está en actitud de leer periódicos, libros, bandos y leyes.

Pues bien, entre estas dos clases de personas hay una grande diferencia en el sentido de la responsabilidad moral de sus actos, la cual justifica y es el fundamento de nuestra idea, es decir, el hombre enteramente ignorante que ofende á la autoridad ó á la policía, aunque es culpable, no lo es tanto como aquel que está en aptitud *de comprender toda la gravedad de su falta*, y que se halla, además, por las condiciodes de su cultura en el deber de dar ejemplo á los que por su desgracia carecen de ella.

El que se halla sirviendo un empleo ó cargo público forma una comunión con el cuerpo de la administración; está en el deber especial de respetar y obedecer la ley; es mayor su delito y más escandaloso ofendiendo á la autoridad. Luego esa circunstancia, debe ser también una agravante especial y extraordinaria.

Pasemos á tratar de la circunstancia de la ebriedad como agravante de 4ª clase en los delitos contra la autoridad.

¿Cómo, si el Código Penal vigente tiene establecido que el hecho de hallarse en estado de ebriedad un delincuente al tiempo de cometer el delito, es una circunstancia *atenuante* y aun *exculpante*, como, repito, se puede ahora establecer que en ciertos delitos (los de ofensas á la autoridad) haya de ser ese mismo hecho una circunstancia enteramente contraria nada menos que *una agravante de 4ª clase?*

Aparentemente ó á primera vista, parece que habría una contradicción; pero en realidad no la hay. Admite el Códi-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

go como atenuante la ebriedad incompleta, accidental ó involuntaria y como exculpante, la ebriedad completa, que priva enteramente de la razón «*si no es habitual.*»

Estas disposiciones en su fondo son justas, pues obedecen á una filosofía enteramente recta. Pero en la práctica y respecto de las costumbres actuales dado además el exceso escandaloso y repugnante á que ha llegado el vicio de la embriaguez, resultan contraproducentes y altamente perjudiciales, por el abuso que se hace de ellas y á que se prestan. A lo menos, sería muy discutible su conveniencia. Sin embargo, no tratamos de atacarlas, ni de alterarlas en lo más mínimo en su sentido general.

Enhorabuena que se considere como circunstancia atenuante la embriaguez incompleta, que *realmente* sea involuntaria y que *propiamente* sea accidental; más esto no se opone á que se declare que no está en estas condiciones el ebrio habitual, y que para este, en determinado delito, esa circunstancia se convierte en agravante por su calidad de *habitual*, pues en este caso ni es involuntaria, ni mucho menos *accidental*, sino que constituye por sí sola una culpabilidad particular que notoriamente aumenta la culpa ó la responsabilidad y con toda justicia debe agravar el castigo.

El mismo Código lo expresa al hablar de esta circunstancia como exculpante, «Si no es habitual,» dice, y con esto queda salvada la contradicción.

Ahora bien, en los delitos contra la autoridad y violencias contra la policía, es enteramente la embriaguez la que los determina ó la que sirve de pretexto y de disculpa, habiéndose venido á un estado de cosas en que vive la policía en lucha perpetua con millares de ebrios indominables, estado intolerable y por demás vergonzoso en una sociedad culta. Por lo mismo, todo aquello que tienda á la reprobación y al anatema legal de ese vicio, es altamente conveniente.

Pero se necesita además que en los casos ocurrentes, no se deje, como hasta ahora sucede, sin investigarse la circunstancia referida para el efecto de que quede enteramente determinado en el proceso si el procesado es ó no ebrio habitual. Por esta razón hemos añadido «lo que en todo caso deberá investigarse.»

En relación con la misma materia, considero reformar el art. 1,002 del Código.

Dice este art.: «Cuando un funcionario público, agente ó comisionado del Gobierno ó de la policía, el ejecutor de un mandato, de la justicia, ó el que mande una fuerza pública, ejerciendo sus funciones ó con motivo de ellas, hiciere violencia á una persona, sin causa legítima; será castigado con la pena de arresto mayor, si no resultare daño al ofendido. —Cuando resulte, se aumentará un año de prisión á la pena correspondiente al daño, excepto el caso en que sea la capital; pues entonces se aplicará ésta sin agravación alguna.»

Por vía de reforma debe añadirse á este artículo lo siguiente:

«En los casos á que se refiere esta disposición, *se presume haberse obrado con causa legítima*, mientras no se pruebe lo contrario.»

El delito de que se trata es el de abuso de autoridad y continuamente está siendo motivo de dilatados y algunas veces absurdos procedimientos de los tribunales.

A cada rato se confunde ó se olvida la mente de la ley en esa prevención del referido art. 1,002, y además de que se procesa al agente de la autoridad por homicidio, lesiones etc., como en cualquiera otro caso de simple delito de esta especie, se procede desde luego contra él, suspendiéndole aprisionándole poniéndole incomunicado, declarándole en formal

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

prisión, y después, acusándole y llevándole hasta el caso de un veredicto ó una sentencia en que se declare que obró en defensa legítima ó en el ejercicio de un deber legal.

No debía ser así, ni es conveniente bajo todos aspectos.

El delito que en esos casos ejecuta ó comete un agente de la autoridad, podrá ser *secundariamente* el homicidio, lesiones etc., pero *primaria* y *principalmente* su delito es el de *abuso de autoridad* siempre que haya obrado *sin causa legítima.*

Así pues, el procedimiento judicial debía dirigirse primitiva y esencialmente á la investigación de si el agente que hizo violencia, obró ó no con causa ó motivo legítimo, esto es, si cometió ó no abuso de su autoridad, porque esto y sólo esto será lo que le constituya ó no delincuente, una vez que si obró con motivo legítimo, no habrá cometido delito, ni sido responsable de homicidio, lesiones etc., por mucho que haya causado muerte ó heridas. Otra cosa es; secundaria en el caso, el tomar en cuenta el *daño causado*, muerte, herida etc., cuando apareciendo el abuso de autoridad, deba computarse tal daño.

El gendarme Manuel Alva ha muerto hallándose procesado por homicidio y quedando vivo un auto de formal prisión en su contra. Este hecho resulta absurdo, cuando es notorio que dicho gendarme lejos de ser culpable, se manejó heroicamente costándole la vida el cumpliento de su deber.

Seáme permitido traer á colación las opiniones de algunos jurisconsultos.

Boitard (Droit Crim.) comentando el art. 186 del Código Penal francés de donde parece tomado el nuestro, supone el caso de violencia ejercida para llevar á cabo una detención á la que se opone resistencia y establece: que si el agente de la autoridad no ha excedido los límites de la fuerza que le era necesaria para el cumplimiento de su deber, ha obrado con motivo legítimo y en consecuencia las violencias

ejercidas no constituyen crimen ó delito. «El legislador entiende aquí por violencias punibles, todos los rigores empleados en los arrestos, detenciones ó ejecuciones que no están autorizados por la ley. En cuanto á la legitimidad de los motivos queda al juicio del juez; pero para que la condenación por causa de violencias sea legal, es preciso que declare que el funcionario ha obrado sin motivo legítimo porque es esta circunstancia la que constituye la criminalidad del hecho y en consecuencia es substancial.»

Ortolan (Droit pen. Edic. de 1855 etc. 466) dice:

Si el acto que por el perjuicio ocasionado está comprendido en la definición de crímen ó delito, estaba ordenado por la ley, y si el agente lo ha ejercido en todas las condiciones legalmente prescritas, este acto no sería punible. Cumplido en estado de razón y de libertad, le es imputable, pero imputable como una acción legal, que el agente tenía derecho y aún el deber de hacer; no hay aquí lugar ni á penalidad ni á daños y perjuicios.»

Chauveau y Helie en su Teoría del Codigo Penal francés, cap. 31. Abusos de autoridad § 883 enseñan: que es condición esencial y principal que «las violencias hayan sido cometidas sin causa legítima. La ley establece por esta disposición, un medio general de justificación en favor de los funcionarios que han ejecutado actos de violencia en ejercicio de sus funciones; *ella los ampara con la presunción de que entregándose á estos actos no han hecho más que cumplir con su deber* y obliga á la acusación á *probar* que ningun motivo legítimo ha podido justificarlos.»

Garraud en su obra Droit Penal tom: 3º § 310, ocupándose del art. 186, dice: «Si las violencias han sido cometidas por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, no son punibles, sino en las condiciones previstas por nuestro artículo, sin distinguir entre los golpes, las heridas y aún el homicidio voluntario y otras violencias más leves. La ra-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

zón es que toda violencia por grave que sea, ejercida por un agente de la autoridad, *se presume necesaria para llegar á la ejecución de la Ley.* Es preciso pues que cuando se lleva á un tribunal á un funcionario público por homicidio, golpes ó heridas, se demuestre desde luego que el hecho que sería ipso facto un crimen ó un delito si hubiera sido ejecutado por otra persona, no es crimen ni delito de parte del funcionario *sino porque haya sido ejecutado sin causa legítima.*

Dalloz C. pen. art. 186. § 22. "Los motivos legítimos que pueden ser invocados por los autores de las violencias enunciadas en el art. 186 *no tiene el carácter de simples excusas;* ellos constituyen hechos justificativos, es decir, *destructores de toda criminalidad.*

Como se vé, no pueden ser más terminantes ni más adecuadas estas explicaciones; Ellas demuestran que es ó debe ser una presunción legal, presunción juris, la de que el funcionario, el oficial de policía que comete violencias en el ejercicio de sus funciones ha obrado con motivo legítimo *mientras no esté demostrado lo contrario.*

Revestir de autoridad á un oficial de policía, proveerlo de armas, darle una misión de lucha y de fuerza, y luego, cuando del ejercicio de todos estos medios en el terreno en que se le ha puesto, resultan violencias, hacerlo resposable de éstas encarcelarlo y procesarlo, es inícuo y de fatales consecuencias, pues en semejantes condiciones nadie puede apetecer esa clase de funciones, ó en ellas, antes de comprometerse preferiría no cumplirlas aunque el orden público quede quebrantado ó la ley infringida. El desprestigio de la autoridad es entonces consiguiente pues los delincuentes se sentirán ufanos de ver al guardian de las leyes humillado y proscrito en vez de estar, como debería ser en esos casos, cubierto con el apoyo y la protección de la sociedad y de la justicia y representando serena y limpia la majestad de la ley.

Si pues esto es así, y si la presunción que pretendemos

establecer no es mas que una presunción *juris*, que no excluye ni impide la prueba en contrario, es fácil comprender que no nos lleva nuestro celo y nuestro interés por la policía hasta el extremo de pretenderque los agentes sean irresponsables ó que queden impúnes cuando abusan de sus facultades, se exceden en el ejercicio de ellas, cuando, en fin, delinquen propiamente hablando. Lo único á que aspiramos, por razones de justicia y de conveniencia pública, es á obtener estos dos efectos: 1º que no se encause á los agentes de la autoridad como á delincuentes comunes ni por delitos de homicidio, heridas, golpes etc. sino precisa y especialmente por abuso de autoridad, si bien se tome en cuenta secundariamente el daño causado: y 2º que el procedimiento judicial y la detención ó prisión no comiencen sino cuando el exceso y el abuso sean manifiestos ó lleguen á comprobarse.

Estos dos efectos quedarán obtenidos si se acepta en los términos propuestos la reforma del art. 1,002 del Código,

México, Octubre de 1897.

J. R. Bejarano.

UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Procedencia de la vía ejecutiva mercantil. Excepciones admisibles contra los pagarés.

Alegato presentado por el Sr. Lic. D. ANTONIO HORCASITAS ante el juzgado 1º lo Civil de la capital.

En nombre de la Sra. Javiera G. de Aguilera, en los autos del juicio ejecutivo mercantil que tiene promovido en contra de los Sres. J. J Moylan y Cª, respetuosamente pido se sirva fallar en definitiva, que ha procedido la vía ejecutiva; y en consecuencia, es de seguirse adelante hasta que se cubra á mí representada la cantidad que se reclama como suerte principal más las costas del juicio.

HECHOS.

«El Sr. Moylan tenía como dependiente en una negociación minera perteneciente á Chetla, á un Sr. D. Jacobo Harotain á quien facultó, en un principio, para tomar de la casa de D. Ramon Aguilera, los fondos necesarios para la negociación, girando á favor de este Señor y en contra de mi representado (habla el abogado de la parte demandada en su escrito de contestación); cuyos giros fueron cubiertos con toda oportunidad; pero como advirtiese Moylan que se giraba por cantidades muy superiores á la que se necesitaban para ese efecto, retiró sus facultades al Sr. Harotain y manifestó al Sr. Aguilera, al hacer el pago de los últimos giros lo ocurrido, advirtiéndole que á pesar de no tener fondos de

Harotain aceptaba aquellos; pero que no aceptaria cualquiera otro que se hiciera con posterioridad»; por el párrafo transcrito se vé que está probado, como aceptado por ambos litigantes, el hecho afirmado en nuestro libelo de demanda de que con motivo de relaciones comerciales sostenidas entre los Sres. J. J. Moylan y el Sr. Aguilera entregó éste, por cuenta de aquellos, varias cantidades al Sr. Harotain.

Queda igualmente probada la existencia de un contrato mercantil, de donde nació la obligación del Sr. Moylan de pagar al Sr. Aguilera la suma que la Señora mi poderdante, endosataria del pagaré, reclama á estos Señores. Agrega después el demandado que esa autorización dada á Harotain le fué retirada. Nosotros desconocemos ese hecho. La prueba de él incumbe al demandado.

Sigue diciendo el escrito de demanda, que: «coincidía con los anteriores hechos, el de que en virtud de las buenas relaciones mercantiles á que se ha referido, se comisionó al Sr Aguilera para que embarcase una cantidad de piedra mineral de antimonio, perteneciente á Moylan, con destino á Nueva York, por la vía del ferrocarril Interoceánico, verificándolo el Sr. Aguilera y recogiendo las guias que lo amparaban.»

Tanto en el primer párrafo transcrito como en este, el demandado lejos de negar la calidad de comerciante del Sr. Aguilera, la reconoce diciendo que autorizó á Harotain á tomar fondos de la casa del Sr. Aguilera y repitiendo ahora que se encontraban en buenas *relaciones comerciales*; no es pues, desde este momento, un hecho en espera de prueba la calidad de comerciantes de ambos contratantes.

Afirma, por último el demandado que el Sr. Aguilera manifestó que si no le aceptaba su giro pendiente, (prueba de que ya existía la obligación que hizo nacer el pagaré que reclamamos), no entregaba las guías, lo que era sumamente grave y de trascendentales consecuencias para el demandado.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

«El Sr. Moylan estaba en esta época en Ixtlahuaca é informado por uno de sus empleados, lo facultó para que propusiera al Sr. Aguilera que se otorgara un documento á tres meses de la fecha (el pagaré que reclama la Sra. Aguilera es á tres meses de la fecha) en que el principal obligado fuera Harotain y Moylan garantizara solamente el cumplimiento.» «Este empleado, preocupado por los perjuicios que estaba ocasionando la retención indebida de las guias, extendió el pagaré que obra en autos sin tener la representación legal de Moylan y convino con el Sr. Aguilera en que él entregaría dicho documento siempre que Aguilera pusiese á Moylan en aptitud de disponer del mineral, entregase las guías y unas cartas de Harotain, en que autorizaba á Moylan para pagar dicha cantidad con la parte que debía corresponderle al realizar el mineral.»

De estos hechos el primero no está ya á discusión ni puede estarlo en la forma en que se plantea por el demandado.

Si la firma no es de Moylan tuvo tiempo de expresarlo así en las diligencias preparatorias, que nada menos que para cerciorarse de la legitimidad de la firma, es para lo que se pone como requisito indispensable para que el documento sea reputado título ejecutivo. Si no se opuso, ni nada dijo el Abogado, que se presentó oponiendo toda clase de trabas para la prosecusión de las diligencias preparatorias, seria ó porque es de su puño y letra ó porque la reconoce como tal, pues no solo se puede reconocer la firma propia, sino también la puesta por nuestro mandato.

Con relación al segundo hecho, el que pretende hacer pasar como condicional este contrato, tendremos tiempo de ocuparnos de él extensamente en el transcurso de estos alegatos.

Queda fijado hasta ahora, que Moylan reconoció el pagaré que le entregó al Sr. D. Ramón Aguilera y que éste endosó á la Sra. Javiera G. de Aguilera, á quien tengo la honra de representar en este juicio.

En su nombre promoví las diligencias preparatorias que terminaron con el reconocimiento de la firma que cubre el pagaré, el que ya perfeccionado como título ejecutivo, me sirvió de base para la demanda en la forma de juicio sumario.

Este documento está redactado en la siguiente forma: «pagaré en esta Ciudad, á tres meses de la fecha (requisito previsto por la frac. 4ª del art. 546) y á la orden del Sr. Aguilera (frac. 5ª del mismo artículo) la suma de ($ 500. 00) quinientos pesos (frac. 3ª) valor recibido (frac· 7ª) México, Agosto 22 de 1897. (frac. 1ª) J. J. Moylan y Compañía. (frac. 2ª)»

La operación mercantil de que se deriva, sólo debe expresarse en aquellos documentos que no son extendidos por un comerciante á favor de otro, pero como en el caso, según lo llevamos demostrado, son comerciantes ambos otorgantes se ha llenado también el requisito de la fracción. 6ª

La parte demandada se opuso á la ejecución, proponiendo las siguientes excepciones: falsedad del contrato contenido en el título que es objeto de este juicio; intimidación y falta de personalidad y acción en el ejecutante.

Abierto el juicio á prueba, rendí por mi parte la testimonial, consistente en una carta y un telegrama, suscritos por J. J. Moylan y un certificado de la Administración Principal del Timbre, por el que se prueba que el Sr. Moylan es comerciante.

La parte demandada, hasta este momento no ha rendido ninguna; pero pasado el término de prueba propuso la de confesión agregando á su pliego de posición una serie de cartas que no pueden tomarse en consideración en contra de mi cliente, en primer lugar, porque no habiendo sido presentadas durante la dilación probatoria, son enteramente nulas

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

como lo dispone el art. 1,201 del Código de Comercio, que á la letra dice: «que las diligencias de prueba sólo podrán practicarse dentro del término probatorio, bajo pena de *nulidad* y responsabilidad del Juez.»

Y si la confesión se puede rendir en cualquier estado del juicio, de ésta hay que excluir todas las posiciones que impliquen reconocimiento de documentos; pues la prueba documental sólo es permitida en el caso del art. 1,387, que no es absolutamente el que nos ocupa.

En segundo lugar, los documentos privados sólo hacen prueba plena contra quien los reconoce y la Sra. Javiera G. de Aguilera, que es el actor en este juicio, no reconoce los que se presentan y no puede aplicarse el art. 451 del Código de Procedimientos, porque no habiendo sido legal su presentación como prueba, no ha tenido que objetarlo. Otra cosa podría sostenerse si se hubiera presentado en el término de prueba.

Quedan pues, como elementos de hecho plenamente probados para servir de base á la discusión, los siguientes puntos:

Primero: El Sr. Moylan autorizó al Sr. D. Ramon Aguilera para que proporcionase al Sr. Jacobo Harotain dinero á cuenta del Sr. Moylan.

Segundo: Como consecuencia de esta autorización del Sr. Aguilera hizo varios anticipos de dinero, por cuenta del Sr. Moylan y giraba en contra de éste por las mismas cantidades.

Tercero: Uno de estos giros, por cantidad de quinientos pesos, no fué aceptado y dió origen á varias dificultades que vino á zanjar el pagaré, entregado al Sr. Aguilera por un empleado del Sr. Moylan, á quien éste autorizó para que propusiera á aquel el otorgamiento del documento á tres meses de la fecha.

Cuarto: El pagaré ha sido reconocido por el ministerio

de la ley, en virtud de que el demandado, que opuso mil trabas á las diligencias preparatorias, no dijo nunca que no fuera legítimo tal documento.

EXCEPCIONES PROPUESTAS.

No hay, pues, para la discusión más elementos que los que quedan enunciados y podemos pasar á ocuparnos del estudio de las diferentes cuestiones, no sin hacer mención antes de como pretende fundar sus excepciones la parte demandada, quien se expresa en los siguientes términos:

«Se deduce de todo lo anterior, que el documento aludido, aunque afecta la forma de documento mercantil, carece por su posición, de los requisitos esenciales para la existencia del convenio á que se refiere el art. 546 del Código de Comercio, en sus fracciones II, VI VII. En el supuesto que haya recibido el Sr. Moylan cantidad ningunad el Sr. Aguilera, no ha habido operación ninguna mercantil de que se derive el documento, pues aun el convenio hecho á nombre de Moylan, sin personalidad legal, no era operación mercantil, puesto que no lo es el compromiso que se adquiere para evitar que alguien lo perjudique sin derecho. Mas aún, no hay un contrato civil, por que le faltan los primeros elementos, personalidad legal para verificarlo y objeto y materia lícita y aun el mútuo consentimiento, toda vez que el compromiso se obtuvo para evitar el perjuicio que se estaba causando y los peligros de perder mayor cantidad de contraer las responsabilidades por la falta de cumplimiento de otro contrato. Por último, dado caso de que hubiera contrato, no habiéndose llenado la condición ni cumplido por la otra parte, quedaba sin efecto. Está también supuesto el nombre y firma del responsable, como llevo dicho.»

«Los documentos viciados de estos defectos son *nulos* y

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

no pueden tener valor alguno, según los arts. 549 y 468 del Código de Comercio de acuerdo con todas las doctrinas y jurisprudencias establecidas, siendo una consecuencia de ello que no sean endosables válidamente ni puedan originar otra operación ninguna legítima.»

EXCEPCION DE FALSEDAD.

Contra un documento que trae aparejada ejecución, no pueden oponerse más excepciones que las expresamente permitidas por la ley. Por ejemplo contra las letras de cambio únicamente las que enumera el art. 535 del Código de Comercio y contra cualquier otro documento mercantil ejecutivo solo se pueden oponer las que marca y enumera el artículo 1,402 del mismo cuerpo de derecho.

Señala ese artículo en su primera fracción, la de falsedad del título ó del contrato contenido en él, y la parte demandada se recoge á ella para oponer una de sus excepciones.

Tiene dos partes aquel inciso primero, la falsedad del contrato contenido en el título, y segundo, la falsedad del mismo título.

El nuestro ha sido un pagaré reconocido judicialmente y tales documentos no contienen en si contrato ninguno. La ley lo dice: contienen la obligación de una persona de pagar á la orden de otra cierta cantidad. Esa obligación tiene que ser resultado de un contrato mercantil, de otra manera el pagaré no es mercantil. Pero él no contiene en sí contrato ninguno, se presume la existencia de alguno, prexistente ó coexistente, con su forma.

No se le puede, pues, oponer la excepción de falsedad en el sentido de la segunda parte de la fracción citada y cómo solamente en aquel sentido la ha propuesto, no necesita mayor desarrollo la réplica de esa excepción. Si la hubiera

propuesto en el primer sentido, tampoco tendríamos que hacer alegación ninguna ante la ilustrada atención de Ud. puesto que sería de la exclusiva competencia del Juez de lo criminal. El título falso implica el delito de falsedad y como tal no puede ser declarado sino por un Juez del ramo penal porque es el único que puede conocer de hechos delictuosos.

EXCEPCIONES DE NULIDAD.

En el empeño de proponer excepciones, se han opuesto las que la ley no permite. Se enumera la de nulidad y no encontramos tal excepción en el art. 1,403 del Código mercantil, que señala las únicas que pueden oponerse contra cualquier otro documento distinto de la sentencia ejecutoriada y carta de porte.

Pero suponiendo que, en los términos del art. 549, sea aplicable á los pagarés lo dispuesto por el art. 535 del mismo Código, vamos á estudiar el alcance de esta disposición legal y lo haremos refiriéndonos primero á la letra de cambio y haciendo después aplicaciones á los demás documentos endosables y especialmente á los pagarés.

«La letra de cambio ha dirijido hácia fructuosas conquistas las operaciones comerciales, dice Nougier, y les imprime un carácter de grandeza que estaban lejos de esperar ni de pretender alcanzar. Fué un gran acontecimiento que en la historia del comercio forma época, como para la historia de la civilización el descubrimiento de la brújula y el de la América. La letra de cambio ha conquistado para los capitales su ansiada libertad. Libró su acción de las trabas que le oponían. Dió nacimiento al crédito privado y desde aquel momento quedaron destruidas para el comercio las barreras que le separaban del mundo entero.»

«La letra de cambio no es solamente un instrumento y

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

un medio precioso de ejecución, es también una verdadera *mercancía*. Considerada en sus relaciones con el cambio sobre las principales plazas de Europa, produce grandes beneficios por la circulación, y forma un brazo de comercio fecundo en el más alto grado. Así el negociante debe estudiar con cuidado la importancia de las casas de comercio de la plaza en que él funciona y de las plazas extranjeras, á fin de apreciar si el papel que se le remite es una buena y segura *mercancía*.»

En este elegante resumen hallamos, no solamente el objeto de la letra de cambio, lo que fuera ya bastante para nuestro objeto, pues si al juzgar de sus efectos jurídicos damos una interpretación que entorpezca la marcha por esa senda de progreso de la letra de cambio, estaremos autorizados á desecharla como incapaz de interpretar el contrato que se contiene en ese documento; pero no sólo el objeto de la letra de cambio, sino también su significación jurídica, hallamos perfectamente compendiado en el párrafo transcrito de la completa monografía á que nos estamos refiriendo.

El documento de cambio, como todo documento susceptible de endoso ó pagable al portador y por lo mismo trasmisible por la simple entrega del título, lleva en su cuerpo, en su redacción, todos los elementos de vida, sus armas de defensa y sus puntos vulnerables. Pero fuera de lo que expresa su texto, las circunstancias de hecho de las que no pueda venirse en conocimiento con la simple lectura de su texto, no pueden modificar en un ápice su valor de derecho. Es una mercancía que en sus firmas lleva la marca de fábrica, si se nos permite llevar adelante la comparación, y en todos sus demás datos sus condiciones de validez.

El hombre instruido en la ciencia del derecho ó el inteligente comerciante, juzga de aquella por el examen del texto y de la letra; y si en su redacción se ha plegado á las prescripciones de la ley, tiene la firme convicción de que el documento es válido y por ello le otorga su confianza y al endosarlo á otro, haciéndose solidario de la obligación que se contiene en ese precioso documento de crédito, lo hace seguro de que no hay vicios ocultos de la cosa.

Si fuera preciso para que el documento conquistase esa confianza que el que recibe la letra se informase de las circunstancias que originaron su nacimiento, si le fuera preciso conocer las relaciones que existen entre el girador y el girado, los de los diferentes contratos que han mediado entre cada endosante y su endosatario, no tendría la letra de cambio ese carácter de grandeza que tanto aplaude y con justicia Nougier, ni podría ser considerado como un acontecimiento en la historia del comercio, pues estaría al nivel de cualquier documento de carácter meramente civil.

Para hacer más clara la especie que debatimos, pondré algún ejemplo relativo á nulidades de los contratos que dan nacimiento al documento y que, sin embargo, no le trasmiten á éste su vicio.

Girada la letra y presentada al girado éste la acepta bajo el supuesto de tener provisión de fondos en virtud de un contrato de compra–venta de mercancías hecha por muestras, que le constituye deudor del girador. Pero después de aceptada, recibe las mercancías y encuentra que son de clase enteramente distinta de la estipulada. Con fundamento del art. 376 el comprador obtiene la recisión del contrato de compra–venta y por ende ya no hay precio, que era lo que constituía la provisión, en vista de la cual aceptó la letra que ha pasado á manos del cuarto ó quinto endosatario, confiado en el reconocido crédito del aceptante. Llegado el caso de presentarla para su pago ¿podrá negarlo excepcionándose con la nulidad del contrato celebrado entre el y su girador? ¿Quién que esté medianamente versado en la significación y valor de estos documentos, se atreverá á sostener ante la ciencia la horrible deformidad de la afirmativa? El comerciante y el abo-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

gado equiparan el caso al de igual naturaleza en que el comprador hubiese entregado el precio en papel moneda. Es claro que tendrá acción para repetir en contra de su contratante, con más los daños y perjuicios, pero no tendrá ninguna para arrebatar el billete de banco que dió en pago de manos de quien en esos momentos lo posea, suponiendo que lo identificase con toda evidencia. Lo mismo en el caso de la letra aceptada. El aceptante tendrá acción para repetir lo que pagó en virtud de su aceptación; pero de ninguna manera le es permitido oponerse al pago.

Una vez aceptada le letra y admitido como principal deudor el aceptante, las relaciones jurídicas que se establecen entre el tenedor de la letra y el aceptante, son exactamente iguales á las qne existen entre el tenedor de un pagaré y el principal obligado. Quiero admitir que el contrato mercantil preexistente ó coexistente con el nacimiento del pagaré, sea perfectamente nulo. No hay duda que el principal obligado tiene una acción en daños y perjuicios en contra de su primer contratante; pero jamás por jamás podrá oponer esa excepción de nulidad al endosatario que se presenta á reclamar el valor del documento al principal obligado.

¿Cuál es entonces la excepción de nulidad que el art. 535 del Código de Comercio concede en contra de la ejecución de las letras de cambio?

No puede ser otra que la que resulta comprobada del mismo documento, es á saber: que le falten algunos requisitos que para la validez de aquellos exige el art. 451 del Código relativo. Fuera de esas no hay ninguna excepción de nulidad que pueda subsistir sin desnaturalizar por completo el objeto y la naturaleza del documento transmisible al portador.

El citado Nougier, y con él casi todos los tratadistas de la materia, llevan su exigencia sobre el respeto debido á la letra de cambio, hasta el extremo de que tratándose de una verdadera y perfecta suplantación de nombres en tales documentos, dan su decisión á favor del tenedor, como puede verse por la resolución á la siguiente cuestión.

"¿El endosante de una letra de cambio está obligado á justificar la existencia de todos los endosantes precedentes y del girador ó bien debe sólo responder por su cedente? Exigir la prueba de que todos los signatarios de una letra de cambio existan en realidad, es hacer imposible la negociación de la letra. No se olvide que estos documentos vienen á menudo de un país extraño y siempre de una plaza diferente de donde deben ser pagados. Vienen cubiertos de innumerables firmas, casi siempre desconocidas todas. ¿De qué manera podría el endosante comprobar y demostrar su sinceridad? ¿Tendrá tiempo y manera de dedicarse á tan delicadas pesquisas?"

Si es para el comercio no sólo conveniente sino necesario, mantener en la práctica el documento endosable, no hay duda que debe librársele de toda traba que imposibilite las operaciones que hay que celebrar con ellos.

La interpretación dada á estos documentos en el sentido que vá expresado, está conforme con el principio general de interpretación que enseña, que todo acto debe interpretarse de manera que tenga vida jurídica y no de modo que le deje sin efecto ninguno. *Actus inteligendi sunt ut valeant, quam ut pareant.* Y no hay duda de que si la nulidad de los documentos endosables se ha de decretar por motivos semejantes á los que hemos propuesto de ejemplo, no podrán subsistir, como ningún documento al portador, al menos no podrán subsistir con su carácter especial y quedarán reducidos á la categoría y á la condición de cualquier documento común.

En lo que se refiere al endoso, es decir, á la manera de trasmitir una letra de cambio, son enteramente idénticos á los vales, pagarés y demás documentos á la orden, como lo expresa la ley y lo pone en manifiesto el simple sentido común. Podemos, pués, examinar el caso en cuestión con el criterio

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

que tenemos suficientemente fundado con lo anteriormente expuesto.

La parte demandada funda su excepción de nulidad en que dicho pagaré fué firmado por coacción ó miedo y por tanto es nulo, por vicio en el consentimiento, el contrato que le dió origen. La funda también, en que era un contrato condicional y que la condición no se cumplió. Nosotros probaremos hasta la evidencia que es enteramente falso lo uno y lo otro; pero lo haremos sólo por verdadero lujo de argumentación, pues sostenemos que no puede plantearse esa cuestión en el juicio que nos ocupa; sostenemos que no son esas las causas de nulidad que deben alegarse para probar la excepión del mismo nombre que señala la ley en contra de las letras de cambio; y bien entendido que la concede en contra de las letras de cambio y no en contra de un pagaré con respecto á los que, si permitimos que se discuta, es sólo por una primera concesion que hacemos al demandado.

Es indudable que los documentos mercantiles no son abortos caprichosos de una voluntad extraviada; convenimos en que todos ellos son el resultado de uno ó más contratos que se sujetan para su existencia á los preceptos generales que rigen la validez de los contratos; pero sostenemos que el documento mismo no es el contrato, sino simplemente el resultado de aquél. El pagaré dado en pago del precio de la cosa vendida, no es el contrato de compra–venta, es el precio; hace las veces de moneda y entra á la vida con su carácter especial, con vida propia y completamente independiente de la operación que le hizo nacer.

Si el nuestro está extendido por un comerciante á favor de otro, lo que no se ha puesto á discusión, si contiene la fecha y lugar de su otorgamiento y todos los demás requisitos que para su validez le asigna el art. 546, no puede ser tachado de nulo en virtud de actos ú omisiones posteriores del Sr. Aguilera.

¿Se quiere todavía un argumento más: argumento incontestable en la práctica de la tramitación judicial? Fijémonos en que si el contrato que lo hizo nacer, tiene algun vicio por radical que él sea; dado que en nuestro derecho no hay nulidades absolutas, las que en doctrina son llamadas de pleno derecho, cualquiera que sea la causa de nulidad, tiene que plantearse y resolverse en un juicio. ¿Quiénes serían las partes contendientes para discutir esa cuestión? Los contratantes: esto no admite objeción: los contratantes y nada más que los contratantes el Sr. Moylan y D. Ramón Aguilera; es así que en este juicio no figura D. Ramón Aguilera; es así que el actor en él lo es la Sra. Javiera G. de Aguilera, que nunca ha tenido relación alguna directa con el Sr. Moylan, luego no cabe duda ninguna sobre que, para entrar en la discusión que nos propone el demandado, falta un elemento indispensable: persona demandada.

¿Se quiere más? Que me diga el abogado de la parte demandada ¿qué clase de acción pretende tener para demandar tal nulidad? ¿Podrá sostener, sin mengua de su reputación, que tendría en contra de D. Ramón Aguilera una acción ejecutiva? No lo sostendrá, estamos seguros. ¿Es una acción ordinaria? entonces pretender discutirla en este juicio ejecutivo, es olvidar por completo los principios fundamentales del procedimiento. Es de todo punto impropio de la ilustración de un abogado involucrar tan lastimosamente principios que rigen la secuela de un juicio ordinario con los que rigen en un juicio ejecutivo... Falta pues también el segundo elemento indipensable para la discusión: *quo jure petatur*. Queda rechazado con la excepción de *sine actione agis*.

Las acciones que por la nulidad alegada pueda tener el Sr. Moylan en contra del Sr. Aguilera, quedarán reservadas para el juicio ordinario á que correspondan, pero en nada afectan á mi representada la Sra. Aguilera.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

FUERZA Ó MIEDO.

Recuerdo que el apoderado del Sr. Moylan se permitió en uno de sus últimos escritos, tachar de maliciosas nuestras promociones, aunque la aludida consistía sencillamente en proponer la prueba de confesión. El personal del Juzgado ha tenido tiempo de formar su opinión acerca de la malicia de los que contienden en esta causa. Por lo demás, bien sabemos que el denuesto es el último, cuando no el único, argumento de los que no tienen la razón, y por nuestra parte no estamos propuestos á contestar injuria por injuria. No acostumbramos en un debate serio descender á ese terreno. Es bueno no olvidar aquel precepto, más de educación que de derecho, que debían saberlo de memoria todos los Señores abogados: adbocatus ratione, non probris certare debet. Pero como el recuerdo de aquel denuesto nos hace presumir que el Sr. Lic. Icaza aprovechará cualquiera oportunidad para lanzarlos de nuevo, voy á permitirme discutir sus excepciones, no sea que suponga que hallándolas incontestables tememos discutirlas.

Según el relato que el mismo nos hace en la contestación de la demanda, el Sr. Moylan había autorizado al Sr. D. Ramón Aguilera para proporcionar fondos al Sr. Harotain, dependiente del demandado. En virtud de esa autorización hizo varios anticipos el Sr. Aguilera y todos sus giros, con excepción de uno por la cantidad de quinientos pesos, fueron aceptados por el Sr. Moylan; habiendo habido dos posteriores que fueron religiosamente pagados por éste.

Asegura el escrito de contestación que ese giro de quinientos pesos no fué aceptado porque se le había retirado al Sr. Aguilera la autorización para proporcionar dinero al Sr. Harotain. Este es un hecho que debía haber probado el

demandado siquiera presentando copia de tal carta, que por noticias que se ha servido darme el Sr. D. Ramón Aguilera sé que no fué nunca escrita; lo que también encuentra probado por presunción valiosísima, consistente en el hecho de que posteriormente á ese giro, el Sr. Moylan cubrió los otros dos ya referidos, que eran uno de á seiscientos y de trescientos pesos el otro.

En este estado las cosas, dice el demandado que le pidieron al Sr. Aguilera no sé que guias del Ferrocarril y él se negó á enviarlas, si no se le firmaba un pagaré por la cantidad de quinientos pesos del giro que no se le había aceptado.

Forzados por esta amenaza firmaron el pagaré para evitarse los perjuicios que se les siguieran por la retención de aquellas guias.

De la relación de estos hechos, tomada del escrito de contestación de demanda, se vé que no había un contrato en que se estableciese que el Sr. Aguilera remitiría las guías por la cantidad de quinientos pesos, ni es este el origen del pagaré que reclama la Sra. Aguilera como equivocadamente cree el abogado del Sr. Moylan; equivocación que le hace sostener que no es contrato mercantil el que dió nacimiento al pagaré, que carece por consiguiente de ese requisito para que sea mercantil.

El contrato que le dió origen, es el contrato prexistente de donde nace la deuda de quinientos pesos; es aquella cuenta corriente que se había establecido entre Moylan y Aguilera por las entregas que hacía el último al Sr. Harotain por cuenta de los primeros; es esa carta–orden que los demandados afirman que retiraron al Sr. Aguilera, pero que no han llegado á probarlo, la que constituye un contrato netamente mercantil en el cual no ha habido ni siquiera asomos de violencia, como lo demuestra el hecho de no haber buscado esa

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

defensa los que han improvisado tantas que no podían sostenerse en ningún terreno.

Pero siguiendo mi sistema de hacer toda clase de concesiones á la argumentación de los contrarios, voy á hacerle la de que esa remisión de guias, que no tienen nada de común con el contrato mercantil que engendró el pagaré que reclamamos, sea el contrato coexistente con el nacimiento de este documento y probaré que, todavía entonces, no tienen los contrarios la acción de nulidad por vicio en el consentimiento.

Hemos visto que este último no era un contrato sinalagmático, pues no se ofrecían por parte del Sr. Moylan quinientos pesos como precio de los trabajos del Sr. Aguilera para conseguir aquellas guias; sino que simplemente consentía el Sr. Moylan en firmar el pagaré por la cantidad que adeudaba. En último análisis, querrá decir que antes no quería Moylan reconocer su deuda, no quería pagar y ahora por miedo consiente. ¡Esto en su concepto vicia el derecho que el acreedor tiene para ser reembolsado de su crédito!

Que no quería pagar y que todavía no quiere, es un hecho que se prueba con todas sus promociones. Que el Sr. Aguilera tratara de obligarlo por aquel procedimiento no está probado; pero que la Señora mi cliente lo quiere obligar á que le pague, si está perfectamente demostrado y sin embargo esa coacción, mucho más eficaz para el objeto que la que empleará D. Ramón Aguilera, no será motivo para que se funde en contra de mi representada la excepción que se pretende hacer valer para contra su causante.

Dice Solon, en su tratado sobre las nulidades, que los legisladores romanos era de tal manera enemigos de la violencia ejercitada en los convenios, que llegaron á ser injustos. Decidian que si un acreedor había arrancado por la fuerza, de manos de su deudor, el dinero que se le debía, estaba

obligado á devolverlo y aun se le condenaba á perder su crédito.

«A los ojos de la ley, sigue diciendo el mismo autor, es altamente perjudicial considerar todo género de coacción como causa suficiente de nulidad. Tan justo como es que el legislador venga en auxilio de un ciudadano víctima de una violencia considerable, es injusto no despreciar las quejas del pusilánime y deldebil.»

El hecho que el Sr. Moylan intenta hacer caer en la conciencia del Sr. Aguilera, de que alcanzó que se le firmase un documento que importaba obligación, si la cantidad por la que él responde no se la debía el Sr. Moylan, es un delito previsto y penado por la ley, y ser víctima de ese delito en las condiciones en que pretende serlo el Sr. Moylan, es indudablemente pusilanimidad, y debilidad tan absoluta, que puede decirse de un hombre así, que es completamente inepto para la lucha por la vida aun en presencia de las más insignificantes dificultades.

Por otra parte la amenaza que se le hacía de retener las guías no era de tal significación que aterrorizara su ánimo sin dejarle tiempo de pensar que tenía expeditos mil caminos para vencer la resistencia del Sr. Aguilera y «para que haya violencia es necesario que sea de naturaleza de causar impresión en una persona razonable y capaz de inspirarle temor de exponer su persona ó su fortuna á un mal considerable y presente. Meetus non vani hominis ced qui in homine constantisimo cadat.» (Autor citado.)

Sobre todo debemos insistir en que, si fuera cierto eso de la violencia, que no podemos tomarlo á lo serio, sería violencia ejercitada para que se le pagara lo que justamente se le debía, para que se reconociera una deuda perfectamente legítima y sobre este punto dice el respetado autor tantas veces citado, que: «es igualmente cierto que un deudor no podría obtener la rescición de una obligación que hu-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

biese suscrito para asegurar el pago de una deuda legítima bajo pretexto por ejemplo, de que estando en prisión se le había prometido obtener su libertad. Inútilmente diría que su consentimiento no había sido más que el efecto de la coacción. No debería ser escuchado, porque si esta coacción era injusta, podía hacerla cesar y no era de naturaleza de causar en su espíritu una impresión bastante fuerte y tal como se requiere para estar bajo la salvaguardia del art. 1,112 del Código Civil Frances.»

Si tratándose de cosa tan seria como es la libertad, se resuelve la cuestión en ese sentido ¿que diremos en el caso que nos finge el demandado? Si la retención de aquellas guías era sin derecho, tenía sus acciones para hacer cesar la coacción; y si por el contrario, el Sr Aguilera tenía derecho para retenerlas, al consentir en darlas, con sacrificio de los derechos que para retenerlas pudiera alegar por tal de tener un título ejecutivo como reconocimiento de su crédito anterior, celebró con el Sr. Moylan un contrato común y corriente del cual resultó ganancioso el Sr. Moylan y perjudicado el Sr. Aguilera, puesto que los quinientos pesos se le debían por contratos anteriores y con relación á este renunciaba á los beneficios que pudo haber obtenido en compensación y como pago de los servicios que estaba prestando á su contratante con motivo de la remisión que amparaban aquellas guías.

Con lo expuesto, resultó no sólo improcedente la excepción del miedo y coacción, sino hasta pueril y ridícula.

CONTRATO CONDICIONAL.

Pasemos al otro motivo que, según el criterio de la parte demandada, tiene para considerar nulo el contrato que dió origen al pagaré que reclamamos.

Consiste este en sostener, siempre bajo el equivocado supuesto de que el pagaré procede del convenio para la remision de las guias, que este era condicional y no se ha cumplido la condición.

Como parte de nuestra prueba presentamos una carta, que no habiendo sido objetada debe tenerse como reconocida, con la que probamos que el Sr. Moylan había recomendado al Sr. Aguilera que activase la remisión de las expresadas guías detenidas en la Administración del timbre y no por el Sr. Aguilera quien estaba prestando sus buenos servicios precisamente para conseguir la pronta remisión de las mismas.

En estas circunstancias recibió aviso el Sr. Aguilera de que ya estaba firmado el pagaré por el que Moylan reconocía su deuda de quinientos pesos, y en el telegrama de aviso vuelve á recomendarle que active el envió de las guías. Se vé, pues, que no había condición alguna para firmar aquel pagaré y que no lo era la remisión de aquellas, supuesto que sin que estas se hubiesen enviado estamos viendo que se firmaba el pagaré.

Si se pretende darle alguna interpretación á ese telegrama distinta de la anterior, no sería otra sino que el Sr. Aguilera ponía como condición para remitir las guías el que se firmase aquel pagaré; y en tal caso, lo que dependía de una condición era la remisión de las guías y no la firma del pagaré.

Si éste se firmó, quiere decir que desde ese momento los Sres. Moylan tienen perfecto derecho para exigir la remisión de las guías, puesto que se cumplió la condición; pero ¿qué tiene que ver con esto mi patrocinada, endosante de aquel pagaré que, á lo sumo, habrá sido la condición de otro contrato, pero jamás resultado de un contrato condicional?

Para que fuera cierto que el contrato de remisión de guías era condicional tendría que haberse probado que se había establecido en esta forma: si el Sr. Aguilera me remite tales

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

guías le daré quinientos pesos, garantizados con un pagaré á la orden. Ni el mismo demandado refiere que fuese en esa forma; y tan no estaba pendiente la firma de este pagaré de la remisión de las guías que fué firmado antes de que aquellas se remitieran, como quedó plenamente probado por el telegrama que presentamos en autos, firmado por el Sr. Moylan, que se encuentra en las mismas condiciones que la carta antes referida, es decir, en las de prueba plena como documento reconocido; por otra parte el demandado en su contestación á nuestro libelo, explica que esa cantidad de quinientos pesos que reclamamos en este juicio, es consecuencia de la autorización que se le dió al Sr. Aguilera para proporcionar al Sr. Harotain fondos por cuenta de Moylan. Como esta autorización fué anterior á la remisión de las tantas veces expresadas guías, no tiene nada de común con ella ni puede estar sujeta á las condiciones que en el contrato relativo se establecieran.

Nuestra acción queda probada desde que con el dicho mismo de los demandados, quedó demostrado que el Sr. Aguilera estaba autorizado para proporcionar fondos á Harotain por cuenta de Moylan. He ahí el contrato mercantil.

Los demandados se excepcionan afirmando que tal autorización estaba ya retirada cuando se hizo el giro no aceptado que vino á ser la causa del pagaré en cuestión; pero no probado su dicho queda inatacable el fundamento de nuestra demanda.

En resúmen, los demandados no tienen derecho para plantear la cuestión de nulidad fundada en vicios del contrato que dió nacimiento al pagaré que reclamamos, porque los documentos endosables tienen vida jurídica propia y no están dependiendo de las eventualidades que puedan afectar el contrato que les dió nacimiento.

En segundo lugar, el redargüido de falso, el relativo á la remisión de guías, no es el que dió nacimiento al pagaré

de que nos ocupamos, pues éste toma origen de la carta crédito dada á Harotain para la casa de D. Ramón Aguilera; pero haciéndole la concesión de que aquel sea el origen de nuestro pagaré, no es nulo por vicio en el consentimiento pues no ha habido en él coacción en los términos que refiere la ley.

Por último, si tal coacción existiera, daría nacimiento á una excepción que habría de ventilarse en juicio ordinario y que, por consiguiente, no puede ser tratada en el sumario en que estamos y tiene que ser reservada para el juicio que tendría que promover el Sr. Moylan en contra del Sr. D. Ramón Aguilera, al cual será de todo punto extraña la Sra. Javiera G. de Aguilera.

FALTA DE PERSONALIDAD.

En cuanto á esta excepción no debe ser objeto del debate, porque apeñas se anuncia sin especificar en qué consista, y esto no es permitido en derecho. En tales casos el Juez está en la estricta obligación de desechar de plano las cuestiones enunciadas, fundándose en las disposiciones legales que vamos á citar aplicables aunque se trata de materia mercantil, porque el Código local es supletorio de aquel.

El art. 923 del Código de Procedimientos Civiles previene que en la demanda, expuestos sucintamente y enumerados los hechos y los *fundamentos de derecho*, se fijará con precisión lo que se pida, determinando la clase de acción que se ejercita y la persona contra quien se proponga.

El 926 del mismo ordenamiento dispone que los Jueces repelerán de oficio las demandas no formuladas con claridad y *que no se acomodaren á las reglas establecidas.*

Por último el 494 ordena que el demandado formulará

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

la contestación, sujetándose á las reglas establecidas en los arts. 923 y 924 *observándose en su caso lo dispuesto en el 925.*

En el caso no se han expresado los fundamentos de derecho en que la excepción se apoya ni en que consiste la falta de personalidad.

En ningún caso se vé tan claro como en el presente la razón de la ley. No pudimos defendernos en contra de la excepción. Si se apoya, por ejemplo, en que el poder que acredita la personalidad del que habla tiene algún vicio, habiéndolo dicho hubiésemos tenido tiempo de subsanarlo; si se sostiene que no es verdadero el endoso hubiéramos podido probar su sinceridad, etc.

Sea cual fuere el motivo que alegue como fundamento de su excepción, no debe tomarlo en cuenta el señor Juez porque no ha sido objeto del debate y la sentencia, que debe ser congruente con la demanda y su contestación, no puede salirse de los límites que éstas fijan.

En asunto tan perfectamente claro y de todo punto sencillo, me ha sido necesario hacer estudio prolijo, acaso por llevar uniformidad con la extensión del juicio en que me produzco.

En las diligencias preparatorias hemos tardado catorce meses en virtud de cuatro incidentes promovidos por el demandado á falta de recursos que le estaban estrictamente prohibidos; pero que no obstante intentó el Abogado del Sr. Moylan, olvidándose de lo que debe á su reputación de Abogado inteligente, probo y reconocidamente honrado, como soy el primero en reconocer.

En el apremiante juicio sumario no le fué posible hacer con éxito ninguna de esas tentativas; pero puso de su parte todos los recursos que le sugirió su rica imaginación.

Hizo cambiar, acaso no más en los autos, la residencia del Sr. Moylan, desde Ixtlahuaca hasta el Extranjero para que no consiguiéramos la prueba de confesión ó si insistíamos en

ella, tardase en volver el exhorto lo que faltara del segundo año del litigio y para que después viniese con la noticia de que no se había encontrado al Sr. Moylan en el domicilio indicado.

Después cuando estaba ya terminada la dilación probatoria, durante la cual no rindió prueba ninguna, promueve la de posiciones á D. Ramón Aguilera, creyendo que se iba á detener el curso del juicio hasta que su extemporánea prueba quedase recibida, aunque él pusiese todo su empeño en que esto fuese lo más tarde posible.

Su única defensa ha consistido en retardar el plazo de la resolución; pero agotados todos los que pudo tomarse, ha llegado la hora en que la rectitud y la reconocida ilustración de vd. diga la última palabra sobre este asunto. Estamos seguros de que ella será una prueba más de la justificación con que procede vd. en todos sus actos.

México, Marzo 18 de 1898.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Lecciones de Derecho Internacional Privado.

LECCION XVI.

Sucesiones ¿que ley debe regirlas?

1 Correspóndeme ocuparme aquí de las sucesiones, materia sin duda de las de mayor dificultad y que á más discusiones ha dado lugar entre los internacionalistas.

2 ¿Porqué tratar separadamente de las sucesiones, si éstas conforme á las institutas de Justiniano que hemos tomado como punto de partida, forman parte de las cosas ó sea del segundo objeto del derecho?

3 Las obligaciones que según la aludida división forman también parte de las cosas, han sido tratadas especialmente en la lección anterior, y no insistiré más ya sobre punto suficientemente depurado, como es el de la naturaleza de la división de los objetos del derecho propuesta por Justiniano, intachable sin duda para su objeto, pero no considerada como punto de partida de las verdaderas reglas del derecho internacional privado; si bien es cierto, que con las variantes y segregaciones oportunas, ocupa siempre el alto puesto que le señalaron desde los primeros estatutistas y que ninguna otra teoría puede aspirar á ocupar.

4 Siendo esto así, sin contrariar el método hasta aquí seguido, posible es, y necesario agregaré, ocuparnos, por modo especial de las sucesiones, relación jurídica que así lo exige por su naturaleza propia.

5 El tít. I lib. II de la Instituta, *De rerum divisione et adquirenda ipsarum dominio*, reasume la doctrina expuesta por los antiguos jurisconsultos romanos en dos títulos diversos: *De divisione rerum*, tít. 8 lib. I D. y *De adquirenda rerum dominio*, tít. 41 mismo libro D.

6 Justiniano, después de explicar la división de las cosas en comunes, públicas, de una universalidad y de los particulares, se ocupa de los medios de adquirirlas á título particular y trata de la ocupación, del aluvión, de la accesión, la confusión y otros.

7 Posteriormente trata de la adquisición de las cosas á título universal y entonces define lo que son las sucesiones y establece que se dividen en testadas é intestadas (véase parr. 7 lib. 2 tít. 9 Inst.)

8 Puede adquirirse á título particular, la totalidad de un acervo de bienes como por donación ó legado, y puede adquirirse una sola cosa determinada á título de herencia, como cuando el testador divide el haz de ésta en varias partes y señala lo que á cada heredero debe corresponder; pero esto no obstante, lo primero significa trasmisión de la propiedad de la cosa á título particular, porque son determinados los derechos que á ella se adquieren y lo segundo significa trasmisión á título universal, no porque sea una universalidad de cosas, sino una universalidad de derechos, todos los del testador respecto de la cosa de que se trata. Título particular ó título universal de adquirir, lo son porque según su naturaleza propia son adecuados para adquirir derechos particulares ó bien una universalidad de derechos; y asi es como la jurisprudencia los reconoce, sin tener en cuenta el valor ó la pro-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

porción de los bienes que se adquieren. (Véase Vinnio, corr. al párr. 7 lib. II tít. 9 y Proem mismos libros y títulos.)

9 Sea ésto como fuere. en cuanto, á sus efectos la herencia es un modo de transmitir la propiedad de los bienes, que admite exacta comparación con cualquier modo de adquirir el dominio á título particular.

10. La instituta coloca la herencia entre los modos de adquirir el dominio y estos forman parte de las cosas. Las obligaciones, se consideran también como parte de las cosas porque éstas se toman en su más lata significación según ya he explicado, por ésto es que la repetida división de los objetos del derecho, generalísima como es, admite que diversas materias sean tratadas en especial, y si procurándose la mayor unidad posible en el estudio, no se han propuesto mayor número de divisiones, no es porque haya inconvenientes insuperable para ello; muy por el contrario, la generalidad misma de la división y la naturaleza de los objetos que comprende, admite no solamente las segregaciones hechas hasta aqui, sino una multitud más; prueba de ello es el proceder de Savigñy, quien ya hemos visto en cuantas partes considera subdivididos los objetos del derecho, para señalar el lugar en que cada relación jurídica tiene su asiento y por tanto la ley que la debe regir.

11. La sucesión ó herencia, trasmite la propiedad del mismo modo que la donación, el legado, la compra venta ó cualquier otro modo de adquirir el dominio, pues si bien éstos modos de adquirir el dominio, tienen modo de ser peculiar y taxativas por la ley establecidas, otro tanto acontece con la herencia.

12. En la relación jurídica de sucesión, hay persona de quien se adquiere por testamento ó por intestado parte ó toda la herencia, y persona que adquiere, asistiendo á una y á otra, derechos y obligaciones recíprocas.

13. A primera vista, del mismo modo que acontece con

las obligaciones, la relación jurídica de herencia se refiere tanto á las personas como á las cosas y dada esta semejanza ¿porque no regir la sucesión por la misma ley de las obligaciones y los contratos? Ley de la celebración del contrato ley de la ejecución, ésto es, ley donde se extiende el testamento ó donde muere quien no lo hace, ó de la ubicación de las cosas hereditarias, ó de la competencia para conocer del juicio testamentario, éstas son las leyes que pueden equivaler á la del lugar de la celebración y á la de la ejecución, que son las aplicables á los contratos.

14. En la donación, en la venta y en otros contratos, media la voluntad de las partes y se presume que quisieron obligarse alli donde contrataron respecto de cosas particulares. En la herencia no hay esa misma clase de voluntad, esta se dirige no á ningún objeto en particular, sino á una universalidad, á todo un conjunto de condiciones y cualidades á una personalidad completa que se trasmite el heredero.

15. ¿Que pasa con el contrato de matrimonio? ¿Se rige por ley de la celebración, por ley de la ejecución? De ninguna manera. El contrato de matrimonio se rige por ley personal y aun cuando no se trate del acto de estado civil sino del matrimonio en relación con los bienes, se sostiene siempre la preponderancia de la ley personal. Dudosas son todas las cuestiones relativas á matrimonio y con mucha frecuencia se vacila entre considerarlas de estatuto real ó de personal, pero siempre es cierto que no se resuelven por las reglas generales sobre contratos, en razón de la naturaleza especial de vínculo tan sagrado. Al hablar de matrimonio ampliaré éstos puntos.

16. Algo semejante acontece con las sucesiones; no es posible suponerlas sujetas á ninguna ley del lugar, porque es relación jurídica cuyo caracter especial le repugna. En la voluntad del testador no descansa la herencia como los contratos y de aqui que tenga determinada índole que la

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

segrega de los contratos, que en sus resultados sin embargo, pueden con ella compararse.

17. Ley de la celebración del testamento ¿qué influencia puede tener sobre la validéz del mismo, la parte que toca á los herederos y los derechos de éstos? Ley del lugar donde las cosas se hallan, muebles, inmuebles, acciones ¿qué importancia puede tener para el mismo efecto? Lugar de la muerte ó el accidental de la competencia, para decidir el juicio testamentario ?que puede significar respecto del fondo de los derechos hereditarios?

18. ¿Ley real, cual pudiera pretender dominar el conflicto? Ninguna en verdad. He comenzado por comparar en cuanto á sus efectos la testamentificación con diversos medios de adquirir á título particular, primero, procurando regirla por la misma ley que éstos, y comprendiendo desde luego que esto es imposible, sin quererlo expresamente y al mismo tiempo, he procedido por eliminación, quedando como con secuencia proscrita toda ley real, no quedando por tanto otro arbitrio que la ley personal, para regir la relación jurídica de que me ocupo.

19 ¿No sucede otro tanto con el matrimonio? No es cierto que aun cuando se refiere á los bienes, no es posible clasificarlo dentro de los contratos y que la duda se presenta entre los estatutos real y personal, dominando éste las más veces, aparte de que como acto del estado civil el matrimonio, pertenece indiscutiblemente al estatuto personal y se rige por ende por ley nacional?

20. Pues de la misma manera, comparada la relación de sucesión con aquellas que tiene mayor analogía, por su naturaleza misma, por la extensión y caracter que le es propio, queda segregada de la ley real, para entrar de lleno en el dominio de la ley personal.

21. En la relación de sucesión encontramos dos derechos correlativos, los del testador y los del heredero, porque no

basta decir que tal ó cual relación jurídica se rige por la ley nacional cuando hay varios interesados, y siempre he advertido que necesario es decidir la ley de cuál de ellos debe prevalecer. En la relación de sucesión del mismo modo que toda ley del lugar queda eliminada para el testador, lo queda para el heredero, cuyos derechos y obligaciones posible no es que queden subalternadas á ley de celebración, ni de ejecución, ni de competencia, sino que caen directamente bajo el dominio de la ley personal.

22. Dos leyes personales en oposición. ¿Cuál debe preferir? Ya lo he sostenido repetidas veces la de aquel cuyos derechos prefieran, dadas las circunstancias y condiciones del conflicto.

23. Del mismo modo se resuelven multitud de casos, del marido respecto de la esposa, del padre respecto del hijo, del propietario respecto del comprador y otros que sería prolijo enúmerar: pero ¿es posible establecer preponderancia indudable constante, perfecta ineludible de los derechos del testador respecto de los del heredero? Así parece que debería decidirse, sin embargo, son tan desemejantes los casos, tal la multitud de conflictos y la diversa naturaleza de las disposiciones legales respecto de derechos hereditarios, que sin negar la preponderancia que por regla general ha de obtener la ley del testador respecto de la del heredero no creo imposible que se presenten casos en que acontezca lo contrario.

24. Ejemplos veremos al tratar de derechos conyugales, de paternidad de reconocimiento de hijos, legitimación y otros en que la ley del marido ó del padre claudican y he aquí porque prefiero consignar nuevamente conocidas reglas de preferencia entre dos leyes personales, que establecer un principio absoluto, peligroso, que á soluciones injustas podría alguna vez conducir.

25. Han de regirse pues las sucesiones por ley personal

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

y entre ley personal del testador y ley personal del heredero, por regla general preponderará la primera, pero sin olvidarse que cuando dos leyes personales se hallan en oposición, prevalece la de aquel cuyos derechos dominan, dada la índole del caso de que se trate y cuando la aplicación de ambas leyes personales no pueda conciliarse. (Vease lección 2ª)

26. Pero se dirá ¿cómo es posible regir por ley personal lo que mira á las solemnidades y formas de los testamentos, como regir por una y misma ley derechos reales, acciones de todos generos cosas muebles é inmuebles y todo cuanto forma el conjunto, la universalidad de una herencia á la que se refieren derechos del testador y del heredero?

27. No pretendo regir todo cuanto pueda referirse á la relación jurídica de sucesión por la regla que domina ésta, sino lo principal, la relación jurídica de sucesión en sí misma, independientemente de cuestiones diversas aunque conexas con ella. Considero la relación de sucesión como lo hace el Código Italiano en su art. 8º que dice á la letra: (Traducción de Romero Girón.)

"Las sucesiones legítimas y testamentarias, lo mismo en "lo que se refiere *al orden de succeder que á la entidad* de los "derechos hereditarios y á la *validez intrínseca de las dispo-* "*siciones,* se regulan por las leyes de la nación á que perte- "nezca la persona de cuya herencia se trata, cualesquiera que "sean los bienes y el país en que se encuentren."

28. Nada más adecuado en mi concepto para separar la relación de sucesión en sí misma, de cuestiones distintas que han dado lugar á que se produzca la mayor confusión posible, en el estudio de materia ligada tan estrechamente con el ejercicio de la libertad y los mas respetables derechos del hombre.

29. Claro es que considerada la relación que me ocupa del modo que dejo indicado, se vincula á veces con estatuto real y se presta á confusiones. Si se testa por ejemplo una propiedad que solamente puede ser poseída y administrada

bajo ciertas condiciones según la ley del lugar, posible es que ley de tal lugar se imponga sobre la subsistencia de la institución y tenga que respetarse, pero ésto en nada altera la exactitud de la regla general. ¿Por qué? porque se trata de un punto de estatuto real á todas luces, que no puede ser regido por ley personal. No sostengo ni podría sostener sin incidir en el mas lamentable de los absurdos cien veces condenado, de regir todo lo perteneciente á una relación jurídica por una sola y misma ley. No, la validez intrínseca, la relación de herencia en sí misma, el medio de trasmitir el dominio de índole especial, es lo que se rige por ley personal, pero si en su aplicación se involucra con ley real y ésta domina, no hay razón por la que no se dé á ésta preferencia. En el matrimonio por ejemplo, la relación jurídica en casi todas sus ligas y conexiones se rige por ley personal; sin embargo, pueden presentarse puntos de propiedad ó administración marital, que inconcusamente pertenezcan al estatuto real.

30. Hemos llegado á la principal de las dificultades que en materia de sucesión se suscita, esto es, la duda sobre si pertenece al estatuto personal ó al real. Duda es ésta indiscutiblemente la capital en materia de derecho internacional privado y que por largos años ha dividido á los internacionalistas y en verdad que en pocas materias afecta forma tan grave y se presenta con tales caracteres, como en la relación de sucesión.

31. Multitud de autores han sostenido que esta relación jurídica es de estatuto personal, otros de tal manera suponen que la voluntad del testador se refiere, á las cosas, que sostienen como evidente que pertenece al estatuto real. D'Argentré llega á decir que de ésto ni los niños dudan, y la verdad es, que si ejemplo buscamos de relación jurídica que se haya prestado á las más variadas interpretaciones, ninguno más adecuado que la sucesión.

32. Por mucho tiempo ésta se creyó indisputablemente

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

de estatuto real, si bien en ello jamás consintieron las autoridades de más peso, hoy se considera sin discrepancia de estatuto personal, y por esto digo, que la sucesión constituye sin duda comprobación irrefragable de la promiscuidad y liga de los estatutos entre sí, que tantos desvelos ha causado á los internacionalistas.

33. Ahora bien, que lo principal de una relación jurídica se decida por una ley, que en determinado conflicto prepondere otra, que lo accesorio se rija por otra más, nada puede significar que destruya la regla general y sus fundamentos filosóficos, porque de reglas universales jamás he entendido tratar, sino de mezcla inevitable de materias y de estatutos, que á veces origina grandes dificultades de percepción y aplicación, que sólo pueden resolverse concediendo á cada elemento lo que le es propio y le pertenece.

34. Supóngase que porque se ha resuelto que la relación de herencia pertenece al estatuto personal, se quiere regir por ley de éste, el procedimiento en el juicio testamentario ó la forma del instrumento mismo por medio del que se testa. ¿Se procedería con buen criterio? No en verdad; á la forma hay que conceder lo suyo, al procedimiento hay que respetarlo, conforme á la ley del lugar, y nada de ésto significa objeción á la regla general, sino aplicación de ella misma y de principios ampliamente establecidos con anterioridad.

35. Idénticamente las mismas dificultades que se presentan respecto de la relación jurídica de herencia, se presentan respecto de cualquiera otra. La hipoteca por ejemplo que garantiza un contrato, como derecho real se rige por ley de la ubicación, y el contrato se rige por sus leyes propias. Dificultades de apreciación respecto del derecho de las obligaciones y del estatuto real, se presentan como pueden presentarse entre otros estatutos, por razón de las particularidades de cada caso.

36. No niego que la dificultad mayor sea la que se suscita para la calificación de estatuto personal y real, y tanto es asi, que sin esa dificultad en gran parte se hubieran minorado las disputas de los autores, conformes en casi todo lo que á otros estatutos pertenece. De esa dificultad han nacido los estatutos mixtos, de ella proviene el derecho público, como lo preconiza el sistema italiano, del que se derivan las diversas reglas de aplicación de derecho internacional privado hoy recibidas. Cuando la duda surge, se recurre al derecho público, principio fllosófico que sostiene las reglas modernas, sustancialmente iguales á las de los estatutos y con esa piedra de toque se decide si ley propia exige aplicación en territorio extraño y ley extraña en territorio propio, sin que la soberenía y condiciones esenciales de vida de los estados interesados sufra detrimento.

37. Si con toda atención se fijan éstos precedentes si se recuerda lo que para cosas muebles, inmuebles, derechos, acciones y toda otra clase de objetos del derecho se ha establecido, se comprenderá fácilmente, como es que todos los casos que se presenten relativamente á sucesiones, pueden resolverse del mismo modo que los pertenecientes á las otras materias de que nos hemos ocupado, sin que quede postergado en ningún caso el derecho público, que papel tan importante desempeña en el sistema de derecho internacional privado, tal cual en éstas lecciones se ha aceptado.

38. ¿Porqué en materia de sucesiones, no proceder como en contratos, fijando como ley primera que rija esa relación jurídica la de la voluntad de las partes?

En materia de sucesiones no es posible reconocer á las partes el derecho de someterse á la ley que les parezca conveniente. No tienen las disposiciones respecto de sucesión el mismo carácter que las que se refieren á contratos, las que respetan en todo el deseo de los interesados en tanto el derecho público no se oponga.

39. Las leyes sobre sucesiones no son libres para los in-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

teresados sino forsozas, del mismo modo que las leyes de estatuto personal, que las de estatuto real, las que por regla general se sostienen por el derecho público del lugar á que respectivamente corresponden. Bien está que algunas disposiciones á éstos estatutos pertenecientes, no sean de derecho público, conforme á la extensión que le concede el sistema italiano, sin embargo, la regla general es esa y tiene aplicación respecto de sucesiones, lo cual no se observa respecto de obligaciones, en las que casi todas las disposiciones legales miran á la utilidad particular de las partes, ligándose algunas directamente como por excepción, con la vida y desarrollo de los pueblos.

40. Esa unión precisamente de la relación jurídica de sucesión con el derecho público, da por resultado que las reglas referentes á esta, se vinculan con perfección con todo el sistema, resultando éste homogéneo y filosófico en todas sus partes, deducidas sns diversas reglas de aplicación del principio fundamental.

41. Como respecto del estatuto formal, de propósito hago punto omiso de las disquisiciones de los autores antiguos y modernos respecto de sucesiones.

42. Tratada la materia desde diverso punto de vista, siguiendo las teorías italianas y la tan justamente encomiada redacción de Mancini en el trascrito art. 8 del Código italiano, las teorías de hoy son sustancialmente las de los jurisconsultos romanos, de los glosadores y estatutistas más prominentes, de Savigñy, Laurent, Fiore y tantos otros modernos, que van á la delantera de tantas y tantas eminencias como al estudio de tan complexas cuestiones se han dedicado.

43. Cierto que numerosos autores defienden la preponderancia de la ley del domicilio en oposición á ley nacional del autor de la herencia, más ésto no significa contradicción ni divergencia con las opiniones expuestas.

44. En ésta como en otras materias lo de gravedad en la discusión, es resolver si por ley real ó por ley personal debe decidirse el conflicto, pero una vez admitido predominio de ley personal sobre ley real, es secundario que sea ley nacional ó ley de domicilio, ambas son personales, ley de domicilio como ley nacional, significan anatema de la real y se apoyan en razones de la misma especie; más aun, las razones que en apoyo de la ley nacional se invocan, no obran del mismo modo cuando de gobiernos centrales se trata ó de conflictos externos, que cuando se estudian conflictos internos y sistemas federales; de tal modo, que los mismos principios y las mismas razones que en un caso sossontienen preferencia de la ley nacional, conducen en el otro á ley del domicilio, sin que haya diversidad de sistemas, ni de leyes, sino por el contrario homogeneidad perfecta, identidad de principios filosóficos y jurídicos, que la aplicación de una y otra ley sostienen.

45. Tanto como me ha sido posible he procurado sintetizar, aun á riesgo de aparecer como ignorante de las discusiones que la materia de sucesión ha originado, asi como de la multitud de opiniones y sistemas propuestos para esclarecerla; más si todos éstos elementos engendran confusión y alejan la deseada claridad, he debido sin duda segregarlos, á reserva de ampliar la doctrina general aquí expuesta, separada de sus conexiones y complicaciones más frecuentes, en la parte especial de la obra.

Abril 6 de 1898.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

La Sevicia.

El matrimonio no es solo como dijo Portalis y repite el Código la sociedad de un solo hombre y una sola mujer que se unen con vínculo indisoluble para perpetuar la especie y ayudarse á llevar el peso de la vida;» sino el único sistema con el cual pueden reproducirse los pueblos de la cristiandad. En efecto, sólo ha sido posible formar el padre legal y constituir la familia, con odaliscas en las poligamías asiáticas ó con la esposa de las monogamías cristianas; y la fidelidad de la mujer que ambas presuponen para que el marido acepte la paternidad de los hijos del matrimonio, sólo se ha conseguido con eunúcos y serrallos en aquellas sociedades, y con la virtud y el amor en éstas. Pero para que la mujer sea virtuosa, ya que el cristianismo y las viejas tradiciones de la caballería la han libertado, del gimneceo, es condición ineludible que no sea tratada como odalisca, prorrateándola en los afectos maritales con otra rival; sino como compañera única, dueña y señora del hogar, que se conquista con amor, se trata con respeto y se defiende con abnegación. Tan pronto como se la menos precia y envilece con rivales, tratándola como instrumento gastado de placer, decae al nivel de la odalisca; y como en los pueblos cristianos, ni serrallos, ni eunucos, son posibles, la conciencia de la paternidad huye del cerebro marital, los hijos quedan á cargo de las madres, no crecen, no se educan, su mortalidad aumenta, disminuye la natalidad, y extirpes degeneradas y reducidas son el resultado indefectible de las sociedades donde por relajaciones clandestinas de la fé conyugal se pretenden formar poligamías vergonzantes ó poliandrias orgiásticas como las de la decadencia romana. Es, pues, el matrimonio de los pueblos cristianos, nacido en el amor, fundado en la fidelidad y sostenido en el respeto mutuo de los cónyuges, la única manera como la familia se reproduce y constituye en base y origen de la vida civil.

Pero no se crea por ésto, que todo matrimonio de cristianos sea puro idealismo, amor y armonía. En su vida doméstica suele haber la misma brutalidad que en los pueblos de serrallos, pues como el ejercicio de la potestad marital depende de la cultura del espíritu, y hay muchos grados de civilización, en una misma sociedad cristiana, el gobierno de la familia se lleva con sistemas de afectos tan diferentes, como los que pueden distinguir á un médico, de un fogonero de un artista ó de un ministro, ó como los que pudieron haber diferenciado á los matrimonios feudales, de los romanos, de los aztecas anteriores á la conquista ó de los sirios de los osmanlís.

Hay sin embargo, un desarrollo medio de cultura. en todas las sociedades, que forma en la familia nacional, una etapa de comparación, para juzgar del comportamiento de un marido; y permite decidir si una familia se encuentra en etapas inferiores, por regresión, por atavismo ó por alto en su desarrollo social, moral ó intelectual. La etapa superior predomina y forma las costumbres domésticas nacionales; pero como siempre coexisten con ella familias de épocas de civilización inferior, el varón se comporta en estas como se comportaban los varones de las épocas correspondientes á su cultura inferior, medida casi siempre por la manera

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

de contraer matrimonio.—Hay por ejemplo, maridos que se comportan como se hubieran comportado en los tiempos en que el rapto era el origen de la familia, según la leyenda romana de las sabinas, ó en los pueblos del África Central y entre los apaches ó navajoas. Esos maridos tratan á la esposa como esclava *castrense* que pudiera reponerse con otro botín en otro campo de batalla. Los hay menos bárbaros, coetáneos de las épocas en que, ya cimentadas las sociedades, el matrimonio se hace por compra de la hija al padre, como sucedía entre los hebreos de la época patriarcal los germanos de Tácito y los antíguos aztecas. Su trato marital, es mejor que el de los primeros, pero parece que su mujer solo representa para ellos un valor, y que se le ahorran sufrimientos para no menoscabarla como en aquellas épocas. Los esponsales de futuro en la antigua sociedad acompañados de una potestad marital casi señorial eran una persistencia legal de esa etapa en nuestras costumbres domésticas.—Sólo cuando el amor paterno inventó la bijuela femenina, por una parte, y el cristianismo y las costumbres caballerescas por otra inculcaron el respeto á la mujer, el amor fué el origen de la familia y comenzó á ejercitarse la potestad marital con estimación y con cariño.

Pero esta etapa, repito, no es completa en ninguna sociedad. En París mismo y en las ciudades americanas, donde el respeto á la mujer es mayor que en cualquiera otra parte, hay en las clases más cultas, maridos que tratan á la esposa como á hembras de un botín militar de las épocas depredatorias; ó como á esclavas compradas en los bazares de Constantinopla; aunque las principales clases las respeten y cuiden como á las compañeras de la vida y señoras del hogar.

En esa concurrencia de evoluciones, es donde el legislador ejerce sus funciones; pero solo, *extirpando* las formas primitivas, pues es absolutamente impotente por sí mismo para determinar una evolución moral. El hombre llega á amar y respetar á la mujer, cuando los instintos de béstia no predominan sobre los ideales, ora sea por la excelencia de éste ó por la debilidad de aquéllos; y los legisladores son tan impotentes para enoblecer el espíritu de un pueblo, como para abatir su animalidad. Pero pueden extirpar, pueden destruir las formas inferiores, apartando su protección de ellas, considerando nulos sus enlaces, disminuyendo las energías de los que las contraen, aprisionándolos, confiscándoles sus bienes y aun matando en determinadas ocasiones. Así es como paulatinamente eliminan á los rezagados y dejan un campo de expansión mayor á los que por sí mismos marchan á la organización superior de la familia, coadyuvando de esta manera al progreso de la humanidad. Ésta no les debe un sólo sentimiento de altruismo, ni una idea de mejoramiento, ó un sólo arranque de voluntad en el caudal psíquico de ideales, afectos y voluntades que forma el intelectu de un pueblo civilizado. Pero si se han podido esculpir estatuas y edificar palacios y templos; si los sábios han podido descubrir en las evoluciones de microzoarios las causas de las enfermedades; si ha podido la caridad cristiana infundir el amor al prójimo en todo el mundo, y si de los humildes é ignorados se han hecho héroes y mártires de todas las patrias, religiones y filosofías, ha sido porque los legisladores han matado, nulificado, aprisionado, desarmado y privado de sus bienes, de su poder ó de su reputación á los que estorban la marcha noble y firme de las clases evolucionistas.—En los problemas del matrimonio el legislador sigue la misma conducta. Es inútil que prescriba miramientos del marido á la mujer; toda vez que un comportamiento noble requiere delicadeza de sentimientos, que sólo después de largas genealogías de caballeros se consigue; pero puede destruir ó nulificar á los que no están al nivel de la civilidad moderna; y así es como priva de su libertad á los que raptan como los romanos de la leyenda;

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

encarcela y aun suele fusilar á los que asaltan á las mujeres como los apaches en sus correrías; retira su protección de los que van á celebrar sus nupcias ante un párroco como los novios feudales; y quita mujer é hijos al que se convierte en lenón de su hogar como los babilonios. Con este sistema es como ha erijido en delitos y en causas de nulidad, de divorcio, ó de separación de bienes, todos los actos que pudieran colocar á la mujer en la condición de cosa, de animal ó de esclava, que guardó en las sociedades primitivas; pero con eso sólo ha garantizado la supremacia, la prosperidad y la multiplicación de los matrimonios, donde la mujer es tratada con los respetos que merece, por su noble participio de abnegación y esfuerzos en la lucha por la existencia, educando á los hijos, cuidando del hogar y siendo la amiga y compañera del marido, en las sociedades industriales de hoy.

Ahora bien entre los actos que el legislador ha procurado extirpar, para que el matrimonio siga en las condiciones de civilización moderna una marcha natural, hay un grupo muy difícil de precisar; que casi escapa á una definición; que produciendo consecuencias tan graves como un delito no se ha clasificado entre ellos, para imponer una pena á su autor; que siendo más grave que muchas causas de nulidad no pueden disolver un matrimonio y que estando intimamente ligados con las costumbres generales de una sociedad y con las de algunos cónyuges; no siempre constituyen un sistema de conducta que tienda á colocar á la mujer en una condición de esclavitud ó propiedad: pero que en circunstancias especiales se caracterizan; como el comportamiento brutal y soéz, de los maridos prehistóricos. Estos actos son los que se comprenden vagamente en la palabra *sevicia*, y forman el objeto del presente estudio.

I

Designando hechos tan vagos, la palabra sevicia no puede tener un significado preciso, y asi es que aunque técnica no se ha fijado su sentido en las obras de Derecho ni en los artículos de los códigos. Los tratadistas no salen de los términos vagos de *crueldad* excesiva, que su etimología latina expresa, y por consiguiente en uu litigio es considerado como sevicia el mismo hecho que en otros casos no reviste talcaracter; y esta indeterminación no es peculiar á nuestra curia, sino que pone perplexos á los abogados españoles y franceses, á los canónigos católicos, á los ministros protestantes y á los popés de la Iglesia Griega. Los rabinos y talmudistas alemanes se atienen á las decisiones laicas para evitar el caos de sus ejecutorias.[1] En los tribunales sajones se prescinde de la palabra sevicia y se acepta como causal correspondiente de divorcio los malos tratos que ponen en peligro la vida;[2] mientras que en Tlaxcala solo se requiere que el maltrato sea de obra.

No es este un defecto lógico de la Jurisprudencia ni revela una inconsecuencia ó ineptitud de los jueces; sino el resultado indefectible que tenía de aparecer en juicio dada la naturaleza del fenómeno que esta palabra significa. En efecto, conota una calidad, un grado, una clase especial en las relaciones que dos personas, los cónyuges sobre todo tienen entre sí, en su vida doméstica; y esa calidad, clase ó grado de trato; ese coeficiente jurídico que se vá buscando para clasificar un hecho entre las sevicias depende tanto de la clase social, del estado moral y de la cultura intelectual del cónyuge quejoso, como del otro. Es palabra relativa como la de

1 Walker. "Derecho Eclesiástico."
2 Bran Hegener Ver Hess. "Droit Allemande."

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

todo trato; y no habiendo reglas legales que la precisen como en las relaciones diplomáticas ó en las sociales de cortesanía, es indispensable atender, al juzgar de los hechos que como sevicia se quieren presentar, no solo al hecho aducido sino á las circunstancias personales y sociales de los cónyuges.

En efecto, la vida en común del matrimonio varía al infinito según los individuos, su riqueza, raza, profesiones, religión, edades, lugar que habitan, alimentos que los nutren ropas que los cubren etc; y estas diferencias son otras tantas causas que con acción constante, con influencia intermitente, de un modo definitivo ó de uno transitorio hacen que ningún marido se comporte en los detalles de la vida intima como los demás, y como éstos detalles son los que hacen *sentir*; en cada hogar los sufrimientos tanto como los placeres son ocasionados por actos diferentes. No puede por consiguiente admitirse que una clase de actos sea siempre y en todas partes, considerada como sevicia. El cargador, las soldaderas, los cocheros y las mujeres de un figón hacen sus reclamos de amor y manifiestan sus ternezas conyugales con caricias y palabras, que en el hogar de una madre de familia distinguida serían las brutalidades más atroces y la sevicia más cruel. Por el contrario un madrigal onomástico para la esposa, la confesión íntima de una teoria, el juego común de ilusiones para el porvenir, son muestras de indiferencia que repetidas, se tornan en burlas, insultos y *sevicia* en las accesorias del Puente de Chiviritos ó de la Calle de Tecolotes.

En vista de estas diferencias el legislador ha dejado al Juez la facultad de medir, valuar y clasificar los hechos que á su juicio deban ser considerados como sevicia. Pero aunque esta facultad no es absoluta, sino que deben fijársele límites, para que no puedan romper á su antojo los matrimonios que le plazca, clasificando un hecho cualquiera entre las sevicias, los legisladores del matrimonio, apenas han dado un insignificante elemento de criterio para reconocer esta causal de divorcio, al ponerlas en el mismo grupo que las *injurias graves* y las amenazas de un cónyuge para con el otro.[1] En efecto de este precepto solo una consideración negativa se puede desprender: todo lo que pueda clasificarse como injuria grave ó amenaza no es injuria; y viceversa, todo lo que sea sevicia no es injuria grave ni amenaza. Conclusión de mucha importancia para el procedimiento, por la competencia jurisdiccional que resuelve toda vez que las injurias graves y las amenazas con penalidades, que pueden llegar á dos años de prisión, son delitos y la sevicia nunca, pero que no sirve para dar á conocer la naturaleza intrínsica de ese fenómeno, de verdadera patología social que suele presentarse en algunos matrimonios.

Sin embargo como en la vaguedad misma de su etimología (crueldad excesiva), la palabra conota el dolor intencional causado por un cónyuge al otro, el primer elemento, que un juez debe tener en cuenta al clasificar un hecho como sevicia es el de que sin ser punible haga sufrir al cónyuge quejoso. Cuando el dolor no existe, no existe la sevicia; sin poder invertir los terminos; y decir que cuando la sevicia no existe no hay dolor en la vida conyugal; porque en todo matrimonio hay llantos y sufrimientos como consecuencias naturales de la vida; y aun suelen surjir violentas escenas conyugales; pero no siempre tienen como causa la *intención aviesa* de un cónyuge y no son sevicia por lo tanto. Además, es preciso que el dolor en cuestión, no sea un acto justificado de la potestad con que el marido lleva el gobierno de su familia, toda vez que la mujer le debe obediencia, y que para conseguirla á veces sea necesario hacerla sufrir. El dolor que la sevicia presupone, es ante todo un dolor inocente ó inútil: en el caso contrario es justicia ó es coacción.

Aunque las crueldades de un cónyuge para con el otro no

1 Art. 227 frac. VIII del Cód. Civ.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

sean punibles, evidentemente que son contrarios á la armonía y afecto que el matrimonio moderno requiere para la evolución individual de los consortes; pues reduciendo el número de los placeres ó aumentando el número é intensidad de los dolores, que son las únicas maneras posibles de ser cruel, la salud se quebranta, la inteligencia se obscurece, todas las enerjías que puede tener el individuo para luchar con las dificultades naturales de su *habitat* se relajan, y no puede alcanzar el desarroyo que permite el medio en que se vive. Es cierto que un acto aislado por nocivo que se le suponga no puede producir consecuencias tan funestas mientras no sea delito; pero el mismo resultado puede conseguir con la repetición de actos en apariencia baladies, ó con una conducta sistemáticamente aviesa, que variándolos en su objeto, motivos aparentes y circunstancias, produzcan al cabo como resultado uniforme un sufrimiento, haciendo grave y acaso insoportable el *peso* de la vida, según la expresión de Portalis.

Esta expresión legal, es sin embargo muy vaga, pues no precisa los conceptos que deben tenerse, para saber que clase de sufrimientos son los que podrían constituir una sevicia, ni las ideas que deben tenerse respecto de la vida, que ella califica de una carga.—La vida natural del hombre lo mismo que la de todo animal, es como dice la inducción darwuiniana, no una *carga*, sino una verdadera lucha, en la que cada aptitud desarrollada, cada músculo vigorizado, y cada víscera perfeccionada es la consecuencia de un triunfo, por el que perecieron otro ú otros animales; y este caracter nulitar de la existencia, subsiste en los salvajes, en los bárbaros y en la etapa conquistadora de los pueblos civilizados. Pero en el interior de éstos, desde que la vida civil aparece, para algunos continúa siendo una lucha; pero ya no para las clases pasivas que evolucionan lejos de los negocios públicos, ó de la competencia del capital y del trabajo, forma económica de

la lucha, en la etapa industrial de las sociedades. La población se divide entónces en dos grupos: uno activo y militante: entre sus miembros se disputan gobiernos, honores, trabajos y provechos: el éxito de unos es á expensas de otros y todo placer está basado en un sufrimiento ageno. Son combatientes en realidad, y aunque, en una forma superior, para ellos continúa siendo la vida una lucha encarnizada y sin cuartel.

Pero los esclavos, los siervos que les reemplazan en las primeras etapas del trabajo y subsisten aún con distintos nombres en varias regiones, los sirvientes, las mujeres bajo potestad en los países españoles y otros, no luchan nunca: y con excepción de las reacciones fisiológicas é inconscientes del organismo contra los microzoarios del habitát, ó los que sacrifican en sus alimentos, su evolución no perjudica á ningún ser y su existencia, por consiguiente, no puede compararse á una lucha, sino más bien á una carga como lo califica Portalis. Pero lucha en unos casos y carga en otros, en ambas formas la vida requiere esfuerzos constantes que uniformemente tienden al desarrollo del individuo y á la perpetuación de la especie. La vida, es pues, jurídicamente considerada la série de actividades que tienden á realizar estos objetos; y como en el grupo de pueblos cristianos esto sólo puede conseguirse, por la ayuda mútua de los cónyuges, los sufrimientos que la sevicia implica, deben ser los que directa ó indirectamente, pero de una manera eficáz pueden impedir la conservación del otro cónyuge y la producción de nuevas generaciones.

El fenómeno, es pues, por su naturaleza misma el indeterminado y no sólo la palabra, sevicia; puesto que para decidir si un hecho debe considerarse como tal, es preciso medir los efectos últimos de un estado netamente sujetivo, *el sufrimiento*, y qne aunque forma la base de la filosofía jurídica de Bentham, no siempre se puede valuar; sino por con-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

jeturas; pues el acto que á un individuo puede serle fatal, por la intensidad del dolor que ocasione puede ser insignificante ó tolerable para otro. Hay sin embargo, algunas condiciones generales en las que salvo el caso de anomalías en la sensibilidad, un acto puede presumirse que ataque la conservación del individuo.

El dolor ya sea psíquico ó fisiológico produce perturbaciones en la respiración, retardando su ritmo y suspendiéndolo á veces; lo mismo que el cardiaco. Los alimentos repugnan y se dificulta la digestión, las secreciones aumentan, la sensibilidad de los otros nervios disminuye y se altera la motricidad. No es rara la hipocondría en los individuos que sufren mucho; y la tristeza, la cólera, el abatimiento, disgusto de la vida, miedo, la locura y el suicidio pueden ser los grados sucesivos, de intensidad en los efectos destructores del dolor. De éstos, sólo la palidez, el grito, el sudor, las convulsiones y el síncope son alteraciones visibles é inmediatamente revelados como efectos ocasionados por el sufrimiento, pues son sus reflejos fisiológicos; mientras que las perturbaciones intelectuales y las manifestaciones psiquiátricas que ocasionan á la larga escapan á la verificación inmediata, pues casi siempre se producen, por un efecto acumulativo de varios dolores continuados. Pero tanto los unos como los otros son funestos para la salud, el carácter ó la inteligencia de la víctima; y ese fenómeno de destrucción definitivo es pues el elemento objetivo del dolor que debe exigírse como prueba de la sevicia. En los juicios en que se aduce habrá razón, por consiguiente, para decretar el divorcio, si se comprueba el sufrimiento intenso ó repetido de uno de los cónyuges, patentizando las alteraciones psíquicas ó fisiológicas que ocasiona, y si se demuestra que ese dolor tiene por causa la conducta aviesa del otro cónyuge.

II.

Precisada la característica de la sevicia, por sus efectos patológicos se percibe que sus términos abarcan muchas de las causas que el Código Civil considera como motivos legales de divorcio distintas de ella; y en realidad no hay inconveniente en considerar esas causales como verdaderas sevicias, pues se han aceptado como motivos para disolver un matrimonio, precisamente porque fustran los fines del matrimonio resolviéndose en sufrimientos injustos que hacen mas pesada la *carga* de la vida, á la víctima y pueden determinar la extinción de una extirpe ó malas procreaciones.

El marido que hace á su mujer propuestas de prostitución, la incita á delinquir ó á corromperse; el que á sus hijos tolera en la corrupción; el que abandona casa y familia dejándo todo en desamparo; el que no provee á la alimentación; el que los acusa ante los tribunales; el que se embriaga y el que juega, consuetudinariamente; y hasta el demente ó el afectado de enfermedad incurable y contagiosa: son en realidad autores de sevicias al cometer cada uno de aquellos actos; y aunque en los dos últimos casos no haya una intención aviesa, los cónyuges que así se comportan infligen sufrimientos muy graves á sus consortes, pudiendo frustrar la perpetuación directa ó indirectamente de la especie, pero de una manera irremediable. No habría pues, inconveniente en formar un solo grupo con todos ellos y estudiarlos juntos; pero toda vez que por consideraciones de procedimiento se han clasificado en otras tantas causales y por su naturaleza jurídica cada una requiere probanzas especiales; sólo me ocuparé de los actos que se acostumbran considerar como una *especie* jurídica entre todas las causales de divorcio. Pero como sus límites no son precisos es de advertir que si un acto puede considerarse á

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

la vez como sevicia y como alguna de las otras causales de divorcio, es preferible clasificarlo entre éstas porque tienen una prueba directa y no conjetural como la sevicia. En el caso de golpes producidos en estado de embriaguéz, por ejemplo, ó en el de falta de medicaciones, ocasionada por el juego, etc., es más fácil probar la embriaguéz y el juego directamente, que las consecuencias últimas y probables de los golpes y de la miseria.

El grupo indeterminado de hechos que jurídicamente constituye la sevicia no es pues en realidad sino un resíduo de una enumeración lentamente formada por los legisladores al reunir todo lo que puede frustrar un matrimonio y que separado de aquellos, puede dividirse en tres clases diferentes: privación de placeres, injurias leves y golpes; pero cada una de éstas sólo tiene importancia en una clase social determinada, pues por sí misma ninguno de esos actos es sevicia. Es pues indispensable analizar los requisitos que cada una debe llenar para que puedan justificar un fallo de divorcio, comenzando por la privación sistemática de los placeres.

El Código Civil considera la vida, según ya vimos, como una carga, y en verdad que muchos matrimonios viven con tantos esfuerzos, la lucha por la existencia les es tan ruda y el fruto de su trabajo es tan exíguo, que sus efectos son muy parecidos á los de un fardo agobiador, que necesita de las fuerzas combinadas de ambos cónyuges, para que no aniquile con su gravedad las energías aisladas de cada uno. Desde el jornalero que con un ruin salario apenas logra una escasa alimentación vegetal, un rincón húmedo donde dormir y unos métros de manta ó *ayate* para envolver sus carnes, más bien que para cubrirlas; hasta el banquero que recorre en landeau abierto las avenidas de la Capital, todos tienen que emprender esfuerzos constantes para vivir. Pero así como hay familias que jamás conocen el placer, más allá de los sexuales, que les brinda un abyecto contubernio, hay otra clase social, que si no está exenta del dolor, acapara una gran parte de los goces que brinda la vida, y sus sufrimientos son menos frecuentes y menos intensos que en las otras.

Ahora bien, sólo en esta clase podría considerarse como sevicia la privación sistemática de los placeres; pues necesitándose en los demás, como en un naufragio, de los esfuerzos combinados de ámbos cónyuges para no perecer, ni tiempo, ni dinero, ni deseos sobran para disfrutar de los placeres de la vida. Ridícula sería la esposa de un albañil cargada de hijos que demandara en divorcio á su marido porque no la llevara á las tertulias de los Ministros, ó porque siquiera no la abonara á la galería de un teatro de barrio. Pero cuando la clase á que pertenece la mujer es de las que no tienen necesidad de trabajar para vivir, porque tiene bienes suficientes de fortuna para emplear sus actividades en puras diversiones, como sucede en la que se ha llamado aristocracia del dinero, la privación continuada é inmotivada del placer, es un sufrimiento cruel, que puede ocasionar consecuencias muy graves en el matrimonio, hasta convertirse en enfermedades ó producir su disolución por el adulterio.

En efecto; viviendo en palacios cuya arquitectura las hace disfrutar de los placeres más refinados del espíritu, impresionando la retina con la perspectiva de las columnatas, las molduras de los arquitrabes y los matices del mármol, donde tiemblan aguas cristalinas de fuentes murmuradoras: abrigadas de la intemperie por las más ricas sedas del Oriente ó la más fina peletería: satisfechas sus necesidades de conservación con los productos más exquisitos de los huertos y los campos, los bosques y los ríos: mimadas por deudos, acatadas por empleados y servidumbres, aduladas por extraños y admiradas por las multitudes que las consideran como el más distinguido ornato de teatros y paseos, y como el obje-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

tivo real de muchas festividades, las señoras de la aristocracia, cuando son jóvenes, y hermosas y necesitan la vida de las diversiones y placeres, como la única función del espíritu, que su organismo *surnourrit* puede desempeñar. Todo en la vida tiende á hermosear y perfeccionar su cuerpo, y como no tienen en que emplear sus fuerzas físicas é intelectuales, se convierte su sistema nervioso en un acumulador de energías, que si no se gastan en la gimnástica del baile ó en las charlas insustanciales, pero interminables de sus tertulias se tornan en accesos de histeria, cuyas explosiones acaban con los afectos de familia, á la larga corrompen la moral y quebrantan la salud; y esto de una manera tanto más inevitable, cuanto que esas reclusiones casi siempre están acompañadas de un desamor creciente y de un olvido de los deberes conyugales.

En estas clases sería por consiguiente procedente una demanda de divorcio, si el marido, sin razón y sólo por el deseo de hacer sufrir á su mujer la privara de los placeres y diversiones á que su fortuna le da derecho. Pero debe advertirse que no por esto está obligado á acceder á todos los caprichos de su compañera, y á convertirse en un inútil gomoso de salón y asíduo *chevallier cervant* de su esposa. pues siempre que la dignidad de uno de los cónyuges ó de ambos lo exigiera cuando la diversión fuera incorrecta ó poco adecuada á su posición social, ó cuando hubiese alguna otra ocupación preferente y real que reclamase la atención del marido, la privación de placeres no sería aviesa, por sistemática que se presentara y no podría por consiguiente constituir una sevicia en las clases que viven de sus rentas.

Fuera de ellas en ninguna otra familia puede consistir la sevicia en la falta de diversiones ó placeres; porque en todos los demás matrimonios, si el marido necesita ganar el pan de la familia, la mujer debe gobernar la casa; y pocos momentos quedan para las diversiones y placeres de la calle, aún en los

días festivos debiendo quedar al arbitrio marital el ir á diversiones ó prescindir de ellas.

Al calificar esta clase de sevicia deben tenerse en cuenta las distintas maneras de sentir que tienen las señoras de las clases acomodadas; pues las diversiones que constituirían placeres vivísimos para unas, serían molestias y hasta sufrimientos insoportables para otras. Llevar á una verbena de los Angeles por ejemplo á la esposa de un ministro; ó al contrario, convidar á una ópera de Wagner á la audición de un cuarteto de arco ó á música de cámara á una obrera enriquecida y esposa del dueño de taller donde ganó su vida; sería ocasionar á unas y otras molestías insoportables: lo mismo que si se sujetara á una señora mexicana á vivir en las diversiones y hábitos de una extranjera. Las mexicanas inclinadas por lo general á la reclusión, que salen poco, visitan raras veces hasta á su misma familia y más les parecen las tertulias compromisos que diversiones. Su gran apego al hogar hace, que gusten de vestir más bien con comodidad que con elegancia dentro de casa, y procuran vigilar directamente á sus hijos y servidumbres. Para ellas sería por consiguiente un sufrimiento hacerlas vivir como las americanas, que por su temperamento sanguineo necesitan la vida *out door*, la vida de la calle, y que aceptan cualquiera diversión que en ella encuentran, con tal que las obligue á salir de de sus habitaciones: La vida de diversiones de una, sería por consiguiente de sufrimientos para las otras.

En suma cuando el placer es imposible porque no se puede pagar, porque el marido no puede desatender las ocupaciones que sostienen el mismo ocio de su mujer, ó porque la mujer no es afecta á él, la sevicia no puede consistir en su privación.

Pasemos al grupo de las injurias. Ya en el Siglo XII, los jurisconsultos de Valladolid decían que la injuria consiste, en

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

la deshonra que es fecha ó dicha á otro, á tuerto ó á despreciamiento del, no tan sólo por palabras, más aún por cántigas ó rimos ó dictados malos de los que han sabor de infamar, por remedijos, contenentes malos, etc; y ésta definición de la injuria ha persistido á través de los tiempos, aunque hayan cambiado las frases y manera de injuriar. (Part. 7ª Tit. 9º Ley 1ª.)

En efecto en el Siglo XV fué una injuria muy grave decirle á otro *gafo* ó *leproso*, lo mismo que en el siguiente, calificarlo de *marrano* ó *castellano nuevo:* por la misma época las expresiones inglesas de *whig*, y *tory* que después han sido designaciones honoríficas de partidos políticos, eran calificadas de muy injuriosas; los habitantes de Astracan se creían muy ofendidos cuando se les llamaba *tatari*, que es el nombre de la tribu que dá su nombre á la Gran Tartaria: Julio César para reprimir una sedición llamaba desdeñosamente *quirites* á sus legiones rebeladas, y entre los franceses de hace veinte años era muy gravemente injuriado aquel á quien se llamaba *petrolero*. Hoy por el contrario, la caricatura y coplas satíricas ponen en exhibición pública los defectos ó flaquezas de cualquiera y nadie se daría por denostado entre nosotros si le llamara *tátari, gafo, petrolero* ó *whigh*.

La injuria pues, no tiene una expresión característica é invariable que sirva para precisar el concepto que deba tenerse de este delito, sino que varía con los tiempos y lugares. Depende pues, lo delictuoso de esta infracción penal, más que del hecho mismo, de las ideas que la sociedad tiene sobre el significado de la palabra que se reputa como injuriosa; y como nuestra sociedad está dividida en muchas clases, si nó legalmente, si por ló que respecta á su vida doméstica, se deduce, que esta opinión no es uniforme, sino lo que para una es injuria, para otra no lo es; y la injuria que unos califican de gravísima, otro grupo social la considera

como palabras sin sentido ó simple disparate. Es pues, imposible hacer una separación exacta entre las injurias leves y las graves, y sólo estudiaré por consiguiente las condiciones generales en que puede manifestarse desprecio á una mujer casada por su marido.

Es verdad que en todos los idiomas puede expresarse un insulto y manifestarse desprecio para otro, con todo el refinamiento que la malignidad puede desear; pero el castellano tiene sobre los demás idiomas que se hablen en las colonias extranjeras de México, francés, italiano y alemán; una superioridad enorme en el caudal de su vocabulario soez. Abunda además en juramentos y locuciones obscenas que la gente baja emplea como instrumento ordinario de conversación; trasladando las voces que significan algun acto de la generación ó vicios sexuales á cualquiera otro de los fenómenos naturales. Es quizás esta tendencia un resíduo atávico de épocas casi pre–históricas, en que las religiones fálicas explicaban los fenómenos de la naturaleza por las leyes de la generación, que predominaron en la Lidia, Fenicia, Tiro, Cártago, Palenque, Teotihuacán etc., y que á traves de los siglos se ha depositado en las clases bajas del pueblo español y de sus criollos, sin encontrarse en los otros pueblos que son extraños á los orígenes púnico fenicio y mexicano. Pero sea la que fuere la causa de este fenómeno, la tendencia se observa hasta en personas de muy elevada posición y refinada urbanidad; pues llegan á permitirse un uso franco de voces obscenas, sin hablar de una función sexual tan pronto como se encuentran fuera de la presencia de señoras, entre amigos ó entre personas á quienes reputan sus iguales. En algunas poblaciones de la costa, y en algunas costas extranjeras del golfo de México, ese hábito es tan arraigado, que las expresiones obscenas llegan á usarse en intimidad de las familias, para reprender á los sirvientes, á los mucha-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

chos, ó para manifestar ira ó entusiasmo, al referir un acontecimiento, que los haya emocionado de cualquiera otra manera.—Si se reflexiona por último, en que hay otros individuos atacados de verdadera *coprolalia* (*Κόπρως estiercol* y *λαλἐω hablar*) es decir, que tienen gusto en hablar de cosas puercas, se comprenderá que en muchos casos, un lenguage soez, sucio ú obsceno no es manifestación de desprecio; y que por consiguiente no podrá considerarse como injurioso y tampoco como sevicia, sino en tanto que por su clase ó educación los cónyuges no estén acostumbrados á él.

Sin llegar á estos límites extremos de la incivilidad hay una manera vulgar de expresarse, sin fórmulas ni reticencias que lastima al que está acostumbrado á emitir sus ideas en las delicadas de una urbanidad escogida. Los que asi se expresan no solo desconocen el mal efecto que producen sino que se vanaglorian de su manera de hablar, que llaman franqueza, aunque no sea sino una manera llana y desagradable que se convierte con frecuencia en verdaderas *groserías*. Para una señora fina y acostumbrada á las formas exquisitas del buen tono, es un verdadero sufrimiento, oir hablar constantemente de todos los pensamientos que pueden preocupar la mente de un hombre burdo y oirle expresar sus juicios con las palabras castizas, pero toscas que le corresponden en el vocabulario soez, sin quitar á los epitetos ó verbos la crudeza de su significado; y más desagradable aun, ver que el mismo criterio se extiende á todas las maneras aboliendo toda clase de miramientos y cortesías, necesarias en el matrimonio, principalmente para conservar la estimación mútua de los cónyuges, y una tolerancia pacífica, cuando se han perdido el amor y la armonía de los primeros tiempos. Esta franqueza de gañanes lastima á señoras de educación refinada, y sus frases, ademanes, posturas, juicios; órdenes repetidas momento á momento en una forma tosca y ruda etc;

pueden producir un sufrimiento tan vivo, que la legislación francesa y varias de las alemanas la han considerado como una causa especial de divorcio, que designan con el nombre de imcompatibilidad de caracteres.

Como en el régimen democrático en que vivimos cada día son más numerosos los obreros y artesanos que llegan á altos puestos sociales y políticos; y como á la inversa, son más numerosos cada día los miembros de familias distinguidas, que por cualquiera convulsión económica descienden á una posición inferior; los matrimonios entre personas de educación diferente son cada día más frecuentes, y en ellos esa manera más ó menos tosca é incivil de comportarse, puede constituir una serie de injurias, que pronto dan al traste con el amor conyugal de los primeros tiempos.

La contingencia es tanto más importante, cuanto que la actual crisis monetaria está determinando de una manera creciente, una muy considerable inmigración de capitalistas europeos, que habiendo contraido matrimonio en su patria suelen presentar casos legales de esta especie, en lo que se llama *messalianças y matrimonios morganáticos* aunque de éstas solo en la nobleza; y como el divorcio entre extranjeros se pronuncia más bien por motivos de interés que de afecto fácil es que como causa real ó supuesta se aduzcan hechos de esta especie. El Juez debe por consiguiente aquilatar con mucho escrúpulo la sevicia en casos semejantes; porque estas uniones no son un concubinato como vulgarmente se cree, sino matrimonios perfectamente lícitos, que originan derechos conyugales, siempre que se hayan contraído entre un miembro de la alta nobleza y otro de una inferior, burgués ó plebeyo.

Pero no es necesario apelar á casos exóticos para confirmar la tesis; pues hay en nuestra sociedad hechos de la misma especie y mucho más frecuentes de lo que parecen. En la Villa de Chalco murió ha poco un indio labrador

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

á los setenta y cinco años de edad, que siempre andaba vestido de manta blanca, camisa y calzoncillos, ayate enrrollado á guisa de cinturon, sombrero de palma, tilma en invierno ó en tiempo de lluvias y huaraches. Comia sentado en el suelo, como todos sus paisanos, no bebia sino agua en la comida, dormia en un petate y cuando se ponía de viaje procuraba hacerlo á pie con bastimento de *gordas enchiladas*. Al morir sus bienes se valuaron en $ 800,000.—En el pueblo de Milpa Alta hubo otro caso parecido: se celebraba una boda á la que asistió el novio, su familia é invitados con el traje de etiqueta, que se usa en la capital. La novia, famosa por su belleza fué vestida por las mejores modistas pero á penas terminaron las ceremonias se quitó el velo, el traje nupcial y las riquísimas alhajas con que la adornaron sus padres, descendientes de la antigua nobleza india, hizo un envoltorio de todas sus prendas en un ayate, y se vistió con *tapextle* y *huaraches*, traje que conservó por muchos años sin quererlo cambiar por uno de saya y botines como el que usan nuestras señoras.

Los indios fueron tan vejados por el gobierno español, y los indios, los criollos, y los extranjeros lo han sido tanto por pronunciados, gobernantes, ladrones, caciques, bárbaros etc. que muchos han tenido que aparentar pobreza y vivir durante generaciones en hábitos de miseria y humildad muy distintos de los que corresponderían á sus verdaderas condiciones económicas y sociales.

En resumen; la sevicia que consiste en injurias, puede confundirse con hábitos desagradables pero inocentes de hablar y de obrar. Para caracterizarla se debe atender por consiguiente á los usos y costumbres de las distintas clases socia les, para lo cual es preciso que el Juez por su vida privada ó por la práctica de su jurisdicción haya aprendido á distinguirlas.

La última forma que puede revestir la sevicia, son los golpes; pero en éstos es preciso hacer tambien distinciónes muy importantes. Los golpes no son punibles, según es bien sabido, mientras sean simples y no causen escándalo. De suerte que si la sevicia no fuese una causa de divorcio, un marido podría sin incurrir en delito, golpear á su antojo á su mujer á puerta cerrada; y así sucede con frecuencia, sin que en ello haya muchas veces la más leve injuria, pues por paradojal que parezca el hecho. hay mujeres que gustan de ser golpea das, y en tales casos los golpes no pueden ser sevicia. En efecto, así como el golpe está separado de la lesión por una cantidad inapreciable de fuerza muscular, está separado de la caricia por una cantidad más insignificante de fuerza muscular igualmente; de suerte que cuando los cónyuges, de cualquiera clase que sean, y por cualquiera motivo no, han evolucionado lo suficiente para con vertirse de simple *varon* y *hembra en caballero* y *señora*, sus celos, su amor y sus caricias tienen que ser rudas y brutales como los de cualquier animal. La mujer inconscientemente sigue entónces una conducta atávica insulta en sus negativas, rechaza con brutalidad, se debate, huye, grita y forcejea para entregarse como premio de la fuerza bruta; de la misma manera que una salvaje de los Sioux ó Comanches, una Tulsneda de la Germania antigua, las sabinas de la leyenda romana ó una de aquellas vírgenes guerreras de los normandos, que cubiertas de acero, yelmo y escudo, con el hacha de armas defendían su honra, de un *bezerkir* escandinavo; y no se rendían sino al que á fuerza de mandobles les rompía la coraza y las vencía en lid abierta. Por el estilo son las mujeres que tienen un exuberante desarrollo muscular á expensas del sistema nervioso, acróbatas, lavanderas, criadas, obreras, tortilleras etc. En ellas con mucha frecuencia el beso se convierte en mordida; la caricia en bofetada, el abrazo en lucha, el idilio de amor en verdadera riña y de esto depende que cuando alguien llega á intervenir

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

en escenas semejantes queriendo amparar á la mujer por creer que es víctima de una brutalidad del marido, ella es la primera en protestar y en rechazar la ingerencia pacificadora.

En matrimonios donde los conyuges sean de complexión recia y de poca cultura, la sevicia no es por consiguiente posible por medio de golpes; pero en el caso de personas finas y de sistema nervioso delicado, serían por el contrario la más brutal de todas, el último grado á que el desamor podría llegar sin convertirse en delito, y que reclamaría la intervención enérgica é inmediata de los jueces.

III

En la práctica de los tribunales aparece con todos sus inconvenientes la falta de precisión en una ley; pues á la vaguedad ó amfibología de las palabras corresponden arbitrariedades y á veces escandalosas iniquidades, tanto más terribles cuanto más íntimos son los actos de la vida que la ley pretende reglamentar. Asi es como por los juicios de divorcio la tranquilidad de las familias y su subsistencia bajo la potestad de un jefe honorable suelen quedar á merced de veleidades femeniles, gracias á la deficiencia de nuestros códigos, á la ignorancia de muchos abogados, y á la inmoralidad creciente y contagiosa de tinterillos y curiales de baja estofa. En efecto, según nuestro sistema legal, cualquiera juez puede arrancar mujer é hijos á un marido, siempre que un fútil disturbio doméstico encuentre eco y simpatias en algún tinterillo; y bien sabido es, que si la suceptibilidad histérica se irrita al más leve desaire, los oidos de esos *bravi* de la curia están al acecho de todas las quejas para alquilar sus malicias á todas los infamias. Ahora bien nada es más fácil que un despecho mujeril, nada más rápido que la oficiosidad de un tinterillo ó de muchos abogados

tan ignorantes como estos, y nada más procedente que una demanda de divorcio, con la substracción forzada de hijos y mujer; con la intervención ruinosa del fondo conyugal; con tutelas criminales sobre la infancia y adolescencia de los hijos, y hasta con matronas imfames que al acecho de una gestación clandestina supongan partos, los oculten ó substituyan infantes.

En efecto, el Código Civil (art. 244) previene que al admitirse la demanda de divorcio se separe á los cónyuges, se deposite á la mujer, se ponga á los hijos al cuidado del cónyuge inocente, se intervenga el fondo común, se secuestren los de la mujer y se vigilen por jueces, secretarios, un agente del ministerio público, escribientes actuarios, en suma por todos *menos por el marido*, que debe estar separado, la gestación y alumbramiento de su esposa. Ahora bien como la demanda no requiere prueba, sino mucho después, se pueden aseverar en el primer escrito las más viles mentiras; y sin más motivo ni requisito legal, el Juez con todo el apoyo de la fuerza pública si es preciso, decreta la separación, disuelve el hogar, infama al marido y le ocasiona su ruina y desesperación. Esta contingencia téorica de la ley se ha convertido, muchas veces en realidades desastrosas; y creo que ya es tiempo de que tanto los jurisconsultos honrados, como los jefes de familia mediten en esos hondos vacios de nuestra legislación, que pueden producir todas las ruinas y desesperaciones de la sociedad.

Desde luego es de advertir que aunque el artículo citado manda que *provisionalmente* y *sólo mientras dura el juicio* puedan subsistir las determinaciones mencionadas, no hay medio legal de poner término á esa situación *transitoria;* sino que por el contrario, á fuerza de recusaciones, incompetencias, apelaciones, amparos, etc. puede prolongarse por años enteros el depósito de la mujer en manos extrañas, la corrup-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

ción de los hijos, lejos del padre, y el manejo fraudulento de las riquezas propias, sin que llegue á promoverse ni á rendirse una sóla probanza, que justifique los hechos aseverados en la demanda, como constitutivos de la sevicia, que se invoca para pedir el divorcio. Es pues indispensable que los legisladores abran los ojos y pronto reformen la ley en este punto, sin esperar que sea oportuna la reforma en *block* de todo nuestro cuerpo de Derecho Civil.

A mi ver debe fijarse un término perentorio para la presentación de la demanda si la separación se pidió como medida urgente; así como otro improrrogable para probar la sevicia alegada, y ámbos bajo una sanción penal, solidaria al patrono y al litigante que aleje de los hogares desavenidos á esos merodeadores de la paz doméstica y de la honra. En segundo lugar, debe exigirse que en la demanda ó en el escrito en que se solicite la separación urgente, se separen y especifiquen con determinación de tiempo y lugar los hechos que se consideren constitutivos de la sevicia; la naturaleza peligrosa de los que requieran las medidas de depósito é intervención en los negocios y familia del demandado; y los que no reclamen esta ingerencia sino cuando el fallo se halla ejecutoriado. Creo que la limitación asignada en el Código de Tlaxcala, maltrato de obra, sería un buen requisito para los primeros, dejando toda la latitud de maltrato de palabras, y privación de placeres para los segundos. Además, y ya que no podría para estos casos exigirse un documento justificativo de la demanda, debería decretarse préviamente una información testimonial, una inspección judicial, un dictámen pericial, ó cualquiera otra medida rápida que sirviera de principio de prueba é hiciera presumir la justificación de esas disposiciones precautorias pero terribles. De esta manera se daría tranquilidad y garantías á los litigantes y á la sociedad, por lo que respecta al principio del juicio.

En la dilación probatoria debería hacerse una reglamentación *ad hoc* pues la prueba en estos juicios es muy complexa y jamás debe recaer sobre la *sevicia* misma, sino sobre sus elementos constitutivos: que son la *malignidad del cónyuge culpable, el sufrimiento de la víctima, su frecuencia ó intensidad* y *el carácter de la mujer*. Una vez demostrados estos hechos, el Juez sería el que *infiriera* si había habido sevicia ó nó; pues ésta es una resultante, una calificación jurídica de la *vida* conyugal comprobada en juicio.

Por otra parte, si es verdad que la ley no debe limitar la prueba, pues tanto equivaldría á prescribir un método forzado de demostración, debería investigarse de oficio; pues la naturaleza social del matrimonio requiere que una vez desavenido sus efectos no se rijan sólo por las promociones de los cónyugues sino por decretos judiciales que amparen á la víctima y salven á la prole. Para esto es indispensable encontrar la *verdad real*, la *científica* de los hechos y no la *legal* que muchas veces es una especie de mentira en los asuntos civiles; y la prueba por consiguiente debe participar más de la naturaleza del enjuiciamiento penal que del civil. La confesión pues no debe practicarse en la forma restringida de posisiones, sino en la de examen ámplio y minucioso hecho por el Juez para investigar el carácter del culpable, y del quejoso, más bien que para comprobar un hecho; pues la existencia de éste nunca depende de declaraciones que en estos casos forzosamente están alteradas por los intereses y sentimientos más graves. No debe por consiguiente admitírsela, sino en tanto que esté corroborada con el resto de la *instrucción*. A la testimonial debe concederse la misma amplitud practicando de *oficio* los careos que resulten sin limitarla á las preguntas de los interrogatorios, repreguntas, tachas y á la ocasión elegida por las partes. La prueba pericial y la documental si pueden recibirse en la forma acostumbrada, pues el punto técnico de la primera, y la preexis-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

tencia de los documentos que forman la segunda, hacen imposible que se desvirtúen por modalidades ú oportunidades de enjuiciamiento.

Ni estas modificaciones bastarían sino que deberían concretarse más los requisitos de las probanzas, según fuera el hecho constitutivo de la sevicia que se analizara. Desde luego la malignidad del móvil, el carácter avieso de la conducta marital tendría que *inferirse*, pues las intenciones escapan á la observación directa, y como fenómenos subjetivos solo se conocen por sus actos concomitantes. La prueba de confesión sería inútil por consiguiente, y sólo podrían servir las demás, haciéndolas recaer sobre éstos. Para determinar si los actos incriminados ocasionaron sufrimientos á la mujer, también deberían rendirse probanzas indirectas: sirviendo el examen de la quejosa solo para conocer su carácter la clase social á que pertenece; su educación, ilustración, sentimientos etc; y la documental, pericial, testimonial y de inspección para corroborar los sufrimientos que de ese examen se presumieron pues salvo el caso de una perturbación patológica visible no debe admitirse prueba directa sobre ellos.—La intensidad del sufrimiento, deducida de una conducta constante ó de actos aislados y de lo criminoso de su repetición sería pues la apreciación jurídica *única* que quedaría al arbitrio judicial; pues ninguna regla general podría dictarse á ese respecto. Pero para que esa apreciación sea correcta, los jueces y agentes del Ministerio Público que conocen en litigios de esta especie no deben ser solteros, ni frecuentar lugares de mal vivir, porque el criterio se falsea juzgando á una señora por la sensibilidad de las mujerzuelas; ó juzgando de las intimidades conyugales por los episodios de un soltero.

A mi ver sólo de esta manera podrían dictarse fallos racionales y equitativos que salvaran á la familia; pero en los términos que están nuestras leyes sería una reforma inútil,

pues la reconcialiación nulificaría cualquiera resolución judicial, y la mujer ofendida por miedo al aislamiento da con mucha facilidad su perdón. Ahora bien, como la sevicia en su más lata acepción no sólo perjudica á la mujer, sino que produce consecuencias fatales á la familia, á la *sociedad* y á los hijos por lo que respecta á su educación y fortuna; debería decretarse el divorcio absoluto.

Porqué no?—La indisolubilidad del matrimonio se estableció como barrera de moralidad en los pueblos cristianos que contuviera el espantoso libertinaje de los matrimonios romanos. Después fue santificada por la Iglesia para oponerla á las poligamias de los árabes y de los turcos, cuando ya en estas naciones las poligamias mismas se habían corrompido; y en las cortes de Bagdad, Córdoba y Alejandría, los serrallos se habían convertido en sentinas de vicios, y sumidero de todas las energías de los primeros califas. La reacción asceta exageró todos los principios de moral y para volver á formar al padre legal, y conseguir la reproducción de las familias, fue necesaria la indisolubilidad del vínculo aun á expensas de todos los sufrimientos y tiranías domésticos. Por otra parte, éstas fueron tiranías necesarias; pues organizada la sociedad bajo un pie de guerra y sin más civilización que la que cabía en el cerebro rudo de los bárbaros feudales, el germanismo naciente se implantaba como un aduar primitivo, donde el pater familias es, y tiene que ser ún jefe militar en su familia misma.—Pero después que la raza se moralizó con el ascetismo, con la caballería, con la necesidad de genealogías limpias para la sucesión del poder, y las riquezas; después que las condiciones de guerra, pasaron y llegó la vida industrial ya no es necesario que la mujer sea una sierva. El cristiano de hoy con las necesidades psíquicas de idealismo y amor, que la poesía le ha desarrollado con los recursos limitados de una vi-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

da fundada en el salario: y con los instintos paternales de razas progresistas que hacen soñar en los vaivenes de una cuna la forma más noble de sus esperanzas, se ha hecho monógamo de corazón, y no admite más mujer que la esposa, ni más hijos que los del hogar. Los afectos conyugales y filiales han vuelto á germinar al amparo del cristianismo, y hoy aunque se predicara y tolerara la poligamia ó las orgías públicas de Babilonia, serían rechazadas por la sociedad entera. Los libertinos no son sino sus desechos, sus productos enfermos que no representan las tendencias de un país.

Las sociedades más sabias, más sanas, más prolíficas, más morales; las que como una avanzada de progreso invaden hoy toda la tierra, desde los valles del Himalaya, hasta los oasis del Egipto, desde los ríos congelados de los circulos polares, hasta los golfos tropicales y los archipiélagos de todos los oceanos, son los que tienen en su hogar una esposa amada y respetada: los pueblos esclavos, teutones y sajones. Ellos prolifican generaciones poderosas, al amparo de una legislación que admite divorcio absoluto para los matrimonios frustrados. En cambio los pueblos católicos, heridos de una inmoralidad esterilizadora, decretan con timidez simples separaciones de cuerpos, dejan á la prole sin protector, á la esposa sin un varon que la ayude á recorrer la vida; y por eso, tienen extirpes menos numerosas, trababajan menos, saben menos y su influencia en el planeta vá en decadencia.

En México pocos divorcios se decretan; pero sin juicio, ni fallos hay muchas separaciones definitivas; y si el matrimonio no es sino la reglamentación del amor, para que el individuo evolucione y las sociedades se reproduzcan—¿porqué la ley no ha de legalizar nuevas uniones, donde pueda encenderse el culto de un nuevo hogar á cuyo calor nazca el porvenir en la forma de niños que corren y que ríen?—En los pueblos sajones de una divorciada se hace una esposa, en los católicos, una predestinada á la prostitución; y por un cambio de circunstancias la misma indisolubilidad del matrimonio, que se inventó para salvar á la sociedad de una disolución orgiástica suele ser una causa de concubinatos clandestinos: el mismo príncipio que ántes hacía de una presunta ramera una esposa, hoy puede hacer una ramera clandestina de una esposa desgraciada, arrancándole juventud, belleza, posición social, reputación, hijos y bienes en provecho de un imbécil, de nn gañan, de un libertino, de un lenon, de un ébrio, acaso de un impotente, de un loco ó de un criminal.

Sea pues absoluto el divorcio cuando por una instrucción severa y minuciosa se comprueba que un marido no es sino el tirano de su esposa; y que la ley devuelva á la víctima con su libertad, el derecho de evolucionar en nuevos hogares, salvándola de libertinos, ó de convertirse en una beata enflaquecida por viudeces que no existen y por no tener un señor para su casa, un padre para sus hijos, ni un consejero para sus tribulaciones.

México, Abril de 1898.

Lic. Julio Guerrero.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

SOCIEDADES ANONIMAS.

PROYECTO DE LEY POR EL LIC. JACINTO PALLARES.

Sr. lic. Pedro Azcue,
diputado al congreso de la unión.

Presente en México, Marzo 15 de 1898.

Estimado compañero:

Como miembro de la comisión del Congreso encargada de dictaminar en el proyecto de ley presentado á la misma Cámara sobre responsabilidades penales en los fraudes que se cometen en las sociedades anónimas, se dignó usted consultar mi opinión; y después de una amigable conferencia, ofrecí á usted hacer un estudio de ese proyecto, ampliándolo á toda la materia de sociedades anónimas, y prometí á usted formar un proyecto de ley reglamentaria de esa clase de sociedades.

Cumplo mi ofrecimiento, presentando á usted ese proyecto y una exposición explicativa de los principios adoptados en el mismo.

I

Es de lamentar que la materia de sociedades anónimas, como todas las demás en que se ocupa nuestro código de comercio, haya sido reglamentada de una manera tan deficiente, contradictoria y obscura que ocasione, no solamente disputas jurídicas en el foro, sino que facilite el fraude y deje en la incertidumbre puntos capitales de derecho; es de lamentar este triste estado de nuestra legislación, porque cuando se publicó nuestra código de comercio vigente, copia casi servil del español, las corrientes de producción literaría y científica que iluminaban todos los problemas de derecho mercantil eran tan abundantes y variadas, que casi no había necesidad de otro trabajo que el de alargar la mano para asimilarse las doctrinas clarísimas y justas de autores eminentes y convertirlas en fórmulas legales, redactando un código original, apropiado á nuestras instituciones y dotado de unidad lógica y de armonía en el plan general de su espíritu.

Sea de ello lo que fuere, el hecho es que se prefirió copiar un código extranjero, mutilándolo sin cuidarse de la lógica, é incrustando elementos extraños y empíricos que ocasionan dificultades prácticas en su aplicación y litigios inútiles.

Y puesto que se trata de aumentar los defectos de ese código en la parte que trata de sociedades anónimas, en lugar de hacer un remiendo que aumente las dificultades y confusiones, creo será más útil adoptar una ley que abarque toda esa materia para dar unidad y claridad á esa rama del derecho de tan frecuente aplicación en la vida moderna.

II

Lo primero que debe hacer una ley que se ocupa de regular un acto de la vida civil ó un contrato, es fijar las condiciones *esenciales* y las condiciones *naturales* de ese acto, para que todo el mundo sepa con claridad cuál es el acto regido por esas leyes. ¿Qué clase de contrato es la sociedad anónima, cuáles son los elementos *esenciales* que constituyen una sociedad anónima? Hé aquí lo primero que debe fijar la

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

ley y lo que he procurado consignar en el primer capítulo del proyecto, describiendo con toda claridad las condiciones intrínsecas y extrínsecas, de sustancia y de forma que deben existir, para que pueda existir el contrato de sociedad anónima y las formalidades jurídicas de esa sociedad.

La definición que acepto es tan clara, que no necesita ninguna explicación; y las condiciones de forma que exijo son tan necesarias y tan universalmente se hallan aceptadas por todas las legislaciones y por la doctrina, que sería ocioso defenderlas. Una sociedad anónima es un nuevo ser jurídico, una nueva persona civil que nace en el seno de la vida legal. El hombre físico proclama con sólo su existencia material su existencia jurídica; pero un *ser jurídico* no existe, ni debe existir, sino mediante el aparato externo de formas solemnes que anuncien su existencia, para que todos los miembros de la comunidad sepan que hay ese nuevo ser que entra en el juego de las relaciones jurídicas de la convivencia humana. Y la ley debe cuidar de que esas formas solemnes se llenen con todo rigor, porque si tratándose de otra clase de sociedades en que hay responsabilidades *personales*, no puede aceptarse la *separación jurídica de patrimonios* que entraña la aparición de una sociedad sin que ésta compruebe su existencia, esto es, el momento en que naciendo á la vida civil adquirió el dominio de ciertos bienes que salen del patrimonio de los socios, con más razón debe exigir la ley esa comprobación auténtica de que hay un ser civil, propietario de bienes determinados, dotado de derechos y capaz de obligaciones, cuando se trata de una entidad en que no hay responsabilidades personales, en que el patrimonio y sólo el patrimonio social es el que está afecto á las resultas de las obligaciones y responsabilidades contraídas.

Tal vez sería conveniente que en las formalidades y comprobaciones de hechos necesarios para la constitución de la sociedad, interviniera la autoridad judicial en vía de jurisdicción voluntaria; pero es tan deficiente y vaga en nuestras leyes de enjuiciamiento la reglamentación de la jurisdicción voluntaria, que para evitar abusos y dificultades, sería preciso, traspasando los límites de una ley de sociedades anónimas, ingerirse en esa reglamentación lo que sería peligroso.

III

La mayor parte de los artículos del proyecto y sobre todo aquellos que son una simple reproducción de los preceptos de nuestro código y de casi todos los códigos del mundo, no necesitan comentario y me detendré por lo mismo en explicar únicamente aquellos que contienen una novedad.

He precisado cuales son los derechos de los socios, y entre ellos he consignado (art. 14 frcs. IV, V y LII) el principio de que los socios individualmente tienen acción para exigir el cumplimiento del contrato social, la nulidad de la Asamblea y la responsabilidad civil y criminal de los administradores y comisarios cuando estos violen el contrato social; así como también que es derecho irrenunciable anticipadamente de los mismos, votar en las Asambleas y ser citados á ellas.

En este punto me aparto de la tradición que niega á los socios acción aisladamente para exigir la responsabilidad civil de los administradores y que sólo concede esa facultad á las Asambleas; pero en todos los autores en que he buscado la explicación de esa anomalía (porque luego demostraré que lo es) no encuentro otra razón que la de que no es conveniente que un sólo individuo arrastre á un litigio á la sociedad y perturbe su marcha tranquila y serena, cuando sus actos y los de su representante cuentan con la aprobación de la mayoría de los socios en las Asambleas. Pero los mismos autores ó expositores que así defienden esa anomalía, aceptan, arrastrados por la necesidad de reprimir abusos, que cuando hay

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

delito civil, pueden tener acción individual los socios ó las minorías. En nuestro derecho no existen delitos civiles, y aunque alguna vez, en una consulta que dí á clientes de Coahuila, acepté la doctrina de *delito civil* para fundar el derecho de la minoría á impedir abusos fraudulentos de la mayoría, la verdad es que nuestras leyes no aceptan ese camino, ni cabe la aplicación de esas doctrinas extranjeras; y que bajo el absolutismo y tiranía de las mayorías de una Asamblea quedan sacrificados y burlados los derechos de las minorías, siendo casi siempre difícil, si no imposible, demostrar el fraude y connivencia de esas mayorías, el interés de ellas en oprimir á las minorías y la facilidad que tienen de violar los estatutos y sancionar actos reprobados de los representantes de las sociedades.

Yo creo que antes de ocurrirse á sanciones penales cuya aplicación es difícil porque el delito se encubre con formas jurídicas, lo más sano, lo más lógico, lo más jurídico es conservar á los socios sus derechos *naturales*, entendiendo por *naturales* los derechos que se derivan de la esencia del contrato social. Por más que una sociedad anónima sea formada de centenares y aun de millares de socios, el hecho es que los *derechos* y las obligaciones de éstos emanan de un contrato, que ese contrato es obligatorio para todos ellos, que nadie debe violarlo, y que todo socio como todo contratante, tiene derecho adquirido por el contrato á exigir que se cumpla este contrato, y que la *esencia* del contrato es precisamente ese derecho recíproco de los contratantes.

Todas las leyes reputan inmoral, imposible, absurdo, un contrato en que se deje á la voluntad de uno de los contratantes, el cumplimiento de las obligaciones contraídas (art. 1,278 Cód. Civ.) ¿Y que otra cosa sucede cuando se obliga á las minorías á sujetarse á la votación de las mayorías en los acuerdos que aprueban actos de la violación del pacto social por los administradores y la violación de las leyes del mandato

que desempeñan, librándolos de toda responsabilidad? Pues simplemente sucede que esas minorías han convenido en que las mayorías que son una de las partes contratantes, decidan á su arbitrio sobre el cumplimiento del contrato social sacrificando los derechos de las minorías.

Yo siempre he combatido en los tribunales ciertas interpretaciones abusivas é inicuas que dan á preceptos análogos de nuestras leyes. Cuando ellas preceptúan, por ejemplo, (art. 121 código de comercio) que todas las cuestiones, sean ó no de administración, se resolverán por mayoría de votos, expresan á renglón seguido que ese precepto debe entenderse *sin contrariar los derechos adquiridos* por los socios, en virtud del pacto social, lo que demuestra que las mayorías decidirán si debe ó no hacerse tal ó cual negocio social, un empréstito, una hipoteca, una enagenación, etc., porque precisamente las operaciones sociales deben hacerse por alguien, á riesgo de que la sociedad se aniquile en la inercia; pero una cosa es que las mayorías califiquen y decidan soberana y aun *arbitrariamente* la utilidad y conveniencia de los actos y operaciones que deben efectuarse, pues no es posible otra forma de acción cuando hay pluralidad de individuos, y otra cosa es que esas mayorías dicten acuerdos no sólo contra lo que es útil y conveniente, sino contra el pacto social, barrenándolo, violándolo, vulnerando los derechos positivos de los socios, los derechos convencionales, los que constituyen el contrato, la bilateralidad de la convención, no simplemente las apreciaciones de conveniencias.

Ahora bien, la única razón que puede darse y se ha dado para establecer una anomalía jurídica, (pues lo es que los derechos, la esencia de las estipulaciones bilaterales del pacto social queden á merced del arbitrio de uno de los contratantes, que lo es la mayoría respecto de la minoría,) la única razón que se invoca es el peligro de que la sociedad se vea arrastrada á un litigio y perturbada en su marcha por el carácter

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

díscolo de un socio. Pero ese peligro está alejado, eliminado, casi destruido con las resoluciones que consagra el art. 54 del proyecto. En primer lugar el socio que promueva un litigio, debe dar una caución *judicatum solvi*, debiendo además pagar una suma aún en el caso de no ser condenado en costas; y con semejante precaución onerosísima para el socio disidente, es seguro que nadie se atreverá á promover un litigio, sino siendo notoria la violación del pacto social, ó cuando es notorio el *dolo* de los administradores y notorio por lo mismo el dolo y las maniobras fraudulentas de la mayoría, sancionando el dolo de los gerentes.

Por eso y de acuerdo con este sistema de prudencia y conciliación entre los derechos de la minoría y los abusos punibles, se restringe el derecho de los socios que obran aisladamente, preceptuándose que no tienen acción los socios para exigir responsabilidad de los administradores por simples faltas ó culpa ó negligencia, pues esto queda al soberano criterio de las Asambleas.

Obedeciendo á los mismos criterios filosóficos y de justicia, se establece que es derecho irrenunciable en los estatutos de los socios, votar en las Asambleas. Los socios, todos los socios, cada uno de ellos es un contratante, es un miembro de la sociedad; y privarlo del derecho de votar, es privarlo de uno de los derechos más *esenciales* del contrato social, del derecho de nombrar los mandatarios de su propio negocio y de tomar parte en las resoluciones que afectan el fondo del pacto social. Un socio privado de este derecho, casi no es socio, no es contratante no es *copropietario* de los bienes sociales, puesto que otros, sin su anuencia, pueden disponer de esos bienes y administrarlos á su capricho.

Si se considera que el número crecido de accionistas es una dificultad para la reunión periódica de Asambleas, lo más justo para salvar esas dificultades, será aumentar el valor de las acciones, dividir el capital en fracciones más altas; pero

nunca llamar accionista al que no tiene los derechos más esenciales de todo accionista, de todo socio; y es nombrar sus mandatarios y modificar el pacto social. Además, conservando el derecho de cada socio para tomar parte en las Asambleas, se evitarán mayorías fraudulentas sin necesidad de llegar á sanciones penales, pues éstas consisten sobre todo en forjarse propietario de varias acciones, cuando los estatutos no conceden voto sino al que sea poseedor de cierto número de acciones.

IV

En otro orden de ideas se han introducido en el proyecto algunas novedades que lo son en nuestro derecho, pero que ya no lo son en las legislaciones europeas.

Se consigna que no pueden emitirse acciones al portador si no son liberadas, lo cual se halla adoptado ya en leyes extranjeras y con mucha razón, pues desde el momento en que no son liberadas, el accionista queda oculto ó desconocido, se libra de toda responsabilidad y puede con plena certidumbre estar esperando los beneficios, sin cumplir sus compromisos sociales. La caducidad de las acciones que no paguen, no es sanción suficiente, pues casos habrá en que sea más provechoso para el accionista perder el diez por ciento que pagó, que aportar el 90 por ciento que debe, cuando quizá ese 90 por ciento es decisivo para los intereses sociales.

Han existido dificultades para registrar las sociedades de minas, porque exigiendo el código bajo pena de nulidad que se fije en el pacto social el monto del capital, no puede cumplirse con este precepto en dichas sociedades, en atención á que el valor de un fondo minero es aleatorio y á que los accionistas aviadores contraen á veces la obligación de dar aportes indefinidos según lo exijan las eventualidades de la explotación. He creído resolver estas dificultades con lo pre-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

venido en la fracción II del art. 3° generalizando el propósito de ese precepto, para toda clase de negocios aleatorios como la explotación de un privilegio industrial, de un descubrimiento etc.; teniendo en cuenta que toda sociedad anónima es mercantil, pues las acciones que emite están destinadas á circular como valores de especulación, en las bolsas ó en el mercado.

He procurado fijar un punto omitido en las legislaciones y es el relativo á los derechos y obligaciones entre fundadores ó sindicato fundador y suscritores; pues no creo que el que seriamente suscriba una acción, pueda libremente burlar su compromiso.

He aceptado un principio adoptado ya en las leyes extranjeras y en nuestra ley moderna de instituciones de crédito, á saber: que no puede haber sociedades anónimas sino con el mínimum de siete accionistas. Este principio está consignado en varios preceptos (art. 3º fracción III, art. 3º fracciones I, 22, IV, 28 y 57) del proyecto de acuerdo con la tradición de la ley inglesa, de donde lo copió la ley francesa de 23 de Mayo de 1863 y la belga de 1873. Varias razones han dado los autores para justificar ese precepto ó limitación que pueden verse explicados en la obra de Duay *De la Constitution des Sociétés par actions*. Entre nosotros, además de las razones expuestas por los autores, existe la de que pueden cometerse fraudes al fisco y burlarse las leyes sobre desamortización, forjando sociedades anónimas que no existen.

De todos modos, la naturaleza jurídica de estas sociedades, su esencia misma, su objeto económico, es incompatible con el hecho de que subsista una sociedad cuando todas las acciones han venido á ser la propiedad de un individuo.

Se han consignado preceptos muy claros y reglas que parecerán de mucho pormenor á propósito de la liquidación de las sociedades, dándose alguna intervención desconocida á la autoridad judicial. Pero es preciso tener en cuenta, para

comprender la justicia y conveniencia de esos preceptos, que las sociedades anónimas son séres ficticios, esto es, que no existe responsabilidad civil *personal* de nadie por las operaciones lícitas, y que el público tiene derecho á saber cuando muere una sociedad, cuando deja de existir esa persona moral, como tiene derecho á saber cuando ha nacido. Las mismas razones que hay para exigir la comprobación auténtica de la existencia ó nacimiento de la sociedad, la hay para exigir que se compruebe su desaparición. Tratándose de personas físicas, la ley ordena que intervenga la autoridad en la liquidación de su patrimonio, citándose á los herederos y acreedores; pues lo mismo parece que debe suceder tratándose de la muerte de una sociedad anónima cuyas responsabilidades pueden ser y son siempre más extensas y graves que las de un individuo, y es preciso prevenir fraudes y asegurar los derechos de terceros que pueden ser multitud de personas desconocidas.

La ley inglesa autoriza á los acreedores y á los accionistas para exigir que la liquidación sea judicial aun fuera del caso de quiebra. (*Adolfo Selim. Aperçu de la loi anglaise.*)

V

Para concluir, diré á usted que es un simple esbozo de proyecto el que le presento; y es claro que necesita ser estudiado para llenar sus deficiencias, corregir sus contradicciones y perfeccionar su redacción.

Pero creo que tiene la ventaja del método, de la unidad y de la lógica ó filiación y encadenamiento de sus preceptos.

Al estudiarse, se encuentran todas las materias que debe comprender una ley sobre sociedades anónimas, ordenadas, clasificadas por sus naturales divisiones, eslabonadas por su mutua relación, y así es ya más fácil descubrir los de-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

fectos, vacíos, antinomias y llegar á la formación de una ley completa, justa, clara y que armonice los derechos individuales con las libertades que reclaman las grandes empresas, los hombres de iniciativa que de buena fe buscan los medios de concentrar los capitales necesarios para explotar las innúmeras riquezas de nuestro país.

Y esa conciliación ha sido el único propósito con que, obedeciendo los deseos ó indicaciones de usted, he consagrado algunos ocios de mi trabajosa vida profesional, á la confección del siguiente proyecto.

México, Marzo 15 de 1898.

J. Pallares.

DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS.

CAPITULO I.

DE LA NATURALEZA Y CONSTITUCIÓN DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS.

Art. 1º La sociedad Anónima es la reunión convencional de valores pertenecientes á varios asociados, para formar un capital destinado á un objeto de lucro lícito, bajo las siguientes condiciones:

I. Que el capital se divida en fracciones iguales representadas por títulos impresos que contengan las enunciaciones que exigen los artículos siguientes:

II. Que dichos títulos y los derechos que representen, sean trasmisibles por endoso si son nominativos, ó por simple entrega si son al portador.

III. Que los asociados ó acionistas no estén obligados por las responsabilidades sociales, sino hasta el importe de su acción.

IV. Que dichas sociedades en su carácter de personas morales distintas de las personas de los asociados, deben estar representadas por el mínimun de administradores que fija esta ley; y

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

fectos, vacíos, antinomias y llegar á la formación de una ley completa, justa, clara y que armonice los derechos individuales con las libertades que reclaman las grandes empresas, los hombres de iniciativa que de buena fe buscan los medios de concentrar los capitales necesarios para explotar las innúmeras riquezas de nuestro país.

Y esa conciliación ha sido el único propósito con que, obedeciendo los deseos ó indicaciones de usted, he consagrado algunos ocios de mi trabajosa vida profesional, á la confección del siguiente proyecto.

México, Marzo 15 de 1898.

J. Pallares.

DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS.

CAPITULO I.

DE LA NATURALEZA Y CONSTITUCIÓN DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS.

Art. 1º La sociedad Anónima es la reunión convencional de valores pertenecientes á varios asociados, para formar un capital destinado á un objeto de lucro lícito, bajo las siguientes condiciones:

I. Que el capital se divida en fracciones iguales representadas por títulos impresos que contengan las enunciaciones que exigen los artículos siguientes:

II. Que dichos títulos y los derechos que representen, sean trasmisibles por endoso si son nominativos, ó por simple entrega si son al portador.

III. Que los asociados ó acionistas no estén obligados por las responsabilidades sociales, sino hasta el importe de su acción.

IV. Que dichas sociedades en su carácter de personas morales distintas de las personas de los asociados, deben estar representadas por el mínimun de administradores que fija esta ley; y

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

V. Que no podrá tener la sociedad ninguna razón social, pues solamente será designada por su objeto.

Art. 2º Todo pacto en contrario á las condiciones fijadas en el artículo anterior, importa la nulidad de la sociedad y la responsabilidad consiguiente, con arreglo al capítulo 4º de esta ley.

Art. 3º Sea cual fuere la forma en que se constituya la sociedad, no se considerará legalmente formada, ni tendrá personalidad jurídica, ni podrá hacer ninguna clase de operaciones, sino hasta que se llenen los siguientes requisitos:

I. Comprobación ante Notario de estar íntegramente suscrito el capital por personas capaces y de haberse depositado en un Banco, ó á falta de éste, en una casa de comercio el diez por ciento en efectivo, correspondiente á cada una de las acciones que representan numerario.

II. Comprobación ante Notario y aprobación de la Asamblea constitutiva, de la existencia, disponibilidad y valor de los muebles é inmuebles y otros valores, que no sean efectivo y que se introduzcan como parte ó totalidad del capital social. El importe de estos valores estará forzosamente representado por acciones totalmente liberadas; pero si el capital social consistiere en todo ó en parte en fundos mineros ó en otro valor aleatorio, podrá distribuirse ese valor en partes alícuotas iguales, representadas por acciones que así lo expresen, y dividirse el capital en acciones pagadoras y liberadas, expresando con toda claridad el máximum que deben aportar las primeras.

III. La aprobación ante Notario por la Asamblea constitutiva del *convenio social* ó de los estatutos, y debiendo ser convocada y funcionar dicha Asamblea en los términos prevenidos en el capítulo 3º de esta ley y debiendo tener los estatutos ó convenio, los requisitos que exije el art. 7º Si el convenio social fuere otorgado por siete socios y contuviese los demás requisitos exigidos en las anteriores fracciones, se

considerará constituida la sociedad, una vez hecha la inscripción y designados los administradores.

IV. Designación en la Asamblea constitutiva ó en el convenio social, de los administradores de la sociedad; y

V. Inscripción en el registro de Comercio del testimonio de las constancias protocolizadas á que se refieren las fracciones anteriores, no debiendo hacerse la inscripción si se ha omitido alguno de los requisitos mencionados. Si la oficina respectiva rehusare indebidamente hacer el registro, ocurrirán los interesados á la Secretaría de Justicia para que resuelva lo conveniente, y contra esa resolución procederá el recurso de amparo constitucional.

Art. 4º La comprobación á que se refieren las fracs. I y II del artículo anterior, consistirán respectivamente en el certificado de depósito, en el dictamen de dos peritos que declaren bajo protesta legal, ó en la fe que dará el Notario de la existencia de los valores y sus títulos de propiedad.

Art. 5º Los suscritores al capital social contraen la obligación para con los fundadores ó iniciadores, de sostener su compromiso siempre que concurran las siguientes condiciones:

I. Que llegue á suscribirse íntrego el capital fijado en el programa, dentro de un término fijo que determinará el mismo programa.

II. Que la Asamblea constitutiva apruebe los estatutos, concurriendo cuando menos siete accionistas ó suscritores.

III. Que la suscrición conste por escrito, expresando el número de acciones suscritas; y

IV. Que el programa contenga las enunciaciones de que habla el art. 7º

Art. 6º En caso de que un suscritor se rehuse á cumplir su compromiso, quedará á elección de los fundadores ó de la sociedad, declarar caduco su derecho, si dentro de ocho días

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

de interpelado ante Notario ó por los periódicos, no cumple; ó exigirle judicialmente la obligación contraída.

Art. 7º El convenio social ó los estatutos deben contener necesariamente las siguientes enunciaciones:

I. Los nombres, apellido, domicilios y capacidad civil de los accionistas, que serán siete cuando menos, que concurrieren á la Asamblea constitutiva y el resultado de la votación: ó el nombre, apellido, domicilio y capacidad legal de los siete socios que otorgaron la escritura social:

II. La denominación de la sociedad, su objeto y duración:

III. La naturaleza y monto del capital social con arreglo á las fracs. I y II del art. 3º

IV. La forma en que deben ser nombrados los administradores de la sociedad, observándose lo prevenido en los arts. 23 frac. I y 29.

V. La designación ó nombramiento de los administradores que deben funcionar desde luego:

VI. El importe del fondo de reserva y tiempo y forma en que deben distribuirse las utilidades y pérdidas.

VII. La participación que los fundadores se hayan reservado de las utilidades, la cual podrá estar representada por títulos nominativos ó al portador; pero nunca podrá gravar al capital, ni los poseedores de dichos títulos serán considerados como accionistas á dicho capital.

VIII. La forma en que deben convocarse y votar los accionistas en las Asambleas.

IX. Los casos en que debe disolverse anticipadamente la sociedad; y

X. El tiempo y forma en que debe liquidarse la sociedad á su conclusión.

Art. 8º La Asamblea constitutiva no puede sin aprobación unánime de los suscritores ó accionistas presentes y de los fundadores, modificar los estatutos contenidos en el programa en las prevenciones que contengan relativas á los puntos enunciados en las fracciones II, III, IV y VIII, del artículo anterior; y sin consentimiento de los fundadores respecto del punto contenido en la frac. VII.

Los demás pormenores de los estatutos, pueden modificarse por mayoría de votos.

Art. 9º Una vez constituida la sociedad anónima, los socios administradores entran por ese sólo hecho en posesión de todos los bienes y valores que forman el capital, pudiendo exigir su entrega con arreglo á la ley.

Art. 10. Toda sociedad anónima es mercantil y queda sujeta, por lo mismo, el Código de Comercio y leyes relativas; el acto de suscribir acciones de una sociedad anónima también es mercantil.

Art. 11. Es nula y causa de responsabilidad, con arreglo á esta ley, la emisión y circulación de acciones, antes de estar constituida la sociedad en los términos prevenidos.

CAPITULO II.

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS.

Art. 12. Los derechos de los socios estarán representados por títulos impresos que se llamarán acciones, y expresarán:

I. El objeto, domicilio y denominación de la sociedad.

II. La fecha de la emisión de la acción.

III. La fecha del contrato social ó de la aprobación de los estatutos y el nombre del Notario que protocolizó esos documentos.

IV. La cantidad que representa, si es en numerario, y que no podrá bajar de diez pesos; ó la parte fraccionaria que represente en el caso del art. 3º frac. II, parte final:

V. Si es nominativa ó al portador:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

VI. La firma de los administradores de la sociedad.

VII. El importe del capital social, ó los valores que lo forman en el caso de la parte final de la frac. II, art. 3º, y el número de acciones en que dicho capital está dividido:

VIII. Si es liberada ó pagadora, y la exhibición que se haya hecho en este último caso.

IX. No se podrá emitir ninguna acción al portador, si no está completamente liberada, esto es, pagado su importe. La infracción de este precepto nulifica la *acción* y es causa de responsabilidad civil y penal con arreglo al cap. 4º de esta ley.

Art. 13. Las acciones que carezcan de los requisitos exigidos en el artículo anterior, no son documentos mercantiles ni pueden por lo mismo negociarse con ese carácter. Los contratos que sobre ellas celebren los interesados, se regirán por las disposiciones del derecho civil, siendo responsables de los daños y perjuicios que origine la falta de formalidades á los que hayan adquirido dichas acciones de buena fe.

Art. 14. Toda acción es indivisible en el sentido de que los derechos que confiera, sólo pueden ser ejercidos por un individuo.

Art. 15. Son derechos de los socios que no podrán nunca renunciarse anticipadamente:

I. Transmitir por endoso si son nominativas, ó por simple entrega si son al portador, sus respectivas acciones, exceptuándose las de que hablan los arts. 32 frac. I.

II. Tener parte en las utilidades, en los términos de los estatutos ó convenio social.

III. Tener parte en la distribución proporcional del capital libre, cuando llegue el caso de disolución ó liquidación social.

IV. Votar en las Asambleas, personalmente ó por apoderado, ser citado para ellas y nombrar los administradores

de la sociedad, en los términos que fijan esta ley y los estatutos.

V. Exigir judicial ó extrajudicialmente, el cumplimiento de las estipulaciones sociales ó de los estatutos en los términos que fija esta ley; y

VI. Nombrar comisarios de vigilancia en los términos que fija esta ley ó los estatutos ó convenio social; no pudiendo los socios ejercer personalmente actos que según esta ley, deben ser ejecutados por los comisarios.

Art. 16. Son obligaciones de los socios ó accionistas:

I. Reportar proporcionalmente al importe de su acción ó con arreglo á los estatutos y al pacto social, las responsabilidades que haya contraído legalmente la sociedad.

II. Sujetarse á las decisiones de la Asamblea y Consejo de Admistración, con arreglo á los estatutos ó al convenio social.

III. Entregar á la sociedad las exhibiciones que se acuerden con arreglo á los estatutos ó pacto social.

Art. 17. La transmisión de las acciones implica la transmisión tanto de los derechos como de las obligaciones al nuevo poseedor, quedando libre él ó los anteriores.

Pueden, sin embargo, pactarse expresamente en el convenio social ó en los estatutos, que los accionistas fundadores ó los tenedores de acciones nominativas, quedan obligados á cubrir el importe de las acciones no liberadas que hayan suscrito en caso de insolvencia del actual poseedor, ó de ignorarse quién sea.

Art. 18. En todo caso la sociedad tendrá derecho, á pesar de cualquier pacto en contrario, de declarar caducas y sin valor alguno, las acciones cuyos poseedores, previa las formalidades de los estatutos, ó pacto social, no cumplan con entregar las exhibiciones decretadas.

Art. 19. Los acreedores, en caso de quiebra de la sociedad, ejercerán directamente en los términos de la ley de en-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

juiciamiento, los derechos que la sociedad tenga contra los socios.

CAPITULO III

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS.

Art. 20. La administración y régimen de las sociedades anónimas corresponde, sin que valga pacto en contrario:

I. A las Asambleas de accionistas.

II. Al Consejo de Admistración; y los administradores pueden nombrar un mandatario ó gerente.

III. A los comisarios.

Art. 21. Los estatutos ó pacto social podrán establecer otros funcionarios ó agentes, determinando sus atribuciones; y los administradores pueden nombrar un mandatario ó gerente.

Art. 22. Las Asambleas de accionistas son constitutivas, ordinarias y extraordinarias. No es lícito el pacto en que se priva á los accionistas del derecho de ser citados y votar en las Asambleas.

Art. 23. Los estatutos ó el convenio fijarán la forma en que las Asambleas deben funcionar y ser convocadas; pero siempre será esencial para la validez de dichas Asambleas.

I. Que si son ordinarias, se haya fijado en los estatutos ó convenio social el día, hora y lugar en que debe reunirse, y el asunto que debe tratarse.

II. Que si son extraordinarias ó deba cambiarse el día, hora y lugar de las ordinarias, se cite con quince días de anticipación por avisos publicados tres veces seguidas ó alternadas, en el periódico oficial de la capital del Estado, Distrito ó Territorio federal en que tenga su domicilio la sociedad, expresándose el lugar, día y hora de la asamblea y su objeto con toda especificación, si fuere extraodinaria.

III. Que los acuerdos y resoluciones sean aprobados por mayoría de los votos presentes; excepto en los casos en que esta ley ó los estatutos ó pacto social exijan mayor número de votos. Los votos se computarán por acciones.

IV. Que para que haya *quorum* se halle representada en la Asamblea más de la mitad del capital social; pero si la Asamblea legalmente citada no tuviere lugar el día señalado, se repetirá la convocatoria y en la segunda junta bastará la concurrencia de siete socios.

Art. 24. Son facultades de las Asambleas constitutivas, las enunciadas en los artículos conducentes de esta ley.

Art. 25. Son facultades de las Asambleas ordinarias:

I. Nombrar y remover libremente á los administradores; exceptuándose los nombrados en la Asamblea constítutiva ó convenio social que podrán ser designados como inamovibles por un término que no pase de tres años.

II. Aprobar ó reprobar las cuentas anuales de administración y determinar la forma en que debe exigirse la responsabilidad civil ó criminal á los administradores, nombrando representantes para ese objeto.

III. Discutir y aprobar ó modificar el balance general, previo informe de los comisarios.

IV. Reformar los estatutos en el caso de la parte final del art. 24, frac. VI.

V. Fijar los emolumentos que corresponden á los individuos del Consejo de Administración y á los Comisarios.

VI. Ejercer las demás atribuciones que le confieren los estatutos ó pacto social; no pudiendo nunca asumir la representación civil de la sociedad que siempre corresponderá al Consejo de administración ó junta Directiva nombrada ó que se nombre.

Art. 26. Se necesita, sin que valga pacto en contrario, el voto unánime de los socios que representen dos tercios del capital, para tomar las siguientes resoluciones.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

I. Disolución anticipada de la sociedad, salvo el caso del art. 54, frac. III.

II. Prórroga de la duración de la sociedad.

III. La fusión con otras sociedades.

IV. La reducción ó aumento del capital social.

V. El cambio en el objeto de la sociedad.

VI. El cambio de las cláusulas de los estatutos ó pacto social; á no ser que ellas mismas hayan facultado á la Asamblea para hacer esas modificaciones con menor número de votos.

VII. Hacer empréstitos emitiendo *obligaciones* negociables.

Art. 27. Los acuerdos de que habla el artículo anterior, serán protocolizados y registrados bajo pena de nulidad y responsabilidad de los que no cumplan con esa obligación en los términos del art. 4º de esta Ley.

Art. 28. La unanimidad de los socios acuerda soberanamente en todo lo relativo á los negocios de la sociedad, salvos los derechos de tercero y las leyes de órden público.

Art. 29. En el caso de que no lleguen á reunirse siete socios para constituir una asamblea ordinaria, se considerará disuelta y se procederá con arreglo al art. 57 y siguientes.

Art. 30. El Consejo de Administración ó Junta Directiva representa judicial y extrajudicialmente á la sociedad y está facultada para ejercer todos los actos y acciones civiles y crimiminales que correspondan á la sociedad y todos los actos de administración.

Art. 31. El Consejo de Administración toma sus resoluciones por mayoría de votos y debe por lo mismo estar formado en todo caso por un número impar de personas. Los miembros del Consejo de Administración son reelegibles.

Art. 32. Los poderes del Consejo de Administración concluyen con el período para que fué nombrado.

Art. 33. En caso de acefalía del Consejo de Administración los miembros restantes deben convocar inmediatamente una Asamblea extraordinaria para llenar las vacantes; y á falta de esta convocatoria los comisarios ó cualquier socio tiene derecho para pedir judicialmente en vía de jurisdicción voluntaria se haga dicha convocatoria.

Art. 34. El Consejo de Administración está obligado:

I. A depositar como garantía de su manejo un número de acciones pertenecientes á cada miembro de dicho Consejo, que fijarán los estatutos, y las cuales serán forzosamente nominativas y expresará su inalienabilidad y se depositarán en la caja social.

II. A convocar las Asambleas ordinarias, y la extraordinarias para el caso de disolución anticipada de la sociedad; procediéndose en caso de omisión como previene el artículo relativo.

III. A cuidar de que se lleven los libros que la ley exige á todo comerciante y además dos libros legalizados, uno para las actas del mismo Consejo, y otro para las actas de la Asamblea que serán firmados por dicho Consejo y por los socios que asistan á las Asambleas, si quieren firmar.

IV. A llevar un registro ó libro talonario de las acciones al portador y nominativas que se emitan, las que serán numeradas progresivamente, anotándose respecto de las segundas los endosos que se hagan.

V. A inscribir en el registro público los documentos relativos á la Constitución de ls Sociedad y á los cambios á que se refiere el artículo relativo.

VI. A convocar Asambleas extraordinarias á petición por escrito de un número de accionistas que represente la tercera parte del capital, siempre que se exprese el objeto ó cuestiónes que deben someterse á deliberación.

VII. A presentar anualmente, primero á los comisarios y después á la Asamblea, el balance general y la cuenta de administración con una exposición sobre el estado de los ne-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

gocios, para que la Asamblea ejerza las facultades que le conceden la ley y los estatutos.

VIII. A publicar cada mes en el periódico oficial del Estado, Distrito ó Territorio del domicilio social, un estado con el balance del activo y pasivo de la Sociedad.

IX. A publicar en el mismo periódico los estatutos ó convenio social dentro de un mes de la constitución definitiva de la sociedad; así como también en el mismo plazo respectivamente las modificaciones de que habla el art. 24.

X. A ejecutar los acuerdos ligítimos de las Asambleas y respetar las limitaciones que los estatutos ó pacto social hayan puesto á su mandato.

XI. A separar de las utilidades netas de la Sociedad una parte que no bajará del 5 por ciento para formar el fondo de reserva hasta que haya alcanzado á lo menos la quinta parte del importe del capital social; debiendo ser reconstituido dicho fondo de la misma manera cuando haya disminuido por cualquier motivo.

XII. A cumplir las demás funciones que les señala la ley ó los estatutos y pacto social.

Art. 35. El Consejo de Administración ó sus miembros respectivamente no pueden:

I. Ser mandatarios ó representantes de los socios en las Asambleas generales.

II. Votar en las resoluciones que afecten su responsabilidad personal ó la aprobación de sus cuentas y actos de Administración.

III. Repartir á los accionistas más utilidades que las que verdaderamente resulten del balance. Una vez distribuidas las utilidades, no están obligados los socios á restituirlas, salvo el caso de colusión ó complicidad dolosa con los autores de una distribución fraudulenta.

IV. Representar á la Sociedad ú obrar en nombre de ella en los negocios en que tengan personalmente interés directo

ó indirecto, á no ser con autorización expresa en cada caso de la Sociedad.

V. Comprar ó adquirir para la Sociedad las propias acciones de esta á no ser: 1º que sean totalmente liberadas y se adquieran con beneficios que no estén destinados al fondo de reserva con aprobación de la Asamblea: 2º cuando la adquisición se haga en virtud de autorización expresa consignada en los estatutos ó pacto social; y 3º cuando se haga con el capital social observando las formalidades establecidas para la disminución del capital social. Los títulos adquiridos en el primer caso no podrán figurar en las Asambleas ni computarse en la votación, y los adquiridos en los dos últimos serán cancelados ó anulados.

VI. Hacer préstamos ó anticipos sobre las acciones de la Sociedad.

VII. Emitir ó circular acciones antes de estar constituida legalmente la Sociedad.

VIII. Ejercer en nombre de ella acto alguno civil antes de estar legalmente constituida.

IX. Ejercer acto alguno de representación después de cumplido el tiempo de su elección; excepto aquellos que con arreglo á derecho son necesarios para la conservación de los intereses de la Sociedad que es su mandante.

Art. 36. Los administradores en su carácter de mandatarios ó representantes de la persona moral de la Sociedad, son responsables para con éstos y para con los socios civil y criminalmente de su gestión. Esa responsabilidad es solidaria cuando dos ó más obran de común acuerdo.

Art. 37. Los administradores de común acuerdo pueden nombrar uno ó más apoderados ó gerentes otorgándose el mandato en escritura pública y expresándose las facultades que se les conceden. Dicho nombramiento queda á la responsabilidad de los mandantes quienes tendrán contra el mandatario las acciones que las leyes conceden. En los negocios

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

judiciales se observarán respecto de unidad de representación las prevenciones de las leyes.

Art. 38. Los administradores no tienen respecto de terceros más responsabilidades que las que consigna el cap. 4º de esta ley.

Art. 39. Los comisarios son las personas nombradas por la Asamblea para cuidar de que los administradores y demás empleados cumplan con las prevenciones de los estatutos y pacto social, vigilando los intereses de los socios en los términos que fijan la ley y dichos estatutos y pacto social.

Art. 40. Las Asambleas tienen derecho de nombrar dos comisarios cuando menos, esté ó no prescrito en los estatutos y pacto social este derecho. También lo tiene la minoría en los mismos términos á nombrar un comisario siempre que esa minoría represente un veinte por ciento cuando menos del capital social.

Art. 41. Son atribuciones y facultades de los comisarios que deben ser socios:

I. Convocar las Asambleas ordinarias en caso de no hacerlo el Consejo de Administración.

II. Vigilar las operaciones de la Sociedad, inspeccionar los libros, documentos y toda clase de papeles de la Sociedad.

III. Exigir de los administradores el balance general, estado y exposición de que habla la frac. VII del art. 32.

IV. Presentar á la Asamblea dictamen sobre esos documentos y sobre la aprobación de la gestión de los administradores ó la forma y términos en que son responsables y debe exigirles su responsabilidad.

V. Ejercer las demás atribuciones de vigilancia y consulta que les encomiendan la ley, los estatutos ó pacto social.

Art. 42. El cargo de comisario es revocable á pesar de cualquier puesto en contrario; pero pueden ser reelectos los comisarios anteriores.

Art. 43. Los comisarios tienen la obligación de depositar para garantía de su manejo un número de acciones en los mismos términos y forma que para los administradores establece el art. 32 frac. I.

CAPITULO IV.

DE LAS RESPONSABILIDADES SOCIALES.

Art. 44. La sociedad es responsable con su capital ó patrimonio de todos los actos civiles ú operaciones celebradas por sus representantes legítimos aunque estos traspasen los límites consignados en los estatutos ó pacto social. Lo es también y solidariamente con los delincuentes en los términos del art. 331 del Código Penal del Distrito.

Art. 45. Los representantes ó administradores y gerentes de la Sociedad no son responsables civilmente con sus bienes extrasociales ó particulares, sino en los casos de comisión de un delito y en los demás fijados en esta ley.

Art. 46. Los individuos que voten en las Asambleas acuerdos contra leyes prohibitivas ó nulas, son responsables solidariamente por los daños y perjuicios que causen á terceros ó á los socios.

Art. 47. Son responsables solidariamente tanto civil como criminalmente, los individuos que para constituir una sociedad, para obtener una votación ó para cualquier acto de la sociedad antes ó después de constituida, cometan algún delito previsto por la ley penal y los que incluyan su nombre ó el nombre de alguna persona como razón social en la denominación de la sociedad.

Art. 48. Son reos de estafa y serán castigados con las penas que impongan las leyes: los individuos que á sabiendas forjen ó supongan valores falsos ó suscriciones falsas para

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

engañar al público y obtener aportes ó crédito, antes ó después de constituida la sociedad: los que emitan ó circulen acciones antes de estar constituida la sociedad: los que contraigan obligaciones en nombre de la sociedad antes de estar constituida, ó cuando ha expirado su representación: los que se presenten falsamente como accionistas para obtener ó crear fraudulentamente una mayoría; los que á sabiendas disribuyan dividendos ficticios en ausencia de inventarios ó por medio de inventarios falsos: los comisarios que á sabiendas admitan como ciertos hechos falsos en sus informes ó actos oficiales; los que violen el art. 34 frac. V, sobre compra ó venta de acciones ó pongan en circulación acciones que deben ser canceladas: los administradores que presenten á sabiendas informes ó datos falsos en sus exposiciones oficiales.

Art. 49. Las penas que corresponden en el caso del artículo anterior, serán graduadas según el interés del perjuicio causado con arreglo á la graduación de las leyes penales; pero cuando ese perjuicio no se haya causado y por lo mismo no pueda estimarse, se aplicará una pena de tres á seis meses de arresto.

Art. 50. Los defectos de nulidad de simple forma que aparezcan ó sean objeto de discusión después de registrada la sociedad, ameritan únicamente responsabilidad civil con arreglo á las leyes.

Art. 51. La nulidad de una sociedad registrada no perjudica los derechos de tercero, ni los de los tenedores de acciones extraños á la nulidad, pudiendo unos y otros ejercer sus acciones contra el patrimonio social.

Art. 52. Los administradores y comisarios son responsables civilmente, de mancomún é insólidum los que hayan obrado de acuerdo y con sus bienes propios, por los daños y perjuicios que causen á los socios ó á terceros en los siguientes casos: cuando hayan violado los estatutos ó el pacto social:

cuando en su calidad de mandatarios no pongan la diligencia que la ley exige: cuando obren con dolo para perjudicar á la sociedad, aunque ese dolo no constituya delito; cuando dejen de cumplir alguna de las obligaciones ó ejecuten alguno de los actos que les ordenen ó prohiban la ley, los estatutos ó el pacto social.

Art. 53. La infracción de lo prevenido en el art. 32, debe ser reclamada por los comisarios; y en su defecto, cualquier socio tiene derecho para denunciar el hecho á la autoridad judicial del orden civil, la que oyendo sumariamente á los responsables, les obligará á cumplir con el deber omitido, imponiéndoles una multa de 500 á 1,000 pesos.

Art. 54. Los accionistas tienen derecho sin que valga pacto en contrario:

I. A demandar judicialmente la nulidad de la formación ó acuerdos de las Asambleas.

II. A exigir el cumplimiento del pacto social ó los estatutos cuando sea violado en perjuicio de dichos socios.

III. A exigir de los administradores y comisarios la responsabilidad á que se refieren los arts. 48 y 52 de esta ley; exceptuando la responsabilidad por simple culpa ó que no implique dolo, pues ésta sólo puede ser exigida por acuerdo de la Asamblea.

Art. 55. En los casos del artículo anterior y cuando solo se trate de responsabilidades civiles, los socios que obren individualmente, esto es, sin el acuerdo de la Asamblea, no podrán ejercitar sus acciones sino previa fianza de persona solvente de estar á las resultas del juicio, pagando costas, daños y perjuicios; y en caso de ser absuelto el demandado y aunque no haya condenación en costas, el accionista, bajo dicha fianza, pagará una multa á la Sociedad de $100 á 500. Cuando una minoría que represente un 20 p% del capital social, ejercite las acciones á que se refiere este artículo, no estará obligada á dar la fianza mencionada.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

CAPITULO V.

DE LA DISOLUCIÓN DE LAS SOCIEDADES.

Art. 56. Son causas de disolución social:

I. El hecho de que convocada dos veces la Asamblea ordinaria, no llegue á reunirse en el año en que debía tener sus sesiones.

II. El consentimiento de los accionistas en los términos del art. 26 frac. I.

III. La expiración del plazo para el cual fué constituida ó la pérdida de la cosa ó consumación del negocio objeto de la misma.

IV. La pérdida de la mitad del capital social, siempre que la disolución sea aprobada en Asamblea, por el voto cuando menos de la mayoría de los socios.

V. Las demás causas que se fijen en el pacto social ó estatutos y en los términos y forma que ellos prevengan

VI. La quiebra de la Sociedad, declarada legalmente, y

VII. La falta de administradores, prolongada más de tres meses.

Art. 57. Los socios y aun los terceros interesados en la liquidación social, tienen derecho á pedirla judicialmente en los casos en que deba disolverse la Sociedad.

Art. 58. La nulidad de una sociedad ó de su continuación por falta de formalidades exteriores ó por ser inmoral ó delictuoso el objeto de la Sociedad, puede ser reclamada por cualquier interesado por vía de acción ó de excepción; y debe procederse de oficio por la autoridad judicial con arreglo á las leyes penales, poniendo en todo caso en liquidación á la Sociedad en los términos que fijan los artículos relativos de esta ley. El derecho para proceder á la nulidad en este caso, es imprescriptible.

Art. 59. La nulidad de las sociedades por defecto de formalidades externas, no perjudica los derechos adquiridos por terceros respecto del patrimonio social, salvo el caso de fraude de esos terceros.

Art. 60. La nulidad del nombramiento de los administradores de la Sociedad hecho en la Asamblea ó la prórroga indebida de sus funciones, no afectan los derechos de tercero, salvo el caso de fraude de éstos.

Art. 61. La nulidad y disolución de las sociedades, procede á instancia de parte ó de oficio en el caso del art. 58.

Art. 62. Cuando la autoridad judicial proceda de oficio, oirá sumariamente al Ministerio Público y á los representantes de la sociedad; y si aparece justificada la causa de nulidad, decretará la intervención de los bienes, libros y papeles de la sociedad, poniéndola desde luego en liquidación.

Art. 63. Cuando la acción de nulidad ó disolución social se siga á instancia de parte, el juicio se promoverá contra los administradores; y una vez fallado en el sentido de la nulidad ó de la disolución, se procederá á la liquidación social.

Art. 64. En los casos en que no haya controversia judicial sobre la nulidad ó la liquidación, los administradores ó la Asamblea, en su caso, nombrarán los liquidadores ó ratificarán el nombramiento ó designación hecha en el pacto social ó estatutos. En el caso de que no se haga ese nombramiento, lo hará la autoridad judicial á petición de cualquier interesado, ya sea que proceda de oficio ó á instancia de parte.

Art. 65. Aceptado el nombramiento por los liquidadores cesa el mandato de los administradores; debiendo, sin embargo, prestar á los primeros todos los datos y concurso que necesiten para su gestión,

Art. 66. Son facultades y obligaciones de los liquidadores:

I. Hacer el balance del activo y pasivo social.

II. Convocar por dos periódicos á los accionistas y acree-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

dores para que se presenten dentro de un plazo que no exceda de seis meses. En el caso de que la sociedad funcione en el extranjero por sucursales ú otros establecimientos, el plazo será de diez meses y las publicaciones se harán en dos periodicos de la localidad donde existan esas sucursales, ó de la población más próxima donde existan periódicos.

III. Representar judicial y extrajudicialmente á la sociedad; pero sin poder hacer más operaciones que las necesarias para liquidar y conservar el patrimonio social.

IV. Pagar los créditos legalmente comprobados y cobrar las deudas sociales.

V. Publicar dentro de los plazos fijados en la frac. II, el balance final, indicando la parte que á cada socio corresponda. Dicha publicación, que contendrá todos los pormenores y explicaciones necesarias, se hará durante treinta días seguidos, en uno ó más periódicos del domicilio de la sociedad.

VI. Depositar en un establecimiento de crédito, las sumas que se hubieren cobrado y el producto de los bienes realizados.

VII. Proceder á la venta en almoneda ó fuera de ella, de los bienes que deban distribuirse ó realizarse, en el caso de que no hubiere otro acuerdo de los socios para realizarlos y distribuirlos.

VIII. Expedir á favor de los socios la orden para que el establecimiento de crédito donde esten depositados los valores realizados ó cobrados, les entregue la parte que les corresponda.

IX. Aprobar la cuenta que deben presentar los administradores, correspondiente al periodo corrido entre el último balance aprobado por la Asamblea y la apertura de la liquidación.

Art. 67. Los liquidadores son responsables de su mandato, con arreglo al derecho común.

Art. 68. Los accionistas, en los quince días siguientes á la publicación del balance definitivo, presentar sus ánreclamaciones á los liquidadores; y con ellas y el proyecto de elección, se dará cuenta al Juzgado competente, para que citando á todos los accionistas á una junta que se verificará dentro de un mes, se procure el acuerdo.

Art. 69. No obteniéndose dicho acuerdo, el Juez fallará con arreglo á derecho, resolviendo las pretensiones de los reclamantes y determinando le forma en que deben realizarse los bienes; y una vez que el fallo cause ejecutoria, los liquidadores lo cumplirán.

Art. 70. En el caso de no presentarse reclamación en los términos fijados, el balance y proyecto de división se considerará aprobado.

Art. 71. Los liquidadores se sujetarán, para formar su liquidación, á las clausulas relativas del pacto social y á lo que previenen las leyes en lo relativo á división y distribución de bienes sociales.

Art. 72. Cuando uno ó varios administradores sean nombrados liquidadores, la cuenta de que habla la frac. IX del art. 66 deberá ser publicada juntamente con el balance de que habla la frac. V del mismo art, 66.

Art. 73. Los liquidadores serán siempre tres; á no ser que por acuerdo de la mayoría de los accionistas, por determinación de los estatutos ó del pacto social, deba ser uno solo el liquidador.

Art. 74. Los liquidadores concluirán su encargo dentro del año de aceptado; y si la mayoría de los accionistas convocados por los liquidadores, no prorroga por otro año sus funciones, cualquier socio tiene derecho á pedir su renovación y á exigir su responsabilidad.

Art. 75. Los administradores que omitan promover el nombramiento de liquidadores en caso de disolución social, son responsables civilmente de los daños y perjuicios que se causen á los socios y á los acreedores por esa omisión.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Art. 76. Los libros de las sociedades anónimas disueltas, ó que por cualquier causa hayan dejado de existir, serán conservados en el registro público de comercio, donde los depositarán los liquidadores ó aquellos en cuyo poder se hallen, bajo pena de 500 á 1,000 pesos y sin perjuicio de las acciones penales que procedan.

Art. 77. Las acciones en responsabilidad puramente civil contra los liquidadores, administradores y comisarios, de que habla esta ley, prescriben á los cinco años.

CAPITULO VI.

DE LAS SOCIEDADES EXTRANJERAS.

Art. 78. Las sociedades extranjeras no podrán funcionar, ni tener personalidad civil en la República, si no cumplen con las siguientes prescripciones:

I. Deberán protocolizar sus estatutos, contratos y demás documentos referentes á su constitución, el inventario ó último balance si lo hubiere, y un certificado de estar constituidas y autorizadas con arreglo á las leyes del país respectivo, expedido por el Ministro que allí tenga la República Mexicana; ó en su defecto, por el cónsul, debidamente legalizado.

II. Deberán inscribir esos documentos en el registro de Comercio.

III. Deberán publicar anualmente, en dos periódicos de la capital del Estado, Distrito ó territorio donde tengan sucursales, un balance que contenga con claridad su activo y pasivo, así como el nombre de los administradores.

Art. 79. La falta de cumplimiento de las anteriores prescripciones, hace responsables personal y solidariamente de

todas las obligaciones contraídas en la República por la sociedad, á los que contraten en nombre de ella, sin perjuicio de que se proceda de oficio, en los términos del art. 58.

Art. 80. Quedan vigentes en lo que no se opongan á esta ley, los arts. 260 á 264 del Código de Comercio, respecto de fusión de sociedades.

México, Marzo 16 de 1898.

J, Pallares.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

EL ESTADO Y LA INDUSTRIA.

Tesis profesional de abogado presentada en la Escuela N. de Jurisprudencia, por el alumno JACOBO RINCÓN.

SUMARIO.

1º Condiciones generales de existencia y organización de la Industria en un país.
2º ¿Debe intervenir el Estado en el establecimiento y organización de ella? ¿Cual es el límite de esa intervención?
3º ¿Cómo deben juzgarse conforme al criterio económico las leyes nacionales que á nuestra *producción* se refieren? (Constitución, Arancel de Aduanas marítimas y fronterizas, ley de 30 de Mayo de 93, contribuciones sobre alcoholes, hilazas y tejidos de algodón, concesiones ferrocarrileras, legislación de aguas.)
4º ¿Cuáles serán los medios más adecuados para hacer que se desarrolle en México la *Industria*?

Si tratásemos de sentar á priori cuáles son las condiciones que necesitan reunirse para llegar á constituir á una nación en un gran productor, incurriríamos facilmente en error, pues las concepciones hechas en abstracto se separan frecuentemente de la verdad. Necesitamos recurrir á la Historia y seguir el desenvolvimiento industrial de un pueblo que haya llegado á ese estado evolutivo, para poder fijar así los elementos primeros con los cuales debe contarse para obtener tal resultado.

Inglaterra es el pueblo cuya poderosa industria puede darnos en los diversos grados de su desarrollo los datos en-

cesarios para emprender estudio semejante, pues es sin duda alguna el pueblo tipo de producción industrial preponderante. Procuremos darnos cuenta del camino que ha recorrido para llegar al grado de progreso en que se halla, examinando los elementos de su situación, no solo actual, sino en los detalles de su evolución histórica.

***

Uno de los primeros elementos de la organización de este gran pueblo, es sin duda el régimen de propiedad territorial que había de influir más tarde y tan poderosamente en su progreso. Hacia principios del siglo XVIII estaban en Inglaterra los campos ocupados por dos clases de propietários: los grandes propietarios (*los gentry*) y los pequeños-propietarios (*los geomanry.*) Entre los primeros podríamos distinguir diversos tipos que se diferenciaban en derecho por la naturaleza de sus privilegios sobre la tierra y de hecho por el monto de sus rentas. Los *geomanry*, ya sea pequeños propietarios ó enfiteutas, ó arrendatarios ad vitam, constituían una suave pendiente entre el gran señor y el más humilde arrendatario. En esos tiempos no se encontraban en Inglaterra los grandes señores que, como en los Estados germanos, en Francia y en el resto de Europa, se aislaban por completo de la gleba, y no exigían de ella más que el cumplimiento fiel del homenaje; antes bien los gentry procuraban rodearse de gente laboriosa que se enriquecía y se educaba poco á poco, y aun lograba hacerse propietaria de grandes dominios. Tales eran, según Boutmy, [1] los caracteres de la población rural de Inglaterra á fines del siglo décimo-séptimo. Como vemos, ésta se escalonaba de tal ma-

(1) Boutmy.—El desarrollo de la sociedad política en Inglaterra.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

nera que formaba una combinación social completa, armónica, cuyas diversas partes se apoyaban tradicional y fuertemente las unas á las otras. El rasgo notable en tal organización es, que las distancias entre las diversas clases sociales eran desde entonces cortas y accesibles, de manera que aun el pequeño arrendatario podía pensar en llegar á ser un gran propietario (un gentry.)

Se concibe desde luego que tal población rural que forma un conjunto íntimamente ligado en todas sus partes, cuenta pues con los medios que cooperan necesariamente á la obra del trabajo y puede desarrollarse ventajosamente.

En tales condiciones, los intereses no se aislan, no se ven como enemigos los unos á los otros.

En cuanto al trabajador rural, guardaba una condición también bastante ventajosa y parecida á los geomanry, pues tenía abrigo y alimento suficiente á principios del siglo XVIII. El salario había aumentado notablemente y la situación de la gente del campo era mucho mejor que la de las ciudades, por el número, por la riqueza y por la influencia adquirida. La fortuna del agricultor y su influencia eran mucho mayores que la del manufacturero ó la del comerciante. Pero veamos que transformaciones importantes se verifican más tarde por la llegada entre la población rural de un elemento extraño. Este elemento extraño está formado por las gentes de la ciudad que, enriquecidas en el comercio ó en la naciente industria, vienen á establecerse al campo y traen á su nueva vida las tendencias de su existencia anterior. Estos procuran ante todo la explotación de sus dominios y proceden en ellos con la actividad que adquirieron en su vida de ciudad por el hábito de los negocios.

Crean, con detrimento de los cultivos, grandes praderas con el objeto de desarrollar la explotación del ganado lanar, y el peligro se hace tan inminente para la agricultura, que el poder central teme por la vida de ella y dicta en tiempo de

Enrique VIII medidas encaminadas á impedir la ruina de los pueblos agrícolas y de las fincas rústicas.

Desde luego esta temida expansión no puede ser muy grande porque los capitales formados en el comercio y la industria de las ciudades eran bastante escasos. Pero después de 1610 la escena y el movimiento se acentúan á pesar de las leyes nacidas para oponerse á él, demostrando así la impotencia de los poderes para reprimir por artificios el empuje de la iniciativa individual.

Es primero el comercio el que suministra el contingente más numeroso de compradores de dominios rurales, pues como las relaciones internacionales de Inglaterra habían crecido extraordinariamente, existían ya capital esbastante grandes en mano de los comerciantes.

Pero se preguntará, ¿por qué se había propagado ese afán en conseguir el dominio de las tierras? Ya lo hemos dicho, la influencia, la preponderancia que ejercía en la marcha de aquel pueblo la clase de los *gentry*, hacía que las miras de ambición se fijasen como punto final en ella, pues ahí era donde radicaba todo; delegaciones municipales y parlamentarias, honores y cargos públicos estaban reservados á esta clase superior. Esto nos da inmediatamente la razón de este movimiento de fortunas hacia la tierra. Esto nos explica por qué la posesión del suelo fué el primer objeto del que poseía una fortuna, y por qué como veremos más tarde, la vida rural y la agricultura pudieron conservar aun á despecho del crecimiento asombroso de las ciudades, su preeminencia vigorosa.

Otro efecto de este movimiento económico fué la desaparición del pequeño propietario, quien tentado por los precios que le ofrecieran por sus propiedades, las abandona, é ilusionado por el éxito de industriales y comerciantes, se radica en la ciudad cuyo crecimiento aumentaba de día en día, y se entrega á la especulación mercantil é industrial manufac-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

turera. Notemos estos dos efectos: uno, que sólo subsiste la gran propiedad, desapareciendo la muy pequeña; otro, un movimiento de selección verificado por la desaparición del pequeño propietario y la presencia del nuevo explotador de aquellas tierras.

Este elemento nuevo trae á la agricultura el contingente de sus energías acostumbradas á la especulación y éste en consecuencia al procurar obtener una influencia en las cosas públicas y una preponderancia que no tenía, quiere sacar de sus tierras el mayor rendimiento posible y por este medio se llega á sistemas de cultivo mucho más perfectos que los que hasta entonces se habían empleado. Se conseguían, pues, con esta invasión tres grandes fines económicos: el aumento de valor de la tierra, el acrecimiento de su productividad por el empleo de procedimientos de explotación mejores y el abatimiento del precio de los efectos de primera necesidad.

El desarrollo de productividad agrícola tenía que ser la fuente de riqueza general de este pueblo, pues lo ponía en estado de intentar un desenvolvimiento mayor de actividades. En efecto, teniendo lo bastante para su alimentación y subsistencia, podía perfectamente dedicarse á las especulaciones de todos géneros, pues siendo fácil la adquisición de los elementos indispensables de vida, dirigiría sus energías sobrantes al mejoramiento de su situación.

Pero veamos cómo se desarrolla la industria manufacturera mientras evolucionaban de una manera tan trascedental y tan profunda la propiedad y la cultura agrícolas.

La industria propiamente dicha, es decir, la gran industria, ha nacido hasta en un tiempo relativamente cercano de nosotros, pues en el siglo XIV no existía sino en muy pequeña escala. En 1331 el inglés Kenedy importó de Flandes los procedimientos relativos á la fabricación de tejidos finos de lana, y el rey EduardoIII, por medio de recompen

sas, *estimuló* esta industria que tomó tal incremento que en menos de siglo y medio de existencia ocupaba ya un gran número de brazos en varios condados de Inglaterra.

La referida fabricación fué por mucho tiempo la única que tuvo una importancia real y una expansión exterior notable, hasta que á ella vino á unírsele más tarde la naciente industria de los tejidos de algodón. Sin embargo, ambas industrias contaban con aparatos extraordinariamente sencillos é imperfectos, y su empleo fué mejorándose poco á poco con descubrimientos tales como el de la lanzadera y otros.

Es tan insignificante la producción de tejidos de algodón en esta época, que Adam Smith, en su obra *La riqueza de las naciones*, apenas si la menciona, en tanto que habla á cada instante de los tejidos de lana y de la fundición y el trabajo del fierro.

Esta última clase de trabajos no estaban sin embargo más adelantados que los tejidos de algodón en Inglaterra, pues en 1780 se fundía el fierro con carbón vegetal y los establecimientos metalúrgicos eran muy raros; solamente el Gloucestershire, el Yorkshire y el Shorpshire tenía cada uno seis altos hornos. Entre estas industrias también debe figurar la fabricación de telas de seda que se hacía en pequeñísima escala.

Como se ve, la industria inglesa que ya se consideraba en el siglo XVIII como muy grande, era sin embargo poca cosa en comparación de la que hoy vemos. Pero esto era debido á que los medios de acción de que disponía no eran tal vez suficientes, pues los útiles de trabajo eran muy primitivos, y sobre todo la necesidad de emplear la fuerza humana como motor en todas estas industrias, las hacía dispendiosas y lentas. No es en realidad sino hasta el descubrimiento de la máquina de vapor, como veremos más adelante, y luego al descubrimiento y aplicación del carbón de piedra como com-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

bustible, que la industria inglesa debe el desenvolvimiento que ahora asombra al mundo entero.

Inglaterra posee minas de carbón de piedra cuyo rendimiento, gracias á la activísima explotación de que son objeto, basta y aun sobra para alimentar su industria bien poderosa. La producción de carbón está en Inglaterra yustapuesta á la producción de fierro, y una y otra son como la clave de su poder industrial manufacturero, son ayudas eminentemente favorables á la gran industria, son instrumentos puestos al alcance del gran espíritu de empresa de esa *raza de trabajadores*; esos yacimientos, esas minas, son fuentes colosales de fuerza mecánica ofrecidas en las condiciones más económicas. Todo esto es de importancia capital y debemos tenerlo presente si queremos darnos cuenta exacta de los medios que un pueblo necesita para ser *gran productor*.

Hemos visto ya las modificaciones sufridas á principios del siglo XVIII por la propiedad rural y los cultivos, pues de igual manera, aunque por distintas causas, sufre la industria una evolución profunda que en menos de sesenta años modificó y cambió radicalmente su antigua manera de ser. Esta evolución se debe á la introducción de las máquinas y á la sustitución de la fuerza muscular por la fuerza mecánica. Desde 1750 y sucesivamente, tienen lugar seis inventos que van á cambiar casi totalmente las condiciones de trabajo.

En 1769 Arkright inventó su *water-pame;* en 1770 Heargraves su *spening jenny;* en 1776 Crompton su *mule;* en 1792 Kelly su *self acting mule*, y á estos inventos viene á dar un apoyo decidido y un vuelo extraordinario la máquina de vapor, que fué inventada por *Watt* en 1769 y perfeccionada y aplicada en 1785 á la industria de tejidos de algodón.

Al mismo tiempo (1740) se comenzaba á fundir el hierro empleándose el carbón mineral; cuyo descrubimiento viene á ser una ayuda eminente, pues siendo Inglaterra un país que en esta época había desmontado casi todas sus tierras, no podía abusar del empleo de la madera como combustible, y á la aparición del carbón de piedra recibió la industria de fundición y con ella todas las demás industrias, el más poderoso impulso.

Más tarde, á este invento viene á agregarse la aplicación del soplete de vapor, á las industrias tejedoras la química naciente enseña á pintar sus telas, y por todas partes la división del trabajo suministra á la producción su poderosa ayuda.

Vemos, pues, que desde el primer cuarto de este siglo la gran industria se encontraba provista ya de los elementos principales, de los elementos necesarios de su fuerza: el carbón, el hierro y la máquina de vapor.

Pero como la industria notaba que su producción estaba colmando el reducido mercado interior, se sintió la necesidad de ampliarlo agregándole consumos capaces de absorber sus productos, y desde esta época las miras del gobierno inglés tienden á ello. Por fortuna para Inglaterra la crisis política sobrevenida en Europa en 1792, al paralizar las fuerzas económicas de casi todos los Estados del Continente, suministraba á su fabricación nuevos y amplios mercados: ella llega á absorver casi en lo absoluto las relaciones de comercio entre Europa y los países de Asia y Africa, y el famoso bloqueo continental no hizo en realidad sino afirmar su supremacía y estimular su producción.

Los ingleses sacaron de sus esfuerzos durante esta época un doble provecho: por el comercio con los países lejanos adquirían la materia prima para sus industrias y abrieron en estos países, nuevos y amplios mercados á sus productos.

Tal ampliación de relaciones comerciales tenía necesidad de un gran sistema de medios de transporte por mar, lo que

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

obligó á estimular grandemente la marina, y aun sabemos que el gobierno inglés hizo esfuerzos por ampliarla, los cuales produjeron el mejor resultado. Los transportes marítimos tomaron desde entonces un gran desarrollo tanto desde el punto de la capacidad de los navíos, como desde el punto de su construcción, y de la misma manera que el invento del vapor vino á impulsar las industrias manufactureras, así también prestó su apoyo eficaz á las industrias transportivas.

La marina que apenas contaba 770 pequeños barcos de vapor en 1840, poseía ya en 1870 cerca de 4,200 buques, con un total de dos millones de toneladas.

Si la marina mercante y con ella la de guerra sufrían este colosal desarrollo, también en el interior del país se multiplicaban los medios de comunicación. Gracias á la topografía del terreno, fácilmente canalizable, se vió rápidamente transformado el país en una gran red de canales, y desde el descubrimiento, de Stephenson los ferrocarriles se multiplicaron también asombrosamente.

Era natural que tal movimiento industrial debiera producir necesariamente un acrecimiento en los capitales, y este acrecimiento se produce en efecto, con una actividad desconocida hasta entonces. Ya en 1815 el total de capitales se valuaba en Inglaterra en cerca de *cinco millares cuatrocientos millones de libras esterlinas*, y en 1883 se valuaba la riqueza en cerca de *doscientos cuarenta millares ochocientos millones de libras esterliuas*. Para medir la importancia del movimiento de la riqueza en este país, bástenos decir que el total de capitales en depósito en los bancos ingleses en 1891 era de 16,750 millones de libras esterlinas. No debemos admirarnos, pues, de ver al capital inglés desempeñar en el mundo de los negocios el papel tan importante que desempeña. Tales cifras dejan en el ánimo una singular impresión de grandeza y fuerza, y esta impresión llega á ser más profunda si se reflexiona que todos estos medios de acción han aumentado considerablemente, pero no han llegado á su completo desarrollo. La circulación de los capitales se ha hecho más rápida, más fácil; los canales y los caminos se han multiplicado, y apenas si habrá pueblo alguno que no cuente en este país con una ó dos buenas vías que lo unan con los vecinos; los barcos se han multiplicado también, siendo capaces ahora de cargas y de velocidades mucho mayores. Añádase á esto el completo servicio telegráfico y postal y tendremos una idea del progreso que este pueblo hermoso ha realizado en el lapso relativamente corto de un siglo.

Pues bien, señores, todavía no basta considerar estos solos elementos para darse cuenta exacta de las causas del progreso industrial de este pueblo. Hay otros factores que agregan mucha eficacia á los ya enumerados.

Es evidente, en efecto, que las cualidades intrínsecas de una raza tienen una preponderante influencia sobre su desarrollo económico, y si queremos darnos una cuenta exacta de las causas de ese desarrollo debemos investigar el papel que la idiosincracia de ese pueblo ha producido en su evolución.

Examinemos, pues, los caracteres de la raza británica.

Montalembert lo ha dicho en su soberbio lenguaje: "Hay en la Europa moderna y á siete leguas de la Francia, á vista de nuestras playas del Norte, un pueblo cuyo imperio es más vasto que el de Alejandro y el de los Césares, y que es á la vez el más potente, el más rico y el más viril, el más audaz y el más arreglado del mundo." En efecto, ningún pueblo ofrece un estudio tan instructivo como éste.

Sabemos bien que un grupo de Sajones de los que ocupaban la baja Germania hacia principios del siglo V, emigró obligado por la pobreza de las llanuras arenosas de la desembocadura del Elba, en donde habitaban, y se estableció en la Grande Albión (Gran Bretaña.)

Encontró ahí las tribus de los bretones, quienes apenas desprendidos del régimen patriarcal practicaban la comuni-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

dad y preferían al trabajo de los campos la guera y el pillaje.

Los sajones por el contrario, modificados por múltiples influencias, practicaban ya la agricultura y amaban el trabajo.

Después de la llegada de este primer grupo, otros nuevos arribaron á las playas de Albión y se establecieron como el primero. Tuvieron que luchar con los aborígenes, quienes fueron vencidos y repelidos á las montañas de Escocia, como fueron repelidos y absorbidos los normandos, los noruegos y los daneses, que más tarde intentaron invadir el territorio.

Los sajones debían su fuerza á dos aptitudes particulares traídas de su país y que formaban su natural tendencia: primero, estaban educados para el cultivo de la tierra como oficio principal; segundo, seguían la práctica de la transmisión íntegra de un solo dominio á un solo heredero. La propiedad tendía á individualizarse siempre.

En las primeras épocas del desenvolvimiento de este pueblo, existía una tendencia muy marcada, que ha pasado hasta la actualidad, á vivir en el campo; y aun se juzgaba vergonzoso entonces el que un noble viviera en la ciudad. Los gentry habitaban lejos de los centros poblados, en medio de sus bosques y de sus praderas, en donde se entregaban á los cuidados agrícolas. Por esto tal vez notaremos que el Inglés es y ha sido siempre menos sociable que el Francés; pues mientras este último no puede vivir sino en las ciudades, aquel prefiere siempre estar lejos de ellas.

"Los Ingleses, como dice Mr. Taine, tienen no solamente el gusto, sino el amor infinito de la vida del campo. En ese país las ciudades no son como entre nosotros, el lugar de vida predilecto; pues excepto las grandes ciudades manufactureras las demás no están ocupadas más que por los tenderos (especieros, comerciantes.)"

"La cabeza de la nación vive siempre en el campo, hasta Londres mismo no es más que un rendez-vous d'affaires. La gentry tiene su principal asiento en el campo en su

country seat; ahí está la verdadera patria, el pequeño círculo amado de la familia, los lugares en donde se encuentra el memorial de sus felicidades y de las felicidades de los suyos."

Resultan de esta tendencia consecuencias dignas de estudio. En primer lugar, esta dedicación al cultivo de la tierra, creó en el sajón un apego inmenso á ella, y por otro lado la transmisión íntegra de las herencias á un solo heredero daba á las familias una fijeza extraordinaria y obligaba constantemente á los jóvenes no herederos á buscarse una fortuna propia. Por esto la raza ganaba en intensidad y en extensión, sin decaer jamás; por esto aunque algunas veces se vió pospuesta por otra más poderosa que los dominara breve tiempo, tuvo energías para sobrevivir y no desaparecer.

Por otra parte, hemos visto ya que organización tenía la sociedad rural y cómo se diferenciaba del resto de los pueblos europeos, pues mientras que éstos se abaten bajo el peso enorme de la organización feudal que bien pronto llega á ser netamente militar, es decir, opresiva y onerosa y de poderes públicos desarrollados; esto es, invasores y despóticos, la raza anglo-sajona se organiza en un sentido enteramente opuesto, pues el feudalismo no llega aun á establecerse en Inglaterra de una manera completa cuando desaparece, si hemos de creer á Boutmy cuyas indicaciones seguimos en esta materia.

La población rural establecida en sus dominios de la manera más independiente y más estable, tiene casi subordinado á un soberano sin dinero, sin ejército propio, y organiza un régimen local autónomo y que emana de la mayoría. De esta potencia de la opinión que se impone al soberano aun sobre sus miras propias, nace la política más conforme á los intereses de aquella mayoría. Manteniéndose así al abrigo de las influencias políticas, los ingleses han podido conservar largo tiempo vigorosas sus costumbres privadas, y éstas modificándose solamente según las necesidades de los tiempos, han impreso un carácter especial á la raza.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

La subdivisión que, como hemos visto, existía en el régimen de propiedad agraria, permitía á cada uno la dirección de los dominios agrícolas, estableciendo en todos y en cada uno la costumbre del trabajo, despertando la *iniciativa individual.*

Por otro lado, la transmisión íntegra de los bienes á un solo heredero (mayorazgo) obligaba á los padres á preocuparse del porvenir del resto de sus hijos que no heredaban, y esto mismo obligaba á los jóvenes á trabajar con actividad buscando, la manera de sostenerse procurándose elementos distintos de los bienes de fortuna que sus padres poseían.[1]

De aquí que aumentara considerablemente el capital, pues como la fortuna de los padres no servían para sostener familias numerosísimas, se conservaban con facilidad y aun se aumentaban considerablemente. En cuanto al artesano, también era su condición independiente, pues nada restringía su libertad ni su iniciativa, porque en Inglaterra el poder real nunca pretendió imponer reglamentos minuciosos y absurdos que pusiesen trabas á su producción, como pasó en otros países como la Francia.

Es así como se ha formado esa raza de acción individual tan marcada, pues contando cada uno solo con sí mismo, se ha sentido la necesidad del trabajo, y así notaremos que ningún inglés considera degradante de su orgullo una ocupación lucrativa cualquiera.

Por otra parte, la no preponderancia de los poderes públicos y la no existencia de la burocracia, ha hecho siempre al inglés esperar muy poco de los empleos y pensiones del Estado y atenerse más á las empresas privadas.

Por esto notaremos que los ingleses de todas las clases, se distinguen de la mayor parte de las razas por dos tendencias capitales que nacen de su formación histórica:

(1) Es de notarse que la misma práctica no produjo iguales resultados en otros países, como España.

1ª Una gran tendencia á conseguir una situación independiente personal, por el ejercicio de una ocupación lucrativa.

2ª Tendencias á la expansión en busca de las ocasiones más provechosas.

Estas dos tendencias constituyen el carácter inglés que bien podíamos considerar representado en esta sola palabra, *trabajo.*

Vemos, pues, que en resumen, los anglos–sajones, pero sobre todo los ingleses, forman una raza excepcionalmente vigorosa y hecha para la acción.

Es por medio del trabajo sostenido con energía de generación en generación y durante catorce siglos por lo que la raza ha adquirido sus cualidades propias y preparando su grandeza: es por el trabajo y el espíritu de empresa por lo que amenaza conquistar al mundo. Toda su historia se resume en esa palabra, expresión genuina de su fuerza, razón de ser de su poder.

Hemos trazado á grandes rasgos la vida económica de el pueblo que tomamos como objeto de nuestras investigaciones; y lo hemos visto ocupar tierras que estaban destinadas ciertamente á un gran desarrollo futuro por las mismas condiciones en que se hallaban, pues ya hemos visto que el Reino Unido presenta por la combinación de sus diversas partes los elementos de una gran prosperidad industrial y comercial; las dos islas que lo forman, constituídas por planos suavemente inclinados hacia el mar, apoyados sobre pequeñas elevaciones y regados naturalmente, se prestan con facilidad á un buen desarrollo agrícola.

Bajo la acción de un clima templado relativamente y bastante húmedo, las tierras bajas se prestan al cultivo de los cereales. Las tierras altas en cambio se cubren de pastos que son aprovechados para la cria de ganado menor.

Pero si la superficie de esas tierras está bien dotada también el subsuelo lo está, y aun mejor.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

La producción del carbón y el fierro de este país hemos visto ya qué importancia tiene y cómo puede decirse que es la principal causa de la grandeza de su industria.

Pero no es esto todo lo que ha hecho la grandeza de Inglaterra: á ella ha contribuído notablemente el carácter de la raza, cuyas aptitudes, unidas á las dos poderosas causas de que antes hemos hecho mención, forman el grupo de condiciones que para la industria son las *sine qua non* de su existencia.

Reasumiendo pues nuestras ideas, notaremos que las condiciones de existencia de la industria son:

1ª Una raza de acción individual enérgica y sostenida.
2ª Una fuerza motriz barata y móvil á voluntad.
3ª Capitales suficientes.
4ª Mercados amplios para consumir la producción.

De estas condiciones, las dos primeras, son realmente las más indispensables para la existencia de la industria, pues cuanto á las segundas, esto es, capitales y mercados, vendrán como consecuencia de las dos primeras y á éstas más que como condiciones de existencia debemos considerarlas como condiciones de organización.

Es tanto así que recordemos que Inglaterra solamente contó con las dos primeras; pues sólo hasta después del descubrimiento de las minas de carbón de piedra en 1740, es cuando adquiere la ampliación de capitales y mercados.

Hemos insistido en hacer notar la importancia del desarrollo agrícola, porque consideramos que es el primer ramo de producción industrial con el cual debe contar un país; ya hemos visto que, gracias á ella, Inglaterra pudo, á pesar de su pequeña extensión territorial, tener energías para llegar á ser lo que es.

Ahora bien; sentadas las bases que hemos considerado como indispensables para la existencia de la industria, notemos cuáles son sus condiciones mejores de organización.

Los economistas más conspicuos están de acuerdo en conceder que la única fuerza capaz de organizar la industria es la libertad.

Ahora bien: ¿qué cosa será organizar la industria? Pues será establecer un equilibrio constante entre las diferentes fuerzas productoras; es decir, procurar que todos los ramos del trabajo se mantengan dentro de tales límites que no puedan estorbar con su desarrollo el crecimiento de los demás. Será preciso además una distribución conveniente de capitales para que cada rama de producción suministre al consumo lo que pida ni más ni menos; es también preciso que los inventos de todas naturalezas se generalicen y penetren en cada industria, pues los progresos se hacen indispensables para el sostenimiento de cada una, y esto es natural, pues si una de ellas se atrasa, es porque las otras han adelantado y el desarrollo de éstas sería perjudicial para las primeras, pues se haría éste á sus expensas y en su detrimento. Esto arrastraría á una crisis económica; es decir, al estancamiento de los negocios durante cierto tiempo; lo cual empequeñecería la producción y, por consecuencia, traería una diminución general en la riqueza del país.

¿Como se obvian estas dificultades? ¿Como se subsanan tales inconvenientes?

Los pueblos civilizados evitan estos males por medio de la libertad del trabajo, esto es, dejando á la iniciativa individual el cuidado de repartir los capitales entre las ramas de la producción de la manera más conveniente á sus necesidades.

Ahora bien, la iniciativa individual obra siguiendo determinadas leyes económicas, y en tal virtud no se abandona á la casualidad, como pudiera creerse, el cuidado de tal organización.

En efecto, en virtud de la ley de la economía de las fuerzas, el productor trata de poner sus energías al servicio de

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

aquellas ramas de la producción que mejor retribuyan el trabajo y capitales que se le dediquen; por esta tendencia se llegará indudablemente á la localización económica de las industrias, es decir, al establecimiento de aquellas que sean más de acuerdo con la naturaleza del suelo y de la raza. Es indudable que fabricará más barato aquel industrial que tiene á la mano la materia prima, que aquel que tenga que transportarla de una larga distancia; siempre en el supuesto de que uno y otro contara con igual perfección en los aparatos y útiles de fabricación. Por esto tratarán de instalarse las industrias en aquellos lugares en los que se cuente más fácilmente con la materia prima, la mano de obra barata, etc., etc. Ahora bien, si esta localización económica no se ha verificado hasta ahora en una esfera más amplia, es porque, como dice Molinari, dos grandes obstáculos ha habido para ello; estos son la dificultad natural de comunicaciones entre los diferentes países que habrían de verificar el cambio, y el estado de guerra en que las naciones se han colocado para sostener y hacer subsistir á sus poblaciones y á sus industrias. Bajo estas influencias la localización ha sido imposible y los cambios no se han verificado libremente más que entre los diversos productores de un mismo Estado.

Así como la ley de la economía de las fuerzas rige la localización de las industrias, así también la eterna ley de la concurrencia obliga al productor atrasado á abandonar sus útiles y su maquinaria imperfecta ó tardía y á suplirla por otra moderna, de mayor capacidad y más económica; así también la ley de la oferta y la demanda y la ley de la progresión de los valores, serán las que fijen el precio de la mercancía sin necesidad de que el Estado intervenga en ella por medio de reglamentaciones torpes. Se comprende fácilmente las ventajas que tal sistema produce, pues entregado todo el cuidado de esta organización á la iniciativa individual, el interés personal guiará en todos casos al productor sobre lo que convenga más, es decir, sobre aquello que esté más de acuerdo con la existencia de la producción; de esta manera soportará cada uno las consecuencias de sus actos en caso de poco éxito y de este modo tambien todos los miembros de la sociedad concurrirán con sus energías al progreso de la producción, resolviendose así el problema de la repartición de capitales entre las diversas industrias.

Pero debemos notar que tal método no deja de tener sus peligros, pues como el *estado actual de civilización general no es muy completo* y como por otra parte la naturaleza humana es tan susceptible de error, sucede que en muchos casos la iniciativa individual partiendo de un juicio erróneo verifica actos que son contrarios á la utilidad general; así, por ejemplo, el capitalista concede frecuentemente (como dice Beauregard) su crédito á empresas que no producen el éxito que habían hecho esperar cálculos basados en ideas falsas; otras veces el hombre de empresa no tiene las cualidades que para esta tarea se requieren, y dejándose llevar de ilusiones calcula mal las probabilidades de ganancia y pérdida; ó bien concediendo demasiado mérito á una invención que no lo tiene, organiza empresas que al hundirse no solo dejan perdido capital y trabajo de formación, sino que dejan sin empleo á muchos obreros y abaratan el salario. Esto también nos demuestra que no es el hombre solo quien sufre las consecuencias de sus hechos, pues estas consecuencias repercuten en derredor y llegan sus efectos á aquellas personas que lo rodean; esto es consecuente con el sistema social, y para que pasara de otro modo necesitaría estar formado el mundo por puros Robinsones.

Es cierto por otra parte que los peligros de la libertad individual se atenúan con los progresos de la civilización, pero ¿debemos mientras tales peligros existen confiarnos *enteramente* á ella? Creemos que no, y tan es así, que si bien es cierto que los pueblos más civilizados confían en gran parte

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

la organización de sus industrias á la iniciativa individual, que acciona por influencia de la libertad del trabajo, también es cierto que no la confían por completo, pues limitan mucho esa libertad por medio de restricciones varias.

Así, por ejemplo, en Francia, el Estado se reserva ó confía á determinados particulares la fabricación de pólvoras, la elaboración de tabacos y de naipes; así también los países más libres monopolizan el servicio de postas y telégrafos y solo á determinadas compañías conceden la explotación de vías férreas; así también en otros países se dictan reglamentos para el trabajo de las mujeres y los niños, y se rodea de ciertas precauciones la instalacion de sociedades por acciones etc., etc.

Esto es natural y tenemos que conformarnos con ello aun cuando tengamos que sacrificar nuestras ideas sobre libertades, pues como dice Spencer, mientras los Estados no evolucionen completamente del militarismo al industrialismo, mientras se conserven en ese estado semi-industrial y semi-militar en el que se hallan aun los pueblos más adelantados del mundo, el régimen que empequeñece la influencia del Estado es incompatible, parcialmente por lo menos.

Ahora bien, mientras ese estado de civilización no se encuentre; mientras ese grado de desenvolvimiento industrial no haya llegado, creemos que la ingerencia oficial no puede suprimirse del todo sin acarrear consecuencias y perturbaciones graves. Es cierto que esa intervención es menor en el estado mixto que en el régimen puramente militar, pero también es cierto que no por eso deja de existir y aun es indispensable. Repugna tal conclusión á nuestras ideas; herencia de una epoca en la que se derramó tanta sangre y se agotaron tantas energías por conseguir los más nobles ideales; pero fuerza es convencerse de que la libertad ahora en el actual estado evolutivo es un sueño cuya realización tendremos que confiar á un estado social mucho más adelantado. Mientras ese período no llegue, conformémonos con la pequeña suma de libertades que hasta ahora se han conseguido y no tratemos de lograr mayores con la guerra, sino antes bien procurando fortificar nuestro medio social, llenando poco á poco las condiciones de un estado social más avanzado.

1 Spencer. El individuo contra el Estado. Pág. 240.

Pero no vayamos á buscar la realización de ese sueño comenzando por darnos las libertades más absolutas, pues, por ese medio, solo conseguiríamos llegar á la anarquía más terrible. No, muy al contrario, para conseguirlo debemos antes que darnos las libertades que deseamos, que no son más que el efecto, darnos la organización que es causa de la existencia de tales libertades y procuraremos así la consecución de nuestros ideales.

Una vez admitido que la intervención del Estado en la creación y organización de la industria es no solo consecuente con el estado actual de las sociedades sino necesario para su existencia, y más necesario mientras menos tendencias al industrialismo existan, debemos investigar cual es el límite que conviene marcar á esa intervención, pues sin duda alguna que un límite debe de existir. Una intervención absoluta del Estado en todos los ramos del trabajo sería contraproducente en lugar de ser benéfica y supondría un estado de militarismo absoluto que no es el régimen de las sociedades actuales. Alguna vez en la historia económica de los pueblos se encuentran medidas dictadas por los gobiernos que sobrepasando sus verdaderos límites van hasta la esfera de acción de la iniciativa individual. Así han existido por ejemplo leyes positivas que pretendieron fijar el precio de los artículos y darle á la moneda valor superior, distinto á su valor intrínseco, etc.

Pero estos hechos si bien fueron abundantes en una época ya lejana, ahora son muy raros y desaparecerán á medi-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

da que el progreso social vaya deslindando las funciones del estado, de las funciones individuales. Pero como por otra parte resulta que el progreso social no es igual para todos los pueblos, así tampoco deberá ser igual en todos ellos la intervención que el gobierno debe tener en la organización de la Industria que es el punto en que nos ocupamos. Esta es sin duda la causa por la cual los economistas y los hombres de estado no han podido ponerse de acuerdo al tratar del papel que el Estado debe representar en la organización y establecimiento de la producción en sus múltiples fases.

Unos, y son los más, creen que el Estado no debe intervenir absolutamente en la producción y los cambios; otros, están por las restricciones á la producción y la prohibición completa de los cambios internacionales y por último, otro grupo opina que si bien deben existir esas restricciones sólo deben ser puestas al producto extranjero, y eso cuando venga á establecer grave competencia con el nacional.

De estas tres escuelas, la segunda, la de la prohibición está casi en olvido y desacreditada, al grado que creemos que no hay en el mundo un solo pueblo que la siga, pues la China misma, á pesar de su famosa muralla, no ha podido resistir á la introducción que de los efectos extranjeros le impuso Europa.

Las otras dos escuelas si son aceptadas y defendidas con verdadero ahinco por grandes grupos de notables pensadores, de los cuales pretende cada uno que su doctrina es la verdadera y única que puede acarrear progreso y felicidad general al pueblo que la adopte, pere al que la adopte por completo, pues no admiten tanto una como la otra trénmios medios, sino el empleo de la protección pura ó del puro libre-cambio.

La primera, es decir, la Protección, aconseja á los gobiernos como medio para crear y engrandecer la Industria,

el empleo de medios que sin redundar en perjuicio de la comunidad sean un estímulo para la instalación de productores y optan la mayor parte de los proteccionistas por dos sistemas: ó las *tarifas* proteccionistas ó las *primas*. El primer procedimiento consiste en establecer *derechos* de *introducción* á las mercancías extranjeras que tienen similares en el país y cuya industria se trata de estimular. Estos derechos deben ser proporcionales á la diferencia de valor que haya entre la mercancía extranjera y la nacional, de manera que desde luego se infiere que mal necesitará este protección aquella industria cuya fabricación resulte más barata en el país que se trata de hacer productor. El objeto de colocar en situación igual á ambas mercancías por medio de los derechos es conseguir que el costo de los transportes de la mercancía extranjera encarezca á esta última y haga en consecuencia preferible la mercancía nacional, con el objeto de asegurar así el mantenimiento de esas industrias. Desde luego se vé que hay con este motivo un gasto de energías de la *mayoría* en favor del sostenimiento de tales industrias; es verdad que este gasto no es muy sensible pues el consumidor sin notarlo y al comprar el producto nacional protegido está pagando con el exceso de valor que hay entre éste y el extranjero, la prima que le obliga á pagar la tarifa proteccionista.

El otro procedimiento de la protección consiste en ministrar cantidades determinadas de dinero á las industrias á las cuales se trata de estimular, siempre que llenen ciertas condiciones.

También, como vemos, hay el sacrificio de esas sumas colectadas de la mayoría y repartidas en favor de un número determinado de protegidos.

En cuanto á la otra Escuela, es decir, la del libre-cambio, *que también podía llamarse de la libre producción*, proclama como principio primero para la creación y engrandecimiento de la Industria, el régimen de la libertad, que de-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

jando al cuidado de la iniciativa individual la organización y creación de los ramos todos de la producción va hasta los más pequeños detalles y en todos ellos pone el más escrupuloso cuidado, puesto que es guiada esa iniciativa por el interés individual, germen de toda creación, potente fuerza regularizadora de las complicadas sociedades modernas.

Para probar tanto una como otra escuela la bondad de sus teorías citan ejemplos de pueblos que las han adoptado y así la protección presenta el maravilloso desarrollo industrial en los Estados Unidos, donde se ha practicado tal doctrina y el libre cambio presenta á Inglaterra que ha abandonado ya la protección y es actualmente el tipo de los países libre-cambistas.

Después de tales pruebas, el espíritu no puede decidirse por la una ó por la otra y solamente nuestro amor tan grande por la libertad hace que se incline la balanza en el sentido de las más modernas, de estas escuelas; pero fijando bien nuestras ideas y sobre todo recurriendo al análisis histórico encontramos que si bien es cierto que el libre-cambio preside actualmente el prodigioso adelanto inglés, no ha sido siempre esa su política, pues Inglaterra no ha practicado toda la vida el famoso lema de Gaurday "*laissez faire, laissez passer*," muy al contrario, ha tenido durante largos períodos de su existencia una verdadera política de protección sin que ésta haya sido, fijémonos bien, un obstáculo á su progreso.

¿Qué debemos inferir de esto?

Pues que tanto una como otra escuela produce sin duda alguna los mejores resultados, y no se crea que decimos esto por mero eclecticismo y por puro espíritu de conciliación, sino porque creemos *que el asunto depende de la adaptación de las teorías á cada caso particular*, y así juzgamos que las teorías que en un pueblo dan los más brillantes resultados pueden bien producir en otro y aun en el mismo pueblo cambiadas las condiciones actuales de existencia, los peores efectos económicos.

Ya hemos visto en los datos históricos que brevemente hemos apuntado sobre la Industria Inglesa, que el gobierno de este país fué durante largo tiempo (en los siglos 17 y 18), netamente proteccionista, pues en tal época no teniendo los ingleses sino mercados muy restringidos y no contando por otra parte con la inferioridad de sus competidores en el mercado del mundo, se atenían estrictamente á la política de protección. Por otra parte tal protección no solo era demandada por las industrias manufactureras sino también por la agricultura, que como recordaremos, se vió seriamente comprometida por los cambios que en ella se verificaron. Es por esto (dice Poinsard) que el sistema de la *protección* fue siempro en esta época, considerado como una regla fija de la política Nacional Inglesa. Estos intereses adquiridos que el sistema había creado, fueron más tarde un obstáculo bastante serio para cambiar de política una vez que este cambio se hizo necesario y decimos necesario, porque no fué únicamente una medida gubernativa dictada por simples preocupaciones de escuela, sino impuesta por el estupendo desarrollo, de las ramas todas de la producción inglesa. Si el gobierno inglés hubiera querido seguir las teorías del *libre cambio* antes de que la época apropiada para ello hubiera llegado, creemos que la adopción de tales doctrinas hubiera sido un fiasco. En nuestro humilde concepto, el sistema libre cambista es susceptible de producir los maravillosos resultados que los economistas más notables esperan de él, cuando la adopción de tal sistema se haga por pueblos cuya organización económica sea ya tan complicada y tan preponderante la iniciativa individual, que las *funciones* de vida todas de este pueblo no puedan ser vigiladas ni ordenadas por el gobierno por causa de esta misma complexidad; entonces la iniciativa privada llenará los vacíos, y el régimen de libre cambio se efectuará sin peligros.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Por el contrario, adáptese esta misma escuela económica á un organismo social débil, donde la iniciativa individual sea nula ó casi nula, donde todavía no hay industria ó que si la hay es en embrión, donde hay solamente una agricultura que no alcanza ni aun para abastecer sus mismos mercados. ¿Cuál será el resultado de tal experiencia? No creemos que fuera de mucho éxito, pues aun cuando la libertad del cambio abriera por todos lados la entrada del producto extranjero á este país, no por eso llegarían á verificarse tales cambios, pues no teniendo efectos por los cuales trocar, puesto que produce apenas lo muy preciso para sostener las necesidades más exigentes de vida, mal podía cambiar libremente.

Pero supongamos que ese mismo pueblo procura robustecer su agricultura y su industria, y que para ello recurre á procedimientos, aunque sean artificiales, y que una vez que ha logrado adquirir esas dos fuentes de riqueza, se confía al libre cambio con todas sus consecuencias, entonces sí creemos que pueda obtener algún resultado plausible.

Ahora bien, de la misma manera que el libre cambio no es aceptable en muchos casos, así también la protección redunda en perjuicio del mismo protegido cuando la época económica de su aplicación ha pasado ya. Tal es el caso de los Estados Unidos de América en donde en la actualidad creemos qne es un estorbo la política proteccionista que durante tanto tiempo han seguido, y por esto juzgamos que Henry George[1] tiene razón cuando atribuye los males que aquejan á su país al régimen proteccionista; ¿pero vamos á declarar por esto, que tal régimen sea torpe nada más porque ha pasado ya la época de su empleo en ese medio económico?

Este autor americano en su obra "Protección ó Libre Cambio," notable por tantos conceptos, juzgando de la protección, por los inconvenientes que su país produce actualmente, generaliza sus concepciones y llega á olvidarse de

1 Henry George "Libre Cambio y Protección."

que gracias á los medios artificiales, *ayudados indudablemente por el carácter de la raza*, es como los Estados Unidos han logrado colocarse en la lista de primeros productores. Creemos nosotros con él que el porvenir de su país quedará asegurado, así como salvadas las crisis económicas que prevée en su obra, confiándose al libre cambio, pero no porque la protección sea ineficaz,, sino porque como ya hemos dicho, juzgamos en nuestro humilde concepto pasado el tiempo de su empleo en ese país.

Esto nos lleva irremisiblemente á considerar, que si bien es cierto que la protección produce benéficos resultados, sin embargo, su empleo no queda exento de peligros, cuando se adapta á pueblos que la requieren, y así es en efecto. El uso poco acertado de tal doctrina puede resultar contraproducente cuando los medios de que se valen los gobiernos recaen con efectos perniciosos sobre la nación. Entre tales medios están sin duda las famosas tarifas arancelarias, cuyos peligros é inconvenientes nos pinta tan claramente el autor americano anteriormente citado.

Tales tarifas, cuyo objeto es hacer subir el precio del producto extranjero con el objeto de impedir la competencia de él con el de la naciente industria que trata de protegerse, tienen desde luego el grave inconveniente de no dejar la libre competencia entre los productores nacionales y extranjeros, y por consecuencia se suprime este gran factor de progreso industrial; en tal virtud la rama de producción que trata de ayudarse, es cierto que establece y se implanta en el país, pero por el mismo *aislamiento* en que se halla, y contando por otra parte con mercado seguro, no se preocupa por el adelanto de su producción, y los inventos nuevos no penetran en ella, permaneciendo atrasada, y debilitándose por consecuencia grandemente.

Tiene otra desventaja, de la cual merece hacerse mención: y es que el conjunto, es decir, la nación, la universali

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

dad, como quiera llamársele á la masa de consumidores nacionales, está sacrificándo una parte de sus energías en favor de tal industria, que por otra parte no progresa á pesar de tal sacrificio. Agréguese á esto, que es indefinido su empleo; es decir, que siempre es desconocida para el industrial protegido y aun para el mismo gobierno la época en que tal ayuda deberá desaparecer, pues casi siempre se pregunta; ¿cual será el máximun de duración de tales tarifas? Responden algunos: durará la protección mientras la industria, motivo de tales medidas, esté débil y no pueda competir con los productores extrajeros. Pero aquí surge una nueva dificultad: ¿como comprueban los gobiernos que la existencia de las industrias protegidas no sufrirá con la desaparición de las tarifas? He ahí una barrera infranqueable; pues como hace notar Poinsard, jamás se ha dado el caso de que un industrial protegido manifieste que ha llegado el momento de la supresión de tales tarifas, y por otro lado, el Estado no debe llevar su vigilancia hasta intervenir en el funcionamiento interior de las industrias protegidas, aun cuando parezca que tiene derecho, pues abandonaría su esfera de acción.

Este medio de protección tiene también la desventaja de no poderse emplear para proteger á todas las industrias; así por ejemplo, la agricultura no puede ser ayudada en todos sus ramos de producción por este medio, pues estamos seguros que no habrá nunca un solo gobierno que con el objeto de estimular el desarrollo agrícola prohiba por medio de tarifas proteccionistas la entrada de los granos extranjeros de primera necesidad.

Pero no es sola la agricultura propiamente dicha la que no puede gozar de apoyo con las tarifas; tampoco las industrias transportivas pueden estimularse por este artificio. Aquí nace la necesidad de recurrir á otro procedimiento adaptable á la producción de tales industrias, y este es el de las

primas ó premios, de los cuales habíamos hecho ya mención. [1]

Este otro medio de estimulación proteccionista es y ha sido siempre mucho menos combatido que el anterior de que hemos hablado por los economistas partidarios del Libre Cambio; y en verdad, su empleo es menos peligroso que el de los impuestos de importación, pues con él no hay el riesgo del encarecimiento de los productos, objeto de protección, y además, si hemos de creer á *George*, el gobierno conoce bien la suma con la cual contribuye al sostenimiento de cada industria protegida, y en consecuencia, puede saberse también con bastante certidumbre el éxito que les está reservado.

Las ventajas de este procedimiento sobre el anterior resaltan más cuanto mayor es el número de industrias protegidas, pues siendo así que no se encarecen los productos del protegido, no se perjudican tampoco á las industrias que aprovechan tales productos en su fabricación; lo cual como desde luego notaremos es altamente conveniente, pues dado el enlace que naturalmente existe entre todas y cada una de las ramas de la producción, se hace sentir en todas ellas el benéfico resultado de la protección otorgada á una sola.

Generalmente es este procedimiento el que usan los pueblos que en la actualidad practican la protección; y sus buenos efectos son bastante sensibles, sin embargo de tener también como el anterior el inconveniente de hacer pesar sobre la masa de consumidores, y de *consumidores nacionales solamente*, el importe total de las sumas que el Estado les otorga como premio.

Tal inconveniente no deja de ser grave aun cuando esa suma sea conocida para el gobierno, en cuyas manos está disminuirla ó aumentarla, según convenga, pues de todos

(1) Generalmente se considera á las tarifas como el único medio de protección empleado por los Gobiernos, excluyendo así á otros que, como las primas ó premios, son verdaderos estímulos protectores.—Véase á Henry George.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

modos hay gasto de una parte de la riqueza nacional para conseguir el establecimiento y desarrollo de las industrias que se trata de proteger.

Pero además de los dos procedimientos que la protección emplea generalmente, y de los cuales hemos ya hecho breve examen, existe otro medio que carece completamente de las desventajas de sus congéneres, y que, sin embargo, produce los resultados brillantes que á las tarifas y á los premios se les exige. Nos referimos á la exención de impuestos.

Este procedimiento, que en nuestro concepto es el *más natural* para instalar y engrandecer á determinada industria, consiste en dispensar durante un número fijo de años del pago de todos los impuestos, ó de algunos de ellos solamente, á la rama de producción que se trata de establecer.

Desde luego veremos que tal medida coloca al protegido en una situación mucho mejor que la de sus rivales extranjeros, pues siendo estos gravados en todas partes con los impuestos de tantas naturalezas, claro es que su producción será más barata siempre que tenga una localización económica, es decir, que tenga la fácil adquisición de la materia prima, y sobre todo, que cuente con motor barato al cual se una la perfección de los procedimientos.

Alguien ha dicho, y con sobrada razón, que este sistema de exención de impuestos, aplicado por gobierno inepto, pone en grave peligro á la organización industrial; pues puede por ese medio desarrollar, tal vez demasiado, determinado género de industrias, las cuales atraen los brazos y capitales que serían necesarios á otras, y que por esto se vigoricen las unas con detrimento de las otras. Es cierta tal conclusión, pero debemos pensar que la organización de la Industria en general de un país, no es estable, pues sufre alteraciones pasajeras aunque frecuentes, debidas á los inventos, á los cambios de consumo, á los impuestos, etc., etc., y además si bien es cierto que tales alteraciones son peligrosas, se atenúan mucho, gracias á los actuales progresos de la civilización. Pero lo que los gobiernos deben tener muy presente, en nuestro concepto, es la necesidad que hay de no pervertir tales medios, prodigando las concesiones con excepción de impuestos, pues debe hacerse solamente extensiva esta ayuda á aquellas cuya existencia puede ser real, positiva y permanente en el país al cual se trata de dotar.

Cuando se quiera aclimatar ó establecer ramas de producción nuevas, deben preferirse, como dice George, aquellas que sean económicas en el país y que su vida no vaya á ser duradera solamente mientras exista la situación ventajosa que el Estado le proporciona; pues lo que se quiere al conceder la exención de impuestos, es proporcionar al empresario una manera de disminuir los gastos de instalación y hacer que por esa ventaja se sienta inclinado á establecerse en un país en donde su producción va á ser más barata.

Este procedimiento es en nuestro concepto el más cómodo, porque su empleo no tiene los inconvenientes de los anteriores. En efecto, no existe con este sistema gasto de energías de la totalidad de la nación en provecho de la industria que trata de establecerse; se le entrega á los efectos de una competencia aunque sea limitada, poniéndola, es verdad, en circunstancias económicas tal vez mejores; además, siendo su empleo definido en cuanto al tiempo, se obliga al industrial á calcular sus gastos de una manera más cierta y prepararse así para seguir produciendo una vez que llegue la época en que la protección del Estado desaparezca. Además, puede ser empleada para las varias industrias, pues se amolda perfectamente á todas y á cada una de ellas, pero sobre todo á la agricultura y á las industrias manufactureras propiamente dichas.

Este sistema es suceptible además de emplearse por cualquier país, pues por más mala que sea su situación económica, nunca el empleo de tal medio artificial la agravará;

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

antes bien le procurará elementos de vida con la creación de nuevas fuentes de producción por lo pronto; y más tarde, le permitirá recaudar mayores impuestos. Lo único que necesitará, será tener condiciones tales de riqueza natural en su suelo, que atraigan al capital extranjero en caso de escasez de tales elementos y despierten la iniciativa de sus nacionales.

Creemos que de los medios que un gobierno puede emplear para instalar y engrandecer una Industria, este es el que menos peligros, más ventajas y más probabilidades de éxito presenta, y sus efectos benignos se deben, según juzgamos, á que es de los procedimientos de estimulación que quedan en manos del Estado, el que más se acerca al régimen de libertad; por eso decíamos anteriormente, tomando la frase de un notable economista, que "es el método de creación y organización industrial más natural."

Fuera de estos medios, nuestros escasos conocimientos no hallan otros por los cuales pueda el Estado intervenir directamente protegiendo y desarrollando su industria, y solamente pensamos en aquellos que si bien pueden llamarse protectores, no son creados por un Gobierno, aun cuando sí puedan ser conservados y utilizados por su vigilancia.

Nos referimos á aquellas situaciones económicas especiales en que repentinamente se encuentran las naciones y que constituyen un estado ventajoso para el desarrollo de su productividad. Una de esas situaciones es sin duda en la que se encuentran los paises de talón *plata* con respecto á los de talón oro cuando la primera ha atenuado repentinamente su valor de equivalencia con respecto al segundo.

Concretándonos solamente á analizar los efectos que tal situación acarrea sobre el desarrollo de su productividad, notaremos que su condición económica en este punto es favorecida.

En efecto, en un hecho que los cambios entre naciones

cuya equivalencia monetaria ha variado de tal manera, se perturban, y que el mecanismo de tales perturbaciones es como sigue: en primer lugar, el pueblo cuyo talón se ha abatido de valor, se ve forzado á no absorber la misma cantidad de efectos extranjeros que antes absorbía; y por consecuencia, no pudiendo adquirirlos en el extranjero, se ve obligado á fabricarlos. Por otro lado, siendo así que en comparación con la unidad monetaria depreciada la otra moneda ha aumentado de valor, el capital extranjero se siente aumentado con el solo hecho de transportarse á ese país cuya moneda ha sido depreciada. Por este medio contribuye la riqueza exterior á impulsar la industria de aquel país cuya situación á primera vista parecería desmejorada en lo absoluto. Además de este efecto primero, tenemos uno que es como el corolario del anterior, cual es; el aumento de las exportaciones del país cuya moneda ha sido depreciada, y en consecuencia el ensanchamiento para él de los mercados, y acrecimiento de su productividad.

Tales medios, como decíamos antes, no está en manos del Estado el producirlos, pero si el aprovecharlos; para lo cual debe crear la igualdad real de derechos entre nacionales y extranjeros, si es que en su Constitución no existe tal principio, procurando así el aumento de su población y su riqueza, y conservar desde luego el talón monetario que tales ventajas le proporciona. Por estos procedimientos creemos que el Estado puede bien prescindir de medidas proteccionistas con respecto á las industrias manufactureras transportivas y extractivas y consagrar la suma de sus energías al engrandecimiento de su producción agrícola.

Pero creemos que estas situaciones económicas son extraordinariamente raras, y aun nos atrevemos á considerar que en el transcurso de miles de años pocos casos se presentarán como la actual crisis del talón plata; en consecuencia

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

raros serán los casos en los que el Estado tenga que aprovecharse para su existencia económica de tales situaciones.

Sin embargo, apuntamos estas breves consideraciones porque es una situación favorable al desarrollo industrial de un pueblo, y el Estado puede muy bien convertir lo que parecería una terrible situación, en un apoyo bastante eficaz para el desarrollo de su riqueza pública, pues ya hemos visto que efectos produce de una manera indirecta sobre ella.

Hemos analizado rápidamente los medios que el Estado puede emplear para intervenir en la creación y desarrollo de las ramas de producción. Hemos visto sus peligros y señalado sus desventajas, así como los casos en que su aplicación es imposible, y como resultado de tan breve análisis, podemos sentar las siguientes conclusiones:

1ª *La intervención del Estado en la creación y engrandecimiento de la Industria, dado el grado evolutivo en que se encuentran los pueblos aun los más adelantados, es no solo un hecho, sino un hecho necesario.*

2ª *Esa intervención es mayor á medida que es más preponderante el régimen militar, y solamente irá desapareciendo al irse modificando el medio social hasta hacerse compatible con el régimen de la libertad.*

3ª *Los Gobiernos tienen, en consecuencia, que seguir un sistema de intervención que esté en consonancia con su estado social y emplear estimulantes más enérgicos mientras más atrasado sea tal estado social.*

Un notable economista moderno, Mr. Leroy-Beaulieu, al hablar de las funciones principales del Estado, enumera como tales las siguientes:[1] 1ª Función de seguridad, esto es, conservación de la paz tanto interior como exterior de la nación. 2ª Aseguramiento de servicios comunes manifiestamente útiles, que no pueden ser eficazmente constituídos sin el empleo de la coacción reglamentaria ó de la coacción fiscal. 3ª *Función de conservación y perfeccionamiento de las condiciones generales de existencia y de felicidad* de la nación. 4ª Función de representación y sanción del derecho. 5ª Función de contribución al progreso general de la civilización.

1 Leroy.—Beaulieu.—Traado de Economía Política, tomo 4, página 678.

En la tercera función, que como vemos es amplísima, no cabe duda que está comprendida la dirección que el Estado debe dar, dentro de los límites que hemos marcado, á las energías de la nación, para procurar conservar y perfeccionar los medios de existencia y engrandecimiento de la misma.

Pero el Estado no solo debe concretar su acción á la *conservación y engrandecimiento* de los elementos actuales de prosperidad de la nación, sino hacerla extensiva á la creación y *utilización* de las fuerzas vivas que emanen de la raza ó del suelo; pues es indudable que es á costa de creaciones y utilizaciones (permítasenos la frase) como se consigue el progreso, y es así como puede cumplirse con la quinta de las funciones principales que para el Estado enumera tan distinguido autor.

Pero veamos, ¿cuáles son las condiciones generales de existencia y felicidad de la nación por cuya conservación y perfeccionamiento debe velar el Estado? Pues son la riqueza de su suelo, su potencia de productividad y las cualidades de la raza. Ahora bien, para la conservación y perfeccionamiento de la segunda de estas condiciones que acabamos de enumerar, debe intervenir necesariamente el Estado, sea estimulando á la producción, sea cambiando y mejorando su organización en el grado en que ya hemos visto que puede hacerlo y de acuerdo con el estado de progreso en que se encuentre. Si el notable tratadista á que venimos refiriéndonos no habla al tratar de la 3ª función del Estado, de la ingerencia tan grande que le corresponde en la creación, orga-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

nización y engrandecimiento de la industria, lo hace sin duda porque cree que al conceder tal intervención se desvirtúan sus magníficas ideas sobre libertad de los cambios. Pero en tanto que niega tal intervención, concede la facultad al Estado de legislar é intervenir en materia de tala de bosques, uso y aprovechamiento de aguas de propiedad pública y privada, caza y pesca, etc., etc.; asuntos de vital importancia sin duda alguna, mas no lo son menos los que se refieren á la producción bajo todos sus aspectos.

Así pues, vemos que es una necesidad ingente para todos los pueblos, y mayor todavía para aquellos que están en el principio de su desenvolvimiento, el confiar la dirección de sus energías á su Gobierno, que formado por la parte más apta de la agrupación, tiene sin duda alguna mejor conocimiento de las situaciones. Pero como por otra parte esas situaciones van siendo más y más complicadas á medida que mayor va siendo también el progreso de la comunidad, resulta como ya hemos visto, que no es posible que la reglamentación del Estado vaya hasta los más pequeños detalles, los cuales van quedando entregados al cuidado de la iniciativa individual, que por otra parte se va fortificando lentamente gracias también á que el mismo progreso generaliza los conocimientos científicos. Una vez que tales conocimientos se propaguen suficientemente, entonces el Estado es ayudado en su complicada tarea por la iniciativa privada, y por consecuencia se facilita un tanto la dirección administrativa. Por eso vemos que los gobiernos del período del militarismo necesitan ser muy inteligentes, dada la complexidad de sus funciones; por eso también se exige todo de ellos y se les atribuyen todos los males que sufren los pueblos que se encuentran en tal grado de desarrollo.

Ahora bien; para crear esa iniciativa privada, que ha de venir más tarde á ayudar al Estado en su tarea de engrandecimiento, el único medio eficaz es la libertad del trabajo,

bajo cuyos auspicios es como solamente puede despertarse y funcionar tan importante factor económico. Ya hemos visto también cómo los pueblos más civilizados confían en parte el desarrollo y organización de sus fuerzas productoras á ese magníficó principio; el cual ha sido elevado por la mayor parte de ellos al rango de principio constitucional.

Nuestra Constitución, que es hija de las más puras ideas de libertad, sienta también tal principio, y en su art. 4º proclama: *que todo hombre es libre para abrazar la profesión, industria ó trabajo que mejor le acomode, siendo útil y honesto, y para aprovecharse de sus productos.*

Dentro de los límites de tal principio puede crearse y desarrollarse la iniciativa privada, buscando las ocasiones más favorables y los medios más lucrativos para su ejercicio.

Esa actividad solo quedará limitada por el principio eterno de la justicia; cuando su acción sea atentatoria á los derechos de un tercero, ó á los de la sociedad; pero fuera de tales limitaciones, la libertad de trabajo está reconocida en nuestra Constitución de la manera más amplia, de la manera más completa.

Pero si dentro del postulado del art. 4º cabe, como decíamos antes, la creación y engrandecimiento de la iniciativa individual, ¿cómo debemos juzgar respecto de los derechos consignados en el art. 5º? ¿cómo debemos entender el sentido de tal principio?

Nadie puede ser obligado á prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento.

¿Debemos por esto entender que el Estado está imposibilitado constitucionalmente para obligar á los miembros de la nación á prestar los servicios que de ellos necesite? ¿debemos entender por esto acaso, que el gobierno no puede compeler á un hombre á ejecutar determinados actos que vayan encaminados, por ejemplo, á procurar su corrección, por el hecho de que tales actos impliquen trabajo personal? ¿debe-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

mos juzgar que tal principio sea un obstáculo para el establecimiento del régimen penitenciario? ¿podremos creer que tal artículo sea la tolerancia constitucional de la indolencia? No señores, los constituyentes no quisieron crear con ese principio una salvaguardia bajo la cual se protegieran los perezosos y los malos hijos que se negasen á servir á la patria en los casos aciagos; la mira de los constituyentes fué otra.

Indudablemente que las condiciones "*justa retribución* y *pleno consentimiento*" deben coexistir para que un hombre pueda ser obligado á prestar los servicios personales á que se hubiera comprometido con respecto á un hombre, es decir, á una persona de Derecho Civil. Los términos del artículo se refieren más bien á obligaciones contraídas entre individuos y no á las que nacen de las relaciones entre éstos y el Estado.

De otra manera, ¿como podría obligar el Estado á los ciudadanos á prestar su contingente de *sangre* en los casos de guerra? ¿De que medios se valdría el gobierno para implantar la instrucción obligatoria tan importante y que tan buenos resultados produce, sobre todo en pueblos todavía en embrión? [1] ¿Cómo se establecerían los trabajos penitenciarios? ¿Cómo podría el Estado combatir la vagancia?

Indudable es, en nuestro concepto, que los derechos que el artículo consagra se refieren á *obligaciones puramente civiles* y no á las que nacen de las relaciones entre el individuo y el Estado. El artículo habla de contratos, de convenios, y entre el individuo y el Estado no existen más contratos que los que éste celebra por medio de sus representantes y con el carácter de persona de Derecho Civil; los *tácitos* no fueron más que una mágnífica utopía que naciera del cerebro de Rousseau. Si el artículo debiera interpretarse en el sentido amplísimo en que se le ha querido interpretar, ni podría el Estado *combatir la vagancia*, fuente primera del delito de robo; ni establecer el *sistema penitenciario*; ni obligar á los ciudadanos á servir como soldados á su bandera; ni tampoco obligar al pueblo á que se instruya, pues en todos esos casos que enumeramos habría trabajo personal; y sin la justa retribución y sin el pleno consentimiento por parte del individuo, el Estado no podía compelerlo ni á instruirse, ni á servir á su patria, ni á buscar el último remedio contra el delito, ni el preventivo contra la miseria.

(1) El trabajo del aprendizage no puede ser considerado como tal en el sentido *económico* de la palabra, pero como es sin embargo un trabajo personal, lo colocamos al lado de los restantes ejemplos.

Así pues, creemos que no es esa la interpretación que debe darse al artículo á que venimos refiriéndonos, sino antes bien restringir su significación al caso concreto de las obligaciones civiles en las cuales, sin duda alguna, la suprema ley es la voluntad de las partes.

De esta manera podrá el Estado dictar medidas educativas y correctivas, [1] podrá hacer que los individuos todos empleen sus energías, dotando así nuestra naciente industria de los brazos que tanta falta le hacen.

Pero dejemos ese importante asunto sobre el cual nos hemos atrevido á formular una interpretación, creyendo, como creemos firmemente, que no limita ese precepto la intervención que al Estado corresponde en los graves asuntos con los cuales se relaciona, y hagamos algunas breves consideraciones sobre los límites que nuesta Constitución traza al Gobierno en lo que se refiere á la Industria.

Desde luego y después de plantear en su art. 4º el principio de la libertad de trabajo, determina en el art. 28 que no habrá monopolios, ni estancos, *ni prohibiciones á título de protección á la industria*. En ese principio se prohiben terminantemente los monopolios en sus dos formas, tanto en

(1) Entre estas medidas educativas y correctivas debemos considerar á las leyes que reglamentan la ociosidad, las cuales existen en países que son de hecho y de derecho más libre que el nuestro.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

la forma de monopolios propiamente dichos, es decir, prohibición hecha en favor de un particular, como en la forma de lo que se ha llamado *estanco*, que no es sino la reserva que el Estado hace en su favor de determinada producción ó cambio.

Una y otra han sido condenadas ya por la ciencia económica, y solamente se ha hecho necesario conservar al Estado, como lo hace nuestra Constitución, la facultad de *fabricar moneda* por la necesidad ingente que hay de que él garantice con su directa intervención el valor intrínseco de ese importante factor de los cambios.

Pero además de la reserva que á la acuñación se refiere, nuestra Constitución establece otra, relativa al servicio de correos, y en ésta en realidad no vemos la misma necesidad que al tratarse de la anterior, pues tal servicio puede muy bien ser hecho por las empresas privadas, á no ser que juzguemos que tal restricción obedece á la necesidad que hay de la intervención gubernativa, tanto para hacer efectiva la garantía consignada en el art. veinticinco, como porque las "convenciones postales" con otras Naciones la hacen necesaria.

La otra excepción que el principio establece es la que se refiere á patente de invención, ó sea el privilegio que por tiempo limitado concede la ley á los inventores ó perfeccionadores de alguna mejora para aprovecharse de los productos de su invento. Tal principio, que no es sino el reconocimiento de ese derecho *sui géneris* que Spencer [1] llama de propiedad incorpórea, ha sido calificado indebidamente como monopolio.

"Es verdaderamente extraño (dice el autor que citamos) que gentes ilustradas sostengan que el hecho de la publicación de un invento lo hace de propiedad pública, y que en virtud de la libertad de trabajo cualquiera puede aprovechar-

(1) La Justicia, pág. 145.

se de él de cualquiera manera y afirman por eso que ese derecho constituye un monopolio y no una forma de la propiedad. En el sentido económico (agrega el mismo autor,) un monopolio es un arreglo por virtud del cual la ley confiere á una persona ó corporación el uso exclusivo de ciertos productos, de ciertas facilidades, ó de ciertos agentes naturales que á no existir tal ley, estarían á disposición de todos."

Como vemos, en el monopolio se trata de derechos concedidos por una ley sobre productos, facilidades ó agentes naturales á los cuales el monopolizador no les ha dado existencia, vida, ni forma, en tanto que en los privilegios de invención la ley ne hace otra cosa que reconocerles á los inventores como suyo aquello á lo cual ellos han dado vida, existencia, forma.

"Es indudable que el idioma, las ciencias y los demás productos de la civilización anterior, de los cuales el inventor se ha servido, pertenecen al conjunto social; pero esos productos intelectuales de la civilización son accesibles á todos, y al utilizarlos el inventor, no ha disminuído el poder de otro para servirse de ellos. De manera que sin substraer nada de la riqueza común, lo que ha hecho sencillamente es combinar algunas partes con sus pensamientos, sus sentimientos, su talento técnico, cosas todas que son exclusivamente suyas y que le pertenecen más aun que lo que le pertenecen á su propietario los objetos visibles y tangibles que encierran materia prima puesta fuera del uso de los demás hombres.

"En realidad, un trabajo mental es una propiedad tan plena y tan completa como lo pueda ser cualquier producto del trabajo corporal, y aun más, porque en aquel lo que constituye todo su valor es obra exclusiva del trabajador."

Pero entonces ¿por qué se ha querido limitar la posesión en el caso de los inventos?

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Ya hemos dicho que hay un fondo de conocimientos científicos que es la fuente de donde el que inventa tiene que sacar los datos necesarios para sus creaciones; ahora bien, este fondo común tiene que enriquecerse con los nuevos elementos que el genio vaya descubriendo para que sean posibles posteriores descubrimientos ó creaciones, pues de lo contrario el progreso no sería posible.

Ahora bien, es por esto y para que ese progreso constante exista por lo que se limita en cuanto al tiempo el derecho de los inventores. Además, es también un medio de estimular la producción: pues si los que trabajan por descubrir algo nuevo, supieran que el fruto de su estudio y de su empeño no les pertenecería ni un momento, entonces ó no lo revelarían en el caso de que hubieran llegado á descubrirlo, y el fondo de conocimientos no aumentaría, ó bien no se dedicaban á ese género de trabajo abandonando el campo de las investigaciones.

Como vemos, el principio constitucional á que venimos refiriéndonos es importante, pero más importante todavía es la parte en que determina, aunque de una manera amplia, el grado en que el Estado debía intervenir en los fenómenos de la producción.

En efecto, después de abolir los monopolios en sus dos formas, suprime también las prohibiciones cuando tales prohibiciones quisieran ser hechas á título de protección á la industria. Ya hemos dicho, al hablar de los diversos grados de intervención del Estado, que existen tres sistemas, de los cuales el primero de que hacemos mención (la prohibición) ha sido excluído por la ciencia económica. Hemos visto cómo dictando los gobiernos medidas legislativas prohibicionistas, logran suprimir del todo la competencia de los artículos extranjeros con los del país, y por tal motivo suprimen completamente ese importante impulsor de la producción. Además, como con la teoría del prohibicionismo se puede

aun llegar á vedar las exportaciones, resulta que limitándose los mercados del producto nacional y excluyéndolo del comercio universal se consigue la atrofia de sus facultades productoras y su ruina.

Los males de tal sistema fueron previstos por los constituyentes en este principio al cual nos venimos refiriendo, y lo abolieron cuando se inspirasen tales prohibiciones en la protección á la industria ó en cualquier otro motivo económico. Vemos en consecuencia que nuestra Carta fundamental no deja al Estado más que dos sistemas, ó la Protección que no se informe en prohibiciones, ó el Libre Cambio.

¿Cuál de los dos se ha seguido en nuestro país?

Veamos si analizando nuestras leyes descubrimos cuál ha sido en este sentido la política de nuestros gobiernos. Desde luego al Arancel de Aduanas marítimas y fronterizas deberá darnos el dato más exacto sobre tal política, y analizándolo encontramos en él como primer carácter una elevación extraordinaria en sus cuotas que le ha dado fama casi universal.

¿Podremos creer por esto qne es un arancel totalmente proteccionista? No; pues aun cuando en algunos casos lo es como por ejemplo en materia de tejidos é hilados de algodón y de lana, seda, tabacos, papel, etc., en cambio hay otros casos en los cuales aun cuando dichas cuotas sean elevadas, no van encaminadas á proteger á los similares del país, puesto que tales similares ni existen; es el caso de los derechos impuestos á la quincallería, á las armas, á los efectos llamados de mercería, etc., etc.. de los cuales no tenemos en el país nadie que pueda llamarse propiamente productor de ellos.

Para estos artículos, lo elevado de las cuotas arancelarias no obedece más que á las críticas situaciones del Erario Federal, el cual ha encontrado en los derechos de importación una de sus más pingües rentas. En consecuencia, podemos dividir las cuotas de importación de nuestro arancel en cuo-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

tas realmente proteccionistas y en cuotas meramente fiscales; entre las primeras podemos colocar á los impuestos que gravan los hilados y tejidos de algodón extranjero, los hilados y tejidos de lana y seda, los que gravan al papel, al tabaco y á las pieles curtidas; quedando con el carácter de tarifas fiscales todas las restantes cuotas del arancel. En cuanto á las tarifas de exportación, juzgamos que también han sido dictadas con la mira de adquirir recursos fiscales (aun cuando son relativamente pequeñas), y sus efectos no han sido perniciosos. Se tiene sin embargo la creencia de que esas cuotas no deben existir, y aun hay pueblos cuyas constituciones las prohiben completamente, temiendo que por ese medio sean excluídos del comercio universal.

Sin embargo, creemos que tales impuestos, cuando no sean exagerados, producirán en lugar de los graves males que se les atribuye, un efecto contrario; pues se practicará una especie de selección en las exportaciones, por medio de la cual los exportadores procurarán lanzar al mercado universal las mejores clases de los efectos de exportación, lo cual contribuirá á crear una buena fama á tales productos.

Par otra parte, limitándose un tanto las exportaciones, quedará una existencia de tales efectos para el consumo nacional, y en consecuencia no se dará el caso de que en un país productor de determinado artículo, no se pueda conseguir tal artículo si no es al precio que se paga por él en países en que no se produce.

Tal ha sucedido entre nosotros con el café por ejemplo, pues tenía la necesidad de pagarlo el consumidor de México al mismo precio que el consumidor de Londres.

Vemos, pues, que en realidad nuestro arancel es proteccionista en parte, y en parte son sus tarifas meramente fiscales; pero la política seguida en nuestro país se revela más claramente en las concesiones otorgadas para construir ferrocarriles, y más aun en la ley de 30 de Mayo de 93.

En las primeras, se ha seguido la costumbre de otorgar concesiones á personas ó Compañías que al efecto se organizan para construir las vías férreas, celebrando un contrato el Ejecutivo por conducto del Ministerio de Comunicaciones con los concesionarios, en el cual contrato se estipulan por regla general las bases siguientes; un plazo dentro del cual debe quedar concluido el ferrocarril; aprobación del trazo de la vía por la Secretaría de Comunicaciones de acuerdo con el Reglamento de ferrocarriles; un plazo de 99 años, concluído el cual la vía con estaciones, talleres, etc., pasará libre de todo gravamen á poder de la nación; las empresas que obtengan tales concesiones serán siempre mexicanas y estarán sujetas á la jurisdicción de los Tribunales nacionales; las Compañías tienen el derecho de vía, que consiste en usar una faja de terreno de 70 metros de ancho y del largo de la vía que se trata de construir; esta faja de tierra no podrá ser usada ni ocupada sino por otro ferrocarril y cuando lo juzgue conveniente el Ejecutivo, sin impedir por eso el tráfico del que adquirió por concesión anterior tal derecho. Además, tienen la libre ocupación de los terrenos de propiedad de la nación que sean necesarios para la vía ó estaciones, almacenes, etc., así como el derecho de pedir la expropiacion de aquellos que siendo de propiedad particular se nieguen á enajenarlos sus propietarios; los directores, empleados, etc., del ferrocarril quedarán exentos del servicio militar y de todo cargo concejil durante el tiempo que sirvieron en el camino y se le concede además á la Empresa *la libre introducción* de todos los materiales necesarios para la construcción, reparación y conservación de la vía, durante un número determinado de años.

Debemos hacer notar que en las últimas concesiones, no existen ya las primas ó premios que con el nombre de subvenciones se habían estado otorgando durante muchos años

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

en nuestro país, y gracias á las cuales se construyeron todos los ferrocarriles que existen.

Esos premios consistían en sumas que por cada 100 kilómetros reconocía el Gobierno á las Compañías con el objeto de ayudarlas en sus gastos de instalación; pero el desarrollo extraordinario de las vías férreas debido al abuso de tales medidas de estímulo, formó una respetable suma que vino á aumentar considerablemente el importe de nuestra deuda.

El justo temor de seguir aumentando esa deuda, cuyos gastos ocupan una parte considerable en el presupuesto de egresos, ha hecho, según creemos, que el Gobierno Federal no concede tales subsidios á las Compañías á quienes hace concesiones en estos últimos tiempos. Sin embargo, vemos que les otorga multitud de franquicias, las cuales son indispensables para procurar al país las comunicaciones que tanta falta le hacen y que estamos seguros no existirían si no fuera porque el Estado ha intervenido, usando de tan enérgicos estimulantes para el desarrollo de las industrias transportivas.

Vemos pues, que tanto en materia de industrias de tejidos de lana y algodón, como en las manufactureras de papel, de tabacos y pieles curtidas, el Estado emplea como medio protector las tarifas aduanales, y en cambio, al tratar de las industrias transportivas, recurre al otro medio de que hablamos ya, que es lo que más se apropia como estimulante á tal género de industrias. Vemos también que en materia de vías de comunicaciones, en estos últimos tiempos sobre todo, nuestro Gobierno ha abandonado el sistema de los premios por no permitir su empleo, por lo menos en la actualidad, la situación difícil en que se encuentra el Erario Federal; concretándose por tal motivo á emplear un procedimiento que si bien es de protección, es menos enérgico que las *tarifas* y las *primas*.

Ahora bien, ese procedimiento empleado para estimular

y procurar el desarrollo de las industrias de transporte, ha sino generalizado y aplicado á toda clase de industrias por la ley de 30 de mayo de 1893, de la cual nos ocuparemos aun cuando sea brevemente. Esta ley en su art. 1º autoriza al Ejecutivo para que *durante 5 años* pueda celebrar contratos, otorgando franquicias y concesiones sin perjuicio de tercero, á las Empresas que garanticen la inversión de capitales en el planteamiento y desarrollo de *industrias nuevas* en la República sujetándose á las siguientes bases:

1ª La duración de las franquicias y concesiones se graduarán según la importancia de la industria y no excederá en ningún caso de *10 años.*

2ª El mínimum del capital que se invierta en el establecimiento y explotación de la industria, no será menor de *doscientos cincuenta mil pesos,*

3ª Ese capital quedará *exento hasta* por *diez años* de *todo impuesto federal directo.*

4ª Los concesionarios respectivos podrán importar por *una sola* vez *libres de derechos,* las maquinarias, aparatos, herramientas, materiales de construcción y demás elementos necesarios para las fábricas y edificios; *otorgando fianza* en cada caso de introducción, que se cancelará luego que se haya montado la maquinaria y que se haya acreditado el empleo del material ó efecto. Los concesionarios deberán garantizar el cumplimiento de sus contratos con un *depósito* en valores de la *Deuda pública* que se fijará en cada caso por la Secretaría de Fomento y que se constituirá al firmarse el Contrato.

Vemos desde luego que esta ley autoriza al Ejecutivo para que celebre contratos por medio de los cuales otorgue franquicias y haga concesiones á las Empresas que garanticen la inversión de capitales en industrias *nuevas* en la República, es decir, que se refiere á industrias que no han existido en el país, tendiendo la ley, por tal motivo, más que al

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

desarrollo de las ya existentes, á la creación de nuevas, y preocupándose esa misma ley más de la variedad de la producción que del aumento de la intensidad productiva de las ya existentes, lo cual dadas las circunstancias actuales del país es más conveniente, pues es indispensable crear primero para después desarrollar.

En cuanto á que la existencia de esas industrias sea compatible con la naturaleza del suelo y los caracteres de la raza, que como hemos dicho antes forman dos de las condiciones de existencia de las industrias, la ley lo deja enteramente al cuidado de la iniciativa privada que tales franquicias y tales concesiones solicite, exigiendo ella solamente que tales ramas de la producción sean nuevas; de esta manera se consigue dejar cierta libertad á la iniciativa privada que busca en consecuencia, guiada por el interés personal, las ocasiones lucrativas más favorables; así se procura despertar y hacer más expansiva la ingerencia privada en el engrandecimiento de la producción.

En seguida la ley fija los límites tanto de duración de la protección, como del capital que se ha de invertir, determinando que el primero será variable según sea la importancia de la industria, y que el segundo necesitará ser por lo menos de doscientos cincuenta mil pesos.

Ya hemos dicho al tratar de los procedimientos por medio de los cuales el Estado puede procurar tanto la creación como el engrandecimiento de las industrias, que uno de los inconvenientes que tienen las tarifas, es que no puede fijarse generalmente el término en que la protección cesará; y también dijimos que ese inconveniente no existía respecto de la excepción de impuestos, que generalmente era hecha fijándose un plazo durante el cual se cimentaba la industria á la cual se protegía, plazo que siendo conocido para el empresario, lo ponía en el caso de prever lo coducente para que, llegando el tiempo en que tales franquicias desaparecían, pudiera ya estar en condiciones económicas suficientes para subvenir al exceso de sus gastos motivado por el pago de contribuciones.

Por eso la ley fija un plazo de 10 años, que es graduable á voluntad por el Ejecutivo, teniendo este en cuenta la importancia de cada industria; medida que es altamente conveniente, pues no todas ellas tropezarán con las mismas dificultades para su instalación, y estas dificultades crecerán en la mayor parte de los casos con la importancia de la obra.

En cuanto al lapso de 10 años como máximum, es, según creemos, meramente empírico y solamente aproximativo, pues no es posible dar en esa materia una regla fija, y en cuanto á aquellas industrias que pasado ese tiempo no hayan podido cimentarse de tal manera que puedan resistir el pago de impuestos, es porque su existencia no es compatible con la naturaleza del suelo ó de la raza, y por consecuencia su localización no es económica.

La disposición de la ley respecto al capital que deba invertirse, es interesante, pues por lo menos es un dato respecto á la magnitud de la empresa y una garantía de que la concesión no será otorgada sino á industrias de seria importancia.

Pero veamos ¿en que consisten las franquicias que la ley va á conceder á los implantadores de industrias nuevas? Desde luego advertiremos que no puede ser otra que la excepción de impuestos, que es el medio puesto en juego por la ley, y en efecto así es, pues exceptúa en primer lugar al capital invertido de toda contribución directa, y además permite que se introduzca libre de derechos y por una sola vez la maquinaria, aparatos, herramientas, materiales de construcción y demás elementos necesarios, todo lo cual se especificará en el contrato que se celebre entre el Ejecutivo y los empresarios.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

No necesitamos insistir sobre las ventajas que tales franquicias proporcionan á los implantadores de mejoras, y nos permitimos enviar al lector á lo que sobre el particular hemos dicho al tratarse de las grandes ventajas que proporcionan, tanto al Estado como á los individuos, el empleo de los medios de estímulo á los cuales pertenece la ley que venimos analizando.

Pero si es cierto que tales ventajas se producen, también es cierto que las bondades de la ley pueden ser aprovechadas para defraudar al Erario introduciendo libres de derechos, útiles, máquinas, etc., que bien pueden no dedicarse á esas industrias; para evitar tales inconvenientes es por lo que la ley dispone que se otorgue una fianza por el valor de los derechos, fianza que quedará cancelada una vez que los objetos introducidos hayan sido colocados en donde lo determina el contrato que ha dado nacimiento á las franquicias.

Por lo mismo, y para que sea eficaz el esfuerzo del Estado, se procura asegurar el cumplimiento del contrato por medio de un depósito en bonos de la Deuda Pública que en cada caso fijará el Ejecutivo, lo cual hará efectiva la obligación, y además procurará cierta alza en esos valores.

Respecto al tiempo que la ley permite al Ejecutivo para que otorgue tales concesiones (cinco años) nos parece pequeño, y solamente juzgamos que haya sido decretado así, con el objeto de que se apresuraran los empresarios á aprovecharse de los beneficios de la ley y que de esta manera se consiguiera el mayor engrandecimiento de las industrias dentro del menor tiempo; pero creemos que ese lapso deberá ser prorrogado por el Legislativo para que sean más palpables los efectos de la magnífica disposición á que hemos hecho referencia. Creemos además, que á disposiciones legislativas como la presente se debe dar la mayor publicidad posible (mayor que la que se da á las otras leyes,) tanto dentro del país como fuera de él, porque del conocimiento que de ella tengan los capitalistas y empresarios dependerá en mucho su éxito.

Disposiciones como la ley á que hacemos referencia, han sido dictadas por algunos de los gobiernos de los Estados, decretando también la excepción de impuestos locales para las empresas que siendo nuevas, traten de implantarse en su territorio; tales disposiciones coadyuvan eficazmente á los fines de la federal de 30 de Mayo, y no podemos menos que encomiar disposiciones como éstas de que ahora nos ocupamos. [1]

Hemos visto ya varias disposiciones de nuestro Gobierno que tienen el caracter de estimulantes, encaminadas tanto á crear como desarrollar la producción en nuestro país, y vamos ahora á ocuparnos de otras que no siguen las mismas teorías, y de las cuales examinaremos aunque sea rápidamente su naturaleza. Nos referimos á las leyes que establecieron las contribuciones sobre hilazas y tejidos de algodón, sobre tabacos elaborados y sobre los alcoholes, así como las leyes que se refieren á aguas.

En cuanto á las primeras de esas disposiciones, es decir, las que establecen las contribuciones á los hilados y tejidos de algodón y á los tabacos, parecería desde luego y á primera vista que eran inconsecuentes con la política de protección seguida por el Estado respecto á tales manufacturas, y así sería sin duda alguna si tal protección fuese impartida siguiendo otro sistema, como el de las primas ó la excepción de impuestos; pero como la protección es hecha aquí por medio de las tarifas aduaneras, resulta que tales contribuciones impuestas á las manufacturas de hilados y tejidos y de tabacos no son para ellas una carga pesada, pues dada la imposibilidad en que se halla el similar extranjero de competir

1 Tenemos noticia de que los Estados de Nuevo León, Chihuahua y Veracruz tienen dictadas leyes de excepción de impuestos en condiciones casi iguales á esta federal.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

con el nacional, éste puede subir sus precios hasta hacer que el valor total del impuesto con que se le grava recaiga indirectamente sobre el consumidor nacional, y en tal concepto la protección subsiste, á pesar de que un impuesto por grande qne sea gravite sobre esa producción.[1]

En cuanto á los que gravan la producción de alcoholes, sí son inconsecuentes con el sistema general seguido por el Gobierno, que como hemos visto consiste en estimular la producción empleando para cada caso el procedimiento más adecuado; pues gravan de una manera exagerada á tales industrias, las cuales no son protegidas ni por medio de las tarifas, ni por las primas, ni por la excepción de impuestos.

Pero no por eso podemos dejar de comprender que todas estas contribuciones han sido dictadas por la necesidad que había de llenar los ingresos de nuestro país, procurando el gobierno federal de alguna manera los fondos necesarios para poder conjurar las crisis por las que en estos últimos años ha atravesado, y aun creemos que estas crisis han sido la causa por la que no se ha podido seguir constantemente una política apropiada á la *producción*, tal como se halla hoy en México.

Pero si bien es cierto que la necesidad de salvar el crédito nacional ha dictado tales medidas, en cambio la forma adoptada para coleccionar esos fondos, ha sido inconveniente al tratarse sobre todo de la contribución de alcoholes.

Esta se ha echo efectiva por medio del procedimiento conocido en nuestro país con el nombre de derrama, que tiene algunas desventajas.

En primer lugar, la repartición de la suma total del impuesto entre los diversos Estados que poseen fábricas de alcohol no puede haber sido hecha sino empíricamente, dada la escasez completa de datos estadísticos seguros, sobre los

1 Sería de desearse que los Estados no neutralizasen por medio de impuestos inadecuados, los buenos efectos de la tendencia federal proteccionista.

cuales pudiera basarse un cálculo aunque fuera aproximativo de la producción de cada Entidad federativa; de donde resultará la inconformidad de algunas de ellas, que viéndose más gravadas, juzgarán que su cuota es desproporcionada; lo cual motivará sin duda algunas reclamaciones á las cuales el Gobierno no puede dar una solución satisfactoria ni justa porque carece de los datos necesarios para ello. De la misma manera (es decir, sin datos ciertos) será hecha la segunda repartición que en cada Estado debe hacer la junta encargada de ello por la ley, y aquí también será difícil llegar á dividir, aunque sea aproximativamente, el impuesto pues faltan datos para la fijación de las cuotas que á cada municipio corresponden, lo cual se hace por los delegados sin datos estadísticos bastantes.

Pero si de ahí pasamos á la última repartición del impuesto que en cada municipio se hace por la Junta calificadora sobre cada uno de los productores, encontraremos que ésta podía ser hecha con algunas probabilidades de proporcionalidad dado el conocimiento más ó menos exacto que cada contribuyente tiene de lo que produce su vecino; pero aquí encontraremos que, aun cuando ese conocimiento exista y aun cuando ese impuesto vaya encaminado á gravar la *cantidad* producida, á pesar de eso, los productores procurarán gravar más á aquel que fabrique de calidad mejor aun cuando su producción considerada cuantitativamente sea menor, y la reclamación de ésta será nula, pues sus jueces serán los mismos á quienes hace la competencia, y la junta revisora quedará en duda por la falta de datos de si es justa ó no la cuota.

Vemos pues, que falta á este impuesto la primera de las condiciones que la mayor parte de los economistas reconocen como principales, que es la proporcionalidad.

Existe además en esa ley una disposición por la cual una vez que una fábrica es clausurada por cualquier motivo, la

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

cuota de ella se repartirá á prorrata entre las demás que hayan quedado produciendo.

Esta disposición crea para cada uno de los contribuyentes una situación extraordinariamente precaria, pues éste no sabe en definitiva con qué cantidad será gravado, desconociendo, como desconoce, cuántas fábricas se cerrarán, y así sus gastos no podrán ser calculados ni aproximativamente siquiera. Tal disposición le crea al impuesto un carácter de incertidumbre que lo hace odioso, y más odioso todavía cuando el productor sabe que ese exceso con el cual se agrava su condición, no desaparecerá aun cuando la fábrica ó fábricas que se clausuraron vuelvan á abrirse.

Notamos pues, que el impuesto carece también por completo de la segunda de las condiciones que éstos deben llenar, que es: la certidumbre.[1]

En cuanto á la comodidad de pagarlo, no siendo ni proporcional ni cierto en cuanto á la cantidad, no puede ser cómodo para el contribuyente, ni económico, pues sólo llenará esas condiciones en cuanto á la recaudación, la cual sí será fácil.

Eso creemos que fué lo que buscaba el legislativo al dar esa forma á la contribución, obligado como lo estaba, por la difícil situación del Erario Federal.

Hemos juzdado por eso que tal ley, nacida de circunstancias tan anómalas como graves, desaparecerá cuando esas circunstancias que le dieron vida desaparezcan también, pues si el patriotismo nacional la tolera, en cambio la ciencia económica la reprueba.

Hay además de éstas que brevemente hemos apuntado, otras leyes que no tienen, por lo menos juzgando por su naturaleza y las circunstancias, el carácter de pasajeras como las anteriores, sino antes bien de permanentes, porque ellas

1 Véase Leroy Beaulieu. Traité d'économie politique, pág. 750.

cambian completamente la organización de los derechos sobre *las aguas.*

Tres son esas leyes: la primera de 5 de Julio de 1888, declara en su art. 1º que son vías generales de comunicación, además de las carreteras nacionales, ferrocarriles, etc., los mares territoriales, los esteros y lagunas; los canales construídos por la Federación ó con auxilio del Erario Federal; los lagos y *ríos interiores si fuesen navegables ó flotables;* los lagos y ríos de cualquier clase y en toda su extensión que sirvan de límites á la República ó á dos ó más Estados; y en su artículo 2º determina que corresponde al Ejecutivo federal la vigilancia de estas vías generales, así como la *reglamentación tanto del uso público como del privado.*

En virtud de la autorización concedida por este artículo al Ejecutivo federal, la ley de 6 de Junio de 1894 declaró en el art. 1º que tenía facultad el Ejecutivo federal para hacer concesiones á particulares y á Compañías para el mejor aprovechamiento de las aguas que la ley de 5 de Junio de 1888 había declarado de jurisdicción federal, en riegos y como potencia aplicable á diversas industrias. Determinó esa ley que las concesiones serían otorgadas con las condiciones siguienguientes: publicación previa de la solicitud que de ellas se haga; presentación de planos, perfiles y memorias para la completa inteligencia de las obras que se proyecten; admisión de un ingeniero inspector nombrado por el Ejecutivo y pagado por los concesionarios; constitución de un depósito en títulos de la deuda para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios, quienes gozarán de las franquicias siguientes: excepción de impuestos por cinco años, excepto el *timbre;* libre exportación por una sola vez de las máquinas, aparatos y útiles necesarios; libre ocupación de los terrenos baldíos y nacionales que se necesiten para las obras; derecho de expropiación por causa de utilidad pública, previa indemnización conforme á las bases dadas para los ferrocarri-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

les. Las condiciones serán otorgadas sin perjuicio de tercero y decidiéndose previamente por los tribunales competentes las oposiciones que surgieren.

A estas dos leyes vino á añadirse más tarde la de 17 de Diciembre de 1896, que da la bases para que el Ejecutivo pueda revalidar las concesiones otorgadas por las autoridades de los Estados para el uso y aprovechamiento de las aguas que la ley de 5 de Junio de 1888 declaró de jurisdicción federal.[1]

Independientemente de la constitucionalidad de la primera de estas tres leyes que nos parece que invade las facultades de los Estados, puesto que, por otra parte, se sale de los límites que el art. 72 constitucional fija al Congreso de la Unión, y haciendo abstracción completa de nuestra forma de gobierno, así como de la extensión que se ha querido dar al termino navegable y *flotable*, haremos un breve examen de los efectos económicos que tales leyes vengan á producir en nuestras industrias de todos géneros.

Se ha querido federalizar probablemente las aguas de toda la nación, con el objeto de hacer uniforme y general el impulso que debe darse en nuestro país, tanto á las industrias manufactureras como á la agricultura, empleando para ello el procedimiento de que ya hemos hablado: la exención de impuestos.

Pero si bien es cierto que tal impulso es el deseo del legislador, vamos á ver que es ineficaz ó muy pequeño al tratarse de la agricultura.

En efecto, siendo así que los no flotables y por consecuencia no navegables quedan excluídos de la jurisdicción federal, los agricultores ribereños de esos ríos no pueden aprovecharse de las franquicias de la ley, puesto que, no siendo de jurisdicción federal esas aguas, no hay para que pidan la

1 El Ejecutivo federal puede apreciar menos que el Ejecutivo local los asuntos de cada caso en materia de aguas.

concesión, y sobre todo, ésta sólo será otorgada por el Ejecutivo cuando se trate de aguas comprendidas dentro de los términos de la ley de 1888.

Vemos pues, que la protección impartida á la agricultura queda circunscrita á los casos de ríos flotables ó navegables, ó á los de cualquiera clase cuando sean límites de la República ó de alguno de los Estados.

Pero examinemos el alcance que tienen los efectos benéficos de la ley para aquellos agricultores á quienes viene á ayudar en definitiva.

En la industria agrícola el agua puede ser usada ó como fuerza motriz ó para riegos; en uno como en otro caso la instalación de presas es indispensable en la mayor parte de los casos. Pero como generalmente esas presas son construídas con materiales de mampostería y en ellas no interviene sino rara vez el fierro, que sería lo que se necesitaría importar, resulta que el beneficio que la ley concede al permitir la introducción libre de derechos de útiles, máquinas y aparatos, sólo puede comprender á los aparatos motores (ruedas, turbinas), y en el caso de riegos, que generalmente se hace por canales practicados en la tierra, solamente se traduciría la influencia protectora de la ley por la exención de impuestos á algunas toneladas de tubos. En cambio si esa ayuda es casi nula para la agricultura, es bastante eficaz para las industrias manufactureras, para las cuales el privilegio de la libre introducción de máquinas sí es una gran ayuda, pues en ellas las máquinas representan un importante papel.

Vemos pues, que en realidad es bien pequeño el auxilio que las leyes de aguas vienen á prestar en definitiva á la agricultura, y en cambio de eso serán muy grandes los perjuicios que le ocasionará á los agricultores en la amplísima significación que se le ha querido dar por los especuladores de la ley, al término de ríos flotables.

Por lo demás, es de notarse que de las leyes que en nues-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

tro país se refieren á la producción, éstas son las únicas que se han dado con la mira de proteger el desarrallo agrícola, y ya vemos en que grado lo hacen. ¡Lástima que se haya tenido que violar la Constitución para prestar tan pequeño auxilio á la agricultura!

* * *

Hemos analizado rápidamente las leyes que atañen á la producción nacional, y solo nos resta para concluir recapitutular las conclusiones que hemos deducido en el curso de este estudio; así pues, veamos primero si posee México las condiciones que hemos dicho se necesitan para que un pueblo sea un gran productor, y después examinaremos cuál sea el procedimiento más conveniente para crear y engrandecer su productividad.

Hemos visto ya que una de las condiciones para que exista la industria es que haya una raza de acción individual enérgica y sostenida; es decir, una raza de trabajadores; y en realidad en nuestro país el carácter predominante de la raza no es el trabajo, sino la indolencia y la falta de energía para continuar hasta el fin una acción que no haya producido un resultado brillante desde el principio. Pero en cambio, si tiene tan grave defecto, posee algunas cualidades, valiéndose de las cuales se hace posible el mejoramiento; nos referimos á su docilidad y su abnegación, gracias á las cuales ha podido conseguir algunos derechos cuando ha sido guiado por hombres enérgicos y de talento.

Además, dada nuestra organización, están abiertas las vías para llegar aun á los más altos puestos, lo cual es un gran estímulo para despertar la iniciativa. Lo único que se necesita pues, es educar por todos los medios que el Estado tiene á su alcance, desde la escuela primaria de la ciudad, sobre todo de la ciudad pequeña y del campo, hasta el empleo de los medios coercitivos, para impedir la vagancia y crear el amor al trabajo.

La vigorización de nuestro medio social por este procedimiento sería lenta pero segura, y entonces sí podrá nuestra raza aprovecharse de las riquezas de este suelo, que le pertenece, y que está amenazada de perder dejando el lugar á otra más vigorosa, más trabajadora. Una vez que haya adquirido la raza esas cualidades, podrá aprovechar los elementos de grandeza que tiene el suelo, que si no son todo lo que se ha dicho, sí son lo suficiente para elevar á una nación á un alto grado de progreso.

Sabemos bien que en nuestro país existen dos cadenas de montañas, que partiendo de un núcleo que se halla en la parte más meridional, corriendo paralelas á la costa y muy cerca de ella, forman nna gran mesa elevada y desprovista en lo general de vías fluviales, y dos vertientes fuertes y rápidas hacia los mares, en las cuales se acumulan, por la elevación misma de las montañas que las forman, las humedades del Océano que dan origen á multitud de arroyos, torrentes y ríos, á los cuales se vienen á unir algunos nacidos en la mesa. Esos ríos y torrentes que bajan rápidamente hacia los mares, van suministrando en su camino inmensas cantidades de fuerza viva que son aprovechables para las industrias todas.

Pero además de esas fuentes de fuerza motriz, se han descubierto en varios Estados de la República mantos de carbón (en Coahuila, en Nuevo León y en Oaxaca), y creemos que no serán los únicos lugares en que exista esa gran ayuda de la producción industrial.

En cambio, si las vertientes están, como hemos dicho, regadas admirablemente por la naturaleza, la Mesa Central lo está escasamente, porque no existen las humedades que caracterizan á aquellas; ahí pues, hay necesidad de recoger

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

el agua de las lluvias, que son pequeñas é irregulares, en presas, único medio en hacer posibles los riegos. Esto ha hecho que el progreso en esa Mesa sea lento, debido al escaso desarrollo de la agricultura y á la preponderancia de la minería, y de la minería de metales preciosos que ha sido siempre en nuestro país el punto de mira de todas las ambiciones; no de los metales industriales como el fierro, que aun cuando existe en abundancia, jamás ha sido explotado.

Vemos que en cuanto á motor barato y móvil á voluntad, no está mal dotado nuestro México, y que para aprovechar estas ventajas, lo que se hace necesario es educar á nuestra raza, para que ella pueda saber cómo se aprovechan esos elementos.

En cuanto á capitales (los cuales no dejan de existir ya) se irán formando y acreciendo á paso y medida que vayan entrando en juego los dos primeros elementos á que hemos hecho referencia, los cuales también proporcionarán el mercado suficiente para la producción. Ya hemos visto que ningún pueblo cuenta desde el principio de su obra de engrandecimiento con ellos, los cuales van siendo creación de ese mismo progreso, para después transformarse en una de sus grandes fuerzas organizadoras.

En tal concepto, vemos que el suelo está bien dotado y que se impone desde luego y como el primer medio que debe emplearse para hacer progresar á este país, la educación de la raza para formarle así las cualidades necesarias para el aprovechamiento de esas riquezas.

Pero además surge la idea (siguiendo las conclusiones que en otro punto de nuestro estudio hemos planteado) de que un pueblo, cuyo desenvolvimiento industrial está en las primeras etapas, y en el cual la iniciativa individual es tan pequeña en sus manifestaciones que casi se puede creer que es nula; necesita emplear sus energías, casi exclusivamente representada por los órganos gubernativos, en el desarrollo

de sus fuerzas productoras. En tal concepto y al lado de la primera medida que hemos aconsejado, se hace necesario el empleo de una política de protección, poniendo en juego de los medios de estímulo de que hemos hablado, el más apropiado á cada industria. Así, por ejemplo, en materia de manufacturas, ya hemos visto que el procedimiento más adecuado es el que emplea actualmente nuestro gobierno, y en cuanto á agricultura, que tan poco estímulo ha recibido del Estado, creemos que es donde más acentuada debe ser la protección y la política de estimulación, sobre todo en lo que se refiere á riegos, pues siendo desgraciadamente en nuestro suelo tan irregular las lluvias, se hace necesario el establecimiento de presas, sobre todo en la Mesa Central, en las cuales pueda guardarse la cantidad de agua suficiente para surtir los sembrados en las épocas de sequía.

Pero el desarrollo de tales presas puede ser estimulado por los gobiernos, tanto locales como el federal, asignando premios con los cuales pueda contar el agricultor para emprender su obra. Tal será un medio de ayudar á la agricultura, que actualmente es de nuestras industrias una de las que más débil se halla relativamente, y la cual contribuye más que ninguna con su mal estado á empeorar la situación general del país; la que por otra parte se mejorará grandemente, una vez que aquella llegue siquiera á abastecer el consumo nacional.

Algunos escritores nacionales han creído, y sostenido con los más avanzados principios económicos, pero sin tener en cuenta nuestro medio, que la política de intervención del Estado empleando los estimulantes á la producción, será perjudicial; y aconsejan generalmente como medio de engrandecer nuestra producción el empleo del Libre Cambio.

Dicen que si Inglaterra se halla en el Estado extraordinario de desarrollo en que hoy se encuentra, es porque ha seguido tales doctrinas, y que es por esto por lo que su co-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

mercio y su producción amenaza invadir al orbe. Pero al asentar tales conclusiones se olvidan de que si es cierto que Inglaterra es libre cambista, es porque es grande y fuerte; es porque de las naciones del mundo, ella es la que está menos lejana del tipo industrial y la que cuenta con una raza trabajadora. Sin ese carácter general de la raza inglesa, ya hemos visto que el empleo de la política de libre cambio no hubiera sido posible en mucho tiempo.

En nuestro humilde concepto, juzgamos que México no puede todavía confiar su porvenir á esa magnífica teoría, pues ya hemos dicho que tal sistema es solamente compatible con pueblos cuya organización industrial es extraordinaria y en donde la iniciativa individual está ya desarrollada; pero en pueblos como el nuestro, en donde lo único que está desarrollado, fuerte y cimentado, es el gobierno, puesto que la iniciativa individual apenas existe, no cabe más sistema posible si se quiere progresar, que el de la intervención de ese gobierno preponderante y fuerte en la creación y engrandecimiento de la producción.

Una prueba patente de que el libre cambio no es adaptable todavía á nuestro medio, es esta: existe en nuestro país determinada parte de él que gozó durante mucho tiempo de la prerrogativa de libre introducción de efectos del extrangero (nos referimos á la Zona Libre, en la cual actualmente se paga el 10 por ciento de los impuestos de importación), lo cual equivale á tanto como haber adoptado el libre cambio, pues los artículos que entraban á ella y para su consumo no eran ni gravados por nuestras aduanas ni tampoco por las aduanas americanas, puesto que en los Estados Unidos están prohibidos por la Constitución los derechos á la exportación. Pues bien, á pesar de que tal ventaja existió para los pueblos que quedan comprendidos dentro de esa zona, las maravillas que ofrece el libre cambio no llegaron á producirse en ellos, pues ni la agricultura se ha desarrollado ni tampoco las industrias

manufactureras, las cuales se encuentran en el mismo estado en que se hallaban cuando el General Canales decretó tal medida. Esto nos indica claramente que en nuestro medio económico, y si se quiere progreso, corresponde al *Estado* el dar un fuerte impulso á la producción.

México, Septiembre 30 de 1897.

Jacobo Rincón.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

EL DELITO DE QUIEBRA.

¿Es necesario en los casos de quiebra culpable ó fraudulenta, para proceder criminalmente á instancia de parte, que se presente copia autorizada de la sentencia de graduación?

I.—Demanda de amparo promovido por los Señores H. Scherer y Compañía, Christian F. Martens y el Brigadier José María de la Vega contra actos del Juez 2º de lo Criminal de la Ciudad de México, Lic. Manuel F. de la Hoz.—II. Informe con justificación rendido por la autoridad responsable.—III. Alegato producido por los quejosos ante el Juzgado 2º de Distrito de México.

I

DEMANDA DE AMPARO.

C. Juez 2º de Distrito:

H. Scherer y Compañía, Christian F. Martens, como Agente del Sr. Henry P. Newman, y el Brigadier José María de la Vega, acreedores de la quiebra de las sociedades Rasst Headen y Compañía en liquidación y A. M. Davis y Compañía en liquidación, ante vd. respetuosamente compa recemos y decimos:

Que venimos á impetrar el amparo de la Justicia Federal contra el auto pronunciado con fecha de hoy por el C. Juez 2º de lo Criminal, en el cual ha declarado que no ha lugar á proceder contra los socios solidarios é ilimitadamente responsables de aquellas sociedades, por el delito de quiebra fraudulenta respecto del cual hemos presentado la querella correspondiente.

Para fundar la acción ejercitada ante el Juez 2º de lo Criminal nos hemos apoyado en los conceptos del Código de Comercio que declara en su art. 956 cuándo una quiebra debe ser reputada fraudulenta y en los del art. 961 que autoriza la persecución de dicha quiebra en su frac, III, por querella de uno ó varios de los acreedores, siempre que éstos sigan á sus expensas el juicio criminal, sin acción á ser reintegrados por la masa ni de gastos ni de costas.

El C. Juez 2º de lo Criminal, para declarar que no procede abrir la averiguación correspondiente, se ha fundado en el art. 59 del Código de Procedimientos Penales, que á la letra dice: "En caso de quiebra fraudulenta se necesita para proceder que se presente copia certificada de la declaración de quiebra, hecha por el Juez de lo Civil en sentencia irrevocable."

Perfectamente claro es el antagonismo que existe entre los preceptos del Código de Comercio y los de la ley de procedimientos penales; pero es indudable que la aplicación del art. 59 de esta ley de enjuiciamiento no es la que ha debido hacerse, y su aplicación viene á constituir una violación del art. 14 de la Constitución, así como una invasión de las facultades que corresponden al Poder Federal.

El C. Juez 2º de lo Criminal, en quien nos complacemos en reconocer á uno de los más honorables representantes de la judicatura Mexicana, ha creído que debía ajustarse á la ley que norma ordinariamente sus procedimientos como Juez; pero ha puesto en olvido que en el presente caso la ley que

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

otorga la acción á los acreedores de una quiebra para perseguir al quebrado fraudulento, así como la que determina cuando las quiebras deben ser consideradas como fraudulentas, es el Código de Comercio, y que esta ley vigente en toda la República, que es ley subtantiva, es la que ha debido aplicarse de toda preferencia.

El Código de Comercio, en su art. 961 á que hemos hecho referencia, dice á la letra.

"La quiebra culpable ó fraudulenta se perseguirá:

I. Por acusación del Ministerio Público, previa la calificación hecha por sentencia irrevocable.

II. Por querella del síndico, si para entablarla fuera autorizado por la mayoría de los acreedores.

III. Por querella de uno ó varios de éstos, quienes seguirán á sus expensas el juicio criminal, sin acción á ser reintegrados por la masa ni de gastos ni de costas, cualquiera que sea el resultado de sus gestiones.

Como se ve, el Código de Comercio ha atribuido el ejercicio de la acción para perseguir la quiebra fraudulenta al Ministerio Público, cuando ya la quiebra ha sido calificada por sentencia irrevocable, es decir, por la sentencia de graduación que pone término al juicio de quiebra; al síndico cuando los acreedores lo autorizan para deducirla en su nombre y á los acreedores cuando lo juzgan conveniente y necesario para la protección de sus intereses defraudados.

Como la presente demanda de amparo la interponemos con apoyo de las fracs. I y III del art. 101 de la Constitución, ella da lugar al estudio de las siguientes cuestiones jurídicas:

Primera. ¿La aplicación del art. 59 del Código de Procedimientos Penales en lugar del art. 961 del Código de Comercio, constituyen una violación del art. 14 de la Constitución?

Segunda. ¿La garantía del art. 14 de la Constitución que

determina que nadie puede ser juzgado y sentenciado sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas á él, se ha otorgado tanto en beneficio del acusado como del acusador?

Tercera. ¿El Código de procedimientos Penales del Distrito ha podido derogar los preceptos del Código de Comercio, ó lo que es lo mismo, una ley local ha podido derogar una ley federal que debe ser aplicada en toda la República?

La resolución de las tres anteriores cuestiones es clara y obvia.

Para determinar á quien corresponde ejercitar la acción de quiebra fraudulenta, no ha podido ser aplicado el Código de Procedimientos Penales de preferencia al Código de Comercio. La ley de comercio, al determinar cuando la quiebra debe reputarse fraudulenta y quien tiene el derecho de perseguirla, ha obrado con entera corrección, porque ella es la ley á quien toca precisar el derecho substantivo y las acciones todas que de él se derivan.

El Juez, al apartarse de este criterio y aplicar una ley de mero procedimiento, que solo ha podido reglamentar la forma del derecho ya establecido por el Código de Comercio, ha aplicado inexactamente la ley, con violación de los preceptos del art. 14 de la Constitución.

Sin duda alguna, la garantía consignada en el art. 14 de la Constitución tanto ampara al acusado como al acusador. En el célebre voto pronunciado por D. Ignacio L. Vallarta, con motivo de la ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de 10 de Diciembre de 1880 en el juicio de amparo intentado por la Sra. Candelaria Pacheco de Albert, ha quedado establecido claramente que en los juicios criminales tanto puede ser juzgado y sentenciado el acusado como el acusador.

En el presente caso al acusador se le arrebata una acción que las leyes le han concedido; se le priva del ejercicio

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

de un derecho que le ha sido otorgado para defensa de sus intereses, y la aplicación inexacta de la ley le causa un perjuicio igual al que hubiera de producirle al acusado la falta de las formas tutelares que la Justicia ha establecido en su beneficio.

La tercera cuestión es más clara todavía. ¿La ley de Procedimientos Penales del Distrito no ha podido derogar el Código de Comercio? Es verdad que las dos leyes son leyes federales; pero la primera ha sido promulgada con el carácter de ley local y haciendo uso el Poder Público de las facultades que le corresponden como Suprema autoridad del Distrito Federal y la segunda se ha promulgado en uso de la facultad que al Poder Federal ha concedido la reforma del art. 72 de la Constitución, promulgada en 14 de Diciembre de 1883, que expresamente lo autoriza para expedir Códigos obligatorios en toda la República, de Minería y de Comercio.

El Código de Procedimientos Penales no ha podido derogar el Código de Comercio, porque, aunque promulgadas las dos leyes por el mismo Poder Federal, su promulgación ha obedecido á facultades enteramente distintas. Si el precepto del Código de Procedimientos Penales es contrario al del Código de Comercio, la oposición constituye una invasión de las facultades que corresponden al Poder Federal.

En virtud de lo expuesto:

A vd. ocurrimos, C. Juez, impetrando el amparo de la Justicia Federal con apoyo de las fracs. I y III del art, 101 de la Constitución, y I y III del art. 745 del Código de Procedimientos Federales.

Protestamos lo necesario. — México, Enero 22 de 1898.

H. Scherer y C.ª Christian F. Martens.

José M. de la Vega.

Acusación de quiebra fraudulenta.

C. Juez 2º de lo Criminal:

H. Scherer y Compañía, Christian F. Martens, como agente del Sr. Henry P. Newman y el Sr. Brigadier José María de la Vega, acreedores de la quiebra de las sociedades Rasst Headen y Compañía en liquidación, y A. M. Davis y Compañía en liquidación, como lo tienen comprobado ante vd. en la instruccion abierta contra el Sr. D. León Rasst por los delitos de fraude y estafa, ante vd., respetuosamente comparecemos y decimos:

Que el C. Juez 4º de lo Civil de esta ciudad, en auto pronunciado el día 17 del presente mes, ha declarado á las referidas negociaciones de Rasst, Headen y Compañía en liquidación, y A. M. Davis y Compañía en liquidación, en estado de quiebra, nombrando desde luego al síndico correspondiente.

Como á pesar de haberse disuelto la sociedad Rasst, Headen y Compañía y A. M. Davis y Compañía y de haberse puesto en liquidación, son y continúan siendo responsables solidaria é ilimitadamente de todas las obligaciones sociales, los Sres. socios Guillermo Headen, Teodoro W. Osterheld, Allen M. Davis y principalmente el Sr. León Rasst, venimos á ejercitar contra ellos, de conformidad con lo establecido en

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

la fracción III del art. 961 del Código de Comercio, la acción que tenemos para perseguir la quiebra fraudulenta, como se comprueba con todos los documentos presentados y que obran en el Juzgado que es á su digno cargo.

La quiebra es fraudulenta:

1. Porque el fallido no ha llevado los libros que prescribe el Código de Comercio, ni en la forma prescrita en él. Fracción I del art. 956.

2. Porque ha ocultado dinero, efectos, créditos ú otros bienes. Fracción V. del art. 956.

3. Porque ha simulado enagenaciones. Fracción VII del art. 956.

4. Porque ha dispuesto para sí y aplicado á sus negocios propios, fondos sociales de los cuales tenía la administración. Fracción XI del art. 956.

5. Porque ha descontado letras girándolas á cargo de personas en cuyo poder no tenía fondos ó que no lo habían autorizado para librar contra ellas. Fracción XIV del art. 956.

6. Porque del Balance practicado aparece que hay un exceso de más de un veinticinco por ciento del pasivo con relación al activo, sin que se hubiere hecho la manifestación relativa al estado de quiebra. Fracción XVIII del art. 956.

7. Porque se han practicado operaciones fraudulentas disminuyendo el activo y aumentando el pasivo. Fracción XX del art. 956.

1. Por lo que toca á la falta de libros, debemos hacer constar los siguientes hechos:

I. Que no existe libro de Inventarios y Balances:

II. Que tampoco existe libro Diario llevado en la forma prescrita por el art. 34 del Código de Comercio, pues si bien hay libro denominado Borrador haciendo veces de Diario, no está timbrado con arreglo á la ley, y en él existen asientos testados, folios 271 y 275, con infracción del art. 36 de dicho Código;

III. Que existen dos libros Mayores simultáneos, uno timbrado en Puebla al Sr. Guillermo Headen en Julio 9 de 1896 y el otro sin timbrar, y que están testados todos los asientos del Haber, en el folio 3, Cuenta de Gastos Generales, la cual cuenta está pasada al Debe del folio siguiente; y

IV. Que en el Mayor no hay cuenta de Caja, pues ésta se ha llevado con lápiz en un libro auxiliar.

En cuanto á los libros llevados en Puebla, hay que observar que son los mismos llevados por D. León Rasst antes de la constitución de las sociedades Rasst Headen y Compañía y A. M. Davis y Compañía, y están timbrados á nombre de León Rasst.

2. Por lo que toca á la ocultación de dinero y otros bienes, consta en el propio escrito presentado al Juez 4º de lo civil solicitando la declaración de quiebra:

I. Que el Sr. León Rasst pretendía negociar seis carros de ónix que existen en Veracruz y que iba á embarcar por la línea "Ward" dirigidos á Hamburgo con conocimiento á la orden;

II. Que existe una cantidad de ónix en poder de la casa Seeger Guernsey, de Nueva York, sin que hubiera en los libros la constancia respectiva.

3. Con respecto á la simulación de enajenación, aparece probado que el día 17 de Diciembre pasado vendió el Sr. Rasst á su esposa, la Sra. Luisa Rasst, ochenta y cinco mil pesos de bonos que estaban en el Banco Nacional. La Sra. Luisa Rasst aparece compradora de dichos bonos al precio de 55 por ciento, siendo así que la diferencia del valor de los bonos aparece cargada en su cuenta particular.

4. Respecto á haber dispuesto para sí de mercancías y efectos cuya administración le estaba encomendada, debemos hacer constar que del fondo social del cual era gerente administrador, ha tomado para sí:

I. El valor de los créditos hipotecarios constituidos en

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

escrituras públicas en 2 de Junio y 3 de Septiembre, créditos que fueron pagados por los Sres. Rasst Headen y Compañía al Sr. E. C. Littlewood y cargados á la cuenta particular del Sr. León Rasst al cerrarse los libros;

II. La cantidad de cinco mil pesos, como efectivo que se llevó á México, siendo el importe del pagaré dado por los Sres. Miguel A. Salas y Compañía á favor de Rasst Headen y Compañía, como garantía de los anticipos que el Sr. León Rasst se obligó á hacer en minuta otorgada ante el Notario D. Patricio Carrasco, adquiriendo la fábrica de alcohol con fecha 6 de Julio de 1897.

5. En cuanto á hacer descuentos de letras á cargo de personas en cuyo poder no tenía fondos, aparece:

I. Que giró á favor de los Sres. H. Scherer y Compañía á cargo de H. Von During, de Hamburgo, el 10 de Noviembre próximo pasado, tres letras, núms. 501, 502 y 503, por valor, respectivamente, de 25,000, 5,000 y 12,000 marcos, total 42,200 marcos, sin autorización para girar y sin tener fondos, como lo comprueban las letras protestadas que obran en el Juzgado que es á su digno cargo;

II. Que con fecha 16 de Noviembre próximo pasado giró la Sociedad Rasst Headen y Compañía á favor de H. Scherer y Compañía y á cargo de Croder Muyer y Compañía, de Burdeos, tres letras, núms. 31, 32 y 33 por 20,000 francos cada una, ó sea por un total de 60,000 francos, sin tener la correspondiente autorización para girar.

Por último, en cuanto se refiere á las demas operaciones fraudulentas que disminuyeron su activo aumentando su pasivo, debemos hacer constar:

I. Que los señores socios no entregaron el capital social estipulado en la escritura de sociedad otorgada en 27 de Julio de 1897, concretándose á cargar su importe á la cuenta particular de cada uno de los socios;

II. Que sin estipulación expresa en la escritura social y

en contravención á los preceptos del Código de Comercio se han aplicado los tres socios á sus cuentas particulares, hasta la cantidad de cincuenta y seis mil, novecientos cincuenta y cuatro pesos, dos centavos;

III. Que giraron con fecha 13 del mes de Octubre de 1887 á cargo de los Sres. H. Von During, de Hamburgo, letras por valor de cincuenta y dos mil marcos.

En carta firmada por el Sr. León Rasst dice á dichos señores haber enviado, de conformidad con lo arreglado con su Agente en México, zacatón por valor de 11,000 francos y café por valor de 90,000 francos, sin haber hecho, sino en muy pequeña parte, la remisión de las mercancías correspondientes.

Los Sres. H. Von During pagaron el valor del giro ó sea la cantidad de 52,000 marcos.

En virtud de todo lo expuesto:

A vd. ocurrimos, C. Juez, manifestando que estando declarado ya el concurso necesario de las Compañías comerciales Rasst Headen y Compañía en liquidación, y A. M. Davis y Compañía en liquidación, venimos á perseguir la quiebra fraudulenta, de conformidad con lo dispuesto en la frac. III del art. 961 del Código de Comercio, presentando al efecto la querella correspondiente.

Protestamos lo necesario. — México, Enero 22 de 1898.

H. Scherer y Cª. Christian F. Martens.

José M. de la Vega.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

II

Informe producido por el Juez 2º de lo Criminal, Lic. Manuel F. de la Hoz.

Tengo la honra de rendir el informe que vd. se sirve pedirme, informe á que alude el art. 27 de la ley de 14 de Diciembre de 1882, en el juicio de amparo que tienen promovidos los Sres. General José María de laVega, Hugo Scherer y Compañía y Christian F. Martens, en contra de mi determinación por la que me negué á proceder en contra de D. León Rasst, por el delito de quiebra fraudulenta, por no haberse acompañado á la denuncia la sentencia ejecutoriada que hubiera hecho semejante declaración en el juicio civil correspondiente.

En efecto, los Sres. General de la Vega, Hugo Scherer y Compañía y Christian F. Martens, se presentaron ante este Juzgado el día veintidós del mes anterior, en la forma de querella necesaria, acusando á D. León Rasst, gerente y socio principal de la Sociedad Rasst, Headen y Compañía, de haber perpetrado diversos hechos é incurrido en varias omisiones que, en concepto de los querellantes, lo hacían responsable del delito de quiebra fraudulenta.

Como el art. 59 del Código de Procedimientos Penales que norma los míos como Juez de Instrucción en el Distrito Federal, establece de la manera más rotunda y concluyente que "en los casos de quiebra fraudulenta, se necesita para proceder, que se presente copia certificada de la declaración de quiebra, hecha por el Juez de lo Civil, en sententencia irrevocable," sin vacilación alguna pronuncié auto con fecha veintidós del mes próximo pasado, declarando que no podía proceder, porque no se había cumplido con el requisito esencial que exigía el terminante precepto de aquel ordenamiento.

Los señores promoventes, han creído ver en esa determinación mía una violación del art. 14 de la Constitución Fedederal, y ocurren por la vía de amparo á la autoridad de vd. Fundan su instancia en la autorización que creen encontrar en la frac. III. del art. 971 del Código de Comercio vigente, y que en lo conducente dice: "La quiebra culpable ó fraudulenta se perseguirá. . . . . Por querella de uno ó varios de éstos (acreedores) quienes seguirán á sus expensas el juicio criminal. . . . ." Del antagonismo aparente que descubren entre el enunciado precepto de la ley mercantil y el de la ley del procedimiento penal, deducen todo su razonamiento concretado al estudio de tres cuestiones que son las siguientes: I. La aplicación del art. 59 del Código de Procedimientos Penales en lugar del art. 961 del Código de Comercio, importa una violación del art. 14 de la Constitución Federal. II. La garantía consagrada por este artículo alcanza al acusador, en idénticos términos que al acusado. III. El Código de Procedimientos Penales como ley privativa del Distrito Federal y Territorios, no ha podido derogar los preceptos del Código de Comercio que tiene el carácter de ley general para toda la República.

Planteado en semejantes términos el debate, y apuntados someramente los fundamentos que apoyan la tesis de los señores promoventes del juicio de amparo, reservándose ampliar los razonamientos indicados en la demanda, en

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

los alegatos que harán honra á la pericia é ilustración del abogado que dirige á los querellantes, voy á entrar al examen de las cuestiones aludidas, desentendiéndome de la segunda por ser de explorado derecho y de explicación secundaria en el estudio que entrañan las restantes.

La única cuestión prejudicial que ha conservado nuestra ley de Procedimientos Penales, es la que se refiere á la quiebra fraudulenta, pues las que se relacionan con el estado civil de las personas la zanjó de habilísima manera el art. 61 del referido ordenamiento, dejando expedita la acción de los Tribunales del orden penal, con absoluta independencia de la jurisdicción civil. Pero tratándose de la quiebra fraudulenta, no pudo hacerse otro tanto; porque la índole esencial de ese delito y las circunstancias especiales que exige la comprobación de su existencia jurídica, están circunscritas á tantos requisitos y limitadas por tantas exigencias por el Código de Comercio, que sólo el Juez del Concurso puede precisar hasta la terminación de ese juicio universal si el fallido ha podido quebrar ó no fraudulentamente.

Desde luego salta á la vista no solo la conveniencia sino la ingente necesidad de aplazar para la remota época de la sentencia de graduación, la declaración definitiva del estado de quiebra de un comerciante y de la categoría en que se clasifique esa quiebra.

El Juez provee á todas las medidas convenientes á garantizar los derechos de los acreedores, llama á todos los que invoquen derechos en contra del deudor común, examina la legitimidad de cada crédito, discutida por todos los demás, confiere al síndico las facultades que reclama su investidura para que administre los bienes del concurso, los defienda y represente, y por fin, le exige el proyecto de graduación de créditos y el informe que debe rendir sobre el carácter definitivo de la quiebra. Una vez depurados los créditos, fijado el monto del activo y pasivo de la negociación, y estudiada

concienzudamente la conducta del deudor, se da fin al concurso, por medio de un fallo qne en primer término habrá declarado: "Si ha habido quiebra y cuál sea el carácter que ésta debe tener."

Toda esa minuciosa serie de requisitos y de procedimientos, están revelando el cuidadoso empeño que el legislador ha tenido para que se depure la conducta de un comerciante y á la postre se resuelva si ha podido caer vencido por la fatalidad, víctima inocente de una crisis mercantil que no ha podido conjurar, ó si por el contrario, ha sido el criminal que tiende redes para despojar á los incautos de los elementos y recursos que fraudulentamente aplica en su provecho.

Si el Juez del orden penal fuera el designado por la ley para proceder en contra del comerciante que suspende sus pagos y lo procesara desde luego por quiebra fraudulenta, invadiría la esfera de acción del Juez del concurso, exponiéndose á prejuzgar lastimosamente la cuestión capital dei juicio mercantil, y sobre todo, dando margen á que su resolución adversa al deudor, fuera la antítesis monstruosa de la declaración favorable al fallido, que pronunciase el Juez Civil en su sentencia de graduación conforme al art. 1,497 del Código de Comercio.

Estas consideraciones generales, que podría explanar con abundantes argumentos tomados de la misma ley mercantil, de los tratadistas autoridades en la materia y de la misma razón, si me lo permitieran ante todo mis facultades y después las multiplicadas atenciones de mi oficio, son bastantes, en mi concepto, para demostrar la conveniencia y necesidad de que sea una cuestión prejudicial en el orden penal, la que se relaciona con el procedimiento, para perseguir el delito de quiebra fraudulenta. Añadiré, sin embargo, antes de pasar adelante, que el Código penal, consecuente con aquella doctrina, ni siquiera define en la nomenclatura de los delitos el acabado de enunciar. Se limita en los arts. 434 y si-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

guientes á fijar la pena en que incurre el comerciante "á quien se declare alzado," y al *fallido* que oculte ó enajene sus bienes en fraude de sus acreedores, como si el legislador hubiera querido persuadir con esa omisión de que la tarea de precisar la delincuencia del quebrado, la clase de su responsabilidad criminal, tocaba al juez del concurso, qne con su fallo daba ya la pauta al procedimiento y á la resolución del Juez del orden penal. Es de llamar la atención que ese Cuerpo de Leyes, conservando el tecnicismo antiguo, no distingue entre quiebra culpable y fraudulenta, y establece en su art. 441 que el delito de que se trata se perseguirá de oficio, sin que por esto se diga que hay algún antagonismo con el Código de Comercio, que usa del término "querellas" conservado del español, de donde aquel está en su mayoría tomado, al conceder á los acreedores ó al síndico el derecho de perseguir al fallido.

Si por ley federal se entiende aquella que obliga á toda la República, por más que no afecte los intereses de la Federación, es inconcuso que el Código de comercio tiene semejante carácter. Sin embargo, á pesar de ello, no puede decirse que como ley subtantiva mercantil, deba aplicarse con preferencia á la ley particular que norma el procedimiento.

La índole y tendencias del Código de Comercio y del de Procedimientos Penales, alejan todo temor de un conflicto. El primero tiene perfectamente delineado el vastísimo campo de su aplicación en el orden mercantil; abarca en sus disposiciones todas las relaciones jurídicas que arrancan su origen de esa poderosa fuente de riqueza pública que se llama comercio, y aunque tiene, por razón de su naturaleza propia que normar los procedimientos de los juicios comerciales, su principal objeto se dirige á definir y precisar la múltiple série de operaciones que el comercio crea é informa entre los hombres. El segundo tiene más reducidos horizontes, por-

qne su exclusivo objeto se refiere á trazar el camino que deben seguir los juicios del orden criminal.

De esta tan radical diferencia, se deduce que ambos Códigos, enderezados á perseguir fines tan diversos, no pueden encontrarse en su camino, determinando una colisión en que hubiera de triunfar el que fuera declarado preeminente sobre el otro.

Aplicando esta teoría á la cuestión culminante del debate, se encontraría sin esfuerzo alguno, abandonando el estéril campo de la hipótetis y el prohibido del sofisma, que el art. 961 del Código de Comercio no riñe con el 59 del Código de Procedimientos Penales. El primero otorga al síndico autorizado por la mayoría de los acreedores, ó á cualquiera de éstos, el derecho de perseguir al quebrado por quiebra fraudulenta, y el segundo establece que no se podrá proceder criminalmente por ese delito, sino cuando haya sentencia irrevocable que declare su existencia. La simple enunciación de ambos preceptos impone al espíritu, por ley ineludible de la lógica, que no son antagónicos, sino que se hermanan y completan en maridaje estrecho.

El Código de Comercio establece un derecho, lo consagra y hasta lo sanciona, cuando priva á los acreedores que persiguen criminalmente al quebrado, de reembolsarse de la masa del concurso, de los gastos que eroguen en el juicio criminal.

El Código de Procedimientos Penales fija la época en que haya de ejercitarse ese derecho, es decir, cuando por sentencia irrevocable se haya declarado que existe la quiebra fraudulenta. Y no se diga que este segundo Ordenamiento, no ha podido fijar el período en que tome forma el derecho concedido por el primero, porque en ese aplazamiento, ni se lastima un privilegio, ni se conculca prerrogativa alguna, sino que sencillamente se demarca el momento único oportuno en que surge la aparición de un delito que haya de per-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

seguirse ante los tribunales. Ese aplazamiento que impone la naturaleza misma del delito de quiebra fraudulenta, no es tampoco una invasión de la ley adjetiva en la esfera de acción de la ley substantiva mercantil. Lo exige de la manera más imperiosa la necesidad de mantener la unidad en todo lo relativo á la declaración de un estado que viene á ser general, indivisible y absoluto, debiendo esperar la jurisdicción criminal á que la civil, en presencia de todos los datos y con audiencia de todos los interesados, califique la naturaleza de la quiebra y declare si existen motivos para proceder criminalmente contra el quebrado.

Nuestro Código de Comercio está generalmente inspirado en los preceptos del Código Español de veintidos de Agosto de mil ochocientos ochenta y cinco. A ese origen deben atribuirse ciertos defectos en la nomenclatura de hechos que si se explican conforme á la jurisprudencia española, no se compadecen con la nuestra. Así por ejemplo, el Código de Comercio habla del robo, *hurto*, ó extravío de letras de cambio, conservando el tecnicismo del derecho español, que distingue el robo del hurto, cuando ambos ataques contra la propiedad ajena, caen bajo el imperio de nuestro derecho penal, bajo una sola denominación. El Código de Comercio Español, en su art. 895, establece, que la calificación de la quiebra, para exigir al deudor la responsabilidad criminal, se hará siempre en ramo separado que se substanciará con audiencia del Ministerio Público, de los Síndicos y del mismo quebrado. Los acreedores, añade, tendrán derecho á apersonarse en el expediente y perseguir al fallido; pero lo harán á sus expensas, sin acción á ser reintegrados por la masa, de los gastos del juicio, ni de las costas, cualquiera que sea el resultado de sus gestiones.

Este artículo figura en sus términos esenciales en el 961 del Código de Comercio Mexicano, que concede el derecho de perseguir la quiebra culpable y fraudulenta al Ministerio

Público, *previa la calificación hecha por sentencia irrevocable* al Síndico, si para entablar su querella fuera autorizado por la mayoría de los acreedores, y uno ó varios de éstos, quienes seguirán á sus expensas el juicio criminal, sin acción á ser reintegrados por la masa ni de gastos ni de costas, cualquiera que sea el resultado de sus gestiones. La simple comparación de ambos preceptos revela su identidad, llevada al extremo de contener iguales conceptos expresados en el mismo lenguaje.

El Código de Comercio Español complementa las disposiciones acabadas de enunciar en el art. 896, que textualmente dice: "En ningún caso, ni á instancia de parte, ni de oficio, se procederá por los delitos de quiebra culpable ó fraudulenta, sin que antes el Juez ó Tribunal, haya hecho la declaración de quiebra, ó la de haber méritos para proceder criminalmente."

El Código de Comercio, vigente en la República, omitió consagrar entre sus preceptos, el terminante y decisivo que contiene el artículo acabado de copiar, suprimiendo una parte, si no esencial, sí muy importante del sistema aceptado por la legislación española, para perseguir al fallido por quiebra fraudulenta. Esa supresión tal vez haya obedecido á que el legislador temiera que establecido por el art. 961 en su primera fracción que el Ministerio Público necesitaba para perseguir la quiebra criminalmente, de la calificación que hiciera el Juez del concurso, era redundante y por lo mismo inútil decretar que igual taxativa habría de tener el Síndico ó los acreedores, cuando quisieran acusar criminalmente al quebrado.

Más claro: la limitación que el art. 961, frac. 1ª, fija para que el Ministerio Público pueda perseguir criminalmente la quiebra, rige también los casos en que el Síndico ó los acreedores intentan ejercitar esa instancia. Este análisis ó interpretación de la ley se acomoda mejor que cualquiera otro al

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

carácter que entre nosotros tiene la organización del Ministerio Público.

Definidos los anchurosos horizontes de esta magistratura, por las leyes de su creación y desenvolvimiento, es inconcuso que ella es la única depositaria de la acción pública para perseguir los delitos. Tan omnímoda y privativa es semejante prerrogativa que aun tratándose de aquellos delitos que antes se llamaban privados, porque sólo podían perseguirse por querella de la persona agraviada, el Ministerio Público es el que formula la acusación contra el delincuente, por más que la parte ofendida sea la que pone en movimiento con su instancia la jurisdicción de los tribunales.

Ahora bien, si es tan claro y terminante este razonamiento que llega á los extremos de un aforismo jurídico, no es posible aceptar como legítima y racional la interpretación que los señores promoventes del amparo, han querido dar al repetido art. 961 del Código de Comercio, insistiendo en que el Síndico ó los acreedores en su caso, pueden proceder criminalmente contra el quebrado, sin esperar á la declaración que en ese sentido pronuncie el Juez de la quiebra, porque este requisito sólo lo exige la ley para la acusación del Ministerio Público. Se daría entonces el caso anómalo y monstruoso de que se iniciara un procedimiento criminal por uno ó más particulares, procedimiento en el cual no podría intervenir el Ministerio Público. porque la ley se lo prohibía, sino hasta que se llenasen ciertos requisitos. Este absurdo no ha podido permitirlo la ley, porque además de su notoria anomalía, repugna á la naturaleza de los procedimientos en el orden penal y quebranta la levantada y dignísima institución del Ministerio Público.

Hay otras consideraciones de menor importancia, pero siempre pertinentes al presente informe, que no debo pasar inadvertidas. El Código de Comercio, en su art. 961, tantas veces citado, confiere á los acreedores, como se ha dicho, el

derecho de perseguir crimiminalmente al quebrado. Pero ¿á cuáles acreedores se refiere la ley? ¿no habrá de ser á los presuntos sino a los que hayan sido reconocidos como tales, después de la sentencia que sancione el proyecto de rectificación de créditos, conforme al art. 1,447 de aquel cuerpo de leyes!

Entonces, si se aceptase por el Juez del orden penal la instancia de cualquier acreedor sin que su crédito hubiera sido aceptado, se incurriría en el no remoto peligro de que el Juez del ramo Civil desechara el crédito de aquel acreedor y hubiera en el caso un peregrino conflicto entre dos resoluciones encontradas y diversas. Lo mismo sucedería si dando entrada al procedimiento criminal, contra el fallido, por quiebra fraudulenta, la sentencia de graduación declarase que ó bien no había habido quiebra ó que ésta era inocente con arreglo á la 1ª fracción del art. 1,497 del Código de Comercio.

Así como los antiguos creían que la naturaleza aborrecía el vacío, así también es una ley de hermenéutica jurídica, que en materia de interpretación legal, se debe aceptar aquella que procure hermanar los preceptos que aparecen encontrados, alejando el peligro de que surjan conflictos en que peligre la armonía que debe de reinar entre todas las leyes, y sobre todo, el riesgo inminente de que aparezca el absurdo en lugar del orden y la conformidad entre todos los ramos de una sola legislación.

Por último, no será fuera de propósito añadir que el auto de 22 del último Enero, en que desechó las pretensiones de los Sres. General Vega, H. Scherer y Compañía, y Christian F. Martens, es un auto ejecutoriado, que no fué recurrido por aquellos, y según tengo entendido, es jurisprudencia consagrada por la Suprema Corte de Justicia, en muchas ejecutorias, que podría enumerar, la de que el recurso de amparo sólo procede, cuando se han apurado todos los ordinarios que la ley concede á los particulares que estiman vulnera

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

dos sus derechos, por las autoridades ó tribunales del orden común.

Séame lícito añadir que el referido auto de 22 de Enero último no quebranta la garantía otorgada por el art. 14 de la Constitución Federal. Como Juez de Instrucción en esta Capital, la ley que norma mis procedimientos es el Código de la materia de 6 de Julio de 1894, y la determinación que pronuncié en la querella de los señores mencionados, está estrictamente apoyada en el terminante precepto que contiene el art. 59 de aquel Ordenamiento; en consecuencia, no se puede decir que haya dejado de aplicar exactamente al hecho que se me denunció, la única ley que debí atender, la que demarca dirección y meta á mis procedimientos. Bien sabido es que el desobedecimiento del art. 126 de la misma Constitución Federal, prestará motivo para otro juicio, pero no para reclamarlo por la vía de amparo, por violación de garantías.

Tales son, á grandes rasgos enumerados, los razonamientos que en mi humilde concepto defienden mi procedimiento y destruyen en cambio la base en que descansa la querella de amparo que da ocasión á este informe. Repito que ni mis aptitudes ni las múltiples atenciones que tengo, me han permitido extenderme, cuanto hubiera deseado, en defensa de la ley procesal, que norma mis actos como Juez de Instrucción, esperando tranquilo que la Justicia de la Unión no ampare ni proteja las pretensiones de los Sres. General J. M. de la Vega, H. Scherer y Compañía y Ch. F. Martens, en su escrito de 22 de Enero próximo pasado.

Protesto á vd. mi distinguida consideración.

Libertad y Constitución. México, Febrero 7 de 1898.

MANUEL F. DE LA HOZ.

III

Alegato presentado por los quejosos en el juicio de amparo.

C. JUEZ 2º DE DISTRITO:

H. Scherer y Compañía, Cristian F. Martens, como agente de Henry P. Newman, y el Brigadier José María de la Vega, acreedores de la Sociedad Rasst Headen y Compañía en liquidación y A. M. Davis y Compañía en liquidación, en la demanda de amparo interpuesta en ese Juzgado alegando de nuestro derecho, ante vd. respetuosamente comparecemos y decimos:

Que habíamos creído perfectamente innecesario presentarnos ante el Juzgado de su digno cargo alegando de nuestro derecho, debido á la claridad, á la sencillez, y á la facilisima resolución de las cuestiones que nuestra demanda de amparo preocupa; pero en vista del extenso y luminoso informe que, en cumplimiento del deber que le impone la ley constitucional, ha rendido el C. Juez 2º de lo Criminal, hemos creído indispensable hacer un nuevo y más profundo estudio de todas las cuestiones más ó menos íntimamente ligadas con nuestra demanda de amparo, siquiera sea para que el prestigio de que justamente goza el funcionario á quien hemos hecho

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

dos sus derechos, por las autoridades ó tribunales del orden común.

Séame lícito añadir que el referido auto de 22 de Enero último no quebranta la garantía otorgada por el art. 14 de la Constitución Federal. Como Juez de Instrucción en esta Capital, la ley que norma mis procedimientos es el Código de la materia de 6 de Julio de 1894, y la determinación que pronuncié en la querella de los señores mencionados, está estrictamente apoyada en el terminante precepto que contiene el art. 59 de aquel Ordenamiento; en consecuencia, no se puede decir que haya dejado de aplicar exactamente al hecho que se me denunció, la única ley que debí atender, la que demarca dirección y meta á mis procedimientos. Bien sabido es que el desobedecimiento del art. 126 de la misma Constitución Federal, prestará motivo para otro juicio, pero no para reclamarlo por la vía de amparo, por violación de garantías.

Tales son, á grandes rasgos enumerados, los razonamientos que en mi humilde concepto defienden mi procedimiento y destruyen en cambio la base en que descansa la querella de amparo que da ocasión á este informe. Repito que ni mis aptitudes ni las múltiples atenciones que tengo, me han permitido extenderme, cuanto hubiera deseado, en defensa de la ley procesal, que norma mis actos como Juez de Instrucción, esperando tranquilo que la Justicia de la Unión no ampare ni proteja las pretensiones de los Sres. General J. M. de la Vega, H. Scherer y Compañía y Ch. F. Martens, en su escrito de 22 de Enero próximo pasado.

Protesto á vd. mi distinguida consideración.

Libertad y Constitución. México, Febrero 7 de 1898.

MANUEL F. DE LA HOZ.

III

Alegato presentado por los quejosos en el juicio de amparo.

C. JUEZ 2º DE DISTRITO:

H. Scherer y Compañía, Cristian F. Martens, como agente de Henry P. Newman, y el Brigadier José María de la Vega, acreedores de la Sociedad Rasst Headen y Compañía en liquidación y A. M. Davis y Compañía en liquidación, en la demanda de amparo interpuesta en ese Juzgado alegando de nuestro derecho, ante vd. respetuosamente comparecemos y decimos:

Que habíamos creído perfectamente innecesario presentarnos ante el Juzgado de su digno cargo alegando de nuestro derecho, debido á la claridad, á la sencillez, y á la facilisima resolución de las cuestiones que nuestra demanda de amparo preocupa; pero en vista del extenso y luminoso informe que, en cumplimiento del deber que le impone la ley constitucional, ha rendido el C. Juez 2º de lo Criminal, hemos creído indispensable hacer un nuevo y más profundo estudio de todas las cuestiones más ó menos íntimamente ligadas con nuestra demanda de amparo, siquiera sea para que el prestigio de que justamente goza el funcionario á quien hemos hecho

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

referencia, no llegue á impresionar de una manera desfavorable el ánimo del C. Juez á quien tenemos la honra de dirigirnos.

El informe del C. Juez 2º de lo Criminal estudia la cuestión desde dos puntos de vista: primero, el penal y mercantil; y segundo, el constitucional.

Estudiando la cuestión penal y mercantil, el C. Juez cree demostrar:

1º Que hay ingente necesidad en aplazar para la remota época de la sentencia de graduación, la declaración definitiva del estado de quiebra de un comerciante y de la categoría en que se califique la quiebra.

2º Que para corroborar el anterior concepto el Código Penal, consecuente con esas doctrinas, no define en su nomenclatura el delito de quiebra y se ha limitado á fijar las penas en que deben incurrir los comerciantes á quienes se declare alzados y al fallido que oculte ó enajene sus bienes.

3º Que el Código de Comercio, inspirándose en los preceptos del Código Español, ha fijado y debido fijar que tanto el síndico y los acreedores, como el Ministerio Público, no pueden ejercitar la acción contra el quebrado sino después de haberse calificado la quiebra en la sentencia de graduación.

4º Que la acción que corresponde en todo caso á los acreedores, no puede ejercitarse sino por aquellos que hayan sido reconocidos como tales, en la sentencia de graduación.

Estudiando la cuestión constitucional, el C. Juez 2º de lo Criminal cree haber demostrado:

1º Que la aplicación, por su parte, del Código de Procedimientos Penales, no motiva la violación del art. 14 de la Constitución, porque aunque el Código de Comercio es y debe ser reputado como una ley federal, la ley que ha debido sujetar su procedimiento y servirle en él, es el Código de Procedimientos Penales, pues la índole y tendencia de ambas leyes, aleja todo temor de un conflicto.

2º Que no habiendo sido recurrido por nosotros el auto en que se desechó la querella de quiebra fraudulenta, no procede el recurso de amparo, porque no se han usado de todos los recursos que la ley penal concede á los particulares que estiman vulnerados sus derechos.

3º Que la violación del art. 126 de la Constitución puede dar motivo para otro juicio, pero no para la interposición del recurso de amparo.

Antes de estudiar nosotros á la luz del derecho mercantil y del constitucional todas las diversas cuestiones que deben resolverse con la sentencia de amparo, creemos debido refutar una á una todas los teorías avanzadas por el C. Juez 2º de lo Criminal, tanto porque el orden y método de trabajos así lo exigen, como porque queremos dar una prueba más del respeto que nos merece la autoridad judicial.

I

Parece imposible que un jurisconsulto, conocedor profundo de las leyes mercantiles y penales, pueda asegurar que hay ingente necesidad de aplazar la calificación del estado de quiebra para la época en que ha de pronunciarse la sentencia de graduación que pone término al juicio de quiebra.

Sin embargo, esta es la tesis que pretende fundar en su informe el C. Juez 2º de lo Criminal.

Aduce para ello:

1. Que toda la minuciosa serie de requisitos y de procedimientos que hay desde la declaración de quiebra hasta la sentencia de graduación, revelan que el legislador ha creído necesario, por medio de ellos, depurar la conducta de los comerciantes, para que á la postre se pueda declarar si han obrado de buena ó de mala fe.

2. Que si el Juez del orden penal fuera el designado por

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

la ley para proceder en contra del comerciante que suspende sus pagos y proceder desde luego por quiebra fraudulenta, invadiría la esfera de acción del Juez del concurso, exponiéndose a prejuzgar la cuestión capital del juicio mercantil.

3. Que la necesidad de mantener la unidad en todo lo relativo á la declaración de estado de quiebra, que viene á ser general, indivisible y absoluta, quedaría rota desde el momento en que obraran separadamente la jurisdicción criminal y la civil.

De todos los sistemas que las legislaciones de los diversos países han sancionado, nuestro Código de Comercio ha sido sin duda aquel que más en armonía está con los grandes intereses que el comercio persigue y con las necesidades que impone la índole diversa del juicio penal y del mercantil.

El Código de Comercio mexicano ha fijado como base indispensable para el procedimiento criminal de quiebra culpable ó fraudulenta, la declaración de quiebra, y ha encomendado el derecho de perseguirla, ora á los acreedores y al síndico, cuando bien les parezca, ora al Ministerio Público cuando se ha pronunciado sentencia irrevocable que determine que la quiebra es culpable ó fraudulenta.

El Código de Comercio mexicano ha precisado, pues que el delito de quiebra culpable ó fraudulenta puede perseguirse ó á instancia de parte ó de oficio, y ha señalado cuando debe ser considerada como delito de aquellos que sólo pueden perseguirse por acusación de parte interesada, y cuando y con qué condiciones debe perseguirse de oficio.

Se comprende la división establecida por nuestro Código de Comercio. El delito puede ser perseguido por acusación de parte cuando el acreedor tiene en sus manos todos los elementos necesarios para justificar el manejo culpable ó fraudulento del comerciante declarado en quiebra ó que ha hecho abandono de su activo.

El delito no puede ser perseguido de oficio por el representante de la sociedad, sino cuando en la larga tramitación del juicio de quiebra se ha comprobado la conducta del quebrado y ha habido una sentencia que declare que se han ejecutado hechos contrarias á la ley mercantil y penados por la ley penal.

Ninguna dificultad puede haber para que estas dos acciones, cada una intentada á su debido tiempo, puedan prosperar, y nada hay en la ley de comercio que estorbe la acción del juez de lo criminal, ni mucho menos que ate las manos de los acreedores perjudicados, con beneficio del quebrado que ha aprovechado y puede aprovechar de los bienes robados ú ocultados con perjuicio de sus dueños.

Poco esfuerzo habremos menester para demostrar que no puede dar lugar á conflicto alguno que los acreedores por su propio derecho persigan la quiebra culpable ó fraudulenta de un comerciante, antes de que se se hayan seguido los diversos y varios procedimientos que se emplean en el juicio mercantil de quiebra para el aseguramiento de los bienes y pago de los acreedores.

Pocas pruebas pudieran rendirse más pertinentes á este respecto que las prescripciones de las leyes sobre quiebra de algunos países que, ora se han anticipado á nuestro Código de Comercio concediendo claramente la accion para perseguir la quiebra á los acreedores en cualquier tiempo, ó ya han ido más adelante, no exigiendo siquiera como requisito previo, la declaración de quiebra.

El Código italiano, reputado no sin razón como uno de los más notables Códigos de Comercio expedidos en estos últimos años, determina en su art. 855 lo siguiente:

"L'action penale pour les délits compris en ce livre est publique.

Elle peut être intentée même avant la déclaration de faillite, lorsqu'à la cessation des paiements se joignent des faits de fuite, de latitance des magasins fermés, de detournement

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

de soustraction ou de diminution frauduleuse du patrimonie au préjudice des créanciers.

En ce cas le procureur du Roi devra dénoncer la cessation des paiements au president du tribunal de commerce aux fins de remplir les dispositions du titre I de ce livre."

Como se ve, el Código italiano declara que el delito de quiebra puede perseguirse de oficio en todo tiempo, y lo que es más, que puede presentarse la acusación de quiebra culpable ó fraudulenta aun antes de que la declaración de quiebra se haya pronunciado por el Tribunal de Comercio, cuando hay ciertos hechos que demuestran ó dan motivo para establecer y comprobar los fraudes cometidos por el comerciante.

La ley ha querido armar á la sociedad del derecho de perseguir á los comerciantes que, burlando la buena fe y la confianza que sirven de apoyo y dan firme asiento al comercio, han ejecutado actos que por sí solos bastan para comprobar y establecer los fraudes cometidos por ellos, sin esperar la larga y dilatada secuela del juicio mercantil.

Con la primera, es decir, con la acción penal, se obtiene el castigo de un delincuente y se persigue el fin social del derecho de castigar; con la segunda, la acción civil, se devuelve á los acreedores los restos abandonados del festín, la parte ocultada ó no robada de la riqueza que pusieran en manos del comerciante.

El Código de Comercio francés en sus artículos del 584 al 592, concede el derecho de perseguir la quiebra á los síndicos, á los acreedores y al Ministerio Público. No limita, como el Código mexicano, la acción del Ministerio Público para los casos en que se hubiera dictado sentencia irrevocable, sino que coloca á la sociedad al igual de los acreedores, y suponiéndolos igualmente interesados en la ejecución de los delitos cometidos, les da el derecho de perseguir la quiebra frandulenta en cualquier momento, sin limitación alguna de tiempo.

Comentando esta parte del Código de Comercio francés los célebres criminalistas Chaveau y Helie, muy conocidos y autoridad muy respetable sin duda para el Juez 2º de lo Criminal, dicen:

"Pero si no han sido observadas, si la quiebra no ha sido denunciada, si el Tribunal de Comercio no la ha declarado, ¿la acción para perseguir la bancarrota puede ser ejercitada? La cuestión no puede ser objeto de serias dudas. La acción civil y la acción pública son independientes una de otra; marchan sobre una línea paralela sin ponerse mutuas trabas á no ser en el caso en que la ley ha previsto formalmente la influencia de una sobre otra. Ahora bien, ninguna disposición, ya sea de la ley penal ya sea de la ley comercial, ha subordinado el ejercicio de la acción pública á la acción civil de los acreedores, la querella de los síndicos ó la declaración de quiebra. Los art. 584 y 587 del Código de Comercio declaran, al contrario, que la bancarrota puede ser perseguida, ora por queja de los acreedores ó de los síndicos, ya por el Ministerio Público de oficio. La acción del Ministerio Público no está, pues sometida á ninguna condición; en esta materia, como en cualquiera otra, puede obrar desde el momento que reconoce la existencia del delito ó del crimen. Si se admitiere que su acción está subordinada á la declaración de quiebra, resultaría que la acción pública en lo que concierne á la acción para perseguir la bancarrota, estaría colocada en las manos de los acreedores."

La ley francesa ha sancionado, pues, los mismos principios que la legislación italiana, con la sola diferencia de que ha permitido el ejercicio de la acción para perseguir el delito de quiebra culpable ó fraudulenta, tanto á los acreedores, como al síndico, á nombre de ellos, como al Ministerio Público.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

¿Puede decirse acaso que estas sabias legislaciones al consagrar tal principio han menoscabado los derechos de los quebrados, han puesto trabas á sus defensas ó han ocasionado conflictos graves de jurisdicción entre los tribunales de Comercio que existen en Francia y en Italia, y los jueces de lo criminal?

Por el contrario, estas leyes han consagrado la más sana doctrina y han deslindado perfectamente bien la esfera de acción de los jueces de lo criminal, demostrando que ambas acciones pueden concurrir paralelamente sin estorbarse en lo más mínimo.

Los jurisconsultos franceses han demostrado que aun la declaración de quiebra es perfectamente innecesaria para la prosecución de la quiebra fraudulenta ó culpable, porque la tal declaración no es sino un acto que viene á fijar el estado del quebrado. acto que abre la puerta á los acreedores para buscar el pago de sus deudas, mientras que el ejercicio de la acción criminal se apoya en la comprobación de hechos que por sí mismos pueden suministrar la comprobación del cuerpo del delito,

Cuando un comerciante se ha alzado, cuando ha dispuesto de mercancías que le fueron dadas en comisión para su venta, cuando ha tomado para sí el producto de libranzas que le fueron dadas en cobro, cuando ha girado á sabiendas de que las libranzas no habían de ser pagadas, cuando, en fin, ha ejecutado la diversidad de hechos que las leyes comerciales declaran ser motivo bastante para fundar que la quiebra es culpable ó fraudulenta, ¿es ó puede ser necesaria una declaración de quiebra, y mucho menos todos los demás procedimientos que son su consecuencia, para que cada uno de estos diversos delitos pueda independientemente ser comprobado y castigado por ellos el presunto responsable?

Jamás, podemos decirlo con firmeza, ha existido Código alguno de Comercio que hubiera establecido el enorme dislate que ha asentado el Código de Procedimientos Penales, y que se contiene en el art. 59; porque lejos de ser necesario y conveniente, como asienta el C. Juez 2º de lo Criminal, llenar todos los requisitos y haber cumplido con todos los preceptos que regulan desde la declaración de quiebra hasta la sentencia de graduación, pretender seguir ese camino es autorizar el robo por parte de los comerciantes y entregar á la sociedad desarmada en manos de los que van á explotar la buena fe y la confianza con que se les pudiera honrar.

El antiguo Código español sancionó un procedimiento distinto del seguido por el Código francés, y ese procedimiento viene á demostrar que perfectamente pueden marchar por separado todo lo relativo á la responsabilidad penal del quebrado, y todo lo que se refiere al aseguramiento de bienes y pago de sus acreedores.

El Código Español no concedió ni á los acreedores ni al Ministerio Público, el derecho de perseguir la quiebra, aun antes de la declaración de quiebra, pero tampoco ha permitido que no se pueda perseguir al quebrado hasta que haya causado ejecutoria la sentencia de graduación.

Los arts. 1,137 al 1,146 del antiguo Código Español, determinaron que se seguiría por ramo separado un expediente sobre calificación, con audiencia del quebrado mismo, y que el Juez comisario debía de preparar el juicio de calificación con el informe que debía darse después de la ocupación de bienes y papeles de la quiebra con el informe que los Síndicos debían rendir dentro de los quince días siguientes á su nombramiento.

El nuevo Código Español, en sus arts. 895, 896 y 897, determina que la calificación de la quiebra se hará también en ramo separado; pero sólo se ha exigido para que se proceda á instancia de parte ó de oficio la declaración de quiebra y la de haber méritos para proceder criminalmente.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

El estudio hecho de la legislación extranjera, deja claramente demostrado:

1º Que no hay inconveniencia ni contrasentido alguno en que se proceda criminalmente contra un quebrado, ora por sus acreedores, ora por el Ministerio Público, aun antes de la declaración de quiebra:

2º Que menos inconveniente puede haber en que la acción de los acreedores ó del Ministerio Público se ejercite después de pronunciada la declaración de quiebra:

3º Que la tramitación del juicio de quiebra no tiene más fin qne asegurar los bienes del fallido, comprobar el monto de los créditos y hacer el pago de ellos:

4º Que el juicio criminal tiende tan sólo á castigar el delito cometido por el comerciante que ha sido declarado en quiebra; y

5º En consecuencia, que los preceptos contenidos en el art. 961 de nuestro Código de Comercio, lejos de oponerse á los preceptos de la sana teoría, están apoyados por ésta y no se podría hacer contra ellos más censura sino la de no autorizar la acción de los acreedores aun antes de la declaración del estado de quiebra.

II

Estudiando el texto del art. 961 del Código de Comercio vigente, el C. Juez 2º de lo Criminal llega á hacerlo decir todo lo contrario de lo que dice, buscando para ello apoyo, ora en el Código Penal, ya en el Código Español de 1885.

No deja de ser peregrina la interpretación que se da al art. 961 cuando se pretende que sujeta la acción de los acreedores y la del Síndico á la previa calificación hecha por sentencia irrevocable. El art. 961 dice:

"La quiebra culpable ó fraudulenta se perseguirá:

1º Por acusación del Ministerio Público, previa la calificación hecha por sentencia irrevocable:

2º Por querella del Síndico, si para entablarla fuera autorizado por la mayoría de los acreedores:

3º Por querella de uno ó varios de éstos, quienes seguirán á sus expensas el juicio criminal sin acción á ser reintegrados por la masa ni de gastos ni de costas, cualquiera que sea el resultado de sus gestiones."

Como se ve, la previa calificación en sentencia irrevocable sólo se refiere á la fracción primera, esto es, á la acusación hecha por el Ministerio Público. ¿Es posible que pueda aplicarse también á las otras dos fracciones del artículo?

Para que esto fuera cierto, el artículo debió haber estado redactado en los siguientes términos:

"La quiebra culpable ó fraudulenta se perseguirá, previa la calificación hecha por sentencia irrevocable:

1º Por acusación del Ministerio Público:

2º Por querella del Síndico, etc.:

3º Por querella de uno ó varios de éstos, etc."

En este caso todo el mundo hubiera entendido que la acción para perseguir la quiebra quedaba subordinada para todos, á la declaración hecha en sentencia irrevocable; pero si el artículo, como sus términos mismos lo demuestran, sólo en la fracción primera subordina la acción del Ministerio Público á la calificación hecha por sentencia irrevocable, no podrá decirse que la acción de los acreedores ó del Síndico está también subordinada á un requisito que la ley no ha exigido.

No obstante, esta interpretación y todos los demás argumentos que se hacen contra el texto del artículo, nacen del olvido más absoluto de sus antecedentes en nuestra legislación patria.

Cree el C. Juez 2º de lo Criminal que porque en muchas partes la Comisión encargada de redactar el Código de Co-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

mercio hubo de seguir la doctrina del Código Español de 1885, éste ha inspirado también lo relativo á la quiebra, y esto es olvidar por completo los diversos sistemas autorizados, para la persecución de las quiebras culpables ó fraudulentas, por los Códigos españoles y por los Códigos mexicanos.

El antiguo Código Español, como ya queda dicho, estableció un sistema especial para la calificación de las quiebras, y según sus preceptos, esta calificación debía hacerse por el Tribunal de Comercio independientemente y con completa separación de los autos de la quiebra.

No era, pues, la sentencia de graduación la que venía á calificar la quiebra, sino una resolución especial, dictada con mayor rapidez, con audiencia del Síndico y del quebrado y que en seguida se mandaba pasar al Juez de lo Criminal para que obrase en ejercicio de sus atribuciones.

El actual Código Español dice:

"Art. 895. La calificación de la quiebra para exigir al deudor la responsabilidad criminal, se hará siempre en ramo separado que se substanciará con audiencia del Ministerio fiscal, de los Síndicos y del mismo quebrado, etc."

"Art. 896. En ningún caso, ni á instancia de parte, ni de oficio, se procederá por los delitos de quiebra culpable ó fraudulenta, sin que antes el Juez ó Tribunal haya hecho la declaración de quiebra y la de haber méritos para proceder criminalmente."

Como se ve, el Juez ó Tribunal que conoce de la quiebra en ramo separado y en incidente especial, hace la declaración de haber méritos para proceder, y en vista de esa declaración, el asunto pasa á conocimiento del Juez de lo Criminal.

El sistema adoptado por el Código de Comercio Mexicano es completamente distinto, porque no ha aceptado todo lo relativo al incidente de calificación, establecido por primera vez en el antiguo Código Español.

Nuestro antiguo Código de Lares sí siguió en esto al antiguo Código Español. El título X del Libro V de dicho Código se refiere á la calificación de las quiebras. Los arts. 887 á 894 y el 904, dicen á la letra:

"Art. 887. En todo procedimiento de quiebra se hará la calificación de la clase á que corresponda en un expediente separado, que se comenzará inmediatamente después que el Juez declare el estado de quiebra, y se substanciará instructivamente con audiencia de los síndicos y del mismo fallido."

"Art. 888. La quiebra es indicio de culpabilidad, y en consecuencia, en el mismo día en que el tribunal declare el estado de quiebra, proveerá en el expediente sobre calificación, la detención de la persona del quebrado.

"Art. 889. La conducta del quebrado en el cumplimiento de las obligaciones que le imponen los arts. 775 y 776, la exposición que debe hacer de las causas inmediatas y directas que ocasionaron la quiebra, el estado en que se encuentran sus libros y lo que resulta de éstos, del balance que presente y de los documentos y papeles de la quiebra sobre su verdadero origen, servirá al Tribunal para apreciar la clase á que pertenece la quiebra, para los efectos del artículo siguiente."

"Art. 890. Si pasado el término que las leyes señalan para dar el auto motivado de prisión, no se hubiere podido hacer la calificación definitiva de la quiebra, el tribunal pondrá al detenido en libertad bajo la fianza de cárcel segura, si no hubiere méritos legales para poner el auto motivado de prisión."

"Art. 891. Los síndicos prepararán el juicio de calificación presentando al tribunal, á más tardar dentro de ocho días siguientes á su nombramiento, una exposición circunstanciada sobre los caracteres que presenta la quiebra, fijando la clase en que crean que debe ser calificada."

"Art. 892. La exposición de los síndicos se comunicará

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

al Juzgado, el cual podrá impugnar dentro de tres días la calificación propuesta, según convenga á su derecho."

"Art. 893. En el caso de oposición podrán, así los síndicos como el fallido, usar de los medios legales de prueba para acreditar los hechos que hubieren alegado. El término para hacer esta prueba no excederá de cuarenta días comunes y concluido alegarán dentro de seis."

"Art. 894. En vista de lo alegado y probado por parte de los síndicos y por parte del fallido, el tribunal hará la calificación definitiva de la quiebra con arreglo á las disposiciones de los artículos siguientes."

"Art. 904. Si el tribunal calificase la quiebra de culpable ó fraudulenta, remitirá luego el expediente de calificación al Juez de lo Criminal; si el mismo no lo fuere, para que proceda á imponer al culpable ó criminal la pena correspondiente. De esta calificación podrá apelar el fallido y se le admitirá el recurso de ambos efectos."

Los artículos transcritos demuestran de qué manera el Código Lares resolvía la cuestión de jurisdicción á que podía dar lugar la calificación de la quiebra. Dejaba al tribunal de Comercio la fijación de la naturaleza de la quiebra, autorizándolo para acordar desde luego la detención del quebrado, y después de haber pronunciado su sentencia, mucho antes de que se pudiera llegar á la sentencia de graduación, pasaba el expediente al Juez de lo Criminal.

El Código de Comercio de 1884 fué el primero que suprimió todo lo relativo al expediente de calificación. Dijo en su art. 1,468 lo que sigue:

"La quiebra culpable ó fraudulenta se perseguirá:

1. De oficio si resultare comprobada en los libros y documentos del fallido ó en las actuaciones del concurso respectivo.

2. Por acusación del Ministerio Publico, ó de uno ó varios de los acreedores.

3. Por acusación del síndico, si para entablarla fuere autorizado por la mayoría de los acreedores."

El artículo demuestra claramente que la intención del legislador fué encomendar á la jurisdicción criminal el conocimiento de los delitos, porque no se encuentra en todo el Código artículo alguno que autorice al síndico para dar su opinión sobre la naturaleza de la quiebra y precisar los hechos que pueden ser los elementos constitutivos del delito.

Es verdad que en la frac. I del art. 1,608 se dice que la sentencia de graduación contendrá: "La resolución de que ha habido quiebra y de qué clase;" pero no deja de llamar la atención que en ningún artículo se hubiera autorizado á todos los que intervienen en los juicios de quiebra para proporcionarle al Juez los elementos para conocer la naturaleza de la quiebra y fijar su clase.

Si el Código autorizó tanto al Ministerio Público como á los acreedores y al síndico para entablar su acción cuando lo creyeren oportuno y al Ministerio Público tan sólo le previno que habría de obrar de oficio si la quiebra culpable ó fraudulenta resultaba comprobada en los libros y documentos del fallido, esto quiere decir que al abandonar el Código de 84 el sistema implantado por el Código de Lares, que establecía el expediente especial de calificación que terminaba con una sentencia, quiso separar por completo la jurisdicción civil de la criminal, sujetando á aquella el conocimiento de los intereses de la quiebra y dejando á la otra el conocimiento del delito que hubiere de perseguirse.

Para comprobar más esta verdad, bástenos recordar la legislación vigente entre nosotros antes de la expedición del Código de 1884.

Como el Código de Lares tuvo una vida efímera, antes y después nuestros tribunales aplicaron las Ordenanzas de Bilbao y las leyes I, II, III, IV y VII, Tít. 19, Libro 5 de la Recopilación ó el Tít. 32, Libro II de la Novísima, que

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

fueron mandados observar al Consulado de México por cédula de 4 de Mayo de 1719, inserta en las provincias de Beleña, núm. 220.

Las Ordenanzas de Bilbao reconocieron dos clases de fallidos: los alzados y los fraudulentos. A ambos mandaron que se les considerara como robadores y ladrones públicos incurriendo en las penas impuestas contra éstos, y la ley 7 mandó que en el acto mismo de la quiebra todo quebrado fuese preso y mantenido en prisión en cárcel pública sin que pudiera ser suelto ni dado en fianza por manera alguna, así por las justicias ordinarias como por los jueces y tribunales superiores, hasta tanto que los dichos pleitos de acreedores y compromisos y conciertos á lo que sobre ellos hubiere de juzgarse y determinarse, se acaben y fenezcan de todo punto ó por todas instancias.

Como se ve, la declaración de quiebra era bastante para proceder contra el quebrado y debía ser reducido á prisión desde luego, sin que se estorbaran en lo más mínimo la jurisdicción de los tribunales de Comercio y la de los jueces de lo Criminal para aplicar las penas señaladas en las leyes.

El Código Penal de 1870 aumentó las penas de la antigua legislación, y sin restricción alguna, sin sujetarlo á requisitos de ninguna especie, determino en su art. 441 que el delito de quiebra fraudulenta se perseguiría de oficio, aun cuando no hubiese queja ni petición de parte.

En la parte expositiva se explica por modo sencillísimo el hecho. El texto de la Parte Expositiva del Código, dice á la letra: "Siendo ya por desgracia muy frecuente el delito de quiebra fraudulenta é inadecuadas las penas de la legislación actual, era necesario y urgente señalar otras y fijar reglas para el castigo de ese grave delito."

Al Juez 2º de lo Criminal llama la atención que el Código Penal no se hubiera detenido á precisar la naturaleza especial de ese delito, y este es el momento de reivindicar á la Comisión encargada de redactar el Código Penal.

La Comisión hizo bien en lo que hizo y no pudo hacer más de lo que hizo.

No toca al Código Penal hacer la clasificación de las quiebras, que en todos los Códigos del mundo, sin excepción, esto se ha hecho en los Códigos de Comercio. Allí es donde está en su lugar y jamás debe sacársela de sus quicios.

Dados estos antecedentes, se explica el sistema seguido por el Código de 84, y el que se haya establecido, que la jurisdicción civil debe ocuparse en todo lo relativo á los bienes del quebrado y la jurisdicción criminal en todo lo que se refiere al delito cometido por aquel.

Tributo pagado al antiguo sistema de hacer en lo civil la calificación de la quiebra, son las tres palabras contenidas en la frac. I del art. 1,608 cuando manda al Juez decir en la sentencia de graduación, de qué clase fué la quiebra; porque como ya lo hemos apuntado, no existe en todo el Código prevención alguna que autorice al síndico ó á los acreedores á recurrir y presentar los elementos bastantes para que el Juez pueda saber si la quiebra fué fortuita, fraudulenta ó culpable.

El Código de 1889, es decir, el Código vigente, quiso derogar el Código Penal y modificar el de 1884, aunque copiando algunos de sus preceptos, y por eso determinó que la acción de quiebra fraudulenta podía perseguirse de oficio ó por acusación de parte, y previno al Ministerio Público que sólo intentara la acción cuando el Juez hubiese declarado en su sentencia á qué clase pertenece la quiebra.

Es de notar que el art. 1,497 del Código vigente, que determina lo que debe contener la sentencia de graduación, es una copia fiel del art. 1,608 del Código de 1884, y esto explica por qué en el Código de 1889 la acción del Ministerio Público se subordina á la sentencia de graduación.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Como lo hemos asentado antes, hay incongruencia entre lo preceptuado en el art. 1,468 y lo dispuesto por el 1,608 del Código de 84. En el uno (1,468) se autorizaba al Ministerio Público para perseguir de oficio la quiebra si resultaba comprobada en los libros y documentos del fallido, y en el otro (1,608) se imponía al Juez la obligación de calificar la quiebra en la sentencia de graduación.

Para hacer desaparecer esa incongruencia, el Código de 1889, al conservar en su art. 1,497 la obligación impuesta al Juez de determinar la naturaleza de la quiebra, subordina á ella tan sólo la acción del Ministerio Público.

Esto explica claramente por qué si la acción del Ministerio Público está sujeta ó subordinada á la calificación de la quiebra hecha en sentencia de graduación, no lo está ni ha podido estarlo la de los acreedores y la del síndico.

Por otra parte, el haber subordinado la acción de los acredores y la del Síndico á la declaración que se hiciera en sentencia de graduación, hubiera sido cometer un enorme disparate y dar al Síndico y á los acreedores una acción perfectamente ineficaz, consagrando la impunidad de los quebrados, ora culpables, ora fraudulentos.

Con efecto, ¿cuándo causa ejecutoria la sentencia de graduación? Conforme al último artículo del Código de Comercio, después de que se ha fallado el recurso de casación ó nulidad que se pueda interponer contra la sentencia de segunda Instancia que hubiere confirmado la referida sentencia de graduación, ó lo que es lo mismo, cuando el Síndico ha dado término á sus funciones, cuando los acreedores ya no pueden reunirse en junta para ejercitar sus derechos, cuando, en fin, se ha concluido el juicio de quiebra.

¿Y es posible que el Código de Comercio hubiera podido disponer que el Síndico habría de ejecutar su acción contra el quebrado, cuando ya ha concluido sus funciones, cuando ya no pueden los acreedores reunirse en junta para darle

semejante autorización, porque el Código de Comercio autoriza á los acreedores para perseguir al quebrado por conducto del Síndico y cuando ya se hecho el pago de las deudas, ó lo que es lo mismo, cuando ha concluido el juicio de quiebra?

Si, como muy bien dice el C. Juez 2º de lo Criminal, las leyes no deben interpretarse de tal manera que resulte de esa interpretación un contrasentido y un absurdo, jamás pudo haberle dado al art. 961 del Código de Comercio la interpretación que le ha dado; aunque, por otra parte, como lo hemos demostrado, jamás ha podido sostenerse lo que se quiere decir que sus preceptos dicen.

No teniendo el Juez 2º de lo Criminal observación alguna seria que formular contra la recta interpretación y texto expreso del art. 961 del Código de Comercio, recurre á examinar los requisitos con que se puede ejercitar la acción por parte de los acreedores, cuestión secundaria, y cree encontrar graves dificultades en la determinación del carácter de acreedor que debe comprobar el acusador al ejercitar su acción.

¿Quiénes deben reputarse acreedores de la quiebra? pregunta el Juez 2º de lo Criminal.

Aquellos cuyos créditos han sido aprobados y reconocidos por la sentencia de graduación—contesta el mismo Juez y esto es un gravísimo error jurídico.

Tienen derecho á ser pagados, según las preferencias establecidas por la ley, los acreedores reconocidos en la sentencia de graduación; pero es acreedor todo aquel que tiene tal carácter en los libros del comerciante quebrado ó que puede comprobar que tiene derecho á reclamar alguna suma del quebrado.

Para el ejercicio de la acción que concede el art. 961 del Código de Comercio, sólo se puede exijir la constancia de que se es acreedor; pero es perfectamente innecesario el acuer-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

do de la Junta de acreedores y mucho menos la sentencia de graduación, porque son muy distintos los efectos que puede tener el reconocimiento de los demás acreedores y la preferencia que autoriza la sentencia de graduación.

En todo caso, la ley no ha exigido que sean reconocidos por la sentencia de graduación ó en junta de acreedores, los acreedores que persiguen al quebrado, sino que se ha limitado á conceder la acción á todos aquellos que tengan tal carácter.

La poca importancia que habíamos dado al argumento formulado por el C. Juez 2º de lo Criminal apoyándose en la institución del Ministerio Público y en la anomalía que podría resultar de que sólo uno ó más particulares intervinieran en el juicio criminal, nos hizo no refutarlo oportunamente.

Pero no debemos dejarlo en pie para que no se crea que precisamente hemos dejado de combatirlo porque no teníamos razones que aducir en contra.

Parece raro que el C. Juez 2º de lo Criminal, tan versado y competente en cuestiones que con la jurisprudencia criminal se relacionan, haya puesto en olvido el papel que en todo juicio corresponde llenar al Ministerio Público.

El Código de Comercio, en su art. 961, al disponer que el Ministerio Público sólo puede de oficio acusar el delito de quiebra fraudulenta, previa la calificación hecha por sentencia irrevocable, no se refiere á lo que propiamente en derecho penal se llama acusar, sino iniciar el procedimiento.

Conforme al Código de Procedimientos Penales, unos delitos se persiguen de oficio y otros tan sólo por querella necesaria de parte agraviada, y en este último caso, no porque el derecho para acusar corresponda á la parte ofendida y no pueda abrirse averiguación sino á instancia suya, el Ministerio Público deja de acusar y de tomar la participación debida en la averiguación criminal.

En el caso de adulterio y demás delitos que se persiguen

por querella necesaria, conforme á la ley de procedimientos penales, sólo se puede proceder á petición de la parte agraviada, y sin embargo, es el Ministerio Público el que sostiene la acusación ante el Jurado.

Los arts. 56 y 57 del Código de Procedimientos Penales, dicen á la letra:

"Art. 56. El ofendido podrá desistirse á su perjuicio de la querella intentada, pero su desistimiento no impide que el Ministerio Público continúe ejercitando la acción, excepto en el caso del artículo siguiente."

"Art. 57. Cuando se trate de delitos en que es necesaria la querella de parte, el desistimiento de ésta antes de la citación para el Jurado ó para la audiencia de que habla el artículo 253, impedirá que el Ministerio Público continúe ejercitando la acción, teniéndose presente en su caso, lo dispuesto en el art. 825 del Código Penal."

Como se ve, sólo puede impedir que el Ministerio Público continúe ejercitando la acción penal, el desistimiento de la parte por cuya querella hubo de incoarse el procedimiento, á no ser cuando dicho desistimiento se haya hecho antes de la citación para el Jurado ó para la Audiencia á que se refiere el art. 253.

La diferencia, como queda claramente dicho, consiste en que en unos casos el procedimiento se abre de oficio, á instancia del Ministerio Público, y en los otros no se puede abrir sino á instancia de parte agraviada; pero en ambos y toda vez que haya un delito, el Ministerio Público debe acusar.

Así pues, en los casos de quiebra fraudulenta, el Código de Comercio dispone que no podrá abrirse la averiguación á instancia del Ministerio Público, sino á instancia de los acreedores interesados ó del Síndico á nombre de éstos; pero la querella de los acreedores ó la del Síndico, no impide al Ministerio Público tomar la participación debida en el juicio para acusar ante el Jurado, á no ser de conformidad con lo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

dispuesto en el art. 57; en el caso de que haya desistimiento en forma antes de la citación para el Jurado.

El estudio anterior ha dejado demostrado sin lugar á duda alguna:

1. Que nuestro Código de Comercio vigente ha concedido al Síndico y á los acreedores el derecho de perseguir la quiebra fraudulenta ante el Juez de lo Criminal, sin que para esto tenga nada que ver la autoridad civil, encargada de dirigir el juicio de quiebra.

2. Que nuestro Código sólo ha subordinado la acción del Ministerio Público á la declaración del Juez de lo Civil hecha en la sentencia de graduación.

3. Que nuestro Código de Comercio no ha tomado sus principios del Código Español de 1885, porque establece un sistema completamente diverso para dejar independientes las jurisdicciones civil y criminal.

4. Que el Código de Comercio vigente copió los preceptos del Código de 1884, modificando tan sólo el ejercicio de la acción confiada al Ministerio Público que en aquel Código se podía ejercitar cuando la quiebra culpable ó fraudulenta resultase comprobada con los libros y documentos del fallido.

5. Que intepretar nuestro Código de Comercio en el sentido de que la acción de los acreedores y la del Síndico deben quedar subordinadas á la declaración de quiebra, es un contrasentido que vendría á autorizar la impunidad más completa de todos los quebrados.

6 y último. Que la institución del Ministerio Público, lejos de oponerse á esta interpretación la confirma, porque la ley no prohibe al Ministerio Público que acuse en casos de querella necesaria, sino que no se proceda de oficio y á instancia suya.

III

Si el Juez 2º de lo Criminal estuvo poco feliz al estudiar la cuestión desde el punto de vista del derecho penal y mercantil, mucho menos lo ha estado al estudiar el asunto á la luz del derecho constitucional.

Las observaciones que á nuestra demanda de amparo ha formulado ó no han sido fundadas ó son contrarias al tenor de la ley constitucional vigente.

Pretende demostrar el C. Juez 2º de lo Criminal que la aprciación por su parte de las prescripcines del Código de Procedimientos Penales, no constituye una violación del artículo 14 de la Constitución, porque aunque el Código de Comercio es y debe ser reputado como una ley federal, el que ha debido aplicar es el de Procedimientos Penales, pues la índole de ambas leyes aleja todo temor de conflicto entre ambas.

Confunde sin duda alguna el C. Juez 2º de lo Criminal, al hacer esta argumentación, las dos causas que motivan y fundan nuestra demanda de amparo: la violación del art. 14 de la Constitución con la invasión de la esfera de la autoridad federal propiamente dicha, ó lo que es lo mismo, el amparo interpuesto con apoyo de la frac. I y el interpuesto de acuerdo con la frac. III del art. 101 de la Constitución.

Con efecto, ¿para qué fundar que el Código de Comercio es una ley federal y resolver después que el Código aplicable ha debido ser el de Procedimientos Penales, si no está confundiendo el antagonismo de ambos cuerpos de leyes con las diversas facultades de que el Ejecutivo ha hecho uso para expedirlos?

Pero independientemente de esto no pudo llegar á fundar el Juez 2º de lo Criminal que la aplicación por su parte

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

del Código de Procedimientos Penales, no constituye una violación del art. 14 de la Constitución.

Es muy conocida y ha sido bastante interpretada la garantía que consigna el art. 14 de la Constitución. Dice el artículo en la parte conducente.

"Nadie puede ser juzgado ni sentenciado sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas á él por el tribunal que previamente haya establecido la ley."

Numerosísimas ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia han establecido que, tratándose de negocios civiles, la garantía constitucional otorgada en el art. 14, es que tan sólo puede uno ser juzgado y sentenciado aplicándose las leyes que deciden del derecho que se cuestione, ó lo que es lo mismo, que si puede sostenerse que no hay violación de garantías cuando se aplica con torcida interpretación la ley que es aplicable, sí existe violación de garantías cuando deja de aplicarse al hecho de que se trata la ley que debe resolver el caso.

Pues bien, aun dentro de ese criterio restrictivo, puede demostrarse que en nuestro caso la ley aplicable es el Código de Comercio y no el Código de Procedimientos Penales.

El Juez 2º de lo Criminal asegura que, dada la índole de nuestros Códigos de Comercio y de Procedimientos Penales, debe alejarse todo temor de un conflicto; pero ha olvidado que esto solamente puede ser cierto cuando cada uno de ambos cuerpos de leyes se ha circunscrito á su esfera de acción.

El conflicto que nosotros hemos señalado al interponer nuestra demanda de amparo, nace de la naturaleza de ambos Códigos; porque es una verdad indiscutible que si el legislador se hubiera concretado en cada uno de ellos á dictar las reglas y preceptos que cada uno debía tan sólo contener, el conflicto no hubiera existido.

Nace el conflicto que hemos señalado de que el Código de Procedimientos Penales ha metido la hoz en mies ajena y establecido un principio que está en abierta pugna con los ya asentados en el Código de Comercio.

Dos proposiciones fundamentales pueden sostenerse sin temor de errar, á saber:

I. Que es el Código de Comercio el que ha debido ocuparse en la calificación de las quiebras, determinando á quienes corresponde ejercitar la acción que ellas hacen nacer y en qué época.

2. Que el Código de Procedimientos Penales no ha podido derogar los preceptos del Código de Comercio.

Aunque esta segunda proposición ha de estudiarse al considerar el amparo desde el punto de vista de su procedencia conforme á la frac. III del art. 101 de la Constitución, queremos anticipar algunos conceptos para que no se diga que se aplicó el Código de Comercio, porque su art. 961 debe reputarse derogado por el 59 del de Procedimientos Penales.

Es inconcuso, y nadie podrá negarlo, que es el Código de Comercio el que debe clasificar las quiebras y precisar á quiénes corresponde la acción para perseguir las que se reputen culpables ó fraudulentas.

Si hubiéramos de atenernos tan solo á la cuestión de hecho, bastaría á nuestro objeto señalar que en todo el mundo civilizado son las leyes de comercio las que se encargan de determinar cuándo las quiebras deben reputarse fortuitas, culpables ó fraudulentas, y como y por quién ha de perseguirse á los presuntos responsables de ellas.

Para comprobar nuestro aserto podríamos citar: el Código Frances, capítulos I, II y III del Tít. II Libro III; el Código Italiano, Tit. VIII del Libro III; El Código Español, sección III del Tít. I del Libro IV; el Código Argentino, el Código Otomano, capítulos I y II del Tít. II del Libro II,

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Sólo una excepción podría hacerse á esta enumeración: la del Código Alemán, que no contiene capítulo alguno relativo á las quiebras y su calificación; pero esto se explica porque dicho Código fué anterior á la unidad del Imperio Alemán, y aunque ha llegado después á ser ley del Imperio, fué aceptado tal como había sido redactado por la Confederación.

Pero el silencio de aquel Código ha quedado llenado por la ley federal de 10 de Febrero de 1877, y esa ley ha seguido el camino trazado por todos los demás Códigos del mundo.

Fácilmente explicable es el proceder de todos los legisladores. Ellos han comprendido el papel que deben llenar las leyes substantivas, y el que toca tan sólo á las leyes de procedimientos.

Las leyes de procedimientos son puramente formales: ellas dan las formas tutelares para el ejercicio de las acciones; pero éstas no nacen de los procedimientos, no toman en ellos su origen.

Es la ley subtantiva la que determina las acciones y su naturaleza, y á quien compete su ejercicio.

Por eso, cuando se ha tratado de determinar quién debe perseguir el delito de quiebra y cuándo éste se comete, el Código de Comercio es el que ha determinado la acción que corresponde á los acreedores ó al síndico, como representante de ellos, y el que ha precisado todos los diversos hechos que constituyen ora la quiebra fortuita, ya la culpable ó fraudulenta.

Si es, pues, el Código de Comercio el que debe consignar los preceptos relativos á la calificación de las quiebras y la acción que de ellas nace; si es, pues, el Código de Comercio el que conteniendo esos preceptos debe ser el aplicable, el juez ó tribunal que deje de ajustarse á sus preceptos ó que aplique otros distintos contenidos en leyes de mero procedimiento, viola el art. 14 de la Constitución.

En el presente caso el Código de Comercio, en su artículo 961, fija por quién, cómo y cuando debe ejercitarse la acción para perseguir la quiebra fraudulenta, y al no sujetarse el Juez á sus preceptos, invocando para ello el Código de Procedimientos Penales, ha violado el art. 14 de la Constición.

Una sola objeción podría formularse contra este razonamiento, á saber: que el Código de Procedimientos Penales ha derogado el art. 951 del Código de Comercio; pero ya lo hemos expresado, sería absurdo suponer que una ley de procedimiento ha derogado una ley substantiva, y en el presente caso, que una ley de carácter local ha podido derogar una ley federal.

Se comprende que un Código de Comercio pueda ser derogado por otro de la misma índole, como el de 1884 lo fué por el de 1889; es explicable que una ley enderezada á reformar de una manera expresa un precepto del Código de Comercio pueda destruir los preceptos consignados en éste; pero no se puede suponer que una ley llamada á fijar el procedimiento de los juicios criminales pueda ser bastante para derogar los principios sancionados por una ley substantiva como el Código de Comercio.

El C. Juez 2º de lo Criminal, al ajustar, pues sus procedimientos desechando la acusación de quiebra fraudulenta, al art. 59 del Código de Procedimientos Penales, ha hecho uso de una ley inaplicable al caso, porque ha debido reputarla inexistente, toda vez que ha debido cumplir con lo preceptuado en el art. 961 del Código de Comercio.

El inteligente Juez 2º de lo Criminal, no satisfecho con haber procurado demostrar en su informe la legalidad de sus actos, ha combatido nuestra demanda de amparo, la ha tachado de improcedente y ha venido á ofrecer los elementos que creyó bastantes para que pueda decidirse y resolverse que la justicia de la Unión no debe ampararnos en el presente caso.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Felizmente, carecen de todo fundamento las observaciones del orden Constitucional que se formulan contra nuestra demanda de amparo.

Dice el C. Juez 2º de lo Criminal que no habiendo sido recurrido el auto por el que se desechó nuestra querella, no procede el recurso de amparo, porque no se han agotado los recursos en la vía ordinaria.

No sabemos en qué ley ni en qué sentencia ha podido encontrar el C. Juez 2º de lo Criminal apoyo alguno para asentar semejante teoría. Ni la antigua ley de amparo, ni la vigente, ni ninguna sentencia de la Suprema Corte de Justicia, ha podido decir tal cosa.

El art. 57 de la antigua ley de amparo de 14 de Diciembre de 1882, decía á la letra: "En los negocios judiciales civiles, será improcedente el recurso de amparo si se interpusiere después de cuarenta días."

La jurisprudencia que fijó el sentido en que este artículo debía interpretarse, resolvió muchas veces que la demanda de amparo no debía interponerse contra un auto que violase las garantías constitucionales sino después de haber agotado todos los recursos que las leyes civiles conceden; pero, como se ve, ni el art. 57 de la antigua ley de amparo puede ser aplicable hoy, ni él se refiere más que á los negocios del orden civil y nunca á los del orden criminal.

En el orden criminal, vigente el art. 57 de la antigua ley de amparo, ha podido interponerse el recurso contra un auto violatorio de garantías individuales, y el amparo hubiera sido perfectamente procedente.

La antigua ley de amparo, en la frac. VI de su art. 35, mandaba sobreseer en los juicios de amparo cuando el auto hubiera sido consentido por el que hubiera interpuesto el recurso; pero dicho artículo tenía una excepción: cuando el auto versara sobre materia criminal.

Como se ve, nuestra demanda de amparo ni puede ser improcedente ni es posible siquiera sobreseer en el juicio.

No obstante todo esto, la ley aplicable hoy para el Procedimiento de amparo y bajo cuyo imperio ha nacido nuestra demanda, es el Código de Procedimientos Federales, y el único art. de dicho Código que pudiera aplicarse, sería el 779 en su frac. V, letra A.

Dice el artículo: "El juicio de amparo es improcedente ... V. Contra actos consentidos, siempre que éstos no importen una pena corporal.

Se presumen consentidos para los efectos de este artículo: A. Los decretos y autos dictados en un procedimiento criminal, si contra ellos no se ha intentado el juicio de amparo dentro de los quince días siguientes al de la notificación."

En nuestro caso, según razona el C. Juez 2º de lo Criminal, hemos consentido su auto negando tramitar la acusación porque no interpusimos contra él el recurso de apelación, pero debemos hacer constar que el mismo día interpusimos el recurso de amparo.

Está demostrado, pues, que nuestro recurso no es improcedente y que no han tenido, ni por asomo, fundamento alguno las observaciones formuladas á este respecto por el C. Juez 2º de lo Criminal.

Por último, el C. Juez 2º de lo Criminal asienta que la violación del art. 126 de la Constitución puede dar lugar á un juicio muy diverso, pero nunca al juicio de amparo

En un principio no pudimos alcanzar el objeto de la observación; pero reflexionando seriamente acerca de ella, como lo merecen todas las observaciones del inteligente Juez 2º de lo Criminal, hubimos de ver que hace referencia al segundo motivo en que apoyamos nuestra demanda de amparo.

Ha creído, sin duda, el Juez 2º de lo Criminal, que nos hemos quejado ante el Juez de Distrito por violación del art. 126 de la Constitución, en el concepto de que ha debido aplicarnos

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

las leyes del Congreso de la Unión, es decir, el Código de Comercio, á pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las leyes de los Estados, en decir, en un Código local como el de Procedimientos penales.

No creemos que tenga razón alguna el C. Juez 2º de lo Crimínal para hacernos la injuria de creer que no hemos sabido hacer uso de los recursos que las leyes nos conceden.

No nos hemos quejado por violación de la garantía del art. 126 de la Constitución. Para ello hubiéramos formulado entonces acusación contra el C. Juez 2º de lo Criminal, y puede estar seguro aquel funcionario de que tal acción jamás la hubiéramos intentado por el profundísimo respeto que nos inspira su indiscutible honorabilidad y su profundo saber.

Si nos ha negado el ejercicio de un derecho, ha sido invocando una ley y jamás hubiéramos podido hacerlo responsable de los errores que aquella ley hubiera sancionado.

Hemos creído y con fundada razón, por cierto, que la aplicación del Código de procedimientos Penales, ó mejor dicho, que la consignación en el Código de Procedimientos Penales de un artículo contrario al Código de Comercio y en materia que solo corresponde y puede corresponder á éste por la ley constitucional, constituye una invasión por parte de la autoridad local en la esfera de la autoridad federal; y con apoyo de la frac. III del art. 101 de la Constitución, hemos alegado esa invasión como una razón más para robustecer y confirmar la procedencia de nuestra demanda de amparo.

Como lo asentamos en nuestra demanda de amparo, la reforma del art. 72 de la Constitución, promulgada en 14 de Diciembre de 1883, autorizó al Poder Federal para expedir Códigos obligatorios en toda la República de Minería y de Comercio. Haciendo uso de esa autorización, el Gobierno expidió el Código de Comercio que es una ley aplicable en toda la República, y al pretender el mismo Gobierno, como órgano del Distrito, en una ley local como es el Código de Procedimientos Penales, derogar un precepto del Código de Comercio, ha invadido la esfera de acción del Poder Federal, y esta invasión ha dado motivo á nuestra demanda de amparo.

Nada, pues, tiene que ver en la presente discusión el art. 126 de la Constitución, y como muy bien lo dice el C. Juez 2º de lo Criminal, la sola violación de sus preceptos no da lugar á un juicio de amparo.

Al concretar todas las oservaciones que desde el punto de vista del derecho constitucional formulara en su informe el C. Juez 2º de lo Criminal, hemos logrado demostrar.

I. Que la aplicación por su parte del Código de Procedimientos Penales, en lugar del Código de Comercio, constituye una violación del art. 14 de la Constitución.

II. Que á pesar de no haber recurrido el auto en que se desechó nuestra querella, la demanda de amparo es procedente, porque no es aplicable al caso la letra C de la frac. V del art. 779 del Código de Procedimientos Federales que es el que rige hoy los juicios de amparo.

III. Que no se nos puede atribuir el enorme error de interponer un recurso de amparo por violación del art. 126 de la Constitución, y que al hacerlo así se ha confundido con el segundo motivo alegado en nuestra demanda de amparo, para fundar su procedencia, esto es, la invasión de las facultades del Poder Federal, hecha por el Poder local del Distrito.

IV.

Después de haber refutado una á una, como prometiera moslo al principio, todas las observaciones que hizo valer en su informe el C. Juez 2º de lo Criminal, debiéramos dar punto á nuestras alegaciones, pero no queremos hacerlo sin an-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

tes llamar la atención, siquiera sea muy brevemente, del Juzgado de su digno cargo, acerca de las cuestiones que en realidad deben ser estudiadas en la presente demanda de amparo

La discusión iniciada por parte del C. Juez 2º de lo Criminal en su informe y sostenida por nosotros para destruir sus observaciones, está completamente fuera de lugar.

Entramos á ella porque hemos querido reivindicar los preceptos de nuestro Código de Comercio; pero es enteramente inútil demostrar que ellos dicen lo que su letra dice, y que, sus preceptos, lejos de contrariar los principios rudimentales que rigen la natnraleza é índole de los juicios de quiebra, tiene en ellos su más firme y eficaz apoyo.

Con efecto, es de una alta conveniencia estudiar y demostrar que el art. 961 del Código de Comercio tiene honrosísimos antecedentes en la legislación de todos los países cultos; que él no ha introducido una novedad al ordenar que los acreedores pueden, inmediatamente después de declarada la quiebra, iniciar ante el Juez de lo Criminal su acción correspondiente para perseguir el delito que se hubiere cometido; que hay otros muchos Códigos que aun antes de la declaración de quiebra han autorizado, no á los acreedores, sino al Ministerio Público, para perseguir al quebrado en nombre de los más sagrados intereses del comercio; pero todo esto no es pertinente á nuestra demanda de amparo, porque bueno ó malo el principio, contrario ó no á los preceptos universalmente admitidos por el derecho comercial, él es la ley aplicable; y si de conformidad con el ya citado art. 961 los acreedores pueden perseguir á un quebrado y llevarlo ante la jurisdicción criminal para responder de los delitos cometidos, no es posible, apoyándose en el art. 59 del Código de Procedimientos, negar la entrada á la referida acusación.

Por eso nosotros, al interponer nuestra demanda de amparo, determinamos con toda precisión las cuestiones que el amparo suscita.

Hemos podido demostrar victoriosamente:

I. Que lo que nuestro Código de Comercio dispone está sancionado por otros muchos Códigos.

II. Que el sistema adoptado por él no es tan riguroso como el que se tiene en Italia y en Francia; pero que, en todo caso, él va enderezado á proteger al comercio de buena fe, y

III. Que el precepto del Código de Procedimientos Penales vendría á sancionar, si pudiera ser aplicable, la impunidad más completa de los quebrados, porque haría imposible la persecución de los delitos que cometieren; pero que, aun cuando así no fuera, la aplicación del Código de Procedimientos Penales, en vez del Código de Comercio,, constituye la violación del art. 14 de la Constitución.

Nuestra demanda de amparo, de poca importancia si se quiere, por la personalidad de quienes la hemos interpuesto, entraña la resolución de una cuestión de vital interés para toda la República; se trata de saber, de una vez por todas, si las leyes mexicanas están llamadas á autorizar que los quebrados fraudulentos que han dispuesto del dinero ajeno que la buena fe les confiara, pueden impunemente desafiar los justos derechos de sus acreedores.

Si el comercio descansa sobre la buena fe, si sus transacciones no pueden llevarse á término sino apoyándose en la confianza que los comerciantes merecen, el comercio se hace imposible, si las leyes no dan recursos bastantes para castigar á los que defrauden esa buena fe y abusen de esa confianza.

¿Y es posible suponer que las leyes de un país civilizado puedan negar esa natural defensa al comercio, cuando desde las épocas más remotas el legislador ha dado los elementos para reducir á prisión al comerciante que llega á ser convicto del delito de quiebra culpable ó fraudulenta.?

Si el precepto contenido en el art. 59 del Código de Pro-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

cedimientos Penales, en lugar de estar donde está, se hubiera incrustado en el Código de Comercio, los comerciantes todos del país hubieran hecho representaciones para pedir la derogación de semejante precepto, ó hubieran abandonado una de las más importantes ramas de la riqueza pública, para no verse expuestos á ser robados á mansalva en sus intereses. Por fortuna, el precepto del art. 59 del Código de Procedimientos Penales está en abierta oposición con el Código de Comercio y esto hace esperar que la Justicia de la Unión, árbitro supremo de la justicia en nuestro país, venga á demostrar su ineficacia y á consagrar la incontrastable superioridad de los preceptos del Código de Comercio.

En virtud de todo lo expuesto:

A vd. ocurrimos, C. Juez, suplicando se sirva fallar en definitiva que la Justicia de la Unión nos ampara y nos protege por violación del art. 14 de la Constitución, y que la Justicia de la Unión nos ampara y nos protege también por la invasión que el Código local del Distrito ha hecho de las facultades concedidas al Poder Federal, de conformidad con lo dispuesto en la frac. III del art. 101 de la Constitución ya citada.

Protestamos lo necesario.—México, Marzo de 1898.

H. Scherer y Cª Christian F. Martens.

José M. de la Vega.

NOTA. — En nuestro número próximo, correspondiente al mes de Julio y al tomo XV de esta Revista publicaremos las otras piezas jurídicas que completan este negocio y que son: el pedimento del Promotor fiscal, una exposición producida ante la Suprema Corte por el Lic. Casasús, como patrono de los quejosos, la sentencia del Juez de Distrito, y la de la Suprema Corte. — LA REDACCION

Indice alfabético del presente volumen.

A.

Páginas.

Algara José (Lic.)—Lecciones de Derecho Internacional Privado..... 62, 214 y 386

B.

Botello Abel (Lic.)—Estudio sobre la ley de 3 de Junio de 1896 que dió las bases para la legislación bancaria.... 161

Bejarano Jesús R. (Lic.)—Proyecto de reformas á algunos artículos del Código Penal..... 351

C.

Castillo Victor M. (Lic.)—Alocución pronunciada en la Escuela N. de Jurisprudencia al inaugurarse los cursos de 1898..... 57

D.

Díaz Infante Carlos (Lic—.(El delito de resistencia..... 83

Delito de quiebra (El.)—¿Es necesario en los casos de quiebra culpable ó fraudulenta, para proceder criminalmente á instancia de parte, que se presente copia autorizada de la sentencia de graduación?..... 524

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

cedimientos Penales, en lugar de estar donde está, se hubiera incrustado en el Código de Comercio, los comerciantes todos del país hubieran hecho representaciones para pedir la derogación de semejante precepto, ó hubieran abandonado una de las más importantes ramas de la riqueza pública, para no verse expuestos á ser robados á mansalva en sus intereses. Por fortuna, el precepto del art. 59 del Código de Procedimientos Penales está en abierta oposición con el Código de Comercio y esto hace esperar que la Justicia de la Unión, árbitro supremo de la justicia en nuestro país, venga á demostrar su ineficacia y á consagrar la incontrastable superioridad de los preceptos del Código de Comercio.

En virtud de todo lo expuesto:

A vd. ocurrimos, C. Juez, suplicando se sirva fallar en definitiva que la Justicia de la Unión nos ampara y nos protege por violación del art. 14 de la Constitución, y que la Justicia de la Unión nos ampara y nos protege también por la invasión que el Código local del Distrito ha hecho de las facultades concedidas al Poder Federal, de conformidad con lo dispuesto en la frac. III del art. 101 de la Constitución ya citada.

Protestamos lo necesario.—México, Marzo de 1898.

H. Scherer y Cª Christian F. Martens.

José M. de la Vega.

NOTA. — En nuestro número próximo, correspondiente al mes de Julio y al tomo XV de esta Revista publicaremos las otras piezas jurídicas que completan este negocio y que son: el pedimento del Promotor fiscal, una exposición producida ante la Suprema Corte por el Lic. Casasús, como patrono de los quejosos, la sentencia del Juez de Distrito, y la de la Suprema Corte. — LA REDACCION

Indice alfabético del presente volumen.

A.

Páginas.

Algara José (Lic.)—Lecciones de Derecho Internacional Privado..... 62, 214 y 386

B.

Botello Abel (Lic.)—Estudio sobre la ley de 3 de Junio de 1896 que dió las bases para la legislación bancaria.... 161

Bejarano Jesús R. (Lic.)—Proyecto de reformas á algunos artículos del Código Penal..... 351

C.

Castillo Victor M. (Lic.)—Alocución pronunciada en la Escuela N. de Jurisprudencia al inaugurarse los cursos de 1898..... 57

D.

Díaz Infante Carlos (Lic—.(El delito de resistencia..... 83

Delito de quiebra (El.)—¿Es necesario en los casos de quiebra culpable ó fraudulenta, para proceder criminalmente á instancia de parte, que se presente copia autorizada de la sentencia de graduación?..... 524

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

E.

Páginas.

Elizaga Lorenzo y Martínez Ortíz Francisco (Lics)—Apuntes de alegato presentados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, patrocinando á Manuel Luna en el amparo pedido por éste contra actos del Juez de Letras del Distrito de Parras (Coahuila) 114

Elizaga Lorenzo y Pizarro Suárez Ismael (Lics.)—Alegato presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, patrocinando á D. Perfecto Márquez en el juicio promovido por éste contra actos del Juez de Letras de Zitácuaro (Michoacán)..... 201

F.

Fernández Castelló Justino.—Derechos reales imprevistos en el Código Civil..... 148

Ferri Enrico.—Educación ambiente y criminalidad..... 179

La Escuela criminalista positiva..... 231

G.

Guerrero Julio (Lic.)—La Sevicia..... 398

H.

Horcasitas Antonio (Lic.)—Procedencia de la vía ejecutiva mercantil. Excepciones admisibles contra los pagares. 362

P.

Pizarro Suárez Ismael (Lic.)—La persecución de la competencia desleal en materia de marcas de fábrica 221

Pallares Jacinto (Lic.)—La garantía de la audiencia judicial..... 295

Sociedades anónimas. Proyecto de ley..... 428

Prisión por deudas. Sentencia del Juez de Distrito del Estado de Coahuila..... 108

R.

Páginas.

Rebollar Rafael (Lic.)—Abordajes y auxilios en alta mar entre buques de distintas naciones.—Legislación, competencia y procedimientos para hacer efectivas las consecuencias jurídicas de estos hechos..... 282

Rincon Jacobo (Lic.)—El Estado y la Industria 462

S.

Sánchez Gavito Manuel (Lic.)—Sociedades anónimas 7

U.

Urueta Jesús (Lic.)—Delito y delincuentes..... 271

Una circunstancia atenuante 275

Cirugía social..... 279

FONDO BIBLIOTECA PUBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEON

UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

